¿ORDEN IMPUESTO O LIBERTAD CONFISCADA?
LA IMPOSICIÓN DE LEYES DE PRENSA EN LA REGENERACIÓN
(1886 – 1898)

CARLOS ALBERTO DURÁN SÁNCHEZ

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE HISTORIA
BUCARAMANGA
2009

¿ORDEN IMPUESTO O LIBERTAD CONFISCADA?
LA IMPOSICIÓN DE LEYES DE PRENSA EN LA REGENERACIÓN
(1886 – 1898)

CARLOS ALBERTO DURÁN SÁNCHEZ

Tesis de Grado para optar el título de Magíster en Historia

Director: Dr. Fernando Mayorga
Doctor en Derecho Universidad de Navarra
Profesor investigador Universidad del Rosario

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE HISTORIA
BUCARAMANGA
2009

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a las personas que siempre creyeron en la necedad de los sueños, en la persistencia y veracidad de la premisa de que nunca es demasiado tarde para los nuevos comienzos. A mi esposa y a mi hijo, quienes intuyeron desde un comienzo el éxito amparado en los insignes sacrificios que sólo el amor puede llegar a comprobar. El recuerdo de los agotadores viajes los fines de semana a la casa de Bogotá, y el regreso en transporte público los domingos en la noche a Bucaramanga, siempre rondarán en mi cabeza como las letras de la inolvidable canción de Rafael Escalona, “ay pero los lunes se regresa, hombre todo lleno de tristeza, porque lo esperan en la Sabana unos dos monitos que lo llaman”.

Más de un año transcurrido entre ires y venires redescubrieron la apaciguada pasión por la historia bajo las lecturas intensas y los ensayos consecuentes de la exigencia académica. Giovanna, sumida en sus números y análisis financieros se esforzaba con la certeza de que pronto habría de apropiarse del interés necesario para que su marido supiera que compartía la misma pasión. Sin embargo, cuando un día la vi durmiendo plácidamente con los primeros bosquejos de este escrito todavía entre sus manos, le aseguré bromeando que las primeras páginas de esta dedicatoria rezarían así: “A Yova, quien nunca leerá completo este trabajo”. Pero también me equivoqué. Veo con complacencia que el tema le gustó y que pronto me hará su crítica respectiva.

Más sincero fue mi hijo, cuando todas las tardes me pedía que dejara de escribir porque siempre mantenía ocupado el computador y no lo dejaba jugar. Aunque su comprensión fue negociada por una hora diaria, poco a poco entendió lo que su padre hacía sentado tantas horas frente a la pantalla. Mi esposa y mi hijo vivieron las dos etapas que hoy concluyen con este trabajo, la primera de gran sacrificio

por la necesidad de la separación mientras adelantaba las materias teóricas de la Maestría, y la segunda con una buena parte de comprensión por la placidez emanada de continuar con la investigación en la calidez del hogar, y con el recurso del tiempo de investigación aprovechado al máximo.

Unas palabras aparte, merece la persona que siempre ha apoyado mis decisiones con el ejemplo de la argumentación contundente a la hora de ejemplificar, con su propia experiencia de vida, que ningún momento es tarde para volver a tomar vuelo después de una tempestad: Mi padre. No solamente le agradezco con estas palabras su apoyo sin restricciones cuando se trata del aprendizaje académico, sino también por el soterrado ejemplo de su vida perseverante.

A mi madre, quien hizo parte del proceso de apoyo desde aquella casa en la que siempre sentí el calor como si nunca me hubiese ido. A mi segunda mamá. Mi Suegra quien se sacrificó velando con su honestidad y prontitud, mis propios intereses.

A Dios, insigne protector del destino que siempre habría de acomodarse a mi lado en viajes, correrías y decisiones. A este poder no solo le agradezco por su amparo, sino también por ser el depositario paciente de tantas bendiciones y blasfemias. Porque siempre pude sentir su perdón y darme recibo junto a mis encuentros y desencuentros.

Por último quiero dejar sentadas unas cortas palabras de dedicatoria a mi Director de la Maestría, el Dr. Armando Martínez Garnica. Aunque sin saberlo, su influencia benéfica en el despertar de mi interés por el “llegar a ser” personal, no nació simplemente de una teorización de la historia sino del afianzamiento de las respuestas a las preguntas de vida que uno lleva metidas en el cerebro, pero que

nunca se detiene a plasmarlas. Le agradezco el nuevo sentido con el que me hizo reflexionar sobre el papel de los ciudadanos en la nación.

AGRADECIMIENTOS

Unas palabras sinceras a mi Director de Tesis, el Dr. Fernando Mayorga, quien desde su oficina o en la cafetería de la Universidad del Rosario, me compartió sus preguntas, comentarios y guías, con los cuales habría de dar la ruta precisa a este trabajo. Sus aportes valiosos y su camaradería siempre serán parte de mis recuerdos, ahora desde el calor de Barrancabermeja, de aquella Bogotá que aprendí a disfrutar en las enormes salas de la Biblioteca Nacional, la Luis Ángel Arango y el Archivo General de la Nación, lugares que estarán presentes junto al profesor ideal para cualquier investigador.

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN 16
1. LA IMPORTANCIA DE LA PRENSA 22
1.1. PRENSA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX 22
1.1.1. LA PRENSA EN BOGOTÁ. 25
1.1.2. LOS PERIODISTAS. 36
1.2. LA OPINIÓN PÚBLICA EN LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS 40
1.2.1. LA EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD PERIÓDICA. 40
1.2.2. LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO Y LA VISIÓN REGENERADORA. 52
1.2.3. LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS. 58
1.2.4. EL RIESGO DE VOLVER AL PASADO. 69
1.3. EL HONOR Y LA HONRA: DELITOS, ACUSACIONES Y DEFENSAS DESDE LAS PUBLICACIONES. 73
2. EL TÓSIGO REQUIERE SU CORDIAL 86
2.1. LA TÁCTICA POLÍTICA SE ACOMODA 86
2.2. ANTECEDENTES 94
2.3. LA REGENERACIÓN DE LA PRENSA 107
2.3.1. NÚÑEZ Y SU DESCONFIANZA EN LOS DELEGATARIOS. 118
2.4. EL DECRETO 635 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1886 122
2.5. LA DESANDADA DEL GENERAL ELISEO PAYÁN 142
2.5.1. LA CONSTITUCIÓN NO ESTÁ SUJETA AL CRITERIO DEL EJECUTIVO. 153
2.5.2. AL SOL NO SE LE DISCUTE. 165
2.6. CABALLERÍAS MAYORES DEGOLLADAS 182
2.7. SUSPENSIONES Y DESTIERROS. EL CASO DEL INDIO URIBE 189
3. CÓMPRELO DON CARLOS, QUE HOY LE DAN BIEN DURO 208

3.1. THE RIGHT MAN IN THE RIGHT PLACE 208
3.2. LOS DECRETOS EJECUTIVOS DE HOLGUÍN 214
3.3. HOLGUÍN Y LA PRENSA PERIÓDICA. 225
3.3.1. LAS SUSPENSIONES. 232
3.4. LAS SOCIEDADES SUBVERSIVAS REQUERÍAN EL USO DE LA PRENSA. 322
3.4.1. LA INMINENCIA DE LA PERMANENTE CONJURA SUBVERSIVA. 333
4. ENTREGADOS AL DESPRECIO 338
4.1. CARO Y LA PRENSA 341
4.1.1. LA IMPORTANCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECTIFICAR. 355
4.1.2. LA DEFENSA DESDE EL CORREO NACIONAL. 361
4.1.3. SANTIAGO PÉREZ Y SUS INSTRUCCIONES AL CENTRO LIBERAL. 363
4.2. EL “BOGOTAZO” DE 1893 364
4.3. LA CONJURA SUBVERSIVA DESMANTELADA EN 1893 378
4.3.1. LOS SANCIONADOS EN 1893. 389
4.3.2. LA EXPULSIÓN DE SANTIAGO PÉREZ Y LA DOBLE MORAL. 392
4.4. LIBORIO CANTILLO Y EL ANÁLISIS DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO EN 1894 396
4.4.1. UN INSTRUMENTO DE SISTEMÁTICA AGRESIÓN. 402
4.5. LA MUERTE DE NÚÑEZ Y HOLGUÍN 405
4.6. EL LEVANTAMIENTO DE 1895: LA CONSPIRACIÓN MATERIALIZADA. 410
4.7. SEMBRANDO VIENTOS 422
4.7.1. EL HERALDO. 422
4.7.1. EL MANIFIESTO DE LOS 21 Y LAS MOLESTIAS DE CARO. 427
4.8. DE LOS “LIBELOS SEDICIOSOS” Y OTRAS ORGANIZACIONES “AD HOC” 444
4.8.1. EL REPUBLICANO, ELDERECHO Y EL DEBATE 447
4.8.2. LA CAMPANA. 450

4.8.4. LOS TIEMPOS Y LOS HECHOS. 459
4.9. LA LLEGADA DE LA LEY 462
4.9.1. EL DEBATE EN LA CÁMARA. 466
4.9.2. EL SENADO APRUEBA LA LEY. 488
4.9.3. SOBRE LA NUEVA LEY DE PRENSA. 493
4.10. PUBLICACIONES O LIBELOS DE “VENGANZAS” 498
4.10.1. CARO Y SU DESPRECIO. 500
4.10.2. EL MOCHUELO. 514
4.10.3. EL DÍA. 517
4.11. LA DEFENSA DE UN BARCO EN LA TORMENTA 519
CONCLUSIÓN 523
BIBLIOGRAFÍA 534
ANEXOS 544

LISTA DE TABLAS

Pág.

TABLA 1. PERIÓDICOS QUE SE IMPRIMIERON EN BOGOTÁ DURANTE EL GOBIERNO DE RAFAEL NÚÑEZ 33
TABLA 2. PERIÓDICOS QUE SE IMPRIMIERON EN BOGOTÁ DURANTE EL MANDATO DE 34
CARLOS HOLGUÍN 34
TABLA 3. PERIÓDICOS QUE SE IMPRIMIERON EN BOGOTÁ DURANTE EL MANDATO DE MIGUEL ANTONIO CARO 36

LISTA DE ANEXOS

Pág.

ANEXO 1: ACUERDO SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DELEGATARIO 545
ANEXO 2: ARTÍCULO CONSTITUCIONAL 1886 546
ANEXO 3: DECRETO EJECUTIVO 635 DE 1886 547
ANEXO 4: DECRETO NO. 734 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1886 563
ANEXO 5: DECRETO NO. 779 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1887 564
ANEXO 6: DECRETO NO. 151 DEL 17 DE FEBRERO DE 1888 565
ANEXO 7: LEY 61 DE 25 DE MAYO DE 1888 (LEY DE LOS CABALLOS) 570
ANEXO 8: CALUMNIAS E INJURIAS 571
ANEXO 9: DECRETO NO. 286 DEL 27 DE MARZO DE 1889 573
ANEXO 10: DECRETO NO. 910 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1889 574
ANEXO 11: DECRETO (¿) DE AGOSTO 1892. 575
ANEXO 12: DECRETO 315 DE 9 DE DICIEMBRE 1892 576
ANEXO 13: DECRETO NÚMERO 231 DE 1896 (24 DE JUNIO) SOBRE LIBELOS SEDICIOSOS. 577
ANEXO 14: LEY 157 DE 1896 578
ANEXO 15: PERIÓDICOS EDITADOS EN BOGOTÁ EN EL PERIODO DE RAFAEL NÚÑEZ 589
ANEXO 16: PERIÓDICOS EDITADOS EN BOGOTÁ EN EL PERIODO DE CARLOS HOLGUÍN 590
ANEXO 17: PERIÓDICOS EDITADOS EN BOGOTÁ EN EL PERIODO DE RAFAEL NÚÑEZ. 592

RESUMEN

TITULO: ¿ORDEN IMPUESTO O LIBERTAD CONFISCADA? LA IMPOSICIÓN DE LEYES DE PRENSA EN LA REGENERACIÓN (1885-1898)[*]

AUTOR: CARLOS ALBERTO DURÁN SÁNCHEZ[**]

PALABRAS CLAVE: Regeneración, Rafael Núñez, Prensa, Leyes, Política, Periódicos, Partidos Políticos.

DESCRIPCION:

La regeneración requirió de un consenso de pensamientos políticos de hombres provenientes de los partidos liberal y conservador. Después de la guerra de 1885, Rafael Núñez se dio a la tarea de materializar dicho proyecto en una legislación consecuente con el modelo, que habría de acotar las libertades individuales como parte del proceso. Fue el ejercicio de la prensa, que desde la constitución de 1855 no tenía restricciones, blanco de una legislación severa tanto para la oposición Liberal Radical como Conservadora, cuyos escritores, en el proceso de resistencia, hicieron florecer numerosas publicaciones, principalmente en Bogotá. Sin embargo, leyes restrictivas como la de 'Los Caballos', fueron aplicadas pocas veces, y la flexibilidad de las severas leyes, estuvieron marcadas por las administraciones de Núñez, Holguín, y Caro, de manera diferente. Las restricciones a la prensa fueron parte del proceso conocido con La Regeneración, pero también se constituyeron en el 'caballo de batalla' de los opositores, quienes se esmeraban en ser penalizados en muchos casos.

Sin embargo, contrariamente a lo que suele señalarse, en el periodo estudiado puede distinguirse que, dentro de las restricciones a la prensa, fueron también mayores los casos en los cuales la oposición ceñida a las leyes fue respetada. Sin embargo el orden público agitado por los incesantes intentos del partido liberal de recuperar el poder perdido, por un lado; y por el otro de la disidencia conservadora que desde el inicio de La Regeneración, criticó desde la prensa la alianza ejecutada por Carlos Holguín, quien a la postre habría de ser el gran conciliador y defensor del llamado Partido Nacional.

En esta tesis podremos encontrar que las leyes de prensa no fueron simplemente el gran estrangulamiento al liberalismo, sino también al mismo conservatismo que buscó socavar un modelo político más pluralista, para asirse con el poder.

---

[*] Proyecto de Grado

[**] Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Historia. Director: Dr. Fernando Mayorga. Doctor en Derecho Universidad de Navarra. Profesor investigador Universidad del Rosario.

ABSTRACT

TITLE: WELL VERSED ORDER OR CONFISCATED FREEDOM? THE IMPOSITION OF LAWS OF PRESS IN THE REGENERATION (1886-1898)[*]

AUTHOR: CARLOS ALBERTO DURÁN SÁNCHEZ[**]

WORDS KEY: Regeneration, Rafael Nunez, Press, Law, Politics, Newspapers, Political Parties.

DESCRIPTION:

Regeneration required a consensus of political thoughts of men from conservative and liberal parties. After the War of 1885, Rafael Nunez was given to the task of implementing the draft legislation in line with the model, which would limit individual freedoms as part of the process. It was the exercise of the press, since the constitution of 1855 had no restrictions, the target of a severe law for the opposition Liberal Radical and Conservative, the writers in the process of resistance, they blossom many publications, mainly in Bogotá. However, restrictive laws such as the 'Horses' were rarely implemented, and flexibility of the harsh laws, were marked by the administrations of Núñez, Holguin, and Caro, in different ways. Restrictions on the press were part of the process known as regeneration, but also constitute the 'hobbyhorse' of opponents, who strives to be penalized in many cases.

However, contrary to what is often observed in the studied period can be distinguished, within the restrictions on the press, were also higher in cases where the opposition according to law was respected. But the public agitated by the incessant attempts by the Liberal Party to regain power lost on the one hand and on the other side of the conservative dissent since the beginning of regeneration, since the press criticized the alliance run by Carlos Holguin who would ultimately be the great conciliator and defender of the so-called National Party.

In this thesis we will find that laws were not simply press the large bottleneck to liberalism, but at the same conservatives who sought to undermine a more pluralistic political model, with the power to grasp.

---

[*] Draft grade

[**] Faculty of Humanities. School of History. Director: Dr. Fernando Mayorga. Doctor of laws University of Navarre. Research Professor University of Rosario.

INTRODUCCIÓN

Alfredo Greñas, periodista de irreverente pluma, excelente caricaturista y grabador, pero también empecinado militante del liberalismo radical y reincidente quebrantador de los Decretos de imprenta instaurados por el Gobierno de “La Regeneración”, hacía una descripción en 1891 del ruido insoportable en las calles bogotanas causado por los “chinos”, quienes no dejaban de acosar a los transeúntes, ofreciendo, a voz en cuello, los periódicos impresos la víspera, y al mismo tiempo halando de ruanas y levitas a los ciudadanos para ofrecer “emboladas” baratas.

Anotaba greñas que el “chino” Bogotano, niño o joven citadino de escasos recursos, había sufrido una transformación en los últimos años en la ciudad. Había dejado de ser un infante pícaro, para convertirse en un vivo comerciante que pagaba algunas veces el alto costo de la persecución policial, cuando voceaba periódicos de oposición al Gobierno, sufriendo detenciones en la inspección de policía, por el precio de la comisión en monedas de cada publicación vendida. Sin embargo, los “chinos”, sin tener otra militancia política que la del dinero, un día podían vocear maravillas del Gobierno y al otro, noticias desagradables de este. No importaba si no eran ciertas o de periódicos prohibidos, hecho por el que Carlos Holguín no tuvo más remedio que expedir dos Decretos prohibiendo el voceo de Noticias Falsas, y después limitando el griterío de noticias, a los “chinos” obedientes que solicitaran un permiso ante el Ministerio de Gobierno.

La iniciativa de vocear las noticias en las calles, constituía un recurso económico para los “chinos”, pero también una táctica política para la prensa opositora que encontraba en esta práctica, afianzada desde muchos años atrás en las calles bogotanas, una excelente forma de expresar sus críticas para que fueran conocidas, incluso por quienes no sabían leer ni escribir. También permiten

observar una actividad que, lejos de convertirse en oscurantista con la llegada de la legislación sobre la prensa después de la Constitución de 1886, presentó un fenómeno de resistencia, rico, variado, con mayor actividad periodística, cargado de matices políticos; y centro de atención, tanto del Gobierno como de la oposición.

Este trabajo partió del conocimiento de un paradigma muy arraigado en la historia de Colombia. Una constante apología a la supresión de las libertades públicas, especialmente la de la libre expresión, con una estricta censura previa hecha a las publicaciones por parte de los gobernantes del periodo con mayores transformaciones políticas conocido como “La Regeneración”. La imagen de la entrada de Colombia a una especie de edad oscurantista con persecuciones implacables e injustas por parte de unos gobernantes que poco les faltaba para enviar a la hoguera, tanto a libros como escritores, siempre me llamó la atención, especialmente porque Colombia es una Nación que en los años presentes, mal o bien, tiene la dicha de gozar de una amplia libertad de prensa, especialmente de la expresión de diferentes pensamientos políticos.

Mi interés por mirar el avance del ejercicio del periodismo desde el supuesto año “cero” de las libertades, a finales del Siglo XIX con sus numerosas batallas perdidas, hasta la consecución de una victoria total en la incesante lucha por la libertad de los periodistas colombianos que evolucionaron hasta estos primeros años del Siglo XXI; partía de la premisa repetida por muchos autores acerca de la implantación de una estricta censura. La mención de los destierros, las multas y los encarcelamientos contra inocentes periodistas cuyo único pecado había sido desafiar, desde la oposición periodística las políticas de Rafael Núñez; despertaron mi afán por hacer un recuento de tales atropellos.

Sin embargo, siempre me daba vueltas en la cabeza la poca o nula mención de la cuestión legal para cometer tamaños excesos, especialmente en un país que

siempre se ha jactado de caminar de la mano de las leyes, y fundado en una corte de “plumíferos” de sacolevas para quienes el Estado Liberal del Derecho era, más que una doncella, una madre que no podía ser mancillada. Aunque por todas partes ya se había hecho mención de la tenebrosa y arbitraria “ley de los caballos” que le concedía a los Presidentes de la regeneración una herramienta discrecional para tratar en los asuntos, la observancia de casos concretos sobre los castigos aplicados a la prensa, conservaron más la mirada en esta famosa ley, que en los decretos Presidenciales fundadores de la armadura jurídica para ejercer la represión.

Precisamente, los exiguos pincelazos de las normas sobre prensa que había escrito Cacua Prada como una tesis de grado de la Universidad Javeriana en 1957, abrieron la puerta del apego a la ley que debería establecerse en todo trabajo sobre la materia y que encontré escaso en la revisión primaria de los estudios sobre la prensa en Colombia. Además, desde mi punto de vista, nunca antes se había vivido una transformación política tan profunda como la instaurada en la Constitución de 1886 y que, precisamente hubo de presentar numerosos procesos de resistencia, tanto doctrinarios como por la pérdida del poder de dos grupos políticos: el Liberalismo Radical y el Partido Conservador “Histórico”.

Esta revisión de la Ley me permitió corroborar un hecho asombroso sin antecedentes en la historia de la formación de los Estados americanos. Este era que Colombia había presentado, no una simple ausencia de legislación sobre prensa, sino la consagración de la más absoluta carencia de responsabilidad cuando los ciudadanos hubieran de expresar sus pensamientos imprimiéndolos en el papel y dándolos a conocer al público. Pero lo más asombroso fue que este desamparo legal fue vivido por más cuatro décadas pletóricas de utopías liberales. Desde este punto de vista, es lógico pensar que cualquier imposición normativa,

en mayor o menor medida arbitraria, habría de generar feroces procesos de resistencia.

Aunque es innegable que, para bien o para mal, la regeneración dejó un legado de cambio profundo para la historia colombiana, las acotaciones de numerosos autores sobre la consolidación de una época en que primó la puesta en marcha de barricadas contra la modernidad, deberían empezar con una revisión de los temas políticos, como el que me propongo tratar, bajo la luz de un nuevo sistema social propuesto igualmente por un grupo político afianzado, y con la finalidad de construir la nación desde un punto específico de vista.

La historia de la prensa en Colombia en el Siglo XIX es la historia de una batalla entre grupos políticos, que de ninguna manera fueron homogéneos. En estas épocas de apuestas por la necesidad de profundos cambios, en la que operan menos las disciplinas de partidos, que los propósitos de grupos convencidos sobre la gestación de un norte hacia donde dirigir la Nación, vale la pena torcer la mirada hacia los procesos del pasado, para mirar similitudes, desenterrar errores y encontrar el amparo requerido para continuar el camino.

Esta historia que me propongo contar presenta, además del recuento de los sucesos de estas batallas, el propósito de una mirada razonable sobre las actuaciones de los protagonistas, que en últimas, tanto escritores como políticos, habrían de confundirse en la práctica desde uno y otro lado de las trincheras; siempre dispuestos a preparar y defender su proyecto de Nación o su interés personal desde las letras de molde o desde el poder.

Porque considero excesivamente impertinente el encasillamiento de las diferentes administraciones del poder en Colombia como si fueran bloques de calicanto que al unirse habría de formar la Nación, he tratado de dividir los primeros años

después de la Constitución de 1886 desde el punto de vista de tres administraciones. Pese a que la mayor parte del tiempo lineal abrazado en este trabajo se encuentra bajo el ejercicio de la Presidencia de Rafael Núñez, la presencia de Carlos Holguín durante cuatro años en el Ejercicio del Poder Ejecutivo, y de Miguel Antonio Caro durante ocho; presentan una flexibilidad distinta y una manera diferente de administrar la Nación, especialmente en la imposición de las leyes de prensa. Aunque los tres dirigentes tenían claro el propósito de la consolidación de su proyecto político contra viento y marea, presentan diferentes estilos administrativos, que a la larga, son un factor que converge en las transformaciones.

También la historia de la Prensa en Colombia en el Siglo XIX es la historia de una batalla entre personas privadas. Las luchas políticas fácilmente se convertían en luchas personales bajo la estampa de la tinta en el papel, y eran contestadas de la misma manera, pero sin excluir los golpes o los insultos personales. Precisamente, Cordovez Moure en sus "reminiscencias de Santafé y Bogotá" nos cuenta que en 1840, el señor José María Torres Caicedo, redactor del periódico *El Día,* escribió una página ofensiva contra el Señor Murillo Toro a quien acusaba de mantener una relación amorosa con una joven llamada Martina Bermúdez. Ante la irresponsabilidad de la prensa legalmente consagrada para exhibir actos ofensivos sobre los particulares, la ofendida muchacha decidió tomar justicia por su mano, y con un látigo "manatí" le dio a Torres una buena "limpia" frente a la catedral y ante los numerosos curiosos que pasaban; vengando así el atrevimiento del periodista.

Una generación de dirigentes que tuvo su oportunidad experimentando el liberalismo federal hizo un sorprendente viraje hacia el neotradicionalismo. Este acto que habría de ser considerado por algunos ciudadanos, antiguos y actuales, como una traición a los principios de las libertades, pero por otros como un afianzamiento moderno de esa libertad dentro del orden, puso en evidencia que

los propósitos políticos de la prensa colombiana también habrían de caminar el mismo trecho.

1. LA IMPORTANCIA DE LA PRENSA

> "Oponer propaganda a propaganda, lección a lección, filosofía a filosofía; porque de otra manera resultaría que encaminados los espíritus en una sola dirección y sometidos a una sola influencia, solo verían un lado de la verdad"
> *El Relator.* Bogotá, 16 Febrero de 1892

1.1. PRENSA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX

Las lecturas sobre política nacional era una costumbre arraigada entre ciertos sectores de las familias colombianas. La lectura dentro de la esfera privada del hogar mantenía el propósito de los periódicos sectarios por transmitir un mensaje de afiliación generacional. Cuando Alfonso López Pumarejo vivía en su casa familiar leía tanto antiguos como nuevos, periódicos liberales atesorados por su padre y en algunas ocasiones bajo la voz de éste.[1] Algunos jóvenes se iniciaban en la vida periodística bajo un temprano adoctrinamiento político. Enrique Olaya Herrera tiene la distinción de ser el publicista más joven de Colombia, pues desde sus doce años fundó *El Patriota* en Guateque su pueblo natal, influenciado por su propia madre. En 1892 envió copias de su trabajo a los periódicos liberales de la capital, recibiend0 numerosos elogios, incluso del periódico vocero de este partido político, *El Relator;* quien llegó a expresarse así sobre el particular:

[1] LATORRE, Hugo. Mi novela. Apuntes autobiográficos de Alfonso López. Bogotá, 1961. p, 233. citado en: POSADA CARBÓ, Eduardo. El Desafío de las ideas. Ensayo de historia intelectual y política en Colombia. Medellín: Editorial EAFIT, 2003. p.75

Si los que estamos desalentados por la ingrata y ardua labor del periodismo podemos dar una voz de aliento al jovencito Enrique Olaya Herrera, se la damos de todo corazón. Hemos leído los dos números de el patriota que han llegado a nuestras manos, y admiramos la sinceridad, la modestia y la ingenuidad con que está escrito; en ellos está toda el alma del niño redactor, llena de lucecillas que prometen llegar a ser grandes faros el porvenir. Si los hombres son niños grandes, ¿Por qué no conservan todas aquellas cualidades, sobre todo la ingenuidad, sobre todo para decir lo que piensan sin tener en cuenta el mezquino interés?[2]

Roger Chartier, en su conferencia "Privado/Público: sobre la construcción histórica de una dicotomía"[3] hace una reconstrucción de la división entre la esfera privada y la publica. Centra su atención en el papel desempeñado de las dos esferas en la construcción del Estado moderno En esta perspectiva, notaba un proceso de resistencia en el cual, lo público estaba al servicio del Estado, mientras que lo privado correspondía a todo lo que se sustraía del Estado.

En este sentido, dice Chartier, se trata de ligar la evolución que "desprivatiza" lo público separando la autoridad estatal de los intereses de los individuos, y otra evolución que "privatiza" los espacios de sociabilidad colectiva, remplazándolos por lugares y acciones de convivencia restringida. Estos dos aspectos de la construcción de lo privado se articularon, por un lado en la oposición de el hombre de Estado y el hombre particular, al mismo tiempo de los espacios en que estos se mueven; y por otro, en el aspecto que tiene que ver con el paso de una sociabilidad anónima, en donde lo público y lo privado se confunden, a una

[2] *El Relator.* Bogotá, 2 febrero de 1892: Número 618. p. 575
[3] CHARTIER, Roger. Privado/publico. La construcción histórica de una dicotomía. En: II Seminario Internacional. Sociedad Política e Historia conectadas. Cultura impresa y espacio público. Siglo XVI - XXI. Universidad EAFIT- Medellín,31 de Agosto y 1 de Septiembre, 2007.

sociabilidad fragmentada, en donde aparecen sectores profesionales y sectores de la vida doméstica.

Antes de la regeneración, la esfera privada mantenía constantes intromisiones de la esfera pública, pues al no existir presencia Estatal normativa, que obligara a la prensa a hacer dicha separación, la intimidad familiar era coaccionada constantemente por la costumbre colectiva de publicar cartas, documentos privados, o opiniones en hojas sueltas. Aunque solo la autoridad pública podía recurrir a mediar en el desorden producido a los secretos de la honra familiar, parecería que a la Nación Colombiana le había llegado tarde uno de los aspectos relevantes del Estado moderno. Chartier expresa esta apreciación al decir:

> *La construcción del Estado moderno no sólo condujo a delimitar, por diferencia, un territorio para lo privado, sino que, a menudo, procuró la garantía y salvaguarda de este espacio. De ahí la paradójica denuncia de los disturbios familiares a la autoridad estatal para que sean arreglados discreta y privadamente, fuera de los controles consuetudinarios.*[4]

Posteriormente, las personas privadas hicieron uso público de su razón construyendo espacios políticos, que en la práctica sería un apoderamiento de creencias, doctrinas e instituciones. El uso público de la razón se opone al privado. Sin embargo, por su parte Kant altera la manera en que deben ser modificados los límites al decir que el individuo miembro de la sociedad civil universal mantiene su unidad mediante la circulación de escritos que habrían de autorizar la discusión de los pensamientos privados. Para Kant, el público no está pensado a partir de nuevas formas de sociabilidad como los clubes, los cafés, o las logias masónicas; ya que estas conservan formas de sociabilidad "doméstica", parecidas a las

[4] Ibíd., memorias, p, 2

comunidades separadas y particulares. "*La única figura aceptable de lo universal es la comunicación escrita, que permite el intercambio con los que están ausentes y se despliega en un espacio autónomo, sin ubicación social particular*"[5]

¿Para quién se escribía? ¿Quiénes compraban la prensa en el siglo XIX? Anotar los insertos de periódicos regionales de los diarios capitalinos, que eran una especie de eco de la opinión política de la capital.

1.1.1. LA PRENSA EN BOGOTÁ.

El ejercicio de mantener una publicación periódica se presentaba desde dos frentes. El primero de ellos provenía desde el establecimiento empresarial mismo llamado Imprenta. En Bogotá, existieron un gran número de ellas hacia finales del Siglo XIX que contribuyeron a un incesante florecimiento de la industria editorial y que, no obstante las leyes de imprenta instauradas después de la Constitución de 1886, continuó con su acelerado proceso. En el periodo estudiado en este trabajo pudieron encontrarse 35 en Bogotá, pero es probable que existieran otras más.

Estas Imprentas eran propiedades familiares que se lucraban de trabajos tipográficos requeridos por particulares y que incluían desde esquelas y carteles publicitarios hasta la edición de hojas sueltas, periódicos y libros. Al igual que en nuestros días, y aunque el ejemplo se desligue del contexto, muchos procesos industriales, como el de la empresas avícolas que no se detienen en la sola crianza y la producción de pollos, sino que van más allá, hacia la apertura de restaurantes o asaderos; las imprentas también querían mantener a la venta el

[5] KANT, Emmanuel, "¿Qué es la Ilustración?, en Emmanuel Kant, *Filosofia de la Historia*, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, pp. 95-122. citado en: CHARTIER, Roger. Privado/publico. La construcción histórica de una dicotomía. En: II Seminario Internacional. Sociedad Política e Historia conectadas. Cultura impresa y espacio público. Siglo XVI - XXI. Universidad EAFIT-Medellín, 31 de Agosto y 1 de Septiembre, 2007. Memorias del II Seminario Internacional. Sociedad Política e Historia conectadas. C.D. p, 10

producto final de la producción con la ventaja otorgada de un costo de producción más bajo que la hiciera competitiva. De hecho, la gran mayoría de ellas fundaron periódicos con diferentes propósitos. Por ejemplo, la de "Torres Amaya" muy conocida en Bogotá y de doctrinas conservadoras, editora de libros piadosos, contratista del Estado para algunas de sus gacetas y de numerosos libelos por parte de la Iglesia, imprimió, además de los periódicos de algunos particulares; el suyo propio llamado *El Tren*, editado por los hijos del propietario: Francisco de Paula y Alejandro Torres Amaya.

Pero la fundación de periódicos mantenía otro frente más rico y mejor explotado, desde el cual las imprentas, en últimas también terminaban con un beneficio económico. Este era el caso de individuos particulares que veían en la empresa editorial una manera de ganarse la vida bajo las bondades de la venta incipiente de anuncios comerciales y del valor mismo de los números que los lectores consumían. Sin embargo, este tipo de industria no fue la más practicada, en razón a que era difícil el sostenimiento en el tiempo de una publicación que batallaba con otras en Bogotá, los pocos anuncios y el mercado de lectores.

Pero, existía otra verdaderamente lucrativa para las imprentas ya que, sin importar las contingencias que demandaba la vida efímera, eran requeridas para la impresión de periodos específicos de tiempo, con el ánimo de mantener una influencia en la población que tendiera a crear una corriente de opinión. Esta era la prensa política, y su auge se evidenciaba desde mediados del Siglo XIX en la capital colombiana proporcionalmente a las épocas electorales. Precisamente, ya desde 1841 el señor Juan Francisco Ortiz, gran fundador y director de periódicos en Bogotá, exponía la situación de la prensa en *El Día,* en un editorial del 2 de Mayo de 1841.

Son muy graciosos los de nuestra tierra: se presenta un periódico muy ufano con un título pomposo, con un testo muy escogido y adecuado; se aumenta con un prospecto muy halagüeño, nos ofrece mil lindezas, protesta contra toda personalidad; y nos asegura de su absoluta imparcialidad [...] Apenas le ocurre á alguno un cuento que echar á luz, como el de María Dolores, por ejemplo, y héteme hay un periodista; y en acabándose el cuento se acabó el periódico.[6]

Esta costumbre se evidenció en la gran aparición de periódicos después de 1886 y la consolidación de otros más. La industria editorial era numerosa y participativa desde sus protagonistas. La población Bogotana durante este periodo estudiado, según las publicaciones, oscilaba entre los cien mil a los ciento treinta mil habitantes en 1889, y mantenía una gran vitalidad editorial producto de la constante agitación política. Aunque los periódicos que se podrían mas o menos cuantificar en razón a que algunos de ellos no publicaban más de un número porque sabían que serían suspendidos prontamente, pasaban de 28 en Cundinamarca, la mayoría impresos en la capital de la Nación e incluso llegaban a provocar reflexiones sobre la fecundidad editorial, como esta expresada desde uno de ellos:

¿Jesús de donde saldría tanto periódico? - ¿Y de donde saldrán lectores suficientes? Y de dónde, en fin, ¿sacaremos los centavos para comprar esos periódicos? […] No importa! Que lluevan periódicos! Ellos son luz, y luz necesitamos. […] Les deseamos a todos suerte mejor que la que le tocó a don Rufino Gutiérrez en Roldanillo.[7]

[6] SANTOS MOLANO, Enrique. Antología. En: Revista Senderos. Bogotá. Vol. 7, No. 29, (Dic. 1991); p, 697.
[7] *El relator* Bogotá, jueves 14 de Mayo de 1891. No. 518 p, 151

Según un balance registrado en la misma prensa, en 1887, el total de periódicos, con más o menos continuidad en Colombia, no pasaba de 84 ejemplares distribuidos así: En Bolívar 12, en Boyacá 5, en el Cauca 6, en Antioquia 9, en Cundinamarca 28, en el Magdalena 5, en Panamá 5, en Santander 9, y en Tolima 5.

En Bogotá la mayoría de periódicos exhibían en su primera página la impresión de 5,000 ejemplares, pero algunos más avezados, alardeaban de una impresión de 20,000 ejemplares con una distribución en los Municipios cercanos a la capital. Si tomamos un promedio bajo, es decir, si hubiesen 20 periódicos en Bogotá con un tiraje de 5,000 ejemplares cada uno, alcanzaría para que cada habitante de la ciudad, o sea para que 100,000 personas pudieran beneficiarse de la lectura. Pero la población letrada limitaba el mercado enormemente, luego, la impresión real de periódicos estaría mayormente circunscrita desde el punto de vista de los beneficios económicos para la industria.

La mayoría de periódicos se vendían a 0.25 centavos el ejemplar. Si, de acuerdo al tiraje expuesto por la mayoría de 5,000, un propietario podría reunir $1,250 pesos diarios, si vendía toda su producción, amén de lo que cobraba por remitidos y los pocos anuncios; el negocio no parecería ser muy rentable ya que, el porcentaje del analfabetismo en América latina en la segunda mitad del siglo XIX rayaba entre el 70 y el 80%. No obstante, si podía ser rentable, ya que en la ciudad de Bogotá, de 100 mil habitantes podría haber menos de 30 mil posibles lectores, para un promedio de 20 publicaciones mensuales.

De acuerdo a estas cifras, un diario podría tener un promedio de mercado de tan solo 1,500 lectores, siempre y cuando las 20 publicaciones fueran impresas el mismo día, pero esto no era así, - un tiraje de más de 5000 ejemplares expresado en la mayoría de periódicos, podría deberse a una estrategia de atracción hacia

los anunciantes o de una efectiva venta en los municipios aledaños a través de agentes- a quienes habría de convencer de la compra de su producto y así lograr una rentabilidad efectiva. Si suponemos que el propietario vendía solamente 1500 ejemplares, tendría una venta bruta de $375 pesos por edición. Muchos de ellos eran bisemanarios, pero un periódico nuevo generalmente era semanario, es decir, al mes haría 4 publicaciones que podrían sumar $1500 pesos mensuales, y de allí subvendrían los costos que acarrearía la producción en sí. Mínimo 2 o 3 sueldos que podrían llegar a 50 pesos mensuales, más el costo del papel, tinta, arriendo de un local, y la propina del voceador. Si esto fuese así, una utilidad mínima, es decir para un periódico que imprimiera y vendiera muy poco podría ser de 30 pesos diarios, y considerando que un sueldo mensual alto era de 50 pesos para empleados gubernamentales, una empresa que originara 900 pesos para la manutención de una familia era suficiente y holgada. Además, la ganancia originada podría ser mayor para el empresario si se tiene en cuenta lo devengado por los anuncios y remitidos, que dependía del reconocimiento de la publicación y del mantenimiento en cuanto a su durabilidad.

Las cifras, sin embargo podrían variar positivamente. En 1896 fue castigado un periódico llamado *El Heraldo*[8], y la familia propietaria elevó una petición ante el Gobierno para que fuera levantada la sanción con el argumento de que la estimación del perjuicio económico era de 100 pesos diarios. Es decir, probablemente y haciendo cálculos muy personales, para que *El Heraldo* ganara 100 pesos diarios, es decir, 3000 pesos mensuales de utilidad neta, realmente habría de vender más o menos 5 mil ejemplares en cada una de sus ediciones semanales, generando $1,250 pesos por edición y una venta bruta mensual de $5,000 pesos. Un promedio diario de $166 pesos de venta bruta, y suponiendo

[8] Este periódico conservador mantuvo una buena consolidación en el tiempo, teniendo en cuenta la corta vida de estas publicaciones. Su primer número vio la luz el 4 de Julio de 1889 y fue impreso hasta el 17 de Octubre de 1899 con un total de 865 ejemplares publicados. Era impreso en la misma casa editorial de José J. Pérez, quien al mismo tiempo fue su director.

que los costos y gastos pudieran sumar 66 pesos diarios, se podría llegar a los 100 pesos que alegaron como su pérdida ante el Gobierno.

La diferenciación entre quienes leían los periódicos puede ser exclusivista, pero los espacios de sociabilidad a través de muros, hojas volantes, eran comentados en públicos. Los de la calle, era un grupo aparte que desde su perspectiva privada iba formándose una opinión política, a pesar de que el propósito de la prensa política era más bien fragmentar grupos de élite en su búsqueda del poder.

1.1.1.1. La edad de oro de la prensa bogotana.

Desde ningún punto de vista podría afirmarse que el ejercicio de la prensa en Bogotá en los años de la regeneración, durante las administraciones de Núñez, Holguín y Caro, se llevó a cabo desde los rincones oscuros, o desde los sótanos de las viejas casas coloniales, por periodistas opositores temerosos de las medidas represivas. Por el contrario la proliferación de periódicos y publicaciones en la capital de Colombia durante los años que van desde 1886 hasta 1898, no tiene comparación con ninguna otra época, y me atrevería a pensar que en ninguna ciudad de América.

Aunque para muchos parezca increíble, la imposición de las leyes de imprenta, que habrían de regir durante largos años mediante decretos presidenciales, también tuvo como característica cierta tolerancia con los periódicos de oposición. Los procesos de resistencia política y de crítica al Gobierno mediante el uso de las imprentas bien podrían haber sido arrasados literalmente de las calles bogotanas bajo el uso de las herramientas jurídicas de las que disponía el Gobierno. El Artículo “transitorio” K, que de transitorio no tuvo mucho pues duró desde 1886 hasta 1896, establecía la censura previa, pero esta no fue ejecutada más de una vez en todos estos años. Además, el Gobierno contaba con la muchas veces

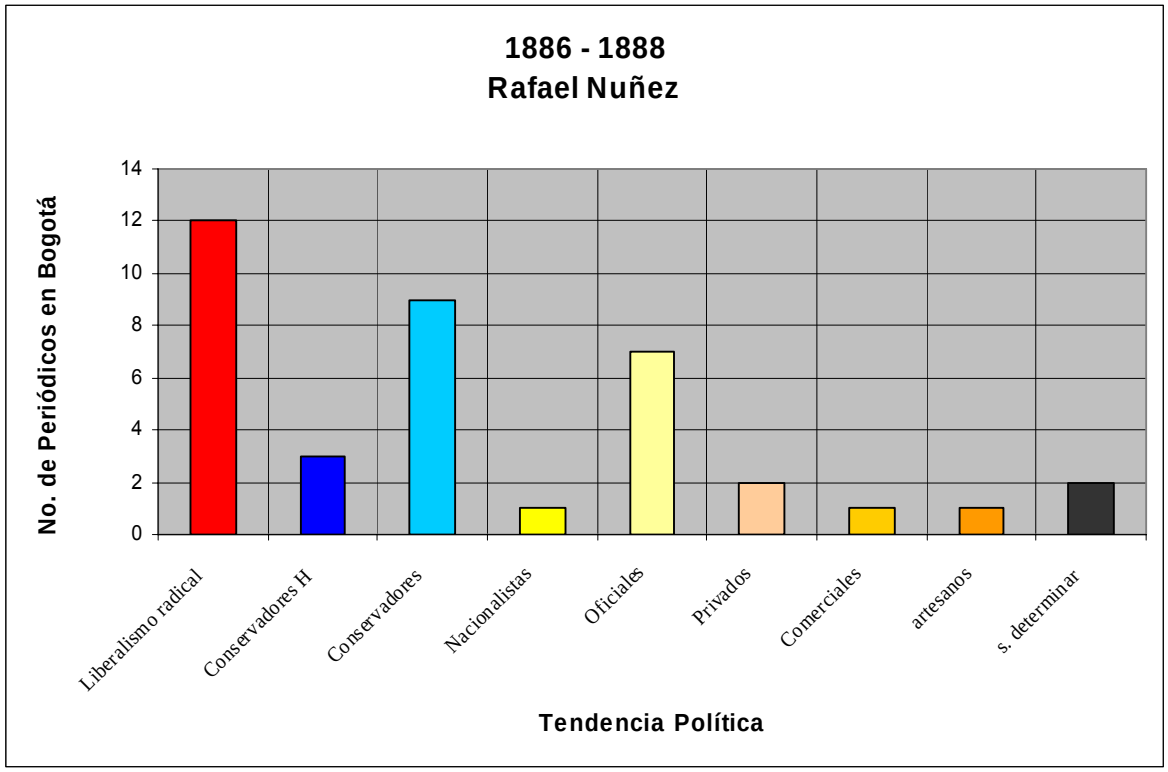
mencionada “ley de los Caballos”. Esta, sin embargo, también fue usada pocas veces para reprimir a la prensa, casi únicamente cuando la amenaza de la subversión del orden público era inminente. Las ejecuciones a la prensa fueron hechas de acuerdo a la violación de los decretos presidenciales, en mayor medida bajos multas y suspensiones temporales. Pero la mayoría de los subversores del orden público también eran periodistas y desde sus trincheras periódicas habrían de instigar los movimientos armados.

Estos, nunca fueron cobardes a la hora de continuar sin someterse a las reglas nuevas que definían las leyes. Por el contrario, aguerridos y valientes, especialmente cuando se acercaban disputas electorales, corrían a fundar publicaciones y a utilizar el mismo lenguaje mordaz que sería la fuente tanto de opositores como de defensores al Gobierno. Muchas razones, además de las de resistencia política, habrían de originar un florecimiento especial de la prensa en Bogotá.

En los años recorridos del periodo de Rafael Núñez, desde la promulgación de la Constitución de 1886 hasta la entrega del Poder Ejecutivo a Carlos Holguín en 1888, fueron impresos en Bogotá 37 periódicos con diferentes tipos de tendencias políticas. Aunque el periodo era temprano a la división Conservadora, ésta siempre existió desde la prensa. De hecho, uno de los primeros periódicos suspendidos por el Gobierno no era del Liberalismo Radical sino del Conservatismo que, aunque no podía calificarse como “histórico” por no existir aún afiliaciones a candidatos disidentes, si lo fue por su crítica a quienes desde el partido se unieron a las filas nacionalistas de Núñez. Los hermanos Gutiérrez Isaza, conservadores, vivieron desde su periódico *El Comercio,* el mismo cierre que Alfredo Greñas con su publicación liberal radical *El Progreso* en 1886.

En estos dos años fueron voceados por las calles bogotanas 10 periódicos de tendencia política liberal radical, 7 oficiales, 9 conservadores, 2 conservadores "históricos", 1 nacionalista, 1 del gremio de artesanos, 3 de carácter privado, 1 comercial y 2 sin determinar. Podría decirse, si sumamos las dos tendencias políticas opositoras al Gobierno, que se imprimieron 12 publicaciones con esta tendencia. Cabe anotar que antes de la proclamación de la Constitución de 1886, en la cual quedó afianzada la primera norma que le otorgaba la plena facultad al Poder Ejecutivo para disponer sobre la materia, los periódicos en la capital del País no estaban sujetos a ninguna restricción, y sin embargo, nunca fueron tan abundantes como en los años comprendidos entre 1886 hasta 1898. Las tradiciones de la prensa bogotana estaban muy arraigadas en cuanto a su libertad absoluta para expresar su pensamiento sin restricciones, y la colocación de un cabestro direccional, molestaba más que el propio hecho de la auto regulación natural, que siempre se defendió desde las normas del Estado liberal anterior.

Tabla 1. Periódicos que se imprimieron en Bogotá durante el Gobierno de Rafael Núñez

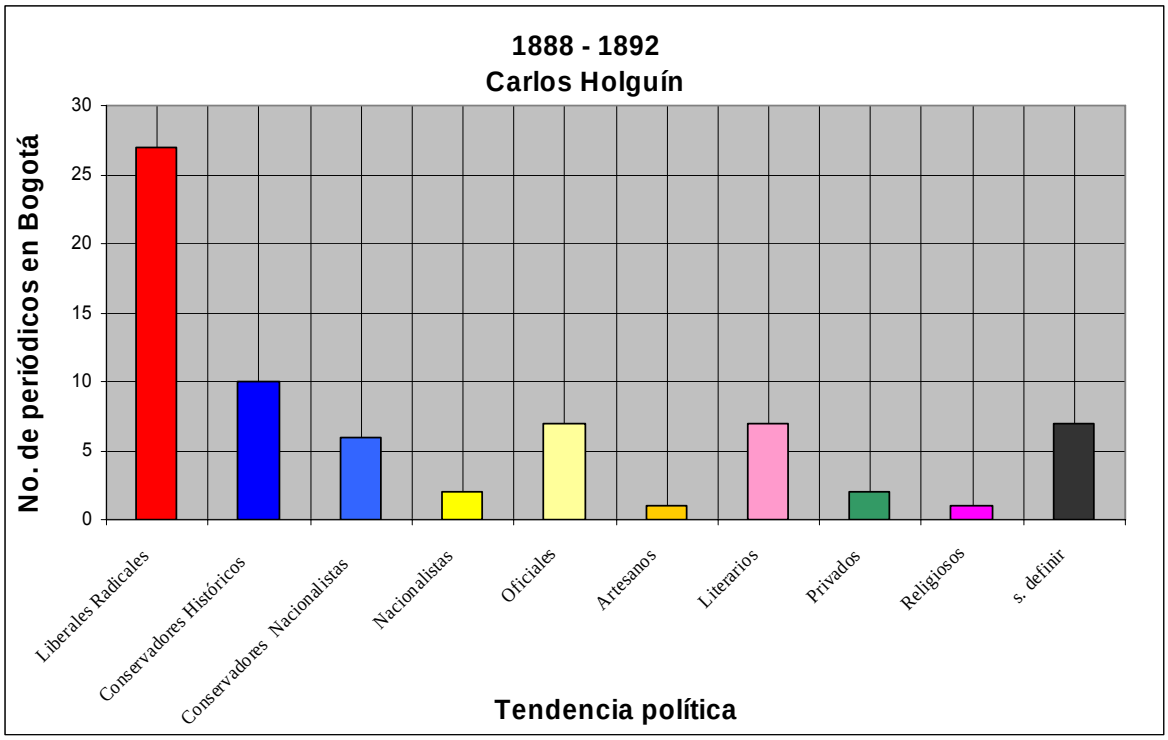


Fuente: Autor del Proyecto

El periodo de Carlos Holguín se constituyó en el de la mayor tolerancia con la prensa de oposición, junto al cisma al interior del partido Conservador con motivo de la preparación para las elecciones de 1892. Los Conservadores “históricos” consideraron que la hora del definitivo asentamiento de su partido en el poder había llegado, por encima de los intereses nacionalistas de Núñez. La aparición de periódicos de oposición, si sumamos los de tendencia conservadora histórica, que fueron 10, con los liberales radicales que crecieron a 28, resultaría el momento de mayor expansión crítica desde la prensa al Gobierno con 38 publicaciones. La represión ante el peligro “histórico” sería débil en el mandato de Carlos Holguín,

pero habría de aumentar en la siguiente administración. Las publicaciones literarias hicieron su aparición también como remanso para los lectores ante los exagerados impresos políticos, pero quizá el mayor aporte a la historia del periodismo colombiano fue la aparición de los periódicos de humor crítico, que nunca hubieran podido prosperar si no hubiese estado al frente del Poder Ejecutivo Carlos Holguín.

Tabla 2. Periódicos que se imprimieron en Bogotá durante el mandato de Carlos Holguín



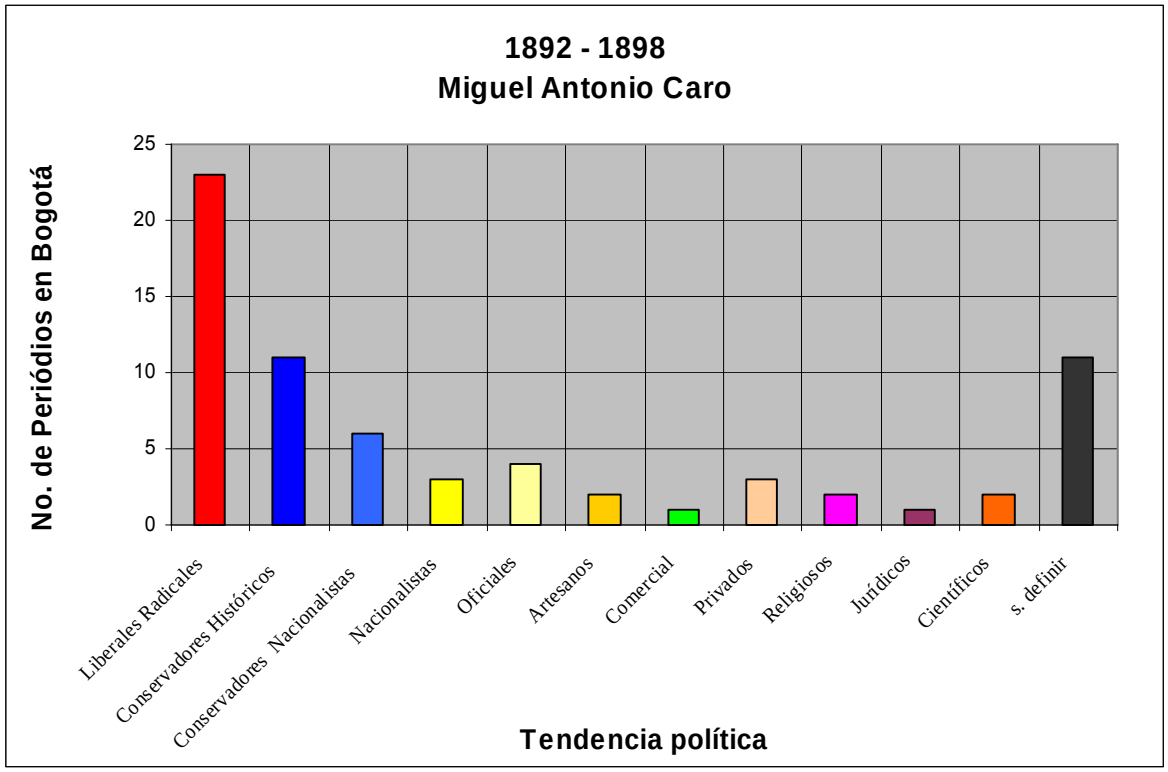
Fuente: Autor del proyecto

Llama la atención que, durante la administración de Carlos Holguín, circularon en Bogotá 70 periódicos en Bogotá, en un lapso de tiempo de 4 años; mientras que bajo el mandato de Miguel Antonio Caro, durante 8 años, circularon apenas 63

periódicos. De estos, los de oposición sumaron al menos 28 impresos, mientras que los encargados de defender al Gobierno fueron solamente 9. Llama así mismo la atención, el incremento de publicaciones que no ahondaron profundamente en la contienda política, tales como órganos privados, o estrictamente comerciales.

Cabe acotar que los periódicos religiosos, ni sus ideas sufrieron ataques considerables desde los periódicos de oposición. En todo el periodo estudiado solamente un caso de castigo por este hecho fue registrado. Por otra parte, la iglesia cumpliendo cabalmente su tarea adoctrinadora dentro del plan de la regeneración enfiló sus baterías más hacia la captura de adeptos y la exaltación de las virtudes de los ciudadanos, y en menor medida al ataque a las doctrinas liberales. Entre otras cosas, el liberalismo radical reconociendo la importancia e influencia de la iglesia trataba de incluir afanosamente la posibilidad de compaginar sus ideales con el sentimiento religioso, menguando su crítica hacia sus dirigentes. Por otra parte, la iglesia tampoco requería de una defensa personal de sus ideales ya que las leyes decretadas eran lo suficientemente claras para repeler cualquier contravención.

Tabla 3. Periódicos que se imprimieron en Bogotá durante el mandato de Miguel Antonio Caro



Fuente: Autor del Proyecto

1.1.2. LOS PERIODISTAS.

Muchos, como el Indio Uribe, se constituyeron en personajes apasionados por las ideas, para quienes la lucha política terminó prevaleciendo a sus mencionadas cualidades literarias, que para la época, eran válidas mediando el uso de denuestos personales, matizados con pinceladas de latín y con la exhibición constante de historia greco romana, además de una exaltación a la guerra revolucionaria y libertaria, justa solamente para los miembros de una especie de

“cofradía” autodenominada republicana o liberal, e injusta para los regeneradores y el partido conservador; agrupados bajo el nombre de Partido Nacional.

Las expresiones de los escritores políticos desde los periódicos radicales, acostumbrados a los debates que escampaban bajo supuestas razones idealistas, en realidad contenían insultos y ataques personales contra sus adversarios. La resistencia al nuevo orden instaurado por la regeneración encontró pocos exponentes mesurados desde la palabra impresa como Liborio Cantillo, pero muchos más como Juan de Dios Uribe, Alfredo Greñas, o Julio Galofre, quienes usaron un lenguaje completamente desadaptado ante la severa legislación de prensa. Sin embargo, corrían épocas de valentías ejemplarizantes y de rebeldías desenmarañadoras. Por ejemplo, Juan de Dios Uribe critica implacablemente desde los miembros de la academia colombiana de la lengua, sus adustos y severos gramáticos de sacoleva, y sus postraciones a la madre España, hasta los mismos periodistas “arrodillados” ante el Gobierno.

La plataforma de expresión pública a través del papel periódico era usada frecuentemente por los protagonistas de la vida política colombiana. La gran mayoría de los propietarios de imprenta y de los directores de periódicos hubieron de pertenecer a una elite letrada y políticamente militante. Por ellos desfilaron escritores con representaciones en la asamblea de Cundinamarca, como el indio Uribe, en el Congreso de la República y desde los mismos Ministerios del Gobierno, como Rafael Uribe Uribe o José Vicente Concha. Al parecer, la expresión de las ideas era imprescindible para ascender en la categorización elitista de la ciudad y de paso, tratar de conseguir fortuna y buen nombre.

Pero también existieron periodistas que mezclaron una vocación más noticiosa con la política. Quizá uno de los personajes más sonados por estos años, quien además habría de ser un pionero en el establecimiento de la industria tipográfica

desde su periódico *El Telegrama* fue Jerónimo Argáez. De filiación Conservadora, aunque habría de hacer el viraje hacia la facción histórica que a la postre le significó su suspensión en 1897, Argáez logró la consolidación de una publicación diaria, consiguiendo, probablemente que este fuera el periódico más aceptado por la sociedad bogotana desde su primer número en Octubre de 1886. Su vocación fue la del periodismo, no obstante haber aceptado en 1898 un cargo público en el Ministerio de Hacienda, tal vez ayudado por sus amigos "históricos" ante la suspensión con la que se le castigó en el Gobierno de Miguel Antonio Caro.

Argáez consolidó un nutrido número de anuncios comerciales dentro de sus páginas e hizo parte de un grupo de escritores y conocidos del más recio abolengo bogotano, como Rafael Pombo, José Manuel Marroquín, Diego Fallón, Jorge Roa, y fue quien tuvo la idea para que J. M. Cordobés Moure escribiera sus famosas "reminiscencias de Santafé y Bogotá" La riqueza conseguida por Argáez mediante el sostenimiento de su publicación fue menos comentada por la sociedad bogotana que por sus editoriales políticos redactados con pluma maestra, y que podrían haber sido causa de una temprana extinción. Cordovez Moure expuso la situación de Argáez: *"como entre nosotros es importante la tarea de sostener un diario político, no son raras las veces que se ve obligado a sustentar polémicas consigo mismo, como hace el empleado jugador al tresillo, que cuando no tiene compañeros a mano, juega solo"*[9]

La literatura, la política, las noticias y las variedades eran los temas frecuentemente anunciados en la primera página de los periódicos bogotanos. Menos abundantes eran los temas humorísticos, pero también mayormente apreciados por el público. La mayoría de publicaciones periódicas mantenía como eje central la política, en torno al cual giraban los demás. Es decir, si el periódico

[9] CORDOVEZ MOURE, José María. Reminiscencias de Santafé y Bogotá. Bogotá: Gerardo Rivas Moreno. Editor, 2000. p, 950.

era, por ejemplo liberal radical, compilaba noticias de las malas actuaciones del Gobierno o de los abusos cometidos por el ejército en el reclutamiento de conscriptos, el espacio editorial, que comprendía la mayoría de las hojas de la publicación, se hablaba de política y se valoraba o desacreditaba uno u otro candidato, en cuanto al espacio dedicado a las variedades, estas podían contener poemas irónicos al Gobierno, a veces insertos de anuncios comerciales, e insertos de noticias extranjeras o de otros periódicos nacionales.[10]

Desde luego, afianzar un periódico era una tarea titánica, pero, los hombres de la talla de Jerónimo Argáez no fueron muy abundantes. En los últimas tres décadas del Siglo XIX estuvieron presentes, en mayor media, también los escritores políticos que, desde una prisa fundadora de publicaciones para el ejercicio de su opinión partidista, delegaron la información noticiosa a un segundo plano, precisamente en los mismos años en que empezaba a consolidarse a nivel mundial.

Según Gustavo Otero Muñoz[11], no fue sino hasta 1890 cuando hubo de consolidarse la profesión de cronista de noticias, como un trabajo de reportería remunerado en el periódico *El Correo Nacional* bajo la dirección de Carlos Martínez Silva. En él pueden leerse las primeras entrevistas en Colombia y el inicio de la consolidación, aunque es más visible en sus primeros números, de un lenguaje más sencillo en la redacción, algo más distanciado del acostumbrado

[10] Una costumbre frecuente entre los periódicos de finales del Siglo XIX consistía en hacer canjes con otros de todo el país. Esta manera de mantener una especie de corresponsalías nacionales tardías, hizo que las noticias de la capital se conocieran en otros puntos de la Nación, y viceversa. El Relator y El Correo Nacional iniciaron con las corresponsalías desde otras ciudades mediante el uso del telégrafo. El sistema de canje con otros periódicos permitió tanto el apoyo, la crítica y la promulgación de ideas hacia otros ámbitos.

[11] OTERO MUÑOZ, Gustavo. Historia del Periodismo en Colombia. Bogotá: Edición Universidad Sergio Arboleda., 1998. p, 119 – 120.

ejercicio de escritores que adornando hasta los avisos comerciales, hacían gala de su erudición.

La historia Colombiana se ha acostumbrado a mirar a los periodistas liberales radicales como personajes aguerridos, sostenedores de la más noble de las causas y con una vocación elegida para la defensa de las libertades personales.

Pero la realidad era diferente. Eran seres de carne y hueso, con pasiones políticas disímiles y con un ansia irrefrenable de poder y de reconocimiento político. La idea de labrarse un futuro desde las páginas impresas en la capital, como una carga que pesaba en las hojas de vida de los jóvenes letrados para conseguir mejores puestos en el gobierno o preponderancia al interior de su propio partido, ya había sido denunciado en un análisis prematuro de la situación de la prensa por José María Samper en 1882.[12]

1.2. LA OPINIÓN PÚBLICA EN LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS

1.2.1. LA EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD PERIÓDICA.

El ejercicio de expresarse hacia el ámbito público conlleva el traspaso de una frontera imaginada desde el ámbito privado. Sin pretender hacer un análisis profundo de ambos conceptos, ni un recuento histórico del ejercicio de la publicidad y de la opinión pública, considero pertinente cimentar las bases que este desarrollo histórico tuvo en Europa para ampliar la visión que tenemos de los acontecimientos tratados en este trabajo.

[12] Ver páginas 86 - 89

He considerado la visión de Jürgen Habermas como pertinente para llevar a cabo este análisis, no obstante que la definición de “burguesía”, aceptada para el desarrollo histórico europeo, encuentre límites pantanosos en los que podría incurrir en la mirada del proceso histórico de este trabajo. Sin embargo, no me mueve el señalamiento de una clase social determinada por su ejercicio mercantil, sino por la adjudicación de ciertas cualidades letradas e instruidas que, considero, podrían ser traídas para enfocar a los protagonistas de la publicidad en la Colombia de finales del Siglo XIX.

Habermas encuentra la génesis de la publicidad Burguesa en el tráfico comercial de mercancías y noticias en el capitalismo temprano esencialmente hacia las ciudades en donde existían mercados. Es casi como un desarrollo paralelo entre la prensa y las ciudades burguesas Europeas. Las cartas privadas no se habrían de materializar como noticias, es decir harían el salto del interés privado al interés general, sino hasta el Siglo XVII, en el que, la actividad económica privada empieza a tener una orientación hacia un tráfico mercantil sometido a supervisiones y orientaciones de carácter público. Dentro de esta necesidad aparecen los primeros periódicos “políticos” con cierta periodicidad en el Siglo XVII.

Desde este punto de vista, las noticias nacen de una iniciativa privada mediada por un Estado Regulador de las situaciones comerciales, al afianzar las circunstancias y necesidades noticiosas de las correspondencias privadas. Por ello, el mismo tráfico de noticias no tarda en convertirse en una mercancía más, especialmente porque toda información epistolar tiene un precio para los comerciantes y esto es aprovechado por otros comerciantes.

De allí nace el interés de las autoridades por utilizar la prensa de acuerdo con los objetivos de la misma administración Estatal. *“se convirtieron los destinatarios por*

vez primera en público"[13]*,* hasta convertirse la prensa en un instrumento de los intereses administrativos del Estado. Habermas dice que, junto a este instrumento del Estado moderno, apareció una capa burguesa que al mismo tiempo se convirtió en su público. Desde los funcionarios administrativos, hasta médicos, oficiales, comerciantes; es decir, una capa social superior. Igualmente, se fue construyendo una ambivalencia de la función de los periódicos en cuanto a su carácter público o privado, que fue comentado por Habermas:

> *La sociedad, contrapuesta al Estado, delimita, por un lado un ámbito privado claramente distinguido del poder público, pero como, por otro lado la reproducción de la vida rebasa los límites del poder doméstico privado, convirtiéndose en un asunto de interés público. La zona de continuado contacto administrativo se convierte en "zona crítica" también en el sentido de que reclama la crítica de un público racionante. Fácilmente podrá el público atender a esa reclamación, pues solo necesita poner en funcionamiento el instrumento con cuya ayuda había convertido ya la administración a la sociedad en un asunto público: la prensa.* [14]

Además de calificar la "publicidad burguesa" como una esfera en la que las personas privadas se reúnen en calidad de público, Habermas dice que la publicidad debe recargarse en el ámbito privado porque se trata de un publicidad de personas privadas. Igualmente, a través de la mediación de la opinión pública, entre la publicidad política, el Estado, y las necesidades de la sociedad, hace una distinción entre la publicidad política y la publicidad literaria, estableciéndoles a ambas un mismo origen legal, fundamentado en que la ley, producto de una

[13] HABERMAS Jürgen. Historia y Crítica de la Opinión Pública. La transformación estructural de la vida pública. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli S.A, 1981. p, 59.
[14] Ibíd., p. 62.

racionalidad abstracta termina siendo la única garantía para que los individuos instruidos, sean respetados en su "subjetividad".

Habermas reconoce un vínculo fundamental entre la construcción de una nueva forma de publicidad y una comunicación entre personas "privadas" liberadas de las obligaciones debidas al Estado. En esta comunicación no existe, según Habermas, ningún campo de discusión prohibido para que las personas privadas tengan un razonamiento público. Esto hace que a priori exista una igualdad entre los individuos, que se distinguen por su evidencia y coherencia de su argumentación y no por su estamento o rango.

En el recuento histórico de la relación entre la publicidad y la reglamentación, encontramos que desde la misma constitución francesa de 1791 que recoge ampliamente la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, dice en su artículo 11: *"La libre expresión de ideas u opiniones es uno de los más preciados derechos de los hombres. Por consiguiente todos pueden hablar, escribir e imprimir libremente teniéndose a la responsabilidad derivada del mal uso de esa libertad en los casos previstos por la ley"*[15]*.* Pero la realidad histórica francesa habría de modificar esa libertad. Después del asalto a las Tullerías, un edicto de la Comuna de París, calificaba a los enemigos de la revolución como: *"empoisoneur de l'opinión publiqué"*[16] o "emponzoñadores de la opinión pública."

Podría derivarse que los periódicos podrían, más allá del principio liberal, ser usados para el bien o para el mal, dependiendo del grupo político que estuviera en el poder y del grupo que le haría resistencia. Habermas ve en la codificación del derecho burgués, el desarrollo de un sistema de normas que habrían de garantizar

[15] Die Entwicklung der Menschen - und Bürgerrechte, ed. cuidado de F. Hartung, Göttingen, 1954, pp. 33 y 35. Citado en: HABERMAS Jürgen. Historia y Crítica de la Opinión Pública. Op. cit., p.107.
[16] Ibíd.,

una esfera privada con una tendencia a independizarse de las imposiciones estatales.

La misma idea cambiaria original sobre el libre tráfico de mercancías, presenta, según Habermas, una institucionalización de la publicidad en el estado burgués de derecho que termina siendo contradictoria. Esta contradicción se origina en el pensamiento de que el sistema de libre ejercicio puede regularse a sí mismo; sistema acogido en su mayoría de principios por la Constitución Colombiana de 1863. En este sistema, las intromisiones estatales sin autorización legal, son rechazadas, más porque niegan el estilo racional y de intereses de las personas privadas para actuar como capitalistas, que por lesionar los principios de justicia del derecho natural.

> *La ley misma que ha de atenerse al ejecutivo* o *a la justicia, debe ser obligatoria en la misma medida para todo el mundo; lo que sirve, principalmente para impedir la dispensa o el privilegio. De modo que las leyes del Estado coinciden con las del mercado: ni las unas ni las otras permiten excepción alguna ni al ciudadano ni al hombre privado. Son objetivas; esto es, no manipulables por particulares (el precio se sustrae a la influencia de cualquier poseedor de mercancías) [...]; sus destinatarios no son particulares determinados (el mercado libre prohíbe los convenios excepcionales)* [17]

Pero, las leyes del Estado no funcionan como las leyes del mercado, en su origen natural, sino que requieren de una imposición fuerte. Habermas no ve posible que las leyes relacionadas con la opinión pública, reemplacen el poder, ya que ésta última, está sometida a las arbitrariedades y al público compuesto por personas

[17] HABERMAS Jürgen. Historia y Crítica de la Opinión Pública. Op. cit., p.115 – 116.

privadas; y porque, según las propias intenciones de la opinión pública, "*no quiere ser ni límite del poder ni el poder mismo, y menos fuente de todo poder"*[18]

No obstante, Habermas afirma que en su propio contexto, la opinión pública esta llamada a la modificación del Poder Ejecutivo cuyo carácter es la dominación, ya que habría de trabajar en el orden de que la "verdad y no la autoridad hace la ley". Precisamente, es en la regeneración, cuando la potestad del Poder Ejecutivo habría de requerir de una fortaleza a prueba de desafíos, porque la instauración de un orden nuevo, no podría subordinar, el llamado por Habermas, "Estado Burgués de Derecho" hacia las necesidades de la esfera privada, ni la misma organización del poder público, basándose en una publicidad política, y presentada a si misma como emancipada de la dominación.

También, el público, visto como el sujeto del "Estado Burgués", entiende su esfera como "esfera pública", en el sentido que anticipa sus consideraciones a la propiedad de todos los ciudadanos. Originalmente, sólo los propietarios instruidos estaban interesados en formar un público para proteger legislativamente sus intereses privados, y que estos convergieran con el interés común de preservar una sociedad burguesa como esfera privada. Desde sus orígenes, *El interés de clase es la base de la opinión pública.*[19] Precisamente Habermas le da el nombre de "esfera pública burguesa" cuando considera a esta excluyente de las personas no poseedoras de un patrimonio, bienes, cultura, o alfabetos, que solo permiten la constitución de un público de personas "privadas raciocinantes". Esta mirada de Habermas permite pensar que a partir de prácticas privadas, que se llevan a cabo bajo diversas formas de sociabilidad sustraídas al control del Estado, es posible la construcción de discursos públicos. Es decir, un nuevo público es creado a partir de la socialización de las prácticas de lo privado. Este nuevo espacio público

[18] Ibíd., p.117 – 118.
[19] HABERMAS Jürgen. Historia y Crítica de la Opinión Pública. Op. cit., p. 122.

Habermas lo designa como Burgués, pero, Roger Chartiere se pregunta si es legítimo considerarlo así, ya que, según Chartier, Habermas hace una diferenciación entre la "piel" y la "camisa" entre lo privado y el oficio, señalando que son los servidores del Estado quienes en su mayoría construyeron la nueva esfera pública y crítica. Dice Chartier que Habermas en su definición de burgés, ha excluido el "vulgo" en la discusión política, para centrarse en los personajes que, cualquiera sea su estamento y condición, participan de la discusión pública.[20]

Por su parte, Habermas citando a Marx, dice que este trata irónicamente a la publicidad políticamente activa, ya que naciendo de la opinión pública de propietarios privados que se creen hombres autónomos, se convierte en una especie de "máscara" de su propio interés como clase social. Sin embargo, tanto Marx como Habermas, encuentran que, posteriormente el fenómeno de las capas "no burguesas" entraría a participar de la prensa, encontrando que la publicidad, como espada desenvainada de la burguesía, se habría de enfilar contra ella misma. Ellas llegarían a desplazar a los burgueses, transformando de raíz la estructura de la publicidad. "*Porque la publicidad no mediará ya entre una sociedad de propietarios privados y el Estado, sino que antes bien garantizará el público autónomo".*[21] Este cambio, produce una transformación en el orden basado en que la apertura hacia la publicidad política ya no tiene la expectativa de lograr las mismas oportunidades para todos de conseguir la propiedad privada.

Ahora, exige la inclusión de clases obreras y lo exige mediante la extensión de los derechos políticos electorales. Aunque, en sus inicios, este no fue el caso de la publicidad política colombiana en la que se buscaba más una igualdad de condiciones a la propiedad privada vista como el poder, dejando de lado, solo con algunos leves indicios la participación de las clases sociales menos ilustradas.

[20] CHARTIER, Roger. Op. cit., p. 12.
[21] Ibíd., p. 160.

Precisamente, el inicio de la prensa obrera en Colombia, aunque iniciado a finales del Siglo XIX, no se materializó sino hasta después de la guerra de los mil días.[22]

Posteriormente, la "apertura" de la opinión pública habría de ser criticado por Jhon Stuart Mill y Alexis de Tocqueville, especialmente el primero, que lo llegó a expresar en su alegato "On Liberty" dirigido en contra del poder de la publicidad, llegando a deplorar este nuevo estado porque:

> *Los irreconciliables intereses que, con la ampliación del público, fluyen a la esfera de la publicidad se procuran su propia representación en una opinión pública escindida y convierten a la opinión pública dominante en cada momento en un poder coactivo, a pesar de que, en otros tiempos, tenía que ser ella la encargada de disolver todo tipo de coacción en la única coacción de la inteligencia [...] el dominio de la opinión pública aparece como el dominio de la muchedumbre y de los mediocres*[23]

Habermas dice entonces que la publicidad políticamente activa ya no está subordinada a una idea de disolución del poder, sino a la consideración de su reparto:

---

[22] Los estudios sobre prensa en Colombia son escasos. Una interesante aproximación sobre el tema de la prensa obrera en Colombia puede encontrarse en el trabajo de Luz Ángela Núñez, que no obstante la continuación del paradigma de la "censura" de prensa en la regeneración, establece un mejor recuento de la situación de los periódicos obreros durante el periodo comprendido entre 1909 a 1929. Pese a que el análisis del fenómeno presenta cierta lejanía desde los casos apegados a la aplicación de las leyes, mantiene un excelente enfoque del proceso de construcción de la identidad obrera y sus fenómenos de resistencia como grupo social en su proceso de mantenimiento de unidad. Ver: NÚÑEZ ESPINEL, Luz Ángela. El Obrero ilustrado. Prensa obrera y popular en Colombia. 1909 – 1929. . Bogotá: Ediciones Uniandes, 2006.

[23] Mill, Stuart. Uber die Freiheit, ed. Al cuidado de Pickford, Frankfurt, 1860, p. 92 y s. Citado en: HABERMAS, Jürgen. Historia y Crítica de la Opinión Pública. Op. Cit., p. 164.

Frente a una opinión pública que, al parecer, de instrumento de emancipación que era se ha convertido en una instancia opresiva, no le queda otro remedio al liberalismo, de acuerdo con su propia lógica, que emplear todas sus fuerzas en combatirla.[24] *[...] En la centuria que siguió a la era culminante del liberalismo, un capitalismo "organizado" disolvió la relación originaria entre publicidad y esfera privada; los perfiles de la publicidad burguesa se desfiguraron.*[25]

Para Habermas, el estudio de la publicidad burguesa se desarrolla en el ámbito de las tensiones entre el Estado y la sociedad, sin que ella misma deje de ser parte del ámbito privado. Esta esfera privada se convierte en autónoma cuando consigue emanciparse del reglamento mercantilista. La regeneración representó un avance hacia la concepción europea de la reevaluación de estas tendencias, en la misma medida en que el nuevo intervencionismo llevado a cabo a finales del siglo XIX en Europa, es realizado por un Estado que, coordinado con los intereses de la sociedad burguesa, limita la publicidad políticamente activa. El intervencionismo del Estado coincide con la transmisión de competencias públicas de la esfera social a corporaciones privadas. Esta dialéctica de la estatalización progresiva de la sociedad junto con una socialización del Estado comienza a destruir la base de la publicidad burguesa y producirá un cambio de sus funciones políticas, produciendo el nacimiento de una nueva esfera y un cambio estructural de las relaciones entre lo público y lo privado, que se convertiría en un repliegue de la esfera privada al menor estado del rincón familiar, ocupando el espacio de la publicidad "literaria" y por el paso de un público culto a un público consumidor de cultura en el Siglo XX.

[24] HABERMAS, Jürgen. Historia y Crítica de la Opinión Pública. Op. Cit., p. 168.
[25] Ibíd., p. 171.

Habermas habla de una transformación en del Estado Liberal de Derecho hacia el Estado Social de Derecho. Los publicistas Colombianos del Siglo XIX argumentaron siempre que la libertad absoluta de prensa no era otra cosa que la cimentación de las mismas libertades a las que tenía derecho el ser humano.

Inmersos dentro de la tradición normativa del Estado Liberal, cuyo propósito era asegurar jurídicamente las relaciones comunes entre el Estado y la Sociedad; la publicidad política fue sufriendo una transformación, que llegaría con la regeneración, hacia un Estado capaz de soportar la carga del orden social que *"tiene que asegurar – rebasando, por consiguiente, las determinaciones negativas de los derechos fundamentales liberales- en el modo de realizar la justicia en la intervención estatal social."*[26]

El partido liberal radical, e incluso los llamados conservadores "históricos" habrían de presentar los procesos de resistencia a este derrumbe de las ideas liberales, que ellos llamaban republicanas, y que adentrándose en un proceso evolutivo, y al mismo tiempo contradictorio, fue interpretado por los artífices de la regeneración.

La nueva concepción de un Estado socialmente obligado, que hizo sus primeros pasos con la Constitución de 1886, procuró asegurar la libertad basándose en la delimitación de la misma sociedad que amparaba: *"La intervención como derecho y como pretensión, supone un Estado existencial, repartidor, distribuidor y asignador, [sic] que no abandona a los individuos a su situación social, sino que acude en su ayuda mediante garantías."*[27] Las garantías Constitucionales de la propiedad y de la familia, adquieren con la regeneración un nuevo resguardo social:

---

[26] Ibíd., p. 250.

[27] Forsthborff E. *Vegrüf und wesen des Socializen Rechtsstaats,* Munich, p, 19. Citado en: HABERMAS, Jürgen. Historia y Crítica de la Opinión Pública Op. cit., p. 251.

> *Porque la delimitación de los ámbitos no estatales por el "ajustarse" de los mecanismos sociales inmanentes no está ya coronada por una participación en igualdad de oportunidades [...] en las compensaciones sociales y por una participación en las instituciones políticas; esa participación es ahora expresamente asegurada por el Estado. Solo así puede seguir estando comprometida la ordenación política con la idea, otrora arraigada con las instituciones del Estado burgués de derecho, de la publicidad políticamente activa, solo así, [...] puede seguir comprometida con esa idea en las condiciones de una publicidad sometida también a una transformación estructural*[28]

Ahora, obviamente la transformación de la esfera pública bajo la mirada del Estado habría de tener en la evolución histórica Colombiana y mundial diferentes desarrollos. Sin embargo, el ejercicio de la publicidad para la formación de la opinión pública, desde mi punto de vista, lejos de ser un retroceso de la libertad, correspondió a una evolución del Estado burgués de derecho hacia uno más social, en el cual el Estado habría de afianzar ese compromiso bajo una legislación e interpretación positiva que, dando garantías a la participación, también habría de ser ampliada con normas inmanentes a la sociedad. No digo, sin embargo, que la regeneración tratara el tema alejada de su interés particular, basada en la necesidad del aseguramiento de su propia transformación política.

Pero, el cambio profundo hacia un nuevo Estado burgués fundamentó el avance normativo que habría de mantener la Carta de 1886 durante 105 años en Colombia. Precisamente, la apresurada votación de la Ley 151 de 1896, que sería la primera Ley de Prensa en Colombia, aunque con errores, se constituiría en el fundamento de la regulación del Estado con la publicidad política y la entrada de la

[28] HABERMAS, Jürgen. Historia y Crítica de la Opinión Pública. Op. cit., p. 251.

publicidad noticiosa, sería transformada de acuerdo con la dinámica de la sociedad colombiana. Precisamente, son en estos años comprendidos hacia los últimos años del Siglo XIX, en los que paulatinamente el término publicista se empieza a modificar por el de periodista.

La diferenciación entre quienes leían los periódicos puede ser exclusivista, desde el punto de vista de la segmentación del público letrado, pero los espacios de sociabilidad a través de muros, hojas volantes, que eran comentados en público, habrían de convertir a "los de la calle", en un grupo aparte que, desde su perspectiva privada hubo de formase una opinión política, quizá algo alejada del propósito primigenio de la prensa política colombiana hacia finales del Siglo XIX, el cual era, más bien, fragmentar a los grupos de élites en su búsqueda, o mantenimiento del poder.

El desarrollo de la prensa hubo de tener un origen comercial, basado en la publicidad burguesa que transformo la correspondencia epistolar en noticias de intereses comerciales, y posteriormente en una prensa de opinión mediante la concurrencia de escritores ilustrados que habrían de afianzar la publicidad política como medio de lucha de política partidista. Esta transformación significó el transito de un comerciante de noticias frescas a un comerciante de opinión pública, dotando el supuesto raciocinio pedagógico de los letrados, en un instrumento de eficacia publicista. Esta transformación analizada por Habermas en su "historia y crítica de la opinión pública", sería después desandada con la primacía nuevamente de lo mercantil; de tal forma que el término publicidad llegó a nombrar lo estrictamente comercial. Pero este es un aspecto que debe tratarse en un posterior estudio de la historia del periodismo colombiano.

1.2.2. LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO Y LA VISIÓN REGENERADORA.

El término "Opinión Pública", tiene que ver directamente con el Estado Moderno fundamentado en su principio de soberanía popular. Desde este punto de vista la opinión que se forme el conjunto de ciudadanos habría de ser naturaleza vital como ente regulador y vigilante de las actuaciones del Estado. Este término será reevaluado y lo sigue siendo, desde el punto de vista de las doctrinas políticas y de la comunicación de masas. Pero hacia finales del Siglo XIX, la opinión pública no estaba constituida por una masa heterogénea e incluyente de ciudadanos en General. En Colombia, la restricción del público que podía opinar, estaba mediado por el nivel de instrucción que le permitiera al ciudadano expresarse.

Las corrientes de opinión política mantenían una vigencia y una importancia que requerían su apuntalamiento a través de la prensa periódica. Rafael Núñez reiteradamente ahondaba esta importancia. *"Celebro que usted admita [le decía a Carlos Holguín el 22 de Noviembre de 1886] que aquí en la prensa hago tanto (más diré yo) que en la burocracia. Nada se avanza si no se forma una sana y enérgica corriente de opinión en el sentido necesario*."[29]

La opinión pública, según los constructores de la Nación Colombiana en la llamada "regeneración" constituía un elemento primordial para la conservación del nuevo ordenamiento de los ciudadanos, ya que si esta llegaba a ser acuñada en contra, el orden público igualmente se vería afectado. Así lo proclamaba Holguín cuando expresaba: *"En los países civilizados aún la prensa oposicionista debe contribuir a formar la opinión pública y a ilustrar el criterio de los gobernantes."*[30]

---

[29] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro. Carlos Holguín, una vida al servicio de la república. tomo II. Bogotá: Editora Desarrollo, 1981. p. 838.

[30] HOLGUÍN CARLOS, Mensaje del Presidente de la República a las cámaras legislativas. 2ª edición .Bogotá: Imprenta de la luz, 1892. p. 33.

Este sentido de influenciar la imagen que los ciudadanos tenían del Gobierno, se vio maximizada por un fenómeno político de cambio: La regeneración. Sus dirigentes, se esforzaron en diferenciar lo "hecho antes" de "lo hecho ahora", aunado al señalamiento de que el cambio no podía ser solamente político sino también moral. La moralización llegaría con las nuevas leyes y un sesgo de la interpretación histórica de las políticas del periodo radical. La preocupación por informar sobre los "verdaderos" acontecimientos se ventilaban constantemente en los periódicos y en las publicaciones tipo libelos y en hojas sueltas. Esta manera de contarle al público la versión personal de "la verdad" no solamente era motivada por la necesidad de influir en Jurados o en recuperar honras mancilladas. Para el Gobierno de la regeneración, era importante diferenciar el periodo radical, como una sumatoria de males y oprobios, frente a la nueva marcha progresista de la Nación. Carlos Holguín lo expresó claramente al referirse a los episodios políticos del pasado: *"Me creo en el deber de ayudar a ilustrar el criterio de las generaciones nuevas que los ignoran, y de refrescar la memoria de los olvidadizos. No nos conviene a los Conservadores que se olvide la historia contemporánea."*[31]

El concepto de "opinión pública", primordial para los dirigentes colombianos del siglo XIX, mantenía una empatía con la ilustración política, la erudición y el alfabetismo ciudadano. El ejercicio de los publicistas en los periódicos y el auto elogioso quehacer asignado a quienes escribían, presenta una alianza entre el compromiso político y la misma labor; que mantenían un mercado de lectores sumamente estratégico para la dirigencia. La dirección de las críticas en la prensa periódica o a través de libelos, u hojas sueltas, más que incendiar el estado de ánimo de la población, pretendían una reflexión desde las mismas elites. Así lo expresaron varios autores al referirse a las contingencias de los encargados del Gobierno con la prensa, en este caso, de Rafael Núñez:

[31] HOLGUÍN Carlos. Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea, 1893. p. 19.

> *La opinión pública, no formada por los aullidos del populacho, ni por los dicterios de un papel inmundo, sino constituido por los votos de las gentes ilustradas y de honor, fue el viento que infló siempre las velas de la nave de nuestro gran piloto. En esta opinión tenía fe, a ella rendía culto y en todas sus grandes empresas, emplazándola como a juez de sus obras y apelando al "veredicto justiciero de los tiempos".* [32]

La grandilocuente misión de la prensa estriba su importancia, para las élites, precisamente en una dirección política que habría de orientar a la población. Pero esta misión no solamente era pregonada desde los publicistas sino desde el mismo Gobierno, llegando a menospreciar el ámbito puramente informativo o de propaganda comercial, y valorando con mayor respetabilidad a los periódicos políticos, reconociendo que ellos:

> *No se aviene[n] ni con la índole de nuestras instituciones ni con el decoro de los que ejercen el poder, porque a estos les importa que se fiscalicen sus providencias y se haga luz sobre los móviles que las han aconsejado; mas no es conveniente y mucho menos armónico con las leyes y las costumbres, consentir el que periódicos que no tiene programa respetable, conocido, ni representan grupos de opinión que merezcan ser considerados por su carácter y sus propósitos, se dediquen a la antipatriótica tarea de agitar los ánimos*[33]

Miguel Antonio Caro mantenía aún más marcada una visión excluyente de la opinión pública, quizá de la misma manera en que dividía a los ciudadanos de la república en categorías especiales para ejercer el derecho de sufragio. De esta

[32] SUAREZ, Marco Fidel. Rafael Núñez y Carlos Holguín. Bogotá: Imprenta nacional, 1894. p. 14.
[33] *El Relator.* Bogotá, Julio 16 de 1891. Número 544. p.254.

manera expresaba que la opinión pública se componía de los "*elementos sanos de la sociedad, no falsificada por órganos banderizos.*"[34]

La opinión pública habría de mantenerse dentro de un ordenamiento especial de las "masas", encasilladas en el dualismo de la prensa periódica usada para el bien o para el mal. Dentro de lo que para Miguel Antonio Caro encajaba al interior de las bondades, primaba enaltecer el carácter nacional mediante el favorecimiento de las labores del Estado como auténticas obras de defensa social. Igualmente, dentro de las malignidades causadas por la prensa, el encendido de las "malas pasiones" correspondía a incitar la desobediencia de la potestad del Gobierno tipificada bajo la Constitución de 1886, como normatividad reafirmante del nuevo régimen político.

Pero el flanco "atacado" por la prensa, y que apuntaba al desconocimiento del orden, también habría de tener la interpretación del "ataque" a la honra y al sosiego de las familias a través de las diatribas políticas que podrían ocasionar las conspiraciones y los levantamientos armados. Este anudamiento de la sociedad y la política, bajo el riesgo de ser mancillados en su honra, mediante el "mal uso" de la prensa periódica, requería de una fuerte normatividad, según las consideraciones del principal autor de la Constitución de 1886 y del Decreto 151 de 1888[35], que habría de regir el destino de los desbocados que osaran hacer uso de las letras de molde para el lado oscuro de la misión periodística, Miguel Antonio Caro.

> *Para guarecer el honor del país y asegurar la paz y la tranquilidad pública, la moralización de la prensa debe ser el objeto principal de*

[34] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Bogotá: Imprenta Caro y Cuervo, 1991. p, 40.
[35] Aunque este Decreto sería firmado por Rafael Núñez y Carlos Holguín como Ministro de Gobierno, es muy probable que el mismo Miguel Antonio Caro, alto Consejero de Estado en ese momento hubiera participado en la propia redacción del mismo.

todo esfuerzo patriótico, bien entendido que para lograr estos fines la acción social es solo parte pequeña de la acción común. [...] es preciso que todos coadyuven a evitar el mal, o asuman la responsabilidad que les corresponda; que los que cooperan al mal de algún modo, mediten la gran falta que cometen, [...] que la sanción social y la sanción religiosa concurran a la obra de pacificación.[36]

El insulto a la excelencia del Cargo de Presidente de la República, fue calificado dentro de la categoría de "delitos subversivos" porque el nuevo orden social habría de mantener en la regeneración las prerrogativas emanadas de la jerarquización de la Nación, en cuyo pináculo se encontraba el más "distinguido" de los ciudadanos. La injuria ante la figura presidencial habría de ser considerada como una peligrosa blasfemia:

Los ultrajes dirigidos en público al Jefe de Estado se consideran como grave atentado, y no se toleran ni su represión se dilata con embrollos judiciales; porque nadie ignora que, vulnerando la autoridad, en su más conspicuo representante, se emplea el medio más eficaz para relajar el respeto de los pueblos para hacer odioso al que manda, y odioso, en su persona, el principio de autoridad; para preparar infames atentados o revoluciones a mano armada, para subvertir el orden social.[37]

Fréderick Martínez, en su trabajo doctoral sobre la referencia europea en la construcción nacional colombiana, encuentra que el afán por el afianzamiento del orden, dentro del proceso de edificación de una nueva Nación, instaurado por la Regeneración, radica en el temor a una "conflagración social" ante la continua

[36] *El Progreso,* Bogotá, 24 de Marzo de 1897. No. 9. p.1. Citado en: CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. cit., p. 298.
[37] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. cit., p. 316.

importación de los modelos Europeos. Pero el afianzamiento de una doctrina nacionalista, basada en la resignación ante la realidad nacional y en la búsqueda de la propia felicidad dentro de los límites de un pueblo virtuoso y encajado en las prácticas católicas, no es el único origen para el mantenimiento del orden. También existía el temor constante de la pérdida del poder a manos de una revuelta liberal radical, que hubiera llevado al traste todo el proyecto de Núñez y sus adeptos "nacionalistas."

La lucha de Núñez, Holguín y Caro no sólo habría de ser retórica ante la amenaza evidente de los intentos de reagrupamiento del liberalismo después de su derrota militar en 1885. También requería de una estrategia de fortalecimiento policivo y militar. Aunque Martínez encuentra preponderante el factor de lucha de los dirigentes de la regeneración ante la amenaza subversiva europea, esta no es invocada frecuentemente por el enemigo radical. Por el contrario, perteneciendo a las mismas elites, ambas facciones se sintieron amenazadas por los intentos de rebelión popular, como el sucedido en 1893 en Bogotá. El territorio pantanoso de la evocación al descontento social podía ser peligroso para el mismo liberalismo radical que tendría que afrontar así, otro factor de desunión y de pérdida de su mismo poder.

El proceso de construcción de un nuevo tipo de ciudadano, basado en el modelo bogotano que habría de ser "exportado" al resto del país, también conllevaba la necesidad de afianzarlo en el concepto católico de una paz generadora de tranquilidad y progreso. Aunque Martínez es difuso al mirar como causa de las medidas de orden de la regeneración los recursos de contención en una lucha entre grupos de elites, encuentra que:"l*a iglesia deberá a través de la educación, crear una generación formada en la aceptación del principio de autoridad; mientras*

tanto, las nuevas políticas de orden público permitirán evitar a corto plazo la explosión social."[38]

1.2.3. LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS.

Para conceptualizar el proceso de formación Nacional y el protagonismo de la prensa escrita, es necesario encauzar dicho elemento desde los esfuerzos obrados por los dirigentes políticos, inmersos en el ejercicio del poder con sus propósitos y disputas, hacia la mejor manera de llevar a cabo dicho proyecto. La imposición de leyes de prensa es una experiencia histórica que continúa haciendo parte del proceso de construcción de identidad nacional y que es chispa adecuada para mirar las andadas y desandadas del ejercicio de ciudadanía. Me adhiero al concepto expresado por el profesor Armando Martínez Garnica, en cuanto a que, el Estado, como actor principal de la *experiencia histórica,* se apropia de una acción social "*guiado por una agenda de tareas específicas dirigidas al cumplimiento de su función histórica: gobernar una nación de ciudadanos. El tema de la agenda de las instituciones del poder estatal corresponde a sus tres grandes funciones de gobierno […] "Administración", "Legislatura", "Magistratura"*.[39]

Cuando pensamos en un periódico, generalmente nos referimos a "lo que dice el periódico", pero esta predica es referida, conciente o inconcientemente, hacia una comunidad. En nuestro siglo, los periódicos han traspasado fronteras en virtud de la decodificación de señales eléctricas en electrónicas y en la codificación desde un receptor generalizado en muchos hogares: el computador personal. Los diarios no son ya parte de una comunidad regional, más allá del tratamiento mismo de las noticias, en un sentido amplio. Cualquier curioso cibernauta en Guinea Ecuatorial

[38] MARTÍNEZ, Fréderic. El Nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional en Colombia, 1845 – 1900. Bogotá: Banco de la República, 2001. p. 470.
[39] MARTINEZ GARNICA, Armando. Convocatoria a una nueva historia política de Colombia. Conceptos fundamentales y temas básicos. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2005. p.

podría interesarse sobre el accidente automovilístico sufrido por un taxista en la ciudad de Bucaramanga, a miles de kilómetros de su pantalla. Pero, en el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, los periódicos tuvieron un aporte importante en la formación de la imagen de comunidad. Estos fueron parte de un avance técnico en donde era posible "representar" los acontecimientos de un grupo dentro de un espacio de tiempo y con unas conexiones entre unos y otros, sin que necesariamente llegaran a conocerse. Esta idea del periódico como medio para la representación de la simultaneidad en un tiempo vacío en el cual, no obstante la fecha referenciada en la parte superior de la hoja, el mundo sigue adelante en el tiempo, y que hace parte de una forma de imaginación de la comunidad Nacional, fue expresada por Benedict Anderson al afirmar que: *"La idea de un organismo sociológico que se mueve periódicamente a través del tiempo homogéneo, vacío, es un ejemplo preciso de la idea de la nación, [...] que se concibe también como una comunidad sólida que avanza sostenidamente de un lado a otro de la historia."*[40]

Pero un periódico eleva procesos mentales que van más allá de la perspectiva comunicativa entre un emisor y un receptor. Es necesario tener en cuenta la temporalidad breve de un diario cada día, que no obstante, representa una experiencia simultánea de miles de personas reflejadas en un mundo imaginado y "arraigado" todos los días en la vida diaria. Por eso, se cuestiona Anderson refiriéndose al periódico, *"¿Cuál figura más vívida podrá concebirse para la comunidad imaginada, secular, de tiempo histórico*?[41]. Además, la importancia de los diarios en las Naciones Latinoamericanas estriba en la creación de una comunidad imaginada en oposición con otras. Los impresores criollos provinciales después de la independencia, se propusieron como tarea la identificación de

[40] ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 48.
[41] Íbid., p. 61.

Americanos como grupo humano diferente al Español, pero conservando una pluralidad entre las mismas provincias.

Aunque esta teoría de Anderson, ampliamente difundida, ha sido señalada por Jorge Myers como no pertinente a los periódicos Latinoamericanos, básicamente por el bajo impacto que ese periodismo moderno tuvo por razones culturales y sociológicas en el momento histórico de la independencia, especialmente por el analfabetismo de la inmensa mayoría de la población y la repulsa a la secularización social influenciada por el arraigo a las tradiciones católicas[42] ; sin embargo, es de considerar que la única manera de acceder a la información u opinión de un periódico, no estriba necesariamente en una lectura atenta, personal y directa del individuo, sino que existen mecanismos de difusión que van más allá, como por ejemplo; la lectura pública, los contenidos comentados en sitios públicos, o la simple identificación grupal entre uno u otro escrito que se convierte en proclive de ser difundido entre copartidarios. Incluso, aunque la certeza de la lectura pública no es fácil de rastrear a finales del Siglo XIX, es posible encontrarla en la lectura de la prensa obrera colombiana a principios del siglo XX como una práctica común referida al objetivo, no solo de informar, sino de educar a los obreros y artesanos políticamente[43]. En Bogotá, era conocida la costumbre de pegar avisos y hojas sueltas de periódicos anunciando las noticias más relevantes de la próxima siguiente edición, por ejemplo, en los muros del parque de Santander, y en algunas otras partes de la ciudad.[44] Sería muy arriesgado

[42] MYERS, Jorge. Identidades porteñas. El discurso ilustrado en torno a la nación y el rol de la prensa: *El Argos de Buenos Aires,* 1821 – 1825. En: ALONSO Paula (compiladora). Construcciones impresas, Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003. p. 58-62.

[43] Ver: NÚÑEZ ESPINEL, Luz Ángela. Op. Cit., p. 64 y ss.

[44] Desde mediados del Siglo XIX ya se relataba esta costumbre en Bogotá. ver: CORDOBEZ MOURE. Op. cit., p. 579. Otro ejemplo puede encontrarse en el propósito inicial de un periódico de 1891 que aduce que es preferible publicar sus avisos en el periódico y no en las paredes llenas de noticias y de todo tipo de anuncios. Ver: *El Tren*. Bogotá, 1º de diciembre de 1889. Número.1 p.1.

afirmar que estas prácticas no habrían de representar espacios de sociabilidad y de difusión primaria del acontecer político e incluso comercial de la ciudad, incluso para personas que no sabían leer.

Inscrito dentro de un proceso de integración ciudadana, es también mi propósito, mirar el ejercicio de la prensa como un ejercicio de *educación* política, en el cual, los dirigentes registrados en el periodo de tiempo estudiado, han podido restringir la libertad de prensa como parte de un esfuerzo para que su propósito no se viese afectado o en peligro. Las comunidades adquieren en la educación, los conocimientos para participar como ciudadanos en la vida nacional. "*La pertinencia y el sentimiento nacionales nacen de esta interiorización de los conocimientos, normas y valores comunes. […] se trata de recordar que el hombre es susceptible de aprender a conocer y a respetar las prácticas de la vida pública e incluso, más precisamente, a interiorizar la idea de que existe un dominio público*".[45] La prensa, tanto política, expresada a través de sus editoriales, cómo informativa noticiosa, maneja la percepción conocida como "dominio público". Esta aseveración hace referencia a los hechos que han merecido ser publicados en virtud de la "necesidad" de ser sacados del círculo individual a otro nivel, en el cual, "todos" habríamos de ser partícipes de ella.

El concepto de *proyecto político* es otra variante que abre preguntas desde el enfoque de esta investigación. Ya indiqué que la forma de llevar a cabo este proyecto ha sido guiada por una *agenda* de tareas específicas en donde se podría incluir llevar de cabestro a la prensa. "*El proyecto político designa a la vez las ideas-valores e ideologías- y las realidades objetivas- prácticas sociales e*

[45] SCHNAPPER, Dominique. La comunidad de los ciudadanos. Acerca de la idea moderna de nación. Madrid: Alianza editorial S.A., 2001. p. 40.

instituciones- en constante interacción, por medio de las cuales se pone en marcha el proceso de integración nacional."[46]

Es evidente que la Regeneración fue un proyecto político puesto en marcha por un grupo social concreto, en el cual, la noción de *libertad* inició un proceso desligado de la tradición liberal instaurada en la Constitución de 1863. Es necesario analizar si el ejercicio "libre" de la prensa podría convertirse en un peligro para dicha construcción nacional. Una organización política democrática con incontrolables libertades podría haber hecho pensar al Estado de la regeneración, a la manera de Dominique Shnapper, *"que la decadencia de la nación, en su doble dimensión interior y exterior, está arraigada en su misma naturaleza*".[47]

Probablemente arrancar sin anestesia el ejercicio libre de la prensa por la mano de un liberal radical en proceso de extinción y ayudado, en cuanto a su teorización y ejecución, por un humanista con arraigadas doctrinas sociales y con escalas de valores provenientes del más puro tradicionalismo católico, pronto sería sistematizado finalmente en normas sociales. El concepto de Norbert Elías acerca de la dualidad existente en los cánones normativos de la Nación, nos pueden ayudar como marco para entender mejor este proceso. Dicha dualidad gravita alrededor de demandas sociales contradictorias. Por un lado, existen obligaciones morales de tipo humanitario y por otro, propósitos específicos de ciudadanos miembros de un mismo Estado. Explica Elías que de esta manera los seres humanos adquieren dos "cánones normativos principales", señalando que, generalmente, son incompatibles. Uno de ellos es una serie de preceptos morales, humanistas e igualitarios, manteniendo dentro al hombre mismo como un valor supremo; el otro, es la visión que cada individuo tiene por su propia conservación,

[46] Ibíd., p.54.
[47] Ibíd., p.177.

los intereses de su propio "soberano colectivo" que hacen parte de su integridad. Por ello, el castigo se ejerce cuando alguien quebranta alguno de estos cánones.[48]

Muchos puntos de vista de nuestra tradición historiográfica establecen una prioridad en los estudios desde los conflictos de clases dejando de lado, como si fuera un "tabú" social, el estudio de cualquier doctrina nacionalista o patriótica. Pero, es un hecho, que las normas sociales erigidas en una Constitución y reglamentadas como decretos y leyes, han cumplido objetivos tanto integradores como desintegradores, y que requieren de un estudio procesal. Dice Elías, que es necesario

> *Guiar la atención del lector clara e inequívocamente al carácter inmanentemente ambiguo de las normas sociales, a su particularidad de vincular entre si a los hombres y, al mismo tiempo, de poner a las personas así ligadas en contra de otros. […] En los Estados nacionales contemporáneos, el canon más poderoso puede inculcar a los miembros de una misma sociedad que el hombre aislado, el individuo, es el valor supremo y, al mismo tiempo, que lo es el colectivo soberano, el Estado nacional y que todos los objetivos e intereses individuales, incluyendo la sobrevivencia física del individuo, deben supeditarse a ello.*[49]

Estoy en avenencia con dicho autor en lo relativo a que podría usarse como instrumento de análisis las normas idealizadas, utilizadas desde un enfoque teórico. Igualmente, comparto su señalamiento cuando afirma que: *"Los asuntos*

[48] ELIAS, Norbert. Historia de la Cultura e Historia Política. Los Alemanes. México: Colección itinerarios, 1999. p. 186-199.
[49] Ibíd., p. 192.

privados pueden poner en vigor un código moral; los públicos uno nacionalista"[50] Por ello, el ejercicio de la prensa escrita al ventilar asuntos políticos de oposición sin el sustento de veracidad requerido por la norma, pone en marcha una premura del Estado para acallar cualquier posible mutilación de un proyecto de regeneración nacional. Como medida para comprender la imposición de la legislación de prensa, considero de gran importancia su desarrollo histórico como parte de un "todo" acumulable de experiencias históricas y con actores políticos que deben ser vistos dentro de un gran proceso, con avances y retrocesos, de construcción nacional.

La formación de ciudadanos requería de un proceso de aprendizaje, especialmente en lo referente a las actuaciones de la vida en común. Dentro de este proceso de formación ciudadana, la prensa hace una presencia sobresaliente en el siglo XIX bajo la idea de que existe un dominio público bajo el cual subsiste toda una serie de conocimientos y normas comunes que se interiorizan mediante un proceso de membresía colectiva. La Regeneración como fuerza transformadora encontró que el ejercicio de la prensa sesgado hacia una corriente diferente a su intención, podría "deformar" ese proceso de construcción de ciudadanía. La lucha para no dejar socavar ese propósito se encuentra delimitada por la formación de una conciencia colectiva novedosa, que haría germinar nuevas semillas atrayendo solamente las especies adeptas, y al mismo tiempo, "desmalezando" aquellas que pudieran ocasionar un tropiezo, especialmente las que usaban las letras como trinchera de destrucción. Las acciones tomadas por la regeneración habrían de llevarse a cabo desde la misma prensa, actuando con la premisa de que "s*olo la construcción narrativa de un acontecer histórico dotado de un sentido cortado al*

[50] Ibíd., p. 190.

talle del propio colectivo puede suministrar perspectivas de futuro orientadoras de la acción y cubrir la necesidad de afirmación y autoconfirmación"[51]

Rafael Núñez veía una preponderancia de la prensa política para la formación de los colombianos. Pero, solo bajo la reconstrucción de los preceptos morales "perdidos" durante el periodo anterior a la regeneración, y mediante el uso del "prestigio" de las letras impresas que presentaban una rápida influencia del que llegó a llamar "invento providencial", era posible un avance de la civilización de la Nación Colombiana. No obstante, la prensa requería, según Núñez, el contrapeso de las leyes para no permitir el desborde de sus fuerzas, ya que la influencia en los ciudadanos era notoria.

> *Es la prensa la que se encarga de la grande tarea de instruir a la muchedumbre de ciudadanos acerca de cosas y hombres. Son los periódicos los guías, filósofos y amigos, que enseñan a pensar lo que ellos piensan a esa muchedumbre que no tiene tiempo para beber en otra fuente. El alcance de esta propaganda de todos los días sobre cerebros casi elementales, es enorme. Lo es también sobre cerebros más adelantados y sobre las nuevas generaciones. Lo es así mismo sobre anónimos de toda especie, predispuestos por cualquier motivo, en cierta categoría de opiniones.*[52]

La imitación de modelos extranjeros es para los dirigentes de la Regeneración bastión de certezas, pero también de dudas. Dentro de la misma formación de mitos nacionales, los ingleses han cultivado con orgullo su auto reconocimiento de disfrutar de una prensa libre y "*la convicción de que las demás naciones no podían*

[51] HABERMAS, Jürgen. Identidades nacionales y postnacionales. . Madrid: Editorial Tecnos S.A, 1989. p. 91.
[52] NÚÑEZ, Rafael. La Reforma política en Colombia. Tomo 5. Bogotá: Editorial ABC, 1946. p. 27.

sino estudiar e intentar imitar esta creación específicamente británica ha formado parte del mito nacional."[53] Pero adaptar las disposiciones extranjeras requería, más que una instauración de legislaciones similares, toda una serie de cambios en las costumbres de los ciudadanos. Para ello, era imprescindible el establecimiento de nuevas tradiciones y el refuerzo de algunas ya existentes como medio para establecer la legitimidad política. Dentro de este orden, la pretensión de renovar el sentimiento católico materializado mediante el concordato y la restitución de bienes y prebendas al clero, iba aunado al ejercicio de una prensa sujeta a leyes que barriera con toda la tradición de "libertad absoluta" enmarcada desde la constitución de 1858 y la de 1863. De hecho, la lucha del Liberalismo Radical estribaba en la imposición de su propia tradición existente en los años en que administraba la Nación, contra el surgimiento de una nueva fuerza contraventora e impositora de una nueva tradición. De allí provienen sus constantes alusiones a la Regeneración como "supresora" de todas las libertades.

En esta investigación pretendo el análisis del comportamiento de esa nueva forma de pensar la Nación, pactado o impuesto, por el movimiento llamado "La Regeneración" a las publicaciones, especialmente la prensa escrita, mediante el uso de una legislación severa. Pero, no puedo dejar de mirar uno que otro caso de censura de otro tipo de publicaciones que a la luz de la "tea" instaurada, pudiera subvertir el orden pregonado. De hecho, el peligro de la incitación a la subversión podría provenir desde diferentes flancos, y por ello, ante el menor riesgo de incitación pública, el Gobierno cerraba filas en torno al propósito. De hecho, la definición de libertad no era libre. Una cosa muy diferente eran las libertades omnímodas del radicalismo, y otras eran las referidas por la regeneración. Incluso, Miguel Antonio Caro, no deja de asegurar el término con los visos de una cruzada: *"la santa libertad del bien, digna de estímulo y apoyo, y la odiosa libertad del mal,*

[53] SCHNAPPER, Dominique. Op. cit., p. 58.

merecedora de severa represión" [54] El convencimiento de un orden moral y avanzado, que es el propósito de progreso de la regeneración es muy claro para Caro, y este mismo fue defendido vehementemente desde el Consejo Nacional Delegatario, el Consejo Nacional Legislativo y posteriormente desde el Senado.

Un ejemplo de esta situación podría ser referenciado con la prohibición hecha por el Gobernador del Departamento de Cundinamarca, Carlos Uribe, a la representación teatral de un ensayo dramático titulado "El Soldado", escrito por Adolfo León Gómez por considerarlo subversivo, ya que atacaba, a juicio del Gobierno, los empleados públicos, las instituciones y la institución militar. El autor, no se contentó con asumir la sanción sino que acudió al mecanismo de petición mediante un memorial para que se le revocara tal censura presentado ante el Gobernador el 22 de Agosto de 1892.

Llama la atención que dentro de los argumentos esgrimidos por este, se encuentren las referencias a las opiniones emitidas desde la prensa; diferenciando aquellas hechas por los diarios Conservadores *El Telegrama, El Criterio* y *El Correo Nacional,* quienes, según el autor, avalaron el escrito; mientras que *"si el drama atacase el actual orden de cosas, es claro que los periódicos liberales lo habrían cogido y aprovechado como arma útil, aunque pequeña, contra el Gobierno."*[55] Aduce que su escrito no es subversivo ni ataca al Gobierno, porque su trama está compuesta por un hecho histórico en un tiempo no precisado, el cual retrata el reclutamiento de soldados y que tampoco ataca la justicia, como ha sido acusado, solamente por el hecho de mencionar que la *"justicia humana (en*

[54] CARO, Miguel Antonio. Libertad de Imprenta. Artículos publicados en LA NACION en 1888. Bogotá: Imprenta nacional, 1889. p.3.
[55] *Diario Oficial.* Bogotá, 25 de Septiembre de 1892. Número 8933.

general, de todos los siglos y de todos los países) es monstruo ciego infalible que incurre en injusticias."[56]

La única alusión que admite Adolfo León Gómez, quien en ese entonces tenía un alto cargo público como Juez de la República, hecha en su escrito; es referente a su posición contraria al Gobierno en la aplicación de la pena de muerte. Aunque dice que, al igual que cualquier ciudadano, puede tener una opinión diferente y que muestra de ello, es la gran cantidad de publicaciones a favor y en contra. Sin embargo, contrito acepta cualquier mutilación que juzgue el Gobierno conveniente temeroso porque le anunciaron que, además de ser tachado de subversivo;

> *Había enterrado para siempre mi carrera judicial y se me privó de la justa y legítima ganancia que la segunda representación me daba y con la cual iba a atender a muchas necesidades de las dos familias que hoy tengo a mi cargo y que no pueden vivir con el corto sueldo de un Juez.*[57]

El Gobernador pasa el asunto a manos del Ministerio de Gobierno, y el Juez - escritor, conocedor de las demoras judiciales y con la premura agitada por el interés de una compañía de teatro llamada "Amato" que estaría dispuesta a pagarle 5oo pesos por la representación si la censura es revocada, dirige otras dos cartas al Ministerio para que se resuelva rápidamente su situación.

El Ministro Cuervo le contesta que su drama llamado "El Soldado" si encierra conceptos subversivos y que no es necesario que una junta de literatos observen y emitan sus conceptos sobre este, porque la consideración de subversiva no le ha sido endilgada a la obra por su parte literaria sino porque se presta para

[56] Ibíd.
[57] Ibíd.

"exaltar las malas pasiones latentes siempre entre las muchedumbres y que puede ser ocasión de escenas deplorables que está legalmente obligado a prevenir la autoridad en beneficio de todos sus asociados." [58] No obstante, como el peticionario estaba dispuesto a modificar el drama, el Ministerio resuelve acceder siempre y cuando los cambios tengan la aprobación, por mayoría absoluta, de una junta de censura. Los miembros de esta nueva junta se desconocen, pero los anteriores que aprobaron y no vieron inconveniente en la representación de "El Soldado", estaba conformada por Carlos Martínez Silva, Jorge Roa y Luís María Herrera. Es muy probable que la desestimación de esta primera junta tuviera el matiz político originado en que Martínez Silva fuera el patrocinador intelectual de la candidatura de Marceliano Vélez y que Jorge Roa también hiciera parte de esta misma fisura dentro del partido Conservador que "osó" disputarle el poder a Núñez y a Caro para las elecciones de 1892.

1.2.4. EL RIESGO DE VOLVER AL PASADO.

La imposición de un tiempo presente alejado de los errores del pasado es referido constantemente por los gobernantes de este primer periodo de la regeneración. Las alusiones de Rafael Núñez, Carlos Holguín y Miguel Antonio Caro, sobre los peligros del regreso a las maneras de dirección del país del liberalismo radical, siempre quiso representarse como un periodo tan plagado de errores y tan remoto, que cualquier intento de modelo político que mantuviera algunos principios liberales, fuera visualizado como un retroceso perjudicial para el cambio de ideas "avanzadas" en el que se cimentaba la regeneración. Por esta razón, el sostenimiento y la defensa de las ideas del liberalismo radical a través de los periódicos siempre fue atacado con el señalamiento de sus equivocaciones por parte de los publicistas defensores de la regeneración. Incluso, la defensa no

[58] Ibíd. p.1246.

solamente provino desde el flanco de la tinta y el papel. La necesidad de una legislación que revocara las llamadas "libertades omnímodas", se constituyó en la segunda trinchera para socavar cualquier intento de reconstruir los "errores" de ese pasado. Estas defensas y ataques contribuyeron a forjar dos puntos de vista de la historia de la Nación. En los periódicos de finales del Siglo XIX, y especialmente después de 1880, es muy común encontrar reconstrucciones de pensamientos, batallas y actos políticos de los Gobernantes y de los partidos políticos Liberal y Conservador, en los que son visibles las contradicciones de los sucesos acaecidos. Por ejemplo, Carlos Holguín, desde el correo Nacional, en su tira y afloje con *El Relator*, siempre tiene presente recordarle a sus rivales las calamidades ocurridas durante la administración radical:

> *Como me ha sido preciso hacer una rápida reseña de la situación política de que salimos, para que se puedan apreciar debidamente las ventajas del cambio de hombres y de instituciones, los responsables de los males pasados se han enfurecido y dicen que los insulto cuando recuerdo hechos, doctrinas y leyes. No les falta razón; porque aspirando solo a apoderarse del Gobierno, comprenden que es imposible que la Nación vuelva a poner su suerte en manos de los hombres que hicieron lo que yo estoy recordando y que ellos esperaban que ya se habría olvidado entre el polvo de los archivos en donde se depositan las colecciones de los periódicos viejos.*[59]

Esta preocupación por impugnar un mal recuerdo de las prácticas anteriores a la regeneración, invadió todos los estamentos públicos, incluyendo el Poder Judicial. Un periodista y abogado muy reconocido en Bogotá a finales del Siglo XIX llamado Liborio Cantillo, expone que los jueces para congraciarse con el Gobierno, hablan

[59] HOLGUÍN Carlos. Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Op. cit., p. 172.

mal del antiguo régimen y ensalzaban desmedidamente al nuevo. Dice además, que la práctica de atribuir al periodo radical todo lo malo que se advierte á cada paso, es una muletilla adoptada por todo funcionario para conservar su empleo a como dé lugar. Esta opinión es expresada al conocer un comentario del Juez 5º del Circuito de Bogotá en nota publicada el 23 de Septiembre de 1889 en el número 7.890 del *Diario Oficial*: "*Uno de los objetos de la Regeneración, quizás el primero ha sido el de moralizar el país, […] le damos importancia á […] hechos que en el pasado régimen, aunque erigidos en delito, eran letra muerta en el Código Penal*"[60]

La defensa de la autoridad gubernativa, es también una preocupación incluyente dentro de la comparación del "antes" y del "ahora". La referencia a la situación de los funcionarios públicos durante la época de la libertad absoluta de imprenta hace énfasis siempre en el, igualmente absoluto, estado de indefensión en la que se encontraban dichos funcionarios. Por otra parte, Miguel Antonio Caro decía que existían, no obstante, otra especie de funcionarios públicos llamados periodistas, poseedores de una inmunidad y con facultades extraordinarias tales, que cualquiera; "*descontento ó despechado, cesante ó aspirante, podía ingresar, por propia autoridad ó generación espontanearen este privilegiado y anónimo-; -cuerpo de censores universales*".[61]

La diferenciación pretendida hacia las nuevas generaciones de periodistas, tiene en la desautorización de un título permisivo para calumniar o denigrar contra el Gobierno o los particulares bajo el amparo de una profesión, el punto de partida para motivar a un ejercicio sujeto a las reglas que serían encasilladas por Decretos Ejecutivos.

---

[60] *Revista Judicial*, Bogotá 29 de Octubre de 1889. Número 37. p. 296.
[61] CARO, Miguel Antonio. Libertad de Imprenta Artículos publicado en LA NACION en 1888. Op. cit. p.78.

Cuando se presenten candidatos a Magistraturas como representantes a la Cámara y Senadores, que tengan dudosa reputación o actuaciones confirmadas de mala conducta, se preguntaba Caro, ¿Cómo se podría refutar dicha elección sin combatirla con la prensa? La reflexión de este Magistrado, que a la postre, impondría sus tesis para la dirección de la prensa durante más de nueve años, tiende a acrecentar el espíritu moralizante y político que valorizaría su labor:

> *En estos casos se escoge entre dos males; y el debate público con todos sus inconvenientes, es el único medio de conjurar los gravísimos peligros de una elección muda y ciega. Por otra parte la prueba no es forzosa, sino voluntaria; el candidato que no ose arrastrarla, puede retirarse de la liza; y el temor de la publicidad alejará de ella á los indignos que no tengan la audacia necesaria para competir con ciudadanos de mejores títulos.*[62]

La contención del riesgo de volver al pasado radical, también habría de llevar a Núñez, Holguín y Caro la mirada hacia los modelos de organización estatal europeo, especialmente de Francia e Inglaterra. Sin embargo, está búsqueda contiene mayores referencias administrativas y de funcionamiento del aparato gubernativo, que una demanda de doctrinas e ideologías. Todo este proceso es convenientemente ilustrado por Fréderic Martínez quien hace una exposición, desde los propósitos de las delegaciones colombianas ante los Estados europeos, la preferencia por inmigrantes de sello católico, como los italianos, que pronto serían rechazados por ser propagadores del "anarco-sindicalismo"; la prohibición de la contratación de chinos, hasta la decisión de permitir la entrada de numerosas instituciones religiosas extranjeras.[63]

---

[62] Ibíd.
[63] Ver MARTÍNEZ, Fréderic, El Nacionalismo cosmopolita. Op. Cit., p. 475-493.

La mirada siempre atenta a los modelos europeos sobre restricciones a la prensa, no solamente era lógica sino natural para un país que había tenido una experiencia única de libertad sin restricciones por más de cuatro décadas en esta materia.

1.3. EL HONOR Y LA HONRA: DELITOS, ACUSACIONES Y DEFENSAS DESDE LAS PUBLICACIONES.

Quizá las pocas acusaciones que en estos pocos años transcurridos iniciando el siglo XXI en Colombia, se han valido de la tipificación de injuria y calumnia, no conservan el mismo enfoque causado a finales del Siglo XIX. Ciertamente, en nuestros días, los medios masivos de comunicación ventilan frecuentemente las acusaciones hechas a través de la Fiscalía General de la Nación, con entrevistas de personajes de todo tipo y los señalamientos propios de la agitada vida Nacional en el ámbito delincuencial, en la mayoría de los casos, sin una sentencia culminada penalmente. Sin embargo, la revelación de nombres, fotografías e imágenes en video, encuentran asidero en la acostumbrada vida moderna, en donde, al parecer, recibir información sobre las actuaciones de los seres humanos es parte de nuestro manera de aceptar la modernidad. El salto de convertir en público lo privado, es muy corto. Desde las chanzas “pachunas” de mal gusto de las cámaras escondidas, hasta los recientemente llamados “muros de la infamia” en donde los Bogotanos no alcanzan a comprender porque esos seres lejanos de las fotografías han sido capaces de cometer los más atroces crímenes contra la niñez. Este salto a lo público, es frecuente pero, muchas veces, suele ser fugaz en el tiempo. La modernidad obliga a olvidar rápidamente en virtud de la nueva información que toca a nuestros ojos y oídos, y que nos hace poner en foco lo más reciente. Es por eso, que la iniciativa de los llamados “muros de la infamia” pretende prolongar el recuerdo más allá del tiempo inmediato. No se puede dejar olvidar tan fácilmente a quienes han cometido delitos contra la sociedad.

Pero, ¿que sucede con quienes ya han sido olvidados, y no cometieron quebrantamientos normativos? ¿Con aquellos seres humanos que, en cierto momento han saltado a la palestra pública, acusados de algún tipo de falta? A lo sumo, y si su delito no es demostrado suficientemente, solicitarán un derecho de rectificación en el medio, y probablemente este se llevará a cabo en el espacio donde menos interés presente al público. Pocas veces nos fijamos en las rectificaciones, y si lo hacemos, tomamos como de gran valor el reconocimiento del error por parte del medio de comunicación. Probablemente, el calumniado se sienta satisfecho también y pronto todos, incluyéndolo a él, resten importancia al suceso. Cuando existen informaciones nuevas que se publicitan rápidamente, las anteriores encuentran un camino de retorno a las hemerotecas o a los archivos, hasta que vuelven a ser usadas para traer el suceso nuevamente al presente.

A fines del Siglo XIX, la situación era bien diferente. Los sucesos de la vida privada, generalmente daban un giro monumental, al ser ventilados por la prensa o los medios impresos. Especialmente porque los valores de probidad con que contaba un ciudadano representaban su carta de presentación ante la sociedad. Si el ciudadano era conocido, con una profesión definida y con un reconocimiento público basado en dos características fundamentales: La honra y el honor.

Sobre la honra, llegó a expresarse Carlos Holguín, cuando en 1888 siendo Ministro de Gobierno, se refiere al Congreso sobre el Artículo 42 de la Constitución de 1886 que reglamentaba por primera vez en muchos años de “irresponsabilidad” legal de la prensa, el uso sujeto a leyes:

> *Siendo la honra la propiedad más sagrada del individuo, el orden social, condición indispensable de la existencia política; y el atentar contra la tranquilidad pública el delito de más funestas consecuencias para un país, parece cosa natural y sencilla, que la carta fundamental de una*

Nación civilizada consigne entre las garantías individuales y sociales el principio de la responsabilidad de la prensa.[64]

Una hoja de vida intachable era fundamental para un ciudadano virtuoso, y por ello su defensa usando los mismos medios era la manera de amparar, ahora en la esfera pública, las actuaciones de las que había sido acusado. Pero no todos podían defenderse de acusaciones criminales usando la imprenta. Era necesario tener buenos abogados y asesores en redacción a falta de la virtud de escribir claramente, además de contar con los recursos financieros suficientes para pagarle a las imprentas.

Estas defensas públicas no variaron con la nueva legislación sobre imprenta de 1886. La arraigada costumbre de publicar libros, hojas sueltas, y folletines; para acusar o defenderse de calumnias, o de información considerada falsa, conserva, incluso hoy, cuando se utiliza frecuentemente cada vez que se aproximan las elecciones, toda una trascendencia arraigada en la necesidad de un reconocimiento del otro. La diferencia con los años del Siglo XIX radica en que la inmediatez y lo escaso de los sucesos criminales, requerían de todo un gran despliegue de los medios impresos. Consecuentemente, quienes se sentían agraviados por la publicidad de las acusaciones y contaban con el recurso económico, transitaban el camino de redactar sus puntos de vista y su defensa, para imprimirlos con la esperanza de penetrar la conciencia de los jurados, de sus círculos familiares y de amigos. Generalmente, muchos de los libelos eran respuesta a las publicaciones de la prensa periódica.

En 1889 ocurrió un asesinato que conmocionó a la sociedad Bogotana. El hecho, que a la postre sería conocido con el nombre de “Crimen de la Casa de la

[64] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro. Op. Cit., p.900

Moneda" y que hubo de representar todo un reto para el cuerpo de policía, para fiscales, abogados defensores y la prensa; fue tema de conversación durante muchos años en las esquinas de la capital; y mantuvo varios años de investigación con la inclusión de exhumación y contradicciones forenses. El personaje acusado de la autoría intelectual del homicidio de la señora Mercedes Arjona fue su propio esposo, llamado Torcuato Carreño; un comerciante que se encontraba fuera de la ciudad al momento de ocurrido el evento y que sería posteriormente sindicado por quienes lo perpetraron materialmente. Encarcelado, y declarándose inocente, inició una serie de publicaciones en defensa de su buen nombre que había sido mancillado por los periódicos de la capital:

> *La calumnia fue recogida por algunos periodistas, ávidos de casos notables con que llamar la atención para aumentar la venta de sus papeles. Ellos se olvidaron de que el asunto estaba en tela de juicio reservado, en el cual las autoridades que hacían la investigación, nada habían dicho sobre la existencia de un delito; se olvidaron de que yo estaba preso y sujeto á las autoridades encargadas de juzgarme; se olvidaron de la caridad cristiana, y en fin se olvidaron de si mismos y de la alta misión del periodista.[...] Dieron como cosa evidente la existencia de un supuesto delito; entregaron mi nombre a la maledicencia, estamparon, para infamarme, mi retrato en sus papeles e hicieron de mi honra asunto de especulación. La prensa que así ha procedido, se ha hecho recusable desde entonces, por haber prejuzgado las cuestiones y puesto en evidencia su parcialidad en este asunto. [...] La pérdida de la vida es poca cosa, en presencia de la pérdida del honor.*[65]

[65] CARREÑO, Torcuato. Torcuato Carreño al Jurado de Acusación. Bogotá: Imprenta de Torres Amaya, 1889. p. 2.

Carreño ya había escrito un mensaje a la sociedad Bogotana, en donde exponía una conocida desavenencia con su consorte, que le había llevado, inclusive a solicitar la anulación de su matrimonio. Ante el descubrimiento del crimen y su presunta implicación en la cual, este abogado del Colegio del Rosario y comerciante domiciliado en Guapota, que era el pan del día en los periódicos Bogotanos; decide también exponer su vida a través de la imprenta, dándolo *"a los vientos de la publicidad"*[66]. En una publicación, quiso exteriorizar la historia con su esposa, desde que la conoció, pasando por el noviazgo y la ofensa, que no era otra cosa que la vieja conocida infidelidad. Pero, el Ministro de Gobierno, José Domingo Ospina Camacho, ordenó la suspensión de los escritos publicados por entregas, debido a que la ley de imprenta no permitía dar publicidad a delitos cuando el sumario no había pasado aún al estado de causa.

La precedencia en la historia jurídica colombiana, de este caso, es particularmente interesante, amén de las circunstancias investigativas que rodearon el suceso. En la llamada "calle de la moneda" en el año de 1892, muchos años antes de ser habilitado en nuestros días el "Museo Botero", vivía en una casa pequeña una señora llamada Mercedes Arjona de Carreño separada de su esposo Torcuato Carreño, con quien había dejado de tener vida conyugal ocho años atrás, según este, causados por una probada tendencia a la infidelidad, materializada en otras ciudades donde residió la pareja. El señor Carreño había utilizado todos los medios para que la iglesia anulara su matrimonio sin obtener ningún resultado satisfactorio a sus deseos. Su interés particular residía en el anhelo que tenía de contraer nupcias con una joven Zipaquireña. El día 1º de diciembre de 1889, a las 5.30 de la tarde, los vecinos de la calle se reunieron a presenciar la apertura de la puerta por parte de un cerrajero bajo las órdenes de la madre de Mercedes Arjona, quien se encontraba preocupada porque no veía a su hija desde hacía más de dos

[66] CARREÑO, Torcuato. Exposición que hace Torcuato Carreño sobre el crimen de la casa de la Moneda. Bogotá: Imprenta de Fernando Pontón., 1889. p. 5.

semanas. La posterior llegada de la policía, a las seis de la tarde, en medio del nauseabundo olor emanado del cadáver de la señora encontrado en su propia cama, iniciaron las investigaciones que habrían de nutrir los periódicos Bogotanos, las disertaciones jurídicas de acusadores y defensores, las conversaciones en los cafés, y hasta la inclusión de la persecución política en el caso.

La Constitución de 1886 regía con nuevas leyes sobre las acusaciones penales. Por eso, el autor intelectual, Carreño; quien supuestamente había encargado de efectuar el asesinato a dos de sus sirvientes, llamados Marco Aurelio Sepúlveda y Francisco Velosa, no fue encontrado, en un comienzo, como candidato para la apertura de un juicio por asesinato. La razón era sencilla: Los análisis forenses, hechos apresuradamente y por médicos poco competentes para la labor, en primera instancia, no habían revelado que el cadáver, sin lugar a dudas, hubiese tenido como causa de su muerte la ejecución violenta. Esto dejaba en duda el alcance de un asesinato. No obstante, la confesión de uno de los sirvientes en el asesinato, implicando directamente a su patrón como mandante del hecho; un primer jurado de acusación, no encontró causa para abrir juicio.

La respuesta ante esta decisión no solamente provino de los diarios capitalinos y de la sociedad Bogotana. Mientras estos se encargaban de ventilar el escándalo por la declaración de inocencia de Carreño, con el agravante de las confesiones de su sirviente; el implicado no vaciló en publicar un libro con su versión cándida del asesinato y la decisión favorecedora del jurado. Pero, la prensa de la capital y las evidencias de los acusados, hicieron que el mismo Ministerio Público solicitara la anulación del Jurado anterior ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, quedando invalidado el veredicto y necesitado el Juez de convocar la apertura de un nuevo Jurado, en el cual, se analizaría con mayor rigurosidad las pruebas. Debido a que la premura por llevar el cadáver, ya putrefacto con 15 días de exposición, al cementerio, provocó que los médicos encargados del primer análisis

forense no ahondaran lo suficiente en el hecho de que la muerte había sido violenta; el nuevo jurado de acusación, quien tenía entre sus miembros al Dr. Luis Fonnegra, médico forense y catedrático de la Universidad Nacional, aceptó su exigencia de exhumar el cadáver para un nuevo sometimiento analítico. Este se llevó a cabo el 10 de febrero de 1890, 14 meses después de enterrado el cadáver y dio como resultado la comprobación de que la señora Mercedes Arjona había sido asesinada por estrangulación y sofocamiento. Ya con esta certeza, el Jurado decidió la apertura de un Juicio por homicidio.

El acusado Carreño, encarcelado nuevamente, arremete usando las publicaciones contra la prensa con el propósito de descalificar las virtudes de su asesinada esposa. La respuesta llegó desde varios flancos. En primer lugar, el fiscal acusador, tratando de exponer al Jurado su punto de vista e influenciar en su decisión, imprime la acusación leída ante el Jurado en Noviembre de 1890, y esta es vendida en las calles. En su exposición, el fiscal también resalta la importancia que tuvo a bien darle la prensa al suceso:

> *He aquí la cuestión que ocupaba todos los cerebros, el tema de todas las conversaciones, el asunto que interesó vivamente a la prensa de la capital. Preciso es observar ¡Cosa rara! Que ese Tribunal ante el cual se elucidan primero todas las cuestiones que, como la presente, lo conmueven profundamente, había dado ya su fallo. Para la generalidad de los habitantes de la capital, la señora Carreño, había sido víctima de un crimen atroz, y su marido había sido su asesino.*[67]

En segundo lugar, los vecinos, familiares y conocidos de la Señora Arjona de Carreño, publican una hoja tamaño periódico titulada “La exposición del Dr.

[67] S.N. Proceso Carreño-Sepúlveda. Acusación fiscal leída ante el Jurado de calificación en los días 8 y 10 de Noviembre de 1890. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1890. p. 6.

Carreño," en el cual aducen que las publicaciones del acusado sobre el caso de asesinato, difaman a la muerta quien no puede defenderse. Esta acusación, aunque habla de hechos ocurridos muchos años atrás, pretende crear una atmósfera favorable ante el Jurado, ya que su afrenta bien podría ganarle ciertas simpatías. Aunque reconocen la infidelidad de la señora Mercedes, tratan de excusar su proceder debido a la vida "infeliz" que llevaba al lado de su marido, quien finalmente la abandonó a su suerte.

En tercer lugar, los abogados de Carreño, exponen sus puntos de vista; nuevamente acusando la intromisión "calumniosa" de la prensa. En una primera publicación, el defensor no se explica cómo, en tiempos de la "absoluta libertad de prensa", el haber permitido vender la imagen de los acusados e inventar acciones, cuando los sindicados están sometidos a la Justicia, antes de un juicio condenatorio, sería mirado como un cargo falso y lleno de iniquidad. Por eso, la suspensión de la publicación de Carreño defendiéndose de los cargos en los periódicos, y la indiferencia del Gobierno ante los ataques llevados a cabo mayormente desde los periódicos Conservadores, en cabeza de *El Telegrama* y *El Ensayo*, intuyen una cierta deferencia política al respecto. Carreño, Liberal reconocido en Santander había sido contratante del Gobierno de Solón Wilches, y en un momento dado, llegó a alegar que el alcalde del Socorro, lugar donde capturaron al sindicado Francisco Velosa, presionó sobre éste para que acusara a su patrón. La referencia sobre la actuación de la prensa en el asunto, refleja la postura de la defensa de Carreño, en cuanto a su libertad.

> *Pero cuando esta libertad se ha restringido a nombre de la moral, ese proceder es algo más grave que me abstengo de calificar. ¡Es increíble tanta inconsistencia! [Sic] ¡Son partidarios de la restricción de la prensa, los que así abusan de ella! Tal vez se considere esto como una censura, pero es una censura inevitable, por cuanto se procede de una*

manera tan ligera e inconveniente, y cuando los escritores públicos se apoderan de un asunto que apenas está investigando la policía, exageran los hechos, los aumentan o los desfiguran, engañan a la sociedad y les arrancan conceptos anticipados, con grave perjuicio de la justicia humana, pues es al cabo la sociedad, quien por medio de sus jueces viene a administrar esa justicia, que peligra en presencia de tantas imposturas. El hombre cree, comúnmente, lo que se le refiere con certidumbre, y más si esa certidumbre viene de los caballeros que escriben para el público, a quienes se supone, bien instruidos de lo que pasa.[68]

Quienes exponían sus acusaciones y defensas judiciales a la opinión pública mantenían un nivel económico que les permitía pagar las impresiones y repartirlas gratuitamente. También estaban motivados por la llamada "defensa del honor", en virtud de ser, generalmente, personas conocidas o con labores que se verían altamente perjudicadas ante el señalamiento social. Mientras esto ocurría, la prensa periódica daba seguimiento a los procesos judiciales, especialmente a los crímenes, que conmocionaban a la sociedad capitalina. Pero, protagonistas como Torcuato Carreño, mantuvieron viva la injerencia de la balanza política en el desarrollo del pleito, con un gabinete de abogados que no cesaba de desestimar las pruebas del Fiscal y del Prefecto de Policía; y de publicitar la buena imagen del acusado con manifestaciones publicadas de personajes políticos de la vida nacional.

Los casos ventilados por medio de impresiones gratuitas eran mayores antes de la promulgación de las leyes de prensa llegadas con la nueva Constitución de 1886. Sin embargo, era la prensa política quien mantenía en primer plano la actividad de

[68] SALAZAR, Octavio. Jurado Carreño-Sepúlveda. Defensa del Señor Dr. Octavio Salazar. Bogotá: Imprenta de F. Torres Amaya, 1890. p.7.

las imprentas. Quizá, eran los avatares políticos[69], quienes mayores datos noticiosos producían. No obstante, la referencia a noticias de actualidad, cuando no correspondían a crímenes nacionales, eran insertadas en las últimas páginas, principalmente concernientes a los avances científicos mundiales, a rarezas biológicas, descripciones de geografía humana de otros países y, en su mayoría, insertos literarios publicados por fragmentos en varias entregas.

La "costumbre" de utilizar las publicaciones pagadas como forma de defensa o acusación judicial, tratando de concitar un impacto en la opinión pública, disminuyó con la sujeción a las nuevas leyes. Pero después recuperó su antigua actividad, como consecuencia de la adaptación y la sujeción a las normas de reserva judicial. Antes de ello, es posible encontrar abundantes libelos.

Por ejemplo, en 1885, las publicaciones privadas iban y venían de parte de la señora Victoria Brush, denigrando de la actuación de su esposo David Boshell, vicecónsul norteamericano y de su hijo, quienes supuestamente querían quedarse con su herencia paterna. Las réplicas cargadas de odio de Boshell, tratando de comprobar el estado de locura de su esposa, provocó la publicación de una numerosa correspondencia privada de la pareja en folletos, panfletos y libelos, ante los ojos de los lectores Bogotanos. Aunque uno y otro, alegaban que recurrían a las publicaciones "*cuando [...] no me quedaba otro recurso que ocurrir con mis quejas a la sociedad sensata, resolví dar a luz esa publicación, fue porque*

[69] Este trabajo pretende incluirse dentro de los procesos de construcción de la Nación Colombiana. Dentro de esta perspectiva, la utilización de términos referidos a la política tienen que ver con las actuaciones de una comunidad de ciudadanos, que al materializarse en realidad concreta mediante el ejercicio de prácticas incluidas dentro de un tiempo y un espacio, toman la forma de actuaciones concretas, dentro de las cuales caben las guerras civiles, las luchas por el poder y las maneras de imaginar la mejor manera de administrar y dirigir grupos de ciudadanos dentro de un Estado.

comprendí que no faltarían personas piadosas que enjugaran mis lágrimas, y ahora veo con placer que no me equivoqué"[70]

Estas publicaciones disminuyeron en el periodo comprendido entre 1886 y 1888; pero, con el ejercicio del Poder Ejecutivo a cargo de Carlos Holguín, entre los años de 1888 y 1892, se incrementaron notablemente. Precisamente, es en estos años que se publicita grandemente el "Crimen de la calle de la Moneda", desaherrojando las contravenciones a las imprentas para dar a luz los juicios ciudadanos sobre los procesos judiciales que corrían a la espera de la decisión de los jurados. Algunos abogados penalistas de gran renombre, que defendían casos muy publicitados en la prensa,[71] fueron protagonistas principales en dichos impresos. La sujeción a las severas leyes para constreñir los periódicos, que llevaron a Miguel Antonio Caro a suspender algunos de ellos, envolvió principalmente a aquellos que atacaban frontalmente al Gobierno o a sus instituciones, pero permitió la ventilación de los casos judiciales y su análisis a través de la prensa, y la impresión de toda clase de hojas volantes donde, defendidos y acusados, explicaban sus actuaciones.

La prensa capitalina debatía sobre política. Amurallados desde diferentes corrientes, las discusiones entre los puntos de vista de periodistas y escritores, no se llevaban a cabo, precisamente, en el plano de la cortesía. Las ofensas verbales

[70] Este párrafo se encuentra en una hoja volante publicada como respuesta de agradecimiento a otra hoja volante mandada a imprimir por unos Generales Caucanos, quienes apoyaron a la Sra. Brush en su caso. Se titula "*Señores Coroneles",* y está fechada en Bogotá, el 20 de Julio de 1885 y firmada por Victoria Brush. B.L.A.A. Misc. 892

[71] Dos nombres muy mencionados son los de Aníbal de Castro Oñoro y Octavio Salazar. Ambos asumieron la defensa del "crimen de la casa de la moneda", y lograron el veredicto de inocente para su contratante. Posteriormente, en 1992, de Castro Oñoro es acusado de un delito y encarcelado en el panóptico en un sonado caso contra el edecán presidencial de Holguín, y su hermano: Horacio y Arturo Sanz. Salazar continuó su defensa mientras que, el acusado, Horacio Sanz se escapaba del panóptico y la prensa acusaba a De Castro Oñoro de conspirar dentro de la cárcel para ayudarle a su fuga. Estar preso, no fue impedimento para publicar desde la cárcel sus defensas, lo mismo seguía haciendo desde afuera Salazar.

publicitadas por medios escritos llevaron, inclusive a incidentes graves entre sus antagonistas.

En 1899, el escritor del diario El Reporter, Pablo Emilio Álvarez, fue asesinado por Miguel Navia, quien redactaba para el periódico *Bogotá*. Nuevamente la defensa del acusado, desde la cárcel, no se hizo esperar. Con el ánimo de influenciar los jurados con su versión de los hechos, redacta una hoja suelta del tamaño de un periódico en donde reconociendo que "*siendo la opinión pública lo que más me preocupa"*[72], inicia otro proceso célebre en el cual, la ventilación de agravios y ofensas por discusiones políticas entre los dos escritores, termina con la muerte. La atención de los lectores bogotanos salta de una piedra a otra, resaltando que, al fin y al cabo, y después de las leyes de prensa, el propósito de constreñir los agravios mediante las publicaciones, fue más importante para el Gobierno, cuando se trataba de publicaciones que trataran de subvertir el orden. Además, el mecanismo del sistema penal inducía a los acusados y acusadores, a mandar imprimir sus versiones para favorecerse y a los periódicos a tratar de influir, también, en las decisiones de los Jurados. Así lo reconocía el abogado Octavio Salazar:

> *Recientemente se ha establecido entre nosotros un vicio funestísimo para la buena administración de justicia. Los corredores de noticias escandalosas, desfigurando los hechos y aumentando su gravedad, las llevan a la imprenta, y algunos periodistas las acogen y publican, cuando los sumarios son secretos. Al proceder así, la prensa usurpa las funciones del Poder Judicial, califica los hechos, y condena a los que considera culpables, sin considerar, tal vez, que con tan injustificable proceder se engaña a la sociedad, y que luego los*

[72] Defensa de Miguel Navia. Imprenta de la unidad nacional. Bogotá, 1899. B.L.A.A. Misc. 892

acusadores vienen al Jurado a presentar ese engaño como argumento decisivo contra los acusados[73]

Esta práctica fue llevada a cabo también por protagonistas de la vida nacional, como en el caso de Carlos Martínez Silva, quien habiendo ocupado cargos tan importantes cómo criticados, en el Gobierno de Núñez y Holguín, no dejó de utilizar estos medios impresos para la defensa de sus clientes.[74]

[73] SALAZAR, Octavio. Alegato de Octavio Salazar en la causa contra los señores Horacio y Arturo Sáenz. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1892. p. 5.

[74] Ver: MARTÍNEZ SILVA, Carlos. Defensa de Florentino Sánchez ante el Jurado llamado a fallar sobre el delito conocido con el nombre de Puente de Cualla por el Doctor Carlos Martínez Silva. Bogotá: Imprenta de la luz., 1897.

2. EL TÓSIGO REQUIERE SU CORDIAL

> "La Regeneración es un sistema político calculado y puesto en planta con sagacidad no común"
> *El Relator*, 12 de Mayo de 1891

2.1. LA TÁCTICA POLÍTICA SE ACOMODA

Dentro de las inmaculadas paredes blancas de la casa del General Wenceslao Ibáñez, el dirigente del partido conservador, Carlos Holguín, sin duda merecedor de una encomiable exultación por sus años de la paciente táctica política que le habían llevado a ese punto, acordó en nombre de su movimiento, el apoyo al entonces Presidente del Estado de Bolívar, Rafael Núñez para Presidente de la república. Su correligionario político era el Presidente, y recientemente vencedor de la malograda guerra a la cual se había lanzado el Conservatismo Radical en 1876, Julián Trujillo. Probablemente, este último, y ante la avalancha de críticas del Liberalismo Radical, que veía acercarse con pasos de jayán al odiado partido Conservador hacia el poder, hubiera preferido optar para sucesor en el solio de la unión a un candidato diferente al hombre del Cabrero, y de hecho, lo tenía en capilla como ministro plenipotenciario ante los Estados Unidos; pero, mascullando la rabia que le produjo el boicot conjurado por los Liberales Radicales al cargo propuesto, había pactado la unión entre Conservadores e independientes diciendo: *" No lo quieren de ministro en Washington, [...] pues lo tendrán de Presidente. Vamos a hacer ahora lo que habremos de hacer de aquí a dos años"*[75].

[75] HOLGUÍN Carlos. Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Bogotá: Óp. cit., p. 133.

El tormentoso camino recorrido hasta este día, había estado hilvanado con la paciencia catilinaria del dirigente Conservador. Holguín, flemático y acomodado, había logrado envolver hasta el porfiado don Mariano Ospina Rodríguez quien después de criticarlo abiertamente por sus acercamientos hacia los malquistos Liberales, y cuando las tropas Conservadoras fueron vencidas por el general Julián Trujillo, no tuvo más remedio que; desalentado, aconsejar a sus extremistas huestes: "Hagan lo que dice Holguín". La oportunidad nacida de la derrota, estuvo enmarcada por el pavor provocado si, en lugar de Trujillo, el encargado de firmar la rendición hubiese sido el General Santos Acosta, mucho más cercano al radicalismo del Presidente Aquileo Parra. Y Holguín, no podía ser más claro*: "El jefe Liberal que obtenga la rendición de Manizales será el futuro presidente. Si lo es Acosta, continuará el régimen radical, y nosotros vencidos para siempre; si nos entendemos con Trujillo, su presidencia no hará sino preparar la del doctor Núñez y con este triunfaremos.*"[76]

Desde 1876, Holguín venía preparando la táctica adherente a la nueva generación de liberales independientes. Fue José María Samper, quien estableció una primigenia distinción entre las corrientes políticas que empezaban a disonar en el pentagrama Conservador. Endilgados como "Nacionalistas", el grupo encabezado por Carlos Holguín, Lázaro María Pérez e Ignacio Gutiérrez Vergara, eran capitaneados desde la prensa capitalina por Miguel Antonio Caro y Carlos Martínez Silva. Todos ellos encontraron afinidad en unos principios innovadores de la política, basados en la necesidad de un cambio profundo en el rumbo hacia donde debía conducirse la Nación. Pero, esta necesidad ya había sido oteada por la corriente de otros políticos: Los liberales encabezados por Núñez. Por esta razón, fue sumamente importante la cena íntima celebrada en la casa de Holguín

[76] OTERO MUÑOZ, Gustavo, La vida azarosa de Rafael Núñez, Biblioteca de Historia Nacional, Vol. LXXXIII, Bogotá: Editorial ABC, 1951. p.76, citado por: ESPAÑA, Gonzalo. Carlos Holguín y el debate de la táctica. Bucaramanga: ediciones UIS, 1995. p. 249.

con la presencia de Martínez Silva, Caro y el recientemente advenido de Europa. Este primer encuentro marcaría el inicio de una serie de conversaciones en las que primaba el encuentro de ideas, cada vez más armónicas, entre las dos corrientes políticas.

La conjura resultó efectiva. Pero la unión entre los Conservadores había tenido matices cargados de asperezas limadas y de desavenencias aún no superadas. Una de ellas tuvo como protagonista al escritor José María Madiedo, quien, desde su periódico *La Ilustración*, encendió el debate sobre las ideas Conservadoras.

Desde 1870 este diario empezó siendo un tozudo defensor de ideas morales, incluso con opiniones acerca de la manera en que debían comportarse las señoritas en las iglesias, la moda, y la actitud que debían tomar los verdaderos Cristianos. Pero, sorpresivamente, al godo Doctor Madiedo, le fueron asaltando ideas liberales y llegó a proponer la separación del clero y el Gobierno. Quizá, tras varios años de una excluyente administración radical, le llevaron a pensar que "*ni la influencia, ni el poder público se adquieren rezando*[77]*"* proponiendo la integración de los conservadores al Estado para trabajar por el progreso de la Nación, y despreciando la malograda práctica de mezclar la Religión con los asuntos políticos.

Obviamente, los recalcitrantes defensores a ultranza del principio religioso por encima de cualquier política, y que redactaban en el citado periódico, empezaron a renunciar masivamente. José Manuel Groot y José Joaquín Borda saltaron del buque liberalizante de *La Ilustración*; mientras que el defensor casi de sotana y tiara, Miguel Antonio Caro, empezó a redactar la retahíla canonizante de su partido desde el, fundado contra las herejías de Madiedo, periódico *El*

[77] *La Ilustración*, Bogotá, 1 de enero de 1870. Citado por: ESPAÑA, Gonzalo. Óp. cit., p.163.

Tradicionista. Su perorata no tenía discusión en el camino de "limpiar" a los Conservadores impuros. Inclusive hasta el moderado Carlos Martínez Silva terminó a poyando a Caro, quizá sin imaginarse que en su impulso contra el pecado de discutirle al severo pensador, habría de costarle, algunos años después, numerosos castigos.

Los liberales en el poder asistían encantados a la división Conservadora y despreocupados por la cercana intromisión de sus contrarios en la lucha por el poder fueron socavando sus propias disidencias. El mismo radicalismo que defendía desde la teoría, las prácticas democráticas había hecho germinar en su interior, una monstruosa maquinaria de engranajes clientelistas en los intestinos de los Estados. El Fraude electoral era orden del día en la defensa del poder, para que no les quitaran "con papelitos" lo que habían ganado con las armas, y en su atropellada democracia de palabra y no de hechos, llevaron a que el periódico Conservador *El Bien Público*, desgastado por la polémica al interior de su partido, defendiendo la participación en la elecciones de 1872 y después de escaldar su carne en las aguas del fraude, y ante la imposibilidad de ejercer su derecho al voto por las amenazas Liberales, terminó cerrando la publicación, no sin antes expresar en su último número: "*Ese partido debe caer, no tanto a esfuerzo de sus adversarios, cuanto por efecto de su propia inmoralidad, DEBE MORIR DE LEPRA MAS BIEN QUE A FILO DE ESPADA."*[78]

Por su parte, Carlos Holguín, tuvo a bien, escribir desde El Tradicionista, alejándose del debate religioso, influyendo sobre Caro y tratando de afectar este desvío de las doctrinas:

[78] *El Bien Público*, Bogotá, 9 de julio de 1872. Citado por ESPAÑA, Gonzalo. Op. cit., p. 178.

> *Nosotros no tenemos necesidad de encerrarnos dentro de los estrechos límites de un partido exclusivamente doctrinario. Esto sería bueno si estuviéramos tratando de fundarlo; pero el viejo, el veterano, el aguerrido partido Conservador, lo único que necesita es no dormir el sueño de la muerte, saber cuál es su puesto y su bandera en el combate.*[79]

Por eso, la táctica triunfante de Holguín ya había develado cual era el puesto del partido conservador el 6 de abril de 1877 al firmar la rendición de la guerra: Tomar el poder sistemáticamente desplazando del dominio doctrinario al conservatismo antioqueño por el bogotano, y ejercer las alianzas necesarias para participar en la administración de Julián Trujillo, quien tomó posesión en 1878, el mismo año en que habría de morir en su hacienda de Coconuco el General Tomás Cipriano de Mosquera; imposibilitado ya por siempre para guerrear por su permeado partido liberal.

Rafael Núñez inicia su primer periodo presidencial el 1 de abril de 1880, alejándose lentamente de las antiguas políticas Radicales. Abandona el libre cambio y establece una política aduanera proteccionista de la industria y la agricultura. La administración siguiente, de Francisco Javier Zaldúa, tuvo como primer designado al mismo Núñez, quien asume nuevamente la presidencia en 1884 y declara el 18 de Noviembre turbado el orden público en algunos de los Estados de la Nación. El régimen militar es autorizado a cargo de los generales conservadores Leonardo Canal y Manuel Casablanca. El triunfo sobre la última rebelión Radical es retratado por Gonzalo España como la derrota que abrió las puertas triunfantes de la Regeneración. Según este, bajo la experiencia de la guerra y la reacción radical en contra de la iglesia, se llegó a concretar por Núñez

[79] *El Bien Público*, Bogotá, 6 de octubre de 1871, ABN, citado en Ibíd., p 171.

y los independientes, una posición integradora del Gobierno hacia el clero, como factor decisivo para su consolidación política: "*La conducta sostenida por el radicalismo en este punto fue variada por la facción independiente de los liberales, que en su pugna con la radical empezó a considerar al clero reaccionario como un elemento estabilizador y un factor de Gobierno*"[80].

Ya desde 1874, y como manera de tomarle la medida a Núñez, en cuanto a su claridad con la Iglesia, después de haber sido apoyado por los Conservadores, Miguel Antonio Caro lo fustigó desde las páginas de *El Tradicionista* llamándolo "decididamente anticatólico". El Regenerador le respondió:

> *No soy decididamente anticatólico, como se afirma de paso en uno de los artículos del último tradicionista. Con la salvedad de "si bien sea posible que no estemos acorde con algunos puntos secundarios o de fuero externo." [...] En todo caso, aseguro a Usted que nadie me gana en tolerancia de las creencias ajenas, ni tampoco en veneración de todo cuanto se relaciona con el sentimiento religioso. No se puede con mediano criterio vivir en Inglaterra el tiempo que yo he vivido sin adquirir la convicción -y muy profunda- de que ese sentimiento es uno de los más eficaces agentes de moralidad, libertad, orden, progreso y civilización* [81]

Ante esto, los Radicales se rasgaron las vestiduras, acusándolo de adular las sacristías en busca de beneficios electorales, además de acusarlo por quedar *"moralmente excluido de aspirar a la jefatura del partido liberal*"[82] Dice Gonzalo

[80] ESPAÑA, Gonzalo. Op. cit., p. 39.
[81] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro, Op. cit., p. 757.
[82] *El diario de Cundinamarca*, Bogotá, 29 de marzo de 1875. Citado por ESPAÑA, Gonzalo. Op. cit., p. 215.

España, que la lectura de *El Tradicionista* en Londres lo hicieron meditar y que Núñez lo reveló al decir:

> *Todas las grandes transformaciones tienen precursores. De la que se ha realizado en Colombia en los últimos años lo ha sido el señor don Miguel Antonio Caro por medio del periódico El Tradicionista, cuyo correcto estilo y nítidos lenguajes todos o casi todos admiraron, pero cuyas ideas fundamentales parecieron a muchos inaceptables por atrasadas. El que escribe estas líneas fue de los pocos que prestaron seria atención a esas líneas como asunto digno de examen, en circunstancias de hallarse ya convencido, encontrándose en Europa, de que aquí se había errado completamente el camino, tanto en política como en letras.*[83]

Con tamañas adulaciones, y después de conseguir una aplastante victoria junto con la conjura de un conservatismo armado por un liberal, el 17 de junio de 1885, en la batalla de la Humareda, donde los revolucionarios pierden siete de sus miembros a manos de los legitimistas, y de impedir a toda costa que el radicalismo se asiera con el poder en el Estado de Santander, Rafael Núñez pronuncia en las manifestaciones que celebraban el triunfo de Agosto de ese mismo año su famosa frase: “Señores: la constitución de 1863 ya no existe”. Queda el camino expedito para que rápidamente convocados el 20 de Septiembre bajo el decreto 594 del 10 de Septiembre de 1885, el Consejo Nacional de delegatarios se instale en Noviembre y antes de finalizar el año, la convención eligiera a Núñez nuevamente Presidente, a Eliseo Payán Vicepresidente, en contraprestación por sus servicios victoriosos en la guerra, y a José María Campo Serrano Designado Presidencial

[83] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro, Op cit., p. 753.

para el periodo 1886 - 1892. Consumada la victoria militar y política, la Regeneración estaba en marcha.

Poco importaron las críticas desde muchos sectores liberales que veían en las alianzas independentistas, una felonía de Núñez. Felipe Pérez opinaba de ello que: *"si hubiera sido un partido digno de su jefe, éste no se habría visto obligados a buscar en el campo conservador la cooperación política y militar que le era urgente. [...] el independentismo no es una agrupación providencial sino fatídica"*[84]

La derrota del radicalismo dejó un gran vacío de la facción "guerrerista" que resultó muerta en los campos de batalla. Pero, con los gatillos recién aflojados, el propósito de agrupación y descontento de los derrotados empezó a ser asentado nuevamente desde los periódicos. *"Comenzaron los ausentes y los escondidos y los tolerados por inofensivos, la guerra femenina de chismes y calumnias y difamaciones, que no ha cesado ni tiene porque cesar, puesto que no cuesta nada ni se arriesga nada en hacerla.*" [85]

Exacerbados los propósitos Regeneradores por un nuevo orden político, el Consejo Nacional Delegatario presidido por Juan de Dios Ulloa, delegatario por el Cauca, y Antonio B. Cuervo por Boyacá, con Carlos Martínez Silva y Julio A. Corredor como secretarios. Los delegados fueron: José María Rubio Frade, Jesús Casas Rojas, Francisco Mendoza, José Domingo Ospina, Rafael reyes, Miguel Antonio Caro, Carlos Calderón, José María Samper, Felipe Fermín Paúl, José María Campo Serrano, Simón de Herrera, José Laborde Ariza, Miguel A. Vives, Juan Campo Serrano, Roberto Sarmiento, Acisclo Molano, Juan de Dios Ulloa, Guillermo Quintero Calderón, Antonio Carreño. En la instalación de este Consejo

[84] *El Relator*. Septiembre 3 de 1889. Citado por PEREZ, Felipe y otros, Periodistas Liberales del siglo XIX, Biblioteca aldeana de Colombia. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 1936. p. 51.
[85] HOLGUÍN Carlos. Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Óp. Cit, p. 179.

Nacional, el presidente expuso su propósito con la Prensa: "*La imprenta debe, por lo mismo, ser antorcha y no tea, cordial y no tósigo, debe ser mensajera de verdad, y no de error y calumnia; porque la herida que se haga a la honra y al sosiego es con más frecuencia la más grande de todas."*[86] Y, Miguel Antonio Caro, encargado de redactar la respuesta al Presidente, dócilmente le responde afirmativamente recordándole que no se podían repetir los errores de los Constituyentes de 1863, quienes *"reconocieron todas las libertades sin razonables limitaciones, exaltándolas a tal punto, que solo dejaron asegurada la de hacer mal, abandonando la protección de la justicia, única defensa del individuo y de la sociedad"*.[87]

2.2. ANTECEDENTES

La situación vivida durante el periodo en el que imperó el Gobierno del Liberalismo Radical que, visto de manera global, comprendido entre 1863 y 1885 propugnaba por una libertad absoluta de prensa consignada en los derechos del ciudadano y en *"la libertad absoluta de imprenta y de circulación de los impresos, así nacionales como extranjeros [y la] libertad de expresar sus pensamientos de palabra o por escrito, sin limitación alguna."*[88] Pero, no obstante la multiplicidad de periódicos políticos liberales que se acrecentaban con los debates electorales y que tenían una corta vida, también algunos periódicos conservadores fueron objeto de censura. El tradicionalista fue cerrado en 1876 como consecuencia de la crisis económica causada por un Empréstito forzado impuesto por la administración radical. La censura aplicada en el periodo comprendido entre 1863

[86] CACUA PRADA, Antonio. La libertad de Prensa en Colombia. Bogotá: Ediciones Universidad Javeriana, 1963. p, 78.
[87] Ibíd.
[88] Constitución de los Estados Unidos de Colombia, sancionada por la Convención Nacional, Bogotá 1867. Citado por: POSADA CARBÓ, Eduardo. "Libertad, Libertinaje, Tiranía". La prensa bajo el Olimpo Radical en Colombia, 1863 – 1885. En: ALONSO, Paula (Compiladora) Óp. cit., p. 197.

y 1885 parece haber sido impuesta excepcionalmente a nivel nacional, pero se ejecutó por algunas administraciones mediante la violación de la norma constitucional o bajo el amparo del llamado “derecho de gentes”.

Así ocurría en el ámbito local, en donde las rencillas partidistas entre liberales y conservadores, o entre los miembros liberales radicales con los independientes, llevaban a los Presidentes de algunos Estados de la Unión a tomar medidas coercitivas. Sin embargo, no existen estudios históricos que analicen la censura en el periodo. Algunos miembros del conservatismo y de la iglesia católica se quejaban de la excesiva libertad de imprenta, pero la usaban para criticar al Gobierno radical y repartir excomuniones. Libertad que degeneraba en irresponsabilidad hacia las instituciones del Estado, utilizando lenguajes levantados y ofensivos y que, en ocasiones también tenían un claro ataque personal. Tanto así que en Bogotá se utilizaban las ofensas impresas pegadas en las esquinas o en las puertas de las casas para agraviarse o contraatacar insultos. Una publicación oprobiosa se podía contestar con otra, utilizando un término acuñado en la época llamado *“echar hoja”*.[89]

El uso de la imprenta en el periodo radical no dejó de estar susceptible de represiones. De hecho, durante el levantamiento Civil de 1875, y ante el surgimiento afianzado del Nuñismo en la Costa Atlántica; el Gobierno del Presidente Santiago Pérez, quien años después también sería censurado, no vaciló en silenciar *La Unión Colombiana* y *El Correo de Colombia*, y arrestar a sus redactores José María Samper y Lino Ruiz. En 1875, el primero de ellos publica un libro que expone la restricción a su pensamiento, de la que fue objeto en la supuesta era de mayores libertades a la libertad de prensa. El Título de su libro es

[89] POSADA Carbó, Eduardo. “Libertad, Libertinaje, Tiranía”, Op cit., p.198 – 199.

bien explícito,[90] y contraataca al Gobierno liberal radical por su encarcelamiento del que fue objeto por dos causas, la primera fue un supuesto "desquite" por la detención del General Sergio Camargo[91] en Panamá y por una censura promovida desde la prensa contra el Jefe de Estado:

> *Se había resuelto en Consejo de Gobierno y Camarilla, no tolerar imprenta libre ni oposición alguna [...] tal fue la versión de Camargo quien le echó la culpa al presidente Pérez, pero este se ha disculpado diciendo que "su hermano Felipe, Acosta y Camargo, exigieron mi encarcelamiento y el del Doctor Ruiz y que tuvo que complacerles para evitar un rompimiento con ellos". Vaya un Presidente bien digno! Los culpables se acusan recíprocamente y todos son iguales.*[92]

Sin embargo, esta fue la razón expresada por el diario oficialista *El Diario de Cundinamarca* sobre el motivo de encarcelamiento de José María Samper: *"no había sido apresado por el hecho de ser periodista, sino porque era, en Bogotá, uno de los principales instigadores, promovedores y auxiliares de la rebelión de los*

[90] SAMPER, José María. Al pueblo Colombiano. Acusación que el ciudadano José María Samper formula ante el pueblo Colombiano, y ante la historia contra Santiago Pérez, presidente dictatorial de la unión Colombiana, y contra sus cómplices, así de gobierno como de camarilla, por los crímenes de traición, conspiración y prevaricación. Bogotá: imprenta de Nicolás Gómez, 1875

[91] El General Sergio Camargo (Iza, Boyacá, 1832 – Miraflores, Boyacá 1907) quien había tenido una participación defendiendo el Gobierno Radical de Santiago Pérez en 1875 contra los levantamientos por parte de los jefes nuñistas en la Costa Atlántica, especialmente el General Ramón Santodomingo Vila, quien se desempeñaba como encargado de la cartera de Guerra y Marina, y el General Joaquín Riascos, favorables a la candidatura de Núñez para la presidencia, en oposición a la del candidato del radicalismo, Aquileo Parra. Camargo fue enviado a restablecer el orden público, pero al llegar a Panamá permaneció encarcelado por el propio presidente del Estado, Señor Miró. Después de una negociación fue liberado por una comisión de paz encabezada por Eustorgio Salgar y Nicolás Esguerra. Regresó a Bogotá y de allí, nuevamente fue encargado de controlar la situación en la costa Atlántica, devolviéndole su libertad al Estado de Panamá, con el arresto de su nuevo presidente, Justo Arosemena, en forma de revancha.

[92] SAMPER, José María. Al pueblo Colombiano. Óp. Cit.p, 1.

Estados del Atlántico".[93] Esta razón no es otra cosa que una acusación de subversión contra el poder Estatal incitada desde la prensa, pero que a la luz de la Constitución de 1863 vigente, era ilegal. La estratagema política utilizada para acabar de un plumazo con la ilimitada libertad de prensa, provenía del artículo 91 incorporado a la Constitución regente en el cual, el llamado "Derecho de Gentes" para casos especiales de la legislación nacional, permitió la suspensión de los periódicos bajo la argucia de la seguridad de los Estados.

No obstante, desde el mismo resguardo de los periódicos, habría de exponer el mismo Santiago Pérez, cuando la tortilla política dio la vuelta completa, sus quejas y querellas por la imposición, ahora reglamentada legalmente, de asentar estas penas verticales desde el Ejecutivo.

El General Sergio Camargo había tenido una activa ingerencia política en la segunda mitad del Siglo XIX. Aunque en un comienzo se declaró a favor del independentismo liberal, era más notoria su simpatía hacia el radicalismo. Inició una gran actividad política después de la guerra de 1876 contra el levantamiento de los nuñistas en los Estados de la Costa Atlántica en 1875, peleando a favor del Gobierno Radical de Santiago Pérez, y después fue también diplomático durante la Administración de Julián Trujillo y encargado de hacer una negociación con el vaticano, en cabeza del papa León XIII. En ella, se restablecerían las relaciones entre los Estados Unidos de Colombia y la Santa sede, en donde el Gobierno se comprometía a pagar y recompensar a las comunidades religiosas por la ley 8ª de 1877, en la cual fueron suprimidos los pagos de la Renta Nacional Eclesiástica.

Este primer acercamiento del liberalismo independiente hacia el Vaticano, aún regentaba la secularización del culto. Fue Senador de la República en 1881, y a su

[93] Ibíd., p. 2.

regreso de su misión en el vaticano recibió la crítica de Núñez, según el Historiador Boyacense Gabriel Camargo Pérez, para "*impedir el surgimiento de cualquier otro personaje de la política, cuya intervención en los negocios públicos pudiese estorbar o por lo menos interferir en la carrera trazada para su propio plan de reforma."*[94] Consecuentemente, Núñez censuró el proyecto de concordato llevado por Camargo a nombre del Gobierno, y en contestación, este publicó una hoja suelta, que pegó en las esquinas bogotanas, en donde además de explicar que, en su labor no se apartó de las instrucciones del mismo Núñez, calificó que el arreglo con la iglesia revestía un carácter doméstico, *"ya que se había querido buscar el consentimiento de la Santa Sede para legitimar su enlace privado con Doña Soledad Román, hallándose viva su legítima esposa."*[95] Naturalmente la respuesta ante la publicación, y ante la ausencia de leyes, fue retribuida de la forma acostumbrada: Con comentarios hechos en otra publicación. El *Repertorio Colombiano*[96], expresó que:

> *En su defensa, el señor General Camargo, ha traspasado los límites que para ello tenía trazados por el elevado carácter diplomático de que estuvo investido y por el no menos respetable que ahora goza como Senador de la República. Los juicios que el emite sobre las razones de interés personal que el señor Núñez tiene para oponerse a la aprobación del proyecto de concordato, no suenan bien. [...] Al leer este documento, que acaso el señor General Camargo no estaba*

[94] CAMARGO PÉREZ, Gabriel. Sergio Camargo. El bayardo Colombiano. Segunda edición. Bogotá: Editorial. A.B.C., 1987. p. 240.
[95] Ibíd.
[96] Este periódico, de expresión Conservadora y editado por Carlos Martínez Silva, contaba con un número mensual que empezó a imprimirse en 1878 hasta 1887, en su primer periodo, teniendo una interrupción desde octubre de 1884, a causa de la guerra civil, hasta volver en septiembre de 1886. Posteriormente se editó desde 1896 hasta1899.

autorizado para publicar, hemos creído leer uno cualquiera de los editoriales que publica al año el "Diario de Cundinamarca"[97]

Durante la administración Zaldúa, le fue ofrecida por este la Dirección de la Escuela Militar en 1882 y la Comandancia General de las tropas Nacionales en los Estados del Cauca, Antioquia y Tolima. Cuando muere Zaldúa y el Ejecutivo es presidido por Otálora como primer designado, se llegó a pensar en la reconciliación del liberalismo radical y el independiente. Para Núñez era muy importante iniciar un acercamiento con los conservadores y con el liberalismo, pero exclusivamente con su facción Independiente, de esta forma debilitaba el radicalismo. Núñez fue elegido nuevamente para el periodo Constitucional de 1884 a 1886, mientras el General Camargo se desempeñaba como representante diplomático de Colombia en el Ecuador. Núñez no revelaba por el militar Boyacense precisamente un torrente de simpatía. De hecho, *"De los hombres del radicalismo que le habían cerrado el camino de la Presidencia en 1875, uno de los dos a quienes más odiaba era a Camargo (el otro era Santiago Pérez)"*[98] En varias ocasiones hubo de lesionar la carrera del militar. Por consiguiente, en 1884, con motivo de la sublevación iniciada en Santander, habría de comentar Núñez: *"dispusimos su retiro, por razones de benevolencia hacia algunas personas en quienes encontramos, a pesar de no ser de nuestra comunión, sanos deseos de contribuir a la pacificación de los ánimos en Santander por medios conciliatorios"*[99]

[97] CAMARGO PÉREZ, Gabriel. Óp. cit., p. 241 -242. El Diario de Cundinamarca fue un periódico de la expresión política Radical durante el periodo anterior a la Regeneración. En el se expresaron José Benito Gaitán, Nicolás Esguerra y Florentino Vesga. También escribió Santiago Pérez, especialmente cuando el nuñizmo iba en ascenso, constituyó la trinchera política de oposición radical. Funcionó desde 1869 hasta 1884. En 1891 es nuevamente publicado hasta el año de 1893.

[98] RODRIGUEZ PIÑERES, Eduardo. El Olimpo Radical. Bogotá: ,Editorial Voluntad, 1950. p.47.

[99] *La Luz*, Bogotá, diciembre 10 de 1884. Citado por: CAMARGO PÉREZ, Gabriel. Op cit., p. 266.

Camargo, retirado a su hacienda de Miraflores en Boyacá, tomó parte en la guerra cuando está se trasladó a la "campaña de oriente". Núñez por su parte, aprovechó la ocasión para romper cualquier lazo de conciliación con el radicalismo y se la jugó toda para aplastar la rebelión. Desprovisto de municiones, el ejército rebelde de Camargo, mantuvo como táctica principal, huir de las tropas gobiernistas que le perseguían, dando un recorrido que marchó desde Boyacá hasta el Tolima, circundando los llanos orientales. Cuando completó el recorrido, Camargo se encontró con la aplastante victoria de Casablanca en el Tolima y que el único foco de resistencia no doblegada se encontraba en la Costa Atlántica. Subió por el bajo Magdalena hasta llegar a Bucaramanga. Ante la persecución del Gobierno, en cabeza del secretario de Gobierno, Doctor Calderón; quien ya había llegado hasta Tunja, Camargo decide lo que mejor supo hacer en la guerra, seguir huyendo por el Magdalena hasta llegar a Curazao y de allí, pasando por Venezuela, regresar a ayudar al único foco no dominado: La costa Atlántica. Antes de que los revolucionarios capitularan, Camargo renunció a la comandancia en Aguachica y se retiró de la Guerra, siendo posteriormente llamado "desertor" por el mismo Foción Soto. La historia del General Camargo, sirve para ilustrar una cadena de razones que motivaron al Presidente Núñez a castigarlo como uno de los primeros desterrados después de sancionada la Constitución de 1886.

La represión a la que fue sometido José María Samper en los tiempos de la "absoluta libertad de prensa", significó un motivo más de discordia entre el Liberalismo. Desde luego, tocar la Prensa, era como manosear el símbolo más sagrado para una porción de la intelectualidad liberal. Caro llegó a burlarse de este sacrosanto instrumento político, recordando una proposición de un liberal radical:

> *El señor Arosemena pedía, hace algunos años, la reforma de la Constitución de 63 (Qué el firmó como presidente de la Convención*

de Rionegro), con el fin, entre otros, de que la policía pudiera reprimir el abuso de proferir en las calles en voz alta, palabras indecentes; pero ¡Cuidado con tocar la santa libertad absoluta de imprenta! Tales son los efectos de supersticiones políticas arraigadas.[100]

Por esto no era de extrañar que la mínima censura del anterior Gobierno radical, hubiera provocado las críticas del pensador liberal, Juan de Dios Restrepo: "*Estaba reservado a éste (a Santiago Pérez) y al señor Murillo, que se lo deben todo a la prensa y que se las echan de altos voceros de las doctrinas liberales... abrir operaciones sobre la prensa, atacando la más sagrada, la más querida de nuestras libertades públicas*."[101]

Pero para Pérez y demás, la cuestión sufrió un cambio político liado con el tesón estratega de Núñez, Caro y Holguín, y experimentaron en su propia carne y en su misma sangre el freno decidido de la Regeneración que, con una visión agitada por buscar un futuro diferente para la Nación, estaba convencida de la peligrosidad de las imprentas como tribunas y armas políticas radicales. Aunque Caro, quien muchas veces fue criticado por expresar pensamientos que después contradeciría, reconocía que "*La imprenta es el sistema nervioso del organismo social*",[102] , sin embargo también contenía el riesgo de incidir en la opinión pública incitando a la subversión.

La consideración al ejercicio de la prensa sin restricciones era para el liberalismo radical bastión de luchas y objeto de culto. El periodista Enrique Troncoso llegó definirla así:

---

[100] CARO, Miguel Antonio 1843-1909. Libertad de Imprenta. Artículos publicados en LA NACION en 1888. Óp. cit., p. 65

[101] ESPAÑA, Gonzalo. Óp. cit., p. 228.

[102] CARO, Miguel Antonio. Libertad de Imprenta. Artículos publicados en LA NACION en 1888. Óp. cit., p. 20.

> *La Prensa es yunque de donde chispean las ideas para ir á alumbrar la mente de los pueblos y de los mandatarios, y á cuyo relampagueo aparecen las más fecundas transformaciones y sucumben los más nefastos errores. Es una sacerdotisa que derrama verdad al través de las edades y de los siglos, […] Es caldero de donde parte vapor para mover la máquina social; foco de irradiación de donde surgen [sic] las libertades y los derechos de los ciudadanos, termómetro único para recoger las pulsaciones nacionales, y poder atender a ellas. […] suprimirla es hacer enmudecer á los pueblos, sumirlos en el caos del silencio.*[103]

Pero también lo era para el partido Conservador. Luís Carlos Rico, redactor de *El Telegrama*, y liberal al servicio de la Regeneración, gran defensor desde este diario de las restricciones a la libertad absoluta de prensa, la definía así:

> *La imprenta es como el sol, luz indispensable, calor vivificante y fuego devorador. Luz indispensable cuando como órgano del pensamiento ilustra los espíritus, calor vivificante cuando fecunda los nobles sentimientos; y fuego devorador cuando concentra su fuerza ígnea sobre la imaginación popular para producir en ella conflagraciones*.[104]

Haciendo un análisis de la prensa, José María Samper expresaba hacia 1881, que en realidad hubiera sido más sano para la prensa política haber mantenido el carácter propagandístico de sus respectivos partidos políticos: "*se ha vuelto*

[103] *La Prensa*. Bogotá, 1 de Enero de 1888. Nótese que sus objetivos eran estrictamente políticos, dejando de lado su propósito informativo noticioso, o comercial, que en otros países ya había llegado a tener un alto desarrollo.

[104] RICO, Luís Carlos. Escritos políticos publicados en "El Telegrama" y "La República" de Bogotá. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1893. p. 38.

prensa de círculos, de intereses locales, de fines candidatoriales, [sic] cuando no de mera exhibición de la vanidad."[105] Este hecho había posibilitado la pérdida de su carácter moralista y su apostolado por mantener el orden y el buen gobierno. Sin embargo, a decir de Samper, el inicio de esta moralización debe ir intrínseco a su cuerpo, pero a fines del Siglo XIX, lamentablemente, se encontraba llena de escritores nuevos que pretendían a través de sus escritos hacerse a un reconocimiento público para aspirar a cargos y que:

> *Nadie puede impedir que algunos impresores, nada escrupulosos en materia de moralidad, franqueen sus prensas a publicaciones anónimas, de ordinario destinadas a alimentar la maledicencia y el insulto, cuando no la calumnia, con manifiesto abuso, así de periodistas, como de impresores, de la absoluta libertad é irresponsabilidad legal que nuestras instituciones han otorgado a la prensa.*[106]

Sus ideas a este respecto diferían ya en 1881, de las expresadas una década atrás. Sus esperanzas en un ejercicio concomitante con la responsabilidad pública, mantenían en 1869 la templanza por aquella búsqueda altruista. Aunque reconocía la importancia de separar los escritos que tendieran a fomentar las guerras civiles, convirtiendo a la prensa periódica, por el contrario, en pacificadora: *"para [...] que la opinión pública se forme la inexorable convicción de que comete crimen de lesa patria y de lesa civilización, todo publicista que se vale de la prensa para fomentar el trastorno de la paz pública y azuzar a cualquier bando*".[107] No dejaba de referirse a la necesidad de una fiscalización eficiente de la administración pública, especialmente al referirse sobre el triunfo futuro de quienes

[105] SAMPER, José M. Memorias académicas sobre la misión de la prensa y la historia del derecho constitucional en Colombia. Bogotá: Imprenta de vapor de Zalamea Hermanos., 1881.p. 28.
[106] Ibíd., p. 29.
[107] SAMPER, José María. Cartas y discursos de un Republicano. Bruselas: Tipografía de Vc. Parrent et fills, 1869. p. 45.

adoptaran los dogmas republicanos, utilizando para ello su regulación como un precepto político. En sus principios expresados, recalcaba en el número 5º, lo siguiente:

> *Mantener en el periodismo, en hojas volantes, y en numerosos y frecuentes folletos un sistema constante de investigaciones prácticas y enteramente demostrativas, que hagan ver y palpar al pueblo los vicios de las instituciones existentes, los abusos y faltas de los gobernantes, la corrupción de los viejos partidos dinásticos. [...] Es inútil hablar a las masas de historia o filosofía: estas predicaciones son incomprensibles y abstrusas para las muchedumbres y aún para las "clases medias" que no tienen grande ilustración; lo que importa es demostrarles hechos, analizarles las malas instituciones, hacerles palpar la miseria, el estancamiento, y el descrédito*[108]

El pensador liberal expresaba así las causas que habían generado dicho envilecimiento del ejercicio de la prensa política. En primer lugar, culpaba al sistema educativo de una falta de "disciplina severa y serenidad científica" que había permitido que los jóvenes crecieran con una tendencia política sectaria e imparcial que, al salir a la vida pública, se perdía en aras de aspiraciones laborales con el Estado, para lo cual requerían de la inscripción en políticas cerradas de individuos. En segundo lugar, la cada vez persistente carencia de linderos entre los partidos políticos. Si en pleno siglo XXI adolecen del respeto hacía sus tradiciones y no mantienen un norte definido, quizá la causa no debería ser buscada en las traiciones y amancebamientos presentes, sino en un adormecimiento ya señalado por el autor en la segunda mitad de los siglos XIX. Sin embargo, al igual que hoy:

[108] Ibíd., p. 99.

> *Todo eso es poco menos que imposible en los círculos ó pequeñas banderías en que se han dividido nuestros grandes partidos históricos de mejores tiempos; y el pedir á tales fracciones que sostengan una prensa noble y por medio de ella emprendan propaganda moral de ideas y de principios, [...] el régimen federal, exagerado y mal practicado como ha sido, ha creado ciertos hábitos de permuta de esfuerzos y votos entre las diputaciones de los Estados, y ciertas prácticas del más deplorable utilitarismo local, conforme á las cuales toda propaganda a favor de la justicia es innecesaria*.[109]

En tercer lugar, la decadencia de la prensa política, a decir de Samper, debía gran parte de su demérito a un sentimiento disgregado de las fronteras patrióticas y Nacionales, en amparo de los Estado Federales. *"Casi hemos dejado de ser Colombianos para reducirnos á la condición de Antioqueños o Caucanos, [...] nos mostramos más celosos de lo que llamamos "La soberanía de los Estados" que de la histórica soberanía Nacional*." [110] Igualmente, el desamparo de un sistema electoral Nacional que hubo de impedir el establecimiento de criterios políticos comunes a los intereses nacionales, le da bases para decir además que: *"En un pueblo así organizado, y además probado por frecuentes revoluciones que pervierten el sentido patriótico, ¿Podrá la prensa política ejercer algún apostolado moral?*[111]

No solamente Samper se quejaba de la irresponsabilidad de la Prensa. Núñez se dio cuenta de la orfandad, en cuanto a disposiciones jurídicas, de la Constitución de Rionegro de 1863. El Estado no contaba con herramientas para controlar el

[109] SAMPER, José M. Memorias académicas sobre la misión de la prensa y la historia del derecho constitucional en Colombia. Óp. Cit., p. 31.
[110] Ibíd. p, 32.
[111] Ibíd., p. 33.

ejercicio de la prensa y esta libertad rayaba en el "libertinaje", porque al no existir leyes que reglamentaran los artículos constitucionales, se llegaba al caso en que las disputas entre periódicos se solventaran al libre pulso de fuerza entre particulares.

La publicación de numerosos periódicos en los anteriores gobiernos liberales, se había convertido en un instrumento para la movilización política de sus partidarios, además de la expresión opositora contra las nuevas medidas "regeneradoras". El ejercicio de este periodismo, lo convertía en el blanco de la censura a partir del nuevo orden Estatal; visto desde la necesidad de prevenir "conspiraciones" contra el orden público. Los constituyentes de 1886 buscaron la inclusión de un alto grado de responsabilidad en el ejercicio de la opinión política que se había pasado por alto en la Constitución anterior y que había posibilitado un ejercicio desmedido de la crítica. En palabras de José María Samper: *"Se alegaba que una mala publicación podía contestarse con otra buena; que la opinión pública haría justicia a los abusos y que en todo caso valía más soportar algunos de estos, que poner en peligro las libertades."* [112] Coincidiendo el ejercicio de estas "libertades" con la grave falta de la falsedad, el perjurio y la calumnia.

No obstante, hubo quienes analizaron el periodo de la libertad absoluta de prensa, como una época enriquecedora para los lectores y escritores, desde el punto de vista del aprendizaje que iba elevando el nivel del discurso y de la polémica de cada uno de ellos:

> *Durante el tiempo de la libertad de la prensa en el país, los escritores políticos llegaron a moderar tanto sus escritos, que se veía ya como de*

[112] SAMPER, José María, Derecho público interno en Colombia. Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951, vol. 1. p. 292. Citado por: POSADA CARBO, Eduardo. Óp. cit., p. 198.

muy mal gusto, aquel estilo acre, punzante y agresivo [...] Los ardientes debates de la política, con raras y reprobadas excepciones, se escribían en lenguaje culto y temperante, ya se sostuvieran por escritores conservadores, o ya se mantuviera por polemistas liberales [113]

Otros pensadores sobre el tema, como Miguel Antonio Caro, quien siempre hubo de sostener que la excesiva libertad de prensa no tenía otro objetivo que el mismo debilitamiento del Poder Ejecutivo, al cual consideraba centro del orden requerido para que el país avanzara en el cambio de la regeneración. De hecho, al recordar el periodo definido como "La Confederación Granadina", la no sujeción a responsabilidad alguna de la prensa hubo de provocar en el presidente Tomás Cipriano de Mosquera su derrumbe desde la Prensa:

Cohibiendo para reprimir la prensa que a ojos vistas lo derrocaba, y aun para pedir cuentas del reto que le lanzara el presidente de un Estado, como que seriamente se sostenía, y no con malos argumentos legales, ante la corte suprema que no se cometía delito político mientras la agresión a la autoridad no fuese a mano armada; que una proclama de guerra era un acto lícito de la libertad de emitir el pensamiento, de palabra y por escrito, sin limitación alguna, derecho a todos garantizado por la Constitución Federal.[114]

2.3. LA REGENERACIÓN DE LA PRENSA

Desde la promulgación de las bases sobre las cuales se haría la nueva Constitución y que proclamaba el espíritu que habría de regir la carta bajo la

[113] ZAMORANO, Belisario. La regeneración y sus malos defensores. Cali: S.N, 1891. p. 6.
[114] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Óp. cit., p. 393.

orientación y acuerdo generales, ya se divulgaba en su título noveno y décimo la sujeción a la responsabilidad de la Prensa y las limitaciones a las libertades individuales.[115] Este principio de autoridad habría de regir para todo el proceso regenerador. Así lo articulaba Núñez cuando se expresaba acerca de la elección popular de Gobernadores como un error, que dejó al Poder Ejecutivo sin agentes de su confianza, y al rompimiento de la unidad administrativa: *"se dio la primera estocada al principio de autoridad, que es la salvaguardia afectiva del derecho."*[116]

La transformación política de Núñez logró convocar adeptos desde el Liberalismo agobiado por el estado de constante agitación política, de zozobra y de inseguridad al que permanentemente estaba expuesta la sociedad Colombiana a finales del Siglo XIX. Es por ello, que la propuesta de realzar el "orden" como la virtud más importante de la reforma política de la Regeneración, convocó el asentimiento de muchos colombianos. Para algunos historiadores, como Eduardo Posada Carbó, esta necesidad de convertir el "orden" en una condición básica para construir la sociedad, no era vista simplemente como un fin en sí misma. Era la base sobre la cual se podían asentar el progreso material de la Nación, alejándola del significado liberal de identificar la libertad con la independencia de toda restricción.[117] Esta implantación del orden sólo podría lograrse con un marco legal adecuado que alejara las tentativas revolucionarias; y para ello, la prensa sin restricciones, atizada por una esfera intelectual que mantenía permanentemente el riesgo de contribuir a la exaltación de la guerra civil, marchaba en contravía del

[115] "Bases de la Reforma [...] 9ª La Prensa será libre en tiempos de Paz, pero estará sujeta á responsabilidad cuando atente contra la honra de las personas, ó contra el orden social ó contra la tranquilidad pública. 10ªLas demás libertades individuales serán consignadas en la Constitución con razonables limitaciones." Exposición sobre reforma Constitucional que dirige al Consejo Nacional de Delegatarios el Presidente de la República, Contestación y acuerdo. Bogotá: imprenta de Silvestre y Compañía, 1885. p. 2.

[116] NÚÑEZ RAFAEL, La reforma política, Bogotá: Imprenta de la luz., 1885. p. 795–800. Citado por: CAMARGO PEREZ, Gabriel. Óp. cit., p. 309.

[117] POSADA CARBÓ, .Eduardo. El desafío de las ideas. Ensayos de historia intelectual y política en Colombia. Capítulo 3. Rafael Núñez y el orden nacional. Medellín: Banco de la República, Fondo editorial EAFIT, 2003. p. 97-117.

propósito de reconstrucción acuñado en el término inventado por Núñez de la "paz científica"; que era, más que un propósito, un deber del Gobierno.

> *En Colombia, los Gobiernos tienden más a la debilidad que a la fiereza. [...] No se llegará a la pacificación verdadera de este país [...] sin un gobierno muy vigoroso, que haga del todo imposible las subversiones del orden. [...] Hay que prevenir hasta la más simple escaramuza, de manera que el olor de sangre humana no vuelva a despertar los adormecidos malos instintos, como sucede en las jaulas de las fieras.*[118]

El principio autoritario de la Regeneración acusa destituciones desde el mismo seno reclamado de la lealtad. Un ejemplo, es el telegrama enviado por Eliseo Payán desde el Cauca, comunicándole al Presidente la destitución de un Magistrado del Tribunal superior de este Estado, llamado José Dolores Camacho, por no cumplir con el compromiso demandado por las políticas de Núñez. "*Los que no sigan el rumbo que señalan las nuevas ideas de redención moral y de progreso, se enterrarán para siempre y no quedará de ellos ni el recuerdo. El desprestigio abruma a los que se extravían. Tal es el poder de la Regeneración.*"[119] Y el Presidente Núñez contesta aplaudiendo toda represalia: *"Recomiéndoles represión de todo desborde encaminado a embarazar la costosa reconstrucción política y social en que se encuentra hoy empeñado el patriotismo Colombiano."*[120]

Por lo tanto, era imprescindible el nombramiento de colaboradores sin dilemas en la campaña de la Regeneración, y con el imperio necesario para ejecutar los bandos. Felipe Angulo, era un joven liberal independiente, seguidor irrestricto de

[118] NÚÑEZ, Rafael. Óp. cit., p. 196-197.
[119] *Diario Oficial.* Bogotá, Enero 21 de 1886. No. 6576
[120] Ibíd.

Rafael Núñez que en 1886, y con motivo de un permiso solicitado por el General José María Campo Serrano, quien se había encargado del despacho de la secretaría de Guerra para ausentarse temporalmente; es removido del cargo de Secretario de Hacienda de la República para encargarse de esta ausencia "accidental" de Campo Serrano. Para Núñez, esta designación llevada a cabo el 22 de Marzo de 1886, se constituiría en la pieza clave de la represión a la prensa y el desbarajuste de las consiguientes conjuras conspirativas de los radicales durante su primer periodo.

Juan Manuel Rudas, a la postre desterrado por el Gobierno, llegó a decir sobre Angulo, las razones por las cuales éste, seguía sin chistar las órdenes de Núñez. Al parecer, la pobreza que le había llevado a vivir como un prestamista en Bogotá, sufrió una inexplicable bienandanza cuando inició como colaborador de la regeneración desde altos cargos públicos.

> *Después de haber ocupado esos puestos, y sin saberse como, es rico. Esto da suficiente luz sobre el motivo que lo determinó a dejar sus ideas liberales avanzadas y a convertirse incondicionalmente en el primer héroe de las demasías y las razzias de la llamada regeneración. [...] Hombre sin escrúpulos y sediento de riquezas y que se encontraba aguijoneado por una ambición exagerada con relación a sus aptitudes y méritos. [...] hace con tranquilidad de conciencia, si se trata de su prosperidad personal, lo que ningún hombre generoso y justo hace sin remordimiento.*[121]

Afirma también Rudas posteriormente en 1889, que la caída del Ministro estrella de Núñez, cuando iniciaba el encargo del Ejecutivo Carlos Holguín, tuvo que ver

[121] RUDAS, Juan Manuel. Lo que fue y lo que es el partido conservador en Colombia. Barcelona: Imprenta de Juan Carral y Compañía., 1989. p. 77.

con esa ambición desmedida: *"Ya cayó, y creo que a esa caída contribuyó, en gran parte, el deseo que aún entre los mismos regeneradores se extendió de que un Ministerio de más fama de integridad lo remplazara."*[122]

Sobre su proclive afán de enriquecimiento personal, que más adelante le llevaría a estar involucrado en el escándalo por los contratos de los ferrocarriles de Antioquia y Panamá, llamado por la prensa como el "petit panamá"; llegó a referirse también el mismo Rafael Núñez: *"[Angulo] es en el fondo epicureísta. Gusta mucho de la vida elegante. En política se necesita obrar con gran desinterés personal"*[123]

Otro flanco para enfrentar la oposición desde la prensa política y estratégicamente importante para el Gobierno, consistió en la subvención de periódicos. En 1885 fue leído por primera vez por los habitantes de Bogotá el periódico *La Nación*[124]. Mandado a fundar específicamente por Rafael Núñez, contó desde el 15 de Septiembre de 1885 con la dirección, solicitada expresamente por el mismo Presidente, de José María Samper. Constituido para ser el vocero del Gobierno Nacional, el periódico, además de contar con el subtítulo de: "periódico político, literario y noticioso", también expresamente se encomendaba como "órgano de los principios de la Regeneración". Pero, al parecer la confianza de Núñez hacia su director y su decidido compromiso con la tarea regeneradora, le llevaron a solicitar también la aceptación de Samper como Consejero Nacional Delegatario por el Estado de Bolívar, que se llevó a cabo desde el mes de noviembre de 1885; y que ocasionó un exceso de trabajo en el pensador liberal: *"tengo tan seriamente*

[122] Ibíd.
[123] PALACIO, Julio H. Núñez. Recuerdos y memorias. (1893-1894) Barranquilla: Tipografía Mogollón, 1900. p. 15.
[124] Este periódico semi-oficial, es decir, que contaba con una subvención económica del Gobierno, se publicó ininterrumpidamente desde 1885 hasta 1890, dos veces por semana. Escribieron muchos representantes del Gobierno como Carlos Holguín, Miguel Antonio Caro y José María Samper.

comprometida mi salud con el trabajo que he echado sobre mí, excesivo y muy complicado, que estoy en el caso, indeclinable, de renunciar uno de los dos empleos"[125]. La renuncia a la dirección de *La Nación*, fue elevada por intermedio de la Secretaría de Gobierno, en cabeza de Arístides Calderón, dos veces. Primero el día 11 de febrero de 1886, siendo la respuesta de Núñez negativa, observándole a Samper la necesidad de continuar en el cargo. Pero Samper realmente estaba cansado, ya que la renuncia fue después solicitada y casi implorada, el día 12 de Marzo de 1886, con el carácter de "irrevocable"; siendo finalmente aceptada el 23 de Marzo de 1886 con la siguiente consideración del Presidente: *"Difícilmente se encontrará quien lo reemplace en elevado Magisterio de la Prensa, con la consagración, inteligencia, ilustración y patriotismo, que ha desplegado en las delicadas funciones de director de La Nación."*[126]

Rafael Núñez, no sólo acuñó la frase de "regeneración total o catástrofe" en 1876 durante la posesión del Presidente Julián Trujillo, sino que se constituyó en el artífice y ejecutor de una doctrina destinada a reformar las bases de la Nación Colombiana. La nueva labor de construcción nacional se basa en el concepto de orden bajo el imperio de la autoridad enmarcada dentro de un fuerte centralismo político, y la restitución de la autoridad moral a la iglesia católica. Con la sentencia de muerte formalizada en la derrota del liberalismo Radical, después de la guerra de 1885; la convocatoria a un Consejo Nacional de Delegatarios terminó siendo el epílogo de la aventura federalista en Colombia.

La importancia del ejercicio periodístico es para Núñez bastión de propaganda regeneracionista desde la perspectiva retórica. La ruptura con las políticas liberales radicales implicaron también una ruptura de la referencia del ideal civilizador Europeo. El ejercicio sistemático emanado desde la prensa, criticando

[125] *Diario Oficial,* Bogotá 31 de Marzo de 1886, No. 6637.
[126] Ibíd.

las utopías liberales, dejan ver un trasfondo de "conflagración social" que es necesario evitar a toda costa. Evidentemente, después de ser la "absoluta libertad de prensa" parte importante de la utopía liberal, la regeneración hubo de convenir una lucha sin cuartel contra la difusión de la subversión Europea.

"La restricción a la libertad de Prensa aportará una ayuda eficaz a esta empresa de reacción ideológica; pero, más que prohibir, hay que oponerse con argumentos y erradicar la amenaza social mediante la victoria del verbo."[127] La conversión purificadora de culpas bajo el fuego del liberalismo independiente, no solamente abrasó a Núñez. La gran afluencia de antiguos liberales radicales como Salvador Camacho Roldán, Aníbal Galindo, o José María Samper, quienes no vacilaban en reconocer como errores de juventud los desatinos del periodo anterior a la regeneración, también advertían el peligro de la difusión de las ideas subversivas europeas a través de la prensa, ante el triunfo, aún frágil, sobre el radicalismo. El peligro imaginado de una plebe fuera de control aporta uno de los temores que necesita la regeneración para enfrentar con toda fuerza la amenaza de la Subversión Europea, sembrada, germinada y generalizada desde los periódicos que amenazaban la nación que pretendía formar Núñez. Sin embargo, esta constante búsqueda del orden social llevó al Presidente a mirar nuevamente hacia Europa, para importar las ideas necesarias para este fin, dejando de lado las críticas hechas a los radicales a este respecto. Es esa inspiración la que se deja ver en la preparación teórica para las posteriores regulaciones a la prensa.

Rafael Núñez, habiendo iniciado su tercer periodo al frente de la dirigencia de la Nación Colombiana en 1886, se ausenta por razones de salud desde el primero de abril de 1886, y es investido para ocupar provisionalmente el primer cargo del Poder Ejecutivo, el designado presidencial; General José María Campo Serrano, a

[127] MARTÍNEZ, Fréderic. Óp. cit., p. 435.

quien le correspondería la sanción de la nueva Constitución de la República proclamada el 4 de Agosto de 1886. En ella, se puede leer el artículo que habría de desarrollar las posteriores reglamentaciones. Bajo el título 3 llamado "de los derechos civiles y las garantías sociales", resalta el artículo 42º que sujetó la responsabilidad de la prensa a la honra, el orden y la tranquilidad pública. [128]

El 8 de Junio de 1886, el Secretario de Hacienda, y encargado, conjuntamente, de la secretaría (posteriormente Ministerio) de Guerra, Felipe Angulo[129], presenta su renuncia a los cargos aduciendo asuntos familiares y personales, pero, ese mismo día acude a los debates del Consejo Nacional Delegatario para manifestar que era necesario que la Constitución que se estaba debatiendo, debía corresponder fielmente al pensamiento de la reconstrucción de una República unitaria y que estaba dispuesto a sacrificar su cargo en aras de la unidad del llamado "Partido Nacional". Desde allí, los Delegatarios Caro, Reyes, y Quintero Calderón se expresaron de él:

> *[Él] como todos los liberales independientes aspiraban sólo a la implantación de las nuevas instituciones y al afianzamiento de la paz y prosperidad nacional; de tal manera que, en la nueva hipótesis de que, para practicar con nuevo lustre los principios aprobados por los pueblos de Colombia, fuese en algún caso conveniente que él y los*

[128] "Art. 42. La prensa es libre en tiempos de paz, pero responsable con arreglo a las leyes, cuando atente contra las personas, al orden social o a la tranquilidad pública." citado por: CACUA PRADA, Antonio. La libertad de prensa en Colombia. Óp. cit. p.81.

[129] Sin duda, gran admirador de Núñez, este abogado costeño, nacido en San Juan Nepomuceno, Bolívar; y graduado en literatura y Jurisprudencia en el Colegio San Bartolomé, había sido Secretario de Rafael Núñez, durante su mandato Presidencial en el Estado de Bolívar en 1878 con tan sólo 25 años de edad. También fue Diputado a la Cámara de Bolívar y cónsul en Liverpool. Ya había sido Ministro de Guerra en 1885 y con el triunfo en la Guerra se ganó la absoluta confianza de Núñez.

copartidarios en cuyo nombre hablaba, se separasen de la escena política, tendrían mucho gusto en hacerlo[130]

El 12 de Junio de 1886, Angulo, reunido con Núñez en Girardot, agradece la muestra de unidad que le ha sido manifestada por el Consejo Nacional Delegatario representada en la confirmación del partido Nacional. Al parecer, no era coincidencia la salida de Angulo del Ministerio cada vez que Núñez delegaba el poder a los militares del partido Nacional. Efectivamente, el General Campo Serrano encargado del Ejecutivo, dicta un Decreto de indulto el 20 de Julio de 1886. El Decreto 418 concedía "amplia y completa admistía" a todos quienes estaban condenados o en espera de juicio por delitos políticos desde el 1º de diciembre de 1884 hasta la fecha de la promulgación del Decreto. Solamente exceptuaba de este beneficio a quienes hubieran cometido el delito de traición. El indulto también regía para los empréstitos forzosos exigidos por el Gobierno y que aún no habían sido cobradas desde la misma fecha.[131]

Pero la disentería que aquejaba a Núñez, probablemente le producía menores retortijones que la posibilidad de que la imposición del orden de la regeneración empezara a ablandarse. Ya en Junio de 1886, amparado el Gobierno en un recurso contra subversivo, el encargado de la Secretaría de Guerra, Felipe Angulo le notificó al Prefecto de Policía Rufino Gutiérrez Prieto, que suspendiera desde el 9 de Julio de 1886 el periódico *La Siesta* redactado por los primos Juan de Dios Uribe (llamado el Indio) y Antonio José Restrepo quienes habían disparado *"certeros venablos sobre el maltrecho tafanario de gobernantes y santones del convento que dirige Panurgo, que hoy se acuesta con Garbella y mañana*

[130] La Nación, Bogotá 18 de Junio de 1886, citado en: Diario Oficial. Bogotá, 20 de Junio de 1886. p,608
[131] Diario Oficial. Bogotá, 20 de Julio de 1886. No. 6,740

amanece con Altisidora."[132] Quedaron los versos que le espetó Antonio José Restrepo al prefecto de Policía, cuando paseaba por la plaza de Bolívar y notó que a espaldas de la estatua de Bolívar quedaba la casa de éste.

Bolívar con disimulo y
sin faltar al respeto
resolvió voltearle el culo
al señor Gutiérrez Prieto

Que fue respondida inmediatamente por Juan de Dios Uribe parafraseando sus estrofas:

Bolívar con disipeto y
sin faltar al resmulo
resolvió volverle el peto
al señor Gutiérrez Culo

Pero la molestia contra este periódico literario, que publicaba los escritos en verso y prosa de los Liberales Radicales, y que no se hundió en las aguas de la discusión política hasta que Núñez solicitó su primera licencia para ausentarse del Poder Ejecutivo; fue causada precisamente por la dosis de humor con la que sus redactores hicieron un anuncio que se publicó por cuatro días seguidos en la sección comercial que, por cierto, contaba con cuatro páginas de publicidad pagada. El anuncio se expresaba así:

[132] ESCOBAR URIBE, Arturo. El Indio Uribe y su lucha por la libertad en el Siglo XIX. Bogotá: Tipografía Rojas, 1952. p. 24.

SE FUE EL DOCTOR NÚÑEZ.

> *En 24 horas, infaliblemente, se cortarán y desaparecen por completo, las diarreas ó males de estómago, por fuertes que sean, tomando los incomparables POLVOS ESTOMACALES DEL Dr. RENG, que se venden en la Botella de Oro (Bogotá)*[133]

Aunque la suspensión de *La Siesta* fue motivada por esta burla, ya sus redactores se habían abstenido de contestar los ataques desde los diarios de apoyo al Gobierno. Pero, no dejaron de amenazar en caso de un posible cierre:

> *Si así fuere, tampoco sería en "La Siesta" en donde expondríamos nuestras ideas, porque este periódico ha de ser puramente literario, sino en hoja de otra naturaleza, que vería la luz del día al día siguiente de recibir la orden del Gobierno. Mientras tanto, si se nos insulta, si se nos combate, si se nos instiga, haremos lo posible por no caer en la trampa.*[134]

El 7 de Agosto, Felipe Angulo vuelve a retomar únicamente el Ministerio de Guerra (La Constitución de 1886, sancionada el 4 de Agosto le había cambiado el nombre a las Secretarías por el de Ministerios), pues la cartera de hacienda es confiada a Antonio Roldán. De esta manera quedaba mejor preparado para iniciar la ejecutoria del Decreto sobre Prensa próximo a ser declarado en el mes de Noviembre. No obstante el indulto decretado por Campo Serrano, y la insistencia constante de estar la República en paz, las palabra expresadas por el Designado Presidencial encargado del Poder Ejecutivo, expresaban su confianza en que la nueva Constitución:

---

[133] *La Siesta.* Bogotá 22 de Junio de 1886. Número 12. p, anuncios.
[134] *La Siesta.* Bogotá 29 de Junio de 1886. Número 13. p, 98.

Pone límites justos a la peligrosa omnipotencia legislativa. Ella devuelve al poder Ejecutivo sus facultades propias, para que no se vea tentado a ocurrir a violencias ni a medios corruptores. Ella pone las bases de una amistosa inteligencia entre el Estado y la iglesia, sobre el principio de recíproca independencia entre el poder político y la autoridad eclesiástica.[135]

2.3.1. NÚÑEZ Y SU DESCONFIANZA EN LOS DELEGATARIOS.

La sanción de la nueva Constitución, contenía el famoso Artículo transitorio "K" (letra usada por los Romanos para designar a los calumniadores), que establecía que el Gobierno quedaría facultado para "prevenir y reprimir" los abusos de la prensa, mientras no se expidiera una ley de imprenta. La imposición de este artículo estuvo precedida de un gran debate al interior del Consejo Nacional Delegatario. Miguel Antonio Caro, artífice del mencionado Artículo del título XXI sobre disposiciones transitorias adicionales de la Constitución de 1886, encontraba unido el deber emanado a las autoridades de la República, contenidos en el Artículo 16 de la mencionada Constitución, que expresaba que: "*Las autoridades de la República, están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."*[136]

Pero lo transitorio del Artículo, modularía una palabra que, contraria a su acepción normal de algo "pasajero y temporal", se convirtió en el estandarte de las opiniones hostiles al Gobierno, y no en aquel que buscaba regular los efectos de sustitución de una norma por otra, en un lapso de tiempo breve y caduco. De

[135] *Diario Oficial*. Bogotá, 8 de Agosto de 1886. No. 6,760
[136] CACUA PRADA, Antonio. La libertad de prensa en Colombia. Bogotá: Editorial Prensa Católica, 1958. p. 81.

hecho, se perpetuó hasta el año 1896, año en que el Congreso expide la ley 157 de 1896. Durante 10 largos años, el artículo transitorio, se penetró y se correspondió con el orden público y la necesidad de restringir a la prensa "subversiva".

El cambio en la legislación sobre prensa, era de suma importancia para el director de la regeneración. Pero, el Presidente Rafael Núñez, en el comienzo de las sesiones del Consejo Nacional Delegatario, mantenía una severa desconfianza en que se impusieran normas suficientemente restrictivas a la imprenta, señalando también, que solo habían dos caminos para cambiar la situación:

> *El consejo Nacional [...] no remediará nada, porque yo conozco mis gentes: ellos, por captarse la voluntad y merecer un elogio del radicalismo son capaces de "entregar hasta la carpeta", como dicen los tahúres, echando por la irrisoria y desacreditada vía de la prensa libre responsable, sin tener en cuenta las enseñanzas de nuestra historia y la perentoria excitación que les hice en mi exposición inaugural. [...] Esa mayoría carece por completo del valor, del patriotismo y de la energía necesaria para adoptar uno de los dos caminos únicos por los cuales se puede remediar esta situación. Son el de la censura previa que protege y estimula la buena prensa y cierra el camino a la licenciosa y desvergonzada, o bien la abolición de los delitos de imprenta y la sujeción de los que se cometan por ella al Código Penal, con procedimiento de oficio a petición de parte agraviada o a petición fiscal en los demás casos; prescripción ordinaria y agravación de las penas señaladas en el Código con la suspensión del periódico en todos*

> *los casos y quizá mejor la inhabitación [sic] perpetua del periodista para seguir en el oficio.* [137]

Pero su desesperanza hacia un control fuerte de la imprenta, sería amainada por el indoblegable Miguel Antonio caro, a la sazón, Delegatario por el Estado de Panamá; quien habría de mantener al interior de las sesiones unas elocuentes y huracanadas discusiones entre adeptos y defensores. Miguel Samper, comentaba que el debate más combatido en las sesiones, tuvo como motivo, la discusión del artículo transitorio "K", diciendo que: *"sostenidos con clamor, llegaron hasta la acrimonia, de parte de alguno de los sostenedores de las ideas contenidas en los artículos primitivos."*[138] Quienes no estaban de acuerdo con esta disposición, alegaban que, no obstante la reciente guerra civil de 1885, no era necesario el mantenimiento de un régimen excepcional respecto de la prensa, ya que la nueva Constitución, brindaba los recursos necesarios para la defensa del orden público. La palabra "prevenir" dejaba intrínseco el establecimiento de la censura previa, además de la irregularidad jurídica de dar al Gobierno el ejercicio de una función judicial.

> *A todo esto se contestó con coléricas reconvenciones y suposiciones, pero no con racionamientos de equidad y verdadera conveniencia, y es lo cierto que el artículo fue aprobado por considerable mayoría, haciéndose al Gobierno el flaco servicio de ofrecerle el medio de ejercer, junto con su autoridad Constitucional en todo lo demás, la dictadura o la arbitrariedad respecto de la prensa.*[139]

---

[137] NIETO, Máximo A. Recuerdos de la Regeneración. Bogotá: Editorial Marconi, 1924. citado por: CACUA PRADA, Antonio. La libertad de prensa en Colombia. Óp. cit., p. 86.
[138] SAMPER, Miguel. Las reformas políticas y el cesarismo. Artículos publicados en *El Repertorio Colombiano.* Bogotá: Imprenta de la luz., 1898. p. 10.
[139] Ibíd., p.11.

La defensa de la "censura previa" es expresada desde la misma sumisión cultural por Núñez con la frecuente mirada hacia Inglaterra, en donde *"hubo aún censura previa cuando el grado de desarrollo intelectual y el progreso moral eran infinitamente superiores al que hoy tenemos en Colombia."*[140] Las maneras de Núñez para alcanzar este desarrollo, habrían de iniciar con una reforma política que controlara suficientemente el ejercicio de la prensa mediante este tipo de censura, y una vez, el perfeccionamiento moral e intelectual de la misma, hubiera alcanzado los niveles de desarrollo "requeridos", la ataduras irían siendo soltadas poco a poco.

Rafael Núñez, además de ser el director del cambio en la manera en que la Nación Colombiana debía conducirse hacia su destino, según algunos pensadores; aprovechó la guerra civil de 1885 para definir sus verdaderas intenciones, que en los años anteriores habían venido siendo expresadas de manera prudente e inclusive ambigua. Esta actitud, no es otra cosa que la manifestación de la habilidad política en su más puro sentido de adaptación a las circunstancias para conseguir un propósito. La continuidad en los errores del liberalismo radical, tales como la permanente invocación a la guerra, y la negativa rotunda de sus dirigentes a participar de la reforma política; sumados a la disyuntiva de un Partido Nacional producto del convencimiento de un sector de la dirigencia que quería una reforma, pese a una gran diferencia de opiniones; probablemente no le habían llevado a sentir que tenía "la sartén por el mango" hasta que su proyecto fue materializado definitivamente con la sanción de la Constitución de 1886.

[140] NUÑEZ, Rafael. La reforma política. Editorial ABC. Bogotá. 1946 p, 23. Tomo 5.

2.4. EL DECRETO 635 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1886

El General Campo Serrano fue ratificado el 7 de Agosto de 1886 por el Consejo de Delegatarios para "*ejercer el Poder Ejecutivo a falta del Presidente y del Vicepresidente de la República.*"[141] Mientras tanto, el control a la prensa hubo de tener un carácter tan importante y tornarse en factor tan peligroso para la estabilidad gubernamental, que fue encomendado al Ministro de Guerra. Felipe Angulo, de nuevo a través del mismo Prefecto Gutiérrez Prieto, confinó a prisión a Alfredo Greñas, y suspendió su periódico *El Progreso*[142], el 31 de Agosto de 1886. Igualmente lo mismo le ocurrió al periódico *El Comercio*, redactado por Gregorio Gutiérrez Isaza.[143]

Su director, Conservador y amigo íntimo de personalidades influyentes de este programa político, tales como Carlos Martínez Silva, Enrique Restrepo, y Jorge Roa[144]; mantuvo una posición crítica sobre el papel de su partido referente a la participación del Partido Nacional y su alianza "de segunda mesa" con Núñez. Años después, Gutiérrez expondría las razones por las cuales fue cerrado su periódico por el Ministro Angulo en 1888:

---

[141] Diario Oficial. Bogotá, 8 de Agosto de 1886. No. 6,760

[142] De este periódico de vida corta, no se han podido rastrear copias.

[143] La suspensión de este periódico está referenciada en un cuadro publicado en *El Precursor* del 12 de Septiembre de 1889 bajo el título de "El Calvario de la Prensa". En ella también se dice que Gutiérrez Isaza, era en ese tiempo (1889) director de *La Unidad* de Tunja, en 1888, un periódico defensor de la regeneración que tenía en su encabezado: "La Unidad: Órgano de los intereses de la regeneración" y que publicó hasta 1892 en la imprenta del Departamento, pero ya sin la dirección de Gutiérrez. Es extraño que el director de un periódico oficial de Boyacá haya sido castigado dos años atrás por el mismo gobierno de Núñez, pero el carácter polémico de su director podrían explicarlo. No se encuentran copias de *El Comercio* de 1886, sin embargo después imprimió nuevamente, y con el mismo nombre en 1891, año en que fue multado. Gutiérrez Isaza y sus hermanos serían los primeros conservadores opositores a la regeneración, que posteriormente serían protagonistas de castigos, confinamientos y otros incidentes desde la prensa.

[144] Roa, autor con Roldán de la "ley de los caballos" en 1888, probablemente no imaginó que años después sería aplicada por Holguín contra su gran amigo Rufino Gutiérrez en 1891.

> *Porque defendíamos, como hoy, los principios netamente Conservadores, quedó nuestra pequeña imprenta sin trabajo alguno, porque con las constantes represiones de entonces nadie se atrevía a hacer publicaciones; y por consiguiente nosotros, - Que acabábamos de pasar una terrible enfermedad causada por el deletéreo clima de Puerto Berrío en donde hicimos la campaña de 1885 a órdenes del General Marceliano Vélez,- nos quedamos sin ocupación alguna que nos produjera modo de subvenir a nuestras necesidades.*[145]

Después de este suceso, en 1888 el Gobernador de Boyacá, Ospina Camacho les ayudó a los hermanos Gutiérrez subvencionando *La Unidad* con $50 pesos mensuales y ellos trataron, como siempre lo hicieron, la búsqueda de una unificación "histórica" de los militantes del partido conservador mediante el uso de la prensa. Finalmente el Gobernador y ante la presión de Angulo, les pidió a los Gutiérrez su salida del periódico.

El Decreto ejecutivo que habría de establecer los límites a la libertad de prensa, llegó 3 meses después de la publicación de la nueva Constitución. El Decreto Número 635 del 5 de Noviembre de 1886, expedido por el General Campo Serrano y el Ministro de Gobierno Arístides Calderón, y que recalcaba la facultad otorgada por la Constitución al Gobierno para *"prevenir y reprimir los abusos de la prensa, mientras no se expida un ley de prensa*",[146] y propugnaba la importancia de esta, como "*una de las más preciosas garantías, un poderoso apoyo de los Gobiernos honrados, y uno de los elementos más importantes del progreso de las Naciones*" [147], que sin embargo, debía ser compuesta a sus "justos límites". Estos

[145] *El Comercio.* Bogotá, 18 de Noviembre de 1891. No.32 S.P.
[146] *Diario Oficial.* Bogotá, 11 de Noviembre de 1886. No.6,587
[147] Ibíd.

límites estaban regidos por tres principios que no podía quebrantar la prensa: La honra de las personas, el orden social, y la tranquilidad pública.

El Ministro de Gobierno, Arístides Calderón, haciendo una amplia explicación de los motivos que llevaron a la expedición del Decreto por parte del Ejecutivo, le dirigió a los Gobernadores de la República sus argumentos sobre la nueva reglamentación. Dichas consideraciones invocan un concepto de opinión pública interpretada como una suma de verdades que se entrelazan y hacen florecer la verdad. Este concepto, es en suma importante para el momento histórico nacional en 1886. Es la primera norma que rige la Prensa en más de 30 años, y traduce el concepto de "la verdad" como consecuencia de un ejercicio de la opinión: "*La verdad es la luz que disipa los errores y el poder que armoniza todos los legítimos intereses, [...] es la opinión pública el moderador por excelencia de las exageraciones y violencias de los partidos.*"[148]

La segunda consideración del Ejecutivo tiene que ver con la contribución que a la opinión pública debería hacer la ley, para que esta fuera desarrollada de manera imparcial y severa. Aduce que, en ninguna manera, corresponde a una intención particular de grupo político ni a las pasiones del partido de gobierno, ni al ejercicio de una autoridad arbitraria.

La tercera consideración es perentoriamente apoyada en el principio del ejercicio de la libertad de prensa "en tiempos de paz"; considerando que en ese momento (Agosto de 1886) la República gozaba de este prerrogativa. Sin embargo, no obstante la facultad Constitucional que le da al Poder Ejecutivo el poder para reprimir los abusos de la prensa mientras no se expida una ley; el Gobierno decidió expedir el Decreto para, según el gobierno, ejercer con mayor justicia las

[148] Ibíd., p. 1199.

disposiciones a las que podría recurrir, antes de "simplemente" ejecutar la norma transitoria "K".

El Ministro Calderón les dice a los Gobernadores que el Decreto requiere de atención especial cuando se atente contra la honra de las personas. Pone de ejemplo cuando a algún ciudadano se le llame Jugador o Falsificador. Diciendo que, aunque ambas sean calumniosas por no amparar un hecho cierto, es más grave la segunda porque puede acarrear un delito, mientras que la primera designa un vicio que desacredita a la persona, pero que en ciertos casos es ofensiva y en otros no; toda vez que existen juegos que degradan y otros que existen con la complacencia de la sociedad.

Una imputación de "falsificador" implicaría, al referirse a un delito, automáticamente una deshonra y un descrédito para la persona. Pero, para la designación de "Jugador", es necesario tener en cuenta el concomiendo que tenga la sociedad, es decir su acepción cultural y si produce deshonra o descrédito a los ojos de ella. Esta observación es muy importante, porque bajo la mirada del Ejecutivo que redactó el Decreto, este saber estaría mejor representado en la misma población, debido a que ella tendría un conocimiento superior de los hechos de esta naturaleza. Aduce que si lo hicieran los Jueces de derecho *"sería peligroso"*[149]. Debido a ello, se instaura la figura de Jurados de Imprenta.

El principio del Juzgamiento civil de los delitos de imprenta, está amparado en la gravedad que, por hacer pública una calumnia o una injuria a través de las publicaciones, originaria deshonra o descrédito en el ciudadano. El número de personas para las que dicha persona se hace "despreciable" aumenta por este medio. A tenor de este principio, el Decreto expresa que no debe hacerse

[149] Ibíd.

publicidad por ningún medio de estos hechos ya que agravaría la situación para el ciudadano y el injuriado podría prescindir de la protección de la ley.[150] Lo mismo podría suceder con aquellas que acusen atentados contra el pudor.

La imposición de un Jurado de imprenta también para los atentados a la tranquilidad pública, busca correspondencia con la importancia que tiene la seguridad y la confianza en la aplicación de la justicia. Esta participativa legislación incluye a los delitos que por la prensa, conciten a rebeliones, asonadas o motines;

> *Porque la susceptibilidad de los que ejercen las funciones del Gobierno hace que a las veces se califique de abuso lo que no es sino el ejercicio de un sagrado derecho: la censura de actos indebidos. Un Jurado compuesto de los Magistrados del respectivo Tribunal del Distrito, aumentado con un número suficiente de Conjueces, es un Jurado que inspirará confianza por el número de sus miembros, sus aptitudes, su responsabilidad e independencia, y este es el Jurado, a quien, conforme el Decreto, corresponde conocer las causas que se sigan por atentados cometidos contra la tranquilidad pública.*[151]

Los tribunales encargados de Juzgar en todos los casos, tienen una mención específica en cuanto a su elección y proceder en el Decreto. Igualmente, el Ministro Calderón, expuso a los Gobernadores la excesiva "lenidad" o suavidad de las multas impuestas a los contraventores, como una consecuencia del

[150] Esto explica la casi inexistencia de casos registrados en el corto periodo en que imperó este Decreto.
[151] *Diario Oficial.* Bogotá, 11 de Noviembre de 1886. No.6,587 p, 1200

establecimiento de una ley nueva a quienes publicaban antes a la nueva Constitución, sin preocuparse por esta orfandad.[152]

Estas razones de "lenidad" de las penas fijadas son explicadas, por el Ministro Arístides Calderón bajo tres motivaciones. La primera, porque existió una diferencia entre la pena nominal y la pena real. Es decir, decía Calderón que cualquier suma monetaria que fuera impuesta por un delito de imprenta, siempre daría la impresión de ser muy severa ya que después de hacer uso por más de un cuarto de siglo, de una libertad absoluta de prensa, vista como un derecho inmodificable, se hacía necesario que la violación de las normas requirieran de un periodo de hábito; y que: "*si hoy se impusieran penas severas por los abusos de la misma, se haría odioso el Decreto, porque se consideraría tiránico*."[153] La segunda circunstancia que tuvo en cuenta el Gobierno, se basa en la dificultad en cuanto a la visión de benevolencia que podrían tener muchas personas, debido también al hábito de creer durante tanto tiempo que el abuso a través de la prensa era un derecho. Previniendo que Jueces y Jurados miraran con generosidad a los

[152] En este Decreto, omitir el envío de una copia del ejemplar conllevaba una multa de 25 a 50 pesos (Art.6º), calumniar o injuriar, tenía una multa de 150 a 200 pesos, y para los que atentaran contra la tranquilidad pública, hasta de 300 pesos (Art. 8º). Mayormente castigados eran los impresores, pues, si omitían el nombre de la imprenta, el lugar o la fecha donde se publicaban los escritos, tendrían una multa inmodificable de 500 pesos (Art. 34). En el código del Estado de Cundinamarca, sancionado en 1858, se observaban, con pocas variables, las mismas penalizaciones, que en todo caso no pasaban de 300 pesos. Los ejemplos de los sueldos son importantes para comparar el valor de las multas. Un sueldo promedio de un empleado público oscilaba entre 50 y 100 pesos mensuales, el sueldo del Medico del Ejército del Norte era de 140 pesos mensuales, el de un Gobernador era de 400 pesos mensuales, el de un Ministro era de 450 pesos mensuales, el del Presidente era de 3,000 pesos mensuales. A Rafael Núñez le fue otorgado una remuneración permanente según la ley 77 de 1888 por 30 mil pesos anuales (2.500 pesos mensuales) a la que se hizo acreedor, según dicha ley, *"como Magistrado y publicista, como iniciador intrépido y caudillo afortunado de la Regeneración nacional*." Un dueño de imprenta multado con 500 pesos bien podría sobrellevar una multa si no reincidía y si su empresa era próspera. El valor más común de un periódico sin mucha fama era de 0.25 centavos. Una multa alta, como las impuestas durante el periodo de Carlos Holguín no llegaron a pasar de $300 pesos. Es decir, el dueño de un periódico podría sobrellevar la pena con la venta de 600 periódicos. Evidentemente la ley esperaba una respuesta positiva causada por la amedrentación y la disciplina bajo dichas multas.

[153] *Diario Oficial.* Bogotá, 11 de Noviembre de 1886. No.6,587 p, 1200

acusados, si se impusieran penas más severas, el Gobierno consideró que era preferible que a la hora de fallar, no se incurriera en impunidad, porque ello acarrearía el descrédito de la institución y la involución a solucionar los problemas por medios violentos. La tercera motivación está explicada desde la persona multada. En este Decreto se castiga al impresor y no al autor de la publicación, a quien se le exige una fianza previa de $500 a $2.000 pesos, según el valor de la imprenta, para que no se promoviera la impunidad, ya que esta podría generar la comisión de nuevos delitos.

Igualmente, el establecimiento de un Jurado daba razón de un alto importe para la mejor reparación posible a las ofensas hechas contra la honra de las personas. Este Jurado tiene en el Decreto buenas medida para lograr la imparcialidad de declarar si la persona acusada es calumniante o "reo de libelo infamatorio." Se fundamenta de esta manera, que los atentados al honor, son consistentes cuando menoscaban o disminuyen *"las consideraciones, el aprecio y buena voluntad, de la que un individuo goza en la sociedad por sus prendas personales*"[154]

El Ministro de Gobierno explicó recurrentemente las ventajas de haber proporcionado una regulación a la prensa en comparación con la inconveniencia grave de una libertad absoluta de prensa, especialmente porque sentimientos como la envidia o la venganza publicitados a través de la prensa, herían en demasía buenas reputaciones que podían producir efectos perjudiciales. Una prensa conocedora y respetuosa de las leyes, fortalecería la influencia benéfica, a decir del Ministro, que la prensa tiene sobre las costumbres. Si esta fuera certera y sus censuras merecidas, se fortalecería el prestigio y el temor a la prensa. Por el contrario, si fuera abusada irresponsablemente y sin regulación, menos credibilidad se le habría de dar. Además, la libertad para decir todo lo malo que se

[154] Ibíd.

quiera producirá un efecto perjudicial en la sociedad, ya que se tornará menos sensible a las ofensas dirigidas a la honra. Esto debilitaría el poder de la sanción pública, que es para el Gobierno "*protectora de todas las virtudes y salvaguardia contra todos los vicios*"[155]

De manera que, para aumentar el poder moralizador de la prensa, se requería de esta restricción a sus abusos. Resultará entonces que, para el Gobierno, otorgar el calificativo de Calumniante ya no será más una calificación hecha por venganza de la persona ofendida, sino que estará investida de la respetabilidad de un Jurado. Igualmente, sería un indicativo para que la persona que tome con indiferencia lo malo que se le diga a través de una publicación, atorgue una prueba implícita del reconocimiento de su culpabilidad.

> *No será ya el caso de contestar a un libelo infamatorio con otro libelo; ni de tener que dar la prueba de hechos negativos; ni de requerir al ofensor a que compruebe sus afirmaciones: de hoy más, el Jurado ante quien se puede ocurrir en solicitud de reparación, exigirá del ofensor la prueba de que acredite los cargos que haya hecho y lo declarará calumniante si no la presenta.*[156]

El caso de la "Compañía del Camino", empresa constructora del ferrocarril de Cúcuta, contra el periódico *EL Recopilador*[157], es un ejemplo de la aplicación de la ley a la luz del nuevo Decreto 635. El fallo absolutorio contra el redactor emitido por un tribunal compuesto por Federico Rodríguez, Ricardo Bonilla, y Flavio González; y emanado por el Juez, explican una razón pasmosa. Dicho periódico había calificado de "conspiradora" a la compañía y de auxiliadora del radicalismo

[155] Ibíd.
[156] Ibíd.
[157] Este periódico dirigido por Nicolás Pontón e impreso en la "imprenta de la ilustración" se editó del 31 de Enero de 1885 hasta el 18 de Octubre de 1887 con 216 números.

en el levantamiento armado de 1885. En representación de la compañía fue apoderado el abogado Felipe Silva, quien instauró una demanda por calumnia, a nombre de la persona jurídica de "la compañía del camino de San Buenaventura" y no de las personas naturales miembros de la empresa. El juez argumentó que, de la misma manera en que las personas jurídicas son incapaces de cometer delitos, también son incapaces de poder ser calumniadas y que, para determinar el hecho se hacía necesario haber especificado los individuos que cometieron los hechos punibles y, en este caso, el individuo calumniado podría acusar, pero la entidad no tiene ese derecho. Encuentra que el juicio ha:

> *Incurrido en Nulidad al aceptarse la acusación que hizo el doctor Felipe Silva como apoderado ó representante legal de la compañía del camino de San Buenaventura propuesta contra el señor Nicolás Pontón, como editor responsable del periódico El recopilador, y por las publicaciones hechas en los números 183 y 186. […] El tribunal declara nulo todo lo actuado en este juicio por la falta de acción o incompetencia de personería en el acusador*[158].

Debido a su poca durabilidad, también son pocos los ejemplos bajo el imperio de este Decreto. Otro de ellos fue, según el periódico *El Comercio*[159]*,* el primer fallo registrado de un Juicio por abusos de imprenta, llevado a cabo el día 16 de Junio en el Juzgado 7º del circuito de Cundinamarca, consistente en una acusación instaurada por el Sr. Pedro Pinesa D. contra el autor de un remitido publicado en *Las Noticias* titulado: "a un autor desconocido" y del cual, se responsabilizó a la Sra. Directora del Circo Pabellón (compañía infantil Brasilera).

[158] Registro Judicial de Cundinamarca. Año 1. Agosto 5 de 1887. p.37.

[159] Este periódico, editado por el abogado Conservador Gregorio Gutiérrez fue de los de mayor durabilidad a finales del Siglo XIX. Fundado en 1873 y editado en la imprenta del comercio y después en la imprenta de La Nación, publicó ininterrumpidamente hasta el 27 de Octubre de 1887. Posteriormente imprimió nuevamente, sólo desde Octubre 10 de 1891 y hasta Diciembre 1 de 1891.

La opinión del publicista sobre el caso, es importante para comprender la improvisación y premura de la nueva norma:

> *Poco felices estuvieron las partes en este juicio: especialmente la acusación tocó casi solo por incidencia la cuestión legal. – Los alegatos más fueron apreciaciones abstractas y cargos e insultos personales más o menos directos y del todo inconducentes, que otra cosa. Admiramos la paciencia del Sr. Juez para no hacer a cada paso uso de la campanilla. […] El juicio duró cinco horas, al cabo de las cuales el Jurado fue de dictamen que el remitido acusado no causaba deshonra ni descrédito al Sr. Pedro Pineda D. y, por tanto, la acusada fue absuelta. No nos referimos al juicio en cuestión, al que concedemos poca importancia; pero se nos ha ocurrido, que según el cuestionario que establece el Decreto para que resuelva el jurado, la más atroz calumnia o injuria puede quedar sin castigo, por sólo el hecho de que la sociedad, o la parte de ella que esté en relaciones con los jurados, no le preste su asentimiento.*[160]

El Decreto 635 de 1888, se hubiera podido constituir en un intento de regular la prensa de forma participativa. Aunque los Jurados de imprenta ya habían sido instaurados en las primeras Constituciones Colombianas, fueron retraídos paulatinamente con el afianzamiento del Liberalismo Radical después de 1858. En Algunos países de Latinoamérica, principalmente México, su experiencia fue rica en este mecanismo. A diferencia de la experiencia Colombiana, el estudio de su funcionamiento en este país ha sido convenientemente expuesto por la

[160] *El Comercio*. Bogotá, 18 de Junio de 1887. No.946. p,30

historiografía. Pablo Piccato, nos advierte sobre la importancia del honor[161] para el desarrollo de los juicios de imprenta en México.

Desde su concepción, teniendo como guía la Constitución Gaditana de 1820, en la cual se establecían los Jurados de imprenta con potestad para calificar el carácter ofensivo de los escritos e imponer penas a los autores, existía la pretensión de involucrar desde el Jurado a los ciudadanos en el proceso, expandiendo el honor hacia el campo de la política, y teniendo como causa una mayor sensibilidad de las injurias, fenómeno que a la postre justificó, según este autor, la abolición de los mismos en 1882. En los reglamentos mexicanos de 1828 y 1848, la convocatoria de dichos Jurados estaban en manos de los ayuntamientos, aunque en 1856, los llamados "liberales de Ayutla" y el Congreso Constituyente, Guillermo prieto y José María Mata se opusieron exitosamente a un proyecto de artículo 14 para la Constitución que, si bien garantizaba al Jurado para los delitos de imprenta, ponía su trabajo "*bajo la dirección del tribunal de justicia de la jurisdicción respectiva*"[162].

Pero el constreñimiento a la medida participativa no germinó. Posteriormente, Benito Juárez decretó una ley de prensa el 2 de febrero de 1861 que reglamentaba el Jurado y afirmaba, aún más los mecanismos para los periodistas

[161] Para los efectos de este trabajo, esta palabra encierra la definición ajustada de la Real Academia Española de ser una "Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo." Pero, la expresión desde el siglo XVIII, tenía que ver, además con el conocimiento público. De hecho, la Real Academia Española, en su edición de 1780, define el sustantivo como "honra con esplendor **y publicidad."** y en la definición de 1791, es adicionado el de "reputación y lustro de alguna familia, acción u otra cosa." Ya, en la de 1803, se ratifica la importancia de ser una "acción, **demostración exterior** por la cual se da a conocer la veneración, el respeto, ó estimación que alguno tiene por su dignidad, ó por su merito." Es evidente que la definición de la palabra en el siglo XIX está siempre aunada al conocimiento de los demás sobre las actuaciones personales. Es decir, desde mi punto de vista, el uso de la palabra honor resalta la importancia que, para la opinión pública, pueden contener las actuaciones humanas y la destilación a través de la prensa, encadena esta conectividad. Las definiciones de todos los diccionarios de la Real Academia Española, a través del tiempo, pueden ser consultados en: http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle

[162] PICATO, Pablo. Jurados de imprenta en México: El honor en la construcción de la esfera pública, 1821 – 1882. en: ALONSO, Paula. Óp. cit. p.144.

proclives de acusaciones. En ella, el máximo de prisión era de doce meses o destierro del Estado y los miembros del Jurado eran de 11 para los juicios de hechos y de 19 para los de sentencia.[163] Pero el mismo Juárez revocó dicha ley:

> *La ley de 1861 fue derogada por el propio Juárez en un decreto de fines de 1861 que restablecía una ley sin Jurados, dictada por Comonfort en 1855. No obstante las dudas de Juárez, el Jurado de prensa se constituyó en una visible diferencia entre liberales e intervencionistas. Tras la derrota de Maximiliano, la ley de febrero de 1861 fue reestablecida por un decreto de Juárez en Enero de 1868 y corregida en una nueva ley orgánica del artículo 7 constitucional, muy parecida a la anterior, emitida el 4 de febrero de 1868 y vigente hasta 1882, cuando los Jurados de prensa fueron abolidos para siempre*.[164]

La ondulación entre rigidez y flexibilidad de las leyes de prensa es un tema que desde el siglo XIX hasta nuestros días, es permanentemente convenido en las Cartas constitucionales y las legislaciones de América Latina. Al igual que en la República Colombiana anterior y posterior a la Constitución de 1886, en México, la responsabilidad de los autores podía verse disuelta ya que era común la firma de los escritos bajo seudónimos o mediante inserciones de otros diarios, u hojas sueltas. De tal manera, que los Jurados creían que las acusaciones contra los editores o impresores fueran más apropiadas, que contra quienes habían facilitado la información. Sin embargo, la legislación Mexicana cojeaba en cuanto al ejercicio del Jurado, que era una institución de justicia local, debido a que las acusaciones debían presentarse en el ayuntamiento de la ciudad en donde se

[163] Constituyó un aumento más liberal, ya que antes estaba conformado por un Jurado de Hecho de 9 personas y uno de Sentencia con 12 miembros, igualmente elegidos por sorteo de una lista de ciudadanos residentes en la ciudad. El Jurado de Hecho autorizaba o no, si había causa para la apertura de juicio, y después de que el Juez así lo dictaminara, el Jurado de Sentencia ejecutaba su labor penal.

[164] PICATO, Pablo. Óp. Cit. p,145

hubieran publicado los escritos, sin tener en cuenta el lugar de residencia del acusado o el querellante. La generación de contratiempos nacidos, principalmente, de la necesidad por la presencia del acusado ante la ciudad donde era demandado, originaron algunos casos de impunidad. "*El Jurado hacía de la capital del país un lugar seguro para escribir sobre los asuntos de otras ciudades*."[165] Aunque el caso no ha sido convenientemente estudiado en Colombia, si es para tener en cuenta las grandes dificultades que tuvieron en la aplicación de algunas leyes, cuando la Nación se encontraba bajo el sistema de organización política federal.

Las primeras constituciones en Colombia, al parecer no acogieron este principio gaditano de los Jurados de imprenta sino hasta la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta del 14 de septiembre de 1821,[166] que consagró la libertad de imprenta en el artículo 156, instituyendo el juicio popular con la intervención del Jurado. En la ley reglamentaria, el Jurado de Hecho de los juicios de imprenta estaba constituido por 24 hombres residentes en "*el ayuntamiento del lugar donde existía taller tipográfico, a pluralidad absoluta de votos y cualquier ofendido podía hacer la acusación ante el "alcalde ordinario de la capital del Cantón";* [167] con una apreciación parecida a la Constitución Mexicana de 1828, que se basó en la Constitución de Cádiz de 1820. La Constitución del Estado de la Nueva Granada

[165] Ibíd. p,148

[166] "*Esas primeras Constituciones, que se iban dictando a tiempo que cada región o provincia declaraba su separación del régimen metropolitano de entonces, tuvieron por común denominador, por numen y arquetipo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en Francia en 1789, así como la Constitución y las Declaraciones Norteamericanas, siempre, desde luego, teniendo en cuenta los sentimientos e ideales religiosos y en un principio, inclusive, invocando todavía las vinculaciones con la monarquía española encarnada por Fernando VII, pero usurpada por José Bonaparte. [...]Entre tales Constituciones se pueden citar: la de Cundinamarca, sancionada el 30 de marzo y promulgada el 4 de abril de 1811, reformada al año siguiente; la de Cartagena de Indias, promulgada el 14 de junio de 1812; la de Antioquia, aprobada el 21 de marzo y sancionada el 3 de mayo de 1812; la de Mariquita, expedida el 20 de junio de 1815.*" HERRERA C, J. Noé. La prensa ante el derecho. (Estudio filosófico, histórico y jurídico) Bogotá: editorial retina, 1960. p, 138.

[167] CACUA PRADA, Antonio. Célebres procesos de prensa en Colombia en el siglo XIX. Revista Senderos. Bogotá, Vol. 7. No. 29 – 30. 1994. p, 996.

de 1832, contiene en su artículo 139 la misma consideración acerca del juzgamiento a través de los Jurados. Igualmente sucede con la carta de 1843, Sin embargo, durante su vigencia culminó un movimiento reformista extremadamente radical y revolucionario que llevaría un cambio, casi increíble, del espíritu y la letra del Derecho Constitucional Colombiano y que consistió en un acto legislativo que reformó la Constitución de 1843, y que consistió en:

> *Art. 6º del Acto Legislativo: "La expresión libre del pensamiento, entendiéndose que por la imprenta es sin limitación alguna, y por la palabra y los demás hechos con las únicas que hayan establecido las leyes."*
> *Art. 1º de la Ley: "Es completamente libre la expresión del pensamiento por medio de la prensa."*
> *Art. 2° de la Ley: "Quedan derogadas todas las leyes sustanciales y adjetivas sobre la Libertad de Imprenta"* [168]

Las Constituciones de 1853, de 1857 y de 1863 no modifican esta irresponsabilidad absoluta en el ejercicio de la prensa ni la ausencia total de leyes. Confirmaron, de hecho, una mayor cantidad de derechos, pero pocas garantías bajo la premisa de una libertad absoluta para expresar el pensamiento a través de la prensa “sin limitación alguna”. Esta facultad propició la aparición de numerosos periódicos, panfletos y libelos. Obviamente, cada vez fue más lejano el esfuerzo por propiciar cualquier tipo de representatividad basado en un cuerpo colegiado que decidiera sobre los abusos de la prensa, como ocurrió durante este periodo en México. Ciertamente, la importancia de los Jurados de prensa en este país; aunque con numerosos obstáculos referidas a su conformación misma, que llevaban a que las restricciones ciudadanas para su formación hicieron que pocos

[168] HERRERA C, J. Noé. Óp. cit. p. 142.

pudieran ser elegidos para este órgano, o la falta de quórum no obstante las multas por estas ausencias, estribaba en que: "*la legitimidad del Jurado de imprenta era inversamente proporcional a su tamaño. Es claro que la autoridad de los Jurados de imprenta se derivaba de los nombres de sus miembros más que de su número*."[169]

La visión de autonomía política de los Jurados de imprenta, según el análisis de Picato en México, realmente constituyó una defensa de dicha opinión pública ante los ataques del poder político. Los fallos de los Jurados, generalmente tendían al favorecimiento de los escritores, cuando las acusaciones tenían que ver con ataques al Gobierno o a las instituciones. *"El carácter del Jurado como institución urbana explica su tendencia a proteger a los periodistas. [...]En consecuencia, el impacto del Jurado de imprenta, puede medirse también de una manera inversa, en función del éxito del periodista para evitar persecuciones".*[170]

Las acusaciones de sedición al Gobierno durante la República restaurada, según Picato, tuvieron la misma agresividad que durante el periodo de Díaz, la diferencia radicó en el encuentro con un Jurado de imprenta más independiente y con opiniones favorables al Gobierno. Pero las denuncias presentadas contra los escritos subversivos tenían un efecto diferente si la víctima, así fuera un funcionario público, tenía nombre propio y fuera afectado su honor; "*todos los reglamentos y todas las posiciones programáticas en relación con la libertad de prensa compartían la premisa de que el honor definía el único límite universalmente aceptable para esa libertad.*"[171]

[169] PICATO, Pablo. Óp. cit. p. 152.
[170] PICATO, Pablo. Óp. Cit. p.155-156.
[171] Ibíd. p.157.

Esta diferencia gravitaba alrededor de una conexión existente entre la vida privada y la esfera pública a través de las publicaciones, y la racionalidad del Jurado consistió, precisamente en valorar la medida de la ofensa, pesando por un lado la insinuación de la publicación, y por otro la reputación de la víctima. *"El Jurado era menos efectivo cuando la publicación no lograba demostrar que los periodistas habían atacado la vida privada de un funcionario específico. [...] el carácter moral era el tema central de la opinión pública*"[172]

El Jurado de imprenta instaurado en Colombia por el Decreto Ejecutivo 635 de 1886, sólo estaba compuesto por cinco ciudadanos que se encargaban exclusivamente de los delitos de calumnia; en el caso de que existiera la imputación de un hecho falso que de ser cierto, descubriría una falta moral de la persona, y cuyas consecuencias serían el descrédito o la deshonra. También era competente en los delitos de injuria, cuando se publicitaban vicios o excesos de carácter doméstico que no están sujetos a pena por ley, o cuando se litografiaban, imprimían o se reproducían dibujos, caricaturas, alegorías, emblemas o alusiones gráficas cuyo fin fuera la exposición al ridículo a las personas. El Juez del circuito de cabecera de la Provincia, habría de tener injerencia solamente cuando, en el caso de calumnia, existiera una imputación de un hecho falso, que de ser cierto, constituiría la comisión de un delito.

Otra figura instaurada en este Decreto, es la competencia de los tribunales superiores del Distrito Judicial para constituirse también en Jurados, junto con la intervención de Conjueces, cuando se atentara contra la tranquilidad pública excitando a las personas a desobedecer las leyes o las ordenes de las autoridades, o concitar a motines, asonadas o rebeliones (Art. 4º). Dichos conjueces conformados por diez ciudadanos, los cuales se habrían de escoger

[172] Ibíd. p.161.

igual que los Jurados para los delitos de calumnia e injuria, también se formarían en los Tribunales, con el deber de participar bajo pena de una multa de cincuenta pesos o la reducción a prisión por cinco días, en caso de no comprobar excusa para desatender su obligación. Para las violaciones que habrían de suscitar a la rebelión, el Jurado estaría compuesto por todos los Magistrados de dicho Tribunal de distrito judicial, e igual número de Conjueces como Magistrados haya, más un Conjuez más. Los sorteos para los ciudadanos que deben cumplir con este deber, habrían de ser hechos de una manera bastante participativa; mediante un sistema de "bolas insaculadas" y con garantías de rechazo por petición de inhabilidades, inclusive hacia los mismos Jueces del Tribunal. Las acusaciones por estos hechos, ya no serían hechas exclusivamente por particulares, sino que también podrían ser dispuestas por el Ministerio Público, en cabeza del Gobernador del Departamento.

De los Conjueces sorteados y de los Magistrados, el acusado podría hacer uso del derecho de recusar dos Magistrados y dos Conjueces. El propósito era encontrar las maneras de dar garantías a los acusados para que restringieran las fuerzas que pudieran estar inclinadas en la balanza. Este proceso de acusación debería tener un camino largo de garantías, iniciado desde la Gobernación. Para que se pudiera acusar por parte del Ministerio público, se necesitaba de una votación aprobatoria por mayoría en la que participan el Secretario del Gobierno y el Fiscal del Tribunal Superior, además del Gobernador.

Las listas para elección de Jurados se formarían de cincuenta individuos en Bogotá, de cuarenta en las capitales de Departamento, y de treinta en las simples cabeceras de provincia. Esta primera lista estaría conformada por una Junta compuesta por la primera autoridad política de la Provincia (en las capitales de los Departamentos será el Gobernador), los Jueces del circuito que residieran en la misma ciudad y que fueran conocedores de los asuntos criminales, y del

Presidente del Consejo municipal de la ciudad. De esta lista inicial, que se debería formar cada mes de Diciembre, se meterían las bolas por cada uno de los listados, en un saco y en audiencia pública, y el Gobernador o la llamada primera autoridad política, habría de sacar once. De estos once; acusado y acusador pueden recusar cuatro; quedando siete. Cinco principales, y dos suplentes, en caso de algún imprevisto o excusa final de inasistencia.

Pero todo este intento participativo ciudadano, se vería menoscabado por el último artículo del Decreto, que instauraría la intervención directa y autoritaria del Poder Ejecutivo. El esfuerzo de conformar 77 Artículos con el ánimo de instaurar una reglamentación acotada por las normas, se ve deslustrado por el temor constante a las nuevas subversiones. Además del existente Artículo transitorio "K" de la Constitución, el número 78 del Decreto ejecutivo, rezaba así:

> *Art. 78. El Gobierno se reserva la facultad de suspender toda publicación que juzgue violatoria de los Artículos 2º, 3º, y 4º de este Decreto, previo dictamen afirmativo del Consejo de Ministros.*

Estos artículos mencionados, constituyen la totalidad de los delitos de imprenta. Es decir, calumnia. Injuria, el orden social y la tranquilidad pública. En otras palabras, el Ejecutivo podría decidir a su libre arbitrio si suspendía una publicación por cualquier causa. Esta facultad discrecional del Gobierno era explicada por el Ministro Calderón:

> *El Gobierno Ejecutivo [...] estima que sin esta restricción la prensa enardecería las pasiones de partido, en momentos que más se necesita de calma y prudencia, como que se trata de consolidar las nuevas instituciones. El Gobierno Ejecutivo está decidido a no omitir esfuerzo ni sacrificio alguno que sea favorable a la conservación del*

orden, que es la suprema necesidad del país, por lo cual, al hacer uso de la expresada facultad, procederá con toda la energía que las circunstancias requieran.[173]

Y las circunstancias, efectivamente, requirieron para el Gobierno, hacer uso de dicha facultad. Aunque vinieron unos meses de calma, en donde la prensa opositora se expresó libremente. El Ministro Angulo preparaba una nueva arremetida, ya con Payán encargado del Poder Ejecutivo. Precisamente, este General quien estaba investido con el cargo de Vicepresidente, mientras que Campo Serrano era el Primer Designado, estaba encargado de la Gobernación del Cauca, y desde allí se utilizaba todo el poder de la regeneración, encarnado en la facultad expresada en el Decreto mencionado.

El 10 de Noviembre de 1886, por orden expresa del Presidente Núñez, el Ministro de Gobierno Arístides Calderón, le envió un telegrama a Payán para que despidiera al Jefe Provincial del Quindío, Rodolfo Morriones, *"por el lenguaje irrespetuoso que ha usado al dirigirse al supremo Gobierno"*[174]. Obviamente Payán lo destituye en atención a la orden del "supremo Gobierno."

El 20 de diciembre de 1886 llega Payán a Bogotá y se encargaría de la Presidencia el 6 de Enero, recibiendo el poder de la Mano del General Campo Serrano. Su arribo a la capital fue directamente coordinado por el Ministro de Guerra Felipe Angulo, con dignidades excepcionales que empezaban con guardias de honor en Facatativa o en Girardot, dependiendo del camino que tomara el General; la concurrencia del mismo Ministro junto con todos los jefes y oficiales francos, la 5ª división del Ejército, el batallón ayacucho; hasta Cuatro Esquinas en la entrada a Bogotá, y una gran parada "*desde El Paréntesis a*

[173] *Diario Oficial.* Bogotá, 11 de Noviembre de 1886. No.6, 587 p. 1200.
[174] *Diario Oficial.* Bogotá, 23 de Diciembre de 1886. No.6, 629 p, 1367.

Paiba."[175]. Las órdenes del Ministro también incluían que el Gobernador de Cundinamarca, adornara las calles por donde debía pasar la comitiva y la erección de arcos de triunfo en el sitio donde se debía disponer la habitación. Lamentablemente para el General Caucano, su salida de Bogotá no tendría la misma suntuosidad.

El Gobierno habiendo advertido un error en el Decreto 635, decide hacer una reforma en el mencionado artículo. Un mes después de haber sido publicado, es reformado mediante el **Decreto 734 del 24 de diciembre de 1886**, que reforma el artículo 78 del anterior, estableciendo una diferencia en lo que respecta a la función del Gobierno en la ley: "*El Gobierno se reserva únicamente la facultad de suspender toda publicación que juzgue violatoria del artículo 4o. del decreto sobre libertad de imprenta y juicios que se siguen por abusos de la misma"*[176]*.* Es decir, cuando existiera sospecha de ser "subversiva"; dejando la calumnia, la injuria y el orden social para la legislación especial de imprenta, con sus Jurados y Conjueces.

Esta separación del delito se constituyó en la piedra angular para la puesta en marcha de las posteriores normas represivas y así mismo, motivó la andanada de críticas por parte del liberalismo que, básicamente veía una irregularidad legal al no tener permanentemente incluidas las faltas desde la prensa, estrictamente dentro del poder judicial. Las sanciones por parte del poder ejecutivo se salían, desde su punto de vista, de todos los procedimientos legales correspondientes a los principios normativos de una República democrática.

[175] Ibíd. En Paiba, funcionó el matadero municipal de Cundinamarca. La ciudad adornada desde este punto, en el lindero occidental de la ciudad, hasta la plaza de Bolívar, dan cuenta de la Magnificencia del acto.
[176] *Diario Oficial.* Bogotá, 7 de Enero de 1887, no.6916.

2.5. LA DESANDADA DEL GENERAL ELISEO PAYÁN

Después de tomar posesión de la Presidencia encargada por ausencia de Núñez y por estar en primer orden de sucesión; El General Eliseo Payán suspendió tres periódicos entre Enero y el 4 de Junio, fecha en que hizo entrega del poder al Presidente Rafael Núñez. Estos fueron *El Renacimiento,* el 5 de Mayo de 1887; *El Semanario,* el 30 de Mayo de 1887; y *El Cronicón (*no se conoce la fecha). Estas suspensiones mantenían el sello indeleble del Ministro de Guerra Angulo, y la ejecución del Prefecto de Policía, Gutiérrez Prieto.

El Renacimiento, fue quizá uno de los primeros periódicos conservadores de oposición al partido nacional de Núñez. De hecho, la adhesión del partido conservador al movimiento regeneracionista no fue irrestricta, especialmente por grupos de conservadores doctrinarios que posteriormente habrían de encontrar asidero bajo las toldas del conservatismo "histórico". Un ejemplo fue la familia Torres Amaya, quienes desde su periódico iniciaron una crítica respetuosa al Gobierno, tomando distancia de Núñez. La sanción impuesta el 5 de Mayo a *El Renacimiento,* probablemente no tuvo como base Jurídica el regente, para la fecha, Decreto 635 de 1886, sino el Artículo transitorio "K" de la Constitución de 1886. De hecho, el cierre de esta publicación fue extremadamente arbitrario y discrecional pues sus conceptos sobre la Regeneración conservaron un lenguaje respetuoso y nada combativo. Desde mi punto de vista, la base de unidad de la Regeneración habría de ser arañada desde un órgano de opinión crítico a la adhesión del conservatismo; y los liberales independientes que ese año estaban en la cúpula del poder, no podían permitir este tipo de disidencias. En 1887, Alejandro Torres Amaya, ya había empezado a soplar las velas de la disidencia al expresar:

Eliminada la oposición liberal, o radical como la llaman, ¿Qué queda en la arena? Pues en verdad que solo queda el partido conservador, que si tiene elementos morales y materiales, jefes de prestigio y aptitudes. Luego ese Ejército formidable no puede tener otro objeto que mantener a rienda corta a los conservadores. Más claro que La Nación no canta un gallo.[177]

La consideración de no permitir la crítica política desde la prensa, fue para Rafael Núñez un tema crucial de los primeros años después de la promulgación de la Constitución de 1886. Las publicaciones bogotanas, acostumbradas a expresar sus ideas sin miramientos ni responsabilidades de ninguna clase, fueron objeto de advertencias discrecionales, incluso antes de la puesta en vigor de la Carta de 1886, y cuando el Consejo Nacional Delegatario aún estaba reunido debatiendo los asuntos de la nueva normatividad del país. Las nuevas publicaciones debían exponer un permiso emitido por el Gobierno para publicar, pero con una restricción específica. El 16 de Marzo, el Secretario de Gobierno, Arístides Calderón le expidió a Filemón Buitrago el permiso para publicar el periódico *El Semanario,* pero con la advertencia: *"en tanto que no se publique en él nada que tenga relación con la política militante."*[178] El compromiso de la Regeneración con la iglesia también habría de quedar consignado en nuevas advertencias. A finales de Febrero de 1887, el Ministro de Guerra, Felipe Angulo, les notificó a los periódicos bogotanos, mediante una circular fechada el 25 de ese mes, y ante una discusión suscitada entre *El Semanario* y *El Orden,* ambos periódicos conservadores; sobre el papel de los Jesuitas en Colombia:

Deseoso el Gobierno de evitar discusiones que puedan producir, por lo menos, desagrado a la casi totalidad de esta sociedad, cree de su

[177] *El Renacimiento.* Bogotá, 5 de Mayo de 1887. Número 14. p.101.
[178] *El Semanario.* Bogotá, 8 de Junio de 1886. Número 9.p. 65.

deber hacer presente a usted la conveniencia que habría en no permitir que en el Establecimiento tipográfico a su cargo se hagan publicaciones referentes a la compañía de Jesús, bien sea en pro o en contra de esta. En tal virtud, espera el Gobierno que el contexto del presente oficio será suficiente para conseguir el objeto que desea, en lo cual, no duda, será debidamente secundado por usted.[179]

En 1887 *El Semanario* entra en franca discusión política, además del *Orden,* con *La Nación;* periódicos ambos creados para promulgar las ideas de Núñez y del adoctrinamiento de la Regeneración. Esta consideración hacia los periódicos pro – gobiernistas fue también explicitada:

Hoy el órgano semi-oficial del Gobierno debe ser periódico de lucha, porque los tiempos son de lucha; debe ser periódico doctrinario, porque se trata de implantar un régimen cuyos principios es necesario difundir y hacer que penetren en la sociedad, pues en la época que alcanzamos es el convencimiento, y no la fuerza, lo que hace que los hombres apoyen a los gobiernos y den popularidad y prestigio a las instituciones.[180]

En mayo de 1887, *El Semanario* cambió de director por motivo del viaje al exterior de Filemón Buitrago, quedando la responsabilidad de la dirección en Enrique Silva, quien hubo de inaugurar su labor con un mayor afianzamiento del conservatismo doctrinario. Las quejas por el caos político en el cual, según *El Semanario,* se encontraba dividido el país, también mantenían la exigencia de una mayor participación en el poder en 1887, y fueron expresadas de la siguiente manera:

[179] *El Semanario.* Bogotá, 9 de Marzo de 1887. Número 31. p. 241.
[180] *El Semanario.* Bogotá, 24 de Marzo de 1887. Número 34. p.265.

Si el partido conservador ha sido adalid fuerte y leal para ayudar a derrocar un régimen tildado de tendencias anárquicas, de violentas agitaciones y de persecución sistemática a la iglesia, tiene derecho a reclamar en el ejercicio del poder la parte que le corresponde, ya que es por otro lado acreedor en su carácter de partido histórico, lleno de honrosas tradiciones, y digno de regir el país por si solo. Si el régimen político actual es conservador en la teoría, presenta en la práctica verdaderas contradicciones. Hoy por hoy todo anda aquí mezclado: la virtud con la corruptela, la religión con la incredulidad, el doctrinarismo con el militarismo, el régimen conservador, de no muy buena fuente, con el espíritu liberal reaccionario.[181]

Pero la Regeneración habría de imponer su destino político sobre las críticas de las banderas doctrinarias recalcitrantes tanto de liberales radicales como de los conservadores no afines. *El Semanario,* desde su trinchera arreció sus críticas, y el 30 de Mayo de 1887 hubo de encontrar su sanción, después de despacharse con sendos editoriales en su edición del 26 de dicho mes sobre la irresponsabilidad presidencial y contra las medidas tomadas contra la prensa. Acusado de subversivo por los ataques hechos hacia las nuevas leyes de 1886, fue suspendido el 30 de Mayo de ese mismo año.

Existiendo un malestar originado desde la instalación del Consejo Nacional Delegatario, debido a que el Radicalismo Liberal, que tenía una innegable aceptación en todos los antiguos Estados, no tuvo participación en la construcción de la nueva carta Constitucional. Por esta ausencia se mantuvo latente un principio de inconformidad permanente durante todos estos años finalizando el Siglo XIX. La agitación política era frecuente en todos los lugares del país y la

[181] *El Semanario.* Bogotá, 20 de Mayo de 1887. Número 43. p 333.

alerta del Gobierno exacerbada y materializada en una desconfianza hacia los Generales del Liberalismo independiente que habían apoyado a Núñez: Vicente Aldana, Santodomingo Vila, Solón Wilches y Gonzáles Lineros, que poco a poco fueron siendo retirados de la acción del Gobierno, habrían de generar problemas al proceso de centralización que se pretendía con la nueva Constitución; pues el caudillismo representado por estos personajes en sus Estados necesitaban del ojo avizor y del permanente seguimiento.

> *Que la revolución se acercaba era cosa que se veía claramente, pues se hallaba en la conciencia de todos. Juntas, compra de armas, empréstitos cuantiosos, reunión de enemigos del gobierno en la frontera venezolana. Una línea negra se apercibía rayando el mapa de la república desde Cúcuta hasta Tunja. En las principales ciudades de Santander hubo alarmas, porque se creía que de Venezuela vendría el armamento que los revolucionarios compraron en Bélgica.*[182]

La supuesta conjura fue desarmada en varios lugares del país. En el Diario Oficial, los diarios semi-oficiales, y en los de apoyo al Gobierno, fueron publicadas cartas firmadas por ciudadanos de diferentes regiones del País. Las felicitaciones por parte de todos los defensores de la Regeneración hacia el Ministro de Guerra Felipe Angulo y el Presidente Rafael Núñez, fueron numerosas. Esta muestra firmada en Cartago el 20 de abril de 1887 expresa la situación:

> *Sabedores de que los vencidos en la pasada lucha maquinan de nuevo contra el orden público, y que en el propósito de producir en la filas del partido nacional una descomposición que favorezca el éxito de sus planes subversivos, divulgan malignas especies que pueden sembrar*

[182] OTERO MUÑOZ, Gustavo. La vida azarosa de Rafael Núñez. Bogotá: Editorial ABC, 1951. p.300.

desconfianzas y recelos entre los miembros del mismo partido, nos apresuramos á manifestar: Que ningún efecto conseguirán en nuestro ánimo las gastadas argucias de los que hoy apelan en sus miras siniestras al consejo aquel de Maquiavelo: dividir para reinar [183]

Pero las teorías del desmantelamiento de las conjuras Radicales, podrían haber tenido un propósito diferente, cimentado en la celebración de elecciones. La llamada vulgarmente revolución o conspiración de Conto, según el Gobierno, fraguada desde el Cauca y articulada en Bogotá, terminó con la reducción a prisión, el 19 de Marzo de 1887 en Cali, de los miembros del directorio Liberal, de la Comisión Eleccionaria, y los redactores de *El Republicano.* Los Generales Rafael Aizpuru y Benjamín Ruíz fueron apresados en Panamá y enviados en un buque de vapor fuera del país; el General B. Correoso fue puesto preso y al diario *El Sufragio* de Colón, le fue suspendido el permiso para publicar. Igualmente, el 18 de Mayo, víspera de las elecciones, fueron encarcelados el General Santos Acosta, Sergio Camargo, Venancio Rueda, M. A. Piñeres, Felipe Pérez y Cesar Conto (quien había sido Presidente del Estado Soberano del Cauca, entre 1875 - 1877). La coincidencia de la desarticulación de la conjura subversiva con la celebración de las elecciones despertó la suspicacia del Liberalismo Radical, especialmente cuando después de más de diez mil electores inscritos en Bogotá, sólo votaron 3,500, en su mayoría empleados públicos o militares. La derrota del Liberalismo y el afianzamiento de la regeneración fueron mayúsculos y con poco contrapeso.

No obstante su espíritu liberal, ahora metamorfoseado a través del Partido Nacional, Eliseo Payán también ejecutó la ley de Prensa, en un comienzo, reconociéndola como un "*poderoso elemento [que] debe juzgarse con el mismo*

[183] *Diario Oficial*. Bogotá 16 de Mayo de 1887. Número 7045.

criterio que regula a las demás entidades: Toda la libertad necesaria para que llene su fin civilizador, pero también todo el lastre indispensable para que no vulnere los derechos del individuo, ni del pueblo ni del Gobierno"[184]*.* Desde esta perspectiva, y en uso del artículo transitorio K que adjudicaba al Gobierno la facultad de reprimir sus excesos, le ordena al Gobernador de Cundinamarca la suspensión del Periódico *El Renacimiento*, que *"a juicio del Gobierno, ha perdido, por sus abusos, el derecho á la publicidad"* además de extender esta orden a otras publicaciones que se encuentren en circunstancias semejantes, el General Payán le reitera al Gobernador *"La altísima importancia que el asunto tiene para el Gobierno, quien está convencido de que su acción en el sentido expuesto es civilizadora, [...] seguro de que el fallo de la historia ha de serle favorable*"[185]

El 4 de Junio de 1887, Rafael Núñez toma posesión nuevamente de su cargo con el propósito definitivo de afianzar la Regeneración aún a costa de la represión de Libertades individuales, y ante la amenaza siempre latente de la subversión radical. Miguel Antonio Caro, entonces presidente del Consejo de Delegatarios lo expone claramente en su discurso de bienvenida dando cuenta de los principios consagrados en la Constitución: *"En esta Constitución halláis consagrados principios salvadores; [...] fundado el imperio de la justicia, que es refugio de los débiles; las libertades omnímodas, calamidad grande, reprimidas".*[186] De la misma forma, el Vicepresidente Payán aceptaba la adhesión irrestricta a las premisas del Gobierno al recibir a su superior expresando su cumplimiento del deber:

> *Nada que esté fuera de vuestra perspicacia en materia de Administración y Gobierno, puedo deciros; pero cumple a mi deber, en fuerza de la sinceridad de mis convicciones, significaros que si queréis*

[184] *Diario Oficial*. Bogotá, 23 de Mayo de 1887.Número 7054.
[185] Ibíd.
[186] *Diario Oficial*, Bogotá. 6 de Junio de 1887.Número 7066.

conseguir la felicidad de Colombia, revistáis vuestra autoridad de la más severa energía, en el convencimiento de que todos vuestros conciudadanos, entre estos yo, el más decidido, estamos prontos a acompañados para la consolidación en el País de un Gobierno serio, al par que honrado."[187]

Núñez le responde con un discurso preventivo, en donde además de agradecerle su lealtad y renovarle sus votos de amistad, le indica que *"La debilidad de los mandatarios públicos, compromete los grandes intereses sociales, siempre amenazados por minorías turbulentas que no saben vivir sino en el desorden*"[188]

Inmediatamente son enterados los encargados del Ejecutivo, de los aires de renovadas fortalezas hacia las conjuras conspirativas con los que asumió nuevamente el Presidente Núñez, sus Ministros de Gobierno, Felipe Paúl, y de Guerra, Felipe Angulo, asumen con entereza la tarea de indicar a las Gobernaciones la necesidad de vigilar con ojo avizor a las imprentas. En Junio de 1887, el Ministro de Guerra le da las indicaciones necesarias al Gobernador de Cundinamarca: *"El Supremo Gobierno le reitera la orden de que, de un modo terminante, prevenga á los Directores de las imprentas de esta ciudad que se abstengan de hacer nuevas publicaciones periódicas, mientras no se dicte el decreto que, de acuerdo con el artículo K de la Constitución vigente, se halla en preparación".* [189] Igualmente le solicita averiguar si un periódico nuevo llamado *El Partido Nacional*, es continuación del llamado *Semanario*, ya suspendido por el Gobierno. Efectivamente ambos son suspendidos indicando el inicio de la práctica de abrir periódicos nuevos tras la sanción de otros. *El Semanario*, dirigido y

[187] Ibíd. p. 626.
[188] Ibíd.
[189] *Diario Oficial*. Bogotá, 9 de Junio de 1887. Número 7069.

redactado por Filemón Buitrago llevó a que, bajo el nombre del Partido Nacional[190] y con redactores anónimos fuera suspendida la imprenta de Torres Amaya.

El Ministro Angulo expone que, aunque no es el propósito del Gobierno *"realizar el milagro de suprimir las oposiciones Constitucionales"*[191], si tiene el deber de castigar y reprimir los desmanes de la Prensa revolucionaria ya que, no controlar la Prensa, sería como "*cruzarse de brazos en presencia de un alzamiento armado*"[192] y le recuerda al Gobernador que es necesaria la represión como mecanismo para moldear la estabilidad del Gobierno.

La importancia de la opinión de la Prensa y su papel como garante de los bienes públicos ya había sido consignada en el Decreto 635 de 1886 y muchos diarios bogotanos criticaron la importancia prioritaria que el Gobierno le había dado a la ejecución de la construcción del Ferrocarril de Girardot. Sin embargo, también algunos diarios que apoyaban la medida se expresaron en una carta firmada por los directores de El Telegrama, El Orden, Las Noticias, El Sol, La Nación, El Taller y La Revista Judicial, ya que:

> *Los votos de la Prensa de la Capital, que son también los de la opinión pública, se unen en la esperanza de que los escasos recursos del tesoro de la Nación no se distribuyan en diversas mejoras materiales de dudosa reputación, y en la que de los diferentes proyectos é ideas sobre vías férreas, se sustancien y se unifiquen, por ahora en la conclusión del ferrocarril de Girardot*.[193]

---

[190] Efectivamente, este periódico solo publicó un número, el 7 de Junio de 1887, bajo la firma de Francisco de P. Torres Amaya como "editor propietario", tienen origen en el conservatismo opositor, que unos años más tarde tomarían bandera dentro de los "históricos".
[191] *Diario Oficial.* Bogotá, 9 de Junio de 1887. Número 7069. p.640.
[192] Ibíd.
[193] *Diario Oficial*. Bogotá, , 20 de Junio de 1887. Número 7081.

Entre octubre y septiembre de 1887, salen los primeros desterrados de la desbaratada conspiración. Desde el cuartel del Batallón Sucre en Barranquilla, suscriben una carta firmada por Juan Manuel Rudas, Lino Ruiz, Modesto Garcés, Vicente Aldana, y Ricardo Vásquez Posse, que posteriormente sería publicada en *El Correo Liberal.*

> *El Dictador Núñez ha resuelto expulsarnos del seno de la Patria. En plena paz fuimos militarmente reducidos a estrecha prisión, y hemos recorrido, entre filas de bayonetas, cerca de setecientas millas, hasta tocar las playas del Atlántico. ¿Y por qué un atentado semejante? Se nos expulsa, dice el periódico que lleva la palabra del señor Núñez, "POR RAZONES DE ORDEN PÚBLICO"*[194]

El fenómeno de la Regeneración necesitaba de una congregación Nacional de Liberales y Conservadores excluyentes de los elementos que pudieran subvertir este nuevo orden. En el proceso para la gestación de un modelo nuevo, que habría de construir la Nación, podría pensarse que estas políticas eran la culminación del proyecto Conservador; pero en realidad fueron las adhesiones de ambos partidos quienes mantuvieron el afán de legar a los ciudadanos una nueva orientación más apegada a las leyes y a la centralización del aparato Estatal. La resistencia del mismo partido conservador también se evidenció desde sus críticas al Partido Nacional, además de la del Liberalismo Radical.

Para la nueva orientación ciudadana, la regeneración hubo de necesitar a la iglesia como factor convocatorio y de cohesión de la sociedad Colombiana. La fabricación de un ciudadano católico y virtuoso, fue cerrando los espacios para el Liberalismo radical. Los medios Periodísticos que eran su principal vitrina, fueron

[194] ESCOBAR URIBE, Arturo. Óp. cit., p.263.

tratados como el verdadero "tósigo" que envenenaba a los ciudadanos. Igualmente, el régimen regenerador necesitaba de una prensa reproductora de "la verdad" del Estado que, apegada a la ley, fiscalizara las actuaciones públicas, pero ahora, aparejada con las armas probatorias adecuadas. La nueva verdad, también habría de mirar desde la publicidad los intereses de los ciudadanos, no desde el punto de vista Partidista, sino desde los intereses Nacionales; con los apegos a las leyes y a la religión, sostenidos ambos por la "infinita y respetable" autoridad del Estado. Por ello, después de aplastada la supuesta conjura urdida a comienzos de 1887 por los Radicales y, definitivamente agigantada por el Gobierno como subterfugio para continuar apretando clavijas, tuvo a través del diario *La Nación*, subvencionado por el Estado, una muestra para aprovechar la ocasión de continuar con la diatriba de:

> *La unión de los grandes partidos, purificados de elementos díscolos, para establecer una autoridad común, ha resultado que el Gobierno que ellos han constituido, se levanta como poder distintivo de sus electores, los cuales lo sostienen, no sólo con esfuerzos egoístas, sino con sacrificios generosos de intereses particulares o de círculo en aras del interés Nacional. Se quiebra la noción de partido y se vigoriza la de Gobierno, fenómeno consolador, anuncio de que hemos iniciado realmente la era de la "autoridad", que antes sólo existía en teoría, ó se confundía en la práctica con el predominio de una parcialidad*[195]

Por su parte, el radicalismo diagnosticaba como natural el paso de los conservadores hacia el poder mediante la estrategia de alianzas, pero criticaba, cada vez de una manera más personal, la traición del independentismo liberal y el fárrago en la tradición repartidora del poder. *"Si el partido dominante fuera*

[195] *La Nación*. Bogotá, 8 de diciembre de 1887. Citado en: *Diario Oficial*, Bogotá, 13 de diciembre de 1887. p. 1368.

netamente conservador ó netamente independiente, no habría la confusión de que nos quejamos" [196] expresaba Santiago Pérez en *El Relator*. Y su queja consistía en no encontrarle una sola bonanza al Gobierno. De hecho, a la soliviantada retahíla de criticar el concubinato entre independientes y conservadores, "*mientras que* [el país] *se idiotiza ó se entretiene en ver hasta dónde el aguijón de cada partido entra diariamente en la piel de su colega"*,[197] empezaron a urdir la necesidad del establecimiento de distancias: *"¿Y hay alguna posibilidad de que suceda lo que indicamos? Creemos que hay algo de eso; creemos que hay síntomas, que los médicos llamarían alarmantes, pero que para nosotros no son."*[198]

Con el regreso de Núñez en Junio de 1887, hasta la nueva separación del poder en Diciembre de 1887, solamente fue suspendido el mencionado *El Partido Nacional*, sujetando la prensa por un corto periodo al temor de la imposición estricta de la ley discrecional del Ejecutivo. Pero la situación habría de cambiar.

2.5.1. LA CONSTITUCIÓN NO ESTÁ SUJETA AL CRITERIO DEL EJECUTIVO.

Rafael Núñez continuaba confiando en sus antiguos aliados liberales. La seguridad en el espadón envainado del viejo general se vuelve a advertir cuando desde Anapoima, y debido a sus quebrantos de salud, despacha un telegrama el 5 de diciembre de 1887 anunciándole que "*desde el día 13 próximo me separaré temporalmente por causa de enfermedad, del ejercicio de Gobierno*. *Sírvase V.E. de encargarse desde dicho día de tales funciones y dar conocimiento de ello á la Nación*"[199], Y el 13 de diciembre de 1887, ya en el ejercicio, Payán decreta su posesión anotando que las funciones de los actuales Ministros continuarán siendo

[196] *El Relator*. Bogotá, 27 de Febrero de 1888. p. 1057.
[197] Ibíd.
[198] Ibíd.
[199] *Diario Oficial*. Bogotá, 14 de diciembre de 1887. p. 1369.

desempeñadas. Declarándose nuevamente como "*soldado de la Regeneración [...] ajustando para esto todos los actos de mi Gobierno al estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes.*"[200]

Pero el Vicepresidente ya tenía preparadas las acciones a seguir una vez el Presidente Núñez dejara el poder. El 16 de Diciembre firma el Decreto 775, convocando al Congreso a sesiones extraordinarias, cuestión sumamente molesta, máxime teniendo en cuenta que se acababa de aprobar la nueva Constitución, y que dicha corporación debía reunirse sólo a partir del 20 de julio. Las aproximaciones del radicalismo al General, reclamándole mayor coherencia con sus ideas anteriores, se vieron materializadas en la firma del Decreto del 19 de diciembre de 1887, tan sólo catorce días después de ser encargado del Ejecutivo. **El Decreto Número 779 de 1887**, revertió las medidas coercitivas contra la prensa, especialmente el artículo 78 del Decreto 635 de 5 de Noviembre de 1886, que expresamente autoriza al Gobierno a suspender cualquier publicación, previo dictamen del consejo de Ministros. La trascripción del citado Decreto es clara:

El Presidente de la república de Colombia

DECRETA:

Art. 1º, En observancia del artículo 42 de la Constitución, y por estar la República en paz, se declara libre el ejercicio de la Prensa, con las restricciones que el mismo artículo establece.

Art. 2º A este efecto se declara de nuevo, en toda su fuerza y vigor el Decreto del Poder Ejecutivo número 635 de 5 de Noviembre de 1886, menos en su artículo último ó 78, el cual se deroga expresamente por

[200] Ibíd.

el presente Decreto. En consecuencia, y mientras la ley no disponga otra cosa, no se suspenderán en ningún caso las publicaciones de la prensa, sino que deberá castigarse oportuna y eficazmente á los que abusen de ella.

Art. 3º Es entendido que por el Decreto de 5 de noviembre de 1886, antes citado, y por el presente, quedan cumplidos los efectos del Artículo K transitorio de la Constitución.

Art. 4º Se excita al señor Procurador General de la Nación y a todos los Agentes del Ministerio Público á que procuren con la mayor diligencia que no queden impunes las violaciones que, en uso de la libertad de imprenta, tengan lugar contra lo establecido en el Artículo 42 de la Constitución, y cuiden, concurriendo con la voz de la vindicta pública de que las prescripciones de los Decretos del Gobierno tengan fiel y exacto cumplimiento.

Dado en Bogotá, á 19 de Diciembre de 1887.

ELISEO PAYÁN.

El Ministro de Gobierno,

FELIPE F. PAÚL.[201]

Inmediatamente, al otro día de la publicación del Decreto, presenta su renuncia el Ministro de Guerra, Felipe Angulo expresando su desacuerdo con la medida, probablemente todavía con el recuerdo de la recién extirpada conspiración:

Desgraciadamente, para el País, no ha llegado aún, en mi opinión, la época en que se pueda, sin peligros, abrir las válvulas de la Prensa. Tengo la convicción patriótica de que todo paso en el camino indicado, traerá consigo la perturbación del juicio público, precisamente en los

[201] *Diario Oficial*. Bogotá, 19 de diciembre de 1887. p. 1385.

momentos en los que los Gobernantes necesitan de mayor serenidad de espíritu para dar bases sólidas al nuevo orden de cosas. No estoy, en consecuencia, de acuerdo con vuestro decreto No. 779, de 19 de corriente mes; y por tal motivo os presento mi renuncia irrevocable del puesto de Ministro de Guerra. [...] Bogotá diciembre 20 de 1887[202]

Ese mismo día, el Presidente encargado le responde enérgicamente que le acepta la renuncia, *"Considerando que la vigencia y aplicación de la Constitución no están sujetas al criterio del que ejerza el Poder Ejecutivo, ni á Ministro alguno de él"*[203], en consecuencia, inmediatamente nombra para la cartera vacante, a Miguel Montoya, al mismo tiempo que, en el mismo Diario Oficial publica un telegrama de apoyo del dirigente Conservador Antioqueño Marceliano Vélez desde Medellín. Por su parte, Angulo, Ministro caracterizado del "independentismo" liberal, inmediatamente se puso en marcha hacia Cartagena para anunciarle al Presidente, las "novedosas" disposiciones peligrosas que estaban sucediendo en la capital. Tal era la urgencia de no permitir que los enemigos del régimen levantaran nuevamente barricadas y tribunas desde los periódicos que Núñez, desde el periódico "El Porvenir" de Cartagena, escribe un editorial el 22 de enero de 1888, 33 días después de la desandada de Payán, en donde expresa:

La prensa, sobre todo, requiere sostenida vigilancia, para que no se vayan a reaparecer, so pretexto de libertad de pensamiento, las viejas tendencias de irrespeto y mordacidad con que las plumas mercenarias buscan el camino de los medros, escudándose con una inmunidad a que solo es acreedor el que escribe con elevación de mira. El verdadero sacerdocio exige también verdaderos sacerdotes y no

[202] *Diario Oficial*. Bogotá, 21 de diciembre de 1887. p. 1395.
[203] Ídem

juglares. En Colombia no hay un solo diario, lo que demuestra que no ha llegado todavía la hora de la auténtica expansión tipográfica. [204]

Un año más tarde, cuando Miguel Antonio Caro defendía con ímpetu la continuidad del Decreto 151 de 1888 en contra de un proyecto de ley de Prensa presentado por el Senador Guillermo Uribe con el propósito de reglamentar la Constitución en reemplazo de los Decretos transitorios, se refirió a este episodio como si al General Payán;

Asaltárosle escrúpulos sobre la constitucionalidad del artículo final del Decreto, de un artículo que decía menos que el constitucional K, y del que había hecho uso el mismo general pocos meses antes. [...]en vez de reformar el difuso decreto, dejólo en pie, derogando únicamente la disposición final, declarando de este modo que renunciaba el ejercicio de la facultad que la Constitución confería al Gobierno; y se entendía, por ilación lógica, que el Gobierno no cumpliría con los deberes consiguientes al ejercicio de aquella facultad.[205]

Igualmente, dice Caro que el periódico *El Correo Liberal* efectivamente corrió a expresar en sus páginas "la blasfemia, la sedición y el escándalo". Aunque algunos periódicos de Bogotá se lanzaron al ruedo ante la defensa de las instituciones, pareciendo que la Prensa hubiera regresado a los días en que "echar hoja" era la defensa más articulada para combatir los abusos.

Aunque probablemente, esta mínima "liberalización" de la Prensa, que se dejó venir como una catarata represada, no hubiera alcanzado en poco tiempo, la

[204] El Porvenir. Cartagena, 22 de Enero de 1888
[205] CARO, Miguel Antonio. Libertad de Imprenta. Artículos publicados en LA NACION en 1888. Imprenta nacional, Bogotá 1889. p.,87-91

situación de la época de "irresponsabilidad absoluta", ya que la normalización instaurada por el Decreto 635 de 1886, controlaba la calumnia y la injuria, desde la perspectiva de que el ofendido pudiera acusar con la garantía de una regulación existente; si influiría en el futuro para el control político del Gobierno de la regeneración, ya que la prensa opositora sin sujeción al control autoritario, regurgitaba permanentemente el peligro de instar a la subversión. Por eso, durante los primeros meses de 1888, la prensa radical no desaprovechó la oportunidad de criticar abiertamente al Gobierno, de paso expresando alborozo por la desandada de Payán en la misma forma en que:

> *Fresco y copioso manantial le parece al viajero, que en el desierto se muere de sed, la menguada porción de agua tibia e infecta que logra descubrir en el hueco de una roca; y quien está a punto de perecer asfixiado, aspira con ansiosa delicia cualquier escaso soplo de aire que por dicha le llega*[206].

Igualmente, don Fidel Cano reconoce la necesidad por la cual, desde este camino abierto, la Prensa *"llegue a reconquistar la plena libertad que por más de veinte años otorgó a amigos y a enemigos el partido liberal*." Y efectivamente hace el llamado para que "*Ejerzamos este limitadísimo derecho de defensa, sin desperdiciar ni un átomo de la escasa libertad que se nos otorga; usemos de ella sin provocar estéril e imprudentemente la cólera de los carceleros, pero también sin temer sus fallos cuando la conciencia nos mande desafiarlos*"[207]

En este corto periodo, la prensa radical efectivamente abrió la compuerta a los ríos de tinta que esperaban materializarse en críticas al Gobierno, algunas de ellas de

[206] *El Espectador.*, Medellín, Enero 10 de 1888: citado por: PEREZ, Felipe y otros. Periodistas Liberales del siglo XIX, Biblioteca aldeana de Colombia. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 1936. p. 139-141.
[207] Ibíd.

carácter ofensivo. Es muy conocido el episodio de una caricatura hecha al Presidente Núñez, que fue relatado por Doña Soledad Román de Núñez cuando su esposo se enteró de la publicación de una caricatura:

> *Rafael era muy sereno... Sin embargo, una vez lo vi encendido de ira, como nunca antes ni después. El motivo de la rabicana fue una caricatura soez de un periódico de Bogotá. Como usted sabe —le contaba a Daniel Lemaitre—, Daniel Reyes, secretario entonces de la presidencia, es moreno. Pues bien, los enemigos publicaron un grabado en el cual figuraba yo en trance de dar a luz un negrito y asistida por María Alcázar y Escolástica Grice, la mujer de Carlos Putnam. ¡Jamás vi a un marido tan sulfurado! Su indignación era incontenible. Si llego a saber quién es el autor de esta asquerosidad, le pego un balazo, me decía.*[208]

En Enero de 1888, el Vicepresidente Payán ejerciendo el Poder Ejecutivo, publicó en el diario oficial un proyecto de ley de imprenta que había sido elaborado el 21 de Marzo de 1887 por Demetrio Porras, miembro de la sesión segunda del Consejo de Estado, así como también la exposición de motivos que llevaron a la elaboración de dicho documento.

Este proyecto de ley tenía cabida en concordancia con la suavización de las medidas tomadas hacia la prensa por Payán. Difiere de las providencias más autoritarias de Núñez, especialmente en la sujeción y castigo de los delitos a la legislación penal. y en la negativa a suspender a los periódicos impresos más que en cinco casos específicos: Publicar noticias falsas o de guerra, provocar a la desobediencia de la constitución y las leyes, ofender a los Gobierno extranjeros,

[208] POSADA ARIZMENDI, Ignacio. Presidentes de Colombia, 1810 – 1990. Bogotá: Editorial. Planeta., 1989. p. 176.

Insultar a las autoridades, y cuando se hagan comentarios o apreciaciones que comprometan el interés de la Nación.

Pero quizá la gran diferencia jurídica, estriba en el no reconocimiento de "delitos de imprenta" sino de "delitos que se cometen usando la imprenta". Esta diferencia es clave porque no enmarca a la prensa dentro de una jurisdicción especial. En todo caso, en las consignas para flexibilizar la ley, se pueden vislumbrar unos castigos menos severos tales como una suspensión máxima de dos meses, que prescribe a los ocho días de publicado y la salvedad de que *"fuera de los casos enumerados, [...] en ningún otro podrá ordenarse la suspensión ó la supresión del periódico"*[209] y que en el artículo 33 del proyecto quedaran derogadas todas las disposiciones anteriores sobre la materia.

Porras dice en su proyecto que, debido a que la prensa puede convertirse en un instrumento de delincuencia y de difamación, es "*justo, natural y lógico [...] que se castiguen los delitos y las faltas que por este medio se cometan, sometiendo á la ley penal común a sus autores"*[210] y elude toda legislación preventiva sobre la materia, por considerarlos atentatorios al derecho y a la función social, con la única orilla de sujetar los delitos de los autores y no del periódico, a la ley común; *"debiendo restringirse en lo posible la intervención de las autoridades gubernativas en las cuestiones de imprenta, las que hemos visto frecuentemente dominadas por las cuestiones de partido."* Y quizá, al expresar su razón última de: "*yo no deseo sino el restablecimiento en esta materia de las condiciones normales del sistema constitucional."*[211]; se le olvidaba al doctor Porras que, para "La Regeneración" faltaban aún muchos años de legislación severa como para calificar la política y las leyes de "condiciones normales". De hecho, el rápido regreso de Núñez a

[209] Bogotá, *Diario Oficial*. 18 de Enero de 1888. p. 82.
[210] Ibíd. p. 81.
[211] Ibíd.

Bogotá, puso de manifiesto que la cuestión de la prensa no podría dejarse al sino de un General y un consejero de Estado titubeantes en la materia; pero sobre todo, con un ferviente deseo de liberar las leyes de imprenta, preparando así la próxima contienda electoral: *"para que las opiniones legítimas tengan medios de hacer sentir su influencia saludable en los comicios"*. [212] Los radicales todavía permanecían acechando, y unas elecciones azuzadas con posibles calumnias hacia los actos del Gobierno, no habrían de poder permitirse, si la regeneración quería continuar asida del poder.

Este proyecto de ley, dirigido al Concejo Nacional Delegatario era la excusa perfecta para reglamentar el artículo 42 de la Constitución, dejando sin piso los Decretos transitorios represivos y posibilitando la mayor participación del Liberalismo Radical. Quizá el propósito de Payán era nuevamente abrirle la puerta al radicalismo para su participación en el poder. Luego, aflojar el bozal, no solo era contraproducente para el propósito de Núñez, sino que podría revertir todo su modelo estatal, si se llegara a contar con el Radicalismo nuevamente bailando en la pista democrática.

Pero quizá los ánimos exacerbados en el momento, contribuyeron a henchir de razones la facultad de represión del Gobierno. De hecho, las puertas abiertas nuevamente por Payán, que condujeron a críticas, en el mayor de los casos desmedidas y ofensivas; especialmente contra Núñez, le proporcionarían la base a Carlos Holguín, cuando fue encargado del poder Ejecutivo, para comentar sobre el episodio cuando expresó sus memorias al Congreso en 1892. Al recordar el citado suceso, especialmente tras la elevación de numerosas peticiones de parte de los periódicos radicales para que el General levantara las medidas contra la

[212] Ibíd.

prensa, y así poder discutir las grandes reformas que acababan de ser efectuadas, terminó con el incremento de la desazón del Gobierno por la reacción de la prensa.

> *Todos esperábamos oír grandes razones contra la reforma Constitucional acometida por el Consejo, o disertaciones más o menos elevadas sobre la nueva situación... Terrible fue el desengaño. No se trajo al debate ni siquiera una sola de las cosas que resolvió el Consejo. Todo el empeño pareció cifrarse en hacer recriminaciones odiosas y apasionadas, en insultar ciudadanos respetables o en blasfemar de las cosas más sagradas. Al fin la lucha degeneró en especulación, y creyéndose que el periódico se vendería más y dejaría mejores utilidades a medida que exagerase más su exaltación, se empeñó tal competencia entre los mismos que sostenían idénticas opiniones políticas, que [...] se hizo preciso suprimirlos a todos.*[213]

La esperanza de un regreso al poder del Radicalismo, fue nuevamente revivida, cuando el General Eliseo Payán, decide que es tiempo de la vuelta a casa de los, hasta hace poco, desterrados. [214] De esta manera, *El Correo Liberal* se apuró en exaltar las cualidades de los bienvenidos liberales bajo el título de "Los desterrados que llegan", mediante la publicación de cortas biografías por entregas. Estos fueron: Aquileo Parra, Juan Manuel Rudas, Modesto Garcés, Luís Bernal, Lino Ruiz (el único periodista conservador y opositor a Núñez), Abraham Acevedo (este General Bogotano murió en Costa Rica, antes de regresar por el indulto), Reinaldo Vásquez, Daniel Aldana, Carlos Martín, Ezequiel Cuartas, y Ezequiel

[213] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro. Óp. cit. p. 902.

[214] "Decreto de 1 de enero de 1888. sobre indulto. Yo Eliseo Payán, presidente de la República, Decreto: art 1. concedo indulto a todos los ciudadanos que por orden del Gobierno, permanezcan retenidos fuera del país por motivos de orden público. Art 2. Concedo igualmente indulto a todos los individuos que han sido sentenciados por Consejos de Guerra por motivos políticos, dando cuenta de la disposición de este artículo al Consejo Nacional Legislativo para su aprobación e improbación" La Prensa. Bogotá, 8 de Enero de 1888

Hurtado.[215] Todas estas medidas, vieron acalorar los ánimos de los simpatizantes, que veían la desandada como un augurio del fin de las medidas autoritarias y la viabilidad de un cambio de poder. Quizá Payán también lo pensó, porque sus medidas fueron extremadamente rápidas y sin brindar la posibilidad de discutirlas con el Presidente Núñez.

Este ablandamiento, que provocó el decidido respaldo del liberalismo al vicepresidente, fue expresando frente al palacio presidencial por simpatizantes radicales, y sus desavenencias con el Presidente Núñez estuvieron mediadas por el uso de los gritos de vivas y mueras, sin contemplar en su febril efervescencia, que los Ministros leales a Núñez aún seguían despachando bajo las premisas de la regeneración, y que su jefe aunque ausente, podría tomar, como de hecho ocurrió, este acto de expresivo irrespeto como una provocación a su potestad.

Las opiniones de los liberales convencidos de la necesidad de que Payán aflojara completamente las ataduras, no obstante el citado decreto expedido para suavizarlas, fueron remitidas de muchas maneras al General encargado del Ejecutivo, desde la prensa. El escritor Lino Ruiz, le envió una carta fechada el 8 de Enero de 1887, en donde le suplica que retire todo decreto regulador de la Prensa, aduciendo que:

[215] A este General, Núñez le hizo seguir consejo de guerra, pidiendo la pena de muerte por traición a la patria, esta le fue conmutada por el destierro. Recién ganadas las elecciones de 1884, Núñez no tomó posesión de la Presidencia, sino que marchó, según unos por motivos de salud y otros por motivos de paseo, a Curazao; encargando a Ezequiel Hurtado, en su calidad de primer designado, de la Presidencia. Despachó Hurtado, según su criterio, desde el primero de abril hasta el 11 de agosto, cuando el titular regresa y asume el mando. Los meses de ausencia de Núñez provocaron la infiltración radical en el pensamiento de Hurtado, azuzando para que este tomara la decisión de declarar vacante el cargo y asumir plenamente la Presidencia. La conjura resultó medianamente exitosa, pues cuando Núñez asume nuevamente el poder, Hurtado molesto y exaltado toma abierto partido por los radicales luchando a su lado en la guerra de 1885 y en 1887 fue desterrado.

Las tempestades no se forman en un vaso de agua ni en una mesa de redacción. Es el calvario del silencio forzado; de la queja no escuchada y á la que se responde con el látigo del Fiscal: son los dolores ocultos los que producen las grandes conmociones [...] matar la prensa es cometer una mutilación social: es arrancar a la sociedad la primera de sus fibras vitales. [Y le exhorta para que:] Despojaos, señor, de la tremenda facultad reservada al Gobierno de suspender toda publicación que, a su juicio, sea violatoria del Artículo 4º del decreto sobre imprenta[216]

Por su parte, las publicaciones amigas del Gobierno reaccionaron contestando las propuestas de los periódicos Radicales con fuerza. *La Equidad*[217] periódico conservador, redactado por Rodolfo Roa Alburquerque y amigo del Gobierno, defendió las leyes de prensa, criticando la extrema libertad expedida por la legislación de Rionegro, y refiriéndose al partido radical como una "pestilente y cancerosa llaga". Llama la atención su discusión sobre historia, con el *Correo Liberal*[218], especialmente sobre las sociedades democráticas caucanas y el papel de los jesuitas. Critica también a *La Prensa*[219] cuando, bajo la firma de un redactor llamado B.K.L, aconsejó al General Payán, al correr el rumor del retorno de Núñez al poder, que este fuera recibido a cañonazos y que se apoyara en los radicales, talvez como consecuencia de la revocación del general Montoya como ministro y

[216] *El Precursor*, Bogotá, julio 11 de 1889. p. 6.
[217] Este periódico semanal, dirigido por Rodolfo Roa Albuquerque, y editado por Eustacio Escovar, sólo publico 8 ejemplares, desde el 19 de Enero de 1888 hasta el 16 de Marzo del mismo año.
[218] Juan de Dios Uribe "el indio" fue el redactor de este periódico. Con tan sólo ocho números (el primero vio la luz el 1 de Enero de 1888 y el último el 4 de Marzo de 1888) expresó en sus páginas todo el inconformismo político radical, además de insultantes epítetos contra el Gobierno. La persecución del Gobierno contra este personaje fue contundente.
[219] Redactado por Enrique Troncoso, este periódico publicó su primer número el 1º de Enero de 1888 y su último, el número 9, el 28 de febrero de 1888. De talante liberal radical, fue notificado de su suspensión el 1º de Marzo de 1888, a través de Carlos Holguín, y del mismo Rafael Núñez.

el regreso de Angulo. *La Equidad*, también critica a Cesar Conto de *El Liberal*[220], endilgándole que solo enarbola la bandera del radicalismo recordándole que bajo sus gobiernos, cuando fue Presidente del Estado Soberano de Cauca, fueron mayores los hechos de opresión. Es esta una muestra de la pelea con el correo liberal: *"Nuestros artículos dice El Correo Liberal, no pueden leerse dos veces; en cambio, los del colega hay que leerlos tres, cuatro ó más veces para extraerles la pizca de sustancia que contienen, cuando la contienen, que eso no sucede siempre, ó para darse uno cuenta de lo que quiso decir."*[221] Precisamente, cuando Conto fue encarcelado el 19 de abril de 1887, Nicolás Esguerra asumió la dirección de El Liberal hasta el 21 del mismo mes, cuando el periódico fue suspendido y Esguerra, encarcelado y posteriormente confinado a la ciudad de Cartagena. Esguerra prefirió salir del País y refugiarse en Costa Rica por varios años hasta que regresó en 1891 a Colombia, durante el Gobierno de Holguín.

La Equidad no ocultaba su alegría cuando fue cerrado *El Correo Liberal.* Le escribió con sarcasmo el siguiente epílogo: "*Nada hemos sentido tanto como el suicidio del Correo Liberal. Era un sujeto de alta estimación para nosotros, y con quien platicábamos suavemente. Ya no tenemos quien nos halague con aquellos dulcísimos epítetos de imbécil, infeliz.*"[222]

2.5.2. AL SOL NO SE LE DISCUTE.

Sin embargo, el Consejo Nacional Delegatario nunca dio su brazo a torcer en cuanto a la postura regeneradora de la prensa. Bajo la batuta de Miguel Antonio Caro, la contestación ante dicho proyecto de Decreto fue expedida el 17 de Febrero de 1888 con toda la fuerza de la inminencia, y firmada directamente por

[220] Redactado por el político liberal radical, César Conto. Este periódico semanal solamente publicó 16 números, siendo el primero el 6 de febrero de 1888, y el último el 21 de abril de 1888.
[221] La Equidad. Bogotá, febrero 18 de 1888
[222] La Equidad. Bogotá, enero 26 de 1888

el Presidente Rafael Núñez, y el Ministro de Gobierno Carlos Holguín. Así, quedó claro quién mandaba en la República, no obstante la ausencia temporal del Presidente. Con el nuevo **Decreto Número 151 de 17 de Febrero de 1888**, ni siquiera cabría un punto de discusión. Así se lo expresó a Jorge Holguín, uno de sus más estratégicos Ministros, en una carta:

> *La imprenta es incompatible con la obra, necesariamente larga, que tenemos entre manos; porque no es elemento de paz, sino de guerra, como los clubs [sic], las elecciones continuas [sic] y el Parlamento independiente de la Autoridad (es decir, enemigo del género humano). Al sol no se le discute, si se quiere que haya sistema planetario y tengamos calor y unidad*[223]

El Vicepresidente Payán le tocó asumir con entereza las disposiciones y el nuevo Decreto que acababa de un plumazo cualquier intento participativo de los Jurados de imprenta bajo el Decreto el 635 de 1886[224], que hubo de morir sin remedio, y anulaba también el 779 de 1887 de su misma autoría.

El Decreto 151 del 17 de Febrero de 1888 sancionado por Rafael Núñez como Presidente de la República y por Carlos Holguín como Ministro de Gobierno, habría de constituirse en la norma guía para la regulación de la prensa hasta la implantación definitiva de la Ley sancionada por el Congreso el 12 de Diciembre de 1896. Aunque con numerosos Decretos adicionales, su imperio normativo fue el timón con el que, casi por diez años, se mantuvo la regeneración con su barco

---

[223] RODRIGUEZ PIÑEREZ, El Olimpo Radical, Bogotá, 1950, citado por: MOLINA, Gerardo. Las ideas Liberales en Colombia. 1849 – 1914. Bogotá: Tercer Mundo, 1970. p. 133.

[224] Decreto No.. 151 del 17 de febrero de 1888. sobre imprenta. Art. 24. "Queda derogado el Decreto Ejecutivo número 635 de 1886 (5 de Noviembre) sobre libertad de imprenta y juicios que se sigan por los abusos de la misma." CARO, Miguel Antonio. Libertad de imprenta. Óp. Cit. Apéndice. P. 135 -140.

rígidamente dirigido en los pretendidos mares del orden y el tenor para sortear la oleada de conjuras perturbadoras e inquietantes del radicalismo.

Las consideraciones del Decreto indican el principio fundamental de la Constitución y una visión medrosa por alcanzar el nivel de Nación desarrollada, pues a la protección de la honra de los ciudadanos, la tranquilidad pública y el orden social; también se le reconoció a la prensa la particularidad de poder convertirse en un instrumento de delincuencia contra el Estado, "*de conformidad con la legislación actual de todas las naciones cultas"*[225]

La razón por la cual este Decreto funcionó expedido directamente por el Presidente de la República y fue aplicado por el Ministerio de Gobierno, estaba basado en el mismo Artículo Transitorio K de la Constitución de 1886, que expresaba que mientras no se expidiera una ley de imprenta, el mismo Gobierno estaba facultado, y tenía la responsabilidad, de reprimir y prevenir los abusos de la prensa en sus faltas contra el orden público. El Decreto es claro en exponer que las labores del Gobierno corresponden a las de alta policía, en materia subversiva contra el orden público y que, deben ser separadas de las labores del Poder Judicial para los delitos por abusos de la prensa entre particulares

Explícitamente, contenía también en sus preliminares la diferenciación específica de los delitos cometidos contra la prensa en dos: Delitos y culpas contra la sociedad y delitos y culpas contra los particulares. Las publicaciones consideradas subversivas[226] son calificadas como delitos contra la sociedad y requieren de la intervención del Gobierno, las publicaciones ofensivas contra los particulares son calificadas como delitos comunes y requieren la intervención del Poder Judicial.

[225] CARO, Miguel Antonio. Libertad de imprenta. Óp. cit. Apéndice. p. 135-140.
[226] Esta caracterización explicitada en el título 11 del Decreto llamada "De las publicaciones subversivas", contiene 11 Artículos que realzan que, para el Gobierno, la oposición política hecha desde la prensa debía conservar unos límites marcadamente establecidos y claros.

Obviamente el panorama de los delitos subversivos era muy amplio, al extremo de meter en el saco cualquier mínima contravención hacia la iglesia o sus jerarcas, ofender la decencia, criticar o no estar de acuerdo con la "cosa juzgada", y hasta imputar la moneda. No obstante la puerta quedaba entrecerrada en cuanto al valor social de la Prensa, especialmente en el aspecto que tenía que ver con la discusión de asuntos de interés público.

> *Art. 5° Permítase ampliamente á todo escritor:*
> *1° Discutir los asuntos de interés público, proponer y razonar las reformas que estime justo y conveniente se introduzcan en la legislación;*
> *2° Discutir los candidatos para puestos de elección popular ó parlamentaria, mientras el candidato no haya renunciado su candidatura, y siempre que no se ocurra á la calumnia, que en todo caso es un delito*.[227]

Igualmente no se quedaba la ley en simples amonestaciones. De hecho, aunque estaban contempladas cómo las menores penas, la posibilidad, según la gravedad de la falta, de un secuestro o una suspensión absoluta de los ejemplares impresos de las publicaciones, tenía como propósito cincharlas de manera efectiva a la ley. Igualmente toda publicación debía informar a los Gobernadores o al Ministerio de Gobierno de la persona que se iba a responsabilizar de sus contenidos. De la misma manera las imprentas violarían la ley si no se cumplían los requisitos exigidos de identificación de los escritores. Las publicaciones anónimas, de esta manera quedaban por fuera de la ley. Cuando hubiere lugar a una inserción de tipo explicativa, o de rectificación en el periódico, este podría juzgar que el escrito redactado por la contraparte era ofensivo y como tenía el "deber" de publicarlo, la

[227] CARO, Miguel Antonio. Libertad de imprenta. Op.cit. Apéndice. P. 135 -140.

ley (Artículo 18) designaría un “censor” para que analizara y definiera la manera en que debía publicarse la explicación.

Los delitos contra los particulares regían amparados bajo el código penal. Este, en su libro IV, Título 2, capítulo 1, expedido en 1887 por el Consejo Nacional Delegatario especificaba la protección de los ciudadanos cuando eran calumniados o injuriados:

> *§ 2. CALUMNIAS É INJURIAS.*
> *[Código Penal. Libro, IV, Título. 2, Capítulo. 1] 1888*
> *Art. 192. Calumnia es la falsa imputación de delitos ó de actos deshonrosos.*
> *Art. 193. La injuria comprende: 1. ° La ofensa hecha con palabras al honor, al crédito, á la dignidad y á cuanto constituye la propiedad moral de un individuo; 2. ° La difamación, ó divulgación de vicios puramente privados ó domésticos; 3. ° La contumelia, ó sean las palabras que envuelven oprobio ó vilipendio dichos á una persona en su cara.*
> *Art. 194. La calumnia y la injuria se reputarán públicas cuando se cometan por medio de papeles impresos, litografiados ó grabados, por carteles ó pasquines, por manuscritos comunicados á más de diez personas, ó por palabras proferidas en público delante de una reunión que no sea propiamente de familia.*
> *Art. 195. Son injurias más graves:*
> *1. ° Las que se refieran á vicios ó faltas de moralidad cuyas consecuencias puedan perjudicar gravemente la fama, el crédito ó los intereses del agraviado;*
> *2. ° Las que por su naturaleza, ocasión ó circunstancias especiales fueren tenidas en concepto público por afrentosas;*

3. ° Las que racionalmente merezcan la calificación de más graves, atendido el estado, dignidad y circunstancias especiales del ofendido y del ofensor.

Art.196. Las penas señaladas en los artículos 579 y 580 del Código Penal á los calumniadores, suponen que la calumnia ha sido pública. Si no lo fuere, se aplicará la mitad de la pena que debería corresponder, si el delito hubiera sido público, en cada uno de los dos casos prescritos en dichos artículos.

Art. 197. El castigo señalado á la injuria por el Código Penal, supone la publicidad y mayor gravedad del delito.

Faltando la publicidad ó la mayor gravedad, ó ambas circunstancias, se aplicará la mitad de la pena que hubiera de corresponder al delito íntegro; ó bien, la multa únicamente, con arreglo al grado de menor publicidad ó á la menor gravedad del hecho ó á ambas circunstancias, según el prudente arbitrio del juzgador.

Art. 198. El acusado de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere afirmado.

Art. 199. El acusado por razón de injuria 110 será admitido á probar la verdad de las imputaciones, sino cuando éstas fueren dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo, con arreglo á lo establecido en el artículo 587 del Código. En este caso será absuelto el acusado si probare la verdad del denuncio ó censura.

Art. 200. Nadie podrá ser penado por calumnia ó injuria, sino á querella de la parte agraviada, salvo cuando el ataque se haya dirigido contra la fuerza obligatoria de las leyes ó decretos ejecutivos, contra la inviolabilidad de la cosa juzgada, y en general cuando la agresión tuviere carácter de subversiva. En este caso tendrá acción el Ministerio público, previa excitación del Gobierno.

Art. 201. Podrán también ejercitar la acción de calumnia ó injuria los ascendientes, descendientes, cónyuge ó hermano del difunto cuya memoria haya sido agraviada, siempre que la imputación trascendiere á la familia.

Los autores de escritos históricos podrán ser acusados de calumnia mas no de injuria respecto de personas muertas.

Art. 202. Nadie podrá deducir acción de calumnia ó injuria causada en juicio, sin previa licencia del Juez ó Tribunal que conoció del asunto.

Art. 203. La sentencia en que se declare la calumnia se publicará en un periódico oficial, si el calumniado lo pidiere.

Art. 204. Los editores ó directores de periódicos en que se hubieren estampado las calumnias ó injurias, insertarán en ellos, dentro del término que señalen las leyes, ó, en su defecto, el Tribunal sentenciador, la satisfacción ó fallo condenatorio, siempre que así lo pida el ofendido.

Art. 205. El culpable de injuria ó de calumnia quedará en cualquier tiempo relevado de pena, mediando satisfacciones que acepte el ofendido.

Art. 206. Queda así adicionado y reformado el capítulo 1, título 2, libro IV del Código Penal.[228]

2.5.2.1. Los fundamentos del Decreto 151 de 1888.

Miguel Antonio Caro, dejó escritas sus opiniones sobre la legislación de prensa en el periódico *La Nación*, que a la postre habrían de ser recopiladas en un libro llamado: "Libertad de imprenta. Artículos publicados en *La Nación",* reimpreso varias veces, siendo la primera de ellas en 1889 por la imprenta Nacional. Caro

[228] S.A. Leyes de la República de Colombia expedidas por el Consejo Nacional Legislativo en sus sesiones de 1887. Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1888, p. 322 -324.

expuso las razones para sujetar el ejercicio de la prensa a la responsabilidad emanada del Decreto 151, contra la propuesta de ley de imprenta del Senador Guillermo Uribe [229], mediante una candente exposición en los debates parlamentarios, que habrían de desestimar este intento de reglamentar el Artículo 42º de la Constitución de 1886. Esta fue además, una de las grandes batallas de Caro dentro del cuerpo legislativo en el año de 1888, y la ocasión oportuna para justificar la continuación del Decreto 151 de 1888 como regente en la materia. En el debate, Caro habría de salir vencedor al lograr la votación en contra del Proyecto con 18 a 3 balotas, pero sin llegar a consolidar una ley de imprenta propia, que dejara de amparar la normatividad del Artículo "K" en un Decreto Ejecutivo. La búsqueda para que continuara rigiendo el Decreto 151 de 1888 habría de ser expuesta en sus argumentaciones para impedir que el proyecto de su opositor fuera aceptado.

La tesis de Caro contra este proyecto estaba basada en la necesidad, según su punto de vista, de una reglamentación especial de policía, además de la ley penal común. Bajo esta orientación, el establecimiento de una facultad discrecional para "prevenir y castigar" es justificado por su espíritu autoritario, que opinaba que una legislación que permitiera la perpetración de los delitos para castigarlos era una:

> *Legislación imbécil, ó mejor dicho es una legislación feroz y sanguinaria. [...] La suspensión oportuna de un periódico alborotador, como providencia de policía, produce mejores resultados que un largo*

[229] En esta propuesta de ley, llevada a cabo en Septiembre de 1888, es decir, siete meses después de la instauración del Decreto 151 de 1888, Uribe pretendía cumplir con la consideración constitucional de "prensa libre pero responsable" consignada en 21 artículos. Sin embargo, la clasificación de los delitos de imprenta estaban contenidos integralmente dentro del código penal, dejando de lado la consideración "subversiva" de la prensa y los fallos, en la responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. No obstante, el Ministerio Publico podría acusar sobre delitos de orden público, con la posibilidad de que las publicaciones fueran suspendidas y sus ejemplares recogidos. Mientras el Juicio era definido, también existía la posibilidad de arresto del director o editor responsable mientras la decisión recaía en tres Jurados.

juicio que haya de parar en absolución con escándalo ó en condenación estrictamente legal, y quizá demasiado rigurosa en el caso, y también por otro lado escandalosa.[230]

Dice Caro, que la Ley de imprenta está subordinada, además de los principios "eternos de justicia", también a la situación y a un "estado social", es decir, a las exigencias en que las disputas por rencillas políticas habrían de requerir mayores o menores represiones:

Según los tiempos, mayores grados de represión ó nuevos temperamentos de tolerancia [...] De aquí las leyes especiales, en oportunidad reformables; de aquí también que en épocas de reconstrucción, como la presente, y para periodos en que el legislador no puede ocurrir á retocar la ley, se conceda á un Gobierno justo, la facultad de regir con mano prudente el mudable y peligroso elemento de la prensa periódica"[231].

Esta manera de pensar apunta directamente a la reflexión a la cual debería someterse el Liberalismo Radical. Lleva implícita la advertencia que la tolerancia o la flexibilidad en la aplicación de las leyes de imprenta, dependen de su compromiso para no subvertir el orden, que en últimas vendría siendo el mismo modelo político de la regeneración. El Proyecto de Uribe fue negado por mayoría -18 contra 3- porque, según Caro, era "ineficaz". Años más tarde, en 1894, cuando manejaba los asuntos del Estado desde la Presidencia de la República, se refirió al proyecto de ley de Guillermo Uribe en estos términos:

[230] CARO, miguel Antonio. Libertad de Imprenta. Óp. cit. p. 25.
[231] Ibíd. p. 68.

> *En 1888, se presentó un proyecto injurídico, [sic] contrario al mecanismo constitucional de los poderes públicos y al sistema legal universal, pues por el se constituía un fuero extraordinario para los periodistas de la capital, con un tribunal novísimo compuesto de magistrados de aquí y de allí, y con procedimientos irregulares e impracticables.*[232]

La defensa de la Ley de Imprenta, no obstante su intrínseco sentido arbitrario, no fue postulada, según el mismo Caro, con el propósito específico de callar la oposición, otorgándole la posibilidad de discutir los proyectos de ley y sus debates, sino con la finalidad de prohibir el ataque a la fuerza obligatoria de las mismas leyes. Sin embargo, este postulado entra en la peligrosa ambigüedad de que si estar o no de acuerdo, podría tener la interpretación de un "ataque" a las instituciones, que en últimas, habría de ser resuelto por la discrecionalidad de los representantes del Poder Ejecutivo.

La poderosa maquinaria jurídica echada a andar contra la prensa con este Decreto reconstruye el pensamiento expreso de Miguel Antonio Caro en la intención de "moralización" a la que la Nación debía encaminarse con la regeneración. Dentro de este concepto, la alusión es constante en el sentido de que el Gobierno no debía ser ni juez ni parte en los delitos referidos a ofensas personales. Pero otra cosa habría de ser si la ofensa tomaba el carácter de "subversiva**",** es decir, cuando fuera en contra del Gobierno o en contra de los sentimientos religiosos de la sociedad; ya que Caro consideraba que ir contra las "buenas costumbres" representadas en las prácticas religiosas, era sinónimo de ir contra la paz pública, o contra la dignidad de las autoridades: *"contra una alta investidura que no es*

[232] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Óp. cit. p. 108.

propiedad particular del funcionario"[233]*.* Aduce Caro que en estos casos, el Gobierno se convierte en representante de la sociedad y por ello puede ser "parte" ya que es guardián de los intereses sociales y puede ejercer su acción "*bien como parte ante los tribunales, bien como amparador común, conteniendo directamente la perturbación del orden social; y entre estas dos funciones elige, según lo prescriba la ley, ò las circunstancias lo aconsejen, ó la necesidad lo exija."*[234]

2.5.2.2. El desmantelamiento del plan radical.

Al General Eliseo Payán le tocó ver la imposición del Decreto 151 de 1888 firmado directamente por el Presidente Rafael Núñez, derogando el suyo propio, cuando aún se encontraba como Encargado del Poder Ejecutivo. Los hechos que se sucedieron marcarían la afirmación de la autoridad suprema del regenerador. El 27 de Enero de 1888, el Presidente emprendió el retorno desde Cartagena, embarcado en el vapor "Rafael Núñez". Ciertamente, la confianza en los antiguos liberales había sido minada y solamente la entrega del poder al partido Conservador, retornaría la calma a su obra. Una anécdota remite la zozobra que embargaba al Presidente. Previendo que Payán pudiera darle un golpe de estado y ordenar su detención una vez pisara tierra en Girardot, telegrafió a Ramón Acevedo, jefe del batallón tercero de infantería, en quien confiaba plenamente, para que lo fuera a esperar a este puerto. Acevedo le informa a Payán de su partida para dicho lugar;

> *Pero recibe del ejecutivo una razón tan pilla como risible: le dice al General que quien llegaba a Girardot no era el Presidente Rafael Núñez sino el Vapor "Rafael Núñez"... Sin embargo, el jefe del batallón*

[233] Ibíd. p.86.
[234] Ibíd.

convencido de lo contrario, se dirige al lugar indicado a esperar al mandatario Cartagenero.[235]

Quizá, ante esta disyuntiva, el General no se hubiera atrevido a tomar ninguna medida para quedarse con el poder. Regresó Núñez con Angulo, y una vez llegó a Girardot, le dirigió a Payán un telegrama lapidario el 8 de febrero de 1888: "*Hallándome en territorio de Cundinamarca, me he encargado hoy nuevamente, según la ley, del ejercicio de la Presidencia de la República, y sigo para la capital. Los Ministros despacharán los asuntos locales de carácter urgente.- RAFAEL NUÑEZ*"[236]. Desde su endosada silla Presidencial, presenció el General cómo eran demolidas sus disposiciones y su contestación llevaba la mayor circunspección posible:

Excelentísimo señor Presidente, doctor Rafael Núñez.- Girardot. Impuesto de vuestro telegrama, me complazco en vuestra feliz llegada. Os entrego la República en perfecta paz. Por los informes que os darán los Ministros, veréis que las instituciones funcionan con regularidad. Me es sumamente grato poder añadiros que los actos de mi administración han correspondido al programa de regeneración fundamental qué la República ha puesto a vuestro cuidado y al mío.[237]

No obstante, el General Payán si contó con un sostén importante en Antioquia. El General Marceliano Vélez, quien años después sería abierto opositor político a Núñez, se negó a apoyar una comisión de notables antioqueños destinada a recibir al Presidente titular a su arribo a Puerto Berrío. La importancia Nacional que había tomado Payán no debe economizarse tan ligeramente, pues la comisión

[235] POSADA ARIZMENDI. Óp. cit. p. 176.
[236] *Diario Oficial*, Bogotá, miércoles 8 de febrero de 1888, no.7292.
[237] Ibíd.

encargada de recibir a Núñez fue devuelta por el Gobernador y el Secretario Juan de Dios Mejía, con estas palabras:

> *No todo puede decirse ni en presencia de toda persona; solo les hago saber que el señor Núñez no es inmortal, y que si ustedes llevan adelante su pensamiento, comprometerán a Antioquia porque el General Payán castigará después las pruebas de adhesión que se le hagan al Doctor Núñez*.[238]

También, el Gobernador del Departamento del Tolima, y ante la gravedad de la situación, solicitó la compra de armas al Delegado por Antioquia en Bogotá, Señor Alejandro Botero, pero este se negó hostilmente ante cualquier posible resistencia al General Payán. Mientras tanto, Botero había solicitado siete mil armas a Honda para reforzar la armería bogotana. Pero el General Casablanca, adepto irrestricto a Núñez, obstaculizó esta entrega, tal vez previniendo cualquier posible rebelión. Incluso, el General Conservador a cargo de la Gobernación del Tolima, acudió a recibir al Presidente Núñez en Honda. Luego, los temores de una posible conspiración no eran del todo infundados.

En 1895 se conoció un documento redactado por Avelino Rosas en el cual, para contrarrestar las numerosas acusaciones hechas por un grueso número del Liberalismo radical, y afianzar el compromiso perenne hacia su partido luego de ser tildado como traidor al movimiento; el revoltoso personaje intentó demostrar con el escrito, su compromiso con los movimientos subversivos que, desde la derrota en la guerra de 1885, se llevaron a cabo en Colombia por parte del radicalismo. Por ejemplo, cuenta que los conspiradores de 1887 en Bogotá, y ante la posibilidad de un acercamiento con el Presidente Payán, le encomendaron la

[238] RAMIREZ G, Enrique. Caro y Vélez. Paralelos. Ibagué: Imprenta del Departamento del Tolima, 1891. p. 22.

misión de hacer los movimientos correspondientes, en virtud a su cercanía con el viejo General durante el levantamiento armado de 1979 en el Cauca.

Pero, cuenta Rosas; que las dificultades para entrevistarse con el Presidente encargado estribaban, por una parte en el "Señor Baraya", una especie de espía de Rafael Núñez, que "*no se separaba ni un momento del escritorio del Sr. Payán.* [y por otra parte] *el permanente estado de decaimiento moral que no le permitía, como no le permitió, medir la magnitud del paso"*[239]

Entonces, el acercamiento se efectuó bajo la mediación del Coronel Caucano Eloy Caicedo, gran amigo de Payán y quien, en representación de este se reunió junto con Rosas y con los encargados de la jefatura Radical: Modesto Garcés y otros. Con la respectiva apertura de una minuta sobre los temas acordados (papeles que según Rosas, reposaban en Bogotá en la oficina del Secretario, Señor XXX). De dichas conferencias y acercamientos con otros representantes directos de Payán, quedó fijado el acuerdo para un golpe de Estado.

Cuenta Rosas también, que el "Señor Baraya" consiguió las informaciones sobre la conspiración, valiéndose de la presión ejercida sobre el maltrecho estado de ánimo del General Payán. El resultado del espionaje resultó tan efectivo, que Núñez no vaciló en regresar a Bogotá, provocando el relato apesadumbrado del epílogo de esta historia:

> *La llegada de Núñez a honda y la ineptitud del Vicepresidente Payán, causaron como por encanto en las filas reaccionarias, mayores estragos que los que la realidad de una bomba explosiva hubiera producido al estallar en un campamento de reclutas!... Y más luego*

[239] ROSAS, Avelino. Notas políticas o sea diez años de regeneración. Trinidad: S.N. Octubre de 1895. P.12.

rodó por las gradas del capitolio el Sr. Payán con el estigma de traidor, y luego se abrieron las cárceles y vinieron las deportaciones discrecionales.[240]

Posteriormente, y como medida complementaria, Núñez restituyó casi inmediatamente a su Ministro de Guerra, Felipe Angulo que, en circular fechada el 13 de Febrero de 1888, comunicó a los Gobernadores y a los jefes militares de los Departamentos, su nombramiento. [241] También, hizo que los Delegatarios expidieran una ley para suprimir la Vicepresidencia por el tiempo restante del periodo presidencial mediante la creación de la Designatura Presidencial cuando el Titular del ejecutivo se encontrara ausente, parcial o temporalmente, del cargo.

Meses después sería nombrado su Ministro de Gobierno, Carlos Holguín, para este oficio; con lo cual, quedaba consumada la llegada de los Conservadores al poder. En Abril, y con el regreso del estatal Cartagenero a la capital de la República, el Diario Oficial empezó a publicar telegramas de felicitación desde diferentes lugares de la Nación. Rafael Núñez anticipándose a las severas medidas que habría de tomar en los próximos meses, como contestación a una carta de apoyo enviada por los vecinos de Pasto, reiteró su compromiso por afianzar;

El reglamento de la libertad de imprenta [...] reduce a sus legítimos límites esa libertad, manteniendo el respeto al sentimiento religioso y á todos los demás intereses colectivos é individuales que merecen de preferencia la protección del gobierno. Enemigo de los abusos del

[240] Ibíd., p. 14.
[241] *Diario Oficial*. Bogotá, 13 de Febrero de 1888. p. 128.

poder, ejerzo con autoridad y firmeza, cuando se trata de contener la anarquía y reprimir el desborde de la degradación moral.[242]

Por otra parte, los castigos para Payán recién empezaban. El 4 de Mayo de 1887, el Consejo Nacional Legislativo se apresuró a expedir la Ley 40 de 4 de Mayo de 1888, en la cual revocaba el nombramiento del General, y declaraba vacante el puesto hasta el fin del periodo. La Comisión encargada de "echar" al Vicepresidente habría de puntualizar que, debido a que aún no se habían llevado a cabo las elecciones que por la ley debían llevar al Presidente y al Vicepresidente al poder, y así como la Constitución, y en su nombre el Consejo Nacional, había nombrado en dichos cargos a Núñez y a Payán, también habrían de determinar qué;

Como el que hace deshace, y el que confiere un nombramiento puede revocarlo, [...] La Constitución declara ser "faltas absolutas únicas del Presidente de la República, su muerte o su renuncia aceptada". [...] si existiese igual disposición respecto del Vicepresidente, el Consejo Nacional no podría anular el nombramiento que hizo en la persona que ejerce este cargo. Pero el Consejo Nacional no quiso definir las faltas absolutas del Vicepresidente, pudiendo ser una de ellas su separación del puesto por un acto como el que hoy se discute aquí.[243]

Esta comisión conformada por J.F. Insignares y Antonio Roldán y firmada el 2 de Mayo de 1888, expone las razones que tuvieron para dejar cesante al viejo General. En primer lugar, le dicen que su nombramiento correspondió a un acto de confianza y de reconocimiento, especialmente por sus servicios prestados a la regeneración, pero:

[242] *Diario Oficial*. Bogotá, 17 de Abril de 1888. p. 349.
[243] *Diario Oficial*. Bogotá, 4 de Mayo de 1888.p. 425.

> *Por desgracia las tendencias políticas de la última accidental administración del General Payán no se conforman con el pensamiento del Partido Nacional, cual lo interpreta el Presidente de la República. Jefe indiscutible de la Regeneración; y de aquí ha resultado que la Vicepresidencia sea hoy objeto de esperanzas para espíritus disidentes, motivo de inquietudes y zozobras para los amigos de la paz y la concordia. [...] La gratitud hacia el General Payán [...] no se ha extinguido, [...] pero no podemos demostrarla por medios que comprometan la paz de la república, [que] ha zozobrado muchas veces por falta de lógica*[244]

Pero, quizá tratándose de una última acometida de remordimiento y a la manera de una penitencia confesional, el Consejo Nacional Delegatario redactó un Proyecto de ley el 7 de Mayo de 1888, que fue aprobado el 12 por los mismos Ministros del Gobierno, *"y en atención á los importantes servicios militares prestados a la República por el General Eliseo Payán, se le concede una remuneración vitalicia de cien mil pesos ($100.000) anuales."*[245] De esta manera, y con una gruesa suma, quedaba saldada la deuda que tenía Núñez y su compañía regeneradora con la espada que ayudó a tratar de sepultar el radicalismo. Después habría de abandonar Bogotá sin el esplendor que tuvo a su llegada seis meses atrás, y con la despedida de pocos amigos, para refugiarse en su hacienda de San Pedro en Buga, desde donde, impotente vería morir su vida mortal y política en 1895.

Pero la crítica a su actuación, pese a su intento fallido de abrirle puertas al liberalismo radical, provino especialmente de los representantes de este partido. Alfredo Greñas habría de llamarlo unos años después con el epíteto de "El ultimo

[244] Ibíd.
[245] *Diario Oficial*. Bogotá, 7 de Mayo de 1888. p. 441.

boabdil"[246], retratándolo siempre como una persona de poco carácter y con la cabeza baja, caricaturizándolo también como un cerdo alcanzando un billete de 100 mil pesos. Incluso en uno de sus famosos poemas llegó a expresarse de el cómo: "el grandísimo marrano."

2.6. CABALLERÍAS MAYORES DEGOLLADAS

Desde Popayán, el Gobernador Juan de Dios Ulloa, envía un telegrama urgente fechado el 7 de Mayo de 1888 y dirigido al Ministro de Gobierno Carlos Holguín, en el cual expone un hecho que supone gravedad severa. Resultado de atentados contra la población caballar de la ciudad de Palmira, el Gobernador da cuenta de 4, y en Pradera de 10 jamelgos pasados a mejor vida. Perturbado grandemente el orden público por cuenta de los terroristas equinos y después de investir "*ciudadanos con carácter agentes policía para capturar responsables, aprobando aún mayor severidad*"[247], los encomendados ciudadanos se dieron a la tarea de cazar a los verdugos de los infortunados rocines y el día 5 de Mayo en Pradera, habiendo capturado a uno de ellos, y después de que el pueblo *"túvolo crucificado en la plaza*" fue llevado a juicio e inquirido para averiguar de quien era agente terrorista. El infortunado "matador de caballos", y quien resultó llamarse Luís Martínez, lanzó al agua a cuatro compañeros de delito y así pudo desarticularse el complot. Pero lamentablemente por el Caballo muerto de un balazo durante el operativo de captura por parte de la policía cívica, y que según el telegrama del Prefecto de Pradera también era robado, nadie lanzó una reclamación ni un réquiem.

[246] Con este nombre se conoció el último Rey de Granada que entregó las llaves de la Ciudad a los Reyes Católicos, a quien, según cuentan las leyendas, cuando se alejaba de la ciudad en 1493, lloró al ver por última vez Granada, recibiendo la imprecación de su madre que le dijo: "no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre"

[247] *Diario Oficial*. Bogotá, 21 de Mayo de 1888. p. 505.

Inmediatamente, los acontecimientos de Pradera fueron conocidos a nivel nacional, fueron endosados por parte del Gobierno, a los revoltosos radicales. El operativo civil realizado por algunos habitantes también fue aplaudido ya que "*natural es que la sociedad celosa de sus garantías pretenda en su indignación defenderse por si misma de esos actos de barbarie, haciéndose rápida y cumplida justicia*."[248] Pero, al parecer, la premura con que el Consejo Nacional Legislativo marchó a promover el Decreto, posteriormente "bautizado" por Fidel Cano como "La ley de los Caballos", correspondió al paliativo de ser una excusa para profundizar la persecución.

Antonio Roldán y Jorge Roa fueron los encargados de estudiar el caso que "*lógico es tratar de averiguar las causas inmediatas de los hechos á los que nos referimos y las cuales saltan á la vista, á poco de pretender conocerlas"*[249], Y quedaron tan reveladas las causa que "saltando a la vista" del Gobierno:

> *Es un hecho notorio la agitación continua en que se hallan los cabecillas de la última contienda civil por destruir las instituciones públicas, la poca o ninguna sujeción á las leyes y el odio inveterado á las autoridades legítimas. En efecto, desde la represión de la pasada rebelión hasta la fecha ha habido en el país dos grandes conspiraciones y una conjuración [...] descubiertas, y se advierte hoy mismo que la labor constante de los anarquistas es conspirar para resistir, en un día más ó menos remoto, al imperio del orden establecido.[…] Los atentados contra las propiedades del Cauca obedecen, no á venganzas particulares, sino á ese espíritu de rebeldía que alientan los enemigos de la Constitución. [...] los pueblos no*

[248] Ibíd.
[249] Ibíd.

pueden vivir en esa constante zozobra bajo la amenaza perpetua de un trastorno público…[250]

La cuestión solo se mejoraría, a discernimiento del Gobierno, con una ley que fuera transitoria, mientras se habría de redactar una nueva ley de policía Nacional. Pero mientras esto sucedía y con el compromiso del Gobierno, en opinión de Fidel cano, de "*asegurar la tranquilidad de los ciudadanos de Colombia, amenazada seriamente en las personas de los caballos de Palmira y Pradera. […] en nombre de unos cuantos caballos muertos violentamente, cuyo trágico fin se atribuye, de la manera más injusta y gratuita al partido liberal.*"[251]El presidente del Congreso, Jorge Holguín, firma la famosa ley que investiría al Ejecutivo de facultades extraordinarias:

LEY 61 DE 1888
(25 de mayo)

Por la cual se conceden al Presidente de la República algunas facultades extraordinarias.

El Consejo Nacional Legislativo

DECRETA:

Art. 1° Facultase al Presidente de la República:
1° Para prevenir y reprimir administrativamente los delitos y

[250] Ibíd.
[251] *El Espectador*. Medellín, Julio 4 de 1888. No.71, citado por: PEREZ, Felipe y otros. Óp. cit., p. 148.

Culpas contra el Estado que afecten el orden público, pudiendo imponer, según el caso, las penas de confinamiento, expulsión del territorio, prisión ó pérdida de derechos políticos por el tiempo que crea necesario.

2° Para prevenir y reprimir con iguales penas las conspiraciones contra el orden público y los atentados contra la propiedad pública ó privada que envuelvan, á su juicio, amenaza de perturbación del orden ó mira de infundir terror entre los ciudadanos ; y

3° Para borrar del Escalafón á los militares que, por su conducta, se hagan indignos de la confianza del Gobierno á juicio de aquel Magistrado.

Art. 2° El Presidente de la República ejercerá el derecho de inspección y vigilancia sobre las asociaciones científicas é institutos docentes ; y queda autorizado para suspender, por el tiempo que juzgue conveniente, toda Sociedad ó Establecimiento que bajo pretexto científico ó doctrinal sea foco de propaganda revolucionaria ó de enseñanzas subversivas.

Art. 3° Las providencias que tome el Presidente de la República en virtud de la facultad que esta Ley le confiere, deberán, para llevarse á efecto, ser definitivamente acordadas en Consejo de Ministros.

Art. 4° Las penas que se apliquen de conformidad con esta Ley no inhiben á los penados de la responsabilidad que les corresponda ante las autoridades judiciales conforme al Código Penal.

Art. 5° La presente ley caducará el día en que el Congreso de la República expida una Ley sobre alta policía nacional.

Dada en Bogotá, á veintitrés de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho.

El Presidente, Jorge Holguín. El Vicepresidente, Antonio Roldan.

El Secretario, Manuel Brigard. El Secretario, Roberto de Narváez.

Gobierno Ejecutivo—Bogotá, Mayo 25 de 1888. Publíquese y ejecútese.
(L. S.) RAFAEL NÚÑEZ
El Ministro de Gobierno, Carlos Holguín[252]

El propósito de Fidel Cano desde *El Espectador* para que: "si hay justicia y lógica, será conocido en la historia con el nombre de "ley de los caballos", se llevó a cabo a cabalidad. Mientras algunos diarios oficiales como *La Nación*, expresaban su apoyo ante tales medidas y recordaban la deficiencia legal instaurada por la Constitución de 1863, a tal punto que el mismo general Mosquera en 1864 se arrepintió del descuido, y desde una carta dirigida a Cerbeleón Pinzón, "*observaba que La Constitución de Rionegro adolecía de una deficiencia moral profunda, y proponía el establecimiento de un cuerpo de censores para reprimir los abusos de la prensa y la enseñanza*"[253] Pero, a su juicio, Mosquera no pudo ya refrenar el carromato y, hasta llegó a ser apresado en 1867 con el señalamiento de no haber podido reorganizar el país cuando tuvo la oportunidad.

La Crítica desde El Espectador fue rigurosa, exacerbada en demasía por el motivo que, a modo del gobierno, originó la ley.

> *Cualquiera diría, al ver tal suma de rigor, tantas [sic] y tan suspicaces precauciones, y los gremios sociales que han quedado especialmente sujetos a la discrecional autoridad del Presidente, que las víctimas de la hecatombe de Palmira y la Pradera fueron los miembros mismos de la representación nacional; que los ciudadanos de Colombia somos caballos (de carga probablemente); que los militares de la nación se entretienen en degollar caballerías mayores, y que varios institutos*

[252] Ley 61 de 1888 (de los Caballos). Leyes de la República de Colombia expedidas por el Consejo Nacional Legislativo en sus sesiones de 1888, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, Bogotá, 1889, p 168 -169.
[253] La Nación, 29 de Mayo de 1889, citado en: Diario Oficial. 16 de Junio de 1888. P, 621

científicos de nuestra patria han sido establecidos con el propósito de asesinar corceles y jamelgos. [...] La ley 61 es genuinamente regeneradora, y la regeneración está en Colombia hace ya diez años[254]

La excusa de la supuesta conspiración fue efectiva, sin importar que dos años después la pretendida conjura iniciada matando caballos, tuviera otra explicación desde el periódico liberal *El Relator*. El 15 de Marzo de 1890, un anónimo ciudadano del Valle del Cauca explicó en una carta enviada a dicho periódico, las circunstancias ahora descubiertas sobre el hecho, pero que, sin embargo, ya instauradas las leyes, supuestamente mientras se decretaba una ley de alta policía, el Gobierno no tendría interés en ahondar en el caso, y no se le prestó atención:

Un muchacho de 16 a 17 años llamado Gregorio Lenis Velasco, es el poseído de la monomanía de matar caballos; esto se descubrió por el último que degolló, hace poco, en la hacienda de dolores, de propiedad del señor Rafael Gómez. Hoy se sabe por confesión de dicho Lenis, hecha al señor Gobernador en presencia del Procurador Municipal del distrito del Cerrito, que había ejecutado el mismo hecho en las haciendas de los señores Enrique Molina y Lucio Cabal. Denunciado el delito a las autoridades de dicho Distrito, se ha hecho tan poco caso, que el sindicado goza de plena libertad y, según informes, nada le sucederá por tal fechoría, no obstante la famosa ley expedida sobre el particular y que no es sino una de tantas vivezas de los restauradores de la moral política.[255]

[254] El Espectador. Julio 4 de 1888. No.71, citado en: Óp. Cit. P.150
[255] *El Relator.* Bogotá, 27 de Marzo de 1890. Número. 405 p. 1608.

Bajo la "ley de los caballos", las suspensiones no se hicieron esperar. El primero de Marzo de 1888, el escritor del diario *La Prensa*, Enrique Troncoso fue multado y suspendida su publicación por tres meses, por nota del Ministro Holguín. El periodista liberal, que había iniciado su publicación el primero de Enero de 1888, como respuesta a las puertas abiertas por Payán, tenía la esperanza que con el tiempo, la directriz del General, habría de encaminarse hacia una liberación irrestricta. Su agradecimiento por las nuevas disposiciones prometen un respaldo desde sus páginas: "*nuestra línea de conducta no puede ser determinada sino en vista de sucesos que están por venir. Entre tanto, nuestra palabra será una palabra amiga, é imparcial al ocuparse de los actos de su administración.*"[256]

Pero el calvario de *La Prensa* y de otros diarios que celebraron con alborozo las nuevas medidas de Payán, empezó cuando decidieron apoyar una manifestación de agradecimiento al General, por el nuevo decreto de prensa, y por su admistía hacia los desterrados por Núñez y Ospina. Igualmente, el esperanzado Troncoso, no cesaba de pedir desde *La Prensa* una mayor libertad a la ya otorgada por Payán. Sin embargo, le fue imposible callar su decepción cuando corrieron los rumores de que Núñez venía nuevamente hacia Bogotá a poner la casa en orden. Se inventó unos colaboradores anónimos que le enviaban Cartas y este las publicaba en el periódico. Los consabidos señores B. Chiribibí, y B.K.L., le dieron indicaciones a Payán sobre cuál debería ser su proceder en caso de la llegada de Núñez. El llamado a preparar los cañones era la más frecuente:

> *No olvide usted lo que mejor que nosotros debe saber cómo militar que es. Los contemporáneos y la historia todo pueden perdonarle menos la derrota; huir no es un derecho, lo frecuente es ser muerto o herido por*

[256] *La Prensa*. Bogotá, 1 de Enero de 1888. Número 1. p.2.

detrás."[…] escoja usted general Payan entre la salud y vida de la patria y el poder entregado á los conservadores por el señor Núñez.[257]

Igualmente, en el número 8 de febrero 16 de 1888, abre la plana el periódico con un gran aviso que dice: "*Ultima hora. Se nos dice han pasado una circular a las imprentas prohibiendo toda publicación y circulación de periódicos y hojas sueltas, sin el previo pase del Ministro de Gobierno; es decir, para no dejar salir nada que no sea en alabanza de este. Estamos pues, en la plenitud de las libertades _ regeneradoras!"*[258] Posteriormente, En el número 9 de febrero 28 de 1888, usando otro anónimo llamado Servum Pecus, se deja venir con una diatriba de lamentaciones contra Núñez por traidor al partido liberal y la violencia que acarreará en el futuro. Posteriormente dice que el nuevo Decreto[259] de prensa es una burla a la libertad y causante de risa. Además publica una noticia, calificada por el Gobierno, como falsa, referida a un supuesto fallo arbitral de España en el litigio limítrofe entre Colombia y Venezuela; favorable a este último. Después de este número el periódico fue suspendido, sancionado y no volvería ser leído por los Bogotanos. La violación de varios artículos del Decreto 151 sobre Prensa, además de la consideración de incitar a la "subversión", le valieron su suspensión.

2.7. SUSPENSIONES Y DESTIERROS. EL CASO DEL INDIO URIBE

La ya mencionada "Revolución Conto", fue invocada desde la dirección de su diario *El Liberal*, con apoyo de liberales del Departamento de Cundinamarca y Cauca. La llamada "Sociedad de Unión Republicana" expresó en sus estatutos radicales, que cayeron en manos del Gobierno, la necesidad de:

[257] *La Prensa*. Bogotá, 5 de Febrero de 1888. Número 2. p.4
[258] La Prensa. Bogotá, 16 de Febrero de 1888
[259] El 151 del 17 de febrero de 1888, que echa por tierra el propuesto por Payán.

Si es llegado el caso de un ruidoso y ejemplar castigo, y entonces deberá decretar: que a la paz científica que abruma, degrada, corrompe y empobrece a los pueblos, se oponga y ejercite la guerra científica, como un trascendental acto de justicia que sirva de lección para aquellos que pretendan atacar la libertad, abusar de la paciencia de los pueblos y alzarse con su soberanía[260]

Juan de Dios Uribe, también a la luz del Gobierno, pertenecía a la conjura planeada por el Radicalismo para ejecutar la orden de revolución el siguiente 20 de Mayo de 1888, día de elecciones bajo el nuevo mandato constitucional. Igualmente, también culpado Nicolás Esguera, dirigente liberal y ex – rector del Colegio El Rosario y el General Sergio Camargo, de quien se decía, era la persona señalada para dirigir el golpe de mano directamente contra el Presidente Núñez en Bogotá. Esta persecución amparada además en la "ley de los Caballos", contiene más de un episodio de sonada arbitrariedad, incluso algunos de ellos reconocidos por el propio Gobierno. Por ejemplo, al General Sergio Camargo, reconocería Núñez posteriormente, le fue impuesto su destierro, no por lo que había hecho sino por lo que podría haber realizado en el futuro. Así lo expresaba el Presidente desde El Porvenir de Cartagena en un editorial recogido por *La Nación* de Bogotá:

Ningún interés podemos tener en inculparlo pues que ni él ni nadie, (él menos que nadie) tienen prestigio ni privilegios para turbar la paz de esta república, su expulsión fue necesaria (estaba el país en plena paz científica) en la época en que se decretó, como ejemplo no como seguridad, pues todos sabemos aquí que si es hombre de valor físico,

[260] OTERO MUÑOZ, Gustavo, La vida azarosa de Rafael Núñez. Óp. Cit., p. 247.

ninguno más desacertado como jefe de operaciones políticas o militares.[261]

La publicación de cartas de apoyo ciudadano publicadas en el Diario Oficial, como está firmada en Bogotá, el 21 de Septiembre de 1887; en donde además, aprueban la pena impuesta para que los conjurados sufran "*una severa lección para los conspiradores, y habéis resuelto que en tierra extranjera mediten sobre la obra de iniquidad que maquinaban, y de ello, con mejor acuerdo, se arrepientan, ó lo menos reconozcan su impotencia para inmolar a su patria."*[262]; demuestra el afán del Gobierno de justificar, sus acciones en contra de los dirigentes radicales.

El "indio" Uribe, que en la historia del partido Liberal Colombiano sería conocido como un "luchador por la libertad", en realidad se convirtió en un contumaz violador de las nuevas leyes de prensa. Aunque es difícil probar su participación de hecho en las citadas conspiraciones, si son evidentes su escritos fuertes y ofensivos contra el Gobierno. Las expresiones sin cimientos de veracidad, son ejercidas como un derecho, habitual para muchos escritores de periódicos. En 1884 publica un pequeño libro llamado "El Octavo Mandamiento" que contenía dos artículos: "La conversión de José Joaquín Ortiz" y "el octavo mandamiento", en donde se burla de la iglesia católica y del señor José Joaquín Ortiz, quien, en el cuento, deja de ser escritor católico para convertirse en librepensador, sin advertir que su prosa era de mera ficción, y llegando "*a tanto convencimiento que su pluma fermentó, que muchos le dieron por ciertos y hubo quien jurara, mano sobre el pecho, acerca de la autenticidad de tales acontecimientos."*[263]

---

[261] *La Nación*, Bogotá, 26 de Marzo de 1889, Número. 359. Citado por: RUDAS, Juan Manuel. Lo que fue y lo que será el partido Conservador en Colombia. Barcelona: Imprenta Juan Manuel Carral, 1889. p. 31.
[262] *Diario Oficial*. Bogotá, 11 de Noviembre de 1887. Número 7045.
[263] ESCOBAR URIBE, Arturo. Óp. cit., p.23.

Pero, como en 1884 aún no regían leyes que regularan la prensa, pronto llegó la contestación a este libelo con otro igualmente de ficción y con nombre propio. "La Conversión de Juan de Dios Uribe" redactado por un anónimo Conservador que remachaba al final de su relato, con la quimera de que el consabido "indio Uribe", después de estar en riesgo de muerte y arrepentirse de sus tendencias ateas con un sacerdote, termina ingresando a un seminario completamente dado a buenas, consecuentemente por la gracia de haberse salvado de la parca.[264]

En marzo de 1888, publica Juan de Dios Uribe, un artículo llamado "Elecciones", en el cual hace un llamado a la participación de los liberales en la próxima contienda política para terminar con el odiado partido Conservador y con Núñez. Sus fuertes palabras, alguna vez tildadas como aguijones punzantes, lo único que provocó fue la ira del Gobierno ante sus palabras violatorias de la ley, en cuanto a lo que tiene que ver con el irrespeto al Gobierno:

> *Cuidaos del ladrón que nos haga buena cara, porque más rápido os saca el reloj del bolsillo. [...] De ese Congreso volaron murciélagos como de los aposentos abandonados, y esos pájaros repugnantes – Que por su doble naturaleza son el emblema de la iglesia adherida al Estado – Se irán por todas partes a chupar la sangre de nuestros ciudadanos. Pero votemos, el triunfo será nuestro, si se nos respeta, o si no, el ultraje nos engrandecerá y hará por otro medio más inminente la victoria... Debemos votar.*[265]

También llama al Presidente Rafael Núñez como "El Doctorzuelo Núñez" y se refiere a él de la siguiente manera:

---

[264] S.N. Alcance al número 1º del Octavo Mandamiento. Bogotá: Imprenta de Ochoa, 1884.
[265] *El Correo Liberal.* Bogotá, Marzo 4 de 1888.

> *¿Cómo se explica que en la patria de los leones, pueda el taimado y cobarde zorro ejercer la dictadura? [...] los hombres como Núñez no tienen conciencia. Almas como la de este remedo de García Moreno no tienen cualidad reflexiva, porque son negros abismos sin fondos, donde no penetran ni un rayo de luz.*[266]

Haciendo efectivos los Decretos discrecionales del Poder Ejecutivo, Juan de Dios Uribe fue arrestado en abril de 1888. *El Correo Liberal* fue suspendido y su elocuente redactor desterrado. Felipe Angulo se encarga de ejecutar las contravenciones, a través del nuevo prefecto de policía, Arístides Fernández. Igualmente, confiscan la edición de su libro próximo a salir por esta fecha, llamado: "El cementerio radical". El editor, Sr. Alcázar, también es conducido a prisión. Algunos periódicos se solidarizan con "el indio", y sufren las consecuencias. Es este el caso de *La Palabra*[267], redactado por Julio Áñez, descalificando la acción del Gobierno por haberse llevado a cabo, "sin fórmula de juicio y con el sólo derecho de la fuerza" y, además publica una carta de Uribe, el 19 de abril de 1888, una vez fue apresado, en donde llama a Núñez: "*proxeneta político y corruptor sistemático de la conciencia colectiva. [*...]"[268]

Juan de Dios Uribe, no solamente se consideraba un defensor del liberalismo radical desde su periódico. También consiguió constituir el paradigma de la lucha por la libertad de imprenta; no obstante los reclamos del escritor Arturo Escobar Uribe, para quien nunca fueron suficientes los reconocimientos del Partido Liberal a uno de sus más "ilustres defensores", y sus agradecimientos se constituyeron en

---

[266] *El Correo Liberal.* Bogotá, Enero 29 de 1888. Este artículo lo escribe Uribe, haciéndolo pasar como un remitido, escrito por un anónimo, desde un periódico Mexicano.

[267] Este periódico también hizo parte de las nuevas publicaciones que vieron la luz con el Decreto de Payán. Su primer número fue el 1º de Enero de 1888, y el último el 26 de abril de 1888, contando tan solo con 15 ejemplares.

[268] ESCOBAR URIBE, Arturo. Óp. Cit., P,27

una *"demagogia contemplativa sin contenido tangible"*[269] siendo enaltecido en 1936 con la ley 80 de ese mismo año.

> *Honrase la memoria de Juan de Dios Uribe como la de un heroico soldado de la libertad, cuya cáustica pluma fue la lanza que en las horas de combate se clavó en la injusticia, y cuyo estilo, macerado en el estudio, sacudido por el huracán de las pasiones e impregnado en la enseñanza de los españoles del siglo de oro, le dio puesto en primera fila entre los grandes prosistas de Colombia [...] La Nación contribuye con la suma de dos mil pesos ($2,000) para la erección de su busto en la población de Andes, donde vio la luz, decretada en la ordenanza número 25 de 1935 por la Asamblea de Antioquia.*[270]

El homenaje terminó con una colecta de los vecinos de Andes para la erección de un monumento, que después sería destruido en septiembre de 1949, según Arturo Escobar, por los Conservadores.

Los ataques del "indio" contra el Gobierno son defendidos por *El Orden*[271], periódico conservador con quien tranza una lucha de tinta y papel. Para defenderse de esos ataques, Uribe hubo de retorcer contra sus redactores enunciados resueltos y característicos de su estilo insultante: "*El orden aspira, en su número 66, á cubrirnos de mugre; pero antes, por caridad, debía quitarle, en un estercolero, con lo áspero de un tejo, la podre [sic] al partido conservador*"[272] Su redactor se autodenomina Republicano y por ello aduce que, el "dictador Núñez" ha resuelto expulsar a muchos de la patria "Por razones de orden público",

[269] Ibíd., p. 98.
[270] *Diario Oficial,* 14 de Abril de 1936, No. 23190. Citado en ESCOBAR URIBE, Arturo. Óp. Cit. p. 99.
[271] Este periódico publica su primer volumen el 1 de Enero de 1887 hasta el 27 de Agosto de 1897 con su volumen número 11.
[272] *El Correo Liberal*, Bogotá, 15 de enero de 1888. Número.3. p. 10.

simplemente porque no gritan “viva la dictadura”. Tampoco perdía ocasión para insultar al partido Conservador. Relata que “en días pasados”, una muchedumbre acudió al palacio arzobispal a ver un hombre poseído por el demonio, que tenía enredada en el cuello una serpiente, pero claro, “*Este pueblo tiene una serpiente enredada en la garganta, que lo mantendrá embrutecido mientras no se la quite, y es el partido conservador*”[273]

Curiosamente e identificándolo como auténtico, Juan de Dios Uribe dice que en las instalaciones de su imprenta reposa una carta de José María Samper, escrita desde Bogotá al señor Carlos Sáenz Echavarría, Ministro Colombiano en Santiago de Chile, expresiva sobre una supuesta, novedosa y sorprendente reculada del colaborador de la Regeneración: *“Hemos retrocedido un siglo, estamos en el más oprobioso absolutismo. El Presidente es todo, la Constitución nada. El Consejo de Estado es un miserable Consejo áulico; y los Ministerios de Gobierno, descarados contratistas públicos o privados.*”[274.]

Para el Gobierno, la gravedad de la publicación de la supuesta carta en enero de ese año, ya llevaba intrínseca la violación del inciso 7 del Artículo 4º del Decreto 151 del 17 de febrero de 1888, en el cual, se constituía una publicación en subversiva, cuando publicaba noticias falsas de las que podía resultar alarma ó peligro para el orden público, grave daño á los intereses o al Estado. Sus escritos empezaron a llenar la copa de la libertad expresada en el artículo 5º del mencionado decreto, que reconocía un permiso amplio otorgado a cada escritor para discutir los asuntos de interés público. Precisamente, el título “De las publicaciones subversivas”, mantiene la palabra “Atacar” cómo la causa para hacer la rotulación de una publicación como subversiva. En otras palabras, los

[273] *El Correo Liberal*, Bogotá, 15 de enero de 1888. Número 3. p. 15.
[274] *El Correo Liberal*, Bogotá, 22 de enero de 1888. Número 4. p. 20.

términos facultativos del Gobierno para permitir la discusión de los asuntos de interés público, estaba mediada por la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para considerar como un "Ataque" cualquier discusión. Desde mi punto de vista, la erección del lenguaje ofensivo utilizado por algunos periódicos radicales exacerbaba el ánimo de los agentes del Ministerio Público. Inclusive, algunas publicaciones, igualmente críticas y opositoras como *El Relator* en el periodo redactado por Felipe Pérez, le valieron solo unas pocas suspensiones temporales y continuó publicando ininterrumpidamente durante el mandato de Carlos Holguín, quizá por la utilización de un lenguaje menos desobligante.

Juan de Dios Uribe, igualmente criticó también las decisiones del Gobierno. Por ejemplo, la destitución de un catedrático de la Universidad Nacional, Dr. Juan David Herrera, le motivó a expresar que: "*hay un periódico imbécil llamado La Equidad, que felicita al Gobierno por la destitución del doctor herrera".* Le dice al Ministro, José domingo Ospina que no tiene razones para entender la eminencia de figura que acaba de destituir, porque *"ni siquiera sabría donde quedaban las costillas"*[275] en un cuerpo humano, y achaca esta y muchas desgracias más a los ultramontanos. Pero, quizá su mayor contribución para que el Gobierno tomara la decisión de suspenderlo y desterrarlo, así como el confinamiento de su editor de apellido Alcázar en Abril de 1888, fue la publicación de una supuesta oferta chantajista que el Gobierno le había extendido para que dejara de publicar sus vilipendios; consistente en la propuesta de un cargo en Europa y una gruesa suma de dinero que el escritor rechazó.[276] Para el Gobierno Regenerador, la amenaza provenía del afán del publicista por:

> *Combatir esa reacción, avivar el fogón de las ideas perseguidas y en eclipse cuando ya la traición se consumó; provocar la guerra de*

[275] Ibíd.
[276] *El Correo Liberal*. Bogotá, 29 de enero de 1888. Número 5. p. 25.

restauración, con elementos de aquí y de cuantos nobles convencidos quisieran ayudar en esa campaña de liberación, ese fue el afán de sus afanes, la meta de sus esfuerzos, el anhelo de su alma combativa. Su arma fue la pluma, preparando los caminos a la espada [...] Núñez, que temblaba de la pluma cuando ya tuvo a su servicio las espadas y el hisopo, le desterró por escritor, por escritor incontrastable de verdad y venganza, de castigo enhiesto al crimen coronado por el éxito y la general incurable sujeción de los conservadores colombianos.[277]

Desterrado primero a Ecuador, regresó de incógnito a Medellín y en un discurso a Epifanio Mejía en donde criticó abiertamente las "emisiones clandestinas" del Banco nacional, fue denunciado por los Conservadores de Antioquia y nuevamente apresado y enviado a San Andrés. Del archipiélago huyó hasta alcanzar la costa de Nicaragua, para continuar su actividad conspirativa. Después de pasar por Venezuela se unió a la agitación política de Eloy Alfaro en Ecuador, país en donde muere a causa de un accidente cuando su caballería rodó a un abismo. Uribe pronosticando la futura guerra de los mil días había alcanzado a decir sobre la Regeneración: "*La libertad de imprenta" [había escrito el autor desde Los Refractarios de Caracas] "no volverá a Bogotá y a toda la tierra colombiana sino en el morral de nuestros soldados".*[278] Una copia fiel de su odio hacia Núñez y su regeneración, así como una crítica al partido Liberal, que por andar dividido, fue incapaz de detener al Cartagenero, se encuentra expresada en las páginas escritas desde Quito el 5 de Octubre de 1895, en el panfleto titulado "En la Fragua". Su odio hacia quienes le desterraron en dos ocasiones, primero Núñez y después Caro, no escatimaba propinas a la hora de referirse a sus represores:

---

[277] RESTREPO, Antonio José. Juan de D. Uribe. (In memoriam), Bogotá, abril 13 de 1913. En: Obras completas, ediciones académicas. Edición digital consultado el 6 de Junio de 2008 en: http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/12/12_1955950934.pdf p. 5.

278 Ibíd. p. 9.

También aquel bribón militó en el liberalismo; fue Secretario de Mosquera y Convencional de Rionegro; lució como poeta herético y escritor heterodoxo; consiguió popularidad, bienestar y fama a la sombra del partido; fue agasajado, mimado, sustentado por sus copartidarios; proclamó la reforma, decantó el bien público y juró morir envuelto en los pliegues de la bandera del liberalismo que para él era "sinónimo de justicia". Asentado en el mando desconoció a los suyos, los entregó al enemigo, rompió la Constitución, despedazó las leyes, estableció el despotismo y se durmió en la muerte con la seguridad de haber cansado por igual a todos los delitos. Núñez era corrompido desde el vientre de su madre, con maldad tan ingénita, que por dondequiera y en cualquier tiempo que se profundice su vida, se encuentra un pozo mefítico; pero no se habría descolgado al último precipicio bruscamente, causando tanto daño, si los oportunistas no le hubieran infundido aliento, porque a ese facineroso le faltaba el valor aventurero, en relación con sus sobresalientes habilidades de pícaro. Fue contar con ellos, y precipitarse en el escándalo frenético y pasó del cisma a la jefatura de horda en medio de dos lustros, y por corolario al canibalismo desnudo, que heredó exprofeso el petulante gramático voraz que esclaviza a Colombia. Ya que el puñal no desbarató el corazón de Núñez, ni la cuerda le detuvo el aliento, como lo tenía merecido, su historia nos enseña lo que acontece a los partidos que se detienen en su desarrollo, supeditados por uno o más de esos salvadores o redentores apócrifos[279]

[279] ESCOBAR URIBE, Arturo. Óp. cit., p. 214.

Evidentemente, Juan de Dios Uribe durante sus años de escritor público mantuvo la visión de que, el proceso regenerador en Colombia, fue una imposición tiránica de Núñez y Caro.[280] Su odio político y personal le llevó a expresar:

> *¡Primero el cabrón y después el arlequín - Adelante! Cuando Núñez se robó a la esposa del Ministro Logan, su protector y amigo, es villano; cuando envenena a Ricardo Gaitán Obeso, prisionero y enfermo, cuando ultima a su mujer legítima en Chiriquí, para casarse con su barragana en Cartagena, es monstruoso; cuando vende la república y la entrega al furor de sus amigos, es parricida; pero es todo junto, es más que todo eso; Cuando exorna con su pluma los delitos, como un asesino que lleva coronas a las sepulturas de sus víctimas. [...]Y el otro modelo del lenguaje, el arlequín. ¿Qué vale? Es la lombriz solitaria de las letras, el eterno amanuense de los muertos, el eco de los rincones, la voz de los escaparates, un mecánico sin brillo uno de tantos [sic] belitres rimadores que saben ortografía y le buscan el consonante a presidio.*[281]

La libertad que decía defender Juan de Dios Uribe consistió en expresar sus opiniones de manera "ruda" y con una actitud redentora hacia el "pueblo". Esta última palabra, difícil de definir y tan comúnmente utilizada desde el siglo XIX hasta nuestros días, era la meritoria para explicar la necesidad de utilizar un lenguaje lo suficientemente tosco, con el propósito de buscar una mejor comprensión de parte de este. Sin embargo, al leer tamañas alocuciones cargadas de fluctuaciones literarias, símiles y comparaciones, se podría llegar a pensar que

[280] Curiosamente evita en sus escritos referirse a Carlos Holguín, de quien alguna vez escribió una corta reseña titulada "Esquicios": "*Es hombre de temperamento alegre y, del mismo modo que se entretiene y es temible adversario con las cartas, en las luchas del Parlamento se divierte, aguza su ingenio y sobresale como polemista diestro y como orador cáustico*". RESTREPO, Antonio José. Óp. cit. p. 177.

[281] ESCOBAR URIBE, Arturo. Óp. cit., p.222.

quizá, el llamado “pueblo” lector del siglo XIX mantendría una superior ilustración en dichos recursos literarios. Pero, la prensa política mantenía para el Liberalismo radical una misión incendiaria y la razón de ser de su ejercicio periodístico para Juan de Dios Uribe, que era precisamente avivar el fogón de la política opositora.

Pero, no por considerar preponderante esta “misión” podría decirse que su labor de escritor fuera falta de talento. Desde mi punto de vista, la fijación casi única que mantuvieron los publicistas durante estos últimos años del Siglo XIX en la prensa política, disipaban los escritos de otros tenores. El “indio” llegó a escribir, desde mi perspectiva, una de las mejores crónicas sobre un personaje no político por aquellos años. Las palabras comprendidas sobre la vida y muerte de su amigo y poeta Candelario Obeso, escritas en febrero de 1886, son una muestra del interés por manejar con lenguaje sencillo, permitiendo, en su estilo, juicios personales y preponderando los personajes dentro de un adecuado manejo del tiempo.[282]

Pero la expresión de sus ideas mantuvo permanentemente el afán de la imposición de ellas. Por ello, sus escritos contra el Clero son, en la opinión incluso de sus amigos radicales, fanáticas al extremo.

> *Las ideas extremas que profesa Uribe en todo, lo lanzan continuamente a tocar con más calor del necesario, las cuestiones religiosas. En ello es implacable, intransigente, terrible. De ahí el que los miembros del clero, los creyentes de buena fe y los fanáticos hipócritas le profesen el más sincero de los odios. Nosotros creemos que si el olvidara un poco ese tema ingrato, impertinente en este país y en estas horas del siglo, tendría más tiempo para servir a su causa.*

[282] URIBE, Juan de Dios, y RESTREPO, Antonio José. Candelario Obeso. Bogotá: Imprenta de vapor de Zalamea. 1888. Este trabajo puede verse también en: http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/12/lit-jdu-co.pdf

Detestamos tanto el fanatismo de los creyentes como el de los incrédulos.[283]

2.8. EXIJO UNA EXPLICACIÓN: CANTILLO Y LA REVISTA JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

Precisamente a la formulación de la ley, y quizá debido a cierta confusión referente al Decreto 635 de 1887 instaurado sobre la imprenta; la posterior desandada de Payán con el 779 de 1887, y el nuevo y severo Decreto 151 de 1888; llevaron al doctor Liborio Cantillo, liberal respetuoso de los códigos y editor de un periódico jurídico llamado Revista Judicial[284], a solicitar explicaciones sobre la ley. Sus dudas está referidas al decreto No. 151 de 17 de febrero de 1888 Estas aclaraciones jurídicas constituyen un elemento importante porque descubre las intenciones del Gobierno acerca de las imprentas.

En primer lugar, Cantillo aclara, que si bien su periódico trata temas estrictamente "forenses" sobre las leyes, la ofensa a la dignidad de las personas o a las autoridades;

No se especifica quien califica la ofensa, y como en materia de dignidades, hay unas más susceptibles que otras, conviene saber si el censurar un fallo cualquiera, en términos comedidos y con indicación de las leyes infringidas, ó del error de hecho ó de derecho en que el

[283] PORRAS, José Lisardo. Juan de Dios Uribe. Bogotá: Imprenta del progreso, 1888. p. 12.

[284] Este periódico de jurisprudencia, editado en la imprenta de Gaitán, y dirigida por Liborio Cantillo, vio sus primeros números entre el año 1880 y 1881. Posteriormente inicia publicaciones nuevamente, en abril de 1888, también en el mismo corto periodo en el que Payán revertió las medidas contra la prensa, y continúa publicando ininterrumpidamente hasta 1894. Cantillo, seguidor de las leyes en un comienzo, no pudo contener la arremetida de Caro, ni contener sus impulsos revolucionarios, que le hubieron de llevar a cerrar su periódico para acudir a los campamentos en la guerra de 1895, volviendo a publicarlo en los años de 1896 y 1897. Después de 10 años de silencio, vuelve a imprimir desde 1907 hasta 1914.

juzgador ó los juzgadores hayan incurrido, constituye ó no ofensa a la dignidad de estos, ó ataque, por ejemplo, a la corte suprema, ó al tribunal que haya dictado el fallo.[285]

Holguín le explica a Cantillo que, debido a que no existían leyes previas porque la Constitución de 1863 lo prohibía, el estudio de la jurisprudencia de la Prensa es un tema nuevo, y por eso es posible que "*ofrezca al principio algunas dudas, [y que,] Juzga este Ministerio que la exposición, examen y resolución de pequeñas dificultades semejantes, contribuirá a fijar la inteligencia del Decreto, y á demostrar su justo y benéfico alcance.*"[286] Procura, el Ministro de Gobierno, que los escritores y periodistas acaten el espíritu que inspira las nuevas instituciones, teniendo en cuenta que las leyes hacia la imprenta no están hechas con un propósito especial o maligno, sino que invocando el espíritu de protección del Estado hacia sus ciudadanos, las restricciones a las libertades cuando se tornan en abusos, es la "verdadera, positiva y única garantía del derecho. También invoca la "moral cristiana" como persuasiva de los escritores, para que estos se pongan en los zapatos de quienes pueden dañar u ofender. Los encomios del Gobierno van dirigidos a quienes publiquen con "inspiración patriótica" y los reproches a quienes publiquen con "*inspiraciones contrarias á las conveniencias de la sociedad*"[287]

Es de entender que la sociedad a la cual pretende defender la regeneración, tiene cómo características definidas, un rechazo a las costumbres liberales contrarias a las enseñanzas religiosas, y un virtuosismo para los nuevos ciudadanos enmarcados dentro de los límites de los deberes piadosos y caritativos, lo más alejados posible de las amplias libertades públicas y de los principios de "soberanía popular". Podría decirse que, ser ciudadano significaba estar con la

[285] *Diario Oficial*. Bogotá, 9 de Abril de 1888. p. 314.
[286] Ibíd.
[287] Ibíd.

Regeneración. Sin embargo, el esfuerzo de "ordenar" aquello que estaba "desordenado" en las administraciones anteriores, requería igualmente de una definición de ciudadanos. "*Afirmamos en primer lugar que la doctrina de la soberanía, entendida en el sentido revolucionario- léase liberal – es una doctrina impía*". [288] Por eso, reitera Holguín, que la sanción legal es necesaria para moralizar.

Precisamente, en lo referido a la dignidad de las autoridades, lo que no puede ser ofendido es la "dignidad del puesto" ocupado por el funcionario. Esta dignidad de investidura debe ser respetada por la prensa y por el mismo funcionario. "En este sentido no hay dignidades más o menos susceptibles", Remata diciendo el Ministro de Gobierno.

En segundo lugar, y debido a que dirige un periódico que usualmente analiza las decisiones judiciales, Cantillo pide explicación sobre el ordinal 6º del mismo artículo 4º, referido a "atacar la inviolabilidad de la cosa juzgada" o de "*coartar con amenazas y dicterios la libertad de los jueces, Magistrados y funcionarios públicos"* la preocupación de Cantillo estriba en que; si decirles a estos funcionarios que están errados en sus decisiones, "*ó que si varían, ó si no lo cambian, infringirán la ley, ó se harán culpables y habrá que acusarlos, etc. ¿Será esto una amenaza capaz de coartar la libertad de los Magistrados ó los Jueces?*"[289] A la par, pregunta si señalar infracciones a la Constitución y la ley por parte de Jueces, Magistrados o funcionarios públicos, inclusive encontrándose la sentencia dictada en última instancia, también se estaría "*atacando la inviolabilidad de la cosa juzgada" [o] "¿incurriremos en este delito al censurar la*

[288] *La Unidad Católica.* Citado por: URREGO, Miguel Ángel. La regeneración (1878-1898), en: Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo 2. Bogotá: Editorial Printer, 1991. p. 433.
[289] Diario Oficial. 9 de Abril de 1888. p. 314.

sentencia que suponemos y hablar de los vicios que la invalidan ó le impiden producir efectos? "[290]

En este punto, la explicación del vocero gubernamental es más clara: No constituye delito de imprenta los exámenes o estudios críticos que se hagan por la prensa "*en términos comedidos [...] con criterio distinto del que siguió el juzgador, ó desde otro punto de vista, con indicación de las leyes que en concepto del escritor se han infringido, ó del error de hecho ó de derecho en qué, á juicio del mismo, se ha incurrido"*[291]. En cuanto a lo referido de "coartar con amenazas"; estas últimas son descritas cómo: *"aquellas manifestaciones que se hacen con propósito (manifiesto) de intimidación ó venganza, declarando que se hará uso de medios ilegales para cohibir la acción de la autoridad ó anunciando vagamente que al funcionario que la ejerce le sobrevendrá algún mal desconocido"*[292]*.* Pero, la sujeción a la responsabilidad de dichos análisis jurídicos habría de mantener despejada de castigos a su publicación, ya que: "*El anuncio ó advertencia que sin injuria ni amago se haga por la prensa, de que habrán de emplearse cualesquiera medios de legítima defensa, ó recursos permitidos por las leyes, no constituye delito de imprenta.*"[293] La sanción, en cambio, se llevará a cabo cuando la prensa señale el prevaricato que "ha podido" determinar el pronunciamiento de una sentencia, porque el Gobierno consideraría esto un acto temerario y ofensivo. Pero, si la acusación de prevaricato[294] se hiciera "conforme a las leyes" no se cometería delito. La aclaración, extrema la ambigüedad. Además, aclara el Ministro que, si la sentencia aún es apelable mediante algún recurso legal, "*es*

[290] Ibíd.
[291] Ibíd.
[292] Ibíd.
[293] Ibíd.
[294] "Prevaricación: Acción (Del lat. praevaricatĭo, -ōnis).1. f. Der. Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario." *Real Academia Española ©.* Consultado en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=prevaricato

permitido agotar contra la decisión del supuesto todos los medios y recursos legales y anunciar que se hará uso de cualquiera de ellos."[295] Pero en el caso contrario, es decir, si la sentencia no admite reforma alguna, no es permitido atacar la validez del fallo por la prensa. La ambigüedad de este punto, es además interpretada por Cantillo en términos positivos: "*El HA PODIDO denota hipótesis, de la cual quisimos servirnos en la consulta. Según lo resuelto, si es permitido señalar por la imprenta el prevaricato que se haya cometido y pueda comprobarse."*[296]

En tercer lugar, y en demasía preocupante para Cantillo por tocar la raíz de su publicación, consiste el ordinal 8º del mismo artículo 4º del citado Decreto, que prohíbe: "anticiparse a publicar, sin competente permiso, actos oficiales". Debido a que Cantillo concibe como la misión de su Revista Judicial, publicar los fallos de los tribunales para mantener al tanto a la sociedad de la administración de justicia, y de esta manera juzgar los dictámenes justos y los injustos. Cantillo supone que los jueces están interesados en la publicidad que ponga en conocimiento sus actuaciones, pero si no es así, requiere saber si las sentencias y autos dictados en los asuntos criminales ó civiles, están comprendidos en esta disposición del ordinal 8º del artículo 4º[297], ó si "*por el contrario, hay libertad para que cada interesado publique, sin necesidad de permiso, los fallos que pronuncien en los negocios que le conciernan; y en caso negativo, quien debe otorgar este permiso"*[298]. La explicación del Ministro de Gobierno consiste en aducir que la prensa no es el único medio de publicidad de las decisiones judiciales, ya que estas se publican en una audiencia y se notifican al interesado. Holguín no aclara

[295] *Diario Oficial*. Bogotá, 9 de Abril de 1888. Óp. Cit.
[296] *Revista Judicial*. Bogotá, 18 de abril de 1888. No.397 y 398. p. 1592.
[297] Este ordinal dice: "8.° Anticiparse á publicar, sin competente permiso, actos oficiales; hacer revelaciones que comprometan los intereses de la República ó perturben una negociación diplomática" *Diario Oficial*. Bogotá, 9 de Abril de 1888. p. 314.
[298] Ibíd.

porqué medio se lleva a cabo esto, pero simplifica el asunto diciendo que el interesado puede publicarla "conformándose puntualmente con el texto auténtico".

De esta manera, el egregio abogado y periodista quedaba maniatado, o cuando menos dubitativo sobre la forma en que debería comportarse de ahora en adelante en sus publicaciones, y con la duda principal aún sin resolver. Razón tiene cuando expresa prudentemente que "a primera vista parece en contradicción" los mencionados numerales 3º, 6º, y 8º del artículo 4º comparados con el artículo 5º, que permite discutir ampliamente los asuntos de interés público, y que dentro de estos últimos tienen cabida los que se relacionan con la justicia y la manera de administrarla. Aduce que *"sin conocer los fallos que se producen sobre ellos, nadie puede "proponer ni razonar las reformas que estime justo y conveniente, se introduzcan en la legislación", como el expresado artículo 5º lo permite y aún lo pide."*[299] No obstante, la Revista Judicial de Cundinamarca continuó publicando los dictámenes judiciales y sus apreciaciones jurídicas sobre ellos, hasta el año 1899, según su director, pausada a causa de la guerra.

Rafael Núñez no tuvo inconvenientes para dejar a sus más allegados dirigentes al frente de los cargos públicos. Su afán, probablemente se centraba más en el control del poder, que en el ejercicio personalizado de este. La Constitución de 1886 y el nuevo ordenamiento dado a la Nación fueron defendidos con una normatividad represiva, siempre buscando que la llamada "regeneración fundamental" se llevara a cabo en sus temas más profundos. Cuando veía un inmanente peligro de la intromisión del Liberalismo Radical, encendía la alerta y procuraba adaptar sus pensamientos e ideas para vencer el obstáculo.

El Tratamiento a la prensa hacía parte en Rafael Núñez de una estrategia complementaria al modelo de la Regeneración. Las armas dadas al Gobierno

[299] Ibíd.

desde la inserción del Artículo “K” en la vida Nacional no podían ser enfundadas nuevamente bajo la premisa de las “libertades”. Desde mi punto de vista, el primer Decreto bajo la nueva Constitución de 1886, el 635 de 1886, contenía un intento participativo de una legislación de Prensa sujeta a la responsabilidad emanada de la Carta en su Artículo 42. Sin embargo Núñez, teniendo a Caro como su más ferviente socio en la idea represiva, logró que el Gobierno tuviera una participación activa contra los delitos de subversión, que con el transcurrir de los meses, pero principalmente con el retroceso pretendido de Eliseo Payán y la continuación del desborde ofensivo desde la prensa radical, hicieron recapacitar rápidamente sobre la inconveniencia de un Decreto con Jurados de imprenta, que no habrían de sobrevivir porque no actuaban como el cordial que Núñez requería para no permitir la anegación de su obra con las aguas del radicalismo. Por esta razón, el Decreto 151 de 1888, compensaba y se ajustaba mayormente al deseo de no tolerar desbordamientos de tinta acusatoria y calumniante que pudieran generar una nueva subversión al Gobierno.

3. CÓMPRELO DON CARLOS, QUE HOY LE DAN BIEN DURO

> "Si Dios me concediera la gracia de no estar sujeto a las leyes de la fragilidad humana, todavía vería con lástima y pena las caídas de mis compatriotas, más bien que con delectación morosa y ruido jubiloso."
> Carlos Holguín. Cartagena, Marzo 7 de 1894.

3.1. THE RIGHT MAN IN THE RIGHT PLACE

Una vez, el general Payán fue relevado del cargo de Presidente encargado, Núñez debió ausentarse nuevamente de la capital, dejando en el poder ejecutivo a Carlos Holguín en Agosto de 1888. Para quienes disentían del concubinato entre el Partido Nacional y el Partido Conservador en el ejercicio del proyecto Regenerador, no quedaba duda con el ascenso de Holguín al poder, del cumplimiento del proyecto conservador en el Gobierno. Fehacientemente, la evolución de la Regeneración posibilitó el afianzamiento de los Conservadores en el poder y el aislamiento del liberalismo, principalmente por su táctica opositora que utilizaba la Prensa como bastión y trinchera.

La solicitud de Núñez para que Holguín se desempeñara en el poder, no solamente articulaba el compromiso con el partido Conservador, sino también la confianza y la lealtad en el amigo con el cual compartía profundas convicciones políticas. Le llegó a decir *"the right man in the right place"* [300] materializando en la práctica la unidad de pensamiento y la de acción. En una famosa carta escrita el 29 de Marzo de 1886 le solicita su regreso a Colombia, ya que la renovación de su mutua confianza es necesaria para aplacar algunas raíces de divergencias.

[300] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro, Óp. cit. p. 839.

Insisto en que por el mes de Julio se venga usted a tomar su puesto político militante, pues así conviene a su causa común, a usted y a su seguro servidor. Aunque quisiera (confidencial, yo no puedo perpetuarme en palacio, y deseo que la herencia pase al más digno. Sin su presencia, gérmenes de discordia tomarán curso y vendríamos luego a la triste convicción de Bolívar, "Aramos en el mar." [301]

Abogado del Colegio de San Bartolomé antes de cumplir los 20 años, el gran estratega político del Partido Conservador nacido en Nóvita cuando antes de ser departamento, el Chocó hacía parte del antiguo Estado del Cauca; era sobrino del ex mandatario Manuel María Mallarino. Su abolengo Caucano fue bien emparentado en la capital del país al unirse en matrimonio con Margarita Caro, hermana de Miguel Antonio, y a su actividad diplomática, docente y literaria, se le podría añadir su dominio idiomático del latín, francés, inglés e italiano. Senador a los 23 años por Buenaventura, el pelirrojo político había llevado una vida protagonista hacia finales del siglo XIX en Colombia.

Carlos Holguín desarrolla un tipo de gobierno "nacionalista" motivado por una retórica actitud civilizadora de la sociedad Colombiana. Aunque en su pensamiento, era de vital importancia el orden como elemento civilizador, basado en los modelos europeos de orden público, es visible su distanciamiento del pensamiento político de Núñez. En primer lugar, aunque admirador, igual que Núñez, de las políticas de orden público de las Naciones Europeas, especialmente de Francia, el político conservador instalado en la Presidencia afina una articulación entre la ideología nacional y la referencia a Europa, que es mucho más novedosa. Aunque maneja, al igual que la mayoría de los dirigentes nacionales decimonónicos, un discurso civilizador "desde arriba" endosa las

[301] Ibíd., p. 834.

medidas de su gobierno a una mayor distancia de la elite cosmopolita del Cartagenero. La constante mirada hacia los llamados "países adelantados" es frecuente en todos los informes, pero especialmente en la mencionada sujeción a la responsabilidad legal de la prensa. De hecho, la mención de la ley del 29 de Julio de 1881 en Francia, es constante en los discursos de Holguín y de Caro, cuyo estatuto inspirado en la "prensa libre, pero responsable" hace parte del "mundo civilizado" al que debería ser llevada la Nación Colombiana.

> *Por fortuna, no existe en el mundo la solitaria y escandalosa excepción que Colombia ofrecía – es preciso que, sin prejuicio del código penal, se prevean los delitos y contravenciones peculiares de esta institución, por medio de leyes especiales, [...] sin dejar de estar subordinada, como todo, á los principios eternos de la justicia, lo está también, más que cualquier otra institución, al estado social, á las necesidades políticas, y exige según los tiempos, mayores grados de represión ó nuevos temperamentos de tolerancia.*[302]

Incluyente dentro de la gran reverencia a la genialidad Francesa referida a la literatura, las ideas, e igualmente a las leyes; era para nuestros dirigentes de la Regeneración, la legislación gala una primordial arma con lábaros para mostrar la necesidad de que, una severa legislación plasmada en una constitución liberal, debía establecerse para imponer a los abusadores de la libertad, sus respectivas sanciones. Incluso, las ofensas al presidente de la República por medio del uso de carteles, discursos impresos, dibujos, grabados o emblemas, era castigada por la ley Francesa, con prisión de tres meses a un año, y una multa de 100 a 3,000 francos. Esta ley, posteriormente adicionada en 1882 tenía por objeto la represión de los "ultrajes a las buenas costumbres".

[302] CARO, Miguel Antonio. Libertad de Imprenta. Óp. cit. p.68.

Tal es el afán por imponer este orden en la Nación, que la importación de modelos europeos no se llevó a cabo solamente en el plano de las ideas. El envío con delegaciones de funcionarios públicos era constante hacia Francia, y viceversa. Efectivamente, en 1891 un comisario francés, Marcelino Gilibert, fue encargado de la organización de la policía nacional. Las constantes conspiraciones subversivas por parte del Liberalismo Radical armonizaron el afán por la consigna de un orden público controlado. *"El tema de la amenaza social invade por completo la representación de Europa elaborada por Holguín. La gran línea divisoria en la representación bipolar de Europa ya no es el liberalismo versus el antiguo régimen, ni impiedad frente a catolicismo, sino subversión versus orden."*[303] De la misma manera, su mirada hacia un modelo de construcción nacional colombiano presenta un giro importante en su gobierno. Fréderic Martínez, en sus estudios sobre el nacionalismo colombiano ha identificado una relación entre una política enfocada hacia la búsqueda de la felicidad nacional, y un modelo de autenticidad del "ser colombiano", que no padece de los peligros y tribulaciones de Europa. Sin embargo, "*más que un discurso sobre la felicidad nacional, el discurso de Holguín parece ser un discurso sobre la felicidad de los dirigentes colombianos por la facilidad de su oficio"*[304], cimentado en una Nación agraria y pobre, que no debe mostrarse impaciente por la riqueza material, "*en conformidad con su ser profundo, [...] atrasado, pero modesto en sus ambiciones, agrícola, pero contento de su suerte, y sobre todo, poderosamente resignado."*[305]

[303] MARTÍNEZ, Fréderic, En los orígenes del nacionalismo colombiano: europeísmo e ideología nacional en Samper, Núñez y Holguín (1861 – 1894). En: Boletín cultural y bibliográfico. No. 39. Vol.23. Bogotá: Ediciones Banco de la República, 1996. Biblioteca Luís Ángel Arango, Biblioteca Virtual. [Consultado 6 – jun. – 2008] En : http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol39/bol2b.htm

[304] Ibíd.

[305] Ibíd.

Esta poderosa diferenciación de los destinos para la sociedad, dibuja un nacionalismo con la mirada del enano que renuncia por no poder alcanzar la bombilla. Para la población, la resignación a la suerte de ser atrasados pero felices, bajo los valores del sentimiento nacional como fuente de adaptación social y de bienestar; mientras que para los dirigentes del Estado, estriba la imposición del orden como medida primordial para alcanzar la felicidad, y que no es otra cosa que la reivindicación del cosmopolitismo europeo como fuente de inspiración. Esta nueva inclinación de la Regeneración, prevalecerá durante varios años como tarea fundamental del modelo nacional emanado desde las élites. Para el Liberalismo, la noción de orden, mantenía una diferenciación clara: "*No el silencio de los cementerios, ni la opresión ominosa, sino el tranquilo goce del derecho.*"[306]

Claro que, al igual que todos los políticos colombianos, Holguín también mantiene un viraje entre su pensamiento y la táctica antes de la regeneración, y el ejercicio específico del poder. Ese afán por mantener el orden dentro de la libertad no siempre fue su propósito. Decía Santiago Pérez desde *El Relator*, que Holguín cuando era representante a la cámara en 1876, fue persuadido con mucho trabajo, para que apoyara la derogación de la ley de orden público de 1867, que mandaba que el Gobierno general no interviniese en las contiendas armadas entre los Estados, debido a que los conservadores aspiraban a conquistar paulatinamente estos por la fuerza. Dice que Holguín fue un enemigo del orden público. "*Si había anarquistas en Colombia, esos anarquistas no eran pues los radicales. Eran los partidos que no estaban el poder y los círculos de los Estados que querían tirar de la espada a mansalva, periódicamente, para repartirse los empleos y los sueldos*."[307]

[306] RUDAS, Juan Manuel. Lo que fue y lo que será el partido Conservador en Colombia. Barcelona: Imprenta Juan Manuel Carral, 1889. p.8.
[307] *El Relator*, Bogotá, 1 de Febrero de 1890. Número.382. p.1515.

La ideología de la Regeneración iría arrastrando en su oportunidad la diferenciación con el Radicalismo, cimentada en la promoción de una nueva época, en donde era esencial el retorno a la esencia nacional colombiana, tratando de apartar la mayúscula imitación de todo lo extranjero con la que era acusada la administración radical.

> *De cierta forma, la Regeneración constituye, después de los intentos fracasados de medio siglo, uno de los primeros dispositivos políticos que, en Colombia, se dirigió hacia las masas, y quiso incluirlas en la vida Nacional, aunque haya sido de forma autoritaria y paternalista. [...] temerosos de la explosión social que podría engendrar una irrupción brutal del pueblo en la política nacional, los dirigentes regeneradores juzgan preferible integrar a las masas mediante un proyecto dirigido y controlado.*[308]

Toda la visión del poder mantenía un claro norte irrigado por la conveniencia del control inspirado en los dirigentes del Gobierno. Los conceptos y definiciones de la vida republicana deberían contener este elemento como postulado clave para su supervivencia. Como en muchos actos, en el discurso hecho con motivo de las celebraciones patrias del 20 de Julio de 1889, fue nuevamente expresado:

> *La Patria son las leyes que nos señalan nuestros deberes y nos aseguran nuestros derechos; son las instituciones á cuya sombra aspiramos a ser felices y á cumplir los altos destinos señalados por Dios a los pueblos. Y el vernos á todos libres, dueños y señores de nuestra tierra, unidos por una religión de amor, y protegidos por leyes*

[308] MARTÍNEZ, Fréderic, En los orígenes del nacionalismo colombiano: europeísmo e ideología nacional en Samper, Núñez y Holguín (1861 – 1894), Óp. Cit.

justas y suaves, buscando siempre el bienestar de la comunidad y del progreso moral y material que es ley de Dios.[309]

La consigna permanente de los errores del radicalismo provenía según Holguín, de su mismo afán por ir más allá de los preceptos liberales de las "Naciones civilizadas" , incrustando las ideas artificiales que cada vez alejaban a la Nación Colombiana de lo "natural y espontáneo" para sufrir una inyección de ideas que intoxicaron la sangre sana nacional.

En todo esto, no hubo probablemente deliberada falta de patriotismo, [...] pero si ha habido excesiva credulidad y ausencia completa de criterio bastante práctico en querer pretender que Colombia lleve en materias políticas la vanguardia entre todas las naciones del orden; que un pueblo incipiente dé lecciones de administración y de gobierno a la misma Gran Bretaña.[310]

3.2. LOS DECRETOS EJECUTIVOS DE HOLGUÍN

El control del proyecto continuó cuando, efectivamente, Núñez nuevamente ausentado del poder, pero ceñido en los cálidos y leales, para el proyecto político regenerador, brazos del conservatismo; regresó a Cartagena en Agosto de 1888, encargando la presidencia a Carlos Holguín a partir del 7 de ese mismo mes. La prensa capitalina levanta nuevamente barricadas para oponerse a los planes de Gobierno. El 27 de Marzo de 1889, es expedido el **DECRETO No. 286 de 1889**, que es un adicional al 151 del 17 de Febrero de 1888, en el cual se faculta a los Gobernadores y al Ministro de Gobierno para prohibir la venta de periódicos

[309] *EL RELATOR*. Bogotá, 25 de Julio de 1889. Número. 318. p.1269.
[310] SUAREZ, Marco Fidel. Prólogo en: HOLGUÍN Carlos. Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Óp. cit., p. VI.

perturbadores de la paz y la imposición de multas de 50 a 200 pesos, igualmente somete a los voceadores de periódicos prohibidos a un arresto de tres días y a su inhabilidad para vocear otras publicaciones. No obstante, en su Artículo 2º, reitera la disposición del Artículo 5º del anterior decreto, referente a que los escritores pueden discutir "ampliamente" y sin restricciones los asuntos de interés público. Específicamente, aclara que: *"el Gobierno no intervendrá en ningún caso en que se trate de examinar la conducta suya ó de sus Agentes en lo relativo á contratos y á manejo é inversión de los caudales públicos."*[311] Pero, además continúa una disposición amarrada al mismo tiempo, a la vera del Decreto. Su parágrafo único, expresa que los empleados públicos no quedan desheredados del derecho de acudir al poder judicial, en calidad de individuos privados, contra los autores de publicaciones injuriosas o calumniosas.

Esta disposición, que proporciono una verdadera amplitud a la prensa, como fue visto en las numerosas acusaciones hacia los empleados públicos de alto nivel, rigió desde 1889 hasta 1896, con la consabida expresión opositora que no desaprovechó la oportunidad para criticar, según análisis posteriores, las emisiones del Banco Nacional y otras actuaciones del Gobierno, en términos difamantes y calumniosos. El respeto al Decreto que brindaba amplitud a la crítica a los empleados públicos por parte de los escritores, permitió que la prensa se expresara con un gran dinamismo y que el Gobierno respetara legalmente la crítica; siempre y cuando esta no atentara contra el orden o la tranquilidad pública. Sin embargo, los casos en los cuales se utilizaban los "robos o peculados" para incitar directamente a la rebelión contra el Gobierno, fueron sancionados en menor medida.

[311] Leyes de la República de Colombia expedidas por el Consejo Nacional Legislativo en sus sesiones de 1888, Óp. cit, p. 201.

El Relator, que había reanudado sus ediciones el primero de Mayo de 1889 bajo los apuntes del escritor liberal Felipe Pérez, saludó este nuevo decreto con complacencia y un dejo de escepticismo: *"¿estamos pues conformes? Tal vez si; tal vez no. Una amarga experiencia nos hace desconfiados."*[312] . Pérez inició en este periodo una serie de críticas al gobierno por casi todo y un poco mejor sustentadas. Habla sobre los bonos de deuda externa y el mal manejo del Gobierno, de la concesión francesa para la construcción del Canal de Panamá, y del servilismo del Gobierno que veía con buenos ojos la entrada de Estados Unidos a la negociación. Los datos sobre la deuda externa y de dónde la iba a pagar el Estado, fueron obtenidos del periódico *La industria* del 1° de Mayo de 1889, catalogado como un "periódico oficial" y fuente para sustentar sus numerosas peleas sobre este aspecto, con el subvencionado *La Nación*.[313]

Una diatriba sobre las tribulaciones hechas a la prensa por la regeneración, puede encontrarse bajo el título "con perdón sea dicho," en donde a manera de salmo repite cada ciertos párrafos: "Árido campo es el de la prensa" y compara al Gobierno con los antropófagos que se comían a sus enemigos para de ese modo heredar sus cualidades. *"¡Árido campo es el de la prensa! Está lleno de piedra y malezas, y cada piedra se cree una estatua de mármol, cada espina se cree una flor, y no hay que tocarlas."*[314]

De la misma manera, los editoriales de Felipe Pérez continuaron calificando la política legal referida a La Prensa como un "sofisma político", en donde reconocía una suprema gravedad a la "calumnia política". Con todo, establece una diferenciación entre dichas calumnias eyectadas desde la oposición y las del Gobierno. Pérez desvirtúa las calumnias lanzadas desde la prensa, convertidas en

[312] *El Relator*. Bogotá, 1 de Mayo de 1889. Número. 287. p. 1145l.
[313] Ver *El Relator*. Bogotá, 15 de Mayo de 1889. Número. 291. p.1161.
[314] *El Relator*. Bogotá, 15 de Mayo de 1889. Número. 294. p. 1173.

acusaciones que: "*son meras palabras, que muchas veces no tienen más duración que la que tiene un sonido*", pero no daba el mismo tratamiento a las calumnias del Gobierno, diciendo: *"son actos que se traducen en multas, confinamientos, prisión y destierro, el mayor número de veces sin fórmula de juicio"*[315]

El Relator, aprovecha cualquier momento para disimular, usando artilugios lingüísticos, todas sus ganas por expresarse insultante hacia Gobierno y sus leyes de prensa. Mientras se lamenta porque el lenguaje del ejecutivo es sencillo y lacónico, llamando a cualquier oposición desde la prensa como fruto de "conspiradores"; sus antagonistas:

> *Le grita[n] al Gobierno: robáis, asalariáis, desmoralizáis, os burláis de la ley, de la sociedad, de los partidos, de las ciencias y de las artes, servís demasiado a vuestros amigos y mortificáis de sobra a vuestros enemigos, conculcáis, os imponéis, &c. [...] sois despilfarrado, perezoso, empírico, corruptor, inepto, costoso, perjudicial y algo peor que las renombradas siete plagas de Egipto. Otros le dicen: "glotón, baldado, deforme, zanquilargo, ratero," %c.- eso va en gustos.*[316]

Y en lugar de llamar "conspiradores" a quienes así se expresen del Gobierno, Pérez propone que lo que éste debería de hacer, era tomarlo con calma y jocosidad:

> *Esto es muy duro en verdad; pero el Gobierno, en lugar de reírse de eso, como de cargos de locos ó de gentes de mala intención, ó de refutarlo victoriosamente, se incomoda, pierde los estribos, pone las*

[315] *El Relator*. Bogotá, 15 de Mayo de 1889. Número. 309. p. 1201.
[316] Ibíd.

leyes debajo de la carpeta y pide á los cuarteles un auxilio constitucional de un cabo y cuatro soldados.[317]

Pero, quienes buscaban la sujeción de los delitos de imprenta a la mera injerencia del poder Judicial, no menguaban en sus esfuerzos de regentar los Decretos transitorios a una ley de Prensa que pusiera fin a la discrecionalidad de Presidente y Gobernadores. El Congresista Guillermo Uribe, quien sostuvo al interior del cuerpo colegiado un intrincado debate con Miguel Antonio Caro sobre la derogación de una ley de prensa. Propuso un proyecto de ley, que fue rechazado por un Congreso apasionado por los acordes inmisericordes de las mayorías aplastantes, bajo la vara regeneracionista del vehemente gramático. Sin embargo, el esfuerzo fue llevado a la opinión pública mediante la publicación el 24 de septiembre de 1888 de un libro con los aspectos del debate.[318] Este proyecto de ley pretendía, además de la derogación del anterior Decreto 151 de 1888, que las acusaciones por delitos contra el orden público, fueran elevadas desde el Ejecutivo hacia un Jurado compuesto por tres miembros, proporcionados por la Corte Suprema, el Senado, y la Cámara de representantes, quienes decidirían al respecto.

La prensa política continuó sin reparos afianzando las críticas al Gobierno. En este año, ocurren graves conflictos entre el Presidente y la Prensa opositora. No obstante la proliferación de periódicos Radicales que violaron las leyes, el Gobierno solamente suspende 7 de ellos, y multa 12 más. Tan sólo ocho meses después del anterior Decreto, el Gobierno le adiciona nuevamente al Decreto 151, el No. **910 del 29 de Noviembre de 1889**, que básicamente pone contra las cuerdas nuevamente a los periodistas que cometieran alguno de los delitos

[317] Ibíd.
[318] URIBE, Guillermo. Libertad de prensa. Informe de la comisión al Senado, presentado por el Senador Guillermo Uribe. Bogotá: Casa editorial de M. Rivas. 1888.

enumerados en el artículo 4° del Decreto número 151 sobre prensa cuando, a juicio del Gobierno, hubieran actuado con deliberación. Las multas son rebajadas en su tope mínimo quizá como medida preventiva para los periódicos antes de proceder con medidas más fuertes. Ahora irían desde 10 hasta 200 pesos, y especifica que estas deberán ser consignadas en la Administración de Hacienda Nacional en un plazo de 24 horas. Si este término fuera incumplido, el Gobernador o el Ministro de Gobierno impondrán el arresto de un día por cada dos pesos. La severidad corre también para los voceadores de prensa, quienes desde la promulgación del Decreto en adelante, tendrían que solicitar un permiso ante las mismas autoridades.

Pero la prensa opositora, especialmente la de corte liberal radical, tomó ventaja del Artículo 2º del Decreto 286[319] para avanzar en su lucha contra el Gobierno. Lejos de convertirse en una ayuda para la gobernabilidad, a juicio del Ministro de Gobierno, Dr. Ospina Camacho, la prensa:

> *Se [ha] dado a la tarea de extraviar la opinión por medio de la calumnia y desacreditar por medio de la difamación á los miembros del Gobierno, presentándolos como reos de colusión y peculado. [...] A pesar de haberse cumplido hasta llegar á la exageración y aun á la debilidad, la promesa hecha de libertad, y aunque han pululado las publicaciones periódicas, ninguna, con alguna rarísima excepción, se ha ocupado en asuntos de interés general, ni denunciado hechos concretos de*

[319] Art. 2.0 La libertad que por el artículo 5.0 del Decreto número 151 sobre prensa, se concede ampliamente á todos los escritores para discutir asuntos de interés público, queda exenta de toda restricción, y el Gobierno no intervendrá en ningún caso en que se trate de examinar la conducta suya ó de sus Agentes en lo relativo á contratos y á manejo é inversión de los caudales públicos.

despilfarro ó impureza en la administración ó en la inversión de los bienes y rentas nacionales.[320]

En el año de 1889 fueron alumbrados numerosos periódicos que utilizaron un lenguaje descompuesto contra el Gobierno, y con una tendencia a sustraerse de las leyes reguladoras instauradas. Muestra de ello, fue la múltiple aparición de periódicos, que una vez censurados volvían a abrir bajo otro nombre. Por eso, el Decreto 910 de 1989 permite el "juicio de la autoridad competente", es decir, Gobernadores y Ministro de Gobierno para suspender y multar a los periódicos que "hayan obrado deliberadamente". En últimas, de acuerdo con su libre albedrío, estos prefectos podrían decidir la suerte de muchos periódicos. De esta manera, el marco legal cada vez iba cerrándose cada vez más, al ámbito de la conciencia del poder Ejecutivo. Las explicaciones tienen que ver con una búsqueda de;

Una solución que consigne la legítima propiedad privada con los inalienables derechos de la sociedad [pero que] mientras más minucioso ha sido el legislador en la clasificación y definición de los delitos de imprenta, y más graves las penas con los que los ha castigado, mayor facilidad han encontrado los disociadores para evadir la sanción legal por medio de actos que [...] no quedan comprendidos en el estrecho molde de una fórmula legal. [...] De aquí surgió la idea de sustituir en los juicios de imprenta el Juez de derecho, [...] con el Juez de hecho, que sentencia verdad sabida y buena fe guardada.[321]

Aunque el Gobierno reconoce la falta de imparcialidad del juzgador, le inclina la culpabilidad a las "pasiones exacerbadas" de los periódicos políticos

[320] Fragmentos del informe del Sr. Ministro de Gobierno, Dr. Ospina Camacho al Congreso de 1890. En: CARO, Miguel Antonio. Libertad de imprenta. Óp. cit. p.141.
[321] Ibíd., p. 142.

concomitantes con los partidos radicales. Ospina hace esta exposición ante el Congreso a manera de invitación a reflexionar, teniendo como motivo el ejercicio de la prensa en Colombia, señalando que aún le faltaba bastante trayecto por recorrer para emprender el viraje necesario hacia los diarios noticiosos. La situación en Europa o en Estados Unidos, terminando el siglo XIX, mediante la inversión de grandes capitales, había afianzado una floreciente industria editorial con diarios ya de reconocido renombre.

En Francia, la historia de la prensa debe inscribirse también dentro del ámbito de lucha entre los regímenes políticos y los periodistas, por su independencia. Ya en el dominio jacobino de la Constitución de 1793 y su proclamación del conocido régimen del terror, se puede identificar el libertinaje con la libertad absoluta, y el ejercicio periodístico corre el mismo riesgo que en todas las luchas políticas. Pasando por alto la Constitución y la Declaración, es redactada una ley amenazante: *"Quienquiera que componga o imprima escritos que provoquen la discusión de la representación nacional, el restablecimiento de la monarquía, o de otro poder atentatorio contra la soberanía del pueblo será llevado ante un tribunal extraordinario y sancionado con muerte.* [322]

Precisamente la mención de las políticas internacionales sobre la legislación de Prensa era una constante en los periódicos Colombianos. Uno y otro bando defendían las disposiciones y su punto de vista, respecto de las leyes que sujetaban o flexibilizaban esta práctica de opinión e información en los llamados "países civilizados". Ante las severas leyes, un editor llamado Matías Rodríguez, tuvo la ocurrencia de crear un periódico Liberal que insertara noticias extractadas de periódicos extranjeros. Su nombre era *La Correspondencia,* y su propósito era publicar:

[322] HERRERA C, J. Noé, La Prensa ante el derecho: Estudio filosófico, histórico y jurídico, Bogotá: Editorial Retina, 1960. p. 96.

> *Los escritos de interés para la civilización, correspondencias, sobre todo, que hallemos en la prensa extranjera, i que la prensa nacional no reproduce, ya por no armonizar con determinadas tendencias políticas, i este es el caso con la prensa absolutista; ya por no comprometer alguna tendencia personal de tránsito disimulado al país de la cucaña, i este es el caso con cierta prensa hipocritona i melosa*[323]

Con el supuesto propósito educativo de develar la civilización, aspiraba a librarse del ojo alerta del Gobierno ya que, el *"periódico aspira a presentar a los lectores colombianos las otras fases de ese movimiento, la Regeneración, o sea las de la libertad, del derecho popular i de la ciencia. Como no haremos sino copiar, será ociosa toda crítica de presunción por la calidad i la extensión del trabajo casi puramente editorial que emprendemos."*[324]

Sin embargo, el periódico no resiste más de un número la tentación de opinar políticamente y ya en el segundo, estaba calificando al Gobierno de "Saturno Regenerador". Dice que existen cosas que no se publican en el diario oficial y reproduce una nota del Ministro de Gobierno Vicente Restrepo, hacia el presidente de la corte suprema de justicia, indicándole que después de haber observado la lista de conjueces adoptada por la corte

> *¡No hallar en ella sino muy pocos amigos del actual orden de cosas! eso colocados en escala inferior. No es para el alto funcionario a que me he referido motivo de censura el que para estos puestos se hagan nombramientos en individuos afiliados en el partido radical, porque la república es de todos y para todos; pero no es admisible que la elección recaiga en enemigos decididos del Gobierno, en su mayor*

323 *La Correspondencia* Bogotá, 22 de febrero de 1890. No. 1. p.1.
324 Ibíd.

parte, omitiéndose nombres de abogados distinguidos que forman en las filas de los defensores de las actuales instituciones. Me he permitido hacer a vuestra señoría las antecedentes reflexiones más en son de queja, muy [sic] justa, ciertamente, que de protesta, i en la esperanza de que si la honorable corporación de que hace parte vuestra señoría puede enmendar la falta apuntada, procederá a hacerlo para satisfacer con ello la natural alarma del excelentísimo señor presidente[325]

Ante esto, Lucio Pombo presidente de la corte, le respondió su negativa para cambiar la lista, ya que ésta misma había sido elegida por tres años aduciendo además, que el silencio del Gobierno durante los años anteriores, había hecho pensar a la corte que en la designación de conjueces; "*ella no debía atender sino a las cualidades constitucionales que para ello se exigen."*[326] Además alega que la corte no tiene la facultad de cambiar la lista y que así habría de quedarse.

No obstante el propósito político y a publicar solamente cinco números, *La Correspondencia* es muy ilustrativo sobre temas seculares que interesan al liberalismo, como la obligación de prestar servicio militar al clero en Francia, los métodos nuevos de elecciones en Estados Unidos, y obviamente, la libertad de Prensa. Probablemente no fue la Censura quien lo afectó, ya que al ser referido a noticias extranjeras, hubo de salvarse, por el momento, de las medidas. Precisamente, el afianzamiento de los grandes diarios en Colombia, vendría muchos años después cuando, las condiciones económicas, referidas a la periodicidad, a los anuncios, y al afianzamiento editorial, concomitaran con los propósitos informativos y la expresión política quedó acuñada en el llamado

[325] *La Correspondencia* Bogotá, 28 de febrero de 1890. No 2. p.6.
[326] Ibíd.

"pensamiento editorial" de la publicación. Pero el camino de aprendizaje, tanto para el Gobierno, como para las militancias, aún era largo y oscuro.

La necesidad de un nuevo decreto se evidenció cuando los periódicos radicales se dieron a la tarea de escribir extractos de las sesiones del Congreso de la República y de discursos de los mismos Congresistas o funcionarios del Gobierno, con algunas mutilaciones o con cambios en el sentido de la expresión original. Las disputas políticas se habían afianzado desde la misma división Conservadora y las críticas hacia la finalización del Gobierno de Carlos Holguín eran expresadas, ahora desde más publicaciones. Dentro de estos mismos hechos se vio envuelto el mismo Presidente encargado. Holguín se quejaba de la mutilación de uno de sus discursos con el propósito de presentar un perfil falso bajo el argumento de que un periódico no está obligado a reproducirlo todo. La prensa opositora se dio cuenta de la importancia para el público de las publicaciones que llevaban como sello el extracto fiel de lo que decían los representantes del Gobierno, y por ello, la mutilación, que aún se practica con la forma de edición, representaba arma valiosa para sesgar los mensajes. Por ello, un Decreto de Agosto de 1892, citado por Álvaro Holguín y Caro, en el que se castigaba *"la infidelidad o mala fe en la relación de las sesiones de las Cámaras",*[327] en caso de que el Gobierno recibiera la queja de algún Congresista, con una multa de cincuenta a doscientos pesos. Pero la censura previa también se dictaminó en el citado decreto, pues se estableció la revisión de los discursos por el mismo autor, antes de la posibilidad de ser llevados a las imprentas. El Congresista podría elevar la queja ante el Gobierno y el periódico podría ser sancionado también con una multa de cincuenta pesos cada vez que cometiera la falta.

[327] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro, Óp. cit., p. 904.

El Decreto 910 de 1889, podría, a mi modo de ver, incluir en la severidad del 151 de 1888, una laxitud expresada en la penalización con multas de su artículo 1º, "sin prejuicio de la penalización del periódico", que provocó un menor número de suspensiones, por uno mayor de multas de diferentes montos. De hecho, al finalizar su periodo, Holguín da cuenta de 7 periódicos suspendidos y de a 12 multados. Pese a la medida, probablemente, el propósito disuasivo del Gobierno se vio truncado por el empecinamiento de algunos periodistas radicales que, alegando no tener como pagar, acudían al "martirio" de la prisión para continuar aludiendo las constantes violaciones a "la libertad" de parte del Gobierno.

3.3. HOLGUÍN Y LA PRENSA PERIÓDICA.

La relación de Holguín con la libertad de prensa podría remontarse a la firma de la Constitución de 1858. Muy joven hizo parte de dicho Congreso Constituyente y fue de los pocos que se opuso a la libertad sin restricciones. Incluso, llegó a proponer al artículo redactado por Murillo Toro en la sesión del 29 de Marzo, en el cual se prohibía a cualquier Estado la restricción del pensamiento por medio de la prensa, la siguiente adición: "*excepto el caso de que por medio de ella se cometa alguno de los delitos calificados como punibles por leyes preexistentes."*[328] Pero, solo contó con cinco votos adherentes contra treinta, en su mayoría votos Conservadores.

Desde el mismo momento de la promulgación del artículo transitorio K, que asentado en las profundas transformaciones que debieron llevarse a cabo para evolucionar radicalmente la dirección de la Nación colombiana, el entonces embajador en Inglaterra, se expresó en contra de su redacción. Aunque los artículos transitorios, catorce para ser precisos, fueron abrogados en tanto se iban

[328] Ibíd., p. 899.

cumpliendo las disposiciones establecidos en ellos, es decir, mientras las leyes a través de los años iban reglamentando los principios generales en disposiciones permanentes. En este caso particular, Holguín hubiera deseado que la reglamentación se estableciera desde el primer momento.

> *Mucho deseo ver la Constitución expedida. [...] La única cosa que hubiera deseado ver redactada de otro modo, es la relativa a la libertad de imprenta. En el presente estado del mundo, no se concibe país bien gobernado sin libertad completa para la prensa política. Natural es, sin embargo, que uno tan trabajado como el nuestro por la anarquía y la revolución, se teman los efectos de las publicaciones incendiarias.*[329]

El disgusto de Holguín con el artículo transitorio respecto a la prensa, provenía del establecimiento de la censura previa a la sombra de la discrecionalidad del gobierno, al quedar este con la facultad para "prevenir y reprimir los abusos de la prensa". No obstante su carácter transitorio, los posteriores Decretos Ejecutivos concomitantes con una constante agitación del orden público, no motivaban la supresión de dicho artículo ni el establecimiento definitivo de la ley. Incluso, la propuesta del Senador Guillermo Uribe para el establecimiento de una ley de prensa definitiva, fue votada en contra por la coalición de Representantes del partido Nacional, liderados por Miguel Antonio Caro, a finales de 1888. Así, los Decretos Ejecutivos suplían la falencia de los dictámenes que la ley aún no promulgaba. Aunque, primero como Ministro de Gobierno, y después como Presidente encargado, Holguín solicitó al Congreso en 1888, en 1890 y en 1892 la legislación a este respecto. Sin embargo, este se negó a hacerlo, incluso después que en la Presidencia de Miguel Antonio Caro le fuera expresado al órgano legislativo la aceptación del Gobierno para que dictara las leyes sobre la materia, y

[329] Ibíd. p.902.

no fue sino hasta 1896 cuando fue aprobada la tan esperada ley. Mientras tanto los Decretos ejecutivos rigieron el artículo 42 de la Constitución de 1886.

Pero este disgusto de Holguín por la censura previa del Artículo transitorio K, que duró poco tiempo, no se vería reflejado en el establecimiento de su último Decreto sobre la materia, ya que solicitar la revisión de los discursos hechos en las sesiones del Congreso por parte de sus autores antes de ser publicados, y que se encontraba justificado por el Gobierno en virtud de la defensa de la no tergiversación de lo expresado como medida para afinar lo dispuesto en cuanto a la amplitud de los escritores para criticar al Gobierno; no era otra cosa que censurar previamente lo dispuesto a publicar.

El ascenso de Carlos Holguín al primer cargo de la Nación, aparejaba una mayor apertura de la expresión política a través de los periódicos. Esta nueva llegada de tolerancia, pudo estar cimentada en el ejercicio combativo desde las imprentas que el mismo Presidente mantuvo durante toda su vida. No obstante, la existencia de leyes precisas para la sanción de las columnas difamantes o calumniosas, el encargado presidencial, mantuvo distantes sus temores a los señalamientos de las publicaciones radicales, debido al realce que brindaba a las ideas de oposición como medio para *"contribuir a formar la opinión pública y a ilustrar el criterio de los gobernantes"*[330]. Casi como reprochaba las calumnias y las falsedades, también hacía lo mismo con la insensibilidad de los gobernantes ante las censuras de los ciudadanos. Su benevolencia fue constituida como un elemento de gobierno. De hecho, recién iniciado su segundo periodo en el encargo presidencial, hizo alarde de la misma, al expresar la necesidad del Gobierno en encontrar la conciliación en la seguridad emanada de la fuerza del orden, brindando la certeza "*de que nunca*

[330] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro, Óp. cit, p.879.

traspasará los límites de lo estrictamente necesario"[331]. El mismo, se jactaba de hacer tabla rasa de las ofensas como hombre público. *"Agravio recibido ha sido siempre agravio olvidado"*[332]

Precisamente, Holguín no solamente permitió el regreso de los desterrados por Núñez sino que les dio la bienvenida. Este fue el caso del General Sergio Camargo, de Cesar Conto, quien después de una corta estadía en Bogotá resolvió regresar a Centro América donde su cuñado Doctor Velasco, e incluso fue hasta la casa de Holguín a despedirse. También visitó a Nicolás Esguerra, manteniendo con todos una amistad cercana. Sin embargo, su aprensión con las publicaciones políticas continuaba reflejando el pensamiento de Núñez y el suyo propio. En su mensaje al Congreso en 1992, recién finalizado su periodo; justificó las medidas tomadas contra las publicaciones ofensivas, toda vez que estas provenían de un periodo dominado por la irresponsabilidad legal de las imprentas, y culpa de ello a los 25 años de dominio del

> *Régimen de la anarquía organizada [que] habituaron al país, a la licencia y al desenfreno, y por consiguiente la tarea de encarrilarlo de nuevo y habituarlo de nuevo a la obediencia tiene que ser largo y penoso. Se necesita para ello energía y perseverancias incontrastables sobre todo con la prensa periódica, porque es donde más se muestran el espíritu de rebeldía contra la reforma política que arranca en 1886.*[333]

La queja proviene según Holguín, porque además de las mentiras escritas, estas eran acompañadas de injurias y ataques a la vida personal, que no solamente provenían de una "*turba de escritores de pacotilla que salen de la plebe de los*

[331] Ibíd. p, 884.
[332] Ibíd. p. 886
[333] HOLGUÍN, Carlos, Mensaje del Presidente de la República a las cámaras legislativas. Óp. cit. p 32.

partidos a buscar notoriedad o a ganar la vida, sabiendo que solo pueden medrar a la sombra del escándalo"[334]*,* sino de los mismos directores del partido radical, con un nombre y una posición respetable.

También Núñez desde el Cabrero, no dejaba de escribirle cartas a Holguín, aconsejándole una mayor mano firme en la supresión de los abusos de la prensa. Su pensamiento firme referenciado en las lecturas atentas de los periódicos de oposición, aceptaba con agrado la redacción del Presidente encargado desde las páginas del periódico *La Nación*, alabando el lenguaje firme ante la oposición, como *"primera condición que debe aparecer brillando en nuestros escritos para acabar de desvanecer el efecto enemigo"*[335] y como medida puntual para cercenar la, llamada por Núñez, "superstición tipográfica".

Pero, a Holguín siempre le endilgaron los periódicos radicales su discordancia entre su pensamiento, antes de ser miembro activo de la dirigencia del Gobierno, y sus actuaciones con las nuevas leyes de prensa. Incluso, sus escritos y discursos a menudo encabezaban como párrafos permanentes, las primeras hojas de algunas publicaciones. Por ejemplo, en *El Eco Liberal*, puede leerse: *"Un gobierno republicano y honrado debe marchar a la luz del día; y cuando se trata de poner velos a su conducta y tapar la boca a los ciudadanos por medio de la intimidación, es porque no es republicano ni honrado. CARLOS HOLGUÍN"*[336]

Precisamente, durante la administración Holguín fue suspendido *El Relator*, que tras la muerte de Felipe Pérez el 26 de febrero de 1891 cometió una grave imprudencia de carácter internacional con Venezuela, poniendo al Gobierno en una actitud hostil. Los redactores Raúl Pérez y Diego Mendoza Pérez fueron

[334] Ibíd. p. 33.
[335] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro, Óp. cit., p. 854.
[336] *El Eco liberal.* Bogotá 20 de Enero de 1890. No. 9 p. 33.

encarcelados al negarse a pagar la multa de 200 pesos que en primera instancia les fue impuesta, hasta el momento en que hubieren pagado la multa o en que hubieren cumplido con un día de arresto por cada dos pesos de la sanción, en concordancia con lo que mandaba la ley vigente. La solicitud del Ministerio de Gobierno en cabeza de Evaristo delgado elevada a Marcelino Gilibert, encargado y director de la organización del cuerpo policial, para que los reos fueran llevados al Palacio Municipal y no al Panóptico, "*donde deben continuar su arresto en una pieza decente, preparada con toda la comodidad que sea posible, y recibir las visitas de sus amigos",*[337] dan una aproximación del trato preferencial a los periodistas que renegaban del Gobierno.

Pero este trato preferencial no habría de ser referenciado de la misma manera por Alfredo Greñas desde su periódico *El Demócrata.* Precisamente, a la salida de la cárcel de los redactores de *El Relator,* Greñas les hizo una de las pocas entrevistas que pudieron haberse leído en los periódicos capitalinos por estos años. Poniendo en las propias palabras de los primos Diego Mendoza Pérez y Raúl Pérez la situación vivida por ellos en la cárcel; contaron que fueron llevados, en primera instancia a la cárcel de detenidos y reunidos en una misma habitación con otros 150 presos, *"casi todos pertenecientes a la ínfima clase social"*[338]*,* dentro de un edificio desaseado. Posteriormente fueron encerrados en un calabozo mucho peor, y "lleno de piojos", porque se habían negado a asistir a la misa del domingo dentro de la cárcel. Es probable que esta situación inicial hubiera de cambiar con las recomendaciones posteriores hechas desde el Gobierno para su traslado al Palacio Municipal. Finalmente, Mendoza y Pérez fueron puestos en libertad cuando sus *"amigos políticos, a pesar nuestro [pagaron] la multa que se nos impuso"*[339]

[337] Ibíd. p. 910.
[338] *El Demócrata.* Bogotá, Junio 21 de 1892. Número 40 p.159.
[339] Ibíd.

Durante el periodo de Carlos Holguín fueron suspendidos siete periódicos, la mayoría de manera transitoria, y se impusieron quince multas. Sin embargo, el crecimiento de los impresos, especialmente los radicales de oposición, aumentaron considerablemente. Solamente Alfredo Greñas reapareció en 1890 con cuatro publicaciones. El Demócrata[340], El Combate, El Cóndor y El Zancudo[341], en donde no cesó de publicar insultos y críticas al Gobierno. Este último, notablemente famoso por sus caricaturas de mofa política. Por estas razones, Carlos Holguín llegó a decir en su mensaje al Congreso de 1892:

> *He escandalizado a los buenos con la excesiva tolerancia que durante los últimos cuatro años he mostrado con la prensa periódica. No sé que en ningún tiempo haya habido jamás entre nosotros número tan crecido de periódicos de todo género, ni que el insulto y la difamación hayan recorrido tan constantemente y con tanta seguridad nuestro territorio de un extremo al otro.*[342]

Las armas legales para afianzar el sistema político de la Regeneración fueron numerosas. Al Decreto 151 de 1888 sobre prensa, habría de sumarse el Código Penal instituido en la Ley 19 de 1890, que habría de ser objeto de un análisis Jurídico por el Doctor Liborio Cantillo, especialmente por encontrar la Ley del

[340] En 1890 coexistieron dos publicaciones con este mismo nombre. La primera de ellas fue la editada por Joaquín Pontón y dirigido por Ignacio V. Espinosa que inició el 17 de Noviembre de 1889 y su último número fue editado el 1 de Marzo de 1890. Periódico radical con un enunciado bajo el título lo suficientemente sugestivo: "*Los grandes no nos parecen tales sino porque estamos de rodillas, levantémonos*". El segundo hace parte de los editados por Greñas, que recogió el mismo nombre después de la cesión del primero, con quien conservaba sus mismos ideales políticos. Este inició publicaciones en Septiembre de 1890 y desapareció el 12 de Julio de 1892.

[341] *El Combate*, de Alfredo Greñas, del cual no se encuentran copias, al parecer publicó solamente un número. *El Cóndor*, inició sus impresos desde el 24de Agosto de 1890 hasta el 28 de Septiembre de 1890. El más famoso fue *El Zancudo,* en el cual Greñas hizo gala de sus trabajos de grabador y caricaturista, fechado como si se viviera un siglo atrás, es decir con una fecha impresa correspondiente al año de 1791; inició impresiones el 22 de Marzo de 1890 hasta el 11 de Octubre de 1891

[342] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro, Óp. cit. p.911.

Código Penal facultativa para dirimir en los asuntos de la prensa, haciendo innecesaria la prevalecía del Artículo transitorio "K" que hubo de reinar "mientras no se expidiera una ley de imprenta". Cantillo analizó las similitudes entre el Decreto 151 de 1888, encontrando las mismas disposiciones de contravenciones y castigos a la prensa del mencionado Decreto, con algunos artículos del Código Penal; luego en su opinión, la transitoriedad del Artículo "K" se encontraba incorrectamente afianzada en una ley penal ya vigente.

> *Hay una ley que define los delitos de imprenta, que los pena y señala el procedimiento para averiguar la responsabilidad respectiva; sin embargo, solo han tomado nota de ella los ciudadanos en sus asuntos particulares. El Gobierno lo ha pasado por alto porque así le conviene, para seguir ejerciendo una facultad que ha perdido.*[343]

3.3.1. LAS SUSPENSIONES.

Holguín, quien tuvo que asumir la renovación de los poderes públicos, y que fue testigo de la exaltación de los ánimos radicales, hizo una remembranza de las actuaciones de los radicales, concretamente de Santiago Pérez, gran polemista de la libertad absoluta de prensa; y de los años cuando estuvo en el poder junto a este grupo político. En ella, resalta que las multas a las imprentas en su periodo, fueron solamente de $450 pesos, suma que en nada se compara con el cierre total ocurrido años atrás con la imprenta de José María Samper y la del Tradicionista, cuyo valor sobrepasaba enormemente sus imposiciones. Igualmente ocurre cuando defiende su postura a la supresión a la libertad de imprenta, no obstante la multiplicación de periódicos de oposición durante su periodo, porque en los resultados de la osadía a calumniar y a insultar, se ve una ligera mengua. El

[343] *Diario de Cundinamarca.* Bogotá, 26 de Febrero de 1892. Número 3618. p. 865.

tratamiento a la mayoría de periódicos sancionados fue expresado así por Holguín: *"Y no se olvide que varios de los periódicos suspendidos o multados fueron pasquines inmundos, que la policía de aseo debía tirarlos fuera, como se tira algo que ofende la vista y hasta el olfato."*[344]

La razón por la cual en su periodo aumentaron considerablemente las publicaciones insultantes y acusadoras sin los fundamentos pedidos por la ley, es explicada por la postura de Holguín de *"creer que la misma agravación del mal disminuye en buena parte sus efectos"*[345], luciendo el estilo practicado en el periodo anterior a la regeneración para que, en razón a su mismo mal, ahondaran su descrédito y terminaran desapareciendo. Causante también del trato más flexible con las publicaciones opositoras, fue la demostración de que estas podían discernir libremente, pero la demostración de su propósito, especialmente al azuzar constantemente por la libertad absoluta, se constituía en el reclamo para, con garantía y sobre seguro; *"injuriar, calumniar y blasfemar de todo impunemente"*[346]; no obstante las facultades y las leyes existentes para reprimir los abusos. Aunque la holgura durante el periodo de Holguín, probablemente tuvo que ver también con el punto de vista de la primera represión llevada a cabo grandemente por Núñez con la premura y el temor, recién terminada la guerra de 1885, de una nueva resistencia armada a la derrota radical. Luego, el encargado ahora del Ejecutivo, poseedor de un temperamento más sosegado y menos preventivo, pero con pulso firme a la hora de encontrar una verdadera amenaza, abrió una mayor tribuna a la oposición. Solamente, la llamada prensa "moderada, decente y respetuosa", tenía el derecho de ver la luz en virtud de la severa legislación; pero la auto proclamación constante de Holguín como tolerante de la prensa ayudó a que *"La prensa procaz, revolucionaria y calumniadora puede*

[344] HOLGUÍN, Carlos. Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Óp. cit. p. 166.
[345] HOLGUÍN, Carlos. Mensaje del Presidente de la República a las cámaras legislativas. Óp. cit. p. 34.
[346] Ibíd.

gozar de la libertad que por consideraciones de diverso orden le otorgue la benevolencia ó la tolerancia del Gobierno, y nada más."[347]

Sin embargo esta tolerancia de Carlos Holguín con la prensa no se hacía presente cuando atisbaba un peligro contra el proyecto regenerador. Defendió vehemente las facultades discrecionales para el Poder Ejecutivo, pero no así para el Poder Judicial, debido a que, a excepción de la calumnia y la injuria, los delitos de imprenta presentan condiciones especiales *"que hacen al Poder Judicial completamente inadecuado para juzgarlos."*[348] Por ejemplo, no vaciló en solicitar al Gobernador del Cauca que le hiciera una advertencia a Aparicio Paz, director de *La Regeneración*, semanario Caucano impreso en Popayán en la imprenta del Departamento y subvencionado por el Gobierno para salvaguardar las reformas de la Regeneración, por defender en sus páginas las ventajas de una administración federal para la Nación. El apunte de "suspensión" escrita en un telegrama al Gobernador del Cauca, fue retomado por Santiago Pérez a su regreso al País en 1893, para revelar la violación de las leyes de imprenta por el mismo Holguín. Sin embargo, en una de sus cartas políticas, este aclara que en realidad cuando utilizaba la palabra "suspensión" no se refería "*a la suspensión oficial del decreto de imprenta, impuesta como pena, sino la continuación de una publicación nuestra que en mi concepto no correspondía al objeto con que se había fundado. Llamar a esto violación del Decreto de Prensa es insultar el buen sentido"*.[349]

A decir de Holguín, la ejecución de las leyes de prensa se llevó a cabo solamente en el caso de necesidad. Incluso su testimonio personal revela que las situaciones con la prensa fueron tomadas con tranquilidad e incluso con indiferencia, no obstante el reclamo de Holguín y la importancia resaltada una y otra vez acerca

[347] HOLGUÍN Carlos. Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Óp. cit. p. 192.
[348] HOLGUÍN, Carlos. Mensaje del Presidente de la República a las cámaras legislativas. Óp. cit. p. 35.
[349] HOLGUÍN, Carlos. Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Óp. cit. p.2.

del papel fiscalizador de la prensa, que debería ser tenida en cuenta por los Gobernantes, reconociendo que: "*Hace mucho tiempo he dejado de leer casi por completo las producciones de la prensa, y que al tomar mis determinaciones en asuntos de Gobierno, no pesa en mi ánimo ni un adarme la consideración de cuáles habrán de ser sus juicios*"[350].

La agitación política pasaba por un momento culminante, dividido entre las candidaturas de Vélez y de Caro para el siguiente periodo Presidencial. Aunque, en un comienzo, las muestras de adhesión y de avenencia del General Vélez con el Presidente encargado Carlos Holguín fueron muy fuertes en Antioquia, empezaron a distanciarse como consecuencia de las diferencias sobre el tema de la división territorial, que degeneraron en una abierta oposición al Gobierno, suscitando de paso, la división del partido Conservador. Los periodistas radicales asistían radiantes con la división generada en Antioquia, Departamento que históricamente le encantaba lucir su imagen de independencia, argumentando en sus escritos que todo se trataba de una agresión "contra Antioquia" y la pretensión del Gobierno de "despedazarla". De nada sirvieron las incitaciones a la conciliación que pretendió Holguín, ya que los ánimos se exacerbaron al final de su mandato con ocasión de la elección del sucesor Presidencial. Incluso, el mismo Presidente Núñez, cuando vio amenazada la unión de su partido Nacional por estos hechos, se molestó por la insinuación que le hiciera Holguín de no ceder ante las influencias locales, y cuando este le escribiera que: *"Nunca he sido yo federalista, pero el país si lo es, como lo vio Bolívar desde Kingston. No puede, pues tirarse mucho la cuerda.*[351] *[...] La subdivisión de uno o dos de los Departamentos, sería tal vez conveniente, pero no la juzgamos de urgencia"*[352],

[350] HOLGUÍN CARLOS, Mensaje del Presidente de la República a las cámaras legislativas. Óp. Cit. P 34
[351] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro, Óp. Cit, P, 932
[352] *El Porvenir.* 1º de diciembre de 1889. Citado en Ibíd.

resolvieron con la fortaleza de Núñez y la obediencia de Holguín, prescindir de la Reforma de división territorial.

Pero ya la división Conservadora estaba marchando a pasos agigantados, y tal vez el desacuerdo generado entre Núñez y Holguín sobre la reforma territorial, motivaron a que, no obstante el apoyo total del Presidente a su encargado para la nueva elección de Designado en 1890, se expresara en la dividida votación y la retirada de la propuesta ante el Congreso. El 26 de Julio de 1890 setenta Senadores votaron por Holguín, mientras catorce lo hicieron por Marceliano Vélez. Aunque Núñez trató de que Vélez se quedara con el Ministerio de Gobierno, este no aceptó y se acentuó aún más el disentimiento.

Las conspiraciones inspiradas en el Liberalismo Radical y en las Sociedades de la misma corriente política, como la consabida "Sociedad Libres de Colombia", incrementaron en 1891 los ataques desde la prensa al Gobierno. Incluso Holguín llegó a expresar su lamento por la excesiva libertad que el mismo otorgó:

> *Desde el momento en que adicioné el Decreto sobre Prensa garantizando la más completa irresponsabilidad a los escritores públicos que quisieran entrar en el examen de los actos de mi Gobierno relacionados con el manejo de los caudales públicos, y desde que no se podía citar una sola fortuna hecha durante mi Administración en negocios relacionados con el Erario, era claro que toda acusación sobre esta materia tenía que hacerse de modo que no se pudiera convencer de calumnia al que la hacía [...] cuya vaguedad se excusa con la dificultad de presentar pruebas y se puede contar de antemano*

con la natural disposición maligna de la humanidad a pensar mal del prójimo.[353]

Con la prensa avivando el fuego, nuevamente se encendió el debate político, que, desde 1891, le madrugó a las próximas elecciones para el cargo de Presidente y Vicepresidente de 1892. Los Conservadores disidentes y opositores, prematuramente propusieron la candidatura de Núñez para Presidente y la de Marceliano Vélez para Vicepresidente. *El Relator*, le hizo el guiño a la propuesta, al igual que el radicalismo propendiendo por la división Conservadora, que en últimas le llevara a su propio fortalecimiento. Los militantes del Partido Nacional, viendo el peligro que representaba la fractura de los adeptos a la Regeneración, no tardaron en lanzar la candidatura de Miguel Antonio Caro para Vicepresidente en suerte de la admiración y confianza que Núñez le abrigaba, pero que este rechazó en un comienzo.

Pero la situación política cada vez se complicaba más. Las pugnas eran por el poder, y sin embargo quienes criticaban a Holguín y ante la solicitud del mismo Núñez a Vélez para que retirara su nombre, no vacilaron en invocar el "demonio" radical para socavar la gobernabilidad. Reconociendo a Caro y al influyente Holguín como el mayor obstáculo para llegar a la Presidencia, llegaron a insinuarle a Núñez que la pasividad de Holguín con el Radicalismo provenía de un deseo solapado por entregarles el poder. La prensa se agitó mucho más por este hecho ya que, ahora los disparos de tinta provenían desde algunos periódicos Conservadores Velistas, mientras que los radicales hacían otro tanto, llegando a apoyar lo dicho por los anteriores en la supuesta conjura. El discurso belicoso de los adversarios radicales fueron sumados a la tendencia disociadora de una facción del Partido Conservador. Núñez, desencantado, anunció que no sería más

[353] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro, Óp. cit, p.1078.

candidato a la presidencia, lo que provocó una alarma dentro del Partido Nacional. Pero, después de numerosas peticiones, el Presidente, acorde con su conducta para tomar decisiones en momentos difíciles, decidió dejar de lado la neutralidad y abiertamente proclamó "subversivo" al movimiento de Vélez y se lanzó, como en los antiguos tiempos, a defender la candidatura de Caro. Acusó a Vélez, en un editorial de *El Porvenir*, de tratar de "enlodar" la regeneración y de hacer alarde de sus intereses personales: *"cuanto que le preste auxilio es inmaculado, sublime a veces; mientras que todo lo que tiende a cerrarle el camino a la anhelada cumbre es proditorio e impuro*"[354]

Como era de esperarse, y sumada a la ostentación que hicieron algunos Velistas del apoyo que recibirían del radicalismo, la declaración del verdadero jefe de la regeneración en rechazo de este grupo y de apoyo a Caro, motivó la adhesión de muchos militantes Conservadores a las filas de este último. La reacción fue temeraria, pues el General Marceliano Vélez decidió el mismo, encabezar la lista como candidato a la Presidencia junto a la de José Joaquín Ortiz, Conservador recalcitrante que había llegado a oponerse rotundamente en el Congreso a la erección de un monumento a Santander motivando las maldiciones de radicales y las protestas de numerosos conservadores y liberales independientes; para Vicepresidente. La política cambiante en Colombia, que en gracia de buscar el poder, menoscaba las militancias y principios de partido, no es para nada nueva en nuestros tiempos. En 1892, para asombro de muchos, el liberalismo radical se lanzó a apoyar la candidatura vicepresidencial de un odiado godo, a quien, tan solo unos años antes, el mismo "indio" Uribe le había aguijoneado con la burla de "El séptimo mandamiento" con el escrito titulado "la conversión de José Joaquín Ortiz", propagando la idea de que se había convertido en libre pensador.[355]

[354] Ibíd. p. 1082.
[355] Ver URIBE, Juan de Dios. El Octavo Mandamiento. Bogotá: S.N., 1884.

La posibilidad de ver a los radicales paseándose en el poder, fue el relámpago que crispó los nervios de Núñez, probablemente porque recordaba la misma táctica política que había sido usada por el Partido Conservador para encumbrarse en el mismo. El acercamiento y apoyo a la disidencia conservadora por parte del radicalismo, determinó el inflexible apoyo a Caro, y su misma inclusión como candidato nuevamente a la Presidencia. El mismo se lo dijo en telegrama del 8 de septiembre de 1891, *"en el cual opina que su nombre ya no puede continuar unido al del General, por la sencilla razón de que partidarios de este trabajan de consuno con el radicalismo contra el mismo Dr. Núñez y el fruto de todos sus esfuerzos a favor de la república."*[356]

La candidatura de Vélez desató el paroxismo nuevamente de las imprentas. Las acusaciones más comunes se referían a la actuación de Núñez, que primero fue amigo del General Antioqueño y después lo repudió públicamente. Su actitud fue calificada como de un;

> *Espantoso prisma de mil facetas ha vivido descomponiendo todas las luces que se han reflejado sobre él; ha amasado en un solo molde las conciencias de sus secuaces y después de esas sombrías fusiones, ha fabricado hombres a su imagen y semejanza. ¡Qué supuesto antropomorfismo político*[357]

Pero las imprentas empezaron a disparar ahora desde dos frentes. A las consabidos ataques de los periódicos radicales, se sumaron los Conservadores disidentes; acusando constantemente a Holguín de fraudes, de favoritismo político a favor de Caro, de mal manejo de los bienes públicos, de corrupción

[356] ANÓNIMO. Diálogo de actualidad. Bogotá: S.N. 1891. p. 23.
[357] GALOFRE, Julio. Páginas negras de la Regeneración. Bogotá: Imprenta del Diario de Cundinamarca, 1892. p. 3.

administrativa y, en general, de casi de todo lo que se pudiera criticar del desempeño del Gobierno. La manera en que se expresaron los periódicos radicales sobre los descalabros contra el erario público, fue reconocida numerosas veces por Holguín, como una consecuencia de su Decreto sobre la garantía de una amplia discusión de los asuntos públicos, del cual, en el debate político desatado con motivo de las dos candidaturas, habría de arrepentirse porque, según el Presidente encargado, ante la imposibilidad de citar el enriquecimiento personal desde el manejo del Ejecutivo, *"era claro que toda acusación sobre esta materia tenía que hacerse de tal manera que no se pudiera convencer de Calumniador al que la hacía."*[358]

Y, este recurso utilizado por la prensa de oposición, a señalamiento de Holguín, se hacía por dos motivos: El primero de ellos se enmascara, en cuanto a la vaguedad de la publicación, en la dificultad para presentar pruebas hacia el Gobierno, y se ampara en la maledicencia natural del ser humano para pensar mal del prójimo, especialmente cuando la apología hace las veces de excitadora de las pasiones. El segundo motivo para atacar al Gobierno, con el cuidado de no ser tildados de calumniadores, era a la divulgación hecha con el propósito de cortejar la oposición Conservadora "histórica".

La mejor táctica ya no era solo desprestigiar a Núñez sino a su candidato Vicepresidencial. Miguel Antonio Caro empezó a ser tratado por muchos como el hombre de letras sabio y docto que no tenía idea de cómo gobernar. Aunque existía un cierto consenso entre las publicaciones opositoras al Gobierno sobre la honradez del gramático, no así ocurría con la manera en que Caro asumiría la búsqueda de la felicidad de la república. Las premoniciones, desde los periódicos

[358] HOLGUÍN, Carlos. Mensaje del Presidente de la República a las cámaras legislativas. Óp. cit. p. 37.

radicales, sobre lo que ocurriría si Caro llegara al primer cargo público trataban de vaticinar hechos risibles. Así lo expresaba el periodista y organizador de la Sociedad Libres de Colombia, Julio Galofre:

> *Una vez Caro de Presidente, surgirán de sus ideas de intolerancia la inquisición y la tortura, y los colombianos tendríamos que emigrar a otras naciones, desalojados por la poderosa inmigración de frailes y cofradías, y el país no sería más que un inmenso convento. [...] Ya se anuncia la fundación de carpinterías, panaderías, zapaterías e imprentas administradas por los frailes y establecidas con el dinero de todos los Colombianos, que les entrega nuestro benéfico gobierno; y como esa invasión será general, nuestros pobres artesanos, que no podrán resistir la competencia de esos establecimientos subvencionados, tendrán que emigrar, morirse de hambre o entregarse al bandolerismo. La cuestión política terminará en cuestión social. [...] Colombia que admira al sabio, maldecirá al Magistrado.*[359]

Holguín se sintió atacado desde la tribuna de las publicaciones por los periódicos radicales de quienes se expresaba con ironía: *"este partido me trató siempre con exquisita cortesía y finura desde sus periódicos callejeros de caricaturas hasta los documentos oficiales de su directorio."*[360] Por esta razón concebía el tratamiento a la prensa cimentado en la seguridad de la nación ya que, desde su opinión, eran los causantes de las agitaciones y las revoluciones contra el orden público. Sin embargo, el reconocimiento de la lentitud del sistema Judicial fue también un argumento.

[359] GALOFRE, Julio. Núñez y Caro. Bogotá: Imprenta del diario de Cundinamarca., 1891. p. 14 – 15.
[360] HOLGUÍN Carlos. Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Op.cit. p.4.

Por lo tanto su represión para que sea eficaz debe ser pronta y segura. La cuestión Prensa es cuestión de orden público, de alta policía nacional, y en ningún caso debe estar sujeta a la lenta tramitación de la justicia ordinaria, ni a los subterfugios abogadiles a que se prestan las fórmulas y procedimientos imprescindibles en esta clase de juicios.[361]

Las posiciones políticas agresivas e insultantes, no obstante las estrictas leyes que sobre la materia podrían haberse aplicado; no dejaron de imprimirse a través de libelos en la capital. Un ejemplo de la manera en que se trataba el tema de manera agresiva y evadiendo la aplicación de las leyes sobre anonimato, puede encontrarse en "Dialogo de actualidad"[362], pequeño libro de 30 hojas, en el cual se efectúa un diálogo de ficción con otros personajes, algunos con apodos, otros ficticios, que pretendían aclarar los argumentos a favor y en contra de Miguel Antonio Caro y Marceliano Vélez. El tono en que se desarrolla el diálogo de los personajes permite pensar que se trata de un autor del Partido Conservador en el poder, más que del liberalismo radical o el conservatismo "histórico". Por esta razón, los ataques vehementes son en contra del periodo radical y de su política opresora hacia los católicos. Es un documento anónimo de defensa del partido Conservador en el cual se reconoce también las bondades del establecimiento de la autoridad y el orden, tanto político como moral. La queja, sin embargo, proviene de las simpatías políticas que desde el Gobierno de Holguín, se afirmaron en presiones a los funcionarios públicos en los Departamentos, en la franquicia telegráfica con la cual los adeptos a Caro que, en últimas, eran la mayoría de funcionarios públicos, tenían para comunicarse entre ellos; amén de que los gastos de Vélez provenían de su propio bolsillo, mientras que Caro, candidato oficial, contaba con los engranajes de la maquinaria en el poder. No obstante, el

[361] HOLGUÍN CARLOS, Mensaje del Presidente de la República a las cámaras legislativas. Óp. cit. p. 35.
[362] Ver: ANÓNIMO. Diálogo de actualidad. Óp. cit.

autor defiende la necesidad de todo aquel andamiaje estatal ante la amenaza de la sombra radical detrás de los disidentes de Vélez, y que la remoción de algunos empleados públicos distantes de Caro se efectuó porque el Gobierno *"no puede tener como agentes para conservarlo a los mismos que lo insultan y calumnian y abren así la puerta al enemigo"*[363]

Lo extraño de la publicación mencionada estriba en que la defensa de la candidatura de Caro se venía efectuando desde muchos frentes publicitarios. Sumados a los periódicos subvencionados por el Gobierno, también se encontraban numerosos que le eran adeptos. Luego, enfilar baterías desde el anonimato, quebrantando las leyes, no parecía tener justificación. De hecho, en algunos Departamentos como en el Tolima, la defensa de la candidatura de Caro provino desde el mismo Gobierno seccional y con un pequeño libro editado por la imprenta departamental. Allí, se estableció un comparativo análisis desfavorable a Marceliano Vélez, menospreciando su carrera política, sus hechos de armas, su apoyo al caído General Payán, de quien llegó a expresarse desde La Voz de Antioquia, cuando este reversó las medidas de Núñez en 1888 durante su encargo Presidencial, diciendo: *"ahora tendremos orden constitucional y veremos establecida la era deseada de la legalidad"*[364]; pero especialmente, su avenencia a la regeneración a regañadientes, de forma tardía y cargado de desconfianzas. Por el contrario, las adulaciones a Caro son grandilocuentes, sazonadas con la erudición gramática y lingüística; y el conocimiento de las leyes regeneradoras en virtud de ser su gran gestor.

En el homenaje que le hizo la Cámara de representantes a Carlos Holguín en el Teatro Nacional con motivo de su salida del Gobierno en 1892, los oradores, especialmente el Sr. Primitivo Crespo, Presidente de esta corporación, no cesaron

[363] Ibíd. p. 19.
[364] RAMIREZ G, Enrique. Caro y Vélez. Paralelos. Óp. Cit. P, 21.

de reconocer la libertad otorgada a la imprenta para las discusiones de la administración pública brindada desde el Gobierno saliente, y que, pese a las acusaciones hechas desde los periódicos, ninguno había podido sacar una sola prueba que demostrara el saqueo a las arcas de la nación. Por su parte, los periódicos sancionados durante el Gobierno de Carlos Holguín, serían especificados por este en varias ocasiones con motivo de sus discursos.

Incluso, es muy diciente un caso específico de defensa de Carlos Holguín, sobre una situación particular. A mediados de Noviembre de 1891, y con motivo de la agitación política alrededor de las candidaturas de Caro y Vélez, circuló en Bogotá una hoja suelta titulada “Carta al Señor Caro” impresa en la imprenta de “La Nación” y amparada bajo el anonimato de su autor. En ella se afirmaba que el Gobernador de Cundinamarca era contratista de ferrocarriles y que el Sr. José Joaquín Ortiz, candidato a la Vicepresidencia de Marceliano Vélez, había rechazado la suma de diez mil pesos con que el Gobierno quiso comprarlo, teniendo como pretexto un contrato de provisión de libros hecha al Senador Conservador. Estas afirmaciones motivaron que el Ministerio de Gobierno, en cabeza de Antonio Roldán, adelantara un juicio criminal por Injuria y Calumnia contra Jorge Roa, impresor responsable de la publicación.

Aunque Roa negó ser el autor de la mencionada hoja ante el Juez en numerosas ocasiones, las disposiciones vigentes sobre prensa imponían unos deberes a los impresores y, en virtud de la trasgresión de ellos, unas multas; las cuales eran pertinentes al director-propietario de la imprenta “La Nación”. El Artículo 21 del Decreto 151 de 1888 es claro en su prohibición a los impresores de hacer publicaciones anónimas que no fueran artículos de periódicos, sin mantener una copia del original firmado por el autor y que tampoco era admisible la firma del editor responsable en reemplazo de la del autor verdadero. La multa para quien hubiera de quebrantar esta disposición oscilaba entre veinte y trescientos pesos.

Sin embargo, en este caso, además de la multa, la apertura de proceso por calumnia e injuria públicas contra el responsable de la imprenta acusado por el Ministerio de Gobierno, motivó una solicitud del mismo Presidente Carlos Holguín.

En carta fechada el 8 de Octubre de 1891, Holguín le pide al Ministro Roldan desistir del juicio promovido contra Jorge Roa ante la resuelta y repetida negación de ser el autor del escrito, ya que *"no sería justo aplicarle una severa pena tan solo porque el acepte la responsabilidad que otros rehuyen [sic]; y si fuere él el autor, bastante castigado quedaría con tener que negar un hecho que otros deben saber, lo que equivaldría a avergonzarse de él."*[365]*. S*obre la calumnia contra José Joaquín Ortiz, dice Holguín tener las cartas de solicitud del mismo Senador para que se hagan con el nuevos contratos de compra de libros. Luego, precisa que los demás capítulos de acusación contenidos en la hoja carecen de importancia y que, "*lo más conveniente sería dictar las órdenes del caso para que se desista de la acción intentada. Si S.Sª cree lo mismo, puede hacerlo inmediatamente"*[366]

Esta actitud de favorecer al dueño de la imprenta por parte de Holguín podría interpretarse como otra muestra más de su indulgencia con las publicaciones, sin embargo, no ocurre lo mismo en otros casos de mucha menor gravedad y menor quebrantamiento de las leyes de prensa. Al parecer, tiene que ver más con favoritismos personales y con roces entre los protagonistas. De hecho, Jorge Roa y Antonio Roldan fueron los comisionados del Consejo Nacional de Delegatarios para estudiar el caso de los degüellos de Palmira y Pradera y quienes presentaron, conjuntamente, la propuesta de la "ley de los caballos" que posteriormente fue aprobada.

[365] *Diario Oficial* Bogotá. 8 de Octubre de 1891. Número 8580.
[366] Ibíd.

Es muy probable que el cisma al interior de los Conservadores Históricos y los Nacionalistas hayan provocado todo tipo de contravenciones y desavenencias. En este caso, Roldán, aunque acepta la recomendación de Holguín sobre el caso, no lo hace de buena gana, mencionándolo en su circular No.60 del Ministerio de Gobierno.

> *Aunque el procedimiento que aconseja el Excmo. Señor Presidente de la República en la nota que precede, establece un precedente que haría estéril en parte, el Decreto sobre imprenta, el Ministerio resuelve aceptarlo, en virtud de las consideraciones generales en que se funda.*[367]

Pero, la consideración de Antonio Roldán, como Ministro de Gobierno a Jorge Roa como impresor, no es desestimada totalmente, salvándolo solamente del juicio por calumnia, pero aplicando la multa de responsabilidad por lo impreso. No obstante su confesión de inocencia como autor de la nota, es criticado por haberse prestado como víctima expiatoria y asumir la responsabilidad de un delito ajeno, antes que delatar al culpable. El Ministerio de Gobierno, finalmente lega toda la responsabilidad del acto obedecido al Presidente Holguín:

> *Al autorizar el Gobierno este desistimiento, no ve en él un acto demandado por estricta [sic] Justicia; lo hace simplemente como una concesión y como una gracia que el Excmo. Señor Presidente ha querido dispensar, sin que por esto se entienda establecido como precedente, ni admitido como doctrina correcta, que los responsables por delitos de imprenta puedan eludir la pena ocurriendo a expedientes*

[367] Ibíd.

parecidos al empleado en este caso por el autor de la "carta al señor Caro". Dios os guarde. Antonio Roldán[368]

Probablemente la multa que fue fijada finalmente en $300 pesos, también llegó a provocar las suspicacias de otros conservadores históricos. Ignacio Gutiérrez desde *El Comercio,* le alabó el acto a Holguín, acomodándole la indulgencia, y diciendo que habría de pasar a la Historia no por ser Nuñista, Velista, o Carista, sino simplemente Conservador y dejando abierta la pregunta: "*o será que se quería ejecutar solamente un acto de venganza y no probar que los cargos son calumniosos."*[369]

Las acusaciones que la prensa radical le haría en los años posteriores, y que recaló en la historiografía Colombiana, convirtiéndose en un paradigma sobre la libertad de prensa en los años de la regeneración, mantuvo unas situaciones complejas y diferentes en el periodo de Carlos Holguín, quien se referiría a quienes aseguraban que durante sus cuatro años de administración no tuvieron libertad para escribir, con estas palabras: "*Y los centenares de periódicos y pasquines inmundos, llenos de todo género de calumnias y con las caricaturas más indecentes y de los escritos más subversivos, que vieron la luz durante aquel largo periodo, no los ponen en cuenta para nada.*[370]

3.3.1.1. El Relator.

Felipe Pérez, hermano del ex Presidente liberal Santiago Pérez, no sólo era escritor de novelas románticas y uno de los grandes pensadores del liberalismo hacia fines del siglo XIX; sino quien también había participado en el levantamiento

[368] Ibíd.
[369] *El Comercio.* Bogotá, 10 de Octubre de 1891. No.1 S.P.
[370] HOLGUÍN, Carlos. Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Op. cit. p. 192.

armado luchando en el bando del liberalismo radical en 1885. Desde su periódico *El Relator*, autoproclamado "Órgano del directorio liberal", el político-literato, defendió sus ideas oponiéndose firmemente a las leyes de imprenta, sin importarle que ya hubiera sido perdonado del destierro por su implicación en la rebelión contra el Gobierno de Núñez.

Precisamente, tres años después de la guerra, y después de dictadas las normas con ocasión del degüello de las caballerías en Palmira y Pradera, la prensa de oposición sintió como las verdaderas intenciones sobre el radicalismo se materializaban en las leyes supresoras al extremo, del libertinaje acostumbrado después de tantos años de publicaciones sin muchas obligaciones jurídicas. Sometido a la ley, Pérez aduce el artículo 45 de la Constitución Nacional, que ampara el derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, anteponiendo su respeto a la Constitución, no obstante estar en desacuerdo con ella, expone que la sujeción de la Prensa conforme a las leyes es una garantía, pero que debido a que la legislación aún no está lista, es arbitraria la posición del Gobierno, ya que la tranquilidad pública está siendo tratada como un resabio de facciones especialmente contra los *"adversarios en influencias e ideas*."[371]

Básicamente, el reclamo de Pérez gravitaba alrededor de que el poder Ejecutivo había usurpado las funciones de la justicia dando uso a las leyes de acuerdo a las necesidades, "*ciertas o imaginarias, del poder en su lucha con el Pueblo ó con la oposición, expedidas a estilo de úkase*[372]*, y cumplida por órdenes verbales."*[373] Aunque Pérez defiende su labor escritora en el relator diciendo que "*El Relator [es] a decir de sus adversarios, […] un escritor sin partido, sin clientela, entregado al*

[371] PEREZ, Felipe. Alcance a "El Relator" No. 286. Bogotá 27 de Julio de 1888.
[372] Este Término es usado en numerosas ocasiones por la prensa radical para referirse a las leyes dispuestas por el Gobierno, y es el nombre dado a las disposiciones emanadas por el Zar de Rusia, considerado por los republicanos, el representante de uno de los regimenes atrasados, tiránicos y monárquicos del llamado "mundo civilizado."
[373] PEREZ, Felipe. Alcance a "El Relator", Op. cit.

servicio de una ambición sin ejemplos" y que por falta de garantías ha debido silenciarse, acusado de tener intenciones ocultas, planes tenebrosos, no obstante el alcance político expresado por este diario desde su fundación. Su estilo, ante la rigurosa "ley de los caballos" parecería ser de ruego y de imploración interpretando la ley, para que no fueran silenciados los periódicos de oposición. Claramente reconoce que no están acostumbrados a la sujeción a leyes de prensa cuando expresa: "*Dejad discutir la cosa pública a un pueblo que está acostumbrado a discutirlo todo, [...] El Relator, [...] nunca ha tenido que usar del recato ni de la moral impuestos por la ley á falta de los suyos"*[374]

El redactor de *El Relator*, fue encarcelado el 18 de Mayo de 1888, según Pérez, sin recibir una amonestación oficial ni una orden de suspensión. El periódico fue silenciado por su mismo redactor ante el presunto peligro. Acusa que *"El decreto vigente sobre la prensa, no es pues, una garantía ni aun para los escritores que lo han acatado en todas sus partes"*[375]*.* Sin embargo, al parecer, el apresamiento de su editor, correspondió más bien al peligro que representaba para el Gobierno una subversión del orden público y otra conjura nuevamente iniciada.

Opina, este director, que en un lapso corto de tiempo, se han conocido tres Decretos de imprenta. El firmado por Campo Serrano, al cual le da el calificativo de ambiguo, posteriormente el de Payán, que abrió las válvulas por completo a la prensa, pero el último es "*oscuro y elástico, por lo suntuario de sus disposiciones."* La gravedad, para el periodista, estribaba en que, al considerar al partido liberal cómo el "vencido", le fuera quitada la oportunidad de contradecir por medio de la palabra al Gobierno, desacreditándolo al mismo tiempo.

[374] Ibíd.
[375] Ibíd.

Pérez, que en 1885 había tomado las armas contra el Gobierno, dúctilmente explica que *"los partidos que pueden hacer uso de la prensa, esto es, del debate público y científico, no tienen para que trajinar el camino de la guerra civil, ni las encrucijadas de las conspiraciones. [Pero no desconoce que quiere] convencer los espíritus y no despedazar los cuerpos"*[376].

No obstante, claramente expresa un deseo que suena mayormente a amenaza: *"¿Deberá vedarse la Oposición legal y razonada en todas sus manifestaciones ó hacerla imposible, para obligar á los partidos á entrar en el campo sangriento de la guerra civil ó en el antro de las conspiraciones?"*[377] Su poco contrita publicación continuó con la circulación nuevamente de *El Relator* en 1889, pero su actitud posterior no fue consecuente con el peligro represor del Ejecutivo. Las críticas contra el Gobierno y la consabida "Regeneración" se dejaron venir como una diatriba de denuestos, especialmente referida al progreso del País, y sobre el augurio y la conveniencia de una reforma a la Constitución de 1886.

El malestar causado para *El Relator* por Núñez y los independientes, no sólo era por la división liberal, sino por el acomodo mutuo de los Conservadores. Sus afirmaciones no rechazaban la idea del levantamiento armado, pese a su reciente derrota en la guerra: *"En 1885 se cometieron dos grandes errores políticos: Primero, haber apelado a la resistencia armada sin acuerdo y festinadamente; segundo, no haber hecho general esa resistencia."*[378]

La crítica encuentra acomodo en un somero análisis económico de los gastos de la Nación durante su periodo y de una comparación de estos con los Gobiernos

[376] Ibíd.
[377] Ibíd.
[378] El Relator. Marzo 1 de 1888. No.266

Radicales. [379] Igualmente se enfrasca en una continua discusión de términos e implicaciones con el diario oficialista *La Nación*. Un ejemplo de ello es el llamado que hace Pérez desde su diario para que la "ex – regeneración" sea liquidada, expresando en artículos políticos posteriores, donde no faltan citas de la mitología Griega y del derecho Romano, que lo que quiere decir es que se aclare y que se desenrede la política actual de traiciones al partido liberal independiente y el amancebamiento con los conservadores. [380] Utiliza recursos literarios que pretenden dar la impresión de un diálogo entre *La Nación*, su principal opositor, con quien libró numerosas "guerras" verbales, y *El Relator*, en el cual, este último hace las preguntas que quisiera contestar. Este uso seudo dialéctico de la pretendida conversación, procura aclarar elegantemente los argumentos esgrimidos desde la otra orilla, con un lenguaje educativo y lógico. [381] Las referencias son limitadas con respecto a los costos y gastos del periodo radical, comparados con los de la Regeneración. Sin embargo, ni unos ni otros hacen un análisis serio del funcionamiento económico del Estado bajo dos esquemas políticos diferentes.

[379] Por ejemplo, compara los gastos nacionales desde 1864 hasta 1888, haciendo un corte desde 1878 en adelante, incluyendo estos últimos dentro de La Regeneración. En los primeros catorce años "Radicales", los gastos fueron $69.879.928 y en los 10 años "Regeneradores" fueron de $132.349.949, concluyendo que estos últimos Gobernantes gastaron el doble. Obviamente es un análisis de gastos que no tiene en cuenta otros indicadores económicos, especialmente los destinos de estos gastos a inversiones o al manejo de una centralización estatal creciente que demandaba una organización diferente de la Nación. Precisamente el señalamiento durante esos mismos periodos de tiempo del gasto para el mantenimiento de los soldados, que pasó de $8.270.188 en el periodo Radical, a $18.636.732, dan cuenta de la superficialidad del análisis al no tener en cuenta la diferencia entre un ejército nacional sin ingerencia en los Estados Soberanos y otro destinado a ser el único y centralizado defensor del orden público de toda la Nación. *El Relator*. Marzo 22 de 1888. No.272 y Abril 9 de 1888. No.276

[380] *El Relator*. Abril 2 de 1888. No.274

[381] Un ejemplo puede encontrarse en *El Relator* de abril 9 de 1888 con el título "Diálogo entre "La Nación" y "El Relator"

Aunque reconoce que la Regeneración, mediante *"un modo ecléctico, bastante a mantener en un justo equilibrio las fuerzas de nuestra política exaltada*",[382] repara en que dicho movimiento:

> *Ha traído consigo mil confusiones de legislación y de administración, tiene una larga lista de servidores engreídos e incapaces y padece de resistencias poderosas, visibles y ocultas, entre amigos y enemigos. Esto no es un secreto de estado y lo saben mejor que nosotros los que han recibido del doctor Núñez, sea por cansancio o por resfrío de éste, el encargo de hacerla viable, ora en el ánimo público por medio de la prensa, ora en la práctica burocrática por medio del gobierno.*[383]

Los periódicos amigos del Gobierno reaccionaron igualmente desde sus páginas replicándole a *El Relator* sus pecados cuando su partido asía el mando de la Nación. Las réplicas fueron destiladas igualmente en una misma pipeta de defensa y ataque entre unos y otros escritores.

Desde Antioquia, don Fidel Cano, destilando infortunios, no podía contenerse ante las severas leyes, y contraataca señalando la calumnia expresada desde el diario oficialista, *La Nación* y muestra la forma en que se debe corregir. El significativo señalamiento hacia el Liberalismo Radical del mencionado Departamento, pero más grave aún, la rotulación de estar "corrompiendo a las hijas del pueblo" desde las escuelas oficiales, todo ello por ser el Gobierno de Antioquia Liberal, motivó la indignación del consabido periodista, máxime cuando el citado diario expresaba dichas acusaciones sin tener pruebas, al decir de Cano:

---

[382] *El Relator*. Septiembre 3 de 1889. Citado por: PEREZ, Felipe y otros Op cit. p.51-52.
[383] Ibíd.

Con todo, no le pedimos a La Nación que retire tan injuriosa cuanto inexacta aseveración, porque además de saber con seguridad que ese periódico fingirá no oírnos, creemos que la malevolencia no es acreedora al comedido tratamiento que sí merece el error. Al escritor que yerra se le puede exigir, en los más corteses términos, que examine los fundamentos de su juicio, y repare el mal que sin voluntad ha causado; pero con el conocidamente malévolo e injusto, no hay más que hacer sino señalarlo con el dedo y llamarlo por su nombre. Eso hacemos con el articulista de La Nación, y a pesar de que sinceramente nos esforzamos por darle a nuestro lenguaje toda la cultura compatible con el calor de las luchas políticas, decimos en alta voz que La Nación ha calumniado, al radicalismo antioqueño, y que al obrar así ha obedecido a cálculos utilitarios del peor linaje. Los encarnizados enemigos teóricos de Bentham suelen parodiarlo monstruosamente en la práctica.[384]

3.3.1.1.1. El Relator y la prensa como salvaguardia de la opinión.

En un artículo llamado "Faltas y resabios del diarismo" El Relator se lamenta porque desde hace mucho tiempo, el Poder de la prensa se ha venido desvaneciendo. Dice que el periódico estuvo originalmente destinado a la publicación de noticias de interés a la sociedad, siendo aceptado o rechazado, dependiendo del grado de veracidad juzgado desde sus páginas, por los lectores. Ya desde estos años, El Relator diferenciaba las opiniones del Director en Editoriales, de la publicación de noticias que fue la intención primaria. Por ello, registra que: *"Un editor, por cuanto se dirigía a un vasto número de personas que*

[384] *El Espectador*. Agosto lo. de 1888. Citado en: PEREZ, Felipe y otros, Periodistas Liberales del siglo XIX, Biblioteca aldeana de Colombia. Bogota: Ministerio de Educación Nacional. 1936. p. 156 - 158

confiaban en él y le creían, era naturalmente un hombre de influencia y que disponía de un gran poder." [385] No obstante, se queja porque el motivo de decadencia de los periódicos, precisamente estriba en esa ausencia de veracidad y en el afán de vender. Dice que muchos periódicos ya están vendidos a influencias políticas o privadas o sociales, especialmente los que están subvencionados por el Gobierno.

Dice el relator, que la causa por la que en Colombia se le da poca importancia a las noticias, radica en que:

> *Nuestra vida carece en lo general de movimiento; pero en cambio se le da mucha [importancia] al debate y al debate fogoso, sobre las doctrinas y procederes de los círculos y partidos políticos y á las inquisiciones sobre la conducta de los hombres públicos, aunque esa conducta se refiera solamente a los actos privados.* [386]

Esta manera de ver "desde arriba" lo que interesa a la opinión pública, dibuja la importancia que tiene para el Liberalismo la discusión de las ideas políticas por encima del bienestar social.

> *Desgraciadamente, esto forma costumbre, y la prensa política que no se detiene más sobre las personas que sobre las cosas, la que no lanza más chispas que razones, la que no volatiza la reputación del adversario ó del émulo es clasificada de fría [...] a la gente le gusta las riñas entre los periodistas como las riñas entre los gallos*[387].

[385] *El Relator*, Bogotá. 22 de Junio de 1889. Número 304. p. 1213.
[386] Ibíd.
[387] Ibíd.

Este mesianismo político auto adjudicado a la prensa por *El Relator*, como diario de oposición al Gobierno, no deja de estar plagado de críticas a la administración Holguín, bajo las argucias de un propósito público nacional. *"Los Gobiernos pueden eludir ante los tribunales la responsabilidad en que hayan incurrido, pero no pueden eludirla ante la opinión pública. Por eso, persiguen y amordazan la prensa que es la que denuncia, y comprueba sus demasías. Sin embargo, es bien difícil cortarle la lengua a una nación entera"*.[388] Pero, esta autovaloración del propósito, tampoco deja de ser expresada a la hora de hacer reconocimientos. La aversión hacia el independentismo de Núñez y su disidencia Liberal, recobra mayor vitalidad con una loa al reconocimiento, al fin, del partido Conservador en el poder, a quien, encasillado como adversario digno y reconocido, habría de señalarle el déficit económico en que se encontraba la Nación en el año de 1889. Sus debates, utilizando el tema ampliamente difundido de las emisiones clandestinas del Banco Nacional destinadas a gastos comunes del servicio público, fueron hábilmente debatidos con el diario La Nación, quienes le endilgaron el epíteto de propiciar una "censura emboscada" desde sus imprentas.

El Relator apunta que su propósito no era hacer cargos, sino comentar los errores del Gobierno; no a la manera de jueces sino como simple expositor que, en su discusión con la Nación, llegó a exponer que, si se equivocó en su cálculo del déficit fiscal fue por haber dicho que el balance fue más o menos 30 millones, cuando mirándolo con cifras de la nación fueron en realidad 36 millones: *"Hubiéramos podido ser más precisos si ahora, como se hacía en otro tiempo, se publicara el Boletín del crédito público, ó si hubiéramos tenido á la vista los datos que reposan en las oficinas públicas.*"[389] Felipe Pérez corre a señalar la muerte del independentismo con el ejercicio de la vicepresidencia del Partido Conservador en la cabeza de Carlos Holguín, a quien reconoce el ejercicio de un Gobierno

[388] *El Relator*, Bogotá, 20 de Julio de 1889, año 7. No. 316. p. 1264.
[389] *El Relator*, Bogotá, 20 de Junio de 1889. Número .303. p. 1209.

estructurado. Esta preferencia por los Conservadores en el poder, a los Independientes del Partido Nacional, reside en el seno mismo de la recuperación de la unidad liberal perdida.

> *Las leyes, aunque duras a veces y á veces entrometidas, se aplican con regularidad; los poderes públicos enmiendan sus títulos, y empieza á formarse un criterio colectivo que destruye el criterio único que la otra rama de la Regeneración no quería ni se atrevía a desatender. Finalmente se ve que es un partido y no una tribu ni un jeque quien empuña las fasces del mando. Esto desagravia a Colombia*[390]

La necesidad de tener un contrincante político definido, es para Felipe, su hijo Raúl Pérez y su sobrino Diego Mendoza Pérez, quienes por este año empiezan a aparecer como responsables de la publicación auto denominada "vocero del Liberalismo"; la continuación de la lucha interrumpida por la división liberal, y el retorno a la filosofía *"entre dos escuelas verdaderas, entre las aspiraciones que denuncia el porvenir y el quietismo que consagra el pasado*"[391] Esta premura por realzar la vocería del Partido Conservador en el Gobierno también mantenía intrínseco, desde mi punto de vista, el propósito de *El Relator,* como el diario de oposición, heraldo de la estrategia liberal radical, para menguar el poder del Partido Nacional, afianzado por Rafael Núñez como parte de una gran coalición.

> *El partido Conservador […] es patriota á su modo, como lo somos todos, y hace lo que puede por atemperar la situación. Si no tiene miedo, tiene respeto. […] En este terreno firme es donde estamos entrando, pues no se puede volver hacia atrás, ni volver al antiguo*

[390] *El Relator*, Bogotá, 27 de Junio de 1889. Número. 306. p. 1221.
[391] Ibíd.

juego. […] Ahora, […] Ahora, si los Conservadores se equivocan, la culpa será suya; y será íntegra, sin atenuación.[392]

Cuando Holguín decide suspender todos los contratos de obras públicas desde el 28 de Julio 1889 por carecer el Gobierno de fondos suficientes, el periódico liberal lo felicita porque considera la medida como muy prudente, para paliar el estado de déficit que presenta el país. *"Creemos que el señor Holguín se mantendrá firme en estos y otros propósitos, en su patriótico empeño de normalizar la administración pública y de serenar á sus parciales en las prácticas de la vida republicana."*[393]

El periódico por estos meses brinda un cierto apoyo al Gobierno de Holguín, pero no cesa de denigrar de la Regeneración y de las publicaciones oficiales, o subvencionados como *la Nación*. Otra práctica común era recoger escritos de diferentes diarios opositores y las respuestas del otro bando, para seguir atizando la contienda política. Dentro de este clima de nubes cargadas aguardando la tormenta; las acciones de cierre de un periódico especial fueron alabadas por el periódico de oposición.

Efectivamente, El periódico *El Imparcial* fundado y redactado por Félix Posse Salas, empleado público de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, parecía ser un órgano para la defensa de los intereses del Departamento de Cundinamarca. El señor Luís Rubio S, Secretario de Gobierno de Cundinamarca, le mandó una nota al señor Félix Posse Salas, el 10 de febrero de 1890 sobre este asunto. El Gobernador dijo que no había tenido tuvo noticia de la aparición del periódico porque de lo contrario no la hubiera permitido. Pero el problema no fue solamente este vínculo. Al parecer, al Gobierno le molestaban las alabanzas exageradas, especialmente al Secretario de Gobierno que expresó:

[392] Ibíd.
[393] *El Relator,* Bogotá, 8 de Agosto de 1889, Número 324. p. 1284.

> *Al leer dicho periódico, y encontrando allí muchos encomios al Gobierno departamental, me ha ordenado el señor Gobernador manifestara [sic] á usted que suspenda la publicación aludida ó presente incontinenti [...] su renuncia. En cualquiera situación política del país, y con mayor razón en la actual, es indecoroso que un empleado público funde periódico para elogiar al Gobierno. Esto se presta a conjeturas que el señor Gobernador desea evitar en guarda de su propia honra y de la del Gobierno, que representa.*[394]

Por otra parte, el Gobierno no requería de las expresadas en la tinta de sus mismos empleados, ya que para esto disponía de una partida de ciento cincuenta mil pesos anuales ($ 150.000) para "gastos de impresión, subvención a periódicos, etc." del artículo 33º del presupuesto de Gastos Nacionales correspondiente a 1989.

De la misma manera, al igual que hoy, la prensa en su apostolado moralizador y de vigía del Gobierno, habría de mantener vínculos con los ciudadanos que querían denunciar sus faltas y sus anomalías. Un señor Ricardo Ochoa, envió una carta que publicó *El Relator*, en la que se queja de la inoperancia del Gobierno en la solución de problemas. Basándose en el artículo 45 de la Constitución de 1886, en el cual se expresa claramente el derecho que tienen los ciudadanos de presentar peticiones respetuosas a los funcionarios públicos y a la solución pronta de sus problemas, relata que el juez 2º del circuito de Cundinamarca se ha tomado más de doce meses para sentenciar una apelación de un juicio, a pesar del artículo 1,002 del código judicial y del 248 de la ley 153 de 1887, que fijaba un plazo de doce días para hacerlo. También relataba que el Sr. Cayetano Ortiz no

[394] *El Relator*, Bogotá, 13 de febrero de 1890. Número 387. p. 1535.

había cumplido una providencia del Juez 2° municipal de Bogotá, violando el artículo 215 del código penal. Dice Ochoa que entonces lo denunció ante el inspector 1° de la policía municipal, tres meses atrás, y este ni siquiera le había tomado la indagatoria; cuando el código judicial prohibía demorarse más de nueve días en la formación de un sumario. Esta lentitud judicial, que no es de ninguna manera novedosa; se adiciona a las denuncias comunes a finales de 1889 sobre allanamientos de casas en Bogotá en busca de "conspiradores" y expresadas en los periódicos liberales, quienes, como *El Relator*, no dejaban escapar la oportunidad de frisar el muro de la Regeneración con ejemplos similares. Desde su punto de vista, la mentada frase de la Regeneración, alguna vez expresada por Rafael Núñez de; *"Hoy nadie es osado á violar un derecho constitucional ó legal sin que la espada de la justicia no caiga sobre el inflexible y severa"*[395], no era cumplido a cabalidad.

De hecho, la inclusión del ejercicio del periodismo político, dentro de los grupos conspirativos por parte del Gobierno, provocó el alegato por las razones injustas para este tratamiento, ya que precisamente, la razón de la prensa por ser pública, no permitía reuniones secretas para tumbar al Gobierno. Empero, el Gobierno, decisivamente reitera cada vez que puede, que el castigo por los artilugios conspirativos no son responsabilidad de la prensa, entendida como institución pública, sino de los escritores que a través de ella, refuerzan y promueven dicha actividad. Entonces, las supuestas conspiraciones desarticuladas podrían ser la excusa para continuar en la permanente vigilancia del proyecto nacional asido por la regeneración con mano impetuosa y resuelta.

> *Después, después no hay nada más; y la nueva conspiración, la conspiración descubierta sin delatores, seguida sin vestigios, probada*

[395] *El Relator*, Bogotá, 16 de Febrero de 1890. Número 375. p. 1490.

> *sin antecedentes, preparada sin objeto, llevada á cabo sin medios y sin razón de ser ninguna, pasa á ocupar un lugar en el almanaque de la política oficial, y se llama La conspiración se Septiembre, ó de Marzo, la conspiración del año tal ó del año cual; y queda unida irrevocablemente a la historia, como ejemplo de la perversidad humana y de la bondad de los gobiernos paternales, que son los que rigen á los pueblos por los dictados de su corazón y no por la letra y el espíritu de las leyes*[396]

Durante la administración de Carlos Holguín, *El Relator* no tuvo reparos en señalar las faltas del Gobierno y en expresar una crítica menos descomedida a los funcionarios públicos. Sin embargo, los ataques y objeciones a las leyes de la República, bien podrían haber sido sancionadas por el Ejecutivo de acuerdo a la severa legislación. Dentro de ellos, tuvieron prioridad las diatribas sobre las garantías políticas de la nueva Constitución, constreñidas por la ambigüedad de las normas relacionadas con los derechos individuales. Por ejemplo señalaba que el Presidente de la República, amparado en la "ley de los caballos" y en otras normas, no tenía ninguna responsabilidad "*en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona",*[397]más que en los casos en que viole o coaccione las elecciones, impida la reunión del Congreso o las Corporaciones, o por delitos de alta traición. Pero, estas facultades de irresponsabilidad regían igualmente para los militares, en contravía de la ley.

Igualmente, esta manera de imponer "orden" en la Nación "a como dé lugar"; me permite pensar que, en la intención del movimiento regeneracionista, se trató de conciliar una Constitución liberal bajo una alerta permanente de subversión, ante el peligro del desmoronamiento de lo ya edificado. La observancia de un poder

[396] *El Relator*, Bogotá, 15 de Junio de 1889. Número 309. p. 1201.
[397] *El Relator.* Bogotá, 23 de Enero de 1890. p. 1500.

casi ilimitado por el Ejecutivo y ejecutado por los militares, con una menguada sujeción a la responsabilidad Constitucional, sumado además a los continuos decretos transitorios, especialmente los de prensa, que esperaban dilatadamente por convertirse en leyes, fueron analizados y expresados por *El Relator*:

> *De lo copiado resulta: 1° Que el Presidente de la República puede atentar contra los derechos civiles y garantías sociales, por medio de órdenes verbales, comunicadas directamente á los militares en servicio, sin que él o éstos sean responsables. El país sabe que el Presidente de la República ha encarcelado, confinado y desterrado por este medio. […] pero, hay más: en materia de libertad de imprenta hay una disposición constitucional que dice: "Mientras no se expida la ley de imprenta, el Gobierno obrará en esto como le parezca." Pues bien, esa ley no se ha expedido, ni se ha querido expedir. Lo probable es que no se expida nunca.*[398]

También la revolución es un tema candente, que no puede ser desechado tan fácilmente de sus páginas, endilgándole la responsabilidad de esa posible catástrofe al Gobierno que la "hace germinar" y no en la opinión generada desde los periódicos. Aunque en mayores casos, los escritores liberales habrían de ser tachados de subversivos, estos no podrían ser, a juicio de El Relator, culpados mientras no "*ejecuten actos materiales y evidentes y se limite a opinar que una cosa, un sistema, una ley ó una institución debe ser destruida.*"[399] Sin embargo, sólo unos años antes, el solo hecho de opinar o propender por la destrucción y desconocimiento de las leyes era causal mínimo de multa. Su incitación, un tanto subrepticia, a la revolución como recurso ineludible que llegaría con el tiempo,

[398] Ibíd. La esperada ley de prensa que suprimía los decretos transitorios no fue expedida sino hasta el 12 de diciembre de 1896, bajo el No. 157

[399] *El Relator*, 18 de Marzo de 1890. Número 401. p. 1591.

tampoco fue causal de amonestación. Al parecer Holguín posibilitó un poco más los vapuleos al Gobierno, teniendo a la mano todos los recursos legales para acallar al periódico, pese a los términos con los que se expresaba acerca de la Revolución:

> *La revolución es un medio de acción política, casi legitimado entre pueblos de ciertas razas y de ciertos sistemas de Gobierno… Necesidad parecida á la del hierro ardiente aplicado para curar las úlceras; pero ese medio es muy grave, muy expuesto, muy antinacional. Desgraciadamente ella vendrá. […] ¿Cuando? El día que menos la teman los unos y menos la esperen los otros. Esa es una viajera amiga de dar sorpresas como la muerte. […] Yo no quiero que venga la revolución, […] Pero ellas vienen, porque son fatales, esto es, ineludible. […] son como las pestes: se levantan cuando los gérmenes que las producen entran en acción. […] Esos gérmenes están en el Gobierno. […] La Opinión puede decidir, pero quien prepara los ánimos es el Gobierno. […] Mi tarea es de rectificación de hechos y de defensa de doctrinas, locuaz no basta para que otros más competentes sin duda y más autorizados, tomen á su cargo una empresa más alta y más oportuna. […] Yo hago historia y doctrina.*[400]

La fortaleza de las críticas de *El Relator* son estimadas como serias y de altura por algunos periódicos de talante conservador. Efectivamente, aunque su faena de oposición podría interpretarse, a la luz de las leyes vigentes, como candidato a una sanción, el Gobierno de Carlos Holguín prefirió mantener un impreso con la altura de la sustentación de palabra que provee el citado periódico. Cualquier mención a este respecto no dejó de ser publicada por el orgulloso Felipe Pérez, al

[400] *El Relator*, Bogota, 27 de febrero de 1890. Número 393. p, 1569

observar que era posible la crítica sin llegar a la calumnia o el insulto rastrero. El redactor de *EL Taller,* José Leocadio Camacho se lo expresó pensando en el futuro:

> *Cuando las malas pasiones se hayan calmado y la historia parcial de algún círculo cuente a su modo que en la época de la Regeneración la prensa estuvo ociosa por falta de libertad, bastará para refutar semejante aserción mostrar la colección de El Relator y probar con el que los periódicos de oposición vigorosa y seria fueron estimados y leídos con avidez por los adversarios que no repugnaban e imponían silencio sino al insulto callejero y a la maledicencia sin vocación.*[401]

Pero el repertorio al que hace referencia *El Taller*, demuestra que la amplia colección de *El Relator*, no estaría marcada por la constancia de una polilla que de tanto dar contra el cristal logró atravesar la lámpara, sin menguarse por las sanciones. Es quizá, el producto de una crítica que trató de mantenerse dentro de los límites de la normatividad vigente, y que sólo alcanzaría este nivel antes de la muerte de Felipe Pérez.

Ciertamente, desde la puesta en marcha de las leyes de prensa, *El Relator* publica su edición el 27 de febrero de 1888 , siendo suspendido el 17 de Mayo del mismo año, para reiniciar casi un año después, el 1 de mayo de 1889. Pero las críticas al Gobierno, no obstante su auto reconocida “altura”, rindieron su consecuencia con la suspensión del 16 de diciembre de 1890. La reanudación del periódico fue el 12 de mayo de 1891 y continuó interrumpida hasta el 4 de Agosto de 1893, cuando fue nuevamente suspendido y desterrado Santiago Pérez. Reapareció en 1903 y cerró definitivamente en 1904.

[401] *El Relator*, Bogota, 17 de febrero de 1890. Número 389. p, 1543

3.3.1.1.2. "La ley del tiempo" y la libertad de prensa.

El 16 de diciembre de 1890, Felipe Pérez publicó un editorial en el número 516 del periódico *El Relator* con el nombre de: "La ley del tiempo", que causó un gran revuelo nacional e hizo eco mediante las reimpresiones y los comentarios en las publicaciones periódicas de las ciudades Colombianas. Considerando que la regeneración era un "monstruo" que sólo había servido para enriquecer a los Gobernantes y funcionarios, y que el Presidente de la República, Rafael Núñez, era un hombre, *"lastimado en su amor propio, estimulado por una ambición de nuevo género en América, y a quien alentaban los medios de acción que le daba la posesión del poder"*[402]; el escritor bogotano no solamente se adhirió a la soliviantada retahíla de la prensa radical, huérfana del poder y adolorida por el sometimiento a las leyes discrecionales del Poder Ejecutivo, sino que también ajustó un golpe a las largas dadas por Holguín a la prensa. La crítica empieza encausada hacia la Constitución de 1886, comentadas por Pérez, quizá para aguijonear a Núñez, gran admirador de la eficiencia de las leyes inglesas; etiquetándola como repleta de normas escritas pero poco practicadas, *"en lo cual, como en muchas otras cosas, somos la antitesis de la Gran Bretaña"*[403]

El escrito es una apasionada defensa del Liberalismo radical en la que aduce que su partido está derrotado, oprimido y alejado del poder, pero que por la ley del tiempo, todo el desborde del poder de la regeneración fundamentada en la promesa de una "Jerusalén Nacional", en oposición a la "*Gomorra Radical"*[404], perecerá como consecuencia de la "irresponsabilidad legal" del Presidente de la República. Considera además, que la Regeneración tiene la solidez de un castillo de naipes edificado sobre la base de la usurpación de la ley.

[402] PÉREZ FELIPE. La ley del tiempo. Medellín: Tipografía del Espectador, 1891. p,3.
[403] Ibíd.
[404] Ibíd. p, 14

Después de la publicación de *La Ley del Tiempo,* Felipe Pérez entra en un franco deterioro de su salud, que le llevaría a la muerte el 26 de Febrero de 1891, y el periódico sería cerrado voluntariamente hasta mayo de ese mismo año. Pero la respuesta a este escrito, que muchos llegarían a interpretar como una revelación hecha a guisa de despedida del escritor de este mundo, provino con fuerza de los periódicos Conservadores. Precisamente, mientras el pertinaz combatiente del liberalismo radical agonizaba, el 26 de febrero de 1891; la contestación, usando los mismos medios, provino, igual de ferviente aunque con un lenguaje más ofensivo, por parte de Miguel Guerrero, ex - congresista y periodista Conservador, desde Cali, en enero de 1891, y que igualmente fue reimpresa en todo el país.

La crítica enumeraba los errores Radicales, siempre presentes cuando se apaleaban los bandos opositores usando los medios impresos. Aducía también, que uno de los principales fue la "libertad absoluta de prensa" que significó, según Guerrero, "*el poder de atacar a mansalva todo lo que se opusiera a sus instintos malévolos: el orden, la justicia, el honor"*[405] y la violación total de la Constitución, en este mismo periodo, en virtud del predominio del derecho de gentes. El argumento de no ver la viga en el ojo propio, era la base del pulso permanente entre el Liberalismo Radical y el llamado Partido Nacional y el Conservador.

"La ley del Tiempo" repara fervientemente en las leyes discrecionales del Presidente de la República, que a su entender, no fueron otra cosa que la implantación de una excesiva "irresponsabilidad" presidencial como consecuencia del Artículo 122 de la Constitución de 1886.[406] La respuesta defensora del mismo Rafael Núñez estaba cimentada en la comparación con las Constituciones de

[405] GERRERO, Miguel. Bucaramanga: La ley del tiempo. Imprenta Mercantil. 1891. p.16

[406] Este Artículo expresa que el Presidente de la República o el encargado del Poder Ejecutivo, solo es responsable ante la ley por actos de violencia o coacción de elecciones, por actos que impidan la reunión de las Cámaras legislativas u otras corporaciones o autoridades públicas, y por delitos de alta traición.

Estados Unidos y de Chile, en las cuales, las sujeciones de responsabilidad estaban sujetas a las leyes producto de unas elecciones justas, y a la defensa Presidencial solamente de la Constitución o por casos de alta traición al Estado; y en la mentada mirada de "retrovisor", que constituyó cualquier defensa de la regeneración a sus contradictores radicales; por el tratamiento de la "responsabilidad" Presidencial durante la vigencia de la Constitución de 1863 cuando "*los mandatarios no son ingenuamente escogidos por los pueblos, sino llevados al Capitolio por la imposición de la fuerza, o por arte y gracia del soborno y la intriga."*[407]

El Entierro de Felipe Pérez es relatado, junto a la consecuente oleada de discursos y homenajes, precisamente cuando el periódico vuelve a publicarse el 8 de Mayo de 1891 en una separata especial. Dicen, Diego Mendoza P y Raúl Pérez, primos hermanos y ahora directores - propietarios de la publicación, que al funeral asistieron ocho mil personas en un desfile desde la plaza de Bolívar hasta el Cementerio Central. Pero, los bríos de la publicación no se sosegaron con la pérdida de su fundador. Desde el mismo día de su reaparición, un escritor llamado A. Robayo, hubo de referirse en su homenaje con términos aludiendo cierta culpabilidad en la regeneración y a Rafael Núñez:

> *En un día aciago que guardará la historia, cuando empezaban a aparecer los presagios siniestros de la tormenta que sobre la patria desencadenó la más torpe de las abominaciones, largamente incubada en el sombrío cerebro de un hombre, contra el cual el porvenir lanzará inmenso clamor de sangre y de lágrimas , una numerosísima multitud conducía a su postrer morada el cadáver de un*

[407] "La irresponsabilidad" Cartagena, 15 de Marzo de 1891. Carta publicada en: NUÑEZ, Rafael. La reforma política en Colombia. Editorial A.B.C. Bogotá 1946. Tomo IV. p. 96.

hombre de poderoso genio, que había sido, por más de cuarenta años, el jefe de una avanzada comunidad política.[408]

Después de su reapertura en Mayo de 1891, *El Relator,* ahora escrito por Diego Mendoza Pérez y Raúl Pérez, se adhiere a la férrea oposición a la candidatura de Núñez y Caro para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, a la que se unieron intensamente los diferentes periódicos de oposición. Pero, el liberalismo radical toma la iniciativa de organizarse como grupo político diferenciado del Partido Conservador, dividido por las elecciones, y de los Liberales del Partido Nacional. La misión encargada para este menester desde *El Relator* es sumamente importante para el contenido programático que requiere de una exposición clara para reintegrar a los integrantes del partido.

Por eso, se declara como un periódico "vocero" del Centro Liberal y se dedica a publicar los nuevos estatutos del grupo, las actas de sus sesiones y resoluciones, y enormes listas de adeptos recolectadas en todo el país. Su poder organizativo, también se extiende hasta el nombramiento de agentes en algunas ciudades del país. No obstante, su propósito no es comercial ni noticioso, y ese intento de extensión nacional obedece al ánimo organizativo de un partido desperdigado.

La "alta misión" de mantener el apostolado político a través de la prensa se deja ver cuando, desde la publicación se hace un llamado de colecta para los integrantes el Centro Liberal para proveer el dinero correspondiente a la multa impuesta por el Gobierno a *El Diario de Cundinamarca,* aduciendo que los "modestos recursos" de las empresas periodísticas no les permiten pagar, sin arruinarse, multas de tal cuantía, y que por lo repetidas parecen encaminadas a suprimir la prensa de oposición, ya que:

[408] *El Relator.* Bogotá, Mayo 8 de 1891 Número extraordinario. P. 3.

> *Al partido liberal le conviene mantener su representación en la prensa, aunque al ejercicio de este derecho le impongan gravámenes pecuniarios que toman ya el carácter de una contribución especial para los miembros de ese partido; Que conviene, además, mantener viva la solidaridad de intereses, y también de sacrificios, entre los miembros de nuestra comunión política; para hacer llevaderos los últimos, hasta donde esto sea posible, á aquellos a quienes se les impongan por los agentes de la autoridad pública*[409]

Esta manera de subvencionar las multas, en concomitancia con una estrategia para que su proceso de unificación hubiera de mantener un principio de difusión doctrinaria ininterrumpidamente previendo la imposición de penas y suspensiones, permite observar la necesidad de la vocería de la prensa radical. Por ello, el llamado a pagar 2 y medio centavos voluntariamente por cada miembro del directorio, mantuvo una solidaridad dentro de un periodo de tiempo de ocho días. Probablemente, y ante la exigencia de la ley para que las multas fueran pagas al otro día de impuestas, alguien posibilitó el recurso mientras se hacía efectiva la colecta.

Sin embargo, *El Relator* no organizó colecta para su misma sanción. Prefirió el escarnio martirizante de sus redactores en la cárcel para amplificar el susodicho "oscurantismo" con el cual la regeneración se imponía a la prensa opositora. Pero, en realidad durante todo el proceso electoral por la presidencia; y después de llevado a cabo este; el periódico se dedicó con todo su espíritu autodenominado "republicano", además de publicar listas enormes de liberales adheridos al Centro Liberal, a denigrar de la elección "fraudulenta" de Rafael Núñez y Miguel Antonio caro, sin que le hubiera valido sanción alguna desde Mayo de 1891 hasta Junio de

[409] *El Relator.* Bogotá, 17 de Mayo de 1892, Número 661. p, 750.

1892; año en el que la cuestión habría de cambiar. Los ejemplos sobre fraude son expuestos sin reparos a lo largo de los primeros meses de 1892. Precisamente, de Enero de este año data el artículo titulado: *"La situación y los burladores del sufragio."*[410]

En este se aludió a la debilidad demostrada por el Gobierno cuando hubo de acudir al recurso del fraude, y a una información detallada desde Santa Marta y la coacción a la que fueron sometidos allí los ciudadanos por parte del ejército y la policía, además de la expulsión de algunos Jurados de votación. Aunque las cartas de protestas están firmadas como N.N. tienen las acusaciones con nombre propios y las prácticas corruptas pormenorizadas.

Pero la esperanza puesta en el partido radical nuevamente organizado, demandaba una militancia dispuesta a demostrarse sin dilaciones ni otros débitos que comprometieran la afiliación como "Liberal". Ejemplo de ello es una curiosa reclamación de un señor llamado Rito Antonio Rueda porque le andaban llamando "pastelero", debido a que siendo Liberal Radical, firmó la manifestación a favor de Caro, "*por una especie de engaño*" [411], y alegando su no adhesión al partido Conservador, a pesar de haber permanecido tres meses y medio en la Administración de Correos de Bucaramanga, terminó afirmando: "*La censura que algunos me hacen me obliga a defender ante el público mi honra."*[412]

El Relator fue ajustado con una nueva sanción que tuvo su origen en un escrito de Rafael Núñez en *El Porvenir* de Cartagena en el que el Presidente hizo reflexiones a la copia de una carta de un extranjero residente en Caracas y fechada el 29 de diciembre de 1891. La carta habla sobre el laudo hecho por el Gobierno de

[410] *El Relator.* Bogotá, Enero 14 de 1892 Número 610. p. 537.
[411] *El Relator.* Bogotá, 19 Enero de 1892 Número 612. p. 552.
[412] Ibíd.

España en relación a la demarcación de fronteras y sobre las cosas malas dichas sobre ese fallo desde la prensa Venezolana, afirmando que: *"se despliega inaudito lujo de citas de todos los tratadistas del Derecho de Gentes y se llega invariablemente a esta conclusión práctica: la sentencia del 16 de Marzo no tiene valor ninguno."*[413] Dice Núñez además, que no cree que esta cita haya sido fabricada en la prensa venezolana "*demasiado ignorante*" sino en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comenta *El Relator* que Núñez habría tratado a la cancillería Venezolana como si fuera "*una camarilla de especialistas falsificadores del derecho."* [414] ; y que habiendo manifestado que, aunque el Gobierno de Caracas esperaba una revisión por parte de Colombia del laudo, no estaba resuelto a abandonar ninguna de las ventajas considerables que había obtenido: *"El Presidente Núñez le ha escrito sobre el particular al Ministro de Colombia en Caracas en los términos más formales, manifestando que expirado cierto plazo, la fuerza sola podrá dar una solución definitiva a la cuestión."*[415]

Continúa diciendo *El Relator* que Núñez tenía lista la resolución para hacer la guerra a Venezuela, pero que este, sin embargo, no debería inmiscuirse en nada de la política exterior porque no estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Además, refiriéndose al estado de posible guerra civil en que se hallaba Venezuela, el periódico afirmó que Núñez creía que los Venezolanos eran incapaces de mostrar unión, que no debían amenazar para hacer cumplir el fallo, y que Núñez tampoco debía decir que si Venezuela se oponía a respetar el Laudo y hubiera de marchar a la guerra; Colombia contaba con las simpatías de España y de Inglaterra. *El Relator*, sobre los comentarios de Núñez, opina que:

---

[413] *El Relator.* Bogotá, 4 de Junio de 1892 Número 669. p, 786.
[414] Ibíd.
[415] Ibíd.

> *Colombia mantendrá sus derechos hasta que Venezuela le haga "plena justicia" sin que sea necesario mezclar su sangre en una guerra [y que] la actitud del Gobierno no es justa porque Colombia no cree que los Venezolanos sean incapaces de Patriotismo, ni que su prensa sea, en términos absolutos, "demasiado ignorante" ni que su cancillería sea un conciábulo de rábulas canistas [sic].*[416]

La resolución No. 90 del Ministerio de Gobierno, fechada en Bogotá el 7 de Junio 1892, explicó que el artículo publicado habría de ser considerado subversivo porque daba *"interpretaciones artificiosas y mal intencionadas, en cuyo espíritu se ve claramente la tendencia de concitar a un conflicto con la vecina República de Venezuela, predisponiendo los ánimos con este antipatriótico propósito."*[417]

Dice además que en el artículo se usa un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra el Presidente y que también se constituye en un delito de imprenta, definido por el Artículo 4º, inciso 3º del Decreto 151 de 1888. El Gobernador encargado, Evaristo Delgado, espolea también las columnas de esa misma edición tituladas "Ecos de los Departamentos" sobre fraude electoral correspondientes de supuestos remitidos desde Cali y Medellín, también por tener carácter subversivo porque el Decreto expone que, no obstante la ausencia de firmas, es responsable el Director del periódico. Por ello, resuelve imponer la multa de 200 pesos y advertirle que en caso de reincidencia se procederá a imponerles el castigo de suspensión del periódico.

A pesar de la multa, los directores de *El Relator,* expresan su disgusto con la multa, argumentando que quien realmente constituyó un peligro para la armonía con Venezuela fue el propio periódico *El Porvenir.*

---

[416] Ibíd.
[417] *El Relator,* 9 de Junio de 1892. No. 671 P,794

En el Artículo 8º, referente a las publicaciones subversivas, se señala como falta punible en un periódico "anticipar y publicar sin competente permiso actos oficiales, o hacer revelaciones que comprometan los intereses de la República, o perturben una negociación diplomática." "¿Cuál será la multa que, de conformidad con este artículo, le habrá impuesto ya o le impondrá el justiciero cuanto honorable señor Delgado a el Porvenir de Cartagena? […] Si no le conviene al Gobierno que, mientras el Congreso se halle reunido, El Relator esté recogiendo y trasmitiendo la opinión pública, es claro que éste será suspendido, y que aún puede serlo desde ahora. […] Al Gobernante que es irresponsable es necesario servirle a la medida de su exigencia. […] Agente y pariente de los señores Holguines, […] el culpable no es Delgado, la culpa está en el sistema. […] El sofisma provoca la discusión y el artículo K la corta cuando se hace necesario para cubrir la derrota.

DIEGO MENDOZA, RAÚL PÉREZ.[418]

Después de las sanciones incurridas, *El Relator,* vuelve a imprimir el 13 de Agosto de 1892 con una tarea nueva: la de publicar todo lo acontecido en la Cámara y el Senado, los proyectos de ley, y los apartes de los discursos. Pero el Gobierno de Miguel Antonio caro no habría de ser más indulgente con el periódico, ahora bajo la batuta del Ex Presidente Santiago Pérez después de su regreso de centro América.

[418] Ibíd.

3.3.1.2. La Libertad.

Suspendida el 6 de Julio de 1888 (dos meses antes del encargo del Gobierno a Holguín). Después del 7 de Agosto de 1888 no se suspendió otro periódico ese año.

3.3.1.3. El Sagitario.

Este periódico de frecuencia semanal, inició su primera publicación el 17 de Julio de 1889, con la redacción y propiedad de Antonio José Restrepo y con la administración general de Alejandro Torres Amaya. Bajo su Título se lee "*Hablar es bueno; escribir es mejor; hacerse imprimir es una cosa excelente. Currier.*"

Llamando constantemente Déspota, irresponsable, tirano, usurpador, etc. al presidente Núñez; el Sagitario anuncia su propósito de usar la prensa como medio para difundir las ideas radicales desde el primer número. Sus intenciones venían precedidas de la simpatía por Holguín, en una primera instancia, a quien le recordaron que: "*En alguna ocasión solemne declaró que la cuestión de la libertad de imprenta, amplia, absoluta, é irresponsable ante la ley, se la había ganado el partido liberal al partido conservador, que el representa dignamente en el poder"*;[419] y a quien, sin embargo, le increpaban que esas palabras no significaba nada mientras no existiera una ley de libertad absoluta ya que, de lo contrario, todo el uso de la imprenta quedaría reducida a la voluntad del mismo encargado del Poder Ejecutivo.

El periódico escrito por Restrepo, llama constantemente a los principios defendidos por la regeneración como "*entidades abstractas, –no decimos*

[419] *El Sagitario* Bogotá, Julio 17 de 1889. No. 1 P,1

sofísticas– que se llaman Gobierno, Regeneración, Orden, Moral pública, buenas costumbres, Religión, Irresponsabilidad, &c., &c",[420] y usa los mismos términos para referirse a ciertas concepciones doctrinarias en sus escritos. Acusa que la calumnia no había sido tratada con las nuevas leyes de prensa, demostrando; y al mismo tiempo reconociendo, que no existieron casos denunciados por particulares en el sistema penal; *"sin que los aludidos hayan hecho colgar a nadie, en el Diario Oficial, la tremenda nota de Calumniador"*.[421]

De esta manera, las sanciones a los periódicos fueron por estos años, casi exclusivamente, de naturaleza política. Salvo algunos casos; como el de la compañía del ferrocarril de Cúcuta contra el diario El Recopilador por la calumnia originada en las acusaciones de un periodista de este periódico, sobre la conspiración de la compañía en apoyo al levantamiento radical de 1885; y que llevaron a que el Juez se pronunciara a favor del escritor porque; según algunos, el acusado, Sr. Nicolás Pontón, pertenecía a la regeneración; pero según el tribunal; porque la acusación fue hecha por una persona jurídica llamada "compañía del camino" y no por las personas naturales que conformaban dicha compañía.

El Sagitario cuestionó insistentemente la falta de legitimidad del Gobierno, en razón a una falta de delegación popular; y con esta base, afirmaba que su publicación tenía como propósito presionar por la más "mínima reforma". Pero, la procura por la apertura de la prensa no incluía para el periódico los temas de la calumnia e injuria, ya que el Gobierno los tenía suficientemente controlados y tipificados. El radicalismo quería expresarse para denigrar de la regeneración, y este propósito era notable cuando aducía que la ciudadanía no había denunciado temas de calumnia o contra el honor, sino que los tópicos habían sido sobre temas

[420] Ibíd.
[421] Ibíd.

políticos. Sin embargo, esto no es del todo cierto, como queda demostrado en el pleito del mismo periodista radical Alfredo A. de Guzmán contra una señora por Calumnia y el del Ministro de Gobierno contra el Señor Carlos Liévano por una denuncia de éste último sobre un delito presentado en unos documentos. Liévano subrayó unas líneas de unos documentos del Ministerio de Gobierno sobre un hecho cierto, pero el abogado Felipe Silva (el mismo apoderado de la compañía del ferrocarril de Cúcuta.) hubo de considerar que este hecho fue causa de alteración y de calumnia; "*para que se vea que los documentos oficiales son sagrados y no se les puede introducir subrayado (versalilla) o signos de cualquier clase que sean."*[422]

Restrepo, en su periódico también hizo constantes alusiones a la revolución francesa, adoctrinando que todo ciudadano moderno no debía rechazar la idea de la revolución para conseguir sus objetivos. Inmediatamente la publicación recibió la andanada de críticas de sus contrapartes políticas endilgándole el apodo de "El Sanguinario" que llegó a ser tan popular que El Sagitario se quejaba de que "*hasta así lo pregonan los chinos"*[423]. No obstante, su desconfianza hacia las nuevas leyes electorales, habría de reafirmar un evidente propósito de adoctrinar para influir en los comicios:

> *Por eso, porque somos liberales, queremos prensa y tribuna, -que son medios pacíficos y civilizados,- para inculcar nuestras ideas al mayor número de compatriotas, vencer luego en los comicios electorales, y llevar al poder nuestros principios, y con ellos gobernar.*[424]

[422] *El Tren*. Bogotá, 18 de Octubre de 1890. Número 132 p.126.
[423] *El Sagitario.* Bogotá, Julio 29 de 1889. Número 4 p. 26.
[424] Ibíd.

Pero; aunque Restrepo reconocía a Carlos Holguín como una personalidad de altas virtudes personales y políticas, especialmente después de que este suspendiera la contratación pública desde el Ministerio de Fomento; tanto que le había llevado a reconocerlo como uno de "los buenos de su raza" y como alguien abierto a la prensa que al igual que Enrique IV, " *puede desterrar y no destierra, el que puede confiscar y no confisca, el que puede mandar cortar lenguas y romper manos y deja hablar y escribir, merece de sus contemporáneos más respeto y más admiración que los reyezuelos de baraja que el tiempo ha desteñido y el olvido ha perdonado"*[425]; la pequeña adulación no le sirvió de nada cuando fue ordenada su suspensión.

La razón de esta penalización se originó cuando el Procurador General de la Nación convocó a los redactores para que declararan y explicaran quien era la persona a la que se referían, cuando en su página 40, contaban que una alta personalidad del Gobierno acumulaba varios sueldos. En un posterior artículo titulado "Los Establos de Augías", Restrepo reconoce que no dijo el nombre a quien ya había hecho referencia porque según el código penal vigente, no sería sancionado ya que la acumulación de sueldos no estaba tipificada y porque:

> *La sanción contra los acumuladores no es otra cosa que la disminución de la pitanza mediante la pérdida de los empleos acumulados, que el Superior, en cada caso, debe quitar inexorablemente. [...]No podemos dar de un modo cierto el nombre de la notabilidad (soberbia) a que nos referimos en el suelto incriminado, por la razón muy sencilla de que el articulista audaz que llamó prehistórico a un hombre de la talla moral y política del doctor Francisco E. Álvarez, tuvo el buen cuidado de no firmarse. Ese*

[425] *El Sagitario* Bogotá, 2 de Agosto de 1889 Número. 5 p.33.

articulista es la notabilidad (soberbia), y como, según el decreto de imprenta debió dejar su firma en la redacción del periódico semioficial, - La Nación – allá se puede obtener ese nombre. En fin, si el señor Procurador quiere saber de un modo inequívoco, absoluto, quienes acumulan indebidamente en Colombia, puede hacerse pasar copia de todas las nóminas de todos los empleados de toda la Nación, y comparándolas y verificándolas, cerciorarse de si en ese vasto departamento hay o no hay delitos.[426]

La explicación, nuevamente burlesca y evasiva, motivó la inmediata resolución del Ministerio de Gobierno, en cabeza de José Domingo Ospina Camacho:

Ministerio de Gobierno. – Sección 1ª – Bogotá. Agosto 12 de 1889.
La publicación periódica que con el nombre de El Sagitario se edita en esta ciudad, desde sus principios ha tenido carácter subversivo, al tenor del ordinal 3.º, artículo 4º. Del decreto número 151 de 1888 sobre prensa, así por sus ataques á la Religión Católica y a órdenes religiosas reconocidas por el Estado, como por un lenguaje descaradamente blasfemo e inmoral. Últimamente ha incurrido el mencionado periódico nuevamente en la nota de subversivo por haber faltado al ordinal 7º del artículo citado, al publicar en el número 7.º hechos falsos que, al ser ciertos, afectarían el crédito y los intereses del Estado, y que, calumniosos, como son, constituyen un insulto procaz a la dignidad y honra de la Nación.
Por estas consideraciones y por haber cesado los motivos que tuvo el Gobierno para proceder en este asunto con lenidad excesiva,
SE RESUELVE

[426] *El Sagitario* Bogotá, 10 de Agosto de 1889. Número. 7 p.49.

Suspéndase de acuerdo con el ordinal 3º del artículo 7º del Decreto número 151 sobre Prensa, por el término de seis meses, el periódico llamado El Sagitario. Comuníquese al Redactor y al impresor esta resolución para su conocimiento y posterior responsabilidad en caso de desobediencia.[427]

El Sagitario, sólo atinó a contestar, además del mismo argumento de la suspensión de libertades, un irónico llamado para que, ahora si, lo habrían de poder agredir los periódicos del gobierno y a denunciar que ha recibido cartas anónimas, principalmente de: *"una mano temblorosa, infirme, de viejo devoto bendicionero o de alcoholizado en el último periodo del chichismo*" [428] , probablemente en alusión a Miguel Antonio Caro.

3.3.1.4. El Precursor.

El 5 de Julio de 1889, aparece el primer número de El Precursor, dirigido por el Señor A. de Guzmán[429], y en el cual, no obstante encabezar la primera página con las palabras "política, literatura, crónica, anuncios, etc. Etc.", desde este espacio podría entenderse su propósito con solo leer la frase que aparecería hasta el día

[427] *El Sagitario* Bogotá, 10 de Agosto de 1889. No. 7 P,49
[428] Ibíd. p. 53.
[429] En algunas referencias, he encontrado que algunos escritores contemporáneos dicen que A. de Guzmán, no era otro que el mismo Alfredo Greñas actuando bajo un seudónimo. Sin embargo, no he encontrado evidencia que corrobore esta teoría. Por el contrario, el pleito jurídico instaurado por Guzmán contra una señora por calumnia y que fue fallado favorable a este, no hubiera sido posible si su nombre no apareciese como verdadero ante el Juez. También, a finales de Agosto de 1892 Guzmán dirige un derecho de petición al Ministerio de Relaciones Exteriores desde Costa Rica, y este se lo contesta en Agosto de 1893, cuando Guzmán residía en Venezuela. Greñas por su parte es desterrado del país hasta después del motín Bogotano de Enero de 1893. Sin embargo, también es posible que su nombre se hubiese visto envuelto en desavenencias por falsedad, ya que, en el periódico de su amigo Álvarez, *El Eco Liberal,* comenta que el 7 de Mayo de 1890, Guzmán fue absuelto por un Juez de una acusación por este delito.

de su cierre: *"La tiranía es la razón de la arbitrariedad, la arbitrariedad la razón de la fuerza."*

Guzmán, dando muestras, quizá mayores que ningún otro redactor de periódicos, de fogosidad radical, no escatima recursos para continuar enfrentando las represivas leyes de prensa. Se refiere a los diputados de la Asamblea de Cundinamarca como una "*Corporación, que en su reunión primera se exhibió no como un cuerpo legislativo sino como una legión de sordo - mudos."*[430]

La única noticia publicada a manera de crónica tiene un matiz político. Narra una violación y un intento de asesinato en una joven, producido por un militante del partido Conservador. Derrochando formas literarias, entre ellas la ironía, expone al verdugo: *"Grandeza hereditaria, moral de partido, posición, sociedad, amigos",* y resalta que el mencionado caballero aún está suelto por las calles sin que la prensa Conservadora haya dicho nada. Increpa a los conservadores: *"¡que tiene que hacer la moral de los partidos con la inmoralidad de uno de sus hombres! [...] ese hecho es el resultado de los principios Conservadores, y de esa doctrina que cubre lo cenagoso del fondo con la esplendidez de la forma. [...] mandad al criminal a presidio, ó solo os quedará como bandera una cortina ensangrentada"*[431]

También se va lanza en ristre contra el Consejo Nacional de Delegatarios señalando que su reunión violó todas las normas constitucionales y que fue ilegítima su autoridad, afirmando que: *"sus decisiones tienen más sanción que la de la fuerza, que es sola ley de los tiranos."*[432] Y se burla de Miguel Antonio Caro,

[430] *El Precursor.* Bogotá, Agosto 17 de 1889. p.10.
[431] *El Precursor.* Bogotá, Agosto 17 de 1889. p.13.
[432] Ibíd.

posteriormente Presidente severísimo con la Prensa, a quien solía llamar usando versos de este tipo:

> *Dejemos pues, el rabel [/] En que cante irreverente [/] el... camilito pastel [/] Y el amor al aguardiente [/] del filósofo – Tonel [...] Por ende fuera herejía [/] lumbrera de sacristía [/] Moderno San Agustín [/] hablar en lenguaje ruin [/] a tu gran sabiduría. [...] Adiós farol de la cruz [/] dame si quiera una brizna [/] Del fuego de tu Testuz, [/] pero no! ... guarda esa luz [/] Que es de pez, y al brillar tizna.*[433]

El primer aviso de que el Gobierno de Holguín haría cumplir la ley a los periódicos radicales, se hizo sentir para su autor el 21 de Agosto de 1889. Al señor Alfredo A. de Guzmán, le llegó una carta del Ministerio de Gobierno en el que se aplica, *"por término de 15 días, la pena señalada en el artículo 2º del artículo 7º del Decreto ejecutivo, número 151, de 1888, sobre prensa*[434]*, por no haber dado cumplimiento á la exigencia del Ordinal 1º, artículo 13 del decreto indicado. Servidor de usted, José Domingo Ospina."*[435]

Esta primera penalización, consistió en la prohibición por 15 días, de vender la publicación y de anunciarla por carteles, de acuerdo con la pena señalada en el Ordinal 2º del artículo 7º. Es decir, a pesar de la consideración de "publicación subversiva" de su periódico, Guzmán fue penalizado en un comienzo, y quizá como aviso, con la multa mínima del Artículo, que podía oscilar entre quince días y seis meses de suspensión.

---

[433] *El Precursor.* Bogotá, Agosto 17 de 1889. p.11.

[434] La falta incurrida por *El Relator* consistió en la renuencia a presentar su nombre ante el Ministerio de Gobierno identificando al redactor y propietario. Aunque este numeral solicita tres requisitos básicos, Guzmán si cumplió los otros dos, referidos a la publicación en el periódico del Decreto 151 sobre Prensa y al anuncio de su precio, comunicados y remitidos.

[435] *El Precursor.* Bogotá, Septiembre 20 de 1889. p.18.

Alfredo Greñas también fue sancionado como dueño de la imprenta “El Progreso”, donde se estampaba *El Relator*, el 24 de Septiembre de 1889, por incurrir en hacer este trabajo sin el cumplimiento de las normas de identificación ante el Ministerio. A decir verdad, en este “apretón” a Greñas tampoco le fue tan mal, ya que terminó pagando una multa de 50 pesos, cuando el artículo 22º del citado decreto podría determinar ésta entre 30 y 200 pesos.

Aunque infringió unas normas claramente especificadas en el Decreto, Alfredo A de Guzmán, después de pagar la multa y cumplir la sanción, alega repostando que el Ministro es “*un sectario apasionado*” y que ese mismo tratamiento no es exigido para los periódicos que apoyan la Regeneración. De hecho, las disputas hacia aquellos que acusaban a los Liberales Radicales de todos los males y peligros, no se hicieron esperar; y encontraron su vitrina para publicar sus defensas y sus contraataques en los periódicos capitalinos defensores del Gobierno.

Este es el caso contra Juan Manuel Rudas, ex - rector del Colegio Mayor del Rosario, quien fue inquirido y acusado por *La Nación* de enredos en las cuentas de su administración. Guzmán, desde *El Precursor,* publicó sus cartas de defensa acusando a *La Nación* de calumniosa. Obviamente, el Gobierno, quien subvencionaba dicha publicación, no se pronunció al respecto de lo dicho en este último.

Precisamente, Rudas, quien se encontraba desterrado durante la llamada ”Subversión Conto”, escribió un libro cuando hubo de regresar, bajo el indulto de Payán, a Bogotá durante el mes de Mayo de 1889, y que tuvo que imprimir en una imprenta Española, debido a que “*no fue posible encontrar en*

Bogotá, quien se hiciera cargo de la publicación del presente escrito."[436] Este texto, convertido en una crítica abierta al partido Conservador, refiere el temor de un nuevo destierro para su autor:

> *Solo pido que si en mi discusión, violo algunos de los Decretos ejecutivos o la ley, se me aplique la pena señalada previo el juicio respectivo, y no se me vaya a reducir a prisión o a desterrar arbitrariamente, como ya se ha hecho otras veces, en plena paz, conmigo y con otros individuos, bajo el régimen que se dice regenerador.*[437]

Desde su inicio, por un parte, la queja del escritor se evidencia al denunciar que la ejecución de las leyes no se aplicaba lo mismo para quienes se oponían al régimen que para los escritores subvencionados por el Gobierno; y que no obstante, su constante inclinación a la calumnia, no era tenida en cuenta a la hora de penalizar. La "ley del embudo" en la aplicación de las leyes se deja ver en un ejemplo sobre este particular formulado por *El Comercio* en 1891 al expresar que *La Prensa*, periódico oficial, debería ser suspendido y sancionado por no haber cumplido con el Art. 21º que habla de las prohibiciones a los impresores, y en el Art 2º prohibía imprimir periódicos que no cumplieran con las condiciones del Artículo 13º, que decía que a todo periódico habría de exigírsele un anuncio en sus páginas, de la indicación del precio de la inserción de comunicados y remitidos; requisito que no imprimió el delatado. La multa, que tendría que ser de 20 a 300 pesos, no fue impuesta al periódico de apoyo al Gobierno.

Por otra parte, la tesis principal de Rudas estaba basada en la premisa que en Colombia, el partido Conservador había desaparecido desarrollándose ahora dos

[436] RUDAS, Juan Manuel. Lo que fue y lo que es el partido conservador en Colombia. Op. cit. p. 6.
[437] Ibíd.

partidos: El Liberal y el Teocrático, cuya cabeza visible era Miguel Antonio Caro, con la doctrina excluyente de: "El liberalismo es completamente contrario al catolicismo."

Por su parte, Alfredo A. de Guzmán, desde *El Precursor,* continuaba publicando y desafiando al Gobierno con artículos en donde acusa al Presidente de la República, diciendo que éste:

> *Dispone del ejército, dispone del Tesoro, dispone de vidas y haciendas sin ninguna responsabilidad, [...] un régimen así es una amenaza para todos. La sociedad, está pues en el deber, de buscar una defensa, [...] [que] no puede obtenerse sino reformando la Constitución, ó derogándola a sablazos*"[438]

Y continuaba sus denuncias desde *El Precursor*, con un cuadro en donde ilustraba el personal de empleados de la familia Román (familiares en diferentes grados y políticos de Soledad Román y Polanco, esposa de Núñez) que asciende a más de 24 funcionarios ubicados en las aduanas de Cartagena y Barranquilla, en los departamentos de Bolívar, Panamá y Cundinamarca, y en los consulados de Sevilla (España) y de Perú.[439] En general, casi todo su periódico es dedicado a luchar contra la Regeneración y el Presidente de la República, desde diferentes temas. En muchas ocasiones utiliza epítetos de alto calibre para llamar al Presidente: *"traidor, y nada más que traidor, el niño enfermizo del Cabrero."*

Pero Guzmán, también utilizó las nuevas leyes penales para demandar a la señora Gertrudis Castañeda de Esguerra por Injuria y Calumnia públicas, porque esta última había publicado una hoja en donde insultaba al redactor, y que tenía el

[438] *El Precursor.* Bogotá, Septiembre 28 de 1889. p. 25.
[439] *El Precursor.* Bogotá, Noviembre 1 de 1889. p.33.

título de “urgente”. Según el escritor, dicha señora quiso mancillar su honor usando para ello una hoja anónima repartida por las calles Bogotanas con la acusación pública de que el señor Alfredo A. de Guzmán, se había apropiado de una orden del Ministerio del Tesoro que constituía la recompensa otorgada por la Corte Suprema de Justicia, por su situación de viuda del Sargento Mayor Domingo Esguerra. Según Doña Gertrudis, Guzmán andaba vendiendo dicha orden sin su autorización ni endoso. El juez número 7º del circuito de Cundinamarca le da la razón a Guzmán, porque este pudo demostrar que la señora mencionada, le había firmado un poder memorial para que Guzmán reclamara la recompensa, junto a las instrucciones de la sindicada. El contrato había sido firmado entre ambos, con la condición de que Guzmán hiciera las reclamaciones y que le pasara la cuenta de los gastos, que serían doscientos pesos, siempre y cuando el fallo fuera favorable. Lo que no resultó favorable para Doña Gertrudis, fue la demanda del mencionado escritor, pues el Juez Dulcey, le terminó haciendo la notificación del auto de la fianza que debía pagar, o en caso contrario, habría de ir a la cárcel en concordancia con el artículo 153 de la ley 193 de 1888.[440]

La separación del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, a la hora de tomar decisiones sobre los asuntos calumniosos ventilados en la prensa, bien podría dejarse al albedrío de este último, como era la impetración de una gran parte de los Liberales. Guzmán usó las nuevas leyes para reclamar el derecho a su buen nombre. Derecho que no existió hasta después de 1886, porque antes del Decreto ejecutivo No. 635 de 1886, no había defensa para las ofensas personales realizadas desde las publicaciones. El Juez Dulcey afirmaba que tratar a alguien

[440] Art. 193. La injuria comprende: 1. ° La ofensa hecha con palabras al honor, al crédito, á la dignidad y á cuanto constituye la propiedad moral de un individuo; 2. ° La difamación, ó divulgación de vicios puramente privados ó domésticos; 3. ° La contumelia, ó sean las palabras que envuelven oprobio ó vilipendio dichos á una persona en su cara. Leyes de la República de Colombia expedidas por el Consejo Nacional Legislativo en sus sesiones de 1887, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, Bogotá, 1888, p 322 -324..

de ladrón, condimentando la ofensa, con una publicación repartida en la calle, es una "injuria grave". La diferencia entre "vengar" las ofensas con respuestas publicadas en otras impresiones, y someter la política a las contestaciones de uno y otro bando, harían parte del proceso de maduración en la obediencia a la legislación de los periódicos Colombianos. No obstante, Guzmán habría de evitar cualquier reconocimiento eficaz de las nuevas leyes instauradas por la "odiada" Regeneración, dejando todo el logro a la entereza, inteligencia y laboriosidad del Juez Nemesio Dulcey.

El último número que se dio a conocer antes de la suspensión de *El Precursor* fue precisamente en el que publica, y en este caso obedientemente, la solicitud al Gobierno del permiso para señalar el fallo, "*con el objeto de dar publicidad á dicho auto, el cual habla muy alto en pro de la honorabilidad de usted, señor juez."*[441]

Pero la paciencia del Gobierno con el escritor de *El Precusor,* se extinguió el 27 de Noviembre de 1889 cuando el periódico fue suspendido, ahora sí con una pena más severa, por seis meses, acusado de ser subversivo, y finalmente desaparecería. Pero los castigos para Guzmán no terminarían allí. El 11 de Enero de 1890, por orden verbal del Ministerio de Gobierno, en la ciudad de Facatativa fue llevado a prisión por un oficial de apellido Hernández y trasladado al cuartel del Batallón Boyacá estacionado en esa ciudad. Guzmán le solicitó a su amigo Álvarez, que le permitiera publicar un remitido en su periódico *El Eco Liberal,* en donde le pregunta respetuosamente al Ministro Roldán la razón para su aprensión, presentando como recurso el mismo Artículo 23 de la Constitución , que expresaba que nadie podría ser reducido a prisión sin un mandamiento escrito de la autoridad competente y por un motivo previamente definido por las leyes: "*En esta vez no ha habido MANDAMIENTO ESCRITO , Señor Ministro, sino*

[441] *El Precursor.* Bogotá, Noviembre 25 de 1889. p.39

únicamente una ORDEN VERBAL. Así, pues, espero de S.S. me expliqué la razón porque he sido reducido a prisión. Señor Ministro. Alfredo A de Guzmán,"[442]

La suerte de Guzmán, al parecer fue la misma de otros liberales radicales que no cesaron de desafiar al Gobierno. Después de su prisión y de un fallo absolutorio en Mayo de 1890 por el delito de falsedad, probablemente habría de refugiarse en Venezuela, desde donde publicaría en caracas en 1898 un homenaje a la tumba de Dámaso Guzmán.

3.3.1.5. El Amigo del Pueblo.

Suspendido por seis meses el 9 de Octubre de 1889. No se encuentran copias de sus números.

3.3.1.6. El Eco Liberal.

De marcado pensamiento liberal Radical, y dirigido por José María Álvarez se anuncia debajo de su encabezado con la frase de: "periódico de oposición"; y trata los mismos temas de la política nacional que otros similares. Discute los temas políticos Nacionales más o menos con altura, utiliza el sistema de Canje con los periódicos, incluyendo los semioficiales

En sus números discute la inconveniencia de la subdivisión territorial, y dice que incluso Núñez es contrario a ella. Sus afirmaciones sobre el tópico de que el liberalismo colombiano, habiendo sido siempre federalista; y consecuentemente con estos principios, debía desear y apoyar el sistema que más se asemeje a la federación con una subdivisión territorial de este tipo, a la larga habrían de llevar

[442] *El Eco liberal*. Bogotá 28 de Enero de 1890. Número 9 p. 39.

al cisma dentro del mismo partido conservador, al mismo tiempo que se conjugaban con los similares expresados en los periódicos de oposición. Su tratamiento literario a las diferencias políticas con el Gobierno, está enmarcado dentro del mismo lenguaje irónico sobre los temas.

Por ejemplo, sobre el reclutamiento de jóvenes para el Ejército Nacional, y ante un supuesto incidente de un joven llamado Román Acosta, que no quería dejarse reclutar y fue asesinado a bayoneta por un Sargento del batallón Boyacá, llamado José Antonio Rodríguez; titula el artículo*:"La regeneración mata."*[443] Y, ante este mismo reclutamiento de jóvenes venidos desde el campo a Bogotá, comenta que*: "Entendemos que los forasteros han sido obsequiados, desde que llegaron, con un buen vestido a cada uno y buena comida. Suponemos que son temperantes que vienen a regenerar su salud y a quienes el Gobierno quiere dar muestras de su paternal protección. Otra cosa, no la pensamos."*[444]

Otro aspecto importante que toca el periódico radical, tiene que ver con el tema de elecciones. Recuerda que importantes liberales fueron reducidos a prisión antes de las elecciones de 1888 con el pretexto de conspiraciones subversivas, y que después de terminadas estas, fueron dejados en libertad. El argumento esgrimido sobre la falta de garantías para que el partido radical no se hubiese hecho presente en los comicios de Mayo de 1890 con miras a elegir Diputados y de Asambleas, no le impide hacer alarde de un potencial electoral que no había sido aún usado:

> *Porque hoy lo que impera es el derecho de la fuerza y no la fuerza del derecho. Más de 6,000 ciudadanos, en pocas horas y con sólo una invitación hecha por medio de carteles en las esquinas, se*

[443] *El Eco Liberal*. Bogotá, 28 de Enero de 1890. Número 10. p. 37.
[444] *El Eco Liberal*. Bogotá, 20 de Enero de 1890. Número 9. p. 34.

presentaron aquí en Bogotá à acompañar hasta el cementerio los despojos mortales del General Navarrete. ¿Es esta o no una muestra pequeña, ínfima del poder inmenso con que el partido liberal cuenta en el país en materia de opinión?[445]

El 3 de febrero de 1890, fue suspendida por 2 meses esta publicación por orden directa del Presidente encargado Carlos Holguín,[446] teniendo como causa un artículo referenciado por el corresponsal del periódico en Medellín sobre el ajusticiamiento de Juan de la Cruz López, reo de homicidio y llevado a cabo en esa ciudad.

El artículo mencionado expone en dos páginas el sufrimiento del condenado que recibió 4 descargas para que dejara de respirar, el acompañamiento "hipócrita" de un padre Jesuita llamado José María Gonzalo y de cómo quedó el cuerpo despedazado. Este hecho ocurrido en diciembre de 1889, *"dizque porque dio muerte a Ezequiel Hernández, […] hecho del que solo Dios puede dar testimonio"*[447]*.*

El escrito no solamente habría de exponer la oposición abanderada del radicalismo contra la pena de muerte, sino que además, alababa la forma de vida del ajusticiado, exponiendo que; *"La muerte de Juan de la Cruz López causada violentamente por el Gobierno o por sus agentes es una verdadera mengua para la patria colombiana"*[448]*,* y que al día siguiente del ajusticiamiento la viuda vagaba por las calles llorando con dos hijos.

---

[445] *El Eco Liberal*. Bogotá, 5 de Abril de 1890. Número 11 p. 43.
[446] En sus cartas políticas, Holguín dice que suspendió este periódico por seis meses, sin embargo, la orden emanada hacia el Ministerio de Gobierno estipula dos meses, que fueron realmente los ejecutados.
[447] *El Eco Liberal.* Bogotá, 28 de enero de 1890. Número 10 p.38.
[448] Ibíd.

Cuando Holguín supo de este escrito, se encontraba en Suesca y no vaciló en responder a la provocación con una carta muy clara fechada el 3 de febrero de 1890 dirigida a Vicente Restrepo:

> *Señor Ministro de Gobierno.*
>
> *La relación de la ejecución de Juan de la C. López, que publica El Eco Liberal en su número 10, correspondiente al 28 del mes pasado, está llena de falsedades destinadas a corroborar los conceptos subversivos que acostumbran entre nosotros los partidarios del asesinato y defensores obligados de los asesinos, atacar la fuerza obligatoria de las leyes expedidas en defensa del derecho a vivir que tenemos todos los colombianos. Creo debe usted suspender por dos (2) meses la publicación de El Correo Liberal. Carlos Holguín*.[449]

El periódico trató de evadir su responsabilidad por la descripción del ajusticiamiento, endilgándosela toda a su corresponsal en Medellín, y exponiendo que: "*suponemos, además, que el Excelentísimo Señor Presidente sí tendrá detalles oficiales de tal ejecución, toda vez que ha desmentido de manera tan enfática lo que afirmó nuestro corresponsal*" [450]; pero sin poder excusar las alabanzas hechas a un asesino juzgado y ajusticiado.

Cuando reaparece en abril de 1890, se abstiene de seguir con el tema del ajusticiamiento por temor a una nueva suspensión; y de esta manera logra editarse hasta el 23 de septiembre de 1890 cuando se imprime su último número.

[449] *El Eco liberal.* Bogotá 5 de Abril de 1890. Número 11 p. 44.
[450] *El Eco liberal* Bogotá, 16 de abril de 1890. Número 12. p. 45.

3.3.1.7. El Demócrata.

Alfredo Greñas, al mismo tiempo que caricaturizaba a los gobernantes de la Regeneración en sus periódicos humorísticos, generalmente también hubo de conservar una publicación más seria y doctrinaria de oposición. Desde 1889 y bajo la redacción original de Ignacio Espinosa, fue editado en la Imprenta de Lleras *El Demócrata.* Posteriormente, cuando en 1890 Alfredo Greñas continuaría con el mismo nombre y con la impresión desde su propia imprenta "El Progreso", habrían de empezar las multas. Primero, le fue impuesta una de cien pesos al redactor y otra de doscientos pesos al autor de un artículo, el 17 de febrero de 1890, por una redacción catalogada como "subversiva". Posteriormente, Greñas, con el propósito de mantener este periódico como vitrina política, aunque moderó un poco sus escritos hubo de ser multado el 24 de Junio de 1892, bajo resolución número 96 del Ministerio de Gobierno.

Esta vez fue acusado de violar los incisos 3º y 9º del Artículo 4º del Decreto número 151 de 1888; es decir, por atacar y ofender la dignidad de las autoridades y por impugnar la moneda legal. El editorial publicado en el número 40 de *El Demócrata,* que llevó por título "El Artículo K", fue el causante de la multa impuesta, específicamente por haber hecho uso, según el Ministerio de Gobierno, de términos irrespetuosos al decir que: "la usura suprema" se ejerce por el "monedero falso llamado Gobierno". Sin embargo, la multa impuesta no recayó sobre Greñas sino sobre su antiguo redactor. Espinosa fue conminado por el Ministro de Gobierno, Evaristo Delgado, a pagar la multa de 200 pesos en un plazo de 24 horas en la oficina de Administración de Hacienda Nacional.

Espinosa había anunciado en el mismo periódico, días antes del anuncio de la multa, su retiro desde el 21 de Mayo de 1892 por motivos personales. Este hecho fue dado a conocer al Ministro Delgado, pero la respuesta que obtuvo fue una

orden de apresamiento hecha efectiva el 7 de Julio de 1892. Greñas le escribió desde *El Demócrata* el 12 de Junio, que el responsable del artículo era el mismo, y se hizo responsable de la multa. Greñas, después de haberle escrito dos cartas para dar a conocer este hecho, no había obtenido una respuesta del Ministerio de Gobierno, y decidió imprimir en el periódico otra enviada a su amigo Espinosa, preso en la cárcel:

> *Soy de la opinión que las multas que se impongan a los periodistas por lo que el actual régimen llama delitos de imprenta, no deben ser pagadas en ningún caso, pero en el presente, median para mi motivos de delicadeza que me obligan – contra su voluntad – a pagar por usted la multa igualmente decretada, pues como caballero y como amigo no puedo permitir por más tiempo que usted siga perjudicándose en sus intereses.*[451]

Haciendo gala de la misma actitud de periodista en camino a la beatificación en el cielo radical, con que hubieron de presentarse muchos de sus cofrades, Espinosa se negó a que Greñas pagara su multa, ya que hubo de considerar que la injusticia de la medida bien valía su sacrificio de liberal. El Caso anunciado en el mismo periódico, hubo de tener su epílogo cuando el 9 de Julio de 1892, el Ministro Calderón decidió imponerle como condición a Greñas, para dejar libre a Espinosa, que hiciera efectivo el pago de la multa y si se negaba, pasaría de acompañante de su amigo a la prisión sin la excarcelación del primero; por ser "*solidariamente responsable*[452], ya que el hecho de no haber dado aviso del cambio en la dirección del periódico al Ministerio era causal de responsabilidad. Sin embargo, Greñas habría de alegar con razón, antes de dirigirse a la Oficina de Hacienda Nacional a pagar la sanción, que en ninguna parte del decreto sobre

[451] *El Demócrata.* Bogotá, 12 de Julio de 1892. Número 45. p. 178.
[452] *El Demócrata.* Bogotá, 7 de Julio de 1892. Número. p. 178.

prensa decía nada que pudiera entenderse en el término de “solidaridad responsable” con los multados.

3.3.1.8. El Tren.

Este periódico no era de tendencia política liberal radical. Por el contrario, redactado por Francisco de P. Torres y Alejandro Torres; hijos de Francisco Torres Amaya[453], reconocido impresor de temas piadosos; no solamente era conservador en sus contenidos políticos, sino que inició con el propósito claro de alejarse de estos temas, centralizando su intención en la publicidad como medio para aumentar el comercio. De hecho, pretende desde su primer número, el convencimiento de los comerciantes para anunciar en sus páginas con un audaz tiraje de dos mil ejemplares y una frecuencia de tres veces al mes en una ciudad que contaba con cien mil habitantes en 1889. Su costo de 0.5 centavos por ejemplar suelto podría llevarle a conseguir mil pesos por edición, y al mes, tres mil pesos. Suma considerable, que sólo podía iniciar un periódico con la eliminación del costo de impresión al mínimo.

El propósito de no inmiscuirse en temas políticos era explicado desde el mismo punto de vista comercial del periódico; ya que, la única manera de despertar confianza entre los anunciantes, estribaba en la garantía de una extensa circulación sin la prevención de ser leído con el espíritu de la lucha partidista. Su propósito era tan altruista, que su pretensión de venta incluía el extranjero y todos los Departamentos por medio de Agentes abonados, yendo de la mano con el incremento de los anuncios, claves para el editor, porque entendía que esta era la

[453] El editor de este periódico, además de reconocido autor de obras católicas, editó *El Catolicismo*, y fue quien introdujo el Grabado artístico en Colombia, habiendo sido desterrado en 1861 por Mosquera a “climas mortíferos” por sus ideas políticas. Muere en Noviembre de 1890, y una vez muerto el viejo tipógrafo, sus hijos deciden apartarse de la poca participación en política de su periódico, para adentrarse profundamente en estos temas.

manera de hacer crecer un periódico como en Estados Unidos o en Europa. La explicación de la necesidad de incrementar la incipiente publicidad vale la pena mencionarse:

> *Verdad que es preciso gastar dinero anunciando para vender o comprar, pero los efectos maravillosos que se palpan, unas veces inmediatamente, otras más tarde, dan como resultado económico el reembolso [sic] de lo empleado en los anuncios con ganancias de verdadera utilidad. […] Nótase en Bogotá gran cúmulo de carteles en las esquinas y mucho afán por anunciar – que esto es signo del tiempo – y es preciso considerar que los avisos de las calles tienen la corta estadía de un segundo y que los hombres activos y de negocios poco leen por no detenerse, en tanto que el anuncio de un periódico tiene lectores en todas partes y no se destruye tan pronto*.[454]

Presenta numerosas noticias sobre la vida cotidiana de la ciudad. Además hace publicidad de sus productos y libros. Muchos de ellos de corte piadoso, escritos por sacerdotes y obispos. No obstante, comete un error, tal vez como producto de la inexperiencia legal de sus redactores ante las nuevas leyes de prensa o por su entrada en el "paseíllo" del conservatismo histórico, que ya habría de lanzarse a lidiar contra Miguel Antonio Caro.

El 1º de Mayo de 1889, un estudiante de la escuela de derecho del Colegio del Rosario, fue apresado por un altercado originado por la protesta de un grupo de jóvenes estudiantes conservadores contra el Ministro de Instrucción Pública. Los jóvenes, en una manifestación frente al palacio, pedían la revocatoria de la expulsión de algunos de sus condiscípulos por inmiscuirse en asuntos políticos.

[454] *El Tren*. Bogotá, 1º de diciembre de 1889. Número 1 p. 1.

Arguello, vocero de los estudiantes fue reducido a prisión; y los hermanos Torres plasmaron su tenue protesta, desde El Tren, sobre el apresamiento de Arguello; "*sin fórmula de juicio y sin orden escrita, violándose así los artículos 23 y 46 de la Constitución que garantizan la libertad individual y el derecho de asociación"*,[455] provocando la sanción del Ministerio, bajo la acusación de haber violado el artículo 4º del Decreto 151 de 17 de febrero de 1888 vigente sobre prensa, pero beneficiándolos con la multa a los periodistas en lugar de la suspensión del periódico, según lo acordado en el Decreto Ejecutivo de Holguín, número 910 del 29 de Noviembre de 1889. Culpados de atacar el "orden" y las autoridades, el Ministerio de Gobierno resolvió:

> *Imponer al Sr. Francisco Torres Amaya, redactor de la hoja en referencia, una multa de cincuenta pesos que deberá consignar en la Administración Nacional de Hacienda de esta ciudad, 24 horas después del recibo de la presente. Comuníquese.*
> *Dado en Bogotá, a 2 de Mayo de 1890.*
> *José Domingo Ospina C.*
> *Es copia.- El subsecretario, José M. González Valencia.*[456]

En sus pocos números posteriores, El Tren se adhiere al apoyo de la candidatura de Marceliano Vélez, reproduciendo el manifiesto firmado en mayo de 1891 por algunos notables miembros del partido Conservador y publicado por los periódicos bajo el nombre de "un programa republicano"; con lo cual, se adentró frontalmente en los terrenos políticos de los que había pretendido mantenerse alejado en sus inicios. Ya se aventuraba a llamar a Núñez como "el amo" y a criticar la prisión por motivos políticos de Rufino Gutiérrez en el Cauca; "*y el partido liberal, como*

[455] *El Tren*. Bogotá, 1 de mayo de 1889. Número 16 p. 61.
[456] *El Tren*. Bogotá, 10 de Mayo de 1890, Número 17 p. 65.

espectador, no se asombra de los hechos. Hasta ahora hemos tenido la comedia del Partido Nacional. ¿Comenzará el drama de la inquisición?[457]

No obstante, no ser multado nuevamente, la publicación desaparece. Al parecer, su propósito inicial de convertirse en una alternativa comercial se hunde en las arenas movedizas de la contienda política, haciendo eco de la misma actividad que se había propuesto no seguir en su primer número.

3.3.1.9. La Catástrofe.

Desde su primera edición el 8 de noviembre de 1890, este impreso con el lema de "periódico sin malicia", fue expuesto, con un buen sentido del humor y de manera anónima, tres veces a la ira del Gobierno. Decía en su encabezado que su redactor era Rafael Godo-hoy, que sus dibujantes eran Hurtado y Hurtador, y que su grabador se llamaba Casi-Miro A. Judas. Dice que es editado en el Año V de la Regeneración y 1º de nuestra "catástrofe". En sus condiciones para funcionar, expresaba que: "*Este periódico, desde su aparición, se pone bajo el ala protectora de nuestro paternal gobierno. En el caso de que lo intenten suspender o multar, nos llamaremos a tratados. Aparecerá cada ocho días, si no llueve."*[458] Anuncia además, que debido a que el Gobierno decidió suspender "*La Nación" y "El Comercio*" (ambos subvencionados por el Gobierno), "*por haberlo exigido así un alto empleado de la policía y algunos miembros de la Junta de Higiene, será de hoy en adelante este periódico el "órgano de los intereses de la Regeneración"; es decir, que cuando los regeneradores vayan a TOCAR LOS INTERÉSES PÚBLICOS, aquí les TOCAREMOS EL ÓRGANO."*[459]

[457] *El Tren*. Bogotá, 12 de Mayo de 1891, Número 48 p. 189.
[458] *La Catástrofe*. Bogotá 8 de Noviembre de 1890. Número. 1. p. 1.
[459] Ibíd.

No escatimó propinas a la hora de referirse a los funcionarios del Gobierno como “Cacos” y “Tramposos” en lo referente a las emisiones del Banco Nacional, pero también llamó “burros” “perros” y “ratas” a los Congresistas opositores al proyecto de erigir un mausoleo al General Santander, derrotado en el cuerpo colegiado con 25 balotas negras contra 20 blancas. Alcanzó a editar 3 ejemplares, siendo el último de ellos el 12 de diciembre de 1890, todos del mismo talante, siendo multado el 23 de diciembre de 1890 c0n 100 pesos por insultar al Gobierno. No volvió a publicar.

3.3.1.10. El Gladiador.

Redactado por Julio Galofre y Alejandro Flórez (los mismos de la sociedad libres de Colombia), e impreso en la rotativa de Medardo Rivas bajo la dirección Fernando Pontón; este periódico inicia su actividad el 14 de Mayo de 1891, Su periodicidad fue semanal, siendo voceado el día jueves. Aclaraba también que no tenía suscripciones en la ciudad, y que la serie de 12 números costaba 1 peso y el número suelto diez centavos. Afirmaba, después de su primera edición, que su tiraje sería de 2 mil ejemplares y que la siguiente sería de 3 mil como consecuencia de la acogida que conllevó un agotamiento prematuro de todos los ejemplares. Como muchos de los periódicos liberales radicales, empezó haciendo referencia a la actividad literaria, pero este en particular, también se definió desde su primer número como “periódico de oposición”, con una orientación permanente hacia la defensa de las juventudes liberales radicales, que según sus autores, se constituyeron en las ciertas herederas de las doctrinas republicanas.

Precisamente, al final de la publicación mantuvo una “SECCIÓN POLÍTICA” Con el carácter de “permanente” que igualmente, inició siempre con un titular: “*MIGUEL ANTONIO CARO Y MARCELIANO VÉLEZ. Candidatos de exclusión para la juventud liberal Republicana.*” El inicio de sus labores y el mantenimiento

crítico de sus columnas políticas, coincidió con la agitación pública por la división Conservadora; manteniendo un elevado tono "guerrerista" que habría de acrecentarse con los mismos acontecimientos.

Su actitud es más radical que la del recién instaurado "centro liberal", fundado por los dirigentes más moderados del partido, con el propósito de agrupar y reorganizar sus fuerzas; y a quienes hubo de exigir constantemente la opinión oficial sobre sus simpatías hacia Vélez, que El Gladiador no compartía. Ciertamente expuso en sus primeros editoriales la necesidad del partido por mantenerse digno y alejado de cualquier alianza política con los conservadores no obstante su escisión del lineamiento regenerador. Hizo un llamado permanente al combate para lograr la derrota del partido conservador y del partido nacional.

> *El partido Liberal es demasiado grande para servir de lacayo a ningún aventurero. […] si no hoy, mañana se levantará el liberalismo […] somos los guardianes de la identidad de nuestra historia y tenéis primero que aniquilar nuestra independencia para que podáis entregar al enemigo de siempre lo que estáis obligados a entregarnos sin alianzas vergonzosas y contubernios inmorales. […] Queremos volver al Capitolio sin alianzas, solo, por nuestros esfuerzos, con nuestras santas instituciones. Para conseguir esto, es preciso hablar moverse, dirigir, indicar.*[460]

Se burlaba constantemente de las futuras elecciones, hallándoles un parecido con un concurso de belleza. Acusaba al candidato Caro y a los Conservadores de innumerables males. A los epítetos de monárquico, ultra católico, y corrupto, recurre frecuentemente a insultos sobre el continuismo asegurado por Holguín,

[460] *El Gladiador.* Bogotá, jueves 14 de Mayo de 1891. Número 1 p. 7.

que habría de definir el primer cargo de la República antes de ir a elecciones, a las cantinelas contra el alcalde Higinio Cualla porque no había pintado el capitolio y no reparaba las calles, redactándole versos y entremeses teatrales; y a la presentación de un panorama desolador de la Nación y de sus funcionarios. Un ejemplo, es la exposición de noticias faltas de veracidad y sustento:

> *Robo. .Próximamente daremos a conocer los nombres de algunos empleados que, de acuerdo con los habilitados respectivos, están estafando de un modo vergonzoso a la gente honrada. ¿Estos serán los hombres que necesita el Gobierno para sus oficinas?*[461]

Se expresó sobre las elecciones, y tal vez refiriéndose al número de inscritos: *"En primeras nupcias, es decir, primeros coqueteos de esquina, hay 9,723: en segundas nupcias, es decir, visitantes de los domingos por la noche, 3092; y con el lazo al cuello, 78."* [462]

En su publicación del 19 de Junio de 1891, El Gladiador encuentra la ocasión para desbrozar su recalcitrante animadversión hacia el Gobierno, y desata su ira en el papel sin tasar improperios, ni preocuparse por las consecuencias que le causaría su manifestación. La fuente de tales opiniones se origina en el anuncio de la compra de unos fusiles y otras armas en Lieja por parte del Gobierno. La suspicacia causada por la necesidad de amedrentar, por parte de Holguín y Núñez, al candidato Vélez, se le adiciona la preparación y equipamiento del ejército ante las constantes asechanzas subversivas del radicalismo, que provocaron el estallido de los redactores.

[461] *El Gladiador.* Bogotá, 21 de Mayo de 1891. Número 2 p. 16.
[462] *El Gladiador.* Bogotá, 21 de Mayo de 1891. Número.2. p. 15.

La cita del inicio del artículo, que se extendería por dos páginas, ya preparaba al lector sobre la dirección a la que habría de apuntar: *"La independencia de un pueblo no se conquista con femeniles lamentos; se conquista a balazos. – R. Verea*."[463] Lo que viene es todavía más temerario, ya que aconseja la actitud que debería tomar el pueblo colombiano:

> *El monstruo está con el pie en el borde del abismo, y no hay más que empujarlo. Que caiga, que ruede, que se despedace. Para todo esto hay que hacer un esfuerzo, y es preciso hacerlo. Si hay que derramar sangre, derramémosla. Aquí está la nuestra. Si es preciso combatir, combatamos. Y si fuere necesario morir, ¿qué importan nuestras vidas? La juventud no teme las arbitrariedades del déspota. No todos debemos sucumbir, y detrás de nosotros vendrán otros, más inteligentes ó más audaces, que se aprovecharán de nuestras labores. No dejemos caer la nueva saliva que la dictadura va a arrojar a la ultrajada faz de la República. Que sepan nuestros opresores que aun podemos hacernos dignos del nombre que llevamos; y que ni el cadalso, ni el destierro, ni la prisión nos intimidan y acobardan. La época no es de expectativa, es de acción; no es de contemporizaciones, es de combate. Hagamos levantar vapores de sangre en los horizontes de la patria. […] La independencia no necesita plegarias, exige hecatombes; no quiere declamaciones, pide cadáveres. La imposición oficial es un hecho. El Sr. Caro marcha a paso de gigante al sillón de San Carlos; pero irá a el con la frente salpicada con la sangre que será preciso derramar. O el Sr. Caro renuncia a su candidatura, o que se prepare a ser el Nerón de Colombia. […] Provoquemos la omnipotencia del César. Que*

[463] *El Gladiador.* Bogotá, 19 de Junio de 1891. Número.5. p. 43.

> *encarcele, que exporte, que fusile. Despertemos toda una rabia, obligándolo á que se lance sobre nosotros con sus legiones enfurecidas."*[464]

Pero, su afán de comprometer al Liberalismo no solamente referencia a las juventudes, sino que además increpa al "Centro Liberal" para que se lance también a la guerra:

> *El Centro Liberal que dice? Está en la cima. Puede perfectamente divisar toda la llanura; hacer una señal, dar la dirección.[…] La Regeneración ha degradado al país, y un gobierno que degrada a sus gobernados no tiene razón para gobernarlos; y el pueblo que se siente degradado por un gobierno debe derrocarlo*[465]

La violación de las leyes de prensa se asentaba con estas afirmaciones y la suspensión llegó el 23 de junio de 1891 por seis meses, pero este no volvería a abrir. Incluso, el Ministro de Gobierno, Antonio Roldán, hubo de sostener que su permisividad y tolerancia en la amplia discusión de los asuntos de interés público, podría ser calificada como de indebida, especialmente en los meses después de junio de 1891, cuando Núñez anunció la receta para continuar la regeneración en cabeza de su propia candidatura a la Presidencia y la de Miguel Antonio Caro en la Vicepresidencia, en oposición a la candidatura de Vélez y José Joaquín Ortiz; en los cuales, los periódicos *"obedeciendo al parecer a un plan premeditado [...]han abusado de los derechos que les están reconocidos, y los Redactores de ellos no solo no han sido castigados sino que se ha prescindido hasta de hacerles notar sus faltas, para evitar reincidencia"*[466]*;* y decide aplicar la ley a la dicha

[464] Ibíd.
[465] Ibíd. p. 45.
[466] *El Relator.* Bogotá, Julio 16 de 1891 Número 544. p.254.

publicación a tenor de considerarla abiertamente subversiva, al violar el inciso 1.º, artículo 4.º, del Decreto número 151 de 1888, por dedicarse a "*la antipatriótica tarea de agitar los ánimos publicando artículos en que se concita francamente a la guerra y al desorden"*[467]*.*

3.3.1.11. El Concurso.

Este periódico de corriente política Liberal radical sólo contó con dos números impresos en la imprenta de Fernando Pontón y, probablemente fue una respuesta al cierre del periódico de Galofre, *El Gladiador.* El permiso concedido por Antonio Roldán, Ministro de Gobierno para vocear y vender por las calles el periódico estaba extendido a Sr. Abelardo barriga. Redactaba también Antonio Quijano Torres, y su aparición coincidió igualmente con la contienda política presidencial de 1891. Era liberal, pero aducía la necesidad de requerir el establecimiento real de los partidos políticos. Órgano, como *El Gladiador*, de lo que se autodenominaba la juventud liberal, expuso que no eran distantes al Centro Liberal y que, por el contrario, buscaban la unión entre todos los liberales. Este periódico político se dedica a debatir fuertemente con *El Orden*, con *El Porvenir*, con Rafael Núñez, etc. Decía también que llevaba la voz de los pobres y los que sufrían por la regeneración. Publicó poemas de Julio Galofre después de suspendido su periódico. *El Concurso* además, y a diferencia de casi todos los periódicos publicados en estos años, también atacó la iglesia: "*Siguen las matachinadas de funciones de la iglesia. ¿Será bien mirado por Dios que el clero, su inmediato representante, esquilme al pueblo para diversiones públicas, en lugar de pedir lamisca [sic] limosna para enjugar las lágrimas de los necesitados?*"[468]

[467] Ibíd.
[468] *El Concurso.* Bogotá, 15 de Julio de 1891

Multado con doscientos pesos el 24 de julio de 1891 con el calificativo de violar la ley por subversivo, no vuelve a ser editado. Sin embargo, Cuenta Alfredo Greñas desde *El Zancudo,* que la causa de su cierre se originó en artículo llamado *"El Señor Caro y la moneda de $0,886"* en alusión a la emisión de billetes que había desencadenado una alta inflación y por haber expresado que en el país circulaba una mayor cantidad de billetes que la señalada por el Gobierno. La Resolución del Ministerio de Gobierno fue dada en alusión a los incisos 7º y 9º del Artículo 4º, que establecía la constitución de Delito de imprenta el publicar una noticia falsa y atacar la moneda propendiendo a su depreciación.

La defensa de lo dicho desde *El Concurso* no dejaba de ser risible: *"con esto no se hace más que llamar la atención del Gobierno para que establezca mejor vigilancia en las aduanas"*[469]*.* Alegando también que hablar sobre Miguel Antonio Caro, no obstante ya haber sido elegido para el cargo principal del Ejecutivo, no era más que hablar de un simple particular al que se refería el citado artículo. Además que, *"lejos de hacer un mal con el artículo en cuestión, el Gobierno, más bien debería agradecerlo, porque se le señala un abismo en que puede precipitarse"*[470] Esta defensa fue escrita por Alejandro Flores, quien además de haberse adjudicado la autoría del artículo, le solicitó al Ministro de Gobierno, el 10 de Agosto de 1891, la revocatoria de la Resolución, solicitándole que en caso de no hacerlo, le fuera permitido pagar él mismo con la cárcel ya que, confesaba que los redactores Barriga y Quijano eran inocentes del hecho.

3.3.1.12. Diario de Cundinamarca.

Este periódico bisemanal que costaba 10 centavos, dirigido y redactado por el Doctor Liborio Cantillo y Enrique Lleras, trataba los temas políticos que el primero

[469] *El Zancudo.* Bogotá, 15 de Agosto 1791 [1891] Número.36 p.150.
[470] Ibíd. p. 151.

dejaba de lado en su *Revista Judicial,* que era publicada al mismo tiempo. En sus propósitos impresos, Cantillo y Lleras expusieron su subordinación al Centro Liberal, ofreciéndoles su disposición a los liberales que quisieran publicar escritos sobre interés público, siempre y cuando contaran con la firma del autor de los mismos. En 1891 entró de lleno en la contienda política menoscabando los resultados gubernativos de la Regeneración y llamando a sus gobernantes conservadores como a una legión de ladrones, en contravía de los velistas, "verdaderos ejemplos" de probidad republicana. A lo largo de sus páginas podían encontrarse epítetos como este, que hizo parte de un artículo llamado "Luz, más luz": *"Lo que nuestra patria necesita ante todo, es acabar con la farsa y los farsantes para que puedan imperar las ideas. La Regeneración ha sido un cálculo, una especulación de mercenarios, cuando debía haber sido práctica de principios."*[471]

Haciendo un llamado para que los liberales de Colombia participaran de las votaciones que se habrían de llevarse a cabo el primer domingo de Diciembre, desde Septiembre hubo de tratar de disciplinar adeptos y unificar opiniones en torno a la obediencia debida al Centro Liberal: *"Y por quien o quienes votamos? EL CENTRO LIBERAL nos lo dirá en oportunidad. Por ahora es urgente que sean inscritos los nombres de los liberales en todas partes."*[472]

El 11 de Septiembre de 1891 hubo de llegarle a los directores de *El Diario de Cundinamarca* la Resolución número 52 del Ministerio de Gobierno, en la cual fueron considerados la violación de los incisos 1º y 3º del Artículo 4º del Decreto 151 de 1888, sobre prensa; específicamente referidos en los artículos llamados "Derecho de Patentes", del número 3565 del 18 de Agosto y "Luz, más luz" del número 3575 del 8 de Septiembre de 1891; que según el análisis del Gobierno;

[471] *Diario de Cundinamarca.* Bogotá, 8 de Septiembre de 1891. Número 3,571.
[472] *Diario de Cundinamarca.* Bogotá, 11 de Septiembre de 1891. Número 3,572.

"han violado las mencionadas prescripciones por cuanto se ataca la fuerza obligatoria de las leyes, emitiendo conceptos que tienden a desautorizarlas, y además se ofende con lenguaje insidioso la dignidad de altas autoridades civiles, lo cual constituye delito de imprenta"[473]

La multa de 200 pesos, impuesta por el Ministro Antonio Roldán hubo de ser solicitada en revocatoria por Cantillo y Lleras, alegando que no había sido la intención del periódico atacar la fuerza de las leyes, ni la dignidad de los gobernantes; pero el Ministerio no cedió a la petición revocatoria, contestándole con estas palabras: "*Hacen los peticionarios una declaración franca de sus intenciones, manifestando que no han tenido voluntad de violar las disposiciones sobre prensa, pero el Gobierno no puede entrar a juzgar sobre intenciones, y aprecia únicamente los hechos que están a la vista de todos."*[474]

3.3.1.13. El Zancudo.

El Zancudo fue uno de los diarios redactado y dirigido por Alfredo Greñas. Este escritor y grabador Bumangués, pionero de la caricatura política en Colombia, poco le importó que su maestro Alberto Urdaneta, director del instituto de bellas artes en donde había estudiado en 1882, ya hubiese tenido la experiencia de ser encarcelado por sus opiniones políticas expresadas a través de la caricatura en 1877 desde el periódico conservador y critico de los radicales, *El Mochuelo*. Buen escritor y mejor grabador xilográfico, ya había participado unido al liberalismo radical desde muy joven, en la guerra de 1876, y se convenció que lo inspiraba menos el reconocimiento artístico que la participación activa en política. Por eso, en el levantamiento radical del 1885 fundó el periódico *El Posta*, dejando de lado su trabajo de grabador principal en el periódico, autodenominado "apolítico",

[473] *Diario de Cundinamarca.* Bogotá, 15 de Septiembre de 1891. Número 3,573.
[474] Ibíd.

llamado *El papel periódico ilustrado* y se inmiscuyó de lleno en la contienda política.

Además de atacar el gobierno de Núñez, se dedicó a caricaturizar a Soledad Román, esposa del regenerador con grabados insultantes. No obstante el carácter anónimo de estas impresiones de hojas sueltas, pues *"una vez terminada la edición, cargan la prensa, que es pequeña, en una parihuela, la cubren con un paño, y dos indios salen con ella para otra parte sin saber ni lo que llevan*"[475], finalmente desaparecieron en virtud de la vigilancia asidua de la policía. Sin embargo, su empeño y su convencimiento en un destino mesiánico para el Liberalismo Radical, lo motivaba a fundar periódicos como si fueran armas estratégicas para incidir en la opinión Bogotana, desafiando permanentemente a las autoridades. De hecho, una vez finalizada la guerra, funda la imprenta *El Progreso* y edita un periódico del mismo nombre, con el propósito inicial de constituir una vitrina cultural a la manera del *Papel Periódico ilustrado*. Pero en su trayectoria como escritor, nunca pudo acallar la expresión de su pensamiento radical, y terminó atacando nuevamente al Gobierno, siendo suspendido y encarcelado el 31 de Agosto de 1886.

Obviamente, en la guerra iniciada por Greñas desde, según el mismo, casi veinte periódicos; su propósito de fustigar al Gobierno no tenía la mínima posibilidad de sumisión ni de una obediencia ejemplar de la ley.

> *Empecé una campaña de prensa contra los actos arbitrarios del Gobierno, en la que se multaba el periódico se pagaba la multa y se seguía; si se suspendía por tiempo dado, se seguía al terminar el de*

[475] LEMAITRE, Daniel. Soledad Román de Núñez: recuerdos, Bogotá: Canal Ramírez, Antares Ltda., 1982, p. 94-99. citado por: GONZÁLES, Beatriz, Gráfica crítica entre 1886 y 1900, en: Medios y Nación. Historia de los medios de comunicación en Colombia. Bogotá: Aguilar, 2003.p.167.

la suspensión, si se le suspendía definitivamente se fundaba otro, y suspendido ese, otro lo seguía.[476]

En su primer número, ya había anunciado Greñas: *"Este periódico saldrá a la luz cuando lo tenga a bien y en tanto se lo permitan [...] al volver a zumbar en los oídos de nuestros encumbrados regeneradores, espera tener el apoyo de todas las víctimas y de todos los hombres honrados (que es lo mismo)"* [477]

Es quizá este periódico de caricatura política con el que mayormente se ha retratado la censura de la regeneración hacia la prensa. Su comprometido sentido del humor, al mismo tiempo mordaz y elegante, quebrantaba todos los días las leyes de imprenta por la módica suma de 10 centavos, cuando casi todos los demás valían entre 25 y 50. No obstante, pudo imprimir bastantes números para que las caricaturas se quedaran grabadas en la memoria de los bogotanos. Holguín, trató de restarle importancia aludiéndole adjetivos de bajeza y menosprecio. Pero, lo cierto era que los comentarios sobre la última edición de *El Zancudo* se disertaba en las esquinas, tanto que, labores policiales se daban a la tarea de romper los anuncios con los cuales se participaba la salida de la próxima aparición.

Desde su primer número hizo un balance de los principales periódicos impresos en 1891 afectos al Gobierno en Bogotá, haciéndole pequeños versos humorísticos. Estos son: *El Telegrama, Las Noticias, El Taller, La Reseña, y La Nación.* También se dio a la tarea de comparar "científicamente" a "La Regeneración" con una lombriz solitaria y otro tipo de "parásitos" con su respectivo tratamiento médico. En el transcurrir de sus páginas llama a los gobernantes "*cuervos que se alimentan*

[476] GREÑAS, Alfredo." Don Alfredo Greñas", en *La Nación.* San José de Costa Rica, 1977. citado por: GONZÁLES, Beatriz. Gráfica crítica entre 1886 y 1900. Op. Cit, p.168.
[477] ARCINIEGAS, Germán. El Zancudo. La caricatura Política en Colombia. (Siglo XIX). Bogotá: Editorial Arco, 1975. p. 18.

de la muerte"[478], y Greñas no se cansa de advertir que *"El Zancudo [...] no teme que se le suprima, se le suspenda, se le insulte, o le pasen de esas aventuras que dan miedo, porque no se parará en la Calva del Excelentísimo, ni en las narices de Sus Señorías"*[479]

Pero Greñas, quien redactaba con el seudónimo de *"Cernícalo",* en su propósito de "moralizar corrigiendo por medio de la crítica", al no contar con suficientes colaboradores hubo de hacer un llamado a quienes quisieran expresarse por medio de la sátira humorística, para que sus escritos o caricaturas fueran remitidos a *El Zancudo,* prometiendo su publicación.

Por eso, la suspensión definitiva resultada el 13 de octubre de 1891, - la primera fue de sólo 3 meses, desde el 10 de Agosto de 1890 hasta el 22 de Febrero de 1891, por insultar "en exceso" al General retirado Payán, a quien Greñas había llegado a llamar "grandísimo marrano" y por publicar igualmente insultos a La Regeneración - extrañó a los Bogotanos más por la tardanza y excesiva permisividad el Gobierno, que por la novedad de la medida tomada por su mismo Director como consecuencia de una quiebra causada por sus propios agentes distribuidores. Sin embargo, a través de sus 39 ediciones, impresas desde el 22 de Marzo de 1890 hasta el 12 de Octubre de 1891, Greñas expuso con un humor brillante y unas caricaturas muy bien logradas, una crítica absoluta e indiscriminada a "la regeneración", y hacia sus dirigentes. Cuando regresó en Octubre de 1891, un Greñas mayormente desafiante expuso:

> *Y vengo tan arrepentido de mis pasadas habladurías, que ya verás, lector, con que prudencia y mansedumbre acato y considero a los necios, a los tontos, y a los pícaros; si es que aún quedan algunos*

[478] *El Zancudo.* Bogotá, Abril 30 de 1790 [1890] Número.2 p. 6.
[479] Ibíd. p. 8.

> *refractarios al celeste influjo de la "paz científica. [...] a los que si les cargaré la mano y manejaré a palo limpio será a todos aquellos rufianes sin un triz [sic] de misericordia, que se atrevan a decir, o pensar siquiera, que la regeneración fundamental es cosa mala, más mala que todas las siete plagas de Egipto.*[480]

A las frecuentes alusiones del sobrenombre de "mono" con el que habría de expresarse en las caricaturas de Carlos Holguín, y que referenciada su color de pelo, le creó un glosario de palabras iniciadas con este sufijo. La tomadura de pelo, obviamente, no se encadenaba con la rigidez con la que el Gobierno quería ver la "grandeza del periodismo"; y precisamente la burla a los Decretos de imprenta enardecía los ánimos de las autoridades. Esta fue precisamente la causa para su segunda suspensión el 13 de Octubre de 1891, pues la obligatoriedad en la inserción de las normas contenidas en el Artículo 13º del Decreto 151 de 1888 sobre Prensa, es decir el contenido completo de este Decreto en sus páginas,[481] la identificación del Propietario, la autorización solicitada y otorgada por el Ministro de Gobierno o el Gobernador, y el anuncio permanente del precio, la fecha y los valores de inserción de anuncios; "*hace la inserción de dicho decreto en forma mediata para desvirtuar su sentido, y más bien como una burla que como una prueba de acatamiento a la ley"*[482]

Las demás consideraciones a *El Zancudo* tienen que ver con el Artículo 4º en su inciso 3º, porque según el Ministerio de Gobierno, desconoce y ofende las

---

[480] *El Zancudo.* Bogotá, Febrero 22 de 1791 [1891] Número.15. p. 57.

[481] Mediante un inserto, todo periódico debía publicar el Decreto 151 de 1888, sobre Prensa. Los periódicos radicales, generalmente lo hacían mediante pequeñas columnas dentro de cada edición con su respectivo "(continuará)", pero Greñas, llegó a imprimir, ocasionalmente, insertos de este talante: *"Remitido Forzoso y Gratuito. DECRETO 151 DE 1888, Sobre Prensa. De Gobierno, al Gobernador del Departamento. (continuará)"* ó este, impreso en su último número, antes de ser suspendido: *"DECRETO 151 DE 1888, Sobre Prensa. Sente decreto; (continuará)" El Zancudo.* Bogotá, Octubre 11 de 1791 [1891]. p,196

[482] *El Comercio.* Bogotá, 19 de Octubre de 1891. No.8 S.P.

autoridades, por ser Greñas reincidente como delincuente de imprenta no obstante haber sido suspendido temporalmente el 11 de Agosto de 1891; pero principalmente, y vuelve el Ministerio a resaltar la importancia estrictamente del periodismo político; porque "*El Zancudo aunque se mezcla con la política de actualidad, no sirve a ninguna causa, no tiene programa conocido, ni defiende ninguna doctrina*"[483]

Pero, como para los escritores reincidentes en los delitos de imprenta no habría una tercera oportunidad sobre la tierra regeneradora; esta vez, fue ordenada la suspensión total y permanente de la publicación periódica. A lo que Greñas hubo de responder:

> *No calculé que las primeras autoridades de la República fueran a ofenderse por las bromas de El Zancudo, ni era esa mi intención [...] que cabalmente por no servir a ninguna causa ni para maldita la cosa, no merecía tanto rigor. Me someto, pues, con toda obediencia, aunque no con mucho gusto, a la alta providencia del Gobierno, sobre suspensión absoluta de El Zancudo.*[484]

Pero la historia del periódico tuvo además, un ingrediente interesante y desconocido. Tal vez, previendo la resolución supresora de Caro como Encargado del Poder Ejecutivo, que llegó a mediados de Octubre de 1891; el mismo Greñas ya había anunciado su posible retiro por falta de recursos para seguir subvencionando el periódico. El 11 de Octubre de 1891, hubo de reconocer un sentimiento de profunda tristeza como periodista, que no había sido causada por los enemigos de "La Regeneración", sino de los agentes que vendían su impreso. Contaba que durante el último mes de Octubre, habían sido frecuentes los

[483] Ibíd.
[484] Ibíd.

telegramas de este tipo: "*Periódico agrada mucho, suscripciones colocadas todas. Sírvase aumentar el envío. Correo enviaré dinero. [...] Próximo correo llevará fondos. Mande 10 suscripciones más"* [485] Y lo que vino fue una serie de contratiempos expresados por Greñas que, cansado de esperar las remesas correspondientes a los periódicos vendidos por sus agentes, quienes habrían de demandar más ejemplares sin la previa cancelación de los anteriores, y con las deudas pendientes por concepto del pago de los obreros de la imprenta y del dueño del local; terminarían por hacer insostenible su publicación, diciendo:

> *No hay más remedio. La empresa quiebra, El Zancudo tendrá que morir si no se pone remedio a tamaño mal. Voy a mi mesa y escribo el siguiente Decreto:*
>
> *Yo, Serafín boquiflojo, director de El Zancudo;*
>
> *CONSIDERANDO,*
>
> *1º Que está ya al terminar la serie 5ª de mi periódico, y la mayor parte de los agentes no han cubierto aún la serie 2ª.*
> *2º Que es una suprema tontería seguir enviando a los tramposos un papel que cuesta mucha plata, dolores de cabeza y sustos a cada paso;*
> *3º Que el vicio de leer de gorra debe extinguirse para el bien de las futuras generaciones periodísticas;*
> *4º Que esta plaga de malos agentes es la que ha acabado con muchos periódicos liberales, que vivirían todavía si hubieran contado con el apoyo de buenos copartidarios en los Departamentos;*

[485] *El Zancudo.* Bogotá, Octubre 11 de 1791 [1891] Número.49 p. 194.

DECRETO

Art. 1º Dar las gracias a los buenos agentes de El Zancudo, por sus importantes servicios y eficaz cooperación. Estos verdaderos amigos que sirven las agencias cuya lista publicaré próximamente, comprenden perfectamente los deberes que les impone la honradez y merecen mi especial reconocimiento como quien no dice nada.
Art. 2º Desde el número 50, primero de la serie 6ª, se suspenderá definitivamente el envío de El Zancudo a los agentes que para entonces no hayan arreglado sus cuentas con la empresa.
Art. 3º Los nombres de los agentes morosos se empezarán a publicar desde el número siguiente, como castigo por retener una plata que no les pertenece, y que tanta falta me hace.
Dado en mi palacio de la Verdad, a los once días del mes de Octubre de este otro año de desgracia de 1891, 6º de la Regeneración y la Catástrofe.[486]

Este agónico Decreto, premonitorio de su definitiva muerte, escrito con el humor acostumbrado de sus autoinducidas desgracias acaecidas en sus devaneos y periplos con la prensa; no habría de cesar, aún y no obstante su posterior suspensión, con el ejercicio de escribir, imprimir y vender periódicos, que habría de constituirse en la profesión de Alfredo Greñas durante toda su vida.

Hubo de quedar, eso sí, el ejemplo inicial del humor mordaz al Gobierno y a ciertos sectores de la sociedad, que muchos años después serían recogidos por caricaturistas como Rendón, Osuna, y humoristas como Jaime Garzón. Pero que, a finales del Siglo XIX no habrían de ser tolerados a plenitud, entre otras cosas,

[486] Ibíd.

por el trasfondo siempre insistente de la instigación política con el objetivo de socavar el gobierno de “La Regeneración”. Pese a toda represión, *El Zancudo* fue el ejemplo fehaciente de una mayor tolerancia de Carlos Holguín como Encargado del Poder Ejecutivo, pues leyendo el mencionado impreso, podría decirse que no existió un solo día, en el que, voceado por las calles bogotanas, no hubiera podido ser objeto de la aplicabilidad del Decreto 151 de 1888 sobre prensa. Pero, con el inicio de la administración de Miguel Antonio Caro, y con la preparación de motines y revoluciones, la prensa de oposición habría de esperar mayor severidad.

3.3.1.14. La Nación. (Imprenta)

Multa de trescientos pesos a la imprenta el 17 de octubre de 1891. Esta imprenta era de propiedad de Jorge Roa, quien tuvo que pagar la multa impuesta por Antonio Roldán, Ministro de Gobierno al publicar un escrito llamado “Carta a Caro” y negarse a suministrar el nombre de su autor. Este hecho merece la pena mencionarse ya que, como ya pudo ser explicado, la sanción a los militantes del conservatismo “histórico” fue terminante y severa, especialmente en la posterior administración de Caro.

3.3.1.15. El Sufragio de Panamá.

Multa de doscientos pesos el 10 de Noviembre de 1891.

3.3.1.16. El Mago.

Este periódico de avanzada crítica política, contaba con una excelente capacidad de reproducción gráfica, especialmente el grabado. Inició labores el primero de Noviembre de 1891, con la redacción de Juan Ignacio Gálvez y teniendo como ilustrador y grabador a José Ariosto Prieto en la Imprenta de Medardo Rivas, bajo

la dirección de Fernando Pontón y con una agencia distribuidora que funcionaba en la "Peluquería de París", en la "esquina nordeste de la plaza de Bolívar". Periódico de crítica política, aunque tenía asignado un precio, al parecer su primer número fue repartido de manera gratuita y quizá los siguientes también. Este aviso apareció en su primera edición: *"Las personas a quienes les sea enviado este periódico, se servirán, si no desean suscribirse, pasar aviso a la agencia*."[487]

Igualmente en su primer número, este semanario publicó el permiso para imprimir que le fue otorgado por el Ministerio de Gobierno y desde su inicio avisó que se habría de publicar "mientras el Gobierno quiera". Su mezcla de humor, poesía satírica, crítica política y hasta chistes se anuncia también desde su primera publicación:

> *Nuestro propósito: […] La Necedad se pega. Un periódico únicamente satírico y burlesco, […] aun cuando sería muy bien recibido por nuestro público, […] sería muy difícil de sostener, […] por la carencia absoluta de escritores epigramáticos, […] nuestro intento ha sido que El Mago pueda ser leído aun por aquellos que no saben, se nos hallará razón para haber reunido en él, como lo haremos, la política seria, la sátira y la poesía, y adornarlo con caricaturas sociales.*[488]

Igualmente coincidió, junto a los periódicos fundados en este periodo, con la agitación política producto de las candidaturas de Vélez y Caro, lanzando constantemente vivas al primero y críticas al segundo. Los chistes sarcásticos acompañados de poesías son frecuentes. Estos son dos ejemplos:

---

[487] *El Mago*, Bogotá 1º de Noviembre de 1891. Número 1, p. 1.
[488] Ibíd.

PREGUNTA ¿En qué se parece la Regeneración a la iglesia de Guadalupe?
En que no tiene cura. […]
Pregunta El Correo: "¿Porqué es el Dr. Núñez Jefe de la Regeneración?
Si saber la verdad es su deseo,
Nosotros contestamos por correo:
Por lo mismo que un Turco es reputado
El jefe de los siervos que ha comprado.[489]

La búsqueda de impedimentos para otorgar el permiso para imprimir el periódico, la expone posteriormente Juan Ignacio Gálvez. Habiendo solicitado la autorización para publicar el 16 de nov. de 1891, el Ministro emitió una resolución para impedir la publicación, exigiendo comprobar que se cumpliera a cabalidad lo estipulado en el caso del artículo 1502 del Código Civil; es decir, que el solicitante estuviera en el goce de los derechos civiles y que tuviera más de 21 años. Ante esto, contesta que: *"¿el escritor que cumpliendo un decreto pide permiso al Gobierno para publicar un periódico, celebra algún contrato? Contéstesenos, y entonces creeremos razonable aplicar la disposición del artículo 1502 del Código Civil a los periodistas."*[490]

La imposición de la primera multa de 40 pesos tuvo su origen en un remitido publicado el 1 de Noviembre de 1891, en el cual se ventilaron asuntos privados. Antonio García López pagó por la publicación de un inserto personal contra los Señores Esguerra y Tejeira, en el cual acusaba a estos últimos de la intención de quitarle una finca de su hermana mediante engaños, siendo de propiedad de su hija menor. Dice además que, mientras revelaba los documentos con los que

[489] *El Mago*, Bogotá 8 de Noviembre de 1891. Número.2. p.5.
[490] *El Mago*, Bogotá 29 de Noviembre de 1891. Número 5. p.17.

habría de probar el engaño, hizo *"esta publicación para que la sociedad conozca a los que atenta contra la propiedad"*[491]. Posteriormente, los agraviados quisieron defenderse usando el derecho a rectificación que les otorgaba la ley, pero uno de ellos, el Señor Tejeira convino en no hacer efectivo su derecho a rectificación inmediatamente, sino en un número que posteriormente, según expuso *El Mago*, sería anunciado por el mismo.

El Ministro les impuso 40 pesos de multa el 18 de Noviembre de 1891 *"cuando además el artículo 15 del decreto sobre prensa no habla sino de cinco pesos."*[492] El periodista buscó apelar la decisión, pero el Gobierno no capituló.

> *Ministerio de Gobierno – Bogotá, Noviembre 24 de 1891*
> *Del número 3º de El Mago aparece que la rectificación que hicieron los Sres. Tejeiro y Esguerra no salió en dicho número, y como el artículo 15 del Decreto número 151 de 1888 dispone terminantemente que la rectificación se publique en el número del periódico que siga inmediatamente al día en que se reciba la explicación, no puede accederse a lo solicitado por el Sr. Juan Ignacio Gálvez G. en el anterior memorial. Comuníquese al interesado, advirtiendo que si dentro de veinticuatro horas, contadas desde las doce del día de hoy, no se hubiere consignado la multa en la oficina respectiva, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el mismo decreto. El Ministro. Antonio Roldan.*[493]

No obstante la multa impuesta, El Mago habría de continuar publicándose hasta el 10 de abril de 1892. Sin embargo, a pesar de sus críticas y mofas al Gobierno, el

[491] *El Mago*, Bogotá 1º de Noviembre de 1891. Número 1. p.1.
[492] *El Mago*, Bogotá 29 de Noviembre de 1891. Número 5. p.17.
[493] Ibíd. p. 18.

periódico no fue suspendido por ello ni multado nuevamente. Un ejemplo de sus vapuleos se encuentra en las ediciones de finales de diciembre de 1891 y comienzos de 1892, con motivo del triunfo de Núñez y Caro sobre la candidatura de Vélez en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1891. Su posición inicial sobre el tema referente, advierte un llamado al liberalismo en general, para que acudiera en paz y masivamente a las urnas como una forma de cumplir un deber. Pero esta cambió cuando los resultados le fueron adversos al candidato conservador apoyado por una gran mayoría del liberalismo radical. Los señalamientos de fraude electoral fueron libremente expresados en sus páginas:

> *En Bogotá y Cartagena, en Barraquilla y Cúcuta, en Cali y en Ibagué, Socorro y Sogamoso, y desde el Táchira hasta el Tarchí, donde no borraron a los sufragantes de la oposición, hizo la fuerza pública de las suyas, votando varias veces o ejerciendo actos de violencia sobre los electores: de seguro que comprueban que donde no había medio alguno de ganar las elecciones, no las hubo… ¡pretextos ridículos! ¡Charlatanería liberalesca! Tanta seguridad hubo en las elecciones pasadas, que, empezando por el Sr. Holguín, se ha asegurado bien en el potro de tormento del Gobierno, dándose por sucesor al Sr. Caro*.[494]

La última reconvención del Gobierno de Holguín al periódico, provino del Secretario de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca, José Vicente Concha, quien en la resolución número 1318, le ordenó al Prefecto de Policía que hiciera compadecer a su despacho a los directores de *El Mago,* y *El Barbero* para prevenirles y hacerles saber de la orden del Gobierno Departamental para sancionar con arresto de 30 días si continuaban publicando caricaturas. Aunque el

[494] El Mago, Bogotá 10 de Enero de 1892. Número 8. p. 29.

Gobierno podía ejecutar el Decreto de Prensa, al parecer, prefirió primero hacer una advertencia bajo la espera de menores críticas.

3.3.1.17. La Paz.

Multado con doscientos pesos el 21 de Noviembre con de 1891. Periódico Conservador Histórico dirigido por José Joaquín Pérez. Su primera impresión fue el 23 de abril de 1891, y su última el 5 de Diciembre. No se encontraron copias.

3.3.1.18. El Comercio.

Al igual que muchos de los periódicos que iniciaron en este año, *El Comercio* tampoco dejó a un lado la presentación de sus objetivos. Su propósito de ser esencialmente noticioso y desapasionado, pero igualmente más se demoró en expresarlo en su primer número que en adentrarse en los profundos abismos de las contiendas políticas. Hizo parte igualmente, de la novedosa aparición de diarios en 1891 como causa de la separación entre los conservadores "históricos" y los nacionalistas para las elecciones presidenciales. Con motivo de su segundo advenimiento en 1891, su director y propietario, Ignacio Gutiérrez; decía que "muchas circunstancias" habían impedido continuar con la publicación, que ya había sido multada en 1887, y que volvía porque los antiguos suscriptores insistían en tener nuevamente un periódico como órgano del comercio y de la industria. La publicación mantuvo su mismo precio de 1887: 2,5 centavos.

Pero su afiliación a las filas del Conservatismo Histórico y sus alabanzas a Marceliano Vélez hubieron de tener su origen años atrás en el seno de un mismo origen Antioqueño, en el cual, no todos los partidarios de esta corriente política fueron decididos miembros del Partido Nacional que alinderó Núñez para la ejecución de su proyecto regeneracional. De hecho, en 1887, una vez suspendido

por el Ministro Angulo a través del Artículo transitorio y discrecional "K", buscó la colaboración del Gobernador de Tunja quien le ofreció la dirección del periódico oficial del departamento llamado *La Unidad.* Gutiérrez continuó siendo un militante combativo que reconocía su propósito al decir:

> *Respetaremos y obedeceremos la autoridad, pero señalaremos sin temor sus debilidades, sus errores y sus faltas donde quiera que se encuentren. No somos rebeldes, pero tampoco turiferarios. […] Perteneciendo su Director y colaboradores a una escuela política.[…] formará, pues, El Comercio, como siempre ha formado, en las filas del Periodismo conservador, y en cuanto pueda defenderá, las doctrinas de este antiguo, glorioso partido*[495]*.*

Pero, a las similares críticas a la administración de Holguín correspondientes a las mismas bases para afianzar la candidatura de Vélez con las que era tildado el Gobierno desde los periódicos radicales, frecuentemente tocantes a los temas de compra de armas y reclutamiento forzoso de soldados; llegó a expresarle al encargado del Ejecutivo que, por lo menos, los oficiales deberían fijarse en individuos mejor preparados para la carrera militar y no "tratarlos como bestias" ante el triste espectáculo de ver a los proscritos medio encarcelados, que probablemente serían empleados como votantes; elevó una petición desde sus páginas: *"suplicamos al Gobierno que […] si han de seguir trayéndole los electores al Señor Caro, que tengan siquiera el pudor de entrarlos de noche, como lo hacían antes.*[496]*"*

[495] *El Comercio.* Bogotá, 10 de Octubre de 1891. Número.1 S.P.
[496] *El Comercio.* Bogotá, 13 de Noviembre de 1891. Número.28 S.P

Los problemas para Gutiérrez, que definitivamente no contaba con las mismas simpatías de Jorge Roa[497], cuando fue defendido por Holguín, empezaron cuando decidió publicar apartes y comentar la famosa "carta a Caro", especialmente al referirse a una supuesta expresión del candidato a la Vicepresidencia al referirse a un condiscípulo y periodista como "este señor está tocado". El Ministro Roldán, en un acto de sonada arbitrariedad, en el cual al parecer la ofensa tenía que ver directamente con el mismo, decide imponer una multa de $300 pesos al periodista, como encargado de la imprenta "La Nación" con el mismo argumento de publicar ofensas anónimas desde su establecimiento.

Pero Ignacio Gutiérrez, lejos de bajar la cabeza, bufa desde sus páginas diciendo en un artículo llamado "Peras al olmo", que en el Decreto de imprenta había encontrado en el Gobierno una renta para las elecciones. *"En menos de un mes han entrado al Tesoro público sólo por publicaciones hechas en la imprenta de La Nación $500. Nos aseguran que el señor M.A. Caro fue quien redactó el decreto citado, con el propósito de crear una nueva renta."*[498] La respuesta ante el desafío fue implacable. La Resolución número 69 del Ministerio de Gobierno expedida en Bogotá el 23 de Noviembre 1891 dice:

CONSIDERANDO:

Que el suelto que en dicho periódico lleva el mote Recolección de fondos, asume carácter subversivo al tenor del ordinal 7.º, articulo 4.º

[497] Después de la multa de $300 pesos impuesta por el Ministro Roldán, Roa vendió su imprenta La Nación al mismo Gutiérrez. Al parecer, el negocio había sido finiquitado desde antes porque, en un acto de "caballerosidad" financiera, esté último decidió devolverle este dinero. El Castigo a la imprenta "La Nación" además de las multas a los periódicos editados allí, también se evidencia en la solicitud de revisión de un contrato del Gobierno para la impresión de la "Gaceta Judicial" por requerir supuestas "mejores ediciones". También es muy probable que el autor de la "carta a Caro" fuera el mismo hermano de Ignacio, Rufino Gutiérrez, que en últimas terminaría cruentamente penalizado con el confinamiento y pagando por lo escrito anónimamente.

[498] *El Comercio.* Bogotá, 23 de Noviembre de 1891. Número.35. S.P.

del Decreto 151 de 1888 "sobre Prensa," puesto que en el se publica una noticia falsa, de la cual puede resultar grave daño al crédito del Estado, afirmando que la multa impuesta al redactor de La Paz , por delitos de imprenta, "es una contribución forzosa para la propaganda de los miembros de la imposición"

Y le impone una nueva multa por doscientos pesos más. Pero Gutiérrez, aunque alega que por no contar con los recursos suficientes no puede pagar la multa y que el Gobierno "*puede obrar como lo tenga a bien*"[499]; al final decide consignarla en la arcas del Tesoro Nacional por temor a que este tenga un nuevo aliciente para nuevas multas. Pese a las represiones, el director sigue publicando notas retadoras, algunas con mucho humor. Por ejemplo, comenta que un particular se acercó hasta la redacción para solicitar la publicación de un remitido editorial en el que se criticaba igualmente al Gobierno, pero desde el periódico le dijeron que esa publicación tendría un costo de $200 pesos en virtud de la multa que originaría en el Ministerio de Gobierno. Ante la respuesta, el supuesto ciudadano, dijo que lamentablemente tenía apenas $150 pesos, pero que la solución era llevar el escrito directamente a las oficinas del Ministro para que este le dijera cuales palabras podría suprimir y así rebajar la supuesta multa de $200, a $150 y ajustarla a su presupuesto.

También *El Comercio* se quejaba porque agentes del Gobierno estaban violando la correspondencia al no dejar que su periódico llegara a otras poblaciones. Lo comprueban cartas escritas desde Guatavita, Facatativa, Ubaté, e incluso los telegramas de los suscriptores quejándose. Por otra parte, también se sumó después de las elecciones, a las denuncias por fraude electoral que habrían de llegar hasta su redacción desde varios sitios del país, incluyendo telegramas

[499] *El Comercio.* Bogotá, 25 de Noviembre de 1891. Número.37. S.P

originales de instrucciones de los Gobernadores para la preparación de Jurados. Probablemente, estos documentos eran verdaderos, pues sobre este particular, no fue sancionado el periódico con multas o suspensiones. Este es un ejemplo de una de las numerosas denuncias, en la cual el Gobernador del Magdalena le envió un telegrama a Rafael Núñez el 2 de Septiembre de 1891, diciéndole: *"Ayer se reunió el Conejo electoral y nombró miembros de las Juntas electorales y Jueces de escrutinio individuos amigos decididos del Gobierno. Ramón Goenaga. Auténtico A. Villareal N"*[500]

Los castigos contra *El Comercio,* en Noviembre de 1891, fueron acrecentados por la valiente y osada resistencia del periodista Ignacio Gutiérrez, después del confinamiento impuesto por Carlos Holguín, valiéndose de la "ley de los caballos" a su hermano Rufino Gutiérrez, quien era su colaborador en el periódico. La consideración por el acoso a la familia Gutiérrez Isaza es llamado también desde las mismas páginas, mediante la publicación de las cartas personales que el mismo Rufino va enviando desde su travesía hacia Medellín, acompañado por su hijo de doce años a distancia, porque la escolta del ejército asignada no se lo permitía. Precisamente, cuando fue notificado de su destierro, su hermano publicó el siguiente comentario enviado por Rufino en la víspera:

> *Ya no podré ayudarte en el número de mañana, porque dentro de cuatro horas, a las tres y media, me sacarán para mi destierro, según me lo ha indicado un Oficial de Policía hace un* momento, [...] *No se atreven a darme copia de la orden del Dr. Roldán. El Gobierno teme que los amigos me hagan alguna manifestación al sacarme de día, y para evitarla me despachan antes del amanecer. [Le recomienda a su hermano] Tenga energía en el periódico, pero sea moderado en la*

[500] *El Comercio*, Bogotá 1 de diciembre de 1891. No. 41 S.P.

forma. No hable como lo hemos hecho hasta hoy, sino de lo que pueda comprobar. […] Adiós. Rufino[501]

Según un propio balance hecho por Carlos Holguín al terminar su mandato, del 7 Agosto 1888 al 7 de Agosto de 1892, fueron suspendidos un total de 7 periódicos, y multados 12 más. Las imprentas multadas fueron 5, y el valor total de las multas impuestas a los periódicos y a las imprentas fue de 2440 pesos.

3.4. LAS SOCIEDADES SUBVERSIVAS REQUERÍAN EL USO DE LA PRENSA.

Los Liberales Radicales, no obstante la vigilancia permanente del Gobierno de Holguín, no cesaban en su empeño de sacudirse del nuevo orden político de la Regeneración, aunque las disposiciones del Gobierno, prestas a andar con el fusil debajo del brazo, siempre se hicieron presentes. Para ello, reconocían la importancia vital del uso de la prensa para expandir sus ideas en el país. La llamada "Sociedad Libres de Colombia" exponía, en su tercer acuerdo sobre las bases de la cofradía, lo siguiente:

Unir a la causa del Derecho, la causa del Deber. Para en tiempos de paz hacer luz en los cerebros por medio de la prensa y la tribuna, y en tiempos de guerra inspirarnos en el patriotismo; ser infatigables en las propaganda y defensa de los principios liberales, y ardorosos, constantes y abnegados en la lucha.[502]

Las reacciones de los periódicos Conservadores ante la búsqueda de los miembros de dicha sociedad por: "*Trabajar en el sentido de establecer en*

[501] *El Comercio*, Octubre 22 de 1891. No.11 S.P.
[502] Los partidos políticos Colombianos ante el tribunal de la historia. Juicios y aspiraciones de la sociedad libres de Colombia. Bogotá: Casa editorial de M. Rivas. 1891. p. 5.

Colombia estos principios: Libertad, Igualdad y Fraternidad",[503] no fueron los únicos en expresar su rechazo. *El Relator* mismo, vocero del "Centro Nacional Liberal", se opuso ante la dicha sociedad como consecuencia de un artículo publicado en *El Colombiano* titulado "La Guerra", en donde esta fue discurrida como un medio justo para imponer los principios expresados en sus bases. Esta sociedad se consideraba "Republicana" y defensora de los principios liberales. Al parecer, sus jóvenes fundadores, Francisco Pereira Castro, Julio Galofre y Carlos Ospina Sayer, quienes también redactaban en los periódicos La Voz del Tiempo y El Gladiador, motivaban una fuerte oposición y crítica al Liberalismo Radical y a sus dirigentes, que en estos años, buscaban un acercamiento, y una oposición más mesurada, al Gobierno en manos de Carlos Holguín. La demanda de una mayor acción por parte del Liberalismo es expuesta, a manera de recriminación, y sin tapujos:

> *Si el estado actual de cosas continúa, debemos los jóvenes prepararnos para ir a los campos de batalla, a defender y combatir, en lucha fratricida, el pensamiento de los viejos andantes caballeros, jefes del liberalismo y conservatismo, que pretenden acabar su vida, junto con la vida de la patria.*[504]

Pero la dirigencia del Liberalismo Radical, fue acusada por los conservadores y liberales nacionalistas, de practicar una doble moral. Las circulares secretas enviadas a los directorios del partido en diferentes ciudades promueven una constante agitación para cambiar el "orden" de las cosas. Precisamente el rechazo a la "Sociedad Libres de Colombia" hecho público a través de la prensa, es cambiando, en secreto, por una tibia recriminación a su "impaciencia" y la promesa

[503] Ibíd.
[504] Ibíd. p. 9.

de aceptarlos en el seno del centro liberal, si llegaran a solicitar su entrada y se sometieran a su dirección.

El liberalismo radical, fue acusado como promotor de calumnias, haciendo circular noticias como el robo de los caudales públicos por funcionarios del Gobierno, mediante el uso de hojas volantes repartidas en las calles y sin la reprobación del Centro Liberal. Las acusaciones sobre las emisiones clandestinas del papel moneda fueron usadas como un arma política que permitió el asenso de la oposición, ahora desde el mismo conservatismo y su disidencia, en cabeza del General Marceliano Vélez.

En algunos periódicos liberales, no dejaroncde publicarse cartas firmadas con enigmáticos N.N y con las conocidas frases de “se dice qué” ó “se habla mucho”, referidas a la nueva oposición conservadora en Antioquia, que pretendían, a juicio de los defensores de la Regeneración, darle a las opiniones de Vélez cierta autoridad.

Las ondulaciones asumidas por el liberalismo radical son expresadas con avenencias y rechazos a las tendencias políticas de quienes ejercían el Gobierno, empujando siempre un acomodo táctico para recuperar el poder. *El Relator*, vocero del Centro Liberal, en un comienzo asumió la crítica al independentismo “traidor” de los principios liberales y su alianza con el odiado Partido Conservador. Después, celebró la llegada de Holguín al encargo ejecutivo, identificando plenamente un antagonismo político en el conservatismo, conveniente para su oposición, porque avizoraba la posibilidad de socavar el independentismo y regresar al antagonismo de los dos partidos tradicionales. Pero su propósito continuó con el apoyo al dragado del Partido Conservador y el asenso de Marceliano Vélez al poder, quizá reproduciendo la triunfante táctica política practicada años anteriores por el mismo Holguín, consistente en la alianza con el

sector disidente para consolidar el asenso. Este apoyo a Marceliano Vélez fue reforzado en 1892: "*Y el centro Liberal, de quien es órgano El Relator, ordena que la calumnia se dirija contra el grupo conservador que gobierna y no muestren sus adeptos rencor contra los independientes: ¡Son liberales¡ ni animosidad contra los velistas ¡son puros e incorruptibles!"*[505]

Los documentos presentados en el diario *La Prensa* contienen las supuestas pruebas de las conspiraciones. La llamada "Sociedad Libres de Colombia", en cabeza de Julio Galofre. En su circular número 2, del 3 de Mayo de 1891, dirigida a representantes liberales de Málaga, Santander; en donde se les instruyó sobre la conformación de Juntas secretas, la recopilación de información de personas y armas, para un levantamiento del liberalismo *"resuelto, audaz, potente y terrible, contra la dictadura regeneradora."*[506]

Las conjuras del liberalismo, que practicaba la conjugación de las dos formas de lucha, fueron excitadas grandemente al acercarse la posibilidad en 1892, de que Miguel Antonio Caro ocupara el sillón presidencial del Palacio de San Carlos. El llamado constante de la prensa radical hacia el uso de la violencia, no obstante el quebrantamiento de las leyes de prensa, fue proclamado porque, según sus redactores, *"la independencia no necesita plegarias, exige hecatombes; no quiere declamaciones, pide cadáveres*."[507] Así mismo, el Centro Liberal, en una circular fechada en Mayo 2 de 1891, y firmada por Aquileo Parra, Salvador Camacho Roldán y Luís A. Robles, hizo un llamado a sus adeptos para que utilizaran la prensa como medio para recalcar la "perversidad" del Gobierno. El redactor que

[505] Anónimo. Las pruebas de la Conspiración. Piezas tomadas del número 70 de La Prensa de 17 de Octubre de 1891. Medellín: Imprenta del Departamento. 1891. p. 5.
[506] Ibíd.
[507] *El Gladiador.* Bogotá, 9 de Julio de 1891. Citado en: Anónimo. Las pruebas de la Conspiración Op cit. p. 5.

hubo de recopilar las pruebas de la "conspiración", le recomendaba al Centro Liberal:

> *Si el centro desea restablecer honrosamente su disuelto y desmoralizado partido, debiera tratar de moralizar su prensa, desautorizando los órganos que hasta ahora ha tenido y prohibiendo la calumnia sistemática, y no excitar, como excita, a que se funden nuevos pasquines.*[508]

El llamado al Liberalismo para su preparación y unidad ante "cualquier emergencia" después de las elecciones, también implicó, además del censo liberal, la publicidad a través de la imprenta de sus ideas y de sus proyectos. Para este propósito, y según el punto 4º de la circular, era necesaria la creación de un fondo común destinado a sostener las publicaciones. En esa dirección, se mantuvo en Bogotá el trisemanario *El Relator,* con el propósito de convertirlo en diario, a cargo de un sobrino y un hijo de Felipe Pérez. Las recomendaciones del Centro Liberal a los redactores de periódicos Liberales en Bogotá contenían en su punto 5º, la publicación reiterada de los males y de los abusos de la Regeneración, en preeminencia sobre las alusiones a las luchas partidistas y situaciones del pasado, ya que pretendían concentrar la atención en el desprestigio al Gobierno, en virtud de una unión con la disidencia conservadora de Vélez:

> *No debemos desalentar a los antes adversarios que ahora quieran unirse con nosotros, ni mostrar un espíritu de rencor que sirva de vínculo de unión entre las dos fracciones de nuestros adversarios. La cuestión fiscal, los abusos, por no decir otra cosa, cometidos en los contratos oficiales, el exceso de las contribuciones, el despilfarro de*

[508] Ibíd. p. 9.

los gastos, son a nuestro parecer, la brecha más amplia por donde se puede hacer el ataque. El respeto a la libertad de imprenta debe ser, por ahora, el primer tema, el grito popular del partido liberal. Conseguida ésta, se tendrá ya una buena base de operaciones. Esta libertad es la cosa más odiada por los "hombres providenciales", pero es uno de los lados más débiles de su programa; en el que es más fácil obtener prosélitos en sus propias filas, que luego, quizá podrían engrosar las nuestras. Rogamos especialmente, que en nuestro periodismo se omitan las denominaciones radical o independiente. No debemos reconocer más que Liberales.[509]

Las circulares del Centro Liberal, que en 1891 se difundieron con instrucciones sobre la manera de proceder de los liberales en el País; mantenían, en general, lineamientos idénticos, especialmente soportados en la necesidad de incorporar a los militantes del liberalismo en listas municipales, pero sin la especificidad de una preparación para las elecciones, ya que ninguna de estas comunicaciones habla de los electores disponibles o aptos en cada distrito, sino de los "Liberales" en general. Este proceder provocó la mayor de las suspicacias en el Gobierno, especialmente porque las restricciones y requisitos a los sufragantes limitaban su número. Luego, la elaboración de listas con individuos no sufragantes bien podría emplearse para reclutar combatientes en una futura sublevación. El otro lineamiento habitual en estas manifestaciones era la urgencia por conformar un fondo común para la subvención de las publicaciones impresas. Pero, no obstante, las constantes acusaciones sobre las presuntas subversiones, Holguín no encarceló a ningún radical, ni desterró a nadie.

[509] Ibíd. p. 13.

Los discursos emanados del Centro Liberal estuvieron, en estos meses de 1892, cargados de doctrinas incendiarias. Julio Galofre, escribió en Enero de 1892, refiriéndose a la defensa de los diarios amigos del Gobierno, que: *"El Centro Liberal, que se encuentra apoyado en doscientos mil ciudadanos, y una juventud valerosa y resuelta que pudiera lanzar a la guerra si ese fuera su móvil, proseguirá su labor confiando en la justicia y en la grandeza de nuestra Patria"*[510]

La legislación existente mantenía las leyes de facultades extraordinarias vigentes; especialmente "la ley de los caballos", como espada para enfrentar los alzamientos armados. Al finalizar el mandato de Holguín y al inicio del de Caro en 1892, se debatió intensamente la necesidad de suprimirla en la Cámara de Representantes por el Congresista Luis A. Robles. La positiva conservación de la paz en dicho periodo motivo la defensa de esta posición, que fue controvertida por Martínez Silva con el argumento de su eficacia en la prevención de las guerras civiles y que la mejor manera de derogarla debía tener como argumento el no uso de la misma, producto de la paz. Pero mientras el radicalismo continuara con el desacato, el desconocimiento a la nueva Constitución y las conjuras con posibilidad de subvertir el orden, a juicio de Martínez Silva, era imprescindible la ley. La unanimidad de la votación, 59 en contra y 6 a favor de la derogación, reflejaron que la situación política amenazaba aún la obra regeneradora.

Carlos Holguín se valió de la "ley de los caballos" solamente en tres ocasiones. La primera de ellas, ocurrió recién posesionado en 1888 y su uso, al parecer arbitrario, no tuvo como causa la posible alteración del orden público, sino la persecución personal en cabeza de un tal Cleónico Benítez[511] a las nietas del General Santander y a toda la familia Suárez Lacroix. Aunque esta ley discrecional fue

[510] GALOFRE, Julio. Páginas negras de la Regeneración. Op. cit. p. 15.
[511] Este señor, al parecer no estaba confinado ya en 1892, porque que publica un anuncio en el Periódico El Relator de Bogotá el 19 Enero de este año, inquiriéndole a un tal "Daniel Rueda de Bucaramanga o Rionegro, que le pague los muebles que me compró cuando estaba de novio."

utilizada para amparar la situación de una familia en el plano estrictamente personal; Holguín se excusó en la necesidad de tomar dichas facultades como última medida para evitar una muerte. Benítez fue confinado a Boyacá (o a Santander) para la tranquilidad de la familia, encabezada por un adversario político del mismo Presidente. El Dr. Roberto Suárez, liberal radical, no vaciló en agradecer la intervención y el uso de la tantas veces criticada Ley 61 de 1888, e incluso el Artículo 28 de la Constitución, al Presidente encargado; *"providencia que no hubiese sido más protectora si mi padre estuviera ocupando el lugar que usted"*[512]

La segunda ocasión fue en Abril de 1890, *"por motivos de conveniencia pública"*[513] y tuvo como fundamento la inminente perturbación del orden público en el Cauca y en Antioquia, y el confinamiento durante varios meses al ultra conservador "histórico" Carlos Albán. Las causas que motivaron a Holguín a tomar esta medida estaban sustentadas en ciertas juntas que Albán venía organizando, según palabras de este último, *"para cambiar el actual orden de cosas, por medios pacíficos",*[514] pero que al ojo del Presidente encargado, y en vista de que dichas reuniones se llevaban a cabo con personas reprochables para el Gobierno, despertó la sospecha de un plan subversivo a la luz del abandono de su lugar en el Tribunal de Cundinamarca para efectuar un viaje, iniciado el 16 de Junio de 1890, hacia Popayán.

La firme actitud de Holguín aducía que *"tratándose de la conservación del orden haré siempre uso de los medios legales de que dispongo para prevenir, antes que esperarme a tener que emplear la fuerza para reprimir. [...] lo que hay de cierto es*

[512] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro, Op. Cit, p.893
[513] *Diario Oficial* número 8035 citado en: ALBAN, Carlos. Denuncio que contra el Presidente de la República eleva Carlos Alban al Congreso de 1892. Cali: Imprenta de Eustaquio Palacios. 1892. p. 7.
[514] Ibíd. p. 3.

que el orden no lo dejo subvertir ni por liberales ni por conservadores." [515] Sin embargo, el Presidente encargado escatimaba las pruebas presentándolas directamente al Gobernador y negándose a hacerlas públicas. Albán, quien habiendo sido militar al servicio de la regeneración, negó rotundamente los cargos de conspiración, llegando a publicar un libro de acusación en 1892, en el cual instiga al Presidente para que hiciera entrega de las pruebas.

La crítica es conducente, según Albán, en cuanto a derecho, por cuanto la ley otorgaba al Presidente la facultad para prevenir y reprimir, pero no para Juzgar. Además, según la misma Ley 61, las decisiones deberían haberse tomado previo Consejo de Ministros que, según Alban, no se llevó a cabo. La publicación de su defensa, fue realizada porque; *"el deber exige que defienda la verdad, que defienda mi libertad y mi honra; porque la verdad me ordena buscar los medios pacíficos y legales para cambiar el orden de cosas que se ha establecido contra mí",* [516] y en ella alega que el propósito del Presidente era, habiendo terminado su cargo de Senador, impedir la posesión ahora de Asambleísta del Cauca.

Esta orden discrecional fue exacerbada por el hecho de que el Ministerio de Guerra, confesó que nada tuvo que ver con la disposición de encarcelamiento de Albán, quien hubo de permanecer por orden de Holguín en el Cauca, cuando solicitó un permiso el 13 de octubre de 1891 para salir hacia Estados Unidos, y que le fue otorgado bajo la consignación de una fianza de $10.000 pesos, que a la postre sería cobrada a Antonio Mosquera por incumplimiento, ya que Albán no había salió del país todavía en febrero de 1892. La persecución y confinamiento a Carlos Albán fue permanente desde abril de 1891 hasta febrero de 1892. Incluso, en 1891 las instrucciones de Holguín seguían impartiéndose:

[515] Ibíd.
[516] Ibíd. P. 7.

Bogotá 3 de diciembre de 1891.

Sr. Julio Velasco – Cali.

Retenga a Alban hasta lunes o martes en que debe seguir a Buenaventura para seguir fuera si él lo quiere, y si no, permanecer allí confinado. Dígale así a Sinisterra. Amigo, Carlos Holguín.[517]

La tercera vez que se valió de la Ley 61 de 1888, también fue para expulsar fuera de Cundinamarca a un periodista conservador llamado Rufino Gutiérrez en 1891 y confinarlo, primero a Medellín y después a Yarumal. Escritor en el periódico conservador "histórico" *El Comercio* de Bogotá, junto con su hermano Ignacio, Rufino fue acusado de conspiración, pero su pena fue ejecutada sólo con órdenes verbales. Dice Rufino Gutiérrez que la notificación le fue hecha llegar por dos funcionarios de la policía y que, cuando este solicitó una copia escrita de ella, fueron a pedirla pero regresaron sin nada, y aunque estos dos funcionarios se mostraron muy amables con él; comentó que no pudieron hacer la notificación por escrito porque *"teme[n] atraerse las iras de San Carlos si deja[n] una línea escrita sobre el atropello que conmigo se comete.[…] No se atreven a darme copia de la orden del Dr. Roldán."*[518]

A las tres de la mañana fue sacado Rufino Gutiérrez de su residencia en Bogotá por un teniente de la policía y un agente de la misma, junto con el Capitán Clemente Barrera del Ejército. Le prohibieron el acompañamiento de un hermano hasta Facatativa. Sin embargo, un hijo pequeño partió al otro día y logró escoltarlo durante todo el viaje hasta Medellín, pero de lejos porque el dicho Capitán no permitió una mayor cercanía. Al referirse al motivo para permitir que su propio hijo

[517] Ibíd. p. 24.
[518] *El Comercio.* Bogotá, 22 de Octubre de 1891. Número.11. S.P.

hiciera el trayecto, Gutiérrez escribió: *"Quiero que Gregorio aprenda a ser hombre y a querer a su partido sufriendo por el"*[519]

Después de arribar a Medellín, a Gutiérrez le es ordenado un nuevo confinamiento a Yarumal. La causa de esto, según su hermano, se debe a que en Medellín, Rufino se proponía fundar un periódico llamado "Boletín Industrial" para apoyar la candidatura Vélez-Ortiz. Sobre las causas del castigo, fue publicada una entrevista hecha por otro periódico: *La República* de Medellín a Rufino Gutiérrez sobre las razones para su confinamiento. Este dice que, desde su llegada a Bogotá como delegado del Directorio de Antioquia, Holguín lo persiguió. Cuando su hermano Gregorio fundó *El Comercio*, el Gobierno se dio cuenta que Rufino podría comprobar hechos graves que comprometerían la honorabilidad de los "Caristas" de la capital y de los Departamentos. Dice, el periodista, que el Gobierno pensó que con la multa los callaría, a pesar de ser familia muy pobre, pero no fue así. Las únicas razones dadas por este fueron:

> *Dizque no había agradecido o había olvidado la benevolencia con que me había tratado el Gobierno, y que estaba sirviendo de centro a agitaciones peligrosas para la tranquilidad pública. […] Estas eran las razones que el Ministerio de Gobierno daba al Gobernador de Cundinamarca. A mí se me hizo una simple notificación verbal. […] El Gobierno es tan sumamente impopular en la capital, que temió que a pesar de mi insignificancia, el incalificable abuso que estaba cometiendo con migo pudiera provocar entre mis amigos y copartidarios una manifestación que pusiera a las claras esa impopularidad de que goza.*[520]

[519] *El Comercio*, Octubre 23 de 1891. Número.12.
[520] *El Comercio,* Bogotá, 24 de Noviembre de 1891. No.36 S.P

Dice además, que la causa principal fue que el Gobierno de Carlos Holguín quería congraciarse con Rafael Núñez persiguiendo a los conservadores históricos, y al parecer, el peligro de una conjura durante el periodo, provino mayormente de la facción histórica del Partido Conservador que del mismo Partido Liberal Radical. Las sanciones a periódicos y a periodistas ilustran que este riesgo se vio ampliado con el anuncio de los contendores presidenciales para las elecciones de finales de 1891.

3.4.1. La inminencia de la permanente conjura subversiva.

En 1895 se conoció un documento redactado por Avelino Rosas en el cual, para contrarrestar las numerosas acusaciones hechas por un grueso número del liberalismo radical, y afianzar el compromiso perenne hacia su partido, luego de ser tildado como traidor al movimiento; el revoltoso personaje intenta demostrar su compromiso con los movimientos subversivos que, desde la perdida guerra de 1885 se llevaron a cabo en Colombia por parte del radicalismo. Por ejemplo, en una carta, de la cual dice tener los documentos originales, fechada en Junio de 1886 y dirigida desde el anonimato, se le encomienda la organización en los municipios del Valle de la segunda y tercera división de liberales de manera clandestina. Las misivas son cuidadosas en no especificar los nombres de los protagonistas. No obstante, Rosas les recuerda, presentando las circulares correspondientes, que él mismo fue encargado como Presidente de la primera junta del centro liberal con un acta redactada el 20 de Junio en 1887 y con la organización de 86 designados en diferentes comisiones. Aducía que la lista no la podía dar a conocer, *"ni puede figurar aquí aún, porque a nadie se le oculta que esto sería sentar a todos los liberales que la suscribieron ante un permanente tribunal de sangre."*[521]

[521] ROSAS, Avelino. Notas políticas o sea diez años de regeneración. Op. cit. p. 8-9.

El recuento de los hechos suscitados es muy diciente sobre las continuas agitaciones al interior del radicalismo. Rosas, en calidad de alto dignatario de la conjura de 1887, contaba cómo fue encargado para tratar de convencer a Sergio Camargo de que hiciera frente a un nuevo alzamiento armado. Pero, este se negó aduciendo quebrantos de salud y cansancio ante tantos intentos malogrados. Igualmente sucedió con Aquileo Parra quien. en carta fechada el 15 de Julio de 1887, explicitó que los pensamientos guerreros del ala radical contrastaban con los suyos: *"La manera como usted piensa que debe procederse a la organización del partido, si bien difiere de la que yo propuse en Bogotá, no por eso me parece menos aceptable"*. [522] La decepción de los revolucionarios que esperaban en Bogotá el éxito de las susodichas comisiones fue grande, *"y la chispa fundió los electróforos de aquella sencillísima rueda de engranaje reaccionario."*[523]

Aunque Rosas reconoció que después de 1887 se abrieron *"seis años de abatimiento para el tristísimo pueblo Colombiano. [...] periodo donde quiera, vacilaron sus esperanzas"*[524]*,* no por ello podría pensarse que el radicalismo se hubiera quedado cruzado de brazos. Por el contrario, lo que demostró fue que hasta después de 1892, las figuras del liberalismo no pudieron encontrar la unidad requerida para el inicio de un levantamiento armado que, como hemos visto en algunos escritos, no dejaba de azuzarse desde algunos periódicos y desde la conformación de sociedades de juventudes liberales que reclamaban a los, llamados a menudo, "oligarcas del partido" un mayor compromiso con la acción. Probablemente el ascenso de dichas generaciones de jóvenes a la primera plana nacional junto al desplazamiento de los directores tradicionales, coincidió con la gran represión ejercida por Caro.

[522] Ibíd. p. 11.
[523] Ibíd. p. 12.
[524] Ibíd. p. 15.

Mientras esto ocurría, la prensa periódica continuaba con su labor de atizar el fuego del inconformismo, burlando las medidas legales de represión ora con la publicación de noticias alarmantes, de desprestigio o acusadoras contra el Gobierno, ora con hojas burlescas, de humor con el propósito de ridiculizar. Muchas de estas publicaciones no se atrevían a imprimir más de un número porque sabían de antemano la sanción que acarrearían, sin embargo, la representatividad de diseñarlas en forma de periódico, es decir, con un nombre, un slogan y una numeración que denotara periodicidad, era constitutiva para el señalamiento de la supresión de las libertades, no obstante fueran efímeras. Existieron muchos ejemplos, de los cuales no se conservan copias, al parecer por la orden de recoger y botar algunos. Pero, los que sobrevivieron fueron incorporados con el tiempo a colecciones particulares que poco a poco fueron enriqueciendo la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Colombia. El propósito de subvertir el orden y las leyes dispuestas, implicó para quienes originaron las impresiones, toda una serie de actuaciones clandestinas que empezaban con la misma contratación de la imprenta, la distribución callejera o clandestina, hasta la espera de la medida del Gobierno para contrarrestar el acto. Tal vez por ello, Holguín prefirió en muchas ocasiones hacer tabla rasa de esta agitación aumentada durante su gobierno y soportar impresiones como *El Derrumbe* y muchas otras.

De este periódico solo se conserva un número y no aparece como sancionado. Se refería a sí mismo como *"órgano de la degeneración*" y no tiene el nombre de su redactor, director ni imprenta, como demanda el Decreto vigente sobre imprenta. Dice que para suscripciones entenderse con el Agente General, Sr. Carlos Vergara Esguerra; y el ejemplo de cómo constituía su humor mordaz contra el Gobierno era de este talante:

CANDIDATURAS PARA PRESCINDENTE DE LA RES-PUBLICA

De 1892 a 1892 Señor Doctor Rafael Núñez

Para Vicepresidentes: de 1892 a 1898 Señor Miguel Antonio Caro.

De 1898 a 1904 Señor Jorge Holguín
De 1904 a 1910 Señor Ignacio Holguín
De 1916 a 1922 Señor Hernando Holguín y Caro. (Continuara)[525]

Le dice al Gobierno autocensurando irónicamente la

Oprobiosa reacción liberal, […] excitamos con respeto, pero fervorosamente al Gobierno, para que haga uso de las facultades extraordinarias y se deje de escrúpulos: que reclute a todo bicho viviente, suspenda periódicos, destierre – si es necesario- a los oposicionistas que quieran votar (o conspirar que es lo mismo)[526]

Publica cartas inventadas bajo títulos como este:

Boletín reaccionario [...] *Telegramas. Servicio especial de El Derrumbe. Cartagena, Octubre 24. Señor redactor de el derrumbe.*
En vista de las pruebas que de la opinión esta palpando el Doctor, tiene la íntima impresión de que ninguno de sus conciudadanos excusaría colgarlo hoy, con motivo de su Santo. [...] Señor Director. Aquí liberales conspiran. Aunque están en vergonzosa minoría, levantan adhesión al Centro con muchísimas firmas, se inscribirán en

[525] *El Derrumbe*. Bogotá, sábado 21 de Noviembre de 1891. No. 6 p. 21.
[526] Ibíd.

listas, votarán, están haciendo representaciones a la junta electoral. ¿Qué hacemos? Manden armas, municiones y plata. Su copartidario, Nicomedes Delgado.[527]

Los sacudones al Gobierno de Holguín, fueron acrecentados al final de su Gobierno por sus dos frentes opositores con motivo de los comicios electorales para la elección de Presidente y Vicepresidente para el periodo de 1892 a 1898. La búsqueda de temas acusatorios, tales como las emisiones clandestinas hechas desde el Banco Nacional, los malos manejos en la adjudicación de contratos, especialmente de ferrocarriles, la imposición de la pena de muerte para asesinos, las acusaciones por favorecer a Caro y los fraudes electorales; fueron la comidilla de los publicistas opositores hacia finales de su mandato. Tanto así, que cuando el Presidente habría de dirigirse a un voceador para comprar periódicos, este, conocedor de las polémicas desatadas, le decía: "cómprelo don Carlos, que hoy le dan muy duro."[528]

[527] Ibíd.
528 POSADA ARIZMENDI, Ignacio. Presidentes de Colombia. Op. Cit. p. 182.

4. ENTREGADOS AL DESPRECIO

> “Parece que la impotencia de derribar por las armas un gobierno honrado y justo, hubiese sugerido la idea de matarlo con veneno.”
> Miguel Antonio Caro. Chapinero, 1893.

Miguel Antonio Caro, gran seguidor de normas, de letras menudas, de reglas gramaticales, y con una preocupación, que sería latente durante la administración que recién empezaba en 1892; por mantener una imagen de austeridad y obediencia a la ley, no bien había asentado el lomo en el sillón presidencial, cuando presentó tres proyectos de ley al Congreso con el objeto de darle un mayor orden al inicio de su mandato, pero principalmente para reconocer en Rafael Núñez un Presidente electo y funcional. El primero, tenía el propósito de conceder una autorización al primer mandatario de la República, para ejercer el Poder Ejecutivo en cualquier punto del territorio nacional en caso de conmoción interior. El segundo artículo del proyecto, autoriza al Presidente electo para tomar posesión de su cargo en el lugar de su residencia en el que se encuentre, en cualquier lugar del país y no solamente en Cundinamarca, y con el simple requisito de dos testigos. Este proyecto de ley fue aprobado el 16 de septiembre de 1892 con el título de Ley 12 de 1892, del 15 de septiembre de 1892 y sancionado por el Presidente del Senado, José Domingo Ospina Camacho, y el de la Cámara Adriano Tribín.

Posteriormente, Núñez toma posesión de acuerdo a la ley nueva, en Cartagena el 29 de Septiembre de 1892 y le dice a Caro que lo hace "*De acuerdo a la Constitución y Ley respectiva, y cediendo al deseo de V.E*."[529]

El tercer proyecto de ley presentado por Caro era de ciudadanía excluyente. Fue una solicitud para no rebajar las condiciones de incompatibilidad de requisitos para ser Senador, tales como la riqueza. La continuidad del Gobierno de las altas esferas de la sociedad es un requisito también para el mantenimiento del orden social. En palabras de Caro:

> *Las reformas constitucionales, aún cuando sean buenas en sí mismas, ofrecen algún peligro como antecedente favorable al espíritu de innovación que crónicamente nos ha aquejado; y como por otra parte no convendría suprimir del todo aquellas incompatibilidades, justas dentro de prudentes límites, creo que bastará templar el rigor de algunas interpretaciones*.[530]

Previamente, y aduciendo motivos de salud, Rafael Núñez había renunciado a la Presidencia el 16 de Agosto de 1892 ante el Senado, pero la comisión encargada de estudiar el caso, en cabeza de Jorge Holguín y Juan V. Pérez Soto, habrían de expresar que, no obstante el ejemplo del Presidente por "*formar una escuela de desprendimiento en que se forme y se temple el carácter de la Nación entera"*[531] y además, intuyendo que los argumentos de esta acción también tenían que ver con un discurso expresado por Núñez, en el cual expuso las razones por las cuales no había de venir a Bogotá a tomar posesión de su cargo; acción justificada por los Senadores:

---

[529] *Diario Oficial*. Bogotá 27 de Octubre de 1892. Número. 8965. p. 1393.
[530] Ibíd.
[531] *Diario Oficial*. Bogotá 6 de Septiembre de 1892. Número. 8914. p. 1161.

Era porque se proponía hacer acto de humildad, subordinación y desprendimiento, no con discursos, ni con artículos de periódicos, sino con palpitante ejemplo. […] La América entera verá que en Colombia no gobierna un caudillo sino la Constitución y las leyes. [y no le aceptan la renuncia porque:] *¿Cómo desprendernos del padre cariñoso de tan bella obra, cómo privarnos de sus sabios consejos? […] El Senado de Colombia, por altas razones morales y políticas, cree que no debe aceptar la renuncia que del Cargo de Presidente de la República ha hecho el excsmo. Sr. Dr. D Rafael Núñez* [532]

Desde el mismo mensaje de posesión expresado en el Palacio de Gobierno el 7 de Agosto de 1892, como Vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo; Caro anunció en su discurso dirigido a los ciudadanos de la República, su intención de permitir el debate público intervenido por medio de la prensa, *"con la garantía de que el gobierno seguirá con atención las manifestaciones de la opinión, y acogerá las indicaciones que fueren fundadas y convenientes."*[533] Sin embargo, también fue enfático en afirmar que no habría de permitir una confusión del ejercicio del derecho con el abuso de la libertad; pues aducía que la opinión y los debates políticos no debían hacerse ni con odios ni con envidias, y menos con injurias. Prevenido contra la oposición, fue igualmente enfático en afirmar que solo permitiría la organización de directorios políticos, a pesar de su opinión, de que ellos no eran más que unos enfermizos simulacros de gobierno, y que:

Más aunque no tengan ánimo deliberado de turbar la paz, no por eso dejan esos artificiales organismos de sembrar la intranquilidad y la alarma por el misterio en que se envuelven, por los empadronamientos que levantan y tributos que cobran, bajo la sanción

532 Ibíd.
533 CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op cit. p. 23.

futuro de lo que llegue a ocurrir en un campo político; por las esperanzas que despiertan en agitadores, que no conciben empresas platónicas.[534]

La referencia de Caro al recientemente organizado Centro Liberal, que en su intento por organizar nuevamente las huestes descarriadas de su partido, pretendía una unificación de mando y una constitución afianzada como tribuna axiomática, hacia finales del periodo de Holguín; desde el periódico *El Relator,* cuando este fue reorganizado por Diego Mendoza Pérez y Raúl Pérez, preparando la llegada del Ex Presidente Santiago Pérez. Este, al llegar nuevamente al país, hubo de disponer una organización más centralizada, publicando enormes listas de liberales firmantes en el periódico desde todos los rincones de la Nación. Al parecer, Caro dio muestras desde el inicio de su gobierno, de su temor por los nuevos aires organizativos del liberalismo radical, que no eran para dejarse como una cuestión superflua.

4.1. CARO Y LA PRENSA

Los debates al interior del organismo parlamentario estuvieron cargados de discursos en pro y en contra. Igualmente ocurrió con la Ley 61 de 1888 llamada "de los caballos" que fue prolongada como medida cautelar desde el mismo Congreso. Precisamente en 1893, el gran defensor de la ley fue Carlos Martínez Silva, quien había apoyado la candidatura de Vélez contra la de Núñez para la Vicepresidencia de Colombia. Contaron dentro de las filas defensoras de la mencionada ley, también con el Representante Pío Claudio Gutiérrez y Gerardo Pulecio, y en su Principal contradictor al Representante Ospina Camacho, antiguo Ministro de Núñez y defensor del Partido Nacional. La tesis de los defensores tuvo

[534] Ibíd. p, 25

asidero en las continuas conjuras y posibles levantamientos armados del radicalismo. Los males derivados de la prolongación de dicha ley, a juicio de sus defensores, siempre habrían de ser menores que los ocasionados por la falta de medidas preventivas para conjurar el "monstruo" de la guerra. La defensa de la necesidad de continuar con dicha ley, provenía según sus defensores, de los mismos artículos Constitucionales 27 y 28, en los que se permitía consagrar el principio de que, en casos excepcionales, se podían castigar ciudadanos sin necesidad de instruir sumarios ni seguir juicios. Igualmente, como consecuencia de este principio, habrían de contar las leyes de policía con medidas preventivas.

Además, el código penal vigente en 1893 facultaba a los funcionarios de policía para que, en el caso de que el denunciado no diera muestras de buena conducta, impusieran confinamiento hasta de diez miriámetros de distancia, sustentándose en que la policía no debía esperar a que se cometiera el delito para prevenirlo.

Con este modelo los defensores de la Ley 61 de 1888, no concebían que el Presidente de la República, como primer ciudadano, tuviera menores facultades que un funcionario de policía para darle seguridad al país; recordando que "*La conservación del orden público es de mayor importancia que la del individuo."*[535]

La invocación a la defensa del orden como supremo medio para conseguir el avance de la Nación, encuentra en Miguel Antonio Caro una mayor intensidad. Para el gramático, toda actuación que no encajara dentro de sus paradigmas y dogmas, no era otra cosa que una agitación y una búsqueda del rompimiento de este equilibrio. Igualmente, la restricción a la prensa fue una manera de controlar el desorden, que sin embargo, era considerada por la oposición como una medida dictatorial. En una alocución el 20 de Julio de 1893, llegó a expresar: "*se protesta*

[535] Compilación de Artículos publicados durante la administración Caro. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre., 1893. p. 192.

contra una ley que no tiene aplicación sino cuando el desorden asome, como si no aterrase la perspectiva del desorden sino la perspectiva de la represión."[536]

Las maneras religiosas doctrinarias al interior del pensamiento de Miguel Antonio Caro no estaban guardadas en lo profundo de sus intenciones. Por el contrario, las recurrentes expresiones introducidas en el lenguaje del Gobierno para establecer una diferencia con los radicales fueron comunes desde el inicio de su administración. Por ejemplo, expresaba que su partido, el Partido Nacional, era practicante de una religión producto de la enseñanza de Núñez, que por ser un hombre superior en inteligencia, consiguió elevar la práctica de la prensa a una verdadera "religión del respeto".[537]

Precisamente, desde una dirección mayormente rigurosa implantada por Caro para el mantenimiento de la "moral y las buenas costumbres", el Gobierno inició una serie de acciones que no habían sido llevadas a cabo tan evidentemente durante el periodo de Holguín y el de Núñez. La misma investidura para que la autoridad eclesiástica se pronunciara sobre las publicaciones expresada en el Decreto 151 de 1888 y posteriores, fue muy tenida en cuenta con el inicio de la Administración Caro.

Un ejemplo del aumento de la injerencia del Clero en el asunto de la prensa, se puede evidenciar cuando el Gobernador del Cauca, Primitivo Crespo, le solicitó al Ministro de Gobierno, José Domingo Ospina Camacho, la aprobación para tomar mayores medidas contra un periódico extranjero editado en Nueva York y llamado *El Progreso*[538], que según este, se encontraba violando el Decreto 286 del 29 de

[536] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. cit., p. 41.
[537] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Imprenta Caro y Cuervo, Bogotá, 1991. p, 12
[538] Este periódico se consideraba extranjero por ser editado en Nueva York por Ramón Verea, pero pertenecía a la más criolla extirpe del liberalismo radical Colombiano. En 1893, el Indio Uribe envió sus escritos redactados desde Medellín, poco antes de ser desterrado nuevamente.

Marzo de 1889, que en su Artículo 1º es claro al prohibir la venta de periódicos extranjeros cuando fueran perjudiciales "*a la paz pública, al orden social, o a las buenas costumbres."* [...] *y que dicho periódico ha sido igualmente prohibido por la autoridad eclesiástica, como profundamente corruptor y contrario por lo mismo a las buenas costumbres y el orden social"* [539]

La orden inicial de prohibir la circulación del citado periódico fue ordenada el 2 de Abril de 1893, pero fue necesaria una nueva resolución el 21 de Julio dando instrucciones precisas de cómo los agentes distribuidores debían manejar las remesas de la publicación llegadas a sus oficinas. Estos deberían informar, en el término de una hora, el número exacto de ejemplares recién recibidos, y hacer firmar los datos exactos en una planilla por los empleados postales. El propósito del Gobernador era no permitir que ningún ejemplar de este periódico pudiera quedar circulando en el territorio nacional.

El Presidente Caro, aunque pretendió no contestar ni inmiscuirse en polémicas con la prensa contestando sus arremetidas desde los periódicos subvencionados, a pesar de reconocer en ellos un recurso valioso para el Gobierno por su carácter explicativo y defensor de los actos de la Administración Pública, comentaba hacia 1894, que aún no había tomado parte en ese tipo de debates, no obstante los consejos de muchos amigos. Sin embargo, en ocasiones no resistió los numerosos ataques provenientes de la que llamaba, "prensa incendiaria", y soltaba sus redacciones desde el anonimato. Desde su alta posición de Magistrado veía con desprecio a sus contradictores políticos que no dejaban de caricaturizar sus rasgos autoritarios desde los periódicos. El mismo habría de reconocerlo cuando decía que:

[539] *Diario Oficial.* Bogotá, 25 de Julio de 1893. No. 9,218 p,857

> *No hay medio más adecuado y poderoso que la prensa periódica para el bien como para el mal. Para ilustrar como para extraviar las masas [...] para enaltecer el carácter nacional como para envilecerlo, poder muy grande para causar males cuando no existen sólidas obras de defensa social.*[540]

Caro siempre defendió los Decretos de imprenta, antes de la promulgación de la ley de 1896, como simples extensiones del reglamento de policía, que estableció una simple suspensión y una multa sin tocar a las personas.[541] Y, bajo este parasol, su disgusto con la prensa opositora ni siquiera habría de tener nuevas consideraciones, especialmente con quienes ya habían quebrantado la ley de imprenta, e incluso fue culpado de hacer extensiva estas prohibiciones a donde llegaban los desterrados.

Este fue el caso del mencionado Alfredo A. de Guzmán, quien después de haber sido suspendido cuando publicó *El Precursor,* hizo parte de los exiliados fuera del país a finales del Gobierno de Carlos Holguín que buscaron refugio en los países fronterizos. Costa Rica fue uno de los destinos preferidos al colindar con el Departamento de Panamá, y hacia allí marchó Guzmán para tratar de fundar un periódico a finales de Agosto de 1892, en compañía de Salomón Cortes Palacios.

Pero el Gobierno Costarricense les prohibió el periódico y les ordenó que salieran del país, según Guzmán, sin ninguna causa. Por eso, le escribieron una carta fechada el 13 de Octubre de 1892, al Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia con el propósito expreso, de que este condujera las acciones para tratar

[540] Carta al director de *El Progreso,* 19 de Marzo de 1897. Citado en: CARO, miguel Antonio. Escritos políticos. Op. Cit. p. 297.

[541] Los ciudadanos serían tocados por el código penal vigente o por las leyes extraordinarias que eran de uso discrecional del Poder Ejecutivo. Caro siempre alegó que no era culpa del Ejecutivo que el Congreso no hubiese querido votar la ley especial de prensa y que esta se llevara acabo tantos años a través de los Decretos Ejecutivos.

de resarcir los daños y pedir explicaciones por lo ocurrido al Gobierno de Costa Rica. La contestación del Ministro Marco Fidel Suárez, fue explicada un año después, el 23 de Agosto de 1893, mencionándoles a los periodistas un telegrama enviado por ellos mismos al diario *La Prensa* de ese país y que fue comunicado por el Gobierno Costarricense al Colombiano. Guzmán dice en dicho telegrama: *"Errónea interpretación hace creer salimos desterrados por orden Gobierno. Protestamos de esto. Si salimos del país es porque lo convenimos así."*[542]

Si el propósito de Guzmán era crear un incidente diplomático desde la perspectiva de dos venganzas: una, al Gobierno Colombiano por perseguir y sancionar sus violaciones a las leyes de imprenta, y otra al Gobierno Costarricense por cerrar su periódico; fue muy probable que el Ministerio de Relaciones exteriores de Colombia no hubiera acogido la queja que demandaba una restitución monetaria a un agitador radical como Guzmán, quien recibió esta lacónica respuesta, cuando residía en El Salvador: *"El Gobierno colombiano no puede entablar reclamación alguna contra el de Costa Rica, pues el usa de su derecho perfecto al impedir que ustedes usurpasen derechos políticos que no corresponden al extranjero."*[543]

La restricción a la prensa desde el punto de vista del Gobierno de Caro no permitió dudas en cuanto a su justificación. También, el favoritismo de algunos miembros de la regeneración hacia los propietarios de imprentas fue expresado de manera extraña con una indemnización otorgada a Nicolás Pontón por haber sufrido daños en su empresa en el año de 1867. El mencionado impresor, fue víctima en 1867 de persecuciones por parte del radicalismo. La causa de las molestias radicales tuvo como origen la publicación de las propuestas aprobadas por la Cámara de Representantes sobre el desarme del vapor "Rayo" y la averiguación de las

[542] *Diario Oficial.* Bogotá, 7 de Septiembre de 1893. Número. 9,256. p. 1010.
[543] Ibíd.

correspondientes responsabilidades, por lo que fue objeto de la destrucción de varios objetos de la imprenta de su manejo y la expropiación de otros.

Mediante la ley 54 de Noviembre de 1894, le fue concedida una indemnización del Tesoro Nacional por un valor de 5,000 pesos. Esta ley, fue firmada por el Presidente del Senado, Antonio Roldán, el Presidente de la Cámara de Representantes, Narciso García Medina, el Secretario del Senado, Camilo Sánchez, y el Secretario de la Cámara de Representantes Miguel A. Peñaredonda, junto a Miguel Antonio Caro y Miguel Abadía Méndez (Ministro del Tesoro); en virtud de *"que la publicación de tales documentos revistió carácter de gran trascendencia para la salvación de la República; y Que [sic] por tales motivos hasta hoy no se le ha reconocido nada, y además ha llegado a un estado de pobreza con numerosa familia que hace indispensable que la Nación acuda a cumplir con un acto de estricta justicia"*[544]

Al igual que en los años anteriores, los juicios por calumnia e injuria instaurados por particulares, protegidos bajo las leyes del código penal, y especificados en el Decreto 151 de 1888, sobre prensa; fueron escasos quizá aminorados por la agitación política que acaparaba la atención de la sociedad; pero también por la costumbre arraigada de los bogotanos de contestar las ofensas con otras publicaciones, antes de acudir a las leyes. Pese a esta situación, los casos entre particulares a veces requerían de la intervención del Gobierno.

El Procurador General de La Nación, José Vicente Concha, fue llamado a opinar sobre un caso entre dos particulares por el delito de Calumnia e Injuria. La situación se originó cuando Federico Pinzón demandó a Paulino Rosas ante el Juez 6º del circuito de Bogotá, quien ya había declarado sobreseído el asunto en

[544] *Diario Oficial.* Bogotá, martes 4 de Diciembre de 1894. Número. 9,645 p.1165.

un auto del 16 de diciembre de 1893. Pinzón apeló el auto ante el Tribunal, y por consideración del Dr. Alejandro Motta, Juez superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en la Sala de lo Criminal. Este tribunal confirmó el sobreseimiento el 7 de Marzo de 1894.

Pero Pinzón continuó considerando ilegal la resolución del Tribunal, y acusó ante la Procuraduría al Dr. Motta *"por haber quedado comprendido por cinco veces en el artículo 540 del Código Penal, y, por siete veces, en el artículo 194 del mismo código."* Los Párrafos señalados por Pinzón en los que se le infieren Calumnia e injuria contienen apreciaciones de Paulino Rosas sobre las malas actuaciones y la mala fe de Pinzón en el ejercicio de su profesión de abogado. Uno de ellos es el siguiente:

> *a) Pretendiendo siempre obtener derechos personales por cualquier medio, ha acostumbrado el Señor Federico Pinzón servirse de las oficinas judiciales para ver de realizar con cierto tinte de legalidad, las lucubraciones de su ingenio; y cuando por desgracia para el, tropieza con personas que no sean susceptibles de engaño o de temor, lleva su audacia hasta pretender cogerlas en las redes de las disposiciones del código penal. Tal ha acontecido en el asunto a que se refiera el escrito que va en seguida.*[545]

Los siguientes 3 enunciados expresan que hay Jueces que no se dejan influenciar por sus amenazas e influencias, y que sus procedimientos son ridículos cuando el mismo Pinzón toma a su cargo su defensa. Según Rosas, el propósito de hacer esta publicación es dejar exhibido ese asunto así "*no lleve al conocimiento de la*

[545] *Diario Oficial.* Bogotá, 20 de Mayo de 1895. Número. 9,755 p.345.

sociedad nada nuevo respecto de la opinión que ella tenga ya formada sobre mi contendor"[546]

Concha dice que, por ser las palabras de Rosas publicadas por la prensa periódica, la ofensa reviste el carácter de pública y no de privada, que hubiese sido el caso si el escrito le hubiese sido llevado al Juez. La disposición citada por Pinzón contra el Magistrado Motta, dice Concha, no fue actuada en contra de la ley, porque *"la generalidad de los términos en que está concebida la disposición […] no permite distinguir, en tratándose de escritos, calumnias o injurias presentados en juicio, los publicados de los que no hayan sido"*[547]

Concha termina diciendo que, al leerse lo dicho por Rosas, no se pueden ver reunidos los términos referidos de calumnia o injuria tan plenamente como para calificar como ilegal la declaración del Juez sobre los delitos como no existentes; y las providencias de Motta son abundantes, según Concha, en establecer que los conceptos que Pinzón mira como calumniosos no se refieren a casos concretos, que es una condición para agruparse en dicho carácter, y que las que acusa de injuriosas, tampoco encierran el sentido que el acusador se empeña en atribuirle. El acusado es muy inteligente para insultar sin calumniar. Por ejemplo cuando dice" *La notaría y los juzgados encierran documentos preciosos para hacer su biografía completa, si ello fuere menester."*[548]*; n*o existe ni injuria ni calumnia porque ni insulta ni miente. El Procurador Concha termina diciendo el 5 de Abril de 1895, que el Magistrado Motta no faltó a ningún concepto legal ni constitucional al confirmar el acto de sobreseimiento dictado por el Juez.

[546] Ibíd.
[547] Ibíd.
[548] Ibíd.

Desde que asumió el poder. Miguel Antonio Caro hizo un esfuerzo mayúsculo para no volver a redactar desde los periódicos. Obviamente, le fueron adjudicados numerosas defensas de su Gobierno, desde las publicaciones conservadoras, por lo que tuvo que intervenir para evitar que su nombre estuviera en manos de los diferentes articulistas. En una carta al director de *El Telegrama,* le explicaba las razones para tomar la decisión de intervenir por la prensa, aludiendo que la razón de la guerra de tinta y papel, por tantos años desatada en Bogotá, requería de una especie de desarme, y tal vez a la sazón, una tregua. Pero, anotaba que, "*es preciso que sea simultáneo, y la experiencia me enseña que no todos oyen consejos"*[549]*,* Pero al parecer, tampoco estaba dispuesto a dar el primer paso: "*Mas en la guerra periodística, como en todo linaje de guerra, al propio tiempo que se deplora la contienda ya encendida, sería injusto desconocer quien sería el responsable por vocación, y de parte de quien está la razón y la justicia en el fondo de la cuestión que se debate."*[550]

Su espíritu de lucha era incapaz de reconocer parcialidades en el partido de Gobierno, por eso, procuró siempre rodearse de funcionarios civiles y militares de su mayor lealtad y confianza. Sus esfuerzos se vieron encaminados a sopesar el, según Caro, interés individual de los conservadores "históricos" que habían llevado a la "defección" de muchos de las filas de la regeneración; para no ver alterada la "serenidad" del Gobierno. Sin embargo, si hubo una característica que perpetuara la obra de Caro en el Gobierno, no fue precisamente el sosiego. Su actitud firme se tradujo en poco tiempo en ofuscación permanente, ante los constantes intentos por subvertir el orden público en el país, de parte del partido liberal radical, pero que habría de arrastrar a los "históricos" en el señalamiento de culpabilidades.

[549] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. Cit. p. 67.
[550] Ibíd.

Los escándalos de corrupción de altos dignatarios del Estado en el manejo de los caudales públicos y la celebración de contratos, tales como el "petit panamá" o el de los ferrocarriles con la compañía Punchard en Antioquia y el de la paralización del ferrocarril de Santander, ventilados fehacientemente desde los periódicos bogotanos; eran para Caro la bandera enarbolada de otra revolución; porque, esperaba que la sociedad le creyera su espíritu de obrar con justicia recta.

También esperaba que los representantes del gobierno obraran con una obediencia y subordinación apropiadas para el mantenimiento del orden. Desde el mismo ingreso al servicio público, consideraba que los funcionarios debían cooperar dentro de un orden jerárquico y no prestarse para perturbaciones díscolas. Es decir, no podía admitir dentro del Gobierno, incluyendo a todos los empleados públicos, ciudadanos con corrientes políticas contrarias. Este pensamiento de Miguel Antonio Caro, lejos de ser una consecuencia de un profundo análisis hermenéutico, fue una constante directa en sus discursos y sus cartas. Para él, el mundo incluyente de la libertad dentro del orden no tenía otros matices que el color del partido nacional.

Su molestia hacia la prensa opositora, se acrecentaba cuando esta se lanzaba a considerar cualquier acción del gobierno para contrarrestar la perturbación del orden público, como practicas dignas de una dictadura. Por ejemplo, después de la asonada de Enero de 1893 en Bogotá, el radicalismo lejos de aprobar la acción del gobierno para proteger los bienes de los ciudadanos, se apresuraron a incorporar en el "martilogio político" [551] a los pocos agitadores desterrados.

Los constantes intentos de revolución del partido liberal radical, habrían de llevar al Presidente Caro a un mayor encerramiento de sus ideas de participación

[551] Ibíd. p.95.

política, exclusivamente para quienes estuvieran de acuerdo con la Constitución de 1886. Su racionamiento habría de encontrarlo legítimo y lógico a la hora de hacerse el de la vista gorda ante las constantes acusaciones de fraude electoral emanados desde la prensa opositora. Además, la consideración de un partido "ilegal" que con frecuencia hubo de organizar guerras civiles con el propósito de acabar con su Gobierno, no le habrían de permitir pensar en una apertura a la participación de sus contradictores al mismo. El término referente a la "combinación de formas de lucha", que se hizo popular en los movimientos guerrilleros afianzados durante la "guerra fía", mantuvo en Colombia, hacia finales del Siglo XIX el mismo propósito que se acentuaba con el círculo vicioso de la negación del nuevo orden establecido por la regeneración por parte del radicalismo, y en el desconocimiento de las plenas garantías electorales por parte del Gobierno. Esta última actitud hubo de ser puntualizada por el Presidente Caro:

> *¿Cómo se concibe que ese partido, mientras maquina contra todo lo existente, esté pidiendo con cierta altivez, como quien defiende indescriptible derecho, la libertad electoral? En todo país constituido los derechos políticos emanan de la ley, están subordinados al orden legal; y quien desconoce la fuente, no puede reclamar, ni se le ocurre reclamar, lo que de ella emana.*[552]

El enlace entre el elemento subversivo y la prensa no tuvo, en el pensamiento de Caro, motivo de titubeos o dudas. No solamente por el hecho de haber sido el mismo quien manejó el asunto desde los primeros Decretos Presidenciales, especialmente el 151 de 1888, impidiendo al mismo tiempo desde su trabajo en el Congreso, cualquier proyecto de ley de prensa que socavara la rigidez con la cual habría de regirse la materia hasta el ejercicio de su mismo gobierno desde 1892

[552] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. cit. p. 223.

hasta 1896, año en que fue instaurada la ley de prensa; sino también porque experimentó en sus años de Gobierno, el frecuente reclamo por una mayor laxitud con la prensa, especialmente de parte de los periodistas de oposición, muchos de los cuales, luego habrían de ser encontrados inmiscuidos en las conspiraciones, bien como miembros de comandos urbanos, como Diego Mendoza Pérez, o bien desde los mismos campos de batalla, como en el caso de Rafael Uribe Uribe o del Doctor Liborio Cantillo.

> *Las cuestiones sobre legislación de imprenta se tocan y penetran con las de orden público, y no por otro motivo han sido tratadas con apasionamiento deplorable y bajo falsos supuestos. [...] En esta tierra de Colombia habíase erigido en dogma y en sistema político la justificación del mal y la inocencia de los delincuentes en cuanto apareciesen amparados por las letras de molde*[553]

El fortalecimiento de las instituciones llamadas a impedir el desorden público también habría de mantener, en el periodo de Miguel Antonio Caro, un pertinaz adoctrinamiento, enaltecimiento y publicidad al interior de los mismos estamentos del Gobierno. A la compra de una moderna imprenta para el uso de la Policía Nacional en 1893, se sumó la adquisición de una igual para el Ejército Nacional y el establecimiento de un periódico en 1896.

El 13 de Noviembre de ese año, mediante Decreto número 667, el Presidente Caro decide la creación de un periódico para el Ejército, con el propósito de "*levantar la institución militar, vulgarizando los conocimientos teóricos del arte, censurando los procederes incorrectos de la fuerza pública y estimulando la*

[553] Ibíd. p.101.

conducta meritoria de los leales."[554] La necesidad de un auto reconocimiento del ejército desde un órgano publicitario que hubiera de facilitar el cumplimiento de las ordenes, Decretos y Resoluciones emanados desde el Ministerio de Guerra, además del reconocimiento ejemplarizante de las labores de sus miembros, sería impreso con el nombre de *Boletín Militar y* con una tirada inicial de 1,500 ejemplares. Los cajistas encargados de la imprenta tendrían el nombramiento de subtenientes, y el Director debía contar con los conocimientos generales del arte de la guerra y de sus tácticas. Además, fue nombrado un "revistero", que en realidad era el redactor principal, enarcado de revisar los acontecimientos ocurridos en el interior y el exterior del país, además de ser "*cronista de sucesos históricos dignos de recordarse como ejemplo de virtuosos rasgos militares"*[555]*,* y quien contaría con el cargo y sueldo militar de Sargento Mayor. El Gobierno, por medio de licitación, se encargaría de la provisión de papel y tinta para la imprenta del Ejército.

Otro factor que influyó significativamente en las actuaciones del Presidente Caro con la prensa, tuvo que ver con su misma personalidad intransigente y apasionada. De hecho, desde el afianzamiento de la regeneración, constantemente fue llamado al servicio público desde el Poder Ejecutivo e igualmente rechazó estos ofrecimientos. Su personalidad requería de constantes viajes de sosiego a los pueblos cercanos a la capital, pero no de un alejamiento de su ciudad natal hacia tierras lejanas como servidor diplomático. Varias veces rechazó estos cargos, incluso el de Ministro de Gobierno ofrecido por Carlos Holguín el 19 de Junio de 1888 en una carta personal, quien hubo de usar numerosos argumentos para tratar de convencerlo, incluso la petición expresa de Núñez. Caro habría de rechazar todas las ofertas hasta su propia llegada al poder; cuya candidatura vicepresidencial también trató de evitar en 1891. Las razones para rechazar el

[554] *Diario Oficial.* Bogotá, 18 de Noviembre de 1896. Número. 10,186 p.1107.
[555] Ibíd.

Ministerio en 1888, fueron expresadas a su hermana Margarita, esposa de Holguín, en una carta fechada el 24 de Junio de ese año, en la cual desnuda la faceta más común de su personalidad.

> *Carlos me escribe [...] porque me necesita en el ministerio de gobierno (¡que tu conoces!); que ha despachado sin Pizano durante quince días y ha visto que la cosa es fácil (¡!). [...] ya tu sabes lo que es eso; y yo no tengo ni la consagración ni la paciencia, ni la tolerancia, ni las otras virtudes que se necesitan para ese martirio; tampoco le convendría al gobierno ni a Carlos que yo fuese como Hércules a barrer los establos de Augías del partido conservador: -Lidia con fieras con quien hombres lidia- Creo que me darás la razón.*[556]

4.1.1. LA IMPORTANCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECTIFICAR.

Las maneras represivas de Holguín se empezaron a diferenciar de las del nuevo Presidente encargado. Miguel Antonio Caro, recién posesionado en Agosto de 1892, expidió un nuevo Decreto en Diciembre de ese mismo año, con el propósito de que la rectificación del periódico que publicara noticias falsas o incompletas de documentos oficiales, fuera hecha de manera inmediata. El **Decreto No. 315 del 9 de Diciembre de 1892** impuso en un único artículo, la autorización para que los Ministros y los Gobernadores obligaran a las publicaciones, que hubieran de imprimir noticias falsas de carácter subversivo, a su respectiva corrección. *"Todo periódico que reciba una rectificación oficial, está obligado a publicarla sin demora y a su costo, en sus propias columnas, bajo pena de suspensión temporal"*[557]

[556] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. Cit. p, 326

[557] *Diario Oficial*. Bogotá, 19 de Diciembre de 1892. Número. 9018. p.1641.

La necesidad de un Decreto que tuviera cabida dentro de las mismas disposiciones vigentes de las normas del 151 de 1888, por cuanto la publicación de noticias falsas que afectaran a un individuo le correspondía la misma rectificación en el número siguiente; explican que, no obstante el poder discrecional para suspender el impreso o multarlo; era más importante para el Gobierno la rectificación de lo publicado. La prensa radical, en aras de su altruismo subversivo, habría de esperar con estoicismo y sacrificio de mártir, las suspensiones, multas y destierros, no solamente para mostrar una estadística elevada de represión a las libertades, sino para ofrecer a la opinión un ejemplo más de la persecución a la prensa.

La rectificación de una noticia falsa dentro del mismo periódico que la producía, haría recaer la culpa en la misma publicación, menoscabando su credibilidad. El Decreto nuevo explicaba, además, que los Ministros y Gobernadores podían llevar el texto o los documentos que debía insertar el periódico.

Es muy probable que las suspensiones y demás medidas coercitivas le hayan valido un alto costo para el Gobierno, puesto que el propósito de someter a las leyes a sus antagonistas políticos, terminó provocando una nueva estrategia de oposición; con la prensa como depositaria del martirio de un Gobierno que usaba las leyes para que no se expresaran en contra de él.

Un ejemplo de lo peligroso que para el Gobierno se había convertido la publicación de noticias falsas, se evidenció un mes antes de la imposición del mencionado Decreto. El reclamo ante el Ministerio de Gobierno fue elevado por el encargado del Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marco Fidel

Suárez, ante la publicación de algunas noticias en el periódico *El Trabajo*[558], que a juicio del Gobierno, afectaron el buen nombre y los intereses del país.

Dijo el periódico, en primer lugar, que el Ministro de Colombia en Washington, protestó tardíamente contra la aplicación de la ley Mc Kinley a la importación de productos Colombianos en los Estados Unidos y que el Ministerio de Relaciones exteriores presentó al Senado de la República un tratado hecho con los Estados Unidos en el cual, en vez de tomarse las medidas recíprocas imponiendo derechos especiales a las importaciones de la Unión Americana, estas se declaraban libres de todo impuesto; pero que el Senado no aprobó dicho tratado.

Ante esto, aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores, que el Gobierno de Colombia no había celebrado tratado alguno con el de los Estados Unidos y que la correspondencia entre el Señor Hurtado, Ministro en Washington, y el Secretario de Estado de Estados Unidos, sobre la reciprocidad comercial no había sido publicada y que por lo tanto, la prensa carecía de datos para hacer calificaciones sobre este aspecto. Lo único, dijo el Ministro, que el Gobierno había tratado de inducir en el Congreso, fue una votación favorable para introducir franquicias a favor de artículos extranjeros que provenían de Alemania, Francia, la Gran Bretaña, Estados Unidos, y otros países con los que Colombia tenía relaciones comerciales,

> *Piensa el Gobierno que dado el estado de la negociación referente a la ley Mac Kinley, esas autorizaciones le podrían ser útiles, siempre que se realizaran ciertas condiciones, para evitar a la agricultura y al comercio colombianos las penas que aquella ley les acarrea. [...]Pero es claro que las autorizaciones no se usarían sino en el caso de que*

[558] Ibíd.

quedasen en salvo nuestros derechos, y siempre que no nos abrigásemos a privilegiar a ningún país.[559]

Por otra parte, decía el Ejecutivo que, debido a que las gestiones del Gobierno ante el Senado habían sido tratadas en sesión secreta, la publicación de *El Trabajo* no solamente era falsa sino irregular, ya que lo dicho tenía una reserva especial.

En segundo lugar, afirmaba *El Trabajo,* que el Gobierno de los Estados Unidos pensaba, utilizando la fuerza, abrir los puertos Colombianos que habían estado cerrados con motivo del brote de cólera. El Gobierno alegando la falsedad de la noticia, expuso que lo único que el Gobierno Norteamericano había presentado era una nota de protesta que aún no había sido publicada, y que en ningún caso podría ser contraria a los intereses de Colombia.

Además, como dichas noticias habrían de ser muy perjudiciales si se dejaran correr sin la respectiva rectificación, la queja ante el Ministerio de Gobierno tuvo sus efectos. De hecho, la resolución de este Ministerio fechada el 10 de Octubre de 1892, le ordenó al director de *El Trabajo,* la publicación en primera plana del documento completo emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el número siguiente.

Otro ejemplo, fue originado nuevamente en *El Relator.* Santiago Pérez regresó al país decidido a enfrentar al nuevo Gobierno de Miguel Antonio Caro con todas sus armas políticas. A la organización del "Centro Liberal", se sumaron las acusaciones desde su periódico, iniciando la guerra de tinta con Carlos Holguín, y el enfrentamiento a la paciencia del nuevo Presidente encargado. De hecho, no

[559] *Diario Oficial*. Bogotá, 14 de Octubre de 1892. Número. 8952. p, 1333.

habiendo calentado aún el solio del Palacio de San Carlos, el Gramático Presidente empezó a evidenciar las molestias con lo publicado.

Desde los meses de Julio de 1892, el mundo entero empezó a experimentar una verdadera calamidad originada en una epidemia de cólera cuyo efecto expansivo se llevó a cabo a través de la entrada al puerto de barcos infectados. El Gobierno de Colombia extremó medidas para no permitir la entrada de vapores de ciertos países, especialmente de Europa, en los cuales se había empezado a tener noticias de la llegada de la enfermedad. Sin embargo, cuando se registraron los primeros casos en la costa caribe, la alarma extendida hizo eco en las decisiones del Gobierno. Sirviendo de base además, para que algunos periódicos, entre ellos el mencionado; con su infundada licencia permanente para criticarle al Gobierno lo bueno o lo malo que sucedía en el país; hubiera de expresar que las providencias dictadas en relación con el Cólera Asiático eran *"un pretexto para hacer la nueva emisión rechazada por el país en masa."*[560], motivando la inmediata reacción de Caro.

El mismo día de la publicación, el Gobierno le respondió que, no obstante su permanente intención de explotar el peligro de una calamidad pública para endilgarle al Gobierno cosas que aún no había hecho; las medidas que implicaban todas las perturbaciones comerciales "*y por lo mismo un quebranto fiscal que forzosamente ha de tomar en cuenta el legislador para nivelar los presupuestos, y que sería infinitamente mayor si la peste penetrase en nuestro territorio diezmando nuestra escasa población"*[561], eran del ámbito del Gobierno en procura de las mejores decisiones para el país. Por otra parte, el hecho de que el mismo periódico se contradijera, cuando publicaba noticias alarmantes de la epidemia, y al mismo tiempo criticaba los correctivos del Gobierno, hablaba, a

[560] *El Relator,* Bogotá, 29 de Septiembre de 1892.
[561] *Diario Oficial*. Bogotá 30 de Septiembre de 1892. No. 8938. p.1269.

decir del Gobierno, de su carencia de patriotismo y de su mal carácter moral, con la Nación: "*el Gobierno, faltaría a su deber si la dejase correr sin el debido correctivo oficial."*[562]

Por eso, el mismo Presidente encargado Miguel Antonio Caro, le ordenó a *El Relator* la inclusión de una nota aclaratoria redactada por el mismo, por tres días seguidos, e igualmente ordenó la misma inclusión en todos los periódicos bogotanos en una circular hecha llegar a cada uno de los directores con la condición de: *"Sírvase usted acusar recibo de la presente circular, y remitir a este Ministerio el número de su periódico que compruebe haberse cumplido la orden que comunico."*[563] Con ello, quedaba claro que un periodo de tratamiento más severo a la prensa opositora, quedaba instaurado con la llegada del nuevo encargado del Poder Ejecutivo.

Pero las medidas contra la prensa, en Miguel Antonio Caro, no empezaron en 1892 con la severidad con la que habría de tratarla en 1894y en los años posteriores. Incluso a finales de 1892 y durante 1893, los periódicos de oposición arreciaron su crítica política al Gobierno y a las actuaciones de los empleados públicos. Pero, a medida que avanzaba su administración, también se dinamizaban los escándalos ventilados en la prensa. Además, el partido Liberal Radical, mediante una creciente organización en la que recogía y publicaba firmas a manera de una gran encuesta nacional, mantenía latente el deseo de subvertir el orden político de La Regeneración para tomar el poder. La combinación de las formas de lucha, es decir, la crítica política expresada a través de la prensa y la organización en un partido definido con adeptos, fue coordinada por debajo la mesa, con una estrategia armada que prontamente habría de ser desmantelada.

[562] Ibíd.
[563] Ibíd.

4.1.2. LA DEFENSA DESDE EL CORREO NACIONAL.

A comienzos de 1893 regresó al país Don Santiago Pérez a ponerse al frente de la dirección de *El Relator*, ante la muerte de su hermano Felipe, que venía siendo orientado por sus propios sobrinos. La llegada del ex presidente radical encontró asidero nuevamente en el periodismo de oposición, arreciando las críticas a la recién terminada, administración de Carlos Holguín. Pero la resistencia que habría de encontrar, férrea y sin dilación, provendría, no exclusivamente de la aplicación de las leyes de imprenta, sino del apropio personal de Holguín desde *El Correo Nacional*.

Los ataques de Pérez tuvieron que ver con el manejo de los caudales públicos por parte del Gobierno, y con las reminiscencias negativas que expresó a la luz pública sobre las actuaciones de Holguín durante su mandato. Las respuestas, cada vez con tonos más elevados de parte de este, se basaron en el señalamiento de las variaciones al ejecutar la política radical en tiempos de aquel. Sus errores políticos fueron visiblemente rotulados y amplificados, buscando resquebrajar la credibilidad moral del ex presidente radical para hacer críticas a la regeneración, y señalando la injerencia, no desautorizada desde *El Relator*, de las calumnias al Gobierno hechas por otras publicaciones, con la omisión de la censura de las ofensas, cuanto más, tratándose de la voz oficial del Directorio Liberal Radical.

La diatriba comparativa entre las obras de la administración de Pérez con las de los años corridos de la regeneración; hubieron de recorrer el camino, desde la república ahora en paz, pasando por la reconciliación de la iglesia y el Estado, hasta el halagüeño porvenir y el progreso moral y material de la Nación. El descrédito de Pérez, según Holguín recayó en su calidad de jefe de un partido político que requería del uso de la prensa para recuperar el poder perdido, y para

ello se valió del demérito de la regeneración y de sus protagonistas; más allá de su opinión estrictamente personal.

Precisamente, el asenso de Caro al poder, luego de ganar las elecciones motivó el señalamiento, de Santiago Pérez desde El Relator, al confinamiento hecho por Holguín, de acuerdo con las facultades extraordinarias de la Ley 61 de 1888, de los miembros "Velistas" opositores; Carlos Albán, en el Cauca y a Rufino Gutiérrez, en Antioquia. Pero estas resoluciones fueron ejecutadas meses antes del tiempo de elecciones, y cuando estas se efectuaron, los dos estaban libres. Probablemente el propósito del Gobierno, al acusarlos de Agitadores, era apagar el fuego de la división entre los "Históricos" y los "Nacionalistas".

La referencia permanente a las conjuras subversivas fue retratada con las palabras específicas, por parte de Holguín en sus respuestas a *El Relator*. Señalaba como la intención del radicalismo, en sus continuos ataques desde la prensa, provenía de su designio de mantener una constante agitación en el país. *"[Si] ya no se puede hacer la guerra a balazos, predominen la inquietud en los espíritus, la desconfianza en todo. Que el orden no se consolide*." Y, respecto al uso que hacen de ella y de la cacareada mordaza a la prensa, les dice que:

> *Ningún hombre honrado podrá creer que se hable de falta de libertad y de amordazamiento en un país en donde se cuentan por centenares las hojas periódicas que han visto la luz desde que impera la Regeneración. Pero, como lo que se busca no es la libertad sino la impunidad y el libertinaje, los partidos revolucionarios no se darán por satisfechos mientras haya posibilidad legal de obligarlos a respetar algo.*[564]

[564] HOLGUÍN, Carlos. Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Op. Cit. p. 162.

4.1.3. SANTIAGO PÉREZ Y SUS INSTRUCCIONES AL CENTRO LIBERAL.

A la continua argumentación sobre las maldades de la regeneración y al estado de miseria y de abandono en que, según Santiago Pérez, se encontraba el país en 1893, le hizo también, unas consideraciones sobre la guerra al directorio liberal. En primer lugar, dice que, no obstante las sublevaciones ya iniciadas, como la del mitin de artesanos en Bogotá, una guerra sería contraproducente porque estaría a merced de los excesos producidos por turbas incontrolables, pero que también, lo que sería más preocupante, era la falta de una planificación unificadora del liberalismo, que la llevaría irremediablemente al fracaso. La sugerencia de Pérez conservaba la disposición para protestar de la manera más respetuosa posible. *"pero constante y universal contra sus injusticias, si no se quiere que, con la ruina de los caractéres [sic], debida a la indiferencia general, se borre hasta la memoria de las libertades públicas."*[565]

El afán de Pérez constituyó una muestra de su premura por desestabilizar a toda costa el poder del Gobierno; socavando con el tema de las facultades extraordinarias y con el del amordazamiento a la prensa, un constante escándalo que implicara un costo a su uso. Hizo un llamado para que los dirigentes departamentales no permitieran que la flama se achicara, a pesar de que existía una indiferencia general, así lo reconoció, hacia aquellas disposiciones del Gobierno. El propósito de atizar constantemente, y de la manera más respetuosa posible, podrían indicar dos cosas: La primera, que el estado de postración del radicalismo era tal, que requerían del sostenimiento de dos ideas contra el Gobierno y que por esta misma causa, era urgente remachar sobre el tema para causar mayor disgusto. La segunda, que las leyes de prensa, constituían una

[565] PÉREZ, Santiago. Nota a los directores del partido Liberal en los Departamentos. Bogotá: S.N, 1893. p. 14.

herramienta altamente efectiva para el Gobierno, ya que les alertaba sobre un mayor nivel de precaución a la hora de expresar sus planes.

La explicación de unos ciudadanos apáticos hacia la reacción, ante tantos males del Gobierno, sostenía Pérez, tenía su origen en que este les tenía tan dominados, que les había hecho perder hasta la noción de su libertad. Sin embargo, el término "libertad", bien podría mantener un significado diferente para el ciudadano de a pie, y otro para los Directores del Partido Liberal. Esta discordancia falaz en la recepción del mensaje, podría haber sido la causa de la queja de inacción, de la cual Pérez hacía constante gala. De hecho, la precaución hecha a los Directores sobre un levantamiento armado, tenía que ver, más bien, con el incumplimiento de un ciclo que hasta ahora se proponía empezar De igual manera, por la primigenia carencia de armas y de organización.

Las suspicacias hacia el Director de *El Relator,* no estaban fundadas solamente en su carácter de dirigente de "El Centro Liberal", sino en que su militancia estaba marcada por su decidido apoyo a las antiguas rebeliones radicales. Producto de su "historial", la constante sospecha del Gobierno era materializada con frecuentes requerimientos, incluso hacia su familia. Además, Pérez tampoco hacía alardes de inocencia, ni de sumisión al Gobierno de Caro.

4.2. EL "BOGOTAZO" DE 1893

Dentro del afianzamiento del "Orden" instaurado durante el ejercicio del encargo Presidencial de Carlos Holguín; se encontraba la reorganización de la policía en 1891. La comisión, encargada al especialista francés Marcelino Gilibert, no solamente pretendía la modernización de este cuerpo y una organización más centralizada, sino también un organismo de control moral y de vigilancia política. En este punto, la concordancia con Rafael Núñez, en cuanto a las maneras de

lograr este afianzamiento del orden provenían; por un lado, del cambio de las instituciones, y por otro también del cambio, llamado por Eduardo Posada Carbó, "*el mundo valorativo de los Colombianos"* [566] *,* referente a las tradiciones intelectuales obsoletas que era necesario deslegitimar, tales como el uso de la guerra civil como medio y al mismo tiempo, el afianzamiento de un sistema moral emanado desde el sentimiento religioso.

La organización de una policía secreta desde el mismo seno del cuerpo armado ejerció un nuevo control sobre la población bogotana, que en ocasiones consistió en un control difuso desde la misma comandancia. Aunque en 1887, el cuerpo de policía en Bogotá se redujo a la mitad; de 100 agentes se pasó a un cuerpo conformado por 50, por orden del Gobernador del Departamento; teniendo como razón que el Gobierno Nacional había retirado el auxilio para ayudar al pago (a cada hombre se le pagaban 24 pesos mensuales), y que tuvo su origen en una falta de recursos del Tesoro. Para remendar el faltante, 35 Agentes de las oficinas fueron sacados a patrullar las calles. El crecimiento de la policía secreta se evidenció desde 1889 a 1892. Por ejemplo, en un informe solicitado por el Gobernador Jaime Córdoba al director de la policía en 1889, no solamente se evidenciaba un desconocimiento del número y funciones de la fuerza encargada de afianzar el nuevo orden y de impedir conspiraciones. Su alcance debía servir, al mismo tiempo, al Gobierno, al Poder Judicial, a las autoridades administrativas y a la ciudadanía. Bajo esta estructura, reportaba Epifanio Morales, comandante de la policía, el 26 de mayo de 1889, 2 jefes, 7 oficiales y 105 agentes, de los cuales, solo 3 ejercían como agentes o detectives secretos. Estos; Leonidas Neira, Miguel Gamba y Ramón Labra Melo, también tenían como función desplazarse a los municipios cercanos a Bogotá.[567]

[566] POSADA CARBÓ, Eduardo. El desafío de las ideas. Ensayos de historia intelectual en Colombia. Op. cit. p.109.
[567] A.G.N. Sección República. Fondo Gobernaciones. Tomo 2.

Pero aún en 1892 la policía presentaba fallos organizativos. De hecho, José Domingo Peña, comandante en ese año, le comentaba al Ministro de Gobierno que desconocía el funcionamiento de la Policía Secreta y que tampoco tenía control sobre ella. Esta condición tendió a generar una sección altamente ágil e "irresponsable", sobre todo cuando algunos personajes adquirieron poder en Bogotá como comandantes de la Policía, y cuando se estableció que los agentes no podían ser llamados a juicio por actos desempeñados durante el cumplimiento de su funciones. [568]

La vigilancia de la policía hacia los sectores de gran pobreza llevaba implícita una reestructuración moral de las costumbres llamadas "licenciosas" tales como la prostitución y las chicherías. En 1893, la población Bogotana se calculaba en 135 mil personas,[569] muchas de ellas hacinadas en viviendas en los cerros orientales, y la mendicidad y la pobreza contrastaban con el enriquecimiento de la élite beneficiada con la bonanza cafetera y el progreso económico. La situación de extrema pobreza era sumamente preocupante, especialmente cuando el Gobierno consideraba candidatos a un "amparo de pobreza" a los ciudadanos con un ingreso menor a 200 pesos anuales; es decir, 16 pesos mensuales. Vivir con o.50 centavos diarios (lo que podía valer un periódico) originaba enormes situaciones de conflictos sociales. El control urbano era incómodo y con la llegada de Caro al poder, la iglesia católica enfiló aún más sus baterías desde los periódicos para señalar estos problemas culpando a los artesanos.

De hecho, el 14 de enero de 1893, mientras Miguel Antonio Caro se encontraba veraneando en Ubaque, y el mando del Poder Ejecutivo había quedado en manos del Ministro de Gobierno y encargado también del Ministerio de Guerra, Antonio

[568] URREGO, Miguel Ángel. La regeneración (1878-1898), Op cit. p. 432.
[569] CORDOVEZ MOURE, José María. Reminiscencias de Santafé y Bogotá. Op cit. p.1543.

Basilio Cuervo; en el periódico *Colombia Cristiana*[570] fue publicada una serie de artículos de José Ignacio Gutiérrez Isaza[571] titulados "La Mendicidad".

El motín Bogotano de 1893, provino del levantamiento de los sectores pobres de la ciudad y, al parecer, tuvo como combustible la publicación del mencionado artículo, en el cual, Gutiérrez señalaba que el estado de mendicidad y de hacinamiento en el que se encontraba la mayoría de esta población, era producto de los vicios de los Artesanos y sus familias, quienes no se preocupaban por el ahorro; y no por los bajos salarios ni por el desempleo. Gutiérrez propuso una mayor reglamentación del juego y de las chicherías que probablemente hicieron eco en una mayor vigilancia policial.

Miguel Antonio Caro defendió las medidas tomadas después del "Bogotazo" de 1893 como si estas hubiesen sido de la mayor suavidad posible. Esto, llegó a decir, porque las leyes extraordinarias le permitían al Gobierno atenuar las leyes de delitos comunes. Por estos hechos, según el código penal vigente en 1893, se podrían haber señalado hasta ocho años de presidio a quienes se hubieran visto envueltos en motines y asonadas, y los cabecillas se harían responsables de todos los delitos de cuyo autor no hubiera sido posible establecer la identidad. Decía Caro, que si se hubiera aplicado el código penal y no las leyes de facultades extraordinarias, las personas implicadas en los hechos, hubieran sido condenadas sin que el Gobierno hubiese tenido facultad para indultarlas. La razón por la cual solo fueron confinados unas pocas personas era demostrativa, según Caro, de

[570] Este periódico iniciado con motivo de la conmemoración de los 400 años del descubrimiento de América, inició labores el 12 de Octubre de 1892, y su último número, el 76, fue impreso el 8 de Julio de 1894.

[571] Ignacio Gutiérrez Isaza, escritor y editor ultra conservador "histórico", era hermano de Gregorio Gutiérrez Isaza, redactor y propietario del suspendido *El Comercio,* y de Rufino Gutiérrez Isaza, confinado bajo la "ley de los caballos" a Yarumal. En su periódico *El Comercio,* había mostrado su rechazo a la candidatura de Caro para Vicepresidente desde los inicios del debate electoral a mediados de Junio de 1891.

una ventaja de las mismas leyes extraordinarias, que hizo posible que el Gobierno tratara el suceso como un "extravío del momento"[572] y no como la culminación de un proceso de conjura contra el orden público.

Los sucesos de los días 15 y 16 de Enero de 1893 fueron relatados posteriormente por los Comandantes de las divisiones de la Policía Nacional, contra quienes, principalmente se dirigieron los ataques, siendo algunos de ellos asesinados por la turba. Después de la publicación del mencionado artículo, algunos ciudadanos se dirigieron a la casa de Gutiérrez Isaza con el propósito de apedrearla y sacar al escritor para matarlo. Sin embargo, fueron rechazados por la 1ª y 2ª división de la Policía y algunos amotinados fueron desarmados. Wenceslao Jiménez, a cargo de la segunda división, ordenó el cierre de las chicherías y el despeje de la calle donde vivía Gutiérrez. Hubo cierto sosiego, pero a la 7.30 p.m. empezaron nuevamente los ataques contra la casa. El Ministro Cuervo, enfermo, volvió a salir para hablar y calmar los ánimos, pero la multitud exacerbada por el licor, proporcionado por "*las personas que habían dado y continuaban imprimiéndole el maléfico y funesto impulso a la muchedumbre"*[573], sólo decidió abandonar, por el momento, sus intenciones.

La contradicción entre Caro, quien en un comienzo observó el hecho como algo "espontáneo" y el Comandante Jiménez, quien en su informe llega a expresar que eran "*cosas acordadas hace meses en Juntas Secretas contrarias al Gobierno, que reputan la Policía como obstáculo insuperables para sus fines,- Y llevar su estandarte disociador"*[574]*;* al parecer, provino por la ausencia del Vicepresidente de la ciudad, y el inicial conocimiento de los hechos como causados por el artículo escrito. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos y los ataques desde

[572] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. cit., p. 43.
[573] *Diario Oficial.* Bogotá, 2 de Febrero de 1893. Número. 9,063 p. 149 - 150
[574] Ibíd.

varios flancos por ciudadanos organizados y con armas, que conllevaron sistemáticas embestidas contra la fuerza policiva que, desde el inicio del Gobierno de Caro, había extremado medidas para ejercer un mayor control en la ciudad, especialmente contra los excesos del licor, del juego y la prostitución; parecen evidenciar una intencionalidad premeditada, o por lo menos resuelta y encausada al fragor del momento.

Los ánimos exacerbados por agitadores, se vislumbraron después de que el día 15, el Ministro Cuervo se presentó personalmente ante los amotinados en la calle de la casa de Gutiérrez y logró calmar los ánimos[575]. Muchos ciudadanos participantes en esta primera asonada, regresaron a sus casas; pero el día 16, desde tempranas horas de la mañana, fueron empezados a ver nuevos grupos armados, mejor organizados y con propósitos específicos. No estoy de acuerdo con quienes relatan estos hechos, como si a las gentes más pobres de la ciudad les hubiera asaltado un sentimiento repentino de venganza contra las clases adineradas.[576] Aunque obviamente, si fue esta una asonada en la que participaron artesanos pobres y los ciudadanos humildes de Bogotá, los gritos de vivas al partido Liberal Radical, a "el pueblo", a los artesanos, y mueras al Gobierno y a la Policía, además de alusiones a la "Comuna del 93" tal vez comparativa con la "comuna del 73" de la revolución Francesa, eran azuzados por personas conocedoras del principio revolucionario de iniciar una chispa que pudiera ocasionar el derrumbe del Gobierno. También llama la atención que Caro se encontraba fuera de la ciudad, y que el encargado del Poder Ejecutivo fuera un

[575] El General Cuervo había tenido una buena relación con los artesanos bogotanos muchos años atrás. Cuando Santos Acosta puso preso al General Mosquera en el Observatorio, el único que intentó un rescate fue este General, en compañía de algunos artesanos para liberarlo, pero fue disuadido ante la orden terminante de fusilar a Mosquera si alguien osaba intentar su liberación. Ver CORDOVEZ MOURE, José María. Reminiscencias de Santafé y Bogotá. Op. cit., p. 1177 – 1178.

[576] Ver AGILERA PEÑA, Mario. El Motín Bogotano de 1893 en: Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo 2. Bogotá: Editorial Printer. 1991. p. 453-456.

viejo general, quien habría de fallecer un mes después; a causa de su enfermedad, agravada por la impresión que le originó el saqueo de su propia casa y las reliquias de su esposa recién muerta; y por las premuras con las que tuvo que actuar; y que hubieran podido generar la intención de socavar el Gobierno basados en la aparente debilidad que propiciaba la ocasión.

La organización policiva instaurada por Carlos Holguín, tenía como propósito el establecimiento de un ordenamiento de la ciudad para evitar los robos, los crímenes y el aumento preocupante del consumo de chicha y de la prostitución. Obviamente, este propósito era concomitante con el molde de nuevos ciudadanos virtuosos, "temerosos de Dios", y alejados de las "malas costumbres" con los que el movimiento político de La Regeneración siempre diferenciaba el "desorden" de las "libertades" radicales con la instauración de unas nuevas "libertades" vigiladas con celo. El creciente aumento de la miseria en Bogotá, contrastaba con la ejecución de obras públicas y con la riqueza ostentosa de comerciantes, las comunidades religiosas, y de los altos funcionarios del Gobierno, quienes después del "Bogotazo de 1893" se preocuparon en demasía por la situación social, emprendiendo por un lado, campañas "moralizadoras" y de caridad, y por otro lado, con un aumento inusitado de la fuerza pública de la capital.

Precisamente, esta falencia del pie de fuerza de la Policía, que aunque había aumentado de 50 efectivos en 1887 a casi 500 en 1893, podrían ser un indicador de un aumento del nivel de inseguridad de la ciudadanía y de la necesidad del Gobierno por imponer el orden regenerador. Pero en los sucesos del 15, 16 y 17 de Febrero de 1893, no fueron suficientes para contener el ataque de la turba calculada en 1000 amotinados. Además, la fuerza Policiva no supo qué hacer, y muchas Circunscripciones fueron abandonadas. De las seis existentes, sólo dos opusieron resistencia al saqueo, en las cuales se registraron muertos. Muchos miembros de la Policía encargados de las Circunscripciones salieron huyendo

ante las amenazas de las cuadrillas que entraban a destruir oficinas y a robar enseres y muebles.

Durante la noche del día 16, la ciudad era recorrida por amotinados que lograron saquear la casa del Alcalde Higinio Cualla, la del Ministro Cuervo, y al intentar hacerlo con las instalaciones de la Alcaldía lograron ser rechazados a balazos. Los ataques no fueron hechos por una sola masa que se dirigió a un lugar concreto, sino por cuadrillas que se encaminaban a puntos específicos. Esta coordinación de los ataques, logró parcialmente su objetivo, pues la Policía no pudo proteger al mismo tiempo las casas, las circunscripciones o sedes, la Alcaldía, la cárcel de mujeres, en donde fueron liberadas 200 presas; el Palacio Presidencial y la Dirección general ubicada en San Victorino. Solamente cuando el Ejército sacó a la calle 600 hombres y se acantonó para defender las instalaciones de esta Dirección, la Policía logró iniciar una serie de capturas de más de 400 ciudadanos.

El Estado de Sitio no fue declarado el 15 de Enero, sino el 16 . Probablemente el Gobierno, concluidas las jornadas del primer día, pensaba que la situación no había pasado de ser una protesta pasajera, pero la labor de los agitadores vio sus frutos al otro día, especialmente al caer la tarde; cuando se acrecentaron los ataques premeditados, que llevaron a la implementación del Decreto 389 del 16 de Enero de 1893, en el cual se declaró la conservación del orden público en Bogotá bajo medidas militares y castigados de esta manera a quienes se hubieran de reunir en un número mayor a 5 personas, además de la prohibición de "*la circulación de publicaciones de todo género sin el previo pase del Ministerio de Gobierno*"[577]

[577] *Diario Oficial.* Bogotá, 17 de Enero de 1893. Número. 9,047 p,77

Precisamente, al director de *El Relator* le fue ordenada, mediante una carta, la remisión al Ministerio de Gobierno de la edición próxima a circular, previamente a su reparto en las calles, ya que sólo con la obtención del visto bueno de este, podría hacerlo. En los días siguientes la ley marcial estableció una cuidadosa censura previa y las posteriores investigaciones no llevaron, por el momento, al señalamiento de Santiago Pérez ni del Centro Liberal como sospechosos de la asonada. De hecho, desde *El Espectador,* esta absolución fue vista de manera positiva y fue aprovechada para agrandar los propósitos de la organización y su director:

> *Como la nueva labor política del Doctor Pérez tendrá por campo principal la prensa, deberíamos hablar con mayor detención sobre sus eximias cualidades de periodista. […] La Regeneración posee medios para librarse de tan terrible adversario […] pero imponer multas a un escritor como D. Santiago Pérez, sería multiplicar por diez mil el número de ejemplares de su periódico; […] quien lo llevara a la cárcel, se clavaría a sí mismo en la picota, y quien lo mandase al destierro, se declararía convicto de brutal despotismo ante el mundo civilizado.*[578]

En su alocución del día 17 de Enero, el Ministro de Guerra, encargado del Ministerio de Gobierno y encargado de la Presidencia de la República, Antonio B. Cuervo, no dudó en señalar a ciertos agitadores y culparlos por los sucesos:

> *Los hechos que hemos presenciado son la explosión de pasiones maliciosamente agitadas por los que tratan de engañar a la masa de los obreros, por quienes las autoridades y todas las clases sociales abrigan toda clase de consideraciones. [...]¡OBREROS BOGOTANOS!*

[578] *El Relator*, 21 de Enero de 1893. Número780 p.1226.

No creáis a los que os azuzan para que rebelándoos contra la autoridad y contra todo derecho individual, os preparéis vuestro propio malestar y el de vuestras familias.[579]

Las medidas preventivas y represivas continuaron con el Decreto 390 de 1893, mediante el cual se suprimió la "sociedad filantrópica de Bogotá", porque el Gobierno descubrió que desde allí se incitó al desorden y se redactaron los carteles subversivos que aparecieron en las esquinas de la capital. Posteriormente, Caro escribió desde Ubaque el 18 de Enero de 1893, felicitando a su Ministro Cuervo por las medidas tomadas diciendo que *"Lo ocurrido demuestra la sinrazón de los que claman por la reducción del pie de fuerza."*[580], y comentándole a Núñez el apresamiento de 200 personas.

En concordancia con el deseo de Caro, el Ministerio de Justicia dictó el Decreto 401 del 18 de Enero de 1893, aumentando los agentes del cuerpo de Policía Nacional a 1000 hombres; iniciando un proceso de selección de personal y depuración de los existentes, que sería llevado a cabo los meses siguientes.

Si la sociedad bogotana estaba perturbada con los hechos de mediados de Enero, quedó mayormente intimidada con la ejecución de Ignacio D. Gutiérrez, un preso del Panóptico que había premeditado asesinar a su carcelero, y que llevó a cabo este hecho el día 20 de Enero, cuando regía en la capital la ley marcial y el juzgamiento militar del orden público. En un rápido consejo verbal de guerra fue sentenciado a muerte y ejecutado el 24, dentro de las mismas instalaciones de la cárcel. De cualquier manera, si éste hubiese sido enjuiciado penalmente y no militarmente, lo más probable es que también hubiese sido condenado a muerte, pues, ya habiéndole sido conmutada la pena de muerte por la de 20 años de

[579] Ibíd.
[580] *Diario Oficial.* Bogotá, 18 de Enero de 1893. Número 9,048. p.81.

prisión, bajo una condena por asesinato; la reincidencia premeditada en el mismo delito, no le hubiera otorgado la indulgencia de ningún Juez.

Los detenidos por los hechos fueron castigados por el Vicepresidente Caro haciendo uso de la Ley 61 de 1888, "de los caballos", mediante el Decreto 416 del 20 de Enero de 1893, quien graduó los delitos cometidos y sus culpables en primer y segundo orden imponiéndoles: "*a los primeros como pena el confinamiento a La Isla de San Andrés en el territorio de Colombia, hasta nueva orden del Gobierno; y a los últimos el extrañamiento de la capital de la República con destino a permanecer en los lugares que le señale el Poder Ejecutivo por el tiempo que estime necesario."*[581]

Después de más de un mes; el 24 de Febrero de 1893, es derogado el Decreto que imponía la ley marcial en Bogotá. Esta duración, le permitió al Gobierno depurar la Policía y el reclutamiento de nuevos miembros. Posteriormente, Mediante la Resolución 122, el Ministerio de Gobierno aceptó que la "Sociedad Filantrópica" volviera a continuar con sus reuniones a nombre de José Leocadio Camacho, redactor del periódico de artesanos *El Taller;* pero con dos condiciones: que no se trataran asuntos políticos y que toda reunión fuera avisada previamente para que el Ministerio de Gobierno enviara a un representante de la autoridad. Estas reglas se hicieron extensivas a todas las sociedades existentes y no podrían formarse nuevas sociedades sin la autorización del Gobierno. En su artículo 4º, fue fuerte al establecer que: "*La Sociedad popular ó de socorros que contravenga á las reglas preinsertas, quedará suspendida, y en caso de desobediencia sus miembros serán juzgados en rebeldía."*[582]

[581] *Diario Oficial* Bogotá, 4 de febrero de 1893. Número. 9,064 p.158.
[582] *Diario Oficial.* Bogotá, 16 de Marzo de 1893. Número. 9105 p.341.

El liberalismo radical, se empeñaba en volver al redil a muchos ciudadanos del gremio de Artesanos, que anteriormente fueron fuertes participantes de la vida política Nacional y militantes irrestrictos del partido liberal. En 1891, Alfredo Greñas había publicado unas caricaturas y un artículo culpando al Gobierno de convertir a los artesanos a la pobreza cuando estos hubieran de ser reclutados forzosamente para servir al Ejército; quedando después de su licencia, sumidos en el desempleo y convirtiéndolos en asiduos "pedigüeños" de la benevolencia y acostumbrándolos a la "holgazanería"[583].

También Greñas fue incisivo en señalar las faltas de las clases adineradas en relación con los pobres de la ciudad. El 7 de Agosto de 1891, fue organizado un majestuoso baile en el Palacio de Gobierno con motivo de la celebración de la batalla de Boyacá. Acude el periodista radical, a calcular en $200 mil pesos los costos del festín, añadiendo que las ganancias de estos dineros se quedaron en manos de ricos comerciantes, restaurantes, sastres, zapateros, perfumistas, etc.; de un dinero que el Gobierno hubiera podido regalar a los pobres de los ancianatos, hospicios u hospitales. *"Pero los pobres saben quiénes son los que les hacen bien, y no se cuidan de que quienes puedan hacerlo, celebren fiestas"*[584]. De hecho; la caricatura publicada en este número y titulada "Los fariseos", es toda una crítica a la alta sociedad bogotana que predicaba el severo catolicismo, mientras acudía dichosa a los bailes en palacio, y a los curas que gastaban excesivo dinero en pólvora y procesiones durante las fiestas religiosas, habiendo podido destinar esta plata a "los pobres". Esta crítica, también hubiera podido motivar al Gobierno a utilizar el Decreto de imprenta, que era claro en castigar los escritos que concitara los choques entre las clases sociales. Pese a esto, el Gobierno de Carlos Holguín, en este caso específico, no sancionó a *El Zancudo.*

[583] Ver *El Zancudo.* Bogotá, 4 de Mayo de 1790 [1890] p.17.
[584] *El Zancudo.* Bogotá 16 de Agosto de 1791 [1891] p. 164.

Pero la población bogotana poco tenía de pacífica. Sus habitantes eran fácilmente presa del exacerbo de la protesta social, y de la reconvención al Gobierno por vías de hecho. Los desórdenes históricos ya habían hecho presencia en el golpe militar del General Melo en 1854, y en el motín contra los panaderos en 1875. Esta última sublevación guarda cierta similitudes con las del motín de 1893, pues se inició como una protesta cuando el monopolio de los tres molinos de trigos existentes en Bogotá, decidieron acabar, por los altos costos de la harina, con el conocido "pan de a cuatro", elevando los precios en un 20%. Muchos bogotanos, se organizaron para apedrear las casas de los molineros, y de paso, las de las clases adineradas de la capital bajo la mirada indiferente de la Guardia Colombiana. Quien hubo de solventar la asonada desde palacio fue el mismo Presidente de entonces, Santiago Pérez, pero poco éxito obtuvo en su empresa, pues los amotinados sólo bajaron sus brazos cuando fueron anunciados en cartelones el regreso del "pan de a cuatro" a las bocas de las familias bogotanas.[585] Aunque fueron los artesanos quienes acometieron los desórdenes, algunos estudios posteriores sugieren la activa preparación política de diferentes personas, otros, como David Sowell piensan que; *"esta es una tergiversación del acontecimiento. El lenguaje de las circulares y su anonimato sugieren, en cambio, que probablemente se originaron no entre los artesanos, sino con estudiantes de la ciudad, quienes en el pasado habían intentado manipular pasiones "populares"*[586]

Según otros informes, la tranquilidad del lunes 16 de enero en las horas de la mañana, se debió al envío de una comisión de artesanos a la cabeza de Feliz Valois Madero, quienes en audiencia con el General Cuervo, le solicitaron la

[585] Ver CORDOVEZ MOURE, José María. Op. cit. p.173 – 174.
[586] SOWELL, David. El Bogotazo de 1893. Artesanos y violencia pública en el Bogotá de finales del siglo XIX. En: *"Biblioteca de Signos"*. Revuelta en las ciudades. Silvia Arum y Servando Ortull. Coordinadores. México: Universidad Autónoma Metropolitana. El Colegio de Sonora. D.F. 2004. p, 173.

liberación de los detenidos de la noche anterior y la invocación del Decreto de imprenta para sancionar a Gutiérrez Isaza. Lo primero fue acepado, pero, probablemente el Decreto no encontró asidero en el escrito de *Colombia Cristiana,* que fue para los artesanos, una afrenta a su honra. Por esta razón, los ataques no fueron dirigidos a los vendedores de alimentos, quienes poca responsabilidad tenían ante la excesiva política inflacionaria del Gobierno que había originado un aumento desmesurado en los alimentos básicos.

Los acontecimientos desataron una gran discusión en los diarios bogotanos, en los que incluso los periódicos conservadores como *El Orden* vieron expresadas sus desavenencias, al criticar los escritos en *Colombia Cristiana*. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué había causado el motín? El honor herido de los artesanos, es la tesis de Sowell, quien además, ve explicada en ella, la razón por la cual fue asaltada solamente la cárcel de mujeres como una retaliación a las prostitutas "injustamente" detenidas por la nueva campaña moralizadora de la policía.

El Motín Bogotano de 1893 impulsó aún más en Miguel Antonio Caro, su mirada hacia las imprentas como combustible de la sociedad, y fue, desde mi punto de vista, la causa que lo llevaría a una sujeción más severa del Decreto 151 de 1888 a los periódicos bogotanos. El peligro de la revuelta instada u originada por lo escrito en un periódico dejó de ser una retórica para suprimir libertades, era una posibilidad real que no sería tampoco desaprovechada por la oposición y que habría de merecer la mirada celosa del Gobierno.

La ocasión para la expulsión de Alfredo Greñas, también fue cocinada en la sartén del Motín Bogotano de 1893. En esos días, imprimía un solo periódico llamado *El Barbero,* una continuación de su estilo humorístico y crítico, ya conocido por los ciudadanos bogotanos.

4.3. LA CONJURA SUBVERSIVA DESMANTELADA EN 1893

El motín bogotano de 1893 trajo como consecuencia una depuración y una reestructuración administrativa de la Policía Nacional, además del incremento del pie de fuerza con el doble de agentes en pocos meses. La creación de un cuerpo de Policía Secreta empezó a dar resultados después del primer semestre del mismo año. El 3 y 4 de Agosto de 1893 provino la suspensión por seis meses del periódico *El Conservador* e indefinidamente de*, El Relator, El Contemporáneo y El 93,* con la acusación de ser preparadores del "bando anarquista" y de ser incitadores de una guerra civil. Pero, la Resolución 141 del Ministerio de Gobierno, contenía además una severa advertencia que presagiaba las medidas represivas contra la oposición, y especialmente contra el Liberalismo Radical. En su punto número 2, expresaba: *"Prohíbese en absoluto, hacer sin permiso del Ministerio de Gobierno, publicación alguna de carácter político, ya sea en periódico, ya en folleto u hoja volante."*[587] Con esta medida, contradictoria totalmente con los Decretos permisivos de Holguín hacia la crítica respetuosa al Gobierno, y que no habían sido derogados, la mordaza a las publicaciones de oposición quedaba plenamente establecida. Esta Resolución no solamente fue comunicada a los Directores de periódicos sino a los propietarios de las imprentas de Bogotá.

El Gobierno de Núñez y Caro nunca creyó en las buenas intensiones de la nueva y rápida organización liberal dirigida por Santiago Pérez desde su retorno al país. Las sospechas de sus movimientos fueron la ocupación constante del Gobierno, quizá amplificada después del motín bogotano; y el punto de mira desde el cual fue organizada la Policía Nacional. Es probable también, que después del levantamiento de la ley Marcial en la capital, es decir desde Febrero 24 de 1893, Caro permitió un cierto despliegue de críticas al Gobierno a través de la prensa,

[587] *Diario Oficial.* Bogotá, 5 de Agosto de 1893. Número. 9,228 p.897.

como parte de la investigación que habría de concluir con el destierro y el cierre de periodistas y publicaciones.

Para el Vicepresidente Encargado del Poder Ejecutivo, la oposición liberal radical siempre fue despreciada, y vista como a un grupo al cual solo le interesaba subvertir el orden impuesto en el modelo de organización político de la Regeneración, y la retoma del poder por las armas. Luego, sus actuaciones, así no hubiesen tenido estas explícitas intenciones, le dieron la oportunidad de socavar aún más su papel político en la vida colombiana. Pese a sus impulsos autoritarios, Caro es el único de los tres Encargados del Poder Ejecutivo en el periodo estudiado, que se preocupa por publicar las pruebas de la conspiración desde medios oficiales, aunque muchas de ellas le caben más de una contradicción y contienen sustentaciones flojas, los movimientos del "Centro Liberal" nunca habría de poder ser mirados por este, como producto de la movilidad de un partido político que se quería organizar para dar nuevamente la batalla desde la legalidad impuesta por la Constitución de 1886.

Pero, el fundamento de las sospechas del Gobierno estribaba, según mi opinión, desde varios frentes. Primero, el radicalismo nunca reconoció valores en la nueva Constitución y en el nuevo modo organizativo de la Nación. Es decir, su propósito expresado constantemente desde la Prensa no era el de reformar las leyes sino el de regresar al modelo liberal, llamado por ellos "republicano"; pero sobre todo, la recuperación del poder para la ejecución de dicho modelo. En este sentido, la oposición política de los conservadores históricos era diferente al liberalismo radical. Sin embargo, desde el Gobierno, sus ánimos reformistas no fueron tenidos en cuenta porque habrían de contener la misma disposición de atacar al Gobierno desde la Prensa y fueron "encasillados" y reprimidos como si hicieran parte del mismo deseo de destrucción.

El segundo frente de batalla fue la agitación desde la clandestinidad, principalmente, de los miembros jóvenes del liberalismo e incluso el establecimiento de contactos en el exterior para la compra de armas y la agrupación de directrices, como lo habría de reconocer después Avelino Rosas, develando además las mismas luchas internas y las dificultades organizativas. Por eso, el tercer frente, podría ser precisamente una organización centralizada por los dirigentes más veteranos como Santiago Pérez, con una recaudación de fondos que abriera la posibilidad de un posterior levantamiento armado.

Es precisamente, el aspecto económico, el que más hubo de preocupar al Gobierno. Una cosa era el radicalismo conspirando sin recursos y otra, la organización de recaudos en todo el país y los enormes censos publicados en la prensa de adeptos al "Centro Liberal", que les habrían podido llevar a ser poseedores de mayores recursos para subvencionar una guerra. "*Así, el radicalismo quedó organizado no como partido político, sino como Gobierno revolucionario, y la sociedad empezó a sentir la alarma y la inquietud que preceden a una revolución."*[588]

En su relación de los antecedentes y la recopilación de datos para acusarlos de la tentativa de perturbación de orden público, el Gobierno empezó haciendo una serie de interrogatorios a Santiago Pérez, elegido en una Junta en diciembre de 1892 y llamada "Convención Liberal", como Jefe Supremo y con la libertad de disponer libremente de los recursos recaudados; *"y bajo su dirección, abriose campaña periodística, a modo de reto a muerte, contra el gobierno constitucional inaugurado en 1886."*[589]

[588] *Diario Oficial.* Bogotá, 12 de Agosto de 1893. Número. 9,224. p.921.
[589] Ibíd.

Pérez expresó en su interrogatorio que los miembros de la Junta recaudadora de fondos estaba compuesta por Francisco Álvarez, Luís Robles, el Dr. Modesto Garcés, y Eustasio de la Torre Narváez. Este último, precisamente fue señalado como el poseedor de la mayor cantidad de los fondos recaudados. Aunque en su interrogatorio, de la Torre explicó que el propósito del recaudo de fondos fue estrictamente para fines pacíficos, las contradicciones de los interrogados son abundantes en lo referente a la manera de recaudación y a quienes mantenían estos.

Modesto Garcés, encargado de la Tesorería dijo que, desde que Santiago Pérez asumió la Jefatura, no se encargó más de ese asunto. Además, que el mismo Pérez nombró otra Junta para la administración de los dineros, de la que era parte Francisco E. Álvarez. Al ser interrogado, este último expresó que los fondos eran fruto de la recolecta de aportes voluntarios de los liberales de todo el país, y que el móvil de dicha acción no era otro que el de:

> *Suministrar medios a la Dirección del partido liberal para hacer los gastos que exige la Dirección [sic] pacífica y civilizada del mismo partido para atender entre otras cosas la reforma a la que he aludido y para hacer lo que al partido liberal corresponde en la posición política que hoy tiene en el país.*[590]

Sin embargo, Álvarez dijo que no sabía a cuanto ascendían los fondos, ni en las manos de quien estaban; pero que suponía que esa información la debía manejar el mismo Santiago Pérez, por ser el Director, quien ya había dicho, en su primer interrogatorio, que la plata la tenía de la Torre Narváez. Por otra parte, éste último, ante las afirmaciones de los otros interrogados, se negó a contestar si los

[590] Ibíd.

testimonios de los otros miembros eran verdad, expresando simplemente que: *"esas afirmaciones pueden en cierta extensión ser exactas [...] dichos fondos están bajo mi responsabilidad, pero yo [...] no tengo esos fondos [...] en materia de cifras la memoria es frágil."*[591]

Pero, la sospecha suscitada por el manejo de los dineros era mínima comparada con las pruebas de cartas, telegramas, e incluso de comunicaciones cifradas, entre los diversos conjurados desde puntos clave del país, estando el principal de ellos en el Departamento de Bolívar. En la mayoría de los mensajes no se dejaba de hablar de la tendencia revolucionaria que debía hacerse desde la prensa.

Sin embargo, Santiago Pérez, al ser interrogado sobre este particular, fue difuso al afirmar que antes que tener un propósito incendiario, la prensa en realidad había tenido un propósito "calmante" ya que había procurado darle al partido liberal una organización pacífica, no obstante que, si *"se hubiera producido una revolución [...] el Director nada hubiera podido hacer"*[592]

El Gobierno identificaba a Pérez como el Director de un partido que ejercía una influencia política desde *El Relator,* y organizativa desde la "Convención Liberal", pero que, pese a su mando, no habría podido evitar lo que hicieran sus adeptos. Precisamente uno de ellos, nombrado por Pérez como Jefe Departamental de Bolívar, llamado Felipe Paz, en una misiva del 28 de Mayo de 1893, dirigida al tesorero Modesto Garcés, le expresó que la guerra era el único camino para acabar con el Gobierno y que esta era la opinión de la mayoría de los miembros en el Departamento, e inclusive la de la mayoría del Partido "Conservador Republicano". Pese a la expresión de ese sentimiento generalizado, Felipe Paz

[591] Ibíd.
[592] Ibíd. p. 922.

también es de los adeptos al plan de esperar un poco antes de tomar las armas, procurando una mejor organización.

> *Pero como no está preparado para la guerra con los elementos necesarios ni está organizado disciplinariamente para responder unánimemente al llamamiento que se le haga, creo que debe observar una conducta de expectativa [sic] y secundar con disciplina la ímproba y ardua tarea que el Dr. Pérez se ha impuesto, de hacer política pacífica y aprovechar la ocasión para prepararse y organizarse para la guerra.*[593]

El punto de vista del ala guerrera del radicalismo, terminaría por imponerse y en esa dirección marcharían los propósitos de los meses posteriores. Mientras Inocencio Cucalón, miembro de la "Dirección Liberal", trataba de comprar armas en Nueva York, Avelino Rosas buscaba apoyo del radicalismo venezolano y tenía listos 3000 fusiles para invadir a Santander; y el mismo Modesto Garcés trataba de seducir a jefes del ejército. Los telegramas del Gobernador Román desde Cartagena empezaban a indicar la alarma.

Los interrogatorios a un Coronel Urrea y al General Santodomingo Villa en Barranquilla revelaron el plan de asaltar la ciudad con 300 hombres salidos desde Ciénaga en la fecha fijada del 31 de Agosto, y conllevaron a que el Gobierno dispusiera un plan de infiltraciones y allanamientos de correspondencia en algunas ciudades y a numerosos miembros sospechosos del radicalismo. El 3 de Agosto, fecha en que se descubrió el plan en el Departamento de Bolívar, fue motivada la escritura de varios telegramas por Núñez a Caro en los cuales, evidenciaba la conexión de los conjurados con las publicaciones opositoras desde Bogotá:

[593] Ibíd.

La inicua trama tan hipócritamente disimulada por la prensa de allá, queda descubierta; pero medidas enérgicas son indispensables. [...] el plan feroz para tacar cuartel revelado. Tenían dinamita preparada. [...] Autor responsable, la incendiaria prensa. [...] Estamos tratando de coger otro nido de serpientes. Supongo suprimido enérgicamente todo el directorio de la conflagración allá para que el país recobre tranquilidad. Núñez.[594]

Los días posteriores fueron de descubrimiento de mayores planes subversivos. Un ejemplo de ellos fueron unos documentos obtenidos del allanamiento de la casa de Francisco Manotas el 6 de Agosto en Cali, con instrucciones de Avelino Rosas desde Curazao, y con indicaciones sobe el procedimiento que debían seguir, y que implicaban directamente a Santiago Pérez. Esta carta publicada en el Diario Oficial el 12 de Agosto de 1893, y fechada el 14 de Julio del mismo año, fue posteriormente publicada por Rosas en un pequeño libro en 1895, confirmando su veracidad por el mismo autor.[595]

Otras pruebas recogidas fueron incorporadas a las razones para reprimir a los conjurados. Casi todos, trataban de alguna manera de coincidir con el día del ataque y los procedimientos a seguir. El día 4 de Agosto de 1893 apareció en *El Relator* una manifestación de militares, algunos en servicio y otros retirados de

[594] Ibíd.

[595] Ver ROSAS, Avelino. Notas políticas o sea diez años de regeneración. Op. Cit. En este libro, Rosas dice, entre otras cosas, que Manotas a quien llama "coloso parroquial" tiene gran culpa en el fracaso de la Revolución de 1893, por su "arrogancia". Narra que uno de los propósitos de los adeptos al plan era la fundación de un periódico titulado "6 de Agosto", y Manotas puso el grito en el cielo cuando no quisieron poner el título de "Manotas, director en jefe" llamando la atención del Gobierno.

este, adeptos al General Santos Acosta, en la que ofrecían sus servicios como subalternos, con el propósito expreso de salvar las instituciones.[596]

El otro punto importante desde donde habrían de empezar la revuelta era el Departamento de Santander, bastión del radicalismo liberal y emplazamiento de radicales Venezolanos, a quienes se les habría prometido, en caso de triunfar, la reconsideración del reciente laudo arbitral que ya había definido los límites entre los dos países. Los nombres de Juan Hernández, hermano del General Daniel Hernández, Pedro Rodríguez, Foción Soto y otros más, se relacionaban con planes específicos para atentar contra el Gobierno.

A Santiago Pérez, no le fueron encontrados documentos que lo incriminaran en los allanamientos hechos a su casa, pero al Gobierno de Caro, le bastaba con la mención permanente de su nombre, en cartas de otros jefes para señalar su responsabilidad en la conjura; pese a su decidida declaración de desconocimiento de los hechos. En la inculpación de la responsabilidad establecida por el Gobierno, por su carácter de jefe único de la mayoría de los conspiradores, se dejaba ver el pensamiento del Vicepresidente Encargado del Poder Ejecutivo para señalarlo. Tema que habría de ser expresado en el Diario Oficial:

> *Por la exaltación que ha producido el periodismo radical, desde que, faltando escritores prudentes como el finado Felipe Pérez, se ha dado a la criminal tarea de engañar a los pueblos repitiendo que las*

[596] Santos Acosta, habría de expresar el 26 de Agosto de 1893 que esa adhesión de Militares constituyó una aprobación a su conducta por su papel el 23 de Mayo de 1867, pero que no fue una actuación contra el Gobierno. Además, se comprometió con "*palabra de honor, a no tomar parte en ningún acto o proyecto que propendan á la subversión del orden público […] soy enemigo de toda revolución y […] considero una guerra, en las actuales circunstancias como la mayor desgracia que pudiera sobrevenirle al país." Diario Oficial.* Bogotá, 25 de Agosto de 1893. Número. 9,245. p.977. Pero el juramento de Acosta, tenía solamente el propósito de salvarse de la "cacería" conspirativa, ya que en 1895 dirigió el nuevo levantamiento radical contra el Gobierno.

> *actuales instituciones y que el Gobierno de la República son una monstruosa tiranía. [...] Hemos visto a el Diario de Cundinamarca concitar abiertamente a la rebelión, y a El Espectador decretar la pena de horca para el Presidente de la República, en escrito adoptado por el Señor Pérez en su órgano directo. Lo único extraño aquí es que el señor Pérez extrañe que las causas no produzcan sus efectos.*[597]

Los militares sospechosos de actitudes blandas, permisivas o conspirativas, también fueron castigados. Considerándolos como indignos de la confianza del Gobierno, y mediante el uso de la Ley 61 de 1888, que en el inciso 3 del artículo 1, le otorga al Presidente la facultad de borrar del escalafón a militares; Miguel Antonio Caro expidió el Decreto 1224 del 5 de Agosto de 1893, en el cual expulsaba del cuerpo al General José Antonio Saavedra, y a los Coroneles Adriano Gálvis, Juan González, Tomás Vergara, y Carlos Ruiz. Lo mismo ocurrió con los Tenientes Coroneles, José concepción Neira y Zoilo J. Pulido; y con, 3 Sargentos Mayores, 3 capitanes, 7 tenientes y 5 subtenientes.

Santiago Pérez fue castigado por asumir una unidad y una vocería que nunca se logró. Las nuevas generaciones de liberales, mantenían un espíritu levantisco que no concordaba con la estrategia pausada de los directores, que aunque tampoco nunca descartaron el levantamiento armado, en su calidad de veteranos de anteriores guerras, sabían que un plan subversivo ante el nuevo Gobierno debía ser preparado cuidadosamente.

Fue precisamente, la nueva actitud asumida por el Gobierno para mantener una ciudad celosamente resguardada bajo la mirada policiva, con un cuerpo armado aumentado y reestructurado, además de un seguimiento pertinaz a la oposición

[597] *Diario Oficial.* Bogotá, 12 de Agosto de 1893. Número. 9,234 p. 923.

expresada desde la prensa; la que llevó a que Miguel Antonio Caro obtuviera un informe detallado de los planes que habrían de llevarse a cabo, una vez anunciada su salida de la capital, permitiendo su efectiva desarticularización. Las respuestas de los interrogados radicales, la confiscación de cartas y de documentos no dejaron dudas para el Gobierno:

> *Cartas Dr. Camacho comprueban que desde mediados año último había maquinaciones revolucionarias de sus copartidarios. Luego vino la propaganda de la prensa procaz a colmar la medida hasta poner en manos de conspiradores la dinamita. La historia juzgará a estos Eróstratos [sic] audaces los unos, hipócritas los otros. Dios protege a los limpios de corazón. RAFAEL NÚÑEZ*[598]

El Castigo para los implicados en Bogotá, por esta amenaza para la estabilidad del Gobierno, fue tomada el 14 de Agosto de 1893, mediante el Decreto 1223 con el título explícito de: "*Por el cual se castiga una conspiración"* [599], que hubo de ser redactado de puño y letra del Vicepresidente Encargado del Poder Ejecutivo, Miguel Antonio Caro; bajo la citación de las facultades contenidas en el artículo 28 de la Constitución, y el artículo 1º de la ley 61 de 1888; cumpliendo además, con el requisito de dicha ley sobre el acuerdo unánime del consejo de Ministros y, considerando también que: "*El primero de los deberes de un gobierno es conservar el orden público y proveer á la seguridad social y tranquilidad de los ciudadanos, y que descubierta una reciente conspiración para subvertir el orden, se hace preciso castigar a fin de prevenir actos de la mima naturaleza"*[600]*.* Caro tomó la decisión de expulsar fuera de Colombia a Santiago Pérez y a Modesto Garcés, de confinar a Emilio Santofimio bajo supervisión policiva, a la ciudad de

[598] *Diario Oficial.* Bogotá, 22 de Agosto de 1893. Número 9,242. p.953.
[599] Decretos originales. Sesión 1.a Ministerio de Gobierno. 1893 - 1894. A.G.N.
[600] Ibíd.

Ibagué. Para la isla de San Andrés, fueron llevados Abraham Acevedo, Javier Vergara Esguerra, Juan de Dios Uribe[601], y Verdano Aponte.

Después de un poco más de un mes, Caro desde Madrid Cundinamarca, continuó expidiendo decretos, adicionando a las anteriores nuevas disposiciones para enfrentar la delicada situación del país y a sus protagonistas. Decide Adicionarle al anterior decreto, el número 1511 del 31 de Octubre de 1893, con las disposiciones necesarias para que, quienes estuvieron comprometidos en el plan y se encontraban huyendo, fueran considerados como unos "extrañados" que solo podían regresar al país mediante la solicitud de un permiso al Gobierno. También definió el tratamiento dado a los sospechosos de la conspiración. De acuerdo a las pesquisas, quienes fueran culpables, habrían de ser "confinados" en lugares donde no podían ser perniciosos, o puestos en libertad con fianza, según la gravedad de su culpa. Por último, dando muestras de advertencia, expresa en el aartículo 3º:

> *Indultase a todos los individuos que hayan podido tener participación en las maquinaciones de Agosto, y que no hayan quedado comprendidos en el presente y en al anterior decreto, en la inteligencia*

[601] El "Indio Uribe" había ingresado a Colombia después de haber sido desterrado por Núñez en 1887, para continuar con sus escritos insultantes al Gobierno de Colombia desde algunos periódicos fundados en Venezuela., en donde quizá, el más mencionado fue *Los Refractarios* de Caracas que también habría de ser suspendido por el Gobierno de Adueza Palacio, a quien había llegado a llamar "cerdo", en 1890. En Octubre de 1892 se radicó en Medellín, empezando a escribir contra el Gobierno desde las columnas de don Guillermo Cano del Espectador. En sus escritos frecuentemente insultaba al Gobierno llamando a Núñez constantemente "traidor" y "renegado", y desde allí, se puso en contacto directo y a las órdenes de Camacho Roldán y Santiago Pérez. El 5 de Agosto de 1893 pronunció un discurso en homenaje al poeta Epifanio Mejía, desde el Teatro Bolívar de Medellín en el que fueron copiosas las acusaciones de corrupción a la regeneración. El 8 de Agosto, siendo estudiadas las conexiones de las conspiraciones en Medellín con Bogotá, el Ministro José Domingo Ospina Camacho ordena la suspensión indefinida de El Espectador y la aprehensión de Uribe y de Cano. Este último, al parecer no es inculpado directamente en los planes subversivos, pero "el Indio" si es resguardado en el batallón Junín el 16 de Agosto, a la espera de su salida para San Andrés.

de que tanto ellos como los que ya han sido puestos en libertad serán tratados con rigor si en lo sucesivo volvieran a tomar parte en planes revolucionarios. Dado en Madrid, a 31 de Octubre de 1893. Miguel Antonio Caro.[602]

4.3.1. LOS SANCIONADOS EN 1893.

El sucesivo descubrimiento de las confabulaciones del liberalismo radical, desataron un vendaval de persecuciones en las cuales no tendrían cabida los agitadores, sin importar que no hubiesen tenido participación directa. Probablemente, este fue el caso ocurrido con Alfredo Greñas, quien además de haber sido sancionado varias veces por su labor desde las publicaciones en contra del Gobierno, la regeneración y sus gobernantes; no escatimaba, ni esfuerzos ni intenciones, para hacer extensivo su pensamiento político opositor. Acusado de enardecer a los artesanos en el motín de comienzos de este año, y sin conocer las acusaciones concretas en su contra, el Gobierno no perdió la ocasión para quitarse de encima el aguerrido periodista radical. Cuando redactaba en *El Barbero,* periódico que sería impreso por última vez el 16 de Enero de 1893, y que había sido sancionado en 3 ocasiones y amonestado una vez; fue encarcelado y desterrado del país. Este periódico redactado y dibujado por Alfredo Greñas e impreso en su propia imprenta llamada "El Progreso", que había iniciado sus publicaciones en Marzo de 1891 y también había recibido una amonestación y una advertencia el 25 de abril de 1892 por publicar una caricatura de Carlos Holguín, en la cual salía de misa, recién terminada la Semana Santa y a la derecha podía verse a Satanás riéndose de su actitud compungida.

[602] Decretos originales. Sesión 1.a Ministerio de Gobierno. 1893 - 1894. A.G.N

El 11 de Julio de 1893 fue sancionado también el Periódico *La Voz del Tiempo,* llamado así mismo como órgano de la juventud liberal desde 1891. Precisamente, habiendo sido publicado hasta Julio de ese año, desapareció en el número 16. Pero, en 1893 se le vio nuevamente en las calles bogotanas. Probablemente hizo parte de la mayoría de periódicos discontinuos que hubieron de resultar con tan pocos números y tan perseguidos, que muchos fueron destruidos, siendo conservados sólo unos cuantos del año 1891. De hecho, el Ministerio de Gobierno, según Resolución número 134, expedida en Bogotá el 7 de Julio de 1893, lo acusó de insertar en sus columnas "*escritos contrarios a la moralidad y las buenas costumbres*" [603], y fue suspendido por seis meses.

Pero el propietario no se dejó amedrentar por sanciones ni decretos y semanas después volvió a publicar *El Mago,* que había sido suspendido por Holguín dos años atrás. Pese a la porfía de Alejandro Flórez, el Gobierno de Caro fue mucho más decidido en no permitir estas estratagemas, decidiendo no consentir la reaparición del mencionado periódico, según resolución número 135, del 18 de Julio de 1893, en la cual, lo repunta como una continuación de *La Voz del Tiempo, "por ser uno mismo su redactor y unas mismas sus tendencias"*[604]*,* decidiendo suspenderlo indefinidamente bajo este u otro título.

Empecinado, Flórez no reculó en su empeño y publicó un libelo de defensa contra la acción del Gobierno y del Ministro José Domingo Ospina Camacho, y este último, expidió una nueva Resolución, el 31 de Julio de 1893, exponiendo que, según análisis del Gobierno, este nuevo folleto acusaba igualmente "de forma inmoral" la defensa del redactor constituyéndose en reincidente. Invocando los artículos 8º y 9º del Decreto 151 de 1888, vigente sobre prensa, esta vez el

[603] *Diario Oficial.* Bogotá, 11 de Julio de 1893. Número. 9,207 p.813.
[604] *Diario Oficial.* Bogotá, 20 de Julio de 1893. Número. 9,215 p, 846.

Ministro decidió *"secuestrar y anular los ejemplares impresos del Señor Flórez, y queda prohibida la venta del mencionado folleto"*[605]

El espíritu anti subversivo de Caro no se encontraba crispado únicamente por la acción del liberalismo radical. A la suspensión definitiva de los periódicos radicales; *El Relator, El contemporáneo y el 93*[606]*,* los indicios de una arremetida fundacional de publicaciones conservadoras "históricas" habrían de ser atajados desde el primer número del impreso. Un ejemplo puede verse el 3 de Agosto de 1893, cuando el periódico *El Conservador* expuso en su primera edición, un artículo titulado "exposición preliminar", en el que, según el Gobierno, "*tiene por objeto escandecer[sic] los ánimos y agitar el país, en lugar de calmar las pasiones y promover la concordia; y que con propósitos subversivos ataca la Constitución de la República y las facultades del Cuerpo Constituyente*"[607], y por tal motivo, el Ministro Ospina Camacho expidió la resolución, de acuerdo con el ordinal 1º del artículo 4º del Decreto número 151 de 1888, sobre prensa, de suspenderlo por seis meses.

La paranoia de inseguridad de Miguel Antonio Caro en cabeza del Gobierno, le llevaron a tomar medidas tales como la del sometimiento a los miembros de empresas y compañías Anónimas a la aprobación de sus miembros por parte del Poder Ejecutivo y a la elevación a rangos militares a los miembros de la compañía de Telégrafos.

---

[605] *Diario Oficial.* Bogotá, 1 de Agosto de 1893. Número. 9,244 p.881.

[606] Caro no era parco a la hora de sancionar periódicos. Estos no serían los únicos sancionados en un mismo decreto o resolución; en los años que siguieron, de un mismo plumazo ajustaba cuentas a dos o tres periódicos al mismo tiempo. Precisamente, el último de ellos había sido fundado con este nombre por el radicalismo como fecha conmemorativa del inicio de la revolución. No vio la luz en más de un número y no se conservaron copias.

[607] *Diario Oficial.* Bogotá, 4 de Agosto de 1893. Número. 9,227 p.893.

4.3.2. La expulsión de Santiago Pérez y la doble Moral.

El 7 de Abril de 1893, el Ministro de Guerra, José Domingo Ospina Camacho, mediante resolución número 3457, le pidió a Santiago Pérez Triana (hijo del ex Presidente) explicaciones que justificaran los motivos y el propósito del viaje que tenía planeado hacer por esos días, en cumplimiento de una orden de Caro de no permitirle viajar. Pérez le respondió en una carta del 10 de abril de 1893 al Ministro de Guerra, diciéndole que el objeto de su viaje a Inglaterra era el de ocuparse en asuntos comerciales, ya que como apoderado de la compañía Punchard, Mc Taggard, y Lowther, requería viajar a este país para tratar asuntos relacionados con su negocio. Sumisamente, Pérez Triana también hubo de exponer que el itinerario de su viaje incluía una parada en Puerto Berrío o Pavas para entrevistarse con los ingenieros ingleses encargados de la firma, y que sus actuaciones no tenían nada que ver con política sino con el comercio y su profesión.

El Ministro de Guerra le respondió el 22 de abril de 1893, explicándole a Pérez Triana, que las sospechas del Encargado del Poder Ejecutivo tenían que ver con la constante agitación del orden público originada en el partido radical, y principalmente en el hecho de que *"el señor Pérez Triana, en época no lejana, se ocupó en los Estados Unidos de Norte América de la compra y remisión de elementos de guerra destinados a auxiliar una rebelión armada, [que] bastaban para justificar la providencia del Gobierno."*[608]

El Gobierno reconoció que la solicitud de explicación, además fue causada por la actitud sospechosa de su padre Santiago Pérez, quien al declararse supremo

[608] *Diario Oficial.* Bogotá, 22 de Abril de 1893. Número. 9,142 p. 510 – 511.

director "*de un bando enemigo de las instituciones",*[609] por estar recogiendo dinero de los adeptos al partido radical sin tener un propósito conocido y de una gran cuantía, y también porque como redactor de *El Relator, "ha contribuido con artículos virulentos a encandecer [sic] las pasiones y provocar una revuelta en el país".*[610]

No obstante las suspicacias generadas por el viaje de Pérez Triana, el Gobierno comprobó; mediante el poder que este conservaba, y por una carta fechada el 6 de Marzo de la casa comercial, en la cual se le notifica que era esperado próximamente en Londres; los vínculos comerciales y laborales con los Ingleses. Después de las revisiones, el Ministerio de Guerra resolvió autorizarlo para salir del país de acuerdo al itinerario expresado por el mismo en su carta.

Posteriormente, y con motivo de la conspiración subversiva de Agosto de 1893, descubierta por Caro; fue allanada la casa de Santiago Pérez y allí fueron encontrados unos documentos de Santiago Pérez Triana, referentes a ciertos manejos de los contratos de los ferrocarriles de Antioquia y de Bucaramanga, con las correspondientes responsabilidades legales causadas por dichas cartas. La resolución del Ministerio de Guerra ordenó el traslado de los papeles al Ministerio de Justicia para que en su concepto, pudieran iniciarse los procedimientos judiciales.

El análisis de las cartas hubo de determinar numerosas comisiones pagadas por los representantes de la casa Punchard, encargada de la construcción del ferrocarril de Puerto Berrío a Medellín, y aspirante en 1893 a ganar la licitación para la construcción del Ferrocarril de Santander; a altos empleados del Gobierno, incluyendo al Ministro (embajador) en Londres, Felipe Angulo y al Gobernador de

[609] Ibíd.
[610] Ibíd.

Antioquia, Abraham García. Los escándalos implicaban, igualmente a Santiago Pérez Triana, y requirieron el uso de una comisión investigadora encomendada al Procurador General de la Nación.

Las cartas de Pérez Triana a los representantes de la compañía inglesa, fueron acentuadas en la solicitud, de la famosa prebenda para conseguir los contratos. Pero, es quizá esta la muestra de que, cuando el tema habría de ser económico y el objetivo habría de ser el lucro a través del Tesoro Público, no existió color ni doctrina política que pusiera límites a las distancias y afanes de riqueza. Por supuesto, no son Santiago Pérez Triana, liberal radical hijo del Jefe y ex presidente Santiago Pérez Manosalva, quien además se había comprometido en la guerra civil de 1885 con la compra de armas en Estados Unidos; ni Felipe Angulo, llamado el "tuerto" por padecer de este defecto físico, quien se había constituido en el Ministro estrella de Rafael Núñez suprimiendo periódicos a favor de la regeneración, y sobre quien pesó el estigma bien fundado del lucro personal; quienes habrían de inaugurar el extenso historial de corrupción y sobornos en la Nación Colombiana. Pero, si es este un buen punto de partida para analizar la disposición de elementos de ambos partidos políticos en el entendimiento del arte del aprovechamiento de las posiciones en el Gobierno, para la consecución de réditos personales mediante el canje de favores y contratos, más que para el entendimiento en la dirección de la Nación.

El papel de Angulo consistía en hacer grandes elogios de la empresa Punchard y en "*hacerle atmósfera*"[611] en el Congreso, siendo este Senador por Santander, para favorecer los contratos, bajo una comisión de 9,303 libras. Pero el dinero de los ingleses también podrían incluir, por intermedio de Pérez Triana, un 3% del contrato y de 5,000 Libras más para el Ministro de Fomento Goenaga, con el

[611] *Diario Oficial.* Bogotá, 29 de Junio de 1896. No.10,064 p,619

propósito de acallar su oposición y mal ambiente hacia la empresa. Pero, los documentos probatorios también daban una muestra del engrase que incluyó a la prensa de oposición:

> *Observo que todos los periódicos están contra nosotros por corruptores de esas vírgenes inmaculadas; pero les convendría más irse con cuidado, pues no se necesitará ya mucho más para hacernos publicar todas las cartas, con notas explicativas de cómo fueron arrancadas. No les guarde consideraciones, atáquelos tan recio y tan a menudo como pueda, y en cuanto a sus grandes susceptibilidades, que nos están diciendo que deben contemplarse tanto, pisotéelos.*[612]

Incluso, el destierro de Santiago Pérez Manosalva tuvo que ver con los famosos contratos de los ferrocarriles. Años después de que Caro estuvo retirado de la vida pública, en una entrevista con el escritor Tomás Rueda Vargas, le comentó la verdadera razón por la que había tomado la decisión de aplicarle la expatriación. Además de su responsabilidad por la fragua en el golpe planeado para Enero de 1893 por el radicalismo, del cual era Jefe y no había tomado acciones para impedirlo, y de la violenta oposición desde *El Relator;* lo que rebosó la copa del Presidente fue la propuesta de Santiago Pérez Triana, quien gestionaba la celebración del contrato con la casa Punchard para la construcción del ferrocarril de Antioquia, consistente en que el periódico de su padre moderaría sus ataques si el Gobierno Nacional daba la venia a la negociación. Esta propuesta, intermediada por el Ministro de Fomento, José Manuel Goenaga a quien le llegó por conducto de Alejandro Pérez, sobrino y yerno de Santiago Pérez Manosalva, le fue informada a Miguel Antonio Caro, pero, en palabras del Presidente: *"cual no sería mi impresión cuando el día siguiente, por el contrario, la actitud del periódico*

[612] Carta dirigida de Mac.Taggard a Carlos Tillend Spencer el 10 de octubre de 1893. en: *Diario Oficial.* Bogotá, 29 de Junio de 1896. Número 10,064. p. 619.

subió al rojo blanco; de donde deduje que don Santiago era un farsante, que llevaba el país a la guerra, por lo que me apresuré a decretar su extradición."[613]

Pero, el proceder de Angulo, también habría de ser fuertemente criticado ante las evidencias y pruebas analizadas por el mismo Gobierno. Incluso, descaradamente llegaría a decir: *"Siempre las casas contratantes en Europa y en América necesitarán personas que las auxilien con su experiencia y consejo ante las entidades o Gobiernos que soliciten sus servicios."*[614]

4.4. LIBORIO CANTILLO Y EL ANÁLISIS DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO EN 1894

La *Revista Judicial de Cundinamarca*, que había venido siendo publicada ininterrumpidamente desde 1888, sufrió los embates del ofuscamiento del Gobierno de Miguel Antonio Caro, quien desde 1892 no cesaba de señalar instigadores de los conatos revolucionarios. Durante tres meses, desde el 27 de Marzo hasta el 17 de Julio de 1894, dejó de publicarse este periódico analítico de temas jurídicos escrito por Liborio Cantillo, cuyo ejercicio y publicación, no obstante contradictor, algunas veces desde las vías legales, de la normatividad instaurada desde la Constitución de 1886 y de los juicios emitidos por algunos Jueces, había sido respetado por Rafael Núñez y Carlos Holguín. Pero, Caro ordenó su reducción a prisión, mientras investigaba su participación en los propósitos subversivos de 1893.

Cuando volvió a imprimir, hizo un análisis desde el punto de vista jurídico de las medidas aplicadas por Caro, en un artículo titulado "Garantías Individuales", en el

[613] POSADA ARIZMENDI, Ignacio. Presidentes de Colombia, 1810 – 1990. Op. Cit. p. 184.
[614] *Diario Oficial.* Bogotá, 29 de Junio de 1896. Número 10,064. p.620.

cual habría de exponer su condición de víctima de una persecución injusta desde el 11 de Marzo de 1894, porque el Gobierno hubo de comprometerlo en los planes subversivos haciendo uso de la famosa "ley de los caballos".

Decía Cantillo, que no obstante las peticiones elevadas en diferentes tonos, algunas hechas desde otros periódicos como *El Correo Nacional* y *El Heraldo*, para obtener una precisión de los cargos hechos hacia muchas víctimas de la persecución; el Gobierno continuaba manteniendo silencio. Al retomar este tema en su propia publicación, cantillo fue alentado, según sus palabras, por el propósito de esperar que el Gobierno atendiera serenamente sus acotaciones.

La primera de ellas, estribaba en que; no obstante la comprensión de este abogado porque el gobierno debía atender el descubrimiento de las tentativas para cometer los delitos y prevenirlos, no se explicaba el motivo que tuvo para reducir a prisión a los sospechosos mientras averiguaba si existían o no cargos para hacerlo; "*Cuando lo razonable es probar primero el hecho punible ó el designio de ejecutarlo, para castigar o prevenir según el caso"*[615]

La observancia de la inversión del orden de procedimiento, es decir, del derecho que tiene todo ciudadano de ser reputado como inocente mientras no se le pruebe lo contrario, es injusto con quienes, después de ser reducidos a prisión, el gobierno hubo de otorgarles la libertad por no existir contra ellos cargos comprometedores. La novedosa norma instaurada de aplicar "*el medicamento para cuando aparezca el mal"*[616]*,* distaba mucho del ánimo sereno expresado por Miguel Antonio Caro, con el que aspiraba la aplicación de la justicia de acuerdo

[615] *Revista Judicial*. Bogotá, Julio 17 de 1894. Números 6 y 7. p. 41, 42, 43.
[616] Ibíd.

con una carta enviada al Director del periódico *El Telegrama*[617]*.* Fueron, por el contrario, los productos de las "pasiones agitadas" del gobierno, las causantes de semejante persecución llevada a cabo en Bogotá estos primeros meses de 1894 y justificadas por el intento de una nueva agitación subversiva.

El 12 de Marzo de 1894, Caro envió un telegrama a Núñez informándole la desarticulación de una nueva conspiración que tenía, según el Vicepresidente, ánimos "comunistas" porque además de los cuarteles se proponían asaltar bancos. Caro informó que al parecer, sólo tenía seguidores en Facatativa, pero que para conseguir adeptos en otras regiones, se les hacía creer que era un plan más grande. Aunque reconoció que las figuras más repuntadas del radicalismo fueron convenientemente reprimidos en la conjura de Agosto de 1893, aún persistían focos desconocidos:

> *Los que figuran como cabecillas, Gómez, Reyes, Ranjel, etc., etc., son radicales y aún desconocidos, pero á los comprometidos se les decía que las órdenes emanaban de directorio secreto. Se adelanta investigación. Entiendo que conducta de algunos amigos nuestros, díscolos ó infieles, fomenta indirectamente estos proyectos, que no por ser descabellados dejan de perturbar sociedad.*[618]

[617] Este diario, muy conocido en su época, constituyó un gran aporte al ejercicio de la prensa periódica. Su redactor y propietario fue Jerónimo Argáez , conservador reconocido, que inició su publicación el 13 de Octubre de 1886, con un marcado apoyo a la regeneración, convirtiéndose en el primer esfuerzo llevado a cabo, de imprimir diariamente un periodo por un tiempo relativamente largo; pues desde 1886 se publicó ininterrumpidamente hasta 1897, cuando, después de haber tomado distancia del Gobierno de Caro, en 1893, se convirtió a la oposición conservadora desde el flanco "histórico". Volvió a ser impreso durante un corto tiempo de ocho meses comprendidos entre 1903 y 1904, cuando volvió a cerrar bajo el Gobierno de Rafael Reyes.

[618] Ibíd.

El 14 de Marzo, el Ministro de Gobierno, José Domingo Ospina Camacho, le escribe otro telegrama a Núñez contándole sobre un intento golpista en varios cuarteles por parte de radicales organizados por legiones, y la reducción a prisión de Tiberio Reyes y Juan González, que al parecer hacían parte de un plan más extenso. Ese mismo día, el Ministro le manda un telegrama al Gobernador de Bolívar comentándole del mismo plan con ramificaciones nacionales y de la aprehensión de sospechosos.

La ambigüedad entre los informes de Caro y su Ministro de Gobierno, en cuanto a que, para el primero el movimiento sólo tenía ramificaciones en Facatativa, y para el segundo, era de orden nacional; motivaron la protesta de Cantillo, además por los calificativos de "comunista" y "revolucionario" con los que fue tratado por ser persona muy reconocida en la ciudad. Contrario al Gobierno, *El Correo Nacional* explicó que el movimiento descubierto era de clase "obrera" y que para inicios de abril estuvo perfectamente controlado, y sin participación alguna de los dirigentes del partido radical.

Cantillo preguntó abiertamente al Gobierno que, pese a que no existían indicios de una dirigencia del movimiento conocida, todavía en Julio el Gobierno ni había liberado a muchos investigados, ni había publicado pruebas de sus acciones. Expuso que la "Ley de los Caballos", a pesar de ser tan "bárbara" no decía que autorizaba el procedimiento sin pruebas de los delitos, y que la sociedad también tenía derecho a conocer dichas pruebas. Cantillo agregaba que: *"El silencio hace sospechar que no han existido tales hechos, ó que si llegaron a existir algunos, fueron de tal manera insignificantes, que no se atreve el Gobierno á publicarlos. Esto es lo que sucede siempre que no se busque al delincuente sino al delito*."[619]

[619] Ibíd. p. 43.

La persecución a Cantillo por parte del Ejecutivo fue explicada, según su propio punto de vista, por atenciones hechas a amigos parcializados del Gobierno, o a enemigos propios del abogado, a quienes este les había ganado pleitos judiciales. La "injusticia" cometida con el director de la *Revista Judicial* le llevaba a preguntarse, si el Gobierno hubo de obrar de la misma manera injusta en otras ocasiones, y si la ciudadanía de la capital del país, que había venido soportando asaltos de domicilios, prisiones y atropellos con el pretexto de desbaratar motines, se habría de encontrar cansada y desconfiada del poder de la regeneración. Por último, y como un llamado de atención a quienes tenían el deber de encausar las leyes; el Doctor Liborio Cantillo lanzó una voz razonada desde la situación política que no mejoraba: *"¿Qué hará el Congreso del presente año? ¿Dejará vigente la Ley 61 de 1888, fuente de abusos y causa del permanente malestar social que todo mundo siente? Que responda otro, porque nosotros no tenemos fe en nada de lo que hoy se llama regeneración"*[620]

Desde mi punto de vista, la cacería desatada por Caro en este caso y el silencio desde los periódicos oficiales, estuvieron motivados por un movimiento revolucionario casi inexistente, puesto que el Vicepresidente, que siempre expuso pruebas de las conjuras ante la opinión pública, esta vez otorgó un silencio extraño ante las críticas de Cantillo y a las de los mismos periódicos conservadores "históricos". Por otra parte, era muy difícil que el radicalismo hubiera podido alcanzar, tan solo en ocho meses, siquiera un pequeño grado de organización, cuando en Agosto de 1893 sus dirigentes habían sido desterrados y muchos de ellos aún permanecían en prisiones.

Pero las críticas ejercidas desde la prensa contra funcionarios de la administración Caro, además de los escándalos producto de las acusaciones a Carlos Holguín

[620] Ibíd.

por los contratos de los ferrocarriles, motivaron disturbios materializados en insultos y agresiones en las calles.

El 20 de julio de 1894 hubo una alteración del orden público de un sector de la población contra miembros de la Cámara Legislativa. El origen de la alarma, según el General Jefe del Ejército, Mariano Tovar, fue; *"producida en los habitantes de la ciudad por algunos órganos de la prensa"*[621] que hicieron prever la alteración de la seguridad de la ciudad el mismo día del inicio de las sesiones del Congreso, ante el peligro de una nueva asonada.

Cuando el público presente en las instalaciones del Senado conoció que en la elección para la Presidencia de este, Carlos Holguín había conseguido esta posición; se desató una gritería seguida de insultos, por parte de quienes no estaban de acuerdo con ello. El rumor se desató por las calles aledañas al capitolio y fue necesaria la movilización del "Batallón Vargas No. 5" a proteger el recinto y a un regimiento de Artillería para proteger la casa de habitación del Ex Presidente, ahora Senador por el Departamento de Bolívar. La caballería también fue movilizada a la Plaza de Bolívar con la orden de disolver las manifestaciones de las personas que gritaban. A las 6 de la tarde, y habiendo controlado el desorden, el General Tovar dispuso que salieran doce patrullas de los batallones "Artillería" y "Vargas" a recorrer las calles, apoyar la policía y detener a los revoltosos que no hubieran de obedecer lo dispuesto y ordenado por el bando leído por el Prefecto de Policía. A las doce de la noche la calma se estableció y las patrullas fueron retiradas de las calles.

Pero, durante los dos días siguientes, los revoltosos siguieron profiriendo insultos en contra de Carlos Holguín y recorrieron eventualmente las calles y el frente de la

[621] *Diario Oficial.* Bogotá, 13 de Agosto de 1894. Número. 9,548 p. 780.

residencia del Ex presidente. El Ejército y la Policía no bajaron la guardia. El 22 de Julio un numeroso grupo de personas que habían salido del "circo de chapinero", muchos de ellos recorriendo las calles a caballo gritando "vivas y mueras" exacerbando nuevamente los ánimos de los ciudadanos, hicieron necesaria nuevamente la combinación de las fuerzas militares y de policía, quienes se vieron en grandes esfuerzos para contener la situación debido a que: "*los alborotadores [...] en aquel día eran en mayor número y [...] consiguieron hacer alarmante la situación."*[622]*;* devolviendo la calma después de muchas detenciones y patrullajes permanentes por las calles bogotanas; que habrían de mostrar en los años de mando del Presidente Caro una constante proclividad de sus pobladores a ser instigados a los desórdenes populares.

4.4.1. UN INSTRUMENTO DE SISTEMÁTICA AGRESIÓN.

Las continuas protestas no eran la única piedra en el zapato de Caro. El verdadero callo que le atormentaba su trasegar por el Gobierno hubo de ser las continuas acusaciones desde la prensa conservadora "histórica". De hecho, si alguien le hubiera dicho al Presidente Núñez en 1886, que el periódico *El Correo Nacional,* redactado por su amigo Carlos Martínez Silva, ex Ministro del Tesoro y uno de los grandes artífices de la consolidación política de "La Regeneración" desde el Partido Conservador, habría de ser sancionado por atacar el Gobierno, ocho años después y por otro de sus grandes colaboradores; probablemente vería alarmado el desmoronamiento del apoyo edificador en cabeza de los dos grandes personajes del pensamiento político Colombiano. Pero en 1894, Martínez Silva y Miguel Antonio Caro, distaban mucho de ser aquellos colegas y copartidarios políticos que habían llegado a redactar artículos de mutua identificaron política. De hecho, las páginas del *Correo Nacional* sirvieron frecuentemente para que Miguel

[622] Ibíd.

Antonio Caro expresara sus ideas y consolidara su obra política. Pero, Martínez Silva, desde la pugna por la candidatura Presidencial de 1891, había tomado distancia al apoyar a Marceliano Vélez en contra de Caro; constituyéndose en el primer militante del conservatismo "histórico" desde la prensa. Aunque asumió la derrota, con el advenimiento de Caro en el Poder, y la consolidación de las maneras omnipotentes e intransigentes del gramático para tratar la política, especialmente tras la muerte del gran conciliador del partido; Carlos Holguín, en Septiembre de ese mismo año; Martínez Silva pasó a la oposición abierta desde su periódico, cargando sus columnas con las acusaciones de los cacareados temas de corrupción y desfalcos administrativos.

Tras la publicación en los periódicos de oposición de los escándalos administrativos, y la necedad del Presidente Caro para reactivar un acercamiento participativo con los conservadores "históricos", tampoco habría de esperarse el ablandamiento de los editoriales desde *El Correo Nacional.* Precisamente, el Presidente consideró que Martínez Silva había llevado sus enconos personales al terreno político, convirtiendo *"de tiempo atrás aquel diario en instrumento de sistemática agresión contra la autoridad del jefe del estado y en nuevo y pernicioso elemento de agitación"*[623]*;*además de la publicación de documentos oficiales sin permiso del Gobierno de manera constante, en el último número había publicado documentos de la comisión investigadora de manera adulterada y con sindicaciones al, recién fallecido Presidente Núñez, y al Sr. Jorge Holguín, quienes en los documentos originales, según Caro, no figuran en la parte resolutoria; provocando una alteración de los puntos sustanciales y en los términos del mencionado documento.

[623] Decretos Originales. Ministerio de Gobierno. Sección República. Fondo: Libros manuscritos leyes originales 1733-1937. Tomo 1 1893-94. A.G.N.

El Presidente Caro, no solamente declaró que la larga tolerancia, determinada por los motivos especiales, jurados por Caro ante la comisión investigadora, había llegado a su fin; sino que también consideró que *"es un deber del Gobierno remover las causas permanentes de perturbación"*[624]*;* y por tal motivo se apresuró a expedir el Decreto 1146 del 17 de Noviembre de 1894 en el cual suspendió por seis meses a *El Correo Nacional.*

Durante los días previos a su suspensión, el Periódico de Martínez Silva; que con esfuerzo y perseverancia había conseguido su publicación diaria bajo el módico precio de 5 centavos -el más bajo precio de todos los periódicos Bogotanos en 1894, que en su mayoría costaban 10 o 25 centavos- ; llegó a publicar en su segunda página una sección de carácter permanente titulada "El público necesita ser informado cuanto antes de los siguientes puntos". En ella, se dio a la tarea de insertar los debates del Congreso referidos a las emisiones clandestinas del Banco Nacional, que habrían de ser su "caballo de batalla" en la defensa de la imagen de honestidad que catapultaba para el conservatismo "histórico".

Para Martínez Silva, la suspensión de su periódico fue toda una sorpresa. En su último número, hubo de imprimir sus postreros argumentos. Escribió un memorial al Ministro de Gobierno, en el que empezaba diciendo que el domingo a las 10 de la noche durante la distribución de premios del colegio Pestaloziano, un policía le había hecho entrega de la nota con el anuncio. Refutó tal decisión porque no consideraba haber agredido constantemente a Caro ni se creía un elemento de agitación, ya que su retórica constante durante 4 años había sido la de predicar la paz y las mejoras del Gobierno. Dijo que ni un solo artículo contenía agresiones contra el Jefe de Estado y que tampoco había publicado anticipadamente documentos oficiales y que, precisamente no publicó las conclusiones de la

[624] Ibíd.

comisión investigadora de las emisiones ilegales porque la Cámara no había dado el correspondiente permiso. De hecho el *Correo Nacional* del 17 de Noviembre de 1894, llegó a comentar que la publicación de la comisión investigadora solo sería cuando fuera posible. Lo que el periódico publicó, según Martínez Silva, fue sacado de *"El empleado encargado de tomar notas, desde la barra, sobre los debates de la Cámara, [que] se limitó a hacer un estracto [sic] de los conceptos de la comisión"*[625]

4.5. LA MUERTE DE NÚÑEZ Y HOLGUÍN

Desde 1892, año en que la última contienda política eligiera a Rafael Núñez y a Miguel Antonio Caro como Presidente y Vicepresidente de la República para un periodo que culminaría en 1898; el artífice de La Regeneración, no habría de volver a pisar las calles bogotanas, no obstante las crisis generadas durante el periodo de Caro. Los ideales políticos defendidos con fiereza y decisión por sus dos principales protagonistas, habrían de quedar en las únicas manos intransigentes de Miguel Antonio Caro desde 1894, año que terminó abruptamente con la muerte de Rafael Núñez y de Carlos Holguín solo con un mes de diferencia. Al parecer, Núñez quien había dejado toda la disposición de mando en la persona que más confiaba para evitar las fisuras en el proceso iniciado, trató de evitar, en lo posible, dejar la soledad de su casa en Cartagena, en donde resolvía y daba indicaciones usando el Telégrafo y escribiendo en *El Porvenir,* a pesar de los constantes llamados de sus amigos, e incluso de sus contradictores, para que asumiera nuevamente su cargo.

Pero, de la misma manera en que su carácter capacitado para doblegar voluntades a pulso de persistencia, correspondientemente también se negaba a

[625] *El Correo Nacional.* Bogotá, Noviembre 17 de 1894. Número. 1,211. S.P.

regresar, manteniendo su propósito de proteger la regeneración conservando su figura pública de artífice pero no de ejecutor. Incluso, cuando Caro, recién posesionado de la Vicepresidencia pasó al Congreso tres proyectos de ley para que el Presidente electo pudiera tomar el mando, si así lo desease, desde la ciudad que a bien tuviera; decidió cumplir con el formalismo en la misma Cartagena.

La muerte le sobrevino a Núñez a los 69 años, el 18 de Septiembre de 1894; cuando probablemente se disponía a regresar a Bogotá a calmar los ánimos de los miembros divididos de la regeneración, y Caro evidenciaba un cansancio producto de la paranoia desatada por el enorme descontento en la ciudad, y de los constantes intentos subversivos. Aunque Núñez no era el más entusiasmado con el regreso a la que solía llamar "ciudad nefanda", habría de aplazar mucho esta decisión esperando que Caro lo mantuviera mejor informado por medio del telégrafo de los acontecimientos y de mayores soluciones, en lugar de las quejas acostumbradas de todo el mundo. Según Luís Eduardo Nieto, las relaciones entre Núñez y Caro, se habían distanciado tanto que, este último, según informaciones de un Ministro de confianza del Presidente electo, quizá el de Fomento, Goenaga, le hubo de contar del apodo de "cuarto bemol", con el que el Vicepresidente solía referirse a él; haciendo referencia a unos músicos excéntricos que habían llegado a Bogotá en 1894 y que se hacían llamar los "tres bemoles" porque tocaban con toda clase de instrumento, Caro expresó que con Núñez deberían ser cuatro.[626]

Este impase explica porque el Vicepresidente Caro, no obstante su lealtad a Núñez, no estaba de acuerdo con "tocar con cualquier clase de instrumento" refiriéndose a la capacidad de este último para matizar la política colombiana con

[626] PALACIO, Julio H. Op. cit. p. 56.

funcionarios que lo alejaran de la severidad con la que el Gramático en el Poder dividía a los colombianos entre amigos y enemigos del orden y del Gobierno.

Las acusaciones hechas desde *El Telegrama* a Carlos Holguín por las emisiones clandestinas del Banco Nacional cuando empezó su Presidencia encargada en 1888, tomaron nuevos bríos en 1894 como resultado de la comisión investigadora instaurada por Caro, con nuevas pruebas y debates. La división del partido Nacional demandaba la reorganización de su creador, y desde Bogotá, Núñez recibió numerosas cartas en este sentido. Los defensores a ultranza desde *El Telegrama,* Jerómino Argáez y José Vicente Concha, quien desempeño varios cargos en la administración de Caro, como el de Secretario Privado y el de Procurador General, mantuvieron una postura, ante los debates y acusaciones, de la superior honradez de Caro contrastada con las actuaciones de los funcionarios de Núñez y Holguín. Sin embargo, no sería el mismo José Vicente Concha que en 1896 habría de tomar partido hacia los conservadores “históricos”.

La probidad y el saneamiento de la corrupción en la administración pública fue la bandera para mostrar, que habría de amparar sus estrictas medidas políticas contra la oposición. Caro defendió el orden público cuando Holguín fue nombrado Presidente del Senado y su casa y su persona, amenazadas con insultos y revueltas. El partido Nacional esperaba una reacción de su dirigente máximo, pero a un Núñez cansado, le sobrevino una muerte repentina cuando ya avizoraba con más horror un irremediable viaje a Bogotá, que el descenso a su propia tumba. Los visos de reculada ante el potente e incansable batallar de la prensa política, ahora más recalcitrante con los opositores “históricos” y liberales radicales, quienes tenían enorme poder sobre la opinión pública en Bogota, podría ser entendido cuando expresó las siguientes frases, días antes de morir: “*El gobernante no debe contrariar jamás las corrientes de la opinión pública, y*

oponerse a ellas es lo mismo que nadar río arriba: el fiel nadador se cansa y se cansa la corriente"[627]*.*

El Telegrama acusando el deceso del Presidente Rafal Núñez fue enviado por el Gobernador de Bolívar H.L. Román, acontecido a las 9 a.m. del 18 de Septiembre de 1894. Caro, en una comunicación leída a los Congresistas el 20 de Septiembre, y posteriormente publicada en el *Diario Oficial;* y quizá con el ánimo de no permitir la apertura de mayores banderías de desunión, pretende comunicar la confianza y lealtad expresada por Núñez hacia él, como heredero y continuador de la regeneración; mediante una carta fechada en Cartagena el 23 de Agosto de 1894, 26 días previos a su muerte:

> *El país puede perderse pronto si usted no lo salva. Crea ud. Que su autoridad es omnipotente. No dejará de hacer sino lo que no quiera hacer. Nadie hoy lo contrapesa, pues yo soy de usted hasta la muerte, y no vislumbro otra esperanza que usted. RAFAEL NÚÑEZ.*[628]

Las razones de la muerte de Núñez no dejaron de estar exentas de suspicacias. La versión de un posible envenenamiento hubo de circular durante algún tiempo, incluso llegó a manejarse desde el periódico *Herald* de Nueva York. Pero, al parecer la causa real de su muerte, provino de una costumbre del Cartagenero, que hacía parte de sus preparativos antes de viajar a Bogotá a tomar la dirección del Gobierno. Aunque sus médicos le aconsejaron que evitara la ingestión de un reconocido purgante de sal de frutas, el temperamento perseverante del mandatario no permitió obviar el remedio, ya que conocía el trayecto por el Magdalena al que habría de someterse en los días siguientes y su propensión a contraer enfermedades estomacales. El purgante, muy común en la costa tuvo

[627] Ibíd. p.72.
[628] *Diario Oficial.* Bogotá, viernes 21 de Septiembre de 1894. Número. 9,582.

sus efectos: "*produciéndole este un efecto emético que no se esperaba, se le administró otro remedio indicado para aliviar el primero al ilustre enfermo. Objeto que ya no pudo lograrse habiendo sobrevenido una fiebre desastrosa"*[629]

Las manifestaciones de duelo publicadas en los medios periodísticos de la capital fueron numerosas. Ni siquiera en los opositores se registraron insultos al occiso, sino reflexiones sobre el futuro de la Nación. Pero lo mismo no opinaron algunos detractores, como lo demuestra un panfleto escrito desde Costa Rica y atribuido a Juan de Dios Uribe, quien desde el destierro, no vaciló en expresar su odio ante la tumba del Presidente muerto, como una retaliación del tiempo.

> *Acaba de tragarse la tierra con asco al monstruo de la tiranía. [...] La tumba de Núñez es aurora de resurrección liberal. [...] dicen que el Tirano se revolcaba iracundo en la piara de su lecho de muerte. En su hidrofobia horripilante vio abierta para el las agallas del infierno, oyó las maldiciones de los hombres que execraban su memoria y el ladrido de los perros hambreados que desgarraban sus carnes venenosas. Su cabeza deforme estaba sostenida en un misal difunto, su cuerpo contra hecho lo cubría un hábito de salesiano y sus pies descansaban sobre los ejemplares mutilados de la Constitución de Colombia.* [630]

Por su parte, para Carlos Holguín, las consecuencias de las acusaciones azuzadas por los periódicos conservadores "históricos" y radicales, habrían de tener un propósito cumplido en el menoscabo de su salud. Decidió dejar su puesto en el Congreso y retirarse a Suesca por unos días para buscar en el sosiego del campo una recuperación alejada de la agitada vida de la capital. Pero su reposo no duró mucho tiempo. Regresó a Bogotá a continuar con su labor en el Senado, y

[629] *El Correo Nacional.* Bogotá, Noviembre 16 de 1894. Número 1,210. S.P.
[630] RESTREPO, Antonio José. Op. cit. p.115.

a seguir soportando los embates de sus antiguos amigos y sus perennes enemigos. A las dos semanas tuvo que retirarse nuevamente tratando de recuperar, esta vez en Anapoima. Cuando tuvo noticia de la Muerte de Núñez en Septiembre de 1894, sus dolencias cardiacas pudieron agravarse y una nueva afección renal le sobrevino. Decidió regresar a Bogotá, y al lado de su familia recibió en su casa la visita de muchos bogotanos, incluso de quienes sólo unos meses antes lo atacaban. Un ataque cardiaco final, le ocasionó la muerte el 19 de Octubre de 1894. Carlos Martínez Silva, quien se había alejado políticamente de Holguín, y gran encendedor de debates públicos contra él, por cuenta de sus publicaciones desde *El Correo Nacional,* llegó finalmente a expresarse sobre su repentina muerte: "*Al fin hallo la paz el varón fuerte para quien la vida fue continuada milicia; al fin encontró el reposo el que en la vida no lo conoció; al fin el espíritu inquieto, sediento de luz y de verdad, ha llegado al centro de toda luz y de toda verdad"*[631].

4.6. EL LEVANTAMIENTO DE 1895: LA CONSPIRACIÓN MATERIALIZADA.

Mediante el Decreto No. 10 del 23 de Enero de 1895, el Presidente Caro, declaró turbado el orden público en el Departamento de Cundinamarca, de acuerdo a las facultades que le concedía el artículo 121 de la Constitución y previo dictamen del Consejo de Estado, decretando también el Estado de Sitio. Después de recibir informes de la real situación, dictó el Decreto No. 18 del 28 de Enero de 1895, en el que, modificándolo, habría de declarar turbado el orden público en toda la república. Posteriormente creó jefes civiles y militares para los Departamentos, y el 29 de Enero estableció la pena de muerte para ciertos delitos relacionados con la perturbación del orden público, tales como el incendio voluntario y el uso de

[631] HOLGUÍN Y CARO, Álvaro. Op. cit., p.1240.

explosivos utilizados por fuera de alguna acción de guerra, así fueran apenas una tentativa; además del espionaje y la traición.

El Ministro de Gobierno, Manuel Antonio Sanclemente pasó a ser reemplazado por el enérgico, y mano derecha de Caro, José Domingo Ospina Camacho. El mando de los ejércitos que habrían de aplacar la situación estuvo a cargo del General Rafael Reyes y del General Casablanca, siendo rápidamente sofocada.

El 9 de Marzo de 1895, el Presidente Caro decretó la conformación de una comisión investigadora de los hechos, especialmente preocupado por los orígenes políticos de la revuelta que adquirió un carácter nacional. Desde el inicio de su Gobierno, Caro no era ningún irresoluto a la hora de imponer el orden público. La seguidilla de revueltas iniciada con el motín bogotano de enero de 1893, continuó con la conjura desmantelada a nivel nacional en Agosto de ese mismo año, con un nuevo intento desde la capital del país en Marzo de 1894, los intentos de revueltas de Julio de ese mismo año en Bogotá; y la definitiva materialización de las conspiraciones en Enero de 1895 con el estallido de la pequeña guerra civil.

La comisión investigadora decretada por el Gobierno el 9 de Marzo de 1895 fue encomendada a Máximo Nieto, como Jefe, y con Rafael Camacho y Francisco San Miguel, como Secretarios, y sus funciones para averiguar y calificar las responsabilidades políticas de las personas y de los auxiliadores que participaron en la rebelión, fueron dotadas de unas herramientas extraordinarias para llevar a cabo su labor. En primer lugar, a la comisión les fueron entregados los implicados bajo su jurisdicción, a quienes podía penalizar con multas o arrestos, en el caso de que se resistieran a los interrogatorios. En segundo lugar, subordinó las jefaturas policiales y a las autoridades civiles y militares, a las órdenes emanadas de la comisión, con la obligatoriedad de cumplirlas y hacerlas obedecer. En tercer lugar,

Caro le dio un carácter militar, al ponerla a funcionar adjunta al Ministerio de Guerra, y sus miembros habrían de contar con nombramientos militares.

El partido liberal radical, había encontrado cierta división entre las antiguas generaciones y las juventudes renovadas con un espíritu guerrerista. Este hecho, generó una floja unidad de mando y de organización, sumado al arrojo envalentonado y desatinado de los llamados por el Gobierno, "segundones" del radicalismo, quienes creyeron además, contar con el apoyo de conservatismo "histórico". Sobre la culpabilidad de los periódicos, la comisión investigadora comenta que:

> *Su prensa de oposición se recargaba intencionalmente con los colores de la insidia, la difamación y la calumnia, se tramaba la conspiración en esta ciudad y en las principales de la República. Aquí, organizaron diversos cuerpos y batallones en los diferentes barrios de la ciudad, cada uno con sus Jefe y oficiales*[632]

El propósito original de atacar las estaciones de Policía, los edificios gubernamentales y de apresar a los Jefes del Gobierno y los Ministros, fue encargado a cuerpos guerrilleros, que al mismo tiempo debían impedir que el Ejército reaccionara para evitarlo. Desde abril de 1894, se venía fraguando esta acción, pero, a decir de la comisión investigadora, y pese a ser descubierto el plan que conllevó la expulsión de los Jefes del movimiento; estos pudieron ponerse en contacto desde el exterior, con los subversivos que continuaron en el país. A todo esto, se le sumaron los adeptos desde el conservatismo "histórico", quienes instigaron desde la prensa con dos contenidos que habían venido siendo ventilados desde 1891. Los llamados "Panamismo" y "Clandestinismo", fueron los

[632] *Diario Oficial.* Septiembre 2 de 1895. Número 9819. p. 604.

temas que lograron hacer causa común a las dos facciones opositoras, aunque en menor medida para el radicalismo, porque en el asunto del ferrocarril de panamá, uno de los implicados era Santiago Pérez Triana, hijo del dirigente radical expatriado, Santiago Pérez Manosalva. Estos temas originaron los mayores debates hacia el Gobierno, pero a decir de la comisión investigadora:

> *Nadie esperó a conocerlos ni a estudiarlos en su esencia y detalle; fueron mal comprendidos y peor comentados, y cada bando político pretendió achacar a sus contrarios la responsabilidad de los hechos, sin tener en cuenta la filiación de los sindicados y aún sin tener en cuenta quienes fueran estos. [...] Suscitada la cuestión emisiones clandestinas, la prensa rebelde se apoderó de ella y le dio tan absurdas y estrafalarias formas, emitió juicios y sugestiones tan malévolos, la elevó a tal magnitud, hizo sobre ella cálculos tan extremados, aprovechando la excitación y la avidez que por entonces reinaban en los círculos sociales y políticos, que realmente se convirtió en oráculo respecto de estos puntos y les fue creído cuanto dijo sobre ellos.*[633]

La agitación política por estas acusaciones llegaron, verdaderamente, a provocar un clima preocupante, no solamente entre los ciudadanos sino también trasladado al Congreso, en donde las injurias, difamaciones y defensas, llegaron a provocar los atentados contra Carlos Holguín en 1894, cuando era Senador por Bolívar, y según algunos, le provocarían un abatimiento moral que le llevaría a la muerte poco tiempo después.

[633] Ibíd.

Una muestra del excesivo autoritarismo de Caro, pudo verse cuando, después de la muerte de Núñez y Holguín, los conservadores "históricos" trataron de acercarse al Gobierno solicitando su participación activa en él. Pero Caro se negó esgrimiendo el argumento de que: *"pretendían que se les admitiera como elemento necesario del Gobierno, lo cual, atendida la aceptación que ellos habían hecho del programa radical, no se les podía conceder".*[634]

La negativa del Gobierno catapultó aún más las críticas y los puntos de convergencia entre los dos bandos opositores, además de un quebrantamiento persistente de las doctrinas de la regeneración y del llamado "partido nacional" a cambio de sólo la facción nacionalista del partido Conservador, y en contravía de la otrora unidad que hubo de posibilitar la consolidación de "La Regeneración", pero que, después del anuncio de la candidatura Núñez – Caro en 1891, sucumbió ante lo dicho en las publicaciones y se fraccionó crecidamente.

> *Explotados [...] malévola y hábilmente, produjeron gravísima perturbación en el criterio de una gran parte de los colombianos y especialmente en los que componían la fracción histórica, la cual contaba en su seno buenos elementos, que por esta misma razón eran más susceptibles de ser engañados. [...] esta fracción incurrió en el error de creer en todo lo que el periodismo agitador inventó, [...] y el partido rebelde [...] se sintió invencible con la adquisición de este auxiliar.*[635]

El pacto con los conservadores "históricos", en ocasiones expresado tácitamente y en otras no, le permitiría al radicalismo una alianza, pensando más en la guerra que en las elecciones. No obstante, la mayoría de los conservadores "históricos"

[634] Ibíd.
[635] Ibíd.

desconocían esta alianza, que fue firmada por individuos que no tenían el suficiente peso dentro del partido, y tampoco habrían de tener unidad frente a un llamado a las armas. Estos documentos firmados cayeron en manos del Gobierno quien expuso que; *" las firmas puestas al pie de este pacto, harán pesar sobre los que lo suscribieron, toda la responsabilidad de la guerra que asoló al país, y todo lo que se escriba y se diga para eludir esa responsabilidad o desvirtuarla, no alcanzará ni a borrar el menor rasgo de esas firmas".*[636] Algunos "históricos" que no firmaron el pacto, si contribuyeron con dinero al proyecto, según la comisión investigadora.

Pero, la revuelta avanzó desde una triple contradicción en 1894. Por un lado los del centro liberal enviaron a Antioquia una comisión organizativa de comités; al mismo tiempo que los del "Olimpo" enviaron una comisión para calmar los ánimos y no precipitarse a la guerra, y los conservadores "históricos" otra comisión para informar a su líder, el General marceliano Vélez, de los acuerdos suscritos con el radicalismo en Bogotá. El resultado por la desinformación de los comités conllevó a que cada facción esperara y confiara en los trabajos de los otros y, al mismo tiempo, subordinaron su acción a los resultados de los demás. Por esta razón, según la comisión investigadora, de más de dos mil comprometidos, solo acudieron unos doscientos a los puntos de reunión la noche del 22 de Enero en Bogotá, y en las otras ciudades muchas menos personas, tal vez, esperando noticias de el estallido de la chispa revolucionaria desde la capital.

La actitud de la prensa opositora durante los días previos al levantamiento, despertó las sospechas del Gobierno, ya que en una actitud sosegada había llegado a expresar, que no estaba lejano el día del castigo a quienes habían ultrajado a la Nación, e incluso llegaron a hablar de la honradez del Presidente

[636] Ibíd.

Caro, mientras por debajo de la mesa se preparaba la aprehensión y asesinato del Jefe del Gobierno durante el viaje que tenía proyectado a las afueras de la ciudad. La salvación del mandatario, a decir de la comisión investigadora, llegó por cuenta de *"la noción clara que existe en la conciencia de todos, de la injusticia que envuelve todo atentado contra su persona."*[637]

En la noche del 22 de Enero, a las casas de Leoncio Álvarez y Rafael López llegaron sesenta hombres a quienes les fueron pasadas unas "remingtons" por el patio trasero. Cuando la policía los sorprendió, dispararon sobre el Agente Benjamín Ramos, matándolo, y se suscito una pequeña batalla en la que, disparando sobre la policía desde los techos de las casas, lograron escapar. Esta primera acción frustrada que duró desde las 8 y media de la noche, hasta la 1 de la mañana, contribuyó al desánimo de quienes debían hacer acciones en otros puntos de la ciudad.

Quienes estaban encargados de comandar ciertos grupos en la ciudad; Rafael Uribe Uribe, Pedro Daza, Marco Herrera, Ignacio Soto, y Marco A. Gutiérrez, se quedaron esperando a los hombres para armar sus respectivos grupos. Uribe envió a Ignacio Soto a reunirse con unas personas en la iglesia de San Diego, pero estas ya no se encontraban allí porque estaban siendo perseguidas por la Policía, que además también tenía conocimiento de la identidad de algunos comandantes porque estos habían robado unos caballos esa noche. Después marcharían hacia Facatativa para encontrarse con los allí sublevados.

El levantamiento había sido preavisado a la Policía en Bogotá por colaboradores, y parte de su labor, en los días previos al 22 de Enero de 1895, consistió en el seguimiento a los radicales sospechosos, especialmente al General Santos Acosta.

[637] *Diario Oficial.* 3 de Septiembre de 1895. Número. 9820. p.608.

"*A este sistema de vigilancia se debe exclusivamente el haber podido sofocar la revolución en la capital porque se coartó la libertad de obrar a los principales actores, y pudo tenerse noticia oportuna de cada movimiento."*[638] Posteriormente se levantaron en armas en Facatativa, 100 hombres al mando de Víctor Carrillo, Inocencio Delgado y Vicente Aldana, quienes mataron a cinco soldados encargados de custodiar el coreo.

Los de Facatativa, marcharon por algunos pueblos de Boyacá llegando a reunir 700 hombres, pero al volver a esta ciudad fueron batidos por el General Rafael Reyes el 29 de Enero, y Siervo Sarmiento huyó hacia Villeta bajo una constante persecución. Entre los protagonistas radicales de la movilización, se encontraba el abogado y periodista Liborio Cantillo, quien a mediados de 1894 había clamado desde su *Revista Judicial,* la "injusticia" cometida contra muchos liberales e históricos, comprometidos con confabulaciones, y que a su modo de ver, el Gobierno nunca probó. Pese a su auto reconocimiento como pacifista un año atrás, se le hubo de ver en 1895 en Ambalema con una fuerza de rebeldes y pronunciando discursos en Vianí, a finales de Enero. Todos los rebelados de Cundinamarca acudieron a esta población a ponerse a órdenes del Dr. Cantillo. De hecho, fue uno de los organizadores de la revuelta en Bogotá, en compañía de Juan Félix de León, Tomas Abello, y Manuel Núñez, con quienes conformó un comité encargado de preparar la guerra desde la capital y las poblaciones cercanas.

Los hechos del levantamiento armado se llevaron a cabo, especialmente en Cundinamarca, en Tolima y Boyacá, con grupos pequeños de radicales. Por el contrario, en tan solo 15 días después del pronunciamiento del estado de

[638] *Diario Oficial.* Bogotá, 4 de Septiembre de 1895. p.611.

conmoción del orden público, el Gobierno logró reunir una fuerza de 20 mil hombres.

La comisión investigadora, logró reunir también al poco tiempo de la victoria del Gobierno, numerosas pruebas de las conspiración, basadas en los testimonios de los rebeldes, la organización de sus fuerzas con los nombres de los oficiales nombrados por el radicalismo y de sus soldados, y la reconstrucción de cómo se llevaron a cabo los movimientos de las tropas en cada Departamento. Pudo conocerse, por ejemplo, el apoyo de ciudadanos Venezolanos en el movimiento en Santander, y las maniobras para entrar armas desde la frontera.

Después de la expulsión de Santiago Pérez Manosalva en 1893, el partido liberal radical, habiendo quedado acéfalo, ya que ninguno de sus antiguos dirigentes había querido tomar la vocería; continuó escuchando las voces de sus personalidades eminentes. En declaraciones posteriores de los rebeldes, fueron explicados los esfuerzos de algunos de ellos. Un ejemplo, fue el Dr. Nicolás Esguerra, que siempre se mostró partidario de las vías pacíficas. En el Departamento de Antioquia, según declaración tomada de Mario Arana, conservó este mismo pensamiento Fidel Cano, director de *El Espectador.* Sin embargo, en este Departamento fueron acordadas dos juntas revolucionarias. La Velista y la radical; habían llegado al acuerdo de, una vez logrado el poder, se estableciera a Marceliano Vélez Presidente por ocho años, teniendo como medida primordial la derogatoria de las leyes extraordinarias y la reforma a la constitución en los temas tocantes a la libertad de prensa, el respeto al sufragio y la responsabilidad presidencial. En Bogotá, la Junta conservadora “histórica” estuvo constituida por Jorge Roa (periodista editor, y curiosamente autor de la ley de facultades extraordinarias o de “los caballos”) y el General Jaime Córdoba; junto a los Representantes por Antioquia, Pedro Nel Ospina, Ramón Arango y Francisco de P. Múñoz.

En Ciudades como Manizales, los velistas también hicieron juntas, pero no con los radicales, sino con los conservadores "nacionalistas" que apoyaban a Caro y con el objeto de sostener el orden público. Incluso, llegaron a apresar algunos radicales por prevención, y hubo quienes llegaron a sostener que los conservadores "históricos" instigaron a la guerra al liberalismo radical, quienes no se habrían lanzado a ella sin los recursos económicos y militares de estos; usando la estratagema de un pacto, para después dejarlos sin su definitivo apoyo. La "traición velista"; ocurrida después de que habían sido ellos mismos quienes estimularon el levantamiento, fue fundamental en la rápida derrota del liberalismo. A decir de casi todos los mandos medios radicales que participaron en la revuelta: *"pues la historia del país no presenta ejemplos en los anales del referido partido de bestialidad semejante"*[639]*,* según comentario de Adriano Villegas, miembro de la junta radical del Tolima.

Una vez el intento revolucionario fracasó, los radicales no guardaron en reserva los pactos acordados con los conservadores "históricos". Rafael Camacho, comisionado del General radical Siervo Sarmiento, en el proceso de rendición, se lo confesó al General Carlos Cuervo Márquez, enviado por Rafael Reyes. Al ser preguntado Camacho sobre el convenio con el General Marceliano Vélez, este respondió a la comisión investigadora que él había creído en el pacto entre los "velistas" porque así se lo había hecho saber el Sr. Diego Mendoza Pérez (ex director de *El Relator),* encargado especial de las negociaciones con el General Vélez.

Pese, a las declaraciones constantes de los mandos medios radicales, referidas al pacto entre el General Marceliano Vélez y el Liberalismo Radical, el encargado de

[639] *Diario Oficial.* Bogotá, 26 de Septiembre de 1895. Número.9832 p.655.

finiquitar este pacto, Diego Mendoza Pérez, fue enfático en su interrogatorio en negar la existencia de éste. El periodista radical, al ser confrontado con estas declaraciones, no tuvo más remedio que decir que el famoso pacto con los velistas no fue otro que una misma resolución de apoyo a ese movimiento que ya se había señalado desde 1893 en los editoriales de *El Relator,* y que; *"por medio de la prensa se había popularizado mucho la idea de esa combinación, en términos de que el programa del General Vélez fue el programa de El Relator. Todo lo cual contribuyó a que el Señor Camacho hable de pacto, cuando debió hablar de opinión general y unánime"*[640]

Pero una cosa diferente era un consenso de opinión materializado a través de una guerra civil para tomarse el poder por las armas. Jorge Roa, aceptó las reuniones con los radicales y también el envió de un comisionado para dar información de ello al General Marceliano Vélez, pero se negó a confesar el nombre del mensajero.

Por su parte, Rafael Uribe Uribe, llegó a expresar en una carta a Leocadio Lotero en Medellín, el 1º de Enero de 1895, que la revolución sólo podía hacerse con la ayuda de los conservadores, para, junto a los radicales, adelantar una reforma política a la Carta de 1886, que incluyendo la libertad de prensa sujeta a las leyes, y la derogación de facultades extraordinarias e irresponsabilidad presidencial, no obstante, conservara los convenios con la iglesia y el papa. *"La restauración republicana debe hacerse con la oposición conservadora, o será efímera. O peor todavía: será origen de graves faltas para el liberalismo; eso hay que decirlo y repetirlo aunque los amigos griten y chillen."*[641]

[640] *Diario Oficial.* Bogotá, 28 de Septiembre de 1895. Número.9834 p.663.
[641] *Diario Oficial,* Bogotá, 5 de Octubre de 1895. p.687.

La clave para un levantamiento exitoso en todo el país, dependía de un buen golpe de mano en Bogotá, en donde los asaltos a figuras claves del Gobierno, fueran ejecutados por un buen número de hombres perfectamente organizados. Pero, fue muy probable que los continuos intentos de agitación en la capital, la estrecha vigilancia de la policía y el recuerdo de familiares y amigos aún en las prisiones por los intentos de motines y asonadas de 1893 y 1894, hubieran hecho mella, más en la decisión, que en el ánimo final de ejecución, de los ciudadanos dispuestos a subvertir el orden. Precisamente, Rafael Uribe Uribe, quien se había declarado como un participante más del levantamiento y no como uno de sus líderes, terminó achacándole el fracaso, en su declaración sobre los hechos, a la:

> *Unánime e incalificable cobardía del pueblo bogotano, y acaso también por malas disposiciones de los directores del movimiento. [...] cuando dos mil hombres están listos para caer a las doce de la noche sobre todos los puntos de ataque, teniendo cada sección sus Jefes reconocidos y sus instrucciones recibidas, acertaron todos a coincidir en un mismo pensamiento de inercia y pusilanimidad de suerte que a puntos donde debían concurrir trescientos no fueron sino cuatro o no fue nadie.*[642]

La cacería de desafectos a su Gobierno continuó con los empleados gubernamentales, saltando sobre las barreras de independencia de los Poderes del Estado. Hacia finales de 1895, el Presidente Miguel Antonio Caro había desatado el precepto excluyente de “quien no está conmigo está en mi contra”, blandiendo la espada de la limpieza administrativa contra quienes hubiera de tener sospechas de cualquier clase de malquerencias hacia su administración. Mediante el Decreto 89 de 15 de Marzo de 1895, destituyó de su cargo, a los empleados

[642] *Diario Oficial.* Bogotá, 19 de Octubre de 1895. p.718.

públicos que tomaron armas contra el Gobierno. Pero su severidad habría de pasar por encima de los participantes específicos, y se encausaría también contra quienes llegaron a expresar de pensamiento u omisión sus molestias. Con El Decreto No. 97 de 1895 del 29 de Marzo, autorizó al Ministerio de Gobierno para remover a los empleados del Poder Judicial que hubieran sido "*desafectos al Gobierno, o a las instituciones en la rebelión que acaba de ser debelada.*"[643]

4.7. SEMBRANDO VIENTOS

Después del estruendoso fracaso del movimiento revolucionario fraguado con premura por el liberalismo radical y algunos miembros de la facción conservadora "histórica", más concretamente por los partidarios del General Marceliano Vélez en 1895; el Presidente Miguel Antonio Caro intensificó la labor policiva y represora contra sus miembros en la capital, incluyendo, por supuesto, a quienes se expresaban desde los periódicos. Motivado por la fuerte oposición y con la alerta necesaria para no permitir futuras conspiraciones; habría de dar inicio al año de 1896 bajo la mirada minuciosa a los periódicos de oposición.

4.7.1. EL HERALDO.

En Enero de 1896, el Ministerio de Gobierno, mediante resolución número 84 del 22 de Enero de 1896 expedida por el Ministro Rafael Reyes; y después de una revisión de los sueltos (es decir de los artículos aparecidos dentro del mismo periódico) llamados "orden público" y "contrabando" publicados por el periódico *El Heraldo* en los número 592 y 593, correspondientes al jueves 16 y al domingo 19 de Enero de 1896, consideró que en el primero de ellos, se había hecho alusión a una noticia falsa y alarmante, atribuyéndole a una parte del Ejército Nacional un

[643] *Diario Oficial.* Bogotá 9 de Abril de 1895. Número 9,727 p. 233.

acto de inmoralidad, "*causando de esta suerte turbación social, por haber prohijado la noticia de un periódico que circula dentro y fuera de la capital"*[644]*. Y* en el segundo, se hizo un comentario a un suelto del periódico *El Correo nacional* titulado "Contrabando" en el cual, a decir del Gobierno, *"se atenta gravemente contra la honra de un alto empleado de la República, con una afirmación infundada y calumniosa".*[645]

El Director de *El Periódico* es llamado, en un comienzo a dar una explicación satisfactoria sobre los puntos aludidos, y lo único que hace, a juicio del Ministerio de Gobierno, es *"rectifica[*r] *de modo incompetente"*[646] lo relacionado con la insurrección de un batallón, pero en lo que respecta al cargo hecho al Gobernador, este se ratifica tácitamente*.* Además, el Gobierno explicó que el nombre del Gobernador, aunque no estaba expresado, "*Está suficientemente claro en el comentario aludido"*[647]

Las leyes, que según el Ministerio de Gobierno, quebrantó *El Heraldo,* tenían que ver con el caso previsto en el ordinal 7.º del Artículo 4.º del Decreto número 151 de 17 de Febrero de 1888, sobre prensa; es decir, la publicación de noticias falsas que podían generar alarma o peligro para el orden público, decidiendo aplicarle el artículo 1.º del Decreto 910 de 1889, que hablaba específicamente que aquellos periódicos que obraban deliberadamente, podían ser, sin perjuicio de la suspensión del periódico, multados desde 10 hasta 200 pesos. La multa aplicada, en este caso, correspondió precisamente a la pena máxima y la misma resolución ordenó la consignación dentro de las 24 horas siguientes, en la Administración de Hacienda Nacional.

---

[644] *Diario Oficial.* Bogotá, 24 de Enero de 1896. Número. 9,930 p.81.
[645] Ibíd.
[646] Ibíd.
[647] Ibíd.

El Señor José Joaquín Pérez no se contuvo con la multa de 200 pesos, y el 24 de Enero publicó una hoja volante, con una redacción, a decir del Gobierno, bastante irrespetuosa y agresiva contra el Ministro Rafael Reyes, quien habría de exponer, en una nueva resolución del Ministerio de Gobierno que, no obstante su desatención a los insultos se siente comprometido con el deber de hacer acatar las leyes, y que dicho periodista habiendo constituido un caso de reincidencia tratada en el artículo 23 del mismo Decreto 151 de 1888, además: *"conforme al artículo 346 del código Político y Municipal, los empleados con jurisdicción, que extiendan sus funciones a toda la República, pueden castigar á los que les desobedezcan o falten al debido respeto, con penas correccionales consistentes en multas hasta de cien pesos y arresto hasta por quince días"*[648]*.*

Basándose en este código, Reyes le impuso la multa de 100 pesos y quince días de arresto. Pero además, y bajo el amparo del artículo 23 del consabido 151 de 1888, que trataba sobre la reincidencia y que permitía la clausura hasta por seis meses del periódico, este fue ejecutado en la misma penalización máxima. José J. Pérez terminó pagando por su desafío al Gobierno, una multa total de 300 pesos, su periódico fue clausurado seis meses y además termino 15 días confinado en el panóptico.

Pero, la historia de *El Heraldo,* no hubo de terminar con las severas amonestaciones, ni con la ira del periodista aplacada a punta de incomodidades en una celda. La familia de Pérez, algunos de ellos socios de la publicación, elevaron un memorial al Ministerio de Gobierno pidiendo indulgencia con la medida. Este fue firmado por Ana Orantía de Pérez, María Josefa y Lázaro María Pérez, quienes aduciendo ser socios del Sr. José Joaquín Pérez, en la proporción de tres cuartas partes, también alegaron que la clausura de la imprenta atacaba el

[648] *Diario Oficial.* Bogotá. 29 de Enero de 1896. p.97.

derecho de propiedad de personas que no habían cometido delito. Su alegato estuvo basado en el Artículo 32 de la Constitución que decía: "en tiempo de paz nadie puede ser privado de su propiedad ni en todo ni en parte, sino por pena y apremio", Y que a ellos, que no habiendo sido condenados a ninguna pena, el Gobierno les había vulnerado su derecho a la propiedad, estimando el perjuicio causado en 100 pesos diarios.

El Ministro de Gobierno, Rafael Reyes, fue conciente, según sus palabras, de la consideración que debía tenerse a una señora respetable, a una viuda y a los hijos que firmaban el memorial, familia de quienes era amigo personal. Sin embargo, también dijo que no podía entender la aplicación de un deber como si se hubiese cometido una falta. Explicó, que si bien era cierto que los Gobiernos debían proteger la propiedad; también los ciudadanos debían respetar la tranquilidad pública y la honra de las personas. Y que: "*la cosa que constituye la propiedad es un instrumento que puede servir para el bien y para el mal, el uso ilícito y nocivo que de tal instrumento se haga no es "derecho sagrado", no queda comprendido en el derecho de propiedad, porque no hay derecho contra derecho".*[649]

Dijo también Reyes, que el Decreto de prensa regente en 1896, estableció diferentes grados de responsabilidades y no penalizaba a la imprenta sino en caso de reincidencia; pero la clausura temporal de ella no fue, a decir del Gobierno, una expropiación sino una manera de corregir los abusos continuos. Por esta razón, una persona detenida no podía seguir ejerciendo su industria sin que esto fuera causa de reclamo de indemnizaciones.

[649] *Diario Oficial.* Bogotá 8 de Febrero de 1896. Número. 9,943 p.134.

Pero Reyes se blandea, quizá por su conocimiento personal de la situación, y aunque no era una falencia de las normas, si podría haber tenido cierta dificultad en la interpretación, que no fue convenientemente prevista en los Decretos que regían en el momento. No obstante, el Ministro de Gobierno, reconociendo que los condueños no tuvieron injerencia en las publicaciones, "*y aunque el Gobierno no está obligado a atender, en la aplicación de un Decreto preexistente, a circunstancias en el no previstas, juzga, si, que es de equidad tenerlas en cuenta en el ejercicio que le es potestativo"*[650], y resuelve revocar la clausura de seis meses impuesta a la imprenta de *El Heraldo,* para que pudiera quedar a disposición de los socios con la advertencia de la no repetición de los abusos causantes de la corrección.

Las medidas tomadas para la prevención de una nueva perturbación del orden público, después del levantamiento de 1885 no daban espera en la capital. Por esta razón, una nueva reorganización de la Policía fue decretada por Miguel Antonio Caro, desde Sopó el 21 de Enero de 1896, con Rafael Reyes como Ministro de Gobierno. En 1896, hubo de reconocer que debido a la escasez de personal, el cuerpo había venido presentando un servicio ineficiente de acuerdo a las necesidades de la capital. Por esta razón, decidió reformar el Decreto 1000 de 1891 establecido por Holguín, y dictar el número 10 de 1896, en el cual reformó y organizó nuevamente el cuerpo de Policía. En primer lugar, fue llamativa la mejora de los sueldos mensuales y la posibilidad de ascensos. Los agentes fueron divididos desde 4ª Clase hasta 1ª clase. El de 4ª clase habría de ganar 50 pesos mensuales, y el de 1ª clase 65 , si su labor era de vigilancia. Pero si su trabajo está comprendo dentro de la "División de Seguridad"; su sueldo habría de ser de 80 pesos mensuales. Cuando dichos agentes, o los oficiales mismos, tuvieran que salir de Bogotá en misiones especiales, ganarían un sobresueldo de acuerdo

[650] Ídem.

a cada “miriámetro” de camino. El mejor sueldo lo recibía el Comisario Jefe de la División de Seguridad con 200 pesos, el Comisario especial con 200 pesos y los Comisarios Jefes de divisiones, con 130 pesos. Cada clase de Agentes tenía sus propios Comisarios, y de acuerdo a esta categorización variaría también su sueldo.

El Cuerpo de Policía tendría responsabilidad directa al Ministerio de Gobierno, pero este a su vez, podía delegar su servicio a las Gobernación de Cundinamarca o al Alcaldía de Bogotá. El número de Agentes era de 200 para cada una de la cuatro clases. Es decir, la fuerza disponible sería de 800 agentes, sin contar con los Directores y el Cuerpo Administrativo. Cada agente que laborara durante cuatro años seguidos, presentando buena conducta se le podría aumentar el sueldo un 25%, y si duraba 12 años tendrían derecho a una recompensa de 1000 pesos para los agentes y de 2000 pesos para los demás empleados.

Pero, sus faltas también fueron castigadas. Curiosamente, la incorporación obligada al Ejército por cuatro años, era la instituida para la falta más grave. Por ejemplo, la deserción o la traición. Pero, los beneficios para los incorporados contenían también la obligatoriedad de hacerlo mediante un compromiso firmado de tres años mínimo, es decir sin la posibilidad de poder renunciar antes de este periodo. La salida del cuerpo antes de este periodo sería considerada como deserción, y el agente debería pagar cuatro años en el Ejército.

4.7.1. EL MANIFIESTO DE LOS 21 Y LAS MOLESTIAS DE CARO.

En Bogotá, en Enero de 1896 fue impreso un folleto titulado “Manifiestos”, que más tarde sería conocido con el nombre de “Manifiesto de los 21”, por estar firmado por Carlos Martínez Silva y 20 miembros más del conservatismo “histórico”. Este mensaje, que habría de marcar un hecho de gran importancia política, estaba dirigido al Presidente Miguel Antonio Caro, y contenía las causas

por las cuales, habían decidido disentir del Gobierno y de la facción conservadora en el poder, y fueron esgrimidos en ciertos puntos fundamentales que debían, a su entender, ser reformados dentro de la política del Gobierno de Caro.

Los firmantes de dicho Manifiesto, impreso a la luz pública en Enero de 1896 fueron: Jaime Córdoba, Carlos Martínez Silva, Emilio Ruiz Barreto, Rafael Ortiz B, Juan C. Arbeláez, Rufino Gutiérrez, Gerardo Pulecio, Luís Martínez Silva, José Joaquín Pérez, Emilio Saíz, Mariano Ospina Ch., Carlos Eduardo Coronado, Eduardo Posada, Mariano Ospina V., Bernardo Escobar, Guillermo Durana, Cipriano Cárdenas, Rafael Pombo, Rafael Tamayo, Joaquín Uribe B., y Jorge Roa.

La primera preocupación expresada por los "históricos" se refería a los propósitos de los firmantes, quienes se decían unidos por la necesidad de procurar la grandeza y el avance de la Nación. Asegurando ser miembros del antiguo Partido Conservador, y colaboradores de "La Regeneración" *"sometida hoy en su pleno desarrollo y madurez, a la severa crítica experimental"*[651], afirmaron que dicha obra fue cuantiosa en sus objetivos y en la esperanza de durabilidad. De hecho, consideraban la obra de Núñez como fundamentada en dos bases sólidas que fueron la consecución de la unidad nacional, perdida bajo la división territorial en Estados Federados, y la eliminación de las contiendas religiosas mediante el entendimiento con la iglesia católica. Pese a los logros reconocidos por la regeneración, opinaban que los impulsos de reforma y de reacción contra la Constitución de 1863, fueron mucho más allá de lo esperado.

En el diseño legal contra la antigua anarquía, los Constituyentes de 1886 se aprovisionaron de un sistema extremadamente autoritario, que según los firmantes del Manifiesto, habría de convertirse en una amenaza para las tradiciones

[651] MANIFESTOS. S.A. Bogotá: Imprenta del Heraldo.1896. p. 2.

"republicanas" del País, e incluso del mismo Partido Conservador. Pese a esta crítica, reconocían la aplicación de tales medidas para el afianzamiento del orden como una necesidad nacida del momento. Pero la combinación de opacos resultados, en cuanto a la conservación del orden público, que fue percibido en los constantes intentos revolucionarios, junto al abuso de las facultades represoras por los encargados del mantenimiento de dicho orden, terminaron ocasionando un agrietamiento para las libertades públicas no visto antes.

Los otros puntos tocantes a la propuesta del conservatismo "histórico" fueron la excesiva centralización impuesta, que en la práctica, terminó con una confusión de las funciones entre las distintas entidades administrativas y con un "*socialismo de Estado, tan corruptor para la Nación, como nocivo para los intereses políticos y económicos* "[652]; el excesivo aumento del pié de fuerza del ejército, en detrimento del gasto público, factor que además, según los firmantes, iba contravía de la opinión pública.

Otro punto tratado fue referido a las obras públicas que debían de ser ejecutadas, en contravía con los presupuestos disímiles y las ideas parcializadas de los antiguos Estados Federales, como grandes obras nacionales; pero que no habían sido llevados a cabo por culpa de la corrupción administrativa centralizada en exceso. También, según el análisis de los escritores del manifiesto, la irresponsabilidad Presidencial trocada por la de los Ministros en todos sus actos, generó la usurpación en casi todos los asuntos del Estado del propio Jefe del Gobierno.

El ejercicio del sufragio fue quizá uno de los puntos de mayor controversia. El sistema electoral de 1886 estableció un sistema de pequeñas circunscripciones

[652] Ibíd. p.3.

electorales con una representación unitaria y directa. Este modelo podría haber garantizado que todos los partidos políticos hubiesen llevado a las Asambleas Departamentales o a las Cámaras de Representantes, diputados propios. Pero, el sistema, según los expositores, deformó las leyes por la presión ejercida por las autoridades. Decían los conservadores "históricos", que la prueba de lo artificioso del sufragio se reflejó en que el Partido Liberal, habiendo contado con una mayoría en el País, desde la Constitución de 1886, no había podido sino llevar a uno de sus miembros al Congreso Nacional.

> *Este hecho tiene por si solo significación inmensa, porque indica que el sistema republicano está socavado en su base. El predominio absoluto de un partido sobre otro es monstruosa iniquidad. En una sociedad en que gran porción de ella, -y porción inteligente, ilustrada y rica- no goza de derechos políticos, y sólo se le tiene en cuenta para pagar contribuciones, cuya inversión no vigila, asentada está sobre el despojo y sobre la forma más hipócrita de la esclavitud moderna.*[653]

El círculo vicioso generado con el acceso de los liberales a las corporaciones públicas tuvo que ver, además con el firme propósito de "La Regeneración" de no permitir que fuera socavada la Constitución de 1886, ya que numerosos exponentes del radicalismo corrieron a desconocer esta misma desde sus primeros años. También, la acechanza permanente para restaurar el régimen radical mediante un golpe armado, que nunca fue descartado, mantuvo el nerviosismo de Núñez, Holguín y Caro, siempre al borde de la represión.

Sin embargo, los radicales en los primeros años de "La Regeneración" no quisieron aceptar los Ministerios ofrecidos por Núñez, ni aceptar las normas que

[653] Ibíd. p. 4.

pretendían el nuevo ordenamiento político. Por eso, la defensa del liberalismo radical, expresada por los conservadores "históricos" con respecto a su participación en los cargos públicos, hubo de tener asidero en el reclamo de su propia experiencia, por la exclusión y rechazo del que fueron objeto desde 1891.

Las reformas solicitadas en el "Manifiesto de los 21" nacieron de un análisis del momento histórico, y de una revisión de las medidas tomadas desde 1886 con el liberalismo radical. Fue además un llamado a la grandeza del Partido Conservador, para que retomara como su deber, una apertura al camino de la participación del Partido Liberal, con la valentía originada en el apoyo de los colombianos para medirse en las elecciones y de esta manera amansar los instintos bélicos del radicalismo. *"cuando en un país [...] se cierran las puertas del sufragio, se abren de par en par las de la revolución"*[654]

Las Facultades extraordinarias del Presidente de la República, según el "Manifiesto de los 21" fueron plasmadas en la ley para que, en caso de extrema necesidad de trastorno del orden público, fueran defensoras de la ciudadanía. Sin embargo, instauradas desde 1886 con el artículo "k" y posteriormente reafirmadas en 1888 en la ley 61, el carácter "extraordinario" de la norma de 1896, llevaba 10 años de "permanencia". Aunque, si hubo de ser usada para situaciones de orden público, también fue ejecutada de manera arbitraria debido a su carácter discrecional.

Sin embargo, la queja de los conservadores "históricos", igualmente expresada por el liberalismo radical, basada en que la aplicación de dichas Facultades extraordinarias fueron ejecutadas sin la respectiva demostración de pruebas por parte del Gobierno, no fue del todo cierta. En lo que respecta a la prensa, con

[654] Ibíd. p.5.

excepción de Núñez, Holguín presentó las causas que originaron las medidas contra algunos periódicos. El rastreo de estas, efectuado en este trabajo, bien podría haber sido verificado con lo dicho por las publicaciones en los años de su sanción. Esta verificación fue respectivamente realizada por los periódicos pro gobiernista, incluyendo los conservadores antes de su fraccionamiento con motivo de las elecciones de 1891. Pero, una vez consumada la división, el desconocimiento de las razones para las medidas coercitivas contra la prensa, afloraron en los periódicos de oposición de los "históricos" y se ahondaron en los radicales.

Miguel Antonio Caro fue más allá en las explicaciones y las pruebas que justificaban la toma de medidas represoras en contra de la prensa opositora. Incluso; en la explicación y justificación de las sanciones a los subversores del orden público bajo la Ley de 61 de 1888, "de los caballos"; que fueron reservadas, en cierta medida por Holguín, y casi al máximo por Núñez; el Presidente Caro mantuvo una preocupación permanente por mantener informada a la opinión pública de los motivos para tales medidas.

Sin embargo, desde mi punto de vista, tienen razón los firmantes del "Manifiesto de los 21", cuando expusieron que dichas medidas extraordinarias, al no mantener la fuerza de una ley amparada en la Constitución, habrían de originar una corriente de opinión pública que pensaba que los derechos individuales eran una gracia del Gobierno y no de la Constitución de 1886. De hecho, algunas medidas revertidas en cuanto a sanciones de prensa, dan cuenta más de la benevolencia del Jefe del Estado - basta recordar el caso de Jorge Roa con el Ministro Roldán - más que de una sujeción precisa a la ley.

En este sentido, la necesidad de una ley de prensa que, habiendo sida esperada desde 1886, legitimara el Artículo 42º, no fue expedida por la necesidad del

Gobierno para, bajo el amparo de los Decretos, seguir conteniendo los fuegos políticos expresados peligrosamente por medio de las publicaciones; y por la omisión del Poder Legislativo, quien también hubo de ver insoluble el aseguramiento de la libertad de imprenta, con el castigo de sus abusos con imparcialidad y justicia. Ante esto, creo que los temores infundados del Gobierno porque el poder de la prensa rompiera la unidad del "Partido Nacional" edificador de "La Regeneración"; hacia 1896 había cumplido cabalmente su objetivo.

Propugnar por una libertad de imprenta sujeta a una ley definitiva, se constituyó en uno de los pilares fundamentales del "Manifiesto de los 21", por considerarla base de las demás libertades, ya que sin ella:

> *La sociedad carece de defensa contra los abusos del poder, la propaganda de las ideas se hace imposible, la opinión pública deja de ser fuerza ponderativa y de equilibrio, los partidos degeneran en círculos personales, la juventud se apoca y se empequeñece por falta de campo abierto a sus naturales expansiones, la intriga sorda, mezquina y de encrucijadas, se sustituye a la lucha por los grandes intereses públicos, la conspiración se urde en las sombras, y el silencio mismo viene a ser amenaza constante para la sociedad y para el Gobierno, que solo por la delación y el espionaje, interesados en el engaño y la mentira, pueden pretender tomar el pulso a las palpitaciones de la opinión.*[655]

De la misma manera en que era peligrosa una prensa desbocada en su libertad, a decir de los conservadores "históricos", también constituiría un enorme daño el adormecimiento de la prensa independiente y de la que hacía eco solamente del

[655] Ibíd., p.7.

Gobierno. Era de entender, que sólo la prensa política hubo de ser valorada por unos y otros. Aquella, escasa pero existente, que se refería a noticias, o que era llamada "órgano" de diferentes agrupaciones de la sociedad; no suscitaba ninguna clase de opiniones en la querella por la libertad de imprenta.

El "Manifiesto de los 21" no fue otra cosa que una propuesta para reformar la Constitución sobre ciertos puntos fundamentales, en los que se destacaban aquellos que la habrían de convertir en una Carta más tolerante. La crítica a los errores del Gobierno de Caro en casi todos los aspectos del manejo público, alentaron la desazón por un retroceso que, al mismo tiempo, se convirtió en un llamado para anteponer el amor propio por el avance de la Nación, al interés del Partido Conservador. Es admirable, no obstante, el reconocimiento de que los mismos firmantes del Manifiesto fueron causantes de los males de los cuales se quejaban; pero también reconocían, que esperaban que esa misma declaración no motivara el usado recurso de escudriñar los actos públicos de cada uno de los firmantes para criticar sus pasadas actuaciones, relacionándolas con las conclusiones expresadas en 1896. Por eso, el llamado a la enmendación de los errores, parecía avizorar, en las palabras de los firmantes, una visión profética de la guerra de los mil días:

> *Y cuando llegue aquel tremendo día; cuando los perversos elementos que bullen en las capas bajas de esta, como de todas las sociedades humanas, rompan sus diques; cuando la anarquía por vía de reacción, señoree la República y arrolle hombres, instituciones y partidos, la Patria tendrá razón para maldecir el día en que el Partido Conservador volvió al poder, pues que con el habrá pasado, al menos por muchos*

años, toda esperanza de fundar en Colombia un Gobierno sólido y estable.[656]

No obstante la solicitud respetuosa de una apertura de la política participativa hacia el radicalismo, tuvo como respuesta diversas manifestaciones de odio y de acechanzas mayores hacia los conservadores "históricos" de la capital, que iría tomando formas y visos de un tratamiento más severo e injusto por parte del Presidente. Precisamente, Los memoriales al Ministerio de Gobierno por arbitrariedades cometidas y amparadas en las leyes discrecionales aún vigentes, como la 161 de 1888, fueron frecuentemente elevadas desde los contradictores de Miguel Antonio Caro.

Los Conservadores históricos, Jorge Roa y José Joaquín Pérez, conocidos periodistas sancionados en las administraciones de Holguín y Caro; y representantes del bastión "histórico" en Bogotá, fueron a la oficina de telégrafos con el propósito de trasmitir un mensaje a su "jefe" Marceliano Vélez en Medellín. Su contenido era referido a unas felicitaciones al General Antioqueño por el Manifiesto Conservador, advirtiendo que la mayoría de esta facción en el Congreso no solamente estaba conformada por la Diputación Antioqueña mencionada en el manifiesto, y solicitando hacer una nueva edición poniendo los nombres de los otros representantes que presentaron nuevos proyectos, defendieron una "*causa conservadora neta*".

El propósito de Roa y Pérez, por aguzar con nombres de más Congresistas la división conservadora, no podía ser permitido por Caro. Además, después de haber dado estratificación militar al servicio telefónico y telegráfico, comprendió lo peligrosas que las comunicaciones podrían ser para el Gobierno. Por eso,

[656] Ibíd. p.11.

mientras los emisores del telegrama esperaban que el mensaje hubiese sido trasmitido, el Presidente Caro fue informado del contenido y ordenó la devolución del comunicado y del dinero a Roa y Pérez el mismo día, 19 de febrero de 1896 a través del encargado de la oficina de telégrafos, Rafael Plata.

La protesta, por demás justa, de los escribientes, empezaba con el acatamiento de la disposición de Caro, pero también con el reclamo por el quebrantamiento del artículo 43 de la Constitución, que explicitaba la inviolabilidad de la correspondencia confiada a los telégrafos y correos, y que estos mensajes no podrían ser interceptados ni registrados sino por la autoridad, mediante una orden y con el objeto de buscar pruebas judiciales.

Pero, el respeto por las leyes de Caro en 1896, distaba mucho de su actuación cuando asumió el poder en 1892. Dos intentos de revueltas y una guerra civil desajustada, no le permitían darse el lujo de hacerse el de la vista gorda ante el ahondamiento la división conservadora.

Además, su espíritu carente de toda clase de conciliaciones, quizá por interpretar este tipo de gestos políticos como una muestra de debilidad, no habría de aceptar las razones alegadas por Roa y Pérez, basadas en derecho, alegando que el Presidente, aún actuando como funcionario en búsqueda de pruebas informativas, solo podía desempeñarse de acuerdo a la ley que era clara a la luz del artículo 59 de la Constitución, que establecía que, para que la actuación del Presidente de la República tuviera fuerza, esta debía ser refrendada y comunicada por el Ministro del Ramo respectivo. *“De suerte que el Excmo Sr. Vicepresidente no ha podido dar verbalmente y por si solo la orden de la cual reclamamos, y dada de este*

modo, el señor telegrafista no la ha debido cumplir, porque tal orden carece de valor y fuerza"[657]

Esta observación ni siquiera fue tenida en cuenta por la "ley de los caballos" que contenía las facultades extraordinarias, y aún si, en su amplitud pudiera dar lugar a una interpretación sobre la violación del correo, esta sólo tendría validez, según dicha ley mediante la aprobación de un consejo de Ministros, según el Artículo 3º de la misma.

Roa y Pérez insistieron pidiéndole a Caro que ordenara al Jefe de la Oficina central de Telégrafos la trasmisión el telegrama, previniéndole de rechazar nuevamente telegramas particulares sin las disposiciones legales del cumplimiento de la ley. Pero, la solicitud, un poco ilusa ante la personalidad severa y rígida del Presidente, motivó una resolución expresada el 5 de Marzo de 1896 en la cual, no solamente se negó a aceptar otra interpretación de la ley; llamándola conducente al "*absurdo*" y "*violatoria de las bases de una sociedad bien organizada*"[658], diferente a la suya propia, que decía que la "inviolabilidad" no estaba referida a los Telegramas, que eran conocidos por los intermediarios, en virtud del lenguaje usado para su transmisión. Además, dijo Caro, que los telegrafistas obrarían con "complicidad criminal" si hubiesen trasmitido el mensaje de Roa y Pérez, ya que estos tenían la obligación moral de no enviar despachos "revolucionarios" y "subversivos".

Tratar de esta manera el sencillo despacho de los dos conservadores "históricos" podría constituirse en el verdadero absurdo del hecho. Pero no era así para el Presidente, quien llegó a expresar que, de lo contrario, el Telégrafo se le convertiría en un instrumento para tramar revoluciones.

---

[657] *Diario Oficial.* Bogotá, 11 de Marzo de 1896. Número. 9,970 p.241.
[658] Ibíd.

En cuanto al aspecto referido a las formalidades legales que deben llenarse para el registro de papeles privados, dice Caro, no tienen nada que ver con la no admisión de un telegrama, porque "*expresaba el propósito de reproducir un escrito en que las instituciones y el Gobierno han sido atacados, […] justificaba suficientemente la denegación de darle curso."*[659]

Obviamente sumado al regaño a Roa Y Pérez, el Gobierno puso en evidencia la práctica de no dar curso a ciertas comunicaciones "*por motivos de seguridad, de moralidad y de respeto debido a las leyes y a las autoridades*"[660], Y remata diciendo "*apruébase expresamente la conducta del Sr. Director de Telégrafos."*[661]

Creo que el alegato de Roa y Pérez realmente no tenía el propósito de un cambio de actitud del Gobierno ni la sanción al Telegrafista, esto hubiera sido absurdo y hasta infantil. Pero, si su propósito era encajar la intransigencia de Caro con la aplicación de las leyes para cualquier comunicado del conservatismo histórico, lograron su propósito con creces.

El Manifiesto de los 21 personajes del Partido Conservador, probablemente motivó cierta reflexión del Presidente Caro, quien por estas fechas ya debía estar agotado con las intrigas a La Regeneración y con la oposición de los "históricos", quienes ya habían logrado socavar de manera notable la unidad de los miembros del Partido Conservador leales al independentismo. No obstante, su consideración de que el Manifiesto no era un llamado a la reflexión sino otro "ataque" a las instituciones; el 5 de Marzo de 1896, Caro anunció, haciendo uso de una licencia otorgada por el Senado, y que no había podido llevar a cabo desde Enero de 1895

[659] Ibíd.
[660] Ibíd.
[661] Ibíd.

por las frecuentes revueltas a su Gobierno, [662] la dejación del ejercicio de sus funciones presidenciales "por tiempo indefinido", empezando el 12 de Marzo de ese mismo año. Esta determinación de Caro, probablemente estuvo marcada por el cansancio de ejercer sin las interrupciones, tan frecuentemente llevadas a cabo por Núñez, desde 1892. Llevaba cuatro años, en los cuales, los constantes disgustos del Presidente estuvieron sazonados con conjuras subversivas y el empecinamiento de la oposición, tanto liberal radical, y la del conservatismo "histórico" que bien hubiera podido llevar al traste su defendida regeneración, tal como había sucedido en 1875, cuando Núñez logró, con la división del liberalismo, roer las estructuras de su partido para llegar al poder.

El Presidente Caro, que en su Gobierno pensó que era preferible el tratamiento con mano dura a los "históricos", a una conciliación que dejara en el campo de las concesiones, la oportunidad del quebrantamiento del orden del cual fue protagonista; decidió que el momento para renunciar a la Presidencia era precisamente este año, después de las numerosas medidas inflexibles con las que fue tratada toda oposición, y que le daban cierta tranquilidad. Por eso, decidió anunciar que ejercería las funciones hasta el 12 de de Marzo, y que en su reemplazo quedaría ejerciendo el General Guillermo Quintero Calderón, quien le expresó su acatamiento de la orden con respeto, pero sin desconocer que tendría que "*entrar a desempeñar el alto empeño a que se me llama, venciendo para ello el justo temor de mi insuficiencia."*[663]

[662] El 23 de Enero de ese año, había decidido separarse del poder y el 22 fue descubierta la conspiración que pretendía atentar, incluso, contra su vida "*De esta coincidencia, sin ejemplo que yo sepa en la historia, resultó que los mismos que intentaban arrancarme vivo o muerto del Palacio Presidencial, fueron quienes me obligaron a permanecer en el puesto que el mismo día iba yo a abandonar voluntariamente" Diario Oficial*. Bogotá, 12 de Marzo de 1896. Número 9,971. p.245.

[663] *Diario Oficial*. Bogotá, 12 de Marzo de 1896. Número. 9,971 p.245.

Efectivamente, la insuficiencia de Quintero, para bien o para mal de unos y otros, quedó demostrada al poco tiempo del retiro de Caro a Sopó; cambiando el gabinete del Gobierno, con autorización previa de Caro para la organización de los Ministerios al libre albedrío del General. Abraham Moreno fue nombrado Ministro de Gobierno, de Relaciones Exteriores José M. Urricoechea, de Hacienda, Francisco Groot, de Guerra, Pedro Antonio Molina, y de instrucción Pública, José Manuel Marroquín. Estos nombres eran moderados con el conservatismo "histórico".

Desde Sopó, Caro, retirado pero con ojo avizor de lo que sucedía en Bogotá, le escribió una carta a Quintero Calderón el 15 de Marzo de 1896, para que no mirara con ojos de censura la actuación del Cónsul de Colombia en Nueva York, por la compra del crucero "córdoba" relativo a un asunto llamado "de los ochenta mil dólares" y que consistía en un supuesto plan fraguado en Nueva York contra el Gobierno de Colombia, que sin embargo fue autorizado por el mismo Caro.

Intempestivamente, y en virtud de la Resolución aprobada por el Senado el 4 de Agosto de 1894, y el Artículo 123 de la Constitución, Caro reasume el mando desde Sopó el 17 de Marzo de 1896, encargando provisionalmente del Ministerio de Gobierno y de Guerra a Manuel Casablanca, que fué llamado a Sopó a firmar la posesión. Continuó con Pedro Molina en el Ministerio de Guerra, y con Urricoechea en el de Relaciones Exteriores; pero en sólo 20 días destituyó a los demás, dejando provisionalmente a los respectivos subsecretarios en el cargo. Dejó además, el mando de la capital al Gobernador de Cundinamarca otorgándole también la autorización de declarar el Estado de Sitio si lo considerase necesario.

Pese a que el Presidente Caro retomó el mando el 17 de Marzo de 1896, sólo publicó el Decreto en el Diario Oficial hasta el 28 de Marzo. La llegada de Quintero Calderón al Poder solamente había durado 5 días, dejando toda una

colección de misivas felicitando y reconociendo al nuevo mandatario, porque en la República habría de llegar a considerarse este acto como una segura política de flexibilidad ante la rigidez política de Caro.

Pero, el Presidente titular, quien había manifestado en alguna ocasión que se consideraba un hombre de profundos “odios políticos”, y quizá recordando la fragilidad y el peligro de encargar el Gobierno, así fuera a un General de su máxima confianza, similarmente equiparable al caso de Núñez con Payán; encontró excesivamente cercana la llegada de un contradictor político al poder, en la persona del nuevo Ministro del Gobierno, Abraham Moreno.

Probablemente, el error también fue del Mismo General Quintero, quien no esperó hacer una transición política gradual y participativa de los conservadores “históricos”, quizá basado en que el retiro de Caro sería permanente y que la posterior autorización para efectuar el nombramiento de su gabinete a su libre albedrío era veraz; sino que sorpresivamente le otorgó el Ministerio de la Política a un personaje que le había hecho la máxima oposición a la administración de Caro. El Resultado era previsible. Los odios políticos del mandatario agraviado, resurgieron como una nueva burla a su potestad, llegándole a decir a José Manuel Marroquín en una carta del 15 de Marzo de 1895, sus apreciaciones:

> *La atracción se efectúa en política por asimilación o incorporación, pero no por superposición. [...] la armonía de los elementos cristianos no se obtiene nombrando cardenales protestantes. [...] Abraham Moreno, que ha suscrito el manifiesto revolucionario del General Vélez, ha sido nombrado ministro de Gobierno, que es el ministro de la política. Los 21 lo han excitado a que venga y ha accedido a su invitación. Posesionado, se apoyaría en ellos, les daría alas para todo,*

surgirían forzosamente conflictos con los gobernadores, dimisiones, cambios... el desastre.[664]

El 7 de Abril, Caro nombró los Ministros en propiedad. Para Relaciones Exteriores, a Jorge Holguín, en Hacienda a Ruperto Ferreira. Para Guerra, ratifica a Pedro Antonio Molina, en Instrucción Pública, al Presbítero Rafael Carrasquilla, en el Ministerio del Tesoro, a Manuel Ponce de León; y en el Ministerio de Gobierno dejó al General Casablanca, que después de unos meses le entregaría el cargo de Gobierno al mismo Jorge Holguín, y el de Guerra a Antonio Roldán, quien venía de desempeñarse como Gobernador de Santander, en la corta revuelta de 1895.

La retoma del poder de Caro y la omisión del Manifiesto de los 21, especialmente en lo relativo al otorgamiento de suficientes garantías electorales que le permitieran al radicalismo ser partícipe del poder, se expresó en una serie de resquemores y advertencias con motivo de la próxima celebración de elecciones, ante el repudio público causado por su constante intransigencia.

Un ejemplo de ella, se puede ver cuando el General Manuel Casabianca, encargado del Ministerio de Guerra y de Gobierno, presentó una circular dirigida a los Gobernadores, Intendentes, Prefectos y Jefes de acantonamientos militares, relativa a que, no obstante la actitud del Gobierno para rodear de garantías el ejercicio de las próximas elecciones, muchos grupos podrían ver esas garantías como un símbolo de impotencia o debilidad de los gobernantes. Advirtió que no debían permitir desórdenes para no confundir "*El sufragio con la sedición, la presencia de las urnas con las organizaciones revolucionarias."*[665] Especialmente por las organizaciones belicosas *"que no son los que tienden a una discusión pacífica, se promueven y producen diversos desórdenes, y la prensa adopta ya el*

[664] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. Cit. p.204-205.
[665] *Diario Oficial.* Bogotá, 8 de Abril de 1896. No. 9,994 p.337.

tono hiriente y procaz, propio para enardecer los ánimos, y casi siempre precursor de la revuelta."[666] Casabianca, además advierte que con el pretexto de las elecciones ya se veían desórdenes, pero que si "los enemigos de la paz" no contentos con la derrota que les había inflingido el Gobierno, pretendían promover una nueva resistencia armada, este *"ya no podrá […] usar de la clemencia que usó ayer: tendrá que matar de una vez y para siempre la hidra de la revolución y extirpar por completo el asqueroso cancro del ravacholismo [sic] colombiano."*[667]

Y con la prensa, no podía ser más severa la advertencia, cuando al ejercicio de las elecciones, se refería el Gobierno. Continuando con la sempiterna mención del peligro por la posible subversión del orden público, se pudo ver otro ejemplo continuado del estrangulamiento hacia las publicaciones, cuando el Gobernador de Antioquia, le consultó al Ministro temporal de Gobierno, General Manuel Casabianca, sobre el correcto proceder desde su cargo, en la decisión tomada por el castigo y la censura, mediante multa impuesta al periódico *El Debate* de Medellín, por 50 pesos; y a cada uno de sus redactores; Enrique Gaviria, Paulo E. Restrepo, Ismael Pineda y Gerardo Gutiérrez, por insultar la dignidad del Presidente Caro en un artículo titulado "nuevo petit Panamá". Ante la acusación, que daba la impresión de ser más producto de la adulación hecha por un soplón en busca de componendas, que una consulta de un Gobernador sobre un tema complejo, el Ministro Casabianca no solo le aprobó y ratificó la decisión, sino que le recordó que el código penal castigaba con dos años de prisión al que injuriara al Presidente de la República.

Y que *"si los Jueces no aplican tal disposición, no es mucho que cuando ella se olvida, el Ministerio de Gobierno, exclusivo encargado en lo administrativo de las*

[666] Ibíd.
[667] Ibíd.

cuestiones de la prensa, use de relativa severidad en la materia"[668]*.* Le aumentó desde el Ministerio de Gobierno, reformando la resolución del Gobernador Bonifacio Vélez, la pena de la multa a 200 pesos a los Directores de *El Debate,* y la orden de suspensión definitiva de la publicación. Además, impuso el cierre por seis meses de la imprenta *El Esfuerzo,* desde donde salía el periódico, y una multa de 200 pesos a la misma. Aparte, le solicitó la averiguación precisa del autor de la hoja titulada "nuevo petit Panamá" para aplicarle el correspondiente castigo.

4.8. DE LOS "LIBELOS SEDICIOSOS" Y OTRAS ORGANIZACIONES "AD HOC"

Los periódicos en Bogotá, empezaron a correr con la misma suerte. El 14 de Abril de 1896, según Resolución número 7 del Ministerio de Gobierno expedida por Manuel Casabianca, el periódico *El Ciudadano,* editado en Bogotá y recién inaugurado con el número 1º, publicó el fragmento de una hoja redactada por Gabriel Vargas Santos, por el que ya se le había impuesto una multa al Director de *El Honor*, bajo el cargo de ser una publicación considerada por el Gobierno como "abiertamente subversiva", resolvió de conformidad con los incisos 3º y 5º del Artículo 4º del Decreto número 151 de 1888, y de acuerdo con el inciso 3º del artículo 7.º del mismo Decreto, sobre prensa, la suspensión por seis meses y la imposición de una multa de 200 pesos al Director.

El Ciudadano, en ese mismo número, también había publicado un artículo del Sr. Juan Ignacio Gálvis, titulado "sursum", en el cual, según el Gobierno, se concitaron unas clases sociales contra otras *"con manifiestas tendencias a producir coaliciones perturbadoras"* - tal vez recordaron los artículos de Gutiérrez Isaza que motivaron el motín Bogotano de 1893 - diciendo además, que de acuerdo con el

[668] *Diario Oficial.* Bogotá. 14 de abril de 1896. No.10000 p,361

artículo 12 del Decreto número 151 de 1888, los colaboradores de una publicación eran también “periodistas”, y dicho periodista, al cometer una violación del inciso 5º del artículo 4º del Decreto 151 de 1888, le fue impuesta una multa de 200 pesos.

Pero los multados, Alejandro Torres Amaya, conservador “histórico” militante desde la prensa y ya sancionado por Holguín en E*l Tren*, y Emiliano Forero, quienes eran los directores del periódico, no acudieron a consignar la suma de la multa y según resolución 9 del 16 de Abril de 1896, el Ministro Casabianca les conmutó la pena, según lo previsto en el Artículo 2º del Decreto 910 de 1889, adicional al 151 de 1888, de un día de arresto por casa dos pesos de multa.

Al Señor Rafael Baraya, director del mencionado periódico llamado *El Honor,* ya le había sido impuesta una multa según resolución número 2 del 7 de Abril de 1896, que debería ser pagada en 24 horas. Como Baraya se negó a cumplir, el Ministerio de Gobierno a cargo de Manuel Casabianca expidió la resolución Número 5 del 9 de Abril de 1896 conmutándole la multa en arresto, a razón también, de un día de arresto por cada dos pesos de multa.

¿Qué motivaba este auto sacrificio? Quizá el propósito de señalar a un gobierno “injusto” que mantenía periodistas en el panóptico, buscando ahondar la división entre los conservadores. También, los encarcelamientos, ayudarían a inflar la estadística de sancionados, para presionar a los Congresistas que habrían de posesionarse el 20 de Julio de 1896, para dictar, por fin, la tan esperada Ley de Prensa.

Pero, mientras esto ocurría, el Presidente Caro continuaba apretando clavijas a los periódicos de oposición. A muchos de ellos, empezó a tratarlos como “libelos sediciosos”, que no habrían de merecer las consideraciones ni la clemencia del

Gobierno. Vale la pena la trascripción completa de este Decreto de puño y letra de Miguel Antonio Caro, en donde justificó su proceder con dichas publicaciones:

Decreto Número 231 de 1896 (24 de Junio) sobre libelos sediciosos.

El vicepresidente de la República encargado del poder Ejecutivo,

Considerando;

1º Que á la magnanimidad y clemencia con que han sido tratados los autores y partícipes de la conspiración y rebelión del año anterior se ha respondido abriendo por la prensa campaña sistemática de ultraje y de calumnia, llegando la audacia y el irrespeto á la verdad, y á la honra nacional al extremo de imputar al Gobierno los delitos mismos que él persigue y castiga.

2º Que tales falsedades y denuestos, como tarea cotidiana ejercida mediante una organización ad hoc y sin ejemplo acaso en los anales de la prensa nacional, no pueden tener otro objeto que engañar á los pueblos, desacreditar al país, mantenerlo en estado de alarma con grande daño del comercio y de los intereses legítimos, y lanzarlo, si posible fuere en una nueva revuelta, lo cual constituye un atentado contra la tranquilidad, la seguridad y la autoridad públicas;

3º Que la tolerancia tiene un límite forzoso cuando de ella se abusa sin límite ni freno

4º Que los gobernantes que incurren en la debilidad, de permitir la acción evidente del mal sobre la sociedad, contraen grave responsabilidad ante la Patria y ante Dios;

DECRETA:

Art. 1º Prohíbese la publicación y circulación de los papeles calumniosos e incendiarios El Republicano, El Derecho, y El Debate, y su continuación bajo cualquier forma o título.

Art. 2º En lo sucesivo los autores y escritores de libelos [ilegible] y sediciosos de la naturaleza de los expresados serán tratados como perturbadores del orden público.

Art. 3º Quedan públicamente amonestados para su gobierno, por medio de este decreto, los que intenten continuar abusando de la prensa con fines revolucionarios.

Notifíquese y publíquese. Dado en Bogotá, á 24 de junio de 1896. M. A. Caro.[669]

4.8.1. EL REPUBLICANO, ELDERECHO Y EL DEBATE

Con el propósito de convertirse en un periódico diario, que a la vez fuera "órgano del Comité Nacional Eleccionario del Partido Liberal", fue vendido en las calles bogotanas a cinco centavos el ejemplar suelto, el periódico *El Republicano.* Sus directores y redactores fueron Rafael Uribe Uribe y Carlos Arturo Torres, quienes hubieron de constituir esta publicación con miras a las futuras elecciones, ya que desde su punto de vista, los liberales que consideraban una abstención, habrían de ser considerados como portadores de una "falta perniciosa". Su propósito era: *"Uniformar la opinión de los liberales; restablecer la unidad del partido en cuanto ella haya quedado destruida por el anonadamiento político; recordar sus deberes*

[669] Decretos Originales. Ministerio de Gobierno. Sección República. Fondo: Libros manuscritos leyes originales 1733-1937. Tomo 237. año 1896. A.G.N.

cívicos; contribuir a su educación política; ofrecerle al derecho esquilmado una esperanza de renacimiento."[670]

En este periódico redactaba también Diego Mendoza Pérez, quien habiendo tenido participación el año anterior en el levantamiento armado del radicalismo, tendría nuevamente la oportunidad de seguir redactando y publicando periódicos de oposición. La admistía dada por Caro a quienes hubieron de rebelarse al Gobierno, posibilitó, además de Mendoza Pérez, la continuación del ejercicio periodístico a otros participantes en la revuelta como Rafael Uribe Uribe y Liborio Cantillo.

El propósito de las nuevas cabezas del Partido Liberal, hubo de ser el de constituir este periódico como un órgano vocero del radicalismo, quizá con el alcance organizativo que años atrás mantuvo *El Relator.* Pero, pese a la critica moderada, y un mayor sosiego de su lenguaje de oposición, no habría de contar con la "benevolencia" de Caro.

Aunque su suspensión probablemente tuvo que ver más con un asunto personal ventilado al interior de sus páginas, que con sus críticas al Gobierno; el hecho de que en este se habrían de encontrar directamente inmiscuidos los hermanos Luis M. Holguín y Francisco Holguín, ambos servidores públicos; habría de demostrar la continuación del uso de la prensa para solventar asuntos particulares. Las desavenencias causadas por una sociedad agrícola en el Casanare y los comentarios que, según Carlos Arturo Torres, había hecho a Francisco Holguín a título confidencial sobre la sociedad de su hermano con Diego Mendoza Pérez, fueron publicados en el periódico *La Época.* Precisamente, este periódico hubo de condensar la costumbre de la apropiación y opinión de los bogotanos sobre

[670] *El Republicano.* Bogotá, Marzo 10 de 1896. Número 1. S.P.

chismes y desavenencias para desacreditar honras, que entre otras cosas, también hubo de representar que dicha costumbre continuaba siendo más fuerte que el esfuerzo del sometimiento a las leyes; con estas palabras:

> *El ex Redactor de El Republicano se ha encargado por si mismo de reconfirmar la justicia que asistiera al Excelentísimo Señor Presidente de la República para apedazar con su tijera clásica esos "papeles" cuyas frases, convertidas en moscas, caían a chupar insaciables la miseria social – verdadera o ficticia – para luego envenenar el aire. [...] Para ejercer el alto magisterio de la prensa es menos necesaria la literatura que la autoridad, la cual no se consigue escribiendo cartas como las que llevan la firma del Doctor Carlos Arturo Torres.*[671]

El periódico *El Debate,* publicación bisemanal dirigida por Gabriel Díaz Guerra y Felipe Escobar, continuaba con el discurso moralizador del liberalismo radical y las mismas quejas sobre las "libertades reprimidas" instauradas por la Regeneración y la misma división de la sociedad colombiana entre partidos "vencedores" y "vencidos". Presentó un decidido apoyo a los patriotas cubanos en su revolución, pero su expresión no fue más que la repetida diatriba del radicalismo contra el Gobierno de Caro, quien no habría de perdonarles esta falta.

El Derecho, otro de los sancionados de un plumazo en el mismo Decreto por Caro, mantenía el mismo talante radical. El 22 de Junio de 1896 publicó un artículo llamado "cuasi-crisis" en el que pretendía informar de la situación política actual. La agitación de ese momento corría por cuenta del debate sobre el nuevo designado presidencial y las ambiciones políticas de los diferentes bandos. El Ministro Ospina Camacho, amplio candidato en el Congreso para esta designación,

[671] *El Republicano.* Bogotá, Junio 22 de 1896. Número 64 y hojas sueltas siguientes. S.P.

habría de representar las banderas de la total eliminación del independentismo conservador. El Ministro Roldán, por su parte, habría de constituirse en el candidato de la defensa del Gobierno de Caro. La opinión expresada en el periódico, de forma natural y serena, sobre los movimientos políticos a este respecto estuvo unida a las denuncias sobre fraude electoral en las recientemente efectuadas votaciones para Diputados a las Asambleas Departamentales, y probablemente le hubieron de valer la sanción de Miguel Antonio Caro.

4.8.2. LA CAMPANA.

La prensa no parecía recular en su empeño de criticar al Gobierno de Caro. Unos días después, al Presidente se le habría de notar desesperado por la desobediencia de los escritores quienes continuaron desafiando sus Decretos. Esta vez, mediante la expedición de una Resolución Presidencial el 27 de Junio de 1896, fue para imponerles una pena a los conservadores "históricos" José Joaquín Pérez y Eduardo Posada.

En Mayo, los citados escritores, recibieron del Gobierno la licencia para publicar un nuevo periódico llamado *la Campana,* con la condición, expuesta por sus mismos autores, de no ocuparse de temas políticos, sino de ser vocero de noticias, variedades y literatura. Pero, la autoridad extrema de Caro, no habría de tener sosiego con la desobediencia pertinaz de los escritores "históricos. Habiéndoles hecho ya una amonestación pública a los redactores de *La Campana,* y una notificación directa a José Joaquín Pérez*,* dueño de la imprenta donde se editaba *El Republicano,* que acababa de ser suspendido; estos dos habrían de decidir, en palabras del Presidente: *"hace[r] pública mofa del Decreto Ejecutivo de 24 de los corrientes y se desobedece, de hecho y ostentosamente el citado Decreto,*

lanzando nuevas y más atroces calumnias contra las autoridades del Poder Ejecutivo y el Judicial"[672]

Esta vez Caro, no invocó el Decreto 151 de 1888 sobre Prensa, sino la Ley 149 de 1888 "sobre régimen político y municipal"[673], que en su Artículo 71, inciso 16, establecía que al Presidente de la República le correspondía castigar con multa, que no excediera los quinientos pesos y con un arresto que no fuera superior a dos meses, a quienes le faltaran al debido respeto y a quienes desobedecieran las providencias del Gobierno. Probablemente, también la desesperación producto de la desobediencia constante de los escritores, le llevó a escudriñar la ley en busca de penas más drásticas para castigar a José Joaquín Pérez y a Eduardo Posada, ambos firmantes del Manifiesto de los 21. El 27 de Junio de 1896, además de una multa de 200 pesos, los osados escritores debieron marchar hacia el Panóptico a cumplir con un arresto de dos meses como consecuencia de su pertinaz desafío al energúmeno mandatario.

4.8.3. *EL CONSERVADOR.*

No obstante la suspensión de la que fue objeto el 3 de Agosto de 1893 cuando, sin haber sido voceado más que un número, el periódico *El Conservador*[674] volvió a las calles bogotanas tras los seis meses de suspensión ordenados por el Ministro de Gobierno José Domingo Ospina Camacho en 1893, que en realidad se

[672] *Diario Oficial.* Bogotá, 27 de Junio de 1896. No. 10,063 p,613

[673] Probablemente la novedosa apertura de esta arma legal, de la que poco se hizo uso para castigar a la prensa, tenía que ver con la fuerte multa de 500 pesos, en lugar de la máxima de 200 que regía en el Decreto de imprenta.

[674] Con este nombre pueden encontrarse varios periódicos en la ciudad de Bogotá, desde 1848. En el transcurso de su impresión, cambió de escritores y de vocerías políticas. Uno de ellos se publicó ininterrumpidamente, en un primer periodo, desde 1863 hasta 1869, posteriormente de 1881 a 1884, y en el periodo que nos ocupa, publicó nuevamente desde los meses de Julio a Septiembre de 1892. En 1893 regresa con un solo número y fue suspendido inmediatamente. Posteriormente imprime nuevamente 28 números entre Julio y Septiembre de 1896 en la imprenta de Silvestre y Compañía.

convirtieron en 3 años, porque imprimió nuevamente con una nueva numeración y paginación hasta el 2 de Julio de 1896, expresando su oposición política al Gobierno del Presidente Caro desde la facción histórica del conservatismo.

En el número 15 de *El Conservador,* aparece impreso un artículo titulado "otro de tantos" escrito por Gerardo Apulecio, y que causó la molestia del ex Ministro de hacienda Pedro Bravo y del ex Gerente del Banco Nacional, Juan de Brigard, quienes demandaron al periodista por el delito de calumnia. Brigard, acusado en el escrito de haber emitido clandestinamente 100 mil pesos desde El Banco Nacional en 1894, desiste de la acusación al no presentarse ante el Tribunal Superior de Cundinamarca; pero no ocurre lo mismo con el ex Ministro, quien decide adelantar la demanda basándose en cuatro aspectos.

En primer lugar, el artículo dice que Bravo, como ministro de hacienda, publicó una licitación para adjudicar el contrato de arrendamiento de las minas de Muzo y de Coscuez, "*habiendo lío de por medio."* En segundo lugar, que el 19 de Diciembre de 1893 el Ministro suspendió la licitación habiéndose cumplido la hora y la fecha prefijadas. El autor escribió "*Algo muy serio debió de advertir el personaje que manipulaba aquí por lo bajo este negocio,"*[675] fundamentando esta decisión en un Kalograma recibido por el Ministro del Agente Fiscal de Colombia en Europa y que, según el autor del artículo, estaba junto a Lorenzo Merino, empresario principal en el arrendamiento de las minas de Muzo. En tercer lugar, dice el artículo, que el ex Ministro pretendía favorecer, en perjuicio de los intereses Nacionales, los del señor Alejandro Manzini; y en cuarto lugar que, faltando todavía momentos para el cierre de la puja, el ex Ministro no tuvo en cuenta una nueva oferta hecha por 50 mil pesos más alta que la de 400 mil de Manzini.

[675] *Registro Judicial de Cundinamarca*. Septiembre 25 de 1896. Número.327 p. 1,880.

El juez encargado del caso, hubo de considerar que fueron los siguientes cargos los reunidos en el artículo: El primer cargo, estribó en que faltando tres años para la licitación del contrato de arrendamiento de las minas de Muzo y de Coscuez, se fijó un término de 50 días para llevarla a cabo, sin que se hiciera conocer en Europa el pliego de cargos, a fin de obtener mayor número de licitadores.

El segundo cargo, se asentó en que los licitadores, al llegar el día señalado por el Ministerio de Hacienda, encontraron una resolución que suspendía el remate hasta nuevo aviso fundada en un Kalograma dirigido desde Londres por el agente fiscal de la República en Europa y que decía: "*Valiosa combinación exige suspender licitación*;"[676] En el tercer cargo, el autor del artículo repitió las sospechas porque el kalograma llegó muy oportuno, diciendo "habrá lío de por medio". En el cuarto cargo, a consideración del Juez, se dijo que mientras tanto se celebraba un contrato de arrendamiento de las mismas minas entre el señor Alejandro Mancini y el Ministro de Hacienda, con el ofrecimiento de una prima de $300.000 pesos, y que la licitación debería versar únicamente sobre la cuantía de la prima estipulada, se le había concedido al señor Mancini el derecho de *tanto* inventado para tales efectos por el mismo ex Ministro de Hacienda, y que consistía en que el señor Mancini debería ser preferido á la persona que ofreciera la mayor suma, siempre que aceptara la misma oferta.

El quinto cargo analizado por el Juez, se basó en que la consignación de $300.000 pesos anticipados, equivalía a alejar del remate a otros postores, no siendo probable que suma tan cuantiosa estuviera a disposición en pocos días, incluso de los más acaudalados. El sexto cargo que quedaba por resolver, se refería a si, el señor Mancini debió hacer uso de su derecho de *tanto* al presentarse cada

[676] Ibíd. p.1881.

propuesta, o si debió esperar hasta oírlas todas para declarar si aceptaba la propuesta más alta, después de cerrado el remate.

El Juez opinó que el ex Ministro Pedro Bravo, resolvió el punto en el primer sentido y á pesar de esto, el día señalado para el remate, cuando faltaban todavía algunos momentos para la hora en que debía cerrarse la licitación, y que había hecho subir la prima a $400,000, uno de los rematadores preguntó si el señor Mancini aceptaba, y que habiendo contestado afirmativamente, hubo una nueva puja de $50,000, por lo que el señor Mancini observó que ya había hecho uso de su derecho de tanto, y que el ex Ministro, según el periodista Gerardo Apulecio, resolvió el asunto hacia Mancini, "*quedando perdidos para el fisco aquellos $50,000 y patentizado el falaz engaño del derecho de tanto, que más bien debería llamarse de tanteo*."[677]

El Juez, posteriormente entró a analizar los cuatro puntos tratados en la acusación, comentando que en la primera y en la segunda de ellas, no se encontró delito de calumnia porque la persona encargada de dar tales resoluciones fue el Ministro de Fomento, y en los hechos afirmados por el periódico, sólo era falso la concordancia entre los Ministerios encargados de dictar las resoluciones, pero este error fue subsanado posteriormente en el número 20 de *El Conservador.* Pese a la acusación, el hecho de que un Ministerio invitara a una licitación y después la suspendiera no constituía causa de una acusación, en la explicación del Juez, por un delito cometido.

En cuanto a la expresión "aquí hay lío de por medio", contenida en el párrafo: "*Luego aquí hay lío de por medio, se decían los maliciosos, y por lo visto no les*

[677] Ibíd. p. 1882.

faltaba razón"[678]*,* El Juez consideró que tampoco había lugar a estimarla como calumniosa; al analizar que el articulista dedujo que el arrendamiento de las minas por un valor de $30 mil pesos anuales durante un periodo de cinco años, con el pago de una prima no menor a $20 mil pesos, suscitó alarma , por lo bajo del precio y por la anticipación del arrendamiento. Luego, al expresar un simple concepto carente de una imputación directa, tampoco la estimó como calumniosa. Este concepto lo aplicó el Juez, para casi todas imputaciones.

Además, la rectificación de *El Conservador* reconociendo su error al referirse al Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Fomento, también es tenida en cuenta por el Juez, toda vez que este último Ministerio no formuló ningún cargo acusatorio. Pese a ello, la tercera acusación referida a que el Ministro se inventó el derecho *de tanto* para favorecer intereses personales, en perjuicio de los intereses nacionales, y que fue redactado en *El Conservador* de la siguiente manera:

> *La licitación de aquel contrato debía versar únicamente sobre la cuantía de la prima estipulada, concediéndose al señor Mancini el derecho de tanto inventado para tales efectos por el señor D. Pedro Bravo, Ministro de Hacienda, y el cual consistía en que el señor Mancini en el acto de la licitación debería ser preferido á la persona que ofreciera la mayor suma, siempre que el aceptara la misma oferta*.[679]

El análisis del Juez, al considerar que la imputación de un hecho concreto, era vaga, y que tampoco se podía admitir el alcance que pretendía otorgarle el acusador, porque el término usado de; "para tales efectos" estaba construido en forma plural, y por ello no se enlazaba directamente con los conceptos expresados

[678] Ibíd.
[679] Ibíd.

previamente. La cuestión, a decir del Juez, sería distinta si se hubiera expresado en forma singular, porque el favorecimiento a Mancini en el contrato quedaría definido.

De otra parte, ante la acusación de ser el ex Ministro Bravo el inventor del derecho *de tanto,* el Juez demuestró que el término fue constantemente usado en el Diario Oficial en las adjudicaciones de contratos en el año de 1894, año en que el acusador se desempeñaba en el cargo, y que en el artículo no decía que la invención de tal derecho fuera para favorecer a Mancini. Tampoco, podía tenerse como imputación de un hecho falso, el hecho de que faltaran algunos minutos para el cierre de la adjudicación, y la pregunta de uno de los rematadores a Mancini sobre si aceptaba la suma de $400 mil, igualmente fue considerada por el Juez, como una simple narración del hecho histórico de la licitación que podía estar conforme o no, con los hechos consignados en el acta redactada en el Ministerio. Además, este diálogo fue entre Mancini y los rematadores, y el ex Ministro Bravo no aparece mencionado en ningún lado.

La expresión “falaz engaño” tampoco implicaba en el artículo la mención del ex Ministro, y por el contrario, el sentido de la frase, según el análisis del Juez, que el periodista le dio en las licitaciones, más bien parece indicar su contrariedad y opinión, de que no debía admitirse tal derecho para que las condiciones fueran iguales para todos los postores; y el llamado “derecho de tanteo” igualmente podría tomarse desde el punto de vista jurídico, o desde el punto de vista de la conveniencia o no de algún hecho.

Además, el Juez expresó que toda acusación de calumnia debe basarse en hechos claros y precisos. *“y no es por medio de síntesis cómo se llega á encontrar*

los elementos del delito acusado, sino por el examen de cada una de las partes de que se compone el escrito señalado como calumnioso."[680]

Pese a que el Juez Alejandro Motta, encontró que la evidencia del caso era insuficiente para considerar el delito de calumnia, y el nombramiento que el artículo citado no hubo de provocar ningún tipo de deshonra al ex Ministro, ya que la calumnia era un tipo de delito, que por el mismo hecho de afirmar hechos falsos, constituía una grave afrenta y una degradación de la dignidad personal; si habría de considerar que, sin embargo, podría decirse que:

> *Lo que aparece en este es la crítica de una manera tenaz, y acre si se quiere, [...] más, en este caso, [...]es imposible, dada la educación del país, encerrar como dentro de un molde el pensamiento del escritor, de modo que se contraiga a afirmaciones rotundas y de las que dé inmediatamente la pruebas, por lo que no queda otro recurso, de parte de los empleados públicos, que la demostración por medio de la prensa del cumplimiento de su deber, o dejar a la acción del tiempo, la depuración de los hechos.*[681]

Probablemente, la continuidad de una legislación desde 1888 sobre calumnia e injuria por medio de la prensa, había surtido el efecto de una enseñanza primigenia sobre el accionar de la ley en este sentido, y sobre los alcances que habrían de tener los escritores a la hora de comentar las actuaciones de los empleados públicos.

[680] Ibíd.
[681] Ibíd.

Después de todo, los Decretos que regían la materia, explicitaban la posibilidad de que los publicistas acudieran a las imprentas para censurar actuaciones, que a su juicio, concitaban dudas o perjuicios para la Nación.

Pero, esta actividad de censura pública, sin embargo, colisionaba con el carácter "subversivo" con el cual el Gobierno mantenía un recurso invaluable de defensa que no habría de ser minado sino hasta la llegada de la ley de prensa a finales de 1896. De hecho, aunque el caso fallado por el Juez Motta explicitó claramente que no se encontraba ante un caso específico de calumnia; pese a que el ex Ministro Bravo apareció en el escrito como un funcionario dado al favorecimiento de intereses personales por encima de los intereses públicos, y no encontrar concretamente una acusación de fraude ni de favorecimiento personal hacia Mancini en la adjudicación del contrato; dejó la puerta abierta al carácter por el cual la prensa habría de ser mayormente castigada: *"El artículo dado su carácter político, tiende a otro fin, y puede calificársele de subversivo, mas no de calumnioso en el terreno legal, esto es, que vulnere un derecho individual"*[682]

Pese al fallo, el ex Ministro no quedó satisfecho y apeló ante el Tribunal Judicial de Cundinamarca la revocatoria del auto del 26 de Agosto de 1896, pero este le fue negado nuevamente, cuando pretendió la admisión de palabras que no estaban contenidas "estrictamente" en el artículo acusado, tratando de constituir por esta vía el delito de calumnia. El Tribunal también le explicó a Bravo, que no debía perderse de vista, que el artículo 45 de la Ley 153 de 1888, establecía que toda duda "se resolverá por interpretación benigna".

El análisis de este caso fue importante no sólo porque demuestra el fallo apegado a las leyes del Juez Motta y la falta de asentamiento jurídico para el alegato por

[682] Ibíd.

Calumnia, sino también el tino del escritor Gerardo Apulecio de *El Conservador* para hacer un señalamiento a Bravo cuando este ya no era Funcionario Público, y su defensa habría de hacerla como un particular que se amparaba en una acusación penal. Además, la publicidad hecha a este caso pudo servir para que los Congresistas que recién habían abierto sesiones el 20 de Julio de ese mismo año, consideraran, esta vez con urgencia, la necesidad de reglamentar de una mejor manera el artículo 42 de la Constitución, y la revocatoria del Artículo transitorio "K".

4.8.4. LOS TIEMPOS Y LOS HECHOS.

Lesionar la "decencia pública" constituía para el Gobierno de Caro, un caso más en la subversión del orden. Una nueva resolución llegó desde el Ministerio de Gobierno, esta vez, contra los periódicos titulados *Los Tiempos y Los Hechos,* a los cuales les fue retirado el permiso para ser voceados por las calles, según Resolución número 47 del 30 de Septiembre de 1896, el Ministro Antonio Roldán, acusando a estas publicaciones de violar el inciso 10 del artículo 4º del Decreto número 151 de 1888, según el cual, también eran consideradas publicaciones subversivas aquellas que ofendieran la decencia pública con escritos obscenos ó noticias escandalosas; decidió, conforme al artículo 3º del Decreto número 910 de 1889, que le otorgaba al Ministerio de Gobierno la facultad de quitar el permiso otorgado para vocear por las calles, aplicar dicha medida.

Los Hechos fue otro más de los periódicos de tendencia política liberal radical, que hubo de ser impreso 3 veces por semana en la capital de Colombia. Dirigido por Julio Áñez en la imprenta de Medardo Rivas, solamente costaba 5 centavos. En Enero de 1896 publicó una circular de advertencia, salida del Ministerio de Gobierno en cabeza de Rafael Reyes, y fechada el 21 de Enero de ese año.

Dirigida a los Gobernadores del Departamento, la misiva pretendía ser lo suficientemente clara:

> *En vista del tono irrespetuoso de algunos periódicos políticos, usado no solamente contra el jefe de la nación y otras autoridades, sino contra las instituciones vigentes, el Gobierno ha resuelto: Que toda publicación periódica o no, que directa o indirectamente fomente el trastorno del orden público o que no guarde el debido respeto a las autoridades, sea suspendida, como lo dispone el Decreto sobre prensa, y castigados sus actos a tenor del mismo, sin consideración alguna, sea cual fuere su filiación política.*[683]

Probablemente la prohibición para vocear este periódico no hubo de estar causada en sus opiniones políticas, que por esta fecha eran supremamente moderadas si se llegaran a comparar con los años del periodo de Carlos Holguín, e incluso en los comienzos del periodo de Caro; sino por sus anuncios comerciales de su primera página, que usando una novedosa estrategia, habrían de utilizar inocentes noticias falsas como estrategia para promocionar productos o establecimientos comerciales. La tamaña arbitrariedad, difícil de entender, ya que hubiera sido más visible la sanción impuesta por la molestia que generaba la publicación de opiniones de oposición al Gobierno, que los avisos aparecidos en primera página, como este: "*Los Machos. Heroicos luchadores de la República de Cuba, invitan a todo Republicano a libar una copa, jugar un chico de billar, etc, etc, en su establecimiento de esta ciudad, camellón de las Nieves, número 515. ¡¡ Ocurrid, que esto no viola la neutralidad!!"*[684]

[683] *Los Hechos.* Bogotá, 26 de Enero de 1896. Número 392 p.2.
[684] *Los Hechos.* Bogotá, 20 de Septiembre de 1896. Número 458 p.1.

En mi opinión, la prohibición para que *Los Hechos,* fuera voceado; podría haber tenido el mismo origen por el cual *Los Tiempos* fueron callados de las calles bogotanas al mismo tiempo. Los dos periódicos fueron creados con el propósito específico de dar publicidad a las intervenciones y debates de Rafael Uribe Uribe en la Cámara de Representantes. Incluso en su edición del 4 de Septiembre de 1896, *Los Tiempos* especificaba que, ante la necesidad de publicar dichos discursos, y frente a la realidad de no tener la capacidad física para hacerlo en *Los Hechos*; las disertaciones habrían de ser impresas mancomunadamente. Los discursos del Senador Uribe eran extremadamente virulentos contra la Regeneración y contra el Gobierno de Caro. Sin embargo, la estratagema usada de publicar los discursos de un Senador de la República electo popularmente y consignados en un acta de sesiones; también habría de tener una respuesta ingeniosa, ya que si bien no era violatorio de los Decretos de prensa, la excusa de parte del Gobierno para buscar cualquier trinchera en la cual ampararse para sancionarlos, tampoco habría de ser desaprovechada.

Y si dentro de las ofensas a la "decencia públicas" hubieron de entrar los creativos anuncios comerciales, también habrían de estar incluidos las sencillas opiniones de los redactores sobre temas cotidianos. Por ejemplo, un artículo firmado por "Radamés", y titulado "caprichos absurdos", en el cual el autor criticaba la ropa usada por las mujeres bogotanas, bien podría ser una de las excusas que buscaba el Gobierno para retirarle el permiso para ser voceado. Un extracto del inocente artículo habría de ser leído el 30 de Septiembre de 1896:

> *Suelo espantarme ante la figura ridícula de alguna dama por las protuberancias posteriores que le noto, y no creo difícil que mediante esos adminículos podrían las mujeres dedicarse al contrabando de*

artículos prohibidos[685][...] *por hoy felicito tanto a las niñas flacas como a las gordas; pues merced a los embuchados o cuasi crinolinas de los brazos que se estiran, pueden las primeras ocultar los suyos y los segundos velarlos, dejando adivinar su morbidez a nosotros míseros pecadores.*[686]

No obstante, no haber seguido siendo comercializado por las calles bogotanas al grito vendedor del "chino", *Los Tiempos* hubo de ser reconvenido por el Ministerio de Guerra, quien le ordenó la inserción de una corrección a su artículo del 15 de Diciembre de 1886. En dicho artículo, el periódico hubo de hacer una descripción de los hechos acaecidos en el batallón Sucre acantonado en Soatá. El Ministro de Guerra acusó al periódico de haber calumniado a la oficialidad, pues en el escrito titulado "párrafos de carta", e impreso en el número 43 del periódico, fue relatado que los oficiales del ejército, después de jurar bandera el 18 de Octubre de 1896, y después de terminar con una reunión mediada por las copas, se habrían dado a la tarea de gritar peroratas contra el Presidente Caro.

4.9. LA LLEGADA DE LA LEY

Probablemente en la instalación de un nuevo Congreso el 20 de Julio de 1896, y en el inicio de las sesiones ordinarias, pesó sobremanera el cambio direccional de muchos Congresistas Conservadores ante las incisivas insistencias de los "históricos" quienes nunca dejaron de presionar en el sentido de que la ley de prensa, era uno de los temas de mayor interés general e importancia nacional. No obstante, después de que algunos de sus miembros, otrora militantes en el

[685] El uso de esta prenda interior "postiza" conocida como "quitrín", que buscaba resaltar las posaderas de las mujeres bogotanas, fue cotidianamente retratado por Alfredo Greñas en una de sus más famosas caricaturas de *El Zancudo* del 13 de abril de 1890; provocando más de una carcajada, especialmente cuando en el último cuadro de su dibujo, hubo de exponer a la "catástrofe" a la dama que se le caía el adminículo en plena calle.

[686] *Los Tiempos.* Bogotá, 30 de Septiembre de 1896. Número 26. p. 102.

“independentismo”, se habían negado en los anteriores periodos legislativos a presentar proyectos de Ley para reglamentar el artículo 42 de la Constitución, ya que la lucha frontal decidida, fue mayormente unidireccional en contra de la expresión radical a través de las imprentas; después de ver que la intransigencia del Presidente Caro hubo de lesionar los intereses y la libertad de opinión crítica de los periódicos históricos, especialmente después de 1894, año en el que el conciliador Carlos Holguín, quien después de haber intentado infructuosamente el establecimiento de un nuevo puente de unión desde su último encargo en el Senado de 1894, murió intempestivamente dejando la brecha profundamente más agigantada.

Habiendo transcurrido diez años desde que en la Constitución Nacional fue implantado el Artículo transitorio “K”, la aplicación de medidas contra las publicaciones impresas, especialmente los periódicos, se llevaron a cabo por medio de los Decretos Ejecutivos, la Ley de Facultades Extraordinarias, el Código Penal, y en muchísima menor medida a través de denuncias particulares por medio de los delitos de injuria y calumnia.

La llegada de la ley de imprenta pudo constituir un avance del conservatismo “histórico”, pero también una flexibilización del mismo Caro, quien también pudo ver establecida una normatividad que alejaría las críticas por tantas intervenciones discrecionales emanadas de su potestad como Jefe del Poder Ejecutivo y que, sin embargo, habría de ser suficientemente inhibidora de intentos subversivos. De esta manera, considero necesaria una mirada un poco más pormenorizada a los debates, que aunque pocos, establecieron la primera Ley de Prensa en Colombia que llegó después de casi 48 años, si tenemos en cuenta que la última fue reformada para la Constitución de 1848.

El Proyecto de Ley emanado desde la Cámara de Representantes en el mes de Agosto de 1896 por los Congresistas, hubo de empezar a debatirse inmediatamente, sufriendo una aceleración hacia finales de Noviembre, ante la premura por el cierre de las sesiones ordinarias y el requerimiento de la pronta aprobación del Senado en sesiones extraordinarias.

Aunque fue aprobado por un Congreso mayoritariamente Carista, no por eso dejaron de existir interesantes discusiones sobre algunos elementos del proyecto original de Ley, que además contó al interior con opositores novedosos como es el caso de Rafael Uribe Uribe, Representante a la Cámara por Antioquia, quien en su primer encargo en el Poder Legislativo, habría de oponerse a casi todos los proyectos de ley con una tenacidad nacida de la irreverencia profesada por el partido radical y una valentía propia de quien ha reconocido su participación en la sublevación recién extirpada un año atrás, pero que en virtud del perdón ofrecido por Caro a algunos de sus miembros, decidió salir a la palestra de las Cámaras a expresar sus opiniones de descontento, nacidas de legislar para una Constitución sobre la cual mantuvo un permanente desacuerdo, no obstante el juramento obligatorio hecho al inicio de las sesiones que imponía la defensa de la Carta de 1896 para todos los Congresistas.

Lejos de ser un pacifista en busca de la recuperación de un espacio político para su partido, Rafael Uribe Uribe había llegado a la Cámara de representantes en 1896 con el espíritu combativo, que le había motivado a la planificación y a las posteriores acciones en la reciente guerra de 1895, intacto. Con apenas 22 años cumplidos, y como radical militante, Uribe no esperaba que los regimenes políticos colombianos fueran de larga duración. En la sesión del día 5 de Septiembre, cuando se debatía una ley de presupuestos, tomó la palabra para hacer primero una comparación del promedio de la vida humana, que para 1896 era de 30 años,

explicando que quien lograra traspasar ese límite habría de considerarse afortunado, a sabiendas que su muerte se aproximaba.

> *Ahora bien, haciendo el cómputo de la duración de los diversos regímenes políticos que se han sucedido en el Gobierno de Colombia, garantizando unos la libertad, apoyándose otros en el despotismo, cayendo unos por la fuerza pacífica de la opinión y otros por la de las armas, no se saca promedio mayor de siete años. La Regeneración ha durado ya diez años, por no decir diez y ocho, a contar desde la hora en que la proclamó el ser funesto que le dio nombre. Ha entrado, por tanto en la categoría de excepción, y por ineludible ley política, su fin se acerca. Tengo de ello fe tan firme, seguridad tan absoluta, que si por ellas no fuera, el resorte que me mantiene en pie luchando, se distendería y entonces me mataría el abatimiento. Y siendo esto así, como lo es, y estando Próximo a venir el poder a manos del Liberalismo, ¿Qué autoridad ni que derecho tendrían las minorías que a esta Cámara viniesen para quejarse de que se les aplicasen estas mordazas reglamentarias con que hoy se pretende hacer enmudecer la minoría?*[687]

Uribe no solo era un provocador de la palabra a nombre del partido liberal radical, sino que además desde la Cámara trataba de exaltar los ánimos, incluso de los conservadores "históricos", y de hacer valer una postura "irreconciliable" con el régimen político instaurado bajo la Constitución de 1886.

Las relaciones de los debates en la Cámara de Representantes no se encuentran ordenadas de forma secuencial. En los actas de sesiones hacia finales de

[687] *Anales de la Cámara de Representantes.* Bogotá, viernes 20 de Noviembre de 1896. No.68 p,662

Noviembre se pueden encontrar los correspondientes a los inicios en el mes de Octubre, pero en los anales impresos en el mes de Octubre se pueden encontrar los debates de Agosto.

4.9.1. EL DEBATE EN LA CÁMARA.

Iniciando Septiembre de 1896, la sesiones de la Cámara introdujeron cortos debates sobre el Proyecto de Ley de Prensa, sin embargo, la intervención del Representante Rufino Cuervo, proponente del Proyecto de Ley, en la del 16 de Septiembre, planteó que mientras las comisiones de hacienda presentaban sus informes, se discutiera la ley de prensa que, en su opinión, revestía de un mayor interés general. El Representante Mantilla también aceptó adelantar los debates sobre prensa. Esta moción fue aprobada, iniciándose este día las discusiones, que no tuvieron otras desavenencias que las referidas a modificaciones de palabras hechas al Proyecto inicial. De hecho, dicho Proyecto de Ley, con pocas variaciones fue aprobado casi en su totalidad como quedó escrita la Ley final.

Los primeros artículos, que tenían que ver con las precisiones sobre la manera en que debían llevar insertos la numeración y las fechas, contienen una especificación que fundamentaba que los periódicos no pueden recibir subvención de ninguna especie de parte del Gobierno, ratificando la molestia generada hacia los gobernantes de “La Regeneración” que incluyeron dentro de sus presupuestos de gastos anuales la subvención de periódicos para afianzar las ideas políticas de su proyecto político.

Llama la atención que la aprobación del artículo 4º del Proyecto, que contenía esta prohibición, fuera llevado a cabo sin ninguna objeción, quedando plasmado en la Ley final, toda vez que, para el movimiento gestado por Rafael Núñez, era de gran importancia la defensa de sus ideas contra los ataques del periodismo radical

y posteriormente del conservatismo histórico, desde el afianzamiento de las propias incluidas en sus periódicos nacionalistas.

Igualmente sucedió con la aprobación de los artículos 1º al 9º. El 10º, que fue debatido en la Sesión del 30 de Septiembre, y que se refería a las prohibiciones a las que estaban obligados quienes habrían de publicar impresos, fue interpelado por el Representante Burbano, quien le quería agregar en su artículo 4º el matiz religioso de: *"Publicar sin licencia de la autoridad eclesiástica obras sagradas, morales, catequísticas o devotas."*[688]*;* siendo impugnada por el Representante Esguerra y negada dicha modificación. Continuó la discusión sobre el artículo 10º y después de una votación por partes secuenciales, proceder en el cual habrían de analizarse y debatirse el proyecto en su totalidad, a solicitud del Representante Peláez, fue propuesto por el mismo, la modificación del inciso 1º, pero le fue negada su idea de obligar la colocación de la firma del autor tanto en el original como en la publicación. En cambio, si fue aprobada la del Representante Cuervo, que propuso que la firma del autor quedará en el original, y el dueño del establecimiento estaría obligado a guardarla durante un año.

Peláez modificó la anterior, añadiéndole que las publicaciones ofensivas de carácter personal en hojas sueltas, *remitidos y comunicados* deberían llevar la firma de su autor. Dicha sub modificación fue impugnada por Rufino Cuervo Márquez y aprobada por la Cámara. Esta sesión fue cerrada a las 4.30 de la tarde con el debate de la ley de prensa y quedó para su continuación.

La sesión del 1º de Octubre se centró en la diferenciación que debería quedar en la ley sobre las funciones del periodista y los responsables sobre quienes recaería esta. Al respecto, el Representante Márquez propuso que para ser Director o

[688] *Anales de la Cámara de Representantes.* Bogotá, 29 de Octubre de 1896. No.50 p.394.

Redactor de un periódico, se estableciera la necesidad de ser colombiano de nacimiento y con el ejercicio de sus derechos políticos vigentes. La explicación de Márquez sobre su propuesta estaba basada en que el artículo 12º del proyecto habla del Director, del Redactor y del Colaborador, y en consecuencia, porque el redactor puede ser alguien distinto del Director y del colaborador, y porque:

> *Existen casos en que especialmente en épocas eleccionarias, en que se hace figurar como Director de un periódico político a personas sin posición, sin precedentes e irresponsables que no escriben, que solo dan su nombre, y que son, a lo mas, administradores del periódico, y a la sombra de las verdaderas pantallas, se oculta, como Redactor, aun cuando sin dar su nombre, una personalidad poderosa en el campo de la política y de grandes influencias en el Gobierno y en el país; y en este caso parece natural que si en el periódico se publica por este personaje algo que caiga bajo la sanción penal de esta ley, se le castigue.*[689]

Márquez hizo unas aclaraciones que sirvieron para entender la prensa colombiana más en el aspecto teórico que práctico. Aunque el artículo 13º no especificaba las funciones, dijo el Representante a la Cámara que sí había distinciones entre los unos y los otros. Dijo que el Director, se encargaba por lo regular de la parte mecánica del periódico, escogiendo los materiales, determinando el orden en que debían publicarse, haciendo las correcciones necesarias, etc. el Redactor, escribía los editoriales y artículos de fondo que aparecían en la sección editorial, y los colaboradores escribían en las otras secciones correspondientes del periódico. En ocasiones el Director era también Redactor. Expresó Márquez que no entendía porque fue establecida una distinción entre los unos y el Director, ya que en el

[689] *Anales de la Cámara de Representantes.* Bogotá, 30 de Noviembre de 1896. No. 76 p. 789.

artículo en mención había especificado la necesidad de ser colombiano solamente para el cargo de Director.

Rufino Cuervo opinó que dejar dicha disposición sería privar al periódico de colaboradores extranjeros, pero según el Senador Próspero Márquez, representante por Boyacá, esto no tenía fundamento porque los colaboradores si podrían serlo, lo que quedaría prohibido sería el ejercicio del cargo de Directores.

A este respecto, el Representante Peláez opina que en Francia existen disposiciones semejantes a las que proponía Márquez, Pero Cuervo le respondió que: *"aquí no estábamos en Francia, sino en un país en donde todavía no hay el suficiente adelanto intelectual para poder aceptar leyes que sólo son practicables en los países más avanzados"*[690] *;y* que Peláez y Márquez no sabían de la estructura periodística, y que en Colombia un Director de un periódico regularmente debía hacerlo todo.

El Representante Cuervo, para corroborar la situación de los periódicos en Colombia, le hizo un llamado al Representante O´Byrne, para que aclarara estos aspectos en su calidad de periodista en ejercicio como Director del periódico *El Porvenir* de Cartagena y gran conocedor del tema como publicista de una de las publicaciones más antiguas del país. Cuervo decía que además, en Francia un Director de periódico sólo dirigía y pagaba sueldos, encargando a cada uno de sus colaboradores una sección del periódico, pero que en Colombia, el Director era el mismo Redactor, "*en donde, por mil circunstancias, se hace muy difícil la misión del periodista"* [691] *.* Cuervo expresaba que si se le exigía a un Redactor responsabilidad, lo mismo que a un Director, era porque no estaba aún claramente

[690] Ibíd.
[691] Ibíd.

definido qué se entendía o que debía entenderse por Director, por Redactor y por Periodista.

O´Byrne expuso que estaba en todo de acuerdo con Rufino Cuervo Márquez, agregando que estas distinciones no favorecían en nada al Gobierno ni aumentaría el número de los culpables. En su intervención expuso, que en Inglaterra la mayoría de hojas eran anónimas pero que nadie escapaba a las severas leyes que se imponían contra la prensa, y que en Francia, al igual que en varios países europeos, bastaba con que una sola persona se hiciera responsable en la parte política, para que se le permita dar circulación al periódico. Expuso además, que en Colombia era común aceptar que el Director de un periódico fuera el principal y único responsable. Aludió la autoridad de su voz en la materia, como resultado de ser el Director de uno de los periódicos más antiguos del país. *"En países como el nuestro, donde el periodismo reviste casi los caracteres de una manía, improductiva siempre, el personal de la Redacción de un periódico no pasa muchas veces de cuatro individuos, y en algunos como El Porvenir de Cartagena, no pasa de uno."*[692]

Después de la discusión, los Representantes convinieron en la especificación total del Título II de la Ley, llamado "impresores" al propietario, al director y al encargado del establecimiento de tipografía, y en el Título III llamando "periodistas" al propietario del periódico, a su director, a sus redactores y colaboradores. De esta manera, entrarían en el saco todos los personajes que tenían que ver con la producción de los periódicos para efectos de sus sanciones.

En la siguiente sesión del 5 de Octubre de 1896, el tema central de la discusión giró en torno del artículo 20 del proyecto de ley, que en su redacción original

[692] Ibíd.

proponía que la rectificación de un agravio publicado en un periódico se hiciera mediando la intervención de un juez. A este respecto, el joven y fogoso Congresista, José Vicente Concha expresó que no se hacía necesaria la intervención de un Juez para que este señalara sobre las lesiones a la honra de una persona, ya que el mismo individuo era al mismo tiempo su propio Juez en materia de la defensa de su "honra". Cita a Pelletan cuando, al discutir en Francia un proyecto de ley de Prensa, dijo que: *"el único Juez de la propia honra es uno mismo".*[693] No obstante, Rufino Cuervo le reparó que, podría suceder que una persona se sintiera ofendida por un escrito inocente y sería injusto que por este hecho fuera obligado un periodista a insertar rectificaciones inmotivadas. La necesidad expresada por Cuervo, de la existencia de una autoridad que decidiera, fue contradicha por Concha al exponer que esa posibilidad era muy remota con el argumento confuso de que nadie era capaz de inventarse ofensas, aduciendo además que, a diferencia de los asuntos de interés público o general, los asuntos de honra eran muy delicados para dejarse a la discreción de un empleado. Para Concha la honra era tan importante, que incluso si la rectificación hubiera de hacerse en el número siguiente al publicado con la ofensa, la imprenta debería trabajar toda la noche para ello, sin importar el menoscabo de los intereses industriales de la misma. Esta interpelación de Concha, que finalmente quedaría plasmada en la ley definitiva, era importante porque estableció por primera vez la posibilidad de que el periódico reflexionara sobre la posible adjudicación de términos injuriosos, y siendo así, la solución primigenia era la inserción de la rectificación en la misma publicación de un escrito del agraviado. Sin embargo, si se llegara a una contradicción entre las partes, el arbitrio final quedaría a cargo del Ministerio de Gobierno, quien habría de designar un censor.

[693] Ibíd. p, 792

El segundo párrafo del artículo 20 en discusión fue muy interesante, pues entró en el terreno de la escritura de la historia, y hablaba de la manera como debía comportarse la ley con respecto a la ofensa de personas muertas. A este respecto, el Representante Concha señaló que una cuestión grave, aún no resuelta llamada difamación a los muertos, era necesario analizarla a fondo;

> *Porque, ¿como se hace para escribir, por ejemplo, la historia de un país, si con esta historia se hallan íntimamente vinculado el nombre de un individuo de quien hayan de decirse cosas que si están acordes con la verdad histórica, bien pueden ser depresivas de la honra de ese mismo nombre? ¿Que haría un periodista si se le presentaran en este caso muchos amigos del difunto a quien se refiriera el escrito, con sendas rectificaciones y al mismo tiempo los herederos quisieran se guardara silencio, a fin de evitar, al continuar las publicaciones, el conocimiento de otros hechos más graves para la honra del finado, y que cualquiera preferiría quedaran ocultos? Si hay amigos que quieran defender y parientes que no, ¿Qué haría el periodista en esta disyuntiva?*[694]

Decía Concha que lo de injuria y calumnia quedaba para hechos que tuvieran, por ejemplo, cincuenta años cumplidos, y que el periodista para sostener lo dicho, tendría que ir a revolver archivos y a buscar documentos, lo cual entorpecería la mayor parte de las publicaciones de carácter histórico. La modificación de Concha, según el mismo, amparaba los derechos del periodista al proponer la modificación que habría de ser finalmente aprobada: *"cuando se tratare de personas muertas o ausentes, pueden ejercitar el derecho de que trata este artículo sus herederos,*

[694] Ibíd.

parientes, y amigos, y al periodista sólo obligará a atender el primer escrito que le fuere llevado, y en caso de simultaneidad, se atenderá el orden expresado."[695]

El Representante O´byrne también propuso una modificación del artículo 20 del proyecto original, argumentando que la misión de la prensa estribaba en corregir "censurando" tanto actos de particulares como de empleados públicos, cuando estos fueran en contravía de los intereses sociales o del país; considerando por lo demás injusto el castigo a un periodista por el hecho de ejercer esta "censura" cuando esta no habría de estar determinada por los hechos determinados que señalaba la ley. La defensa de la facultad del periodista para "censurar" suscitó las propuestas del mismo O´byrne quien propuso que las rectificaciones fueran publicadas siempre y cuando estas no fueran contrarias a las leyes, a las buenas costumbres o al interés legítimo de terceros o al honor del periodista mismo.

El debate suscitado por el uso en el proyecto original de la palabra "censura", que finalmente no quedaría plasmada en la ley final, al igual que la modificación de O´byrne en defensa de esta facultad del periodista, fue reafirmado por el Representante Juan Francisco Mantilla, quien dijo estar de acuerdo con Fidel Peláez, Representante por el Tolima, en la amplitud que debía dársele a la palabra censura, pero que no obstante, era necesario hacer la distinción de si esta era justa o injusta. Dijo que, aunque el Gobierno había sido benevolente con la prensa, esta tenía la necesidad de ser moralizada porque así;

> *El joven periodista que quiera hacer censuras no tendrá inconveniente en ir a las oficinas y a los archivos para inspirar en fuentes puras sus argumentos, y para persuadirse de la verdad de lo que censure. Pero no debe olvidarse que la prensa ha venido usando un lenguaje procaz*

[695] Ibíd.

y apasionado, que no puede aceptarse. Por eso, le daré el voto a la proposición de Peláez por submodificar el darle a la palabra censura la debida interpretación, y con eso quedarán favorecidas las aspiraciones de los jóvenes que se levantan y que quieran dedicarse al periodismo para tratar todos los asuntos de interés público.[696]

El 9 de Octubre de 1896, se abrió de nuevo el segundo debate de la ley de prensa con la ausencia del Representante Rafael Uribe Uribe, quien no había estado presente tampoco en los primeros, por motivos de salud, y en los cuales los artículos desde el número 21º hasta el 25º fueron aprobados sin discusión. El artículo 26º fue reformado en una palabra ante la moción del Representante Manuel Esguerra, y posteriormente fueron aprobados, previa lectura del proyecto, todos los restantes hasta el número 31º. Acto seguido, el artículo 32º que hablaba sobre el carácter de las publicaciones que habrían de ser consideradas como subversivas, tuvo el voto a favor a la propuesta del Representante José Vicente Concha para que fuera analizado inciso por inciso, siendo aprobado hasta el inciso número 6 con una sola opinión modificadora hecha por el Representante Francisco Vergara, quien quería que se cambiara la palabra "atacar" por "ofender" para el caso de los escritos contra las Naciones amigas. Su propuesta no fue aprobada por considerarla demasiado laxa ante la defensa del uso de la primera palabra que hicieran los Representantes Concha, Rufino Cuervo, Mantilla y Peláez.

Continuó el debate de la ley de prensa el 24 de Octubre, esta vez contando con la presencia del Representante Uribe Uribe, y habiendo quedado pendiente la discusión en el artículo 32º, que fue aprobada sin debates desde el inciso número 6 hasta el número 12. Sin embargo, la discusión se suscitó en el inciso número 13 que decía, en el proyecto original, que constituía un delito de publicación

[696] Ibíd.

subversiva el hecho de: "*Calumniar o injuriar al Encargado del poder Ejecutivo, a los Ministros del Despacho, a los Gobernadores de los Departamentos, a las autoridades eclesiásticas superiores y a los Ministros plenipotenciarios, Enviados Extraordinarios, Ministros residentes y encargados de Negocios acreditados cerca del Gobierno de Colombia, en cuanto de refiera al desempeño de sus funciones oficiales y no a actos de su vida privada."* [697] Ante esto, el Representante Bartolomé Rodríguez propuso la suspensión indefinida de la consideración de este artículo; pero ante la impugnación de los Representantes Manuel Esguerra, Francisco Vergara, y Carlos Calderón; entonces Rodríguez cambió su propuesta para que se suspendiera la discusión de este inciso para ser considerado cuando se discutiera el artículo 53º del Proyecto. Pero como era muy tarde, las 4.15 minutos de la tarde, la sesión fue levantada, quedando con la palabra Rafael Uribe Uribe.

En la reanudación del debate, el 26 de Octubre de 1896, el Representante Uribe Uribe, no obstante tener la palabra para iniciar sus opiniones al proyecto, se retiró de la sala por un hecho curioso.

Ese mismo día, la Cámara acudió a debatir un proyecto de ley para otorgarle una distinción llamada "espada de oro" al General Rafael Reyes por sus servicios a la nación en la recientemente victoria contra el liberalismo radical en la corta guerra de 1895. Uribe Uribe consideró que no podía votarla afirmativamente porque él había pertenecido al partido radical vencido en la guerra, ni negativamente por *"impedírselo el recuerdo de la buena voluntad demostrada por el General Reyes a favor de la protección a los vencidos"*[698]*,* y decidió abandonar el recinto. Sin embargo, regresó cuando le informaron que ya había sido votado el proyecto de "espada de oro", y quedando nuevamente con la palabra para intervenir en el

[697] *Anales de la Cámara de Representantes.* Bogotá, 13 de Noviembre de 1896. No.62 p. 560.
[698] Ibíd. p.561.

proyecto de ley de prensa, expresó la opinión reprimida a causa de su ausencia por enfermedad.

Básicamente, el Representante Uribe habló en contra de todo el proyecto de ley, pero en los anales de la Cámara no fueron consignadas sus palabras en la edición del 30 de Noviembre de 1896, sino hasta una nueva publicación que recogió igualmente, los pormenores del día 26 de Octubre, y que fue impresa el día 5 de Diciembre. De cualquier manera, Uribe hizo uso de la palabra quejándose porque mientras estuvo ausente por enfermedad, o por fuerza mayor, se debatieron asuntos importantes referentes a la libertad de prensa. Expuso además Uribe, que en la última sesión, el Representante Márquez le dijo a sus colegas "*que se apresurase la discusión del proyecto, antes de que volviese el elemento perturbador"*[699]

La razón de la presencia del Representante Uribe en el Congreso, siendo parte del liberalismo radical, fue expuesta por el mismo desde la perspectiva de la oposición política al Gobierno. De hecho, sus discursos sobre la composición de una ley de prensa no se alejaban en nada del acervo de términos referidos a la libertad, a la asfixia de la opinión pública, y al enmudecimiento y prisiones injustas de periodistas, hechos a la oposición radical desde diferentes medios. Uribe alegó, que si después de esta diatriba de agravios contra la prensa, lo único que habría de proponer la Regeneración era: "*este incompleto, absurdo y tiránico proyecto de ley, entonces queda, por el voto del Congreso, confirmado una vez más que este es un régimen incompatible con el libre juego de la opinión pública y que se asfixia en toda atmósfera que no sea de represión."*[700]

[699] *Anales de la Cámara de Representantes.* Bogotá, 5 de Diciembre de 1896. No.81 p.866.
[700] Ibíd. P.867.

Reconoció también, que en su paso por la Cámara de Representantes, solamente había presentado dos proyectos de ley, uno sobre la abolición de la pena de muerte, y otro sobre una ley de indulto, pero hubo de quejarse, porque ni siquiera estos habían sido considerados en el orden del día, y que por esta misma razón tampoco habría de atreverse a presentar un propio proyecto de ley de prensa, ya que tendría que atravesar un nuevo rechazo; no obstante considerar, y esto podría demostrar cierta metamorfosis del radicalismo, que la prensa si requería una legislación que la sujetara a responsabilidad. Pese a este reconocimiento, no encontraba Uribe Uribe nada rescatable del Proyecto de ley, por eso llegó a decir también que;

> *Menos me pondré a modificar disposiciones aisladas del que se discute, lo cual implicaría la aceptación de todas las demás disposiciones a que expresamente me opusiese. Según mi criterio de Republicano, el proyecto es en absoluto detestable, así en su plan como en sus pormenores, y por consiguiente, yo no tengo nada que hacer sobre él. No tema, pues, el señor Márquez ni tema la Cámara que yo venga a perturbar el debate. […] en definitiva lo que el país va a tener es la reglamentación de esa disposición transitoria, con el sello del Poder Legislativo, o sea el reemplazo de la arbitrariedad abierta.*[701]

Las respuestas de los defensores del Proyecto no se hicieron esperar, en cabeza del Representante Rufino Cuervo Márquez, quien explicó que la mayoría de los Congresistas, simplemente estaban defendiendo el lema de "*libertad en la justicia".* Le recordó también, la retahíla de defensa usual del partido Conservador cuando el tema de la prensa se acaloraba con el radicalismo, afianzada en que, cuando el partido radical gobernaba, se cometieron atropellos que fueron delitos y

[701] *Anales de la Cámara de Representantes.* Bogotá, 5 de Diciembre de 1896. No.81 p.866.

arbitrariedades contra la prensa opositora; recordándole el caso de José María Samper y el de Lino Ruiz. Le dijo a Uribe que, antes de hablar de las libertades reprimidas por la Regeneración, debía haberse manifestado también arrepentido por las "*faltas y crímenes cometidas por su partido"*[702]*.*

Pese a la defensa del Proyecto de Ley, Cuervo le pidió al Representante Arístides Rodríguez la corrección del artículo 30º, que colocaba en manos del Poder Ejecutivo un arma terrible para aniquilar a la prensa ya que, precisamente uno de los propósitos de la ley discutida era quitarle estas facultades el Presidente. Es muy probable que en la argumentación sobre este aspecto, se hubiese referido al Presidente Caro cuando hubo de explicar que "*La autoridad que ese inciso concede es peligrosa en demasía, entre otros motivos, porque puede ser el Encargado del Ejecutivo un individuo de carácter irascible, que le haga perder la serenidad a menudo."*[703]

Por su parte, el Representante Ignacio Sanpedro declaró que Uribe Uribe era el único apoderado de un partido vencido, y que no se le podía calificar como un elemento perturbador ni obstruccionista y que su conducta no había sido censurable. Pero el Representante Esguerra, defendiendo el proyecto de ley, dijo que no era cierto lo que decía Uribe Uribe, acerca de que éste es destructor de la libertad de imprenta en el país, porque el proyecto no establece la censura previa u otra condición como el establecimiento de una fianza que impidiera la libre publicación de ideas.

> *Lo que el proyecto no sanciona es la irresponsabilidad por los abusos de la prensa. Mas la responsabilidad por el abuso de una libertad cualquiera no implica de ningún modo la pérdida de esa libertad. […]*

[702] Ibíd. p.867.
[703] Ibíd.

> *Todos somos libres para lanzar a la publicidad nuestras ideas y nuestros juicios; pero si con ellos ofendemos la honra de las personas o atentamos contra el orden social o la tranquilidad pública, natural, y justísimo es que esa ofensa o este atentado, que implican un abuso de esa libertad, sean reprimidos y castigados por la ley.*[704]

La interrupción del Representante Uribe Uribe en el debate diciendo: *"El orador ataca molinos al viento, porque yo no he dicho que sea partidario de la irresponsabilidad de la prensa,"* [705] parecería indicar que el propósito del Representante del liberalismo radical en la Cámara de Representantes era más el de mantener una vocería de su partido oponiéndose a las leyes que todavía llamaba "de la Regeneración", que el de proponer reformas a la legislación.

Después de 10 años de vigencia de la Constitución de 1886, el liberalismo radical no había renunciado aún al desconocimiento de dicha carta, y aunque Urbe al posesionarse en su cargo legislativo, hubo de jurarle obediencia, nunca dejó de expresar su desavenencia con ella y la defensa sobre la necesidad de una nueva.

Este mismo día, 26 de Octubre, se continuó el debate con el tema de las consideraciones para calificar como subversiva una publicación. El "ataque" al Presidente, a los Ministros, a las autoridades eclesiásticas superiores, enviados extraordinarios, Ministros residentes, y encargados de negocios acreditados en Colombia, cuando se refiera al desempeño de sus funciones; que pretendía el Representante Mantilla introducir en un mismo saco, fue debatido por Calderón, quien pedía que las personalidades ofendidas solamente fueran el Presidente y las Autoridades Eclesiásticas Superiores, siempre y cuando, la ofensa fuera en

[704] Ibíd.
[705] Ibíd.

contra de sus actuaciones oficiales y no de su vida privada. Este aporte fue el que quedaría implantado en el inciso 13 sobre los delitos subversivos.

Esta sesión hubo de cerrar con el desacuerdo del Representante Esguerra a la supresión de las facultades del Presidente para suprimir y corregir, porque según su opinión, tanto los Ministros como el Jefe de Estado deberían tener este poder, ya que; "*es el baldón, el vilipendio y el escarnio que la calumnia y la injuria implican, arrojados sobre el Gobierno, lo que constituye delito contra el Estado, lo que entraña un atentado de subversión, como que ello tiende a desprestigiar la autoridad, a alentar las facciones y a estimular el espíritu de rebelión.*"[706]

El Martes 27 de Octubre de 1896 se continuaron las sesiones y en ellas la discusión del proyecto de ley de prensa bajo la Presidencia de Marco Fidel Suárez. Además del Representante Uribe Uribe, el Congresista Francisco Vergara y V., hizo también oposición a este proyecto de ley por considerarlo demasiado represivo, llegando a decir que daba su voto negativo porque la aprobación de todo el inciso referido a que la ofensa de altas personalidades otorgara la calificación de delitos subversivos, equivalía a implantar en el país, lo que en la prensa extranjera se llamaba "*ley de tendencias políticas*".[707]

La prescripción en el tiempo de las publicaciones consideradas subversivas fue motivo de varias intervenciones de los Representantes a la Cámara en la sesión del día 30 de Octubre. Mantilla dijo que un año de límite, Carlos Cuervo Márquez dijo que pasados solamente 8 días. Esta moción fue impugnada por Concha, Mantilla y Esguerra, que opinaron que 40 días para la acción criminal y 6 meses para las penas era un tiempo suficiente y justo.

---

[706] Ibíd.

[707] *Anales de la Cámara de Representantes,* Bogotá, sábado 14 de Noviembre de 1896. No.63. p.570.

Por su parte, el Representante Uribe Uribe, expresó que esta prescripción debería ser reducida al mínimo, por ejemplo 8 días, pero que él no habría de hacer una propuesta modificadora. Solamente expresó que era necesario considerar que, ya que en las disposiciones del proyecto, se decía que cuando un periódico saliera a la luz pública, era obligado a enviar un ejemplar al Despacho de la primera autoridad respectiva cuando, según Uribe con ocho días bastaba para saber cuándo se había infringido la ley. Expuso que las autoridades deberían leer el periódico al momento de su salida, y "*no seguir el sistema del doctor Carlos Holguín, quien declaró paladinamente que no leía los periódicos, ni del señor Luís Holguín, quien en una publicación que acabo de ver, tiene la audacia de decir que desprecia las opiniones de la prensa.*"[708]

Esta sesión hubo de ser clausurada a las 5.45 minutos de la tarde sin que se hubiera logrado un acuerdo sobre este tema; mientras en una última alocución, el Representante Mantilla consideraba que esperar cuatro meses para la prescripción de las publicaciones subversivas era muy poco, llegando a proponer que se cambiara el tiempo a un año.

El día 6 de Noviembre de 1896 fue dedicado por entero a la discusión de la ley de prensa, que se debatió desde la sesión matinal hasta la noche. En la mañana, el llamado segundo debate del proyecto mantuvo la discusión sobre el tiempo de prescripción de las publicaciones subversivas. A la propuesta que había quedado pendiente de los Representantes Mantilla y Esguerra, Uribe Uribe pidió la modificación para señalar solamente 15 días. Esta fue nuevamente negada, y se aprobó la de Mantilla con una pequeña modificación, quedando establecidos los cuarenta días.

[708] *Anales de la Cámara de Representantes.* Bogotá, 7 de Diciembre de 1896. No.82. p.875.

Después se puso en discusión el artículo 36º del Proyecto, que hablaba de las penas impuestas. Uribe Uribe pidió que se votara por partes, pidiendo que el primer inciso de las penas que llegaba hasta 500 pesos fuera reducido hasta 200 pesos, entonces Vergara la sustentó y propuso el texto que con una pena de 200 pesos, finalmente fue votado, con la impugnación del Representante Mantilla. Posteriormente, los incisos 2, 3, 4 y 5, fueron votados sin discusión, pero el número 6 que castigaba con arresto de 8 días hasta 1 mes, fue aumentado a 15 días hasta 3 meses.

Aunque Uribe Uribe había planeado no intervenir, probablemente recapacitando después de considerar que cualquier victoria, aunque pírrica, podría ayudar a la mayor expresión de la prensa radical, y específicamente al ejercicio personal que hizo desde la prensa bogotana; solicitó a la Presidencia que se anotara su votación negativa del artículo 36º, y que se declarara nulo el artículo 37º del Proyecto, que adicionaba a las multas para quienes hubieran reincidido en el delito; el arresto.

Esta moción fue negada. A las 10.30 a.m. se levantó la sesión matinal, y el debate volvió a empezar a las 1.15 de la tarde, votándose afirmativamente y sin trabas, desde el artículo 37º hasta el 48º.

El artículo 49º del Proyecto, que expresaba quienes eran las personas llamadas a juzgar y a imponer penas en los delitos de prensa, en cabeza del Ministro de Gobierno y el Consejo de Estado, los Gobernadores y los Tribunales del Distrito Judicial; fue votado afirmativamente, con la única oposición de Uribe Uribe y de Vergara y V. Después también fueron votados afirmativamente, previa lectura de los mismos, desde el artículo 50º hasta el 64º.

El artículo 70º del Proyecto que decía específicamente que, si la producción subversiva se hallaba en el caso del ordinal 13, del artículo 32, es decir, cuando injuriara o calumniara al Presidente o a los Obispos, se le concedería al penado el derecho de justificar la imputación tachada de injuriosa o calumniosa con el otorgamiento de 6 días y el de la distancia, para crear las pruebas de la verdad de ella, las cuales serían solicitadas ante el respectivo tribunal.

Ante esta posibilidad, el Representante Vergara y V. trató de aumentar el tiempo para comprobar lo dicho, a 10 días; pero la propuesta no sólo fue negada, sino que terminó con el artículo suprimido por completo, especialmente con las impugnaciones del Representante Esguerra. Sin embargo, Vergara y V. no se rindió ante la negativa plena, y trató de hacer aprobar uno más laxo que, sin embargo, guardaba la esperanza de que el periodista que fuera acusado de calumniar o injuriar al Presidente de la República o a los Obispos, tuviera una oportunidad. El texto rezaba así:

> *Si la producción subversiva se hallare en el caso del ordinal 16 del artículo 32, se concede al penado el derecho de justificar su aserto y demostrar que no ha causado peligro al orden público, y se le otorga el término de 10 días, y el de la distancia, en su caso, para crear las pruebas de la verdad de su dicho, las cuales se solicitarán ante el respectivo tribunal.*[709]

Pero, no se habría de permitir el "riesgo" de que un periodista que "osara" insultar a estos personajes tuviera la menor posibilidad de demostrar lo dicho, y la

[709] *Anales de la Cámara de Representantes.* Bogotá, viernes 20 de Noviembre de 1896. No.68 p,650

variación de Francisco Vergara[710] fue negada; dejándose abierta la discusión sobre el Artículo 74º, pero debido a que la hora indicaba las 4 y 20 minutos de la tarde, la sesión fue levantada con la convocatoria para la sesión nocturna, de ese mismo día, que hubo de iniciar a las 7.45 de la noche.

Fueron aprobados los artículos 75º y 76º del Proyecto, que en la ley habrían de quedar marcados como el 72º y el 73º, mientras que el artículo original llamado 74º, fue negado totalmente por la Cámara. Este decía así:

> *En el caso del ordinal 13 del artículo 32, el fallo condenatorio será publicado no sólo en el periódico o periódicos que hubieren acogido la injuria o calumnia, sino también en 5 más de los nacionales que designe la persona ofendida. A cargo del penado será insertado el fallo condenatorio en los periódicos de que habla este artículo.*[711]

Al parecer, más que una defensa hacia los periódicos, que además de soportar el fallo condenatorio habrían de publicarlo, el artículo negado pretendía alejar la sensación de arbitrariedad de parte del Clero y del Ejecutivo, quienes tendrían que ser mencionados nuevamente en seis publicaciones.

En esta sesión nocturna, fueron aprobados sin problemas hasta el artículo 79º del proyecto original. El señalado con el ordinal 80º, que decía originalmente que la

---

[710] Este Representante Antioqueño, fue un gran defensor del General Marceliano Vélez, y un respetado jurista por su claridad en el discurso y en la erudición de memoria. Su sabiduría hubo de ser descrita en un pequeño libro llamado "Siluetas Parlamentarias" impreso en 1896 y con la autoría seudónima de "REG" (Rafael Espinosa Guzmán) y "Casimiro de la barra" (Clímaco Soto Borda), de la siguiente manera: *"El alma universal metida en un hombrecillo de metro y pico de alto, hombros subidos, ojos negros y vivaces, rostro animado color de hierro viejo [...] su saber es "tan grande y tan hondo, y tan vasto", que un acérrimo amigo suyo decía: "Quisiera saber la diezmillonésima parte de lo que Vergara sabe...Pero en orden."* SOTO BORDA, Clímaco. [Casimiro de la Barra] Siluetas Parlamentarias del Congreso Nacional de 1896. Corregidas y aumentadas. Bogotá: Imprenta de La Luz, 1897. p. 135-136.

[711] Ibíd.

ley debía ser publicada por una sola vez en todos los periódicos y en un solo número, "*si la extensión de este lo permitiere; si no, el excedente se publicará en el número o números inmediatos, ocupando en cada uno de ellos, por lo menos la mitad del espacio destinado de texto de lectura*"[712], fue impugnado por Vergara y V., siendo modificado por el Representante Mantilla, quedando como quedó en la ley, es decir, con la modificación de *"y ella será publicada, ocupando, por lo menos, dos columnas del respectivo periódico hasta su conclusión"*[713]. Finalmente, este fue aprobado y en la ley quedaría con el número 77º. A paso seguido, se aprobaron los 81º y 82º originales, que en la ley serían los 78º y 79º últimos.

Sin embargo, el último refierido a la derogación del famoso artículo K, el Representante Vergara hizo constar su voto negativo diciendo que; *"por creer que si la ley no puede expedirse menos rígida, preferible es continúe rigiendo el decreto sobre la materia".* [714] A pesar del esfuerzo de la Cámara de Representantes por concluir en este mismo día el segundo debate del Proyecto de Ley de Prensa, y haberse extendido hasta largas horas de la noche, no fue posible su conclusión plena, no obstante la aprobación de la totalidad de los artículos, debido a la falta de quórum. La sesión se levantó a las 9,45 minutos de la noche con la constancia de inasistencia de los Representantes:

> *Barrera, Burbano, Burgos, Concha, Córdoba, Carlos Cuervo Márquez, Rufino Cuervo Márquez, Charry, de León, Cipriano Duarte, Bernardo Escobar, Jeremías Escobar, Eladio Ferrer, Julio Ferrer, Grimaldo, Hernández, Hoyos, Jiménez, Lesmes, Martínez, Segura, Montoya, Moreno, Moya, Vásquez, Navia. Neira, Noguera, O´Byrne, Ortiz Durán,*

[712] Ibíd. p.651
[713] Ibíd.
[714] *Anales de la Cámara de Representantes.* Bogotá, viernes 20 de Noviembre de 1896. No.68 p. 652.

Patrón, Peláez, Pichón, Rojas, Rodríguez, Sarria, Suárez, Camilo Torres, Uribe Uribe, Valencia y Bernardino Vargas.[715]

La urgencia por la aprobación del Proyecto de ley era tan alta, que a pesar de que en el orden del día para el sábado 7 de Noviembre no se encontraba programado, éste fue modificado para continuar con quienes tuvieran aportes finales a lo ya aprobado. Bajo la presidencia del Señor Palau se reanudó la discusión que había quedado en una modificación al artículo 16º hecha por el señor Guillermo O´Byrne para que quedara así el artículo:

Al vocear un periódico, se anunciarán su nombre y su número, las noticias que verdaderamente contenga, la edición, sin enumerar cuestiones personales ni asuntos que ofendan la moral pública. Los voceadores que contravinieren a esta disposición, serán correccionados [sic] severamente por la policía.[716]

Pero la práctica comercial de los voceadores, junto a sus gritos que avivaban y desesperaban a los transeúntes de las calles bogotanas, no habrían de tener mayores consideraciones que las del Director de *El Porvenir,* después de que esta fue rechazada, quedando el artículo que ya había sido aprobado previamente y que decía: *"Al vocear el periódico solo se anunciarán su nombre y su número"*. El Representante Rufino Cuervo Márquez también hizo notar su voto negativo ante la afonía obligatoria plasmada en la ley.

La totalidad de los artículos pasaron a una revisión de los Representantes Calderón Reyes y Mantilla, y en la Sesión del Sábado 12 de Noviembre de 1896, y bajo la Presidencia del Representante Palau, se presentó toda la ley nuevamente

[715] Ibíd.
[716] *Anales de la Cámara de Representantes.* Bogotá, 21 de Noviembre de 1896. No.69 p. 666.

siendo impugnada por Uribe Uribe y sustentada por Eladio Ferrer. Cerrada la discusión se aprobó el proyecto, con el desacuerdo total de tres Parlamentarios, que hicieron notar su voto negativo en la Cámara. Estos fueron los Representantes Velistas Bernardo Escobar, Joaquín María Córdoba, Abraham Moreno y el liberal radical Rafael Uribe Uribe, quienes justificaron la anotación de su inconformidad diciendo: *"porque sin desconocer en principio, la necesidad de la responsabilidad de la prensa, el proyecto en su concepto entraña una represión administrativa tal, que tiende a anular la libertad que garantiza el artículo 42 de la Constitución."*[717]

El Representante Forero le pidió a la Secretaría un informe sobre el número de veces en que los Representantes que dejaron constancia del voto negativo habían propuesto en los debates sobre prensa, corregir las inconveniencias que, a su juicio, tenía el proyecto.

El Secretario informó que no había constancia ni de lo uno ni de lo otro. Entonces, Forero solicitó a la Presidencia que también dejara constancia de esto en el acta *"para que se vea que nada han hecho los diputados protestantes para mejorar la condición de la Ley de Prensa, proponiendo en tiempo oportuno, las disposiciones que se conforman con sus ideas."*[718]

Faltaba, no obstante, para que el Proyecto se convirtiera en Ley de la República, la aprobación de la Segunda Cámara. Pero como el tiempo de las sesiones ordinarias ya se había extinguido, mediante el Decreto Presidencial 608 de 1896, fueron convocadas las sesiones extraordinarias que habrían de iniciar el 17 de Noviembre de 1896.

[717] *Anales de la Cámara de Representantes.* Bogotá, 25 de Noviembre de 1896. No.72 p. 713.
[718] Ibíd.

4.9.2. EL SENADO APRUEBA LA LEY.

La aprobación del Proyecto de Ley de Prensa, en su paso por la Cámara de Representantes presentó muy poca resistencia, ante la premura de su aprobación previa al cierre de las sesiones ordinarias del Congreso. Los desacuerdos frente a los artículos, contando los pocos casos mencionados, fueron parcos y fácilmente solventados. Incluso, las opiniones opositoras, estuvieron en cabeza solamente de los Representantes Rafael Uribe Uribe y Vergara y V; quienes se resignaron a dejar pasar el proyecto al verse constituidos en desventajosa minoría.

En la sesión del día 3 de Diciembre de 1896, bajo la Presidencia del Senador Belisario Peña, se debatió la negativa dada por el Senado al artículo 15 del Proyecto de ley de Prensa, referida a una modificación consistente en que todo el que quisiera publicar un periódico, debía dar aviso, bien al Gobernador del Departamento o bien al Ministro de Gobierno. A favor de esta modificación estuvieron los Senadores Pizarro y Manuel José Uribe[719], mientras que los sostenedores del artículo original eran los Senadores Simón Rojas, Ignacio Neira y Miguel Guerrero. Después de todo, el Senado accedió a la negativa de la citada modificación por 11 votos afirmativos contra 5 negativos.

El proyecto de ley de prensa llegó al Senado para su aprobación final con una acotación emitida desde la Presidencia de la Cámara para que el Proyecto, que ya había sido ampliamente discutido en esta instancia, fuera aprobado en su totalidad. Esto provocó una discusión al calor del artículo 10º del reglamento del Senado que introdujo la diferencia entre las palabras “modificar” y “negar”, y la opinión dividida entre quienes decían que el Senado, por el hecho de adquirir el compromiso de no

[719] Este General y Senador, descrito por Clímaco Soto Borda, como un empecinado enemigo de la Regeneración, y conocido por sus aguerridos discursos y mal carácter, habría de ser uno de los opositores a la aprobación apresurada que se le dio a la ley de prensa.

"negar" el Proyecto, no debía la misma implicación para no "modificarlo". Estos argumentos se originaron cuando el Senador Manuel José Uribe pretendió negar el ordinal 4 del artículo 32º, que hablaba sobre el ataque a las naciones amigas del gobierno como uno de los causales en la erección de delitos de imprenta. Mientras el Senador Neira sostenía que la supresión adición o cambio que se le hiciera a un artículo era una modificación conforme al reglamento, otros Parlamentarios se dieron a la búsqueda en el diccionario, de la diferencia entre las dos palabras, el Presidente del Senado decidió que, de acuerdo al artículo 10 del reglamento, no se accediera a la revocatoria del artículo. Entonces Uribe volvió a insistir apelando la resolución Presidencial que finalmente fue aprobada por el Senado por 10 votos contra 4.

No obstante, la insistencia del Senador Uribe para que la Presidencia accediera a considerar la modificación del citado numeral 4 del artículo 32º, y el logro de su objetivo, este fue aprobado por mayoría. La constancia del voto negativo ante este numeral fue explicitada por los Senadores Pérez y Soto, Romero y Uribe. Este último insistió entonces, con la modificación del artículo 34º del proyecto, en el que pedía, que las personas responsables de los delitos de imprenta calificados como "subversivos", es decir, el propietario y Director del periódico lo fueran "*cuando el encargado del establecimiento no presentare la firma del autor de ella, que sea persona conocida en quien se pueda hacer efectiva la responsabilidad."*[720] Pero el alcance de su sustentación no fue suficiente para ganar en la votación, que quedó con 9 votos afirmativos contra 7 negativos, del artículo original del Proyecto. Dejaron constancia de sus votos en apoyo a la modificación, los Senadores Pérez y Soto, Romero y Pizarro.

[720] *Anales del Senado.* Bogotá, 22 de Diciembre de 1896. No. 90 p,719

Posteriormente, el Senado entró a atender un artículo nuevo adoptado por esta corporación, para ser considerado como último del Proyecto y que ya había sido negado por la Cámara. En este artículo se disponía que la ley de Prensa empezara a regir desde el 1.º de Enero de 1897. Aunque no se entendía muy bien la razón para que continuara rigiendo el Decreto 151 de 1888 por un mes más, y no a partir de la fecha posible de promulgación; las actas de sesiones no recogieron las opiniones de los Senadores Uribe y Neira, a favor de la negativa de la Cámara, después que el Senador Pérez y Soto pidió un informe al Secretario sobre quien había sido el autor del artículo que fijaba la fecha de la vigencia de la ley. La insistencia de la Cámara podría indicar que la premura con que fue elaborado el Proyecto de Ley, junto al requerimiento ante el Senado para que no fuera modificado, mantenía una concordancia en que, la aplicación del mismo, no debía dar espera. Después de esto el Senado resolvió no insistir en el artículo, quedando en consecuencia negado.

El Senador Manuel José Uribe habría de seguir insistiendo, sin éxito en la modificación de algunos artículos. Aunque sus explicaciones no son especificadas, ha quedado constancia de que trató con los artículos 20, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 65, 66 y 73, que fueron votados en contra, generalmente, con la misma votación de 10 Senadores a favor y 4 en contra. Finalmente, el Senador Uribe propuso un artículo nuevo como último del proyecto, el cual, después de ser sustentado por su autor e impugnado por el Senador Guerrero, fue negado por el Senado. Este artículo decía lo siguiente:

> *Contra las resoluciones de los funcionarios públicos, dictadas en uso de las facultades que confiere esta ley, habrá recurso de queja para la indemnización de prejuicios; recursos que se surtirá en una sola*

instancia ante la Corte Suprema de Justicia por los trámites de juicio ordinario.[721]

En consecuencia, si un periodista habría de ser acusado por un funcionario público sin razón, a lo único que tendría derecho sería a una declaración de inocencia, pero nunca a que la equivocación fuera subsanada con dinero.

Posteriormente, el mismo Senador Uribe, les hizo una exposición del curso que tuvo el Proyecto de Ley de Prensa en la Cámara de Representantes, a sus compañeros del Senado, en donde indicaba su desavenencia con el proceder rápido y poco debatido de los Representantes que habrían de llegar a la aprobación total, sin tener en cuenta aspectos que se deberían discutir a fondo, especialmente por la inclusión de errores. Cita el ejemplo de la modificación del artículo 15, que expone el requisito para poder publicar un periódico, de un permiso que debería ser expedido por el Ministro de Gobierno y por el Gobernador, y que fue negada, la modificación propuesta, sobre la base de que, con el permiso de cualquiera de los dos personajes hubiera sido suficiente, explicando que:

La exigencia de que sea a ambos no puede producir más efectos que entorpecer el uso de un derecho constitucional sin ventaja alguna para el Gobierno ni para el país. ¿A qué fin habrá de ocurrir un habitante del Chocó o del Pasto, o de la Goajira [sic] simultáneamente a Bogotá y Popayán, o a Bogotá y Santa Marta, para anunciar por medio de memorial, que va a ejercer un derecho como el de expresar sus pensamientos por la prensa? ¿No basta a los fines de la ley enviarlo al que esté más próximo? Además del contexto de otros artículos

[721] Ibíd.

aprobados por ambas cámaras, se deduce que el aviso se le da a uno de los funcionarios mencionados y no a ambos.[722]

Pero el Senado no estaba dispuesto a convenir ni a esta ni a ninguna otra modificación. Ni siquiera a la siguiente explicación lógica referida por el mismo Senador sobre la necesidad de la reforma del artículo 34º, que según el Senador Uribe, tenía un grave defecto derivado de la responsabilidad recaída en el propietario o director del periódico, el dueño administrador o encargado del establecimiento en que se hubiese editado, y el autor del artículo; al no advertir que cada uno lo sería en su caso, ya que el texto original del Proyecto, podría dar lugar a que a todos se les inflingiere pena por un mismo hecho.

Ante el error, y advirtiendo que, no obstante, el artículo 41º señalaba que el dueño, administrador o encargado del establecimiento tipográfico, de grabado, etc., no habría de ser penado por los delitos enumerados en el artículo *32,* que especificaba los delitos de subversión, si lo sería por los delitos en los cuales, por alguna razón, no se les pudiera imponer pena al autor, al propietario o al director del periódico. Según el Senador Uribe, esta medida era injusta porque terminaría convirtiendo

Al dueño de una imprenta en fiador y en tutor del periodista, hasta considerar la posibilidad de que el periodista muera, en cuyo caso no se podrá imponer pena para hacer resaltar la iniquidad que el artículo 41 entraña. Tal parece que al redactar los artículos 34 y 41 del proyecto se hubiera perdido de vista el único objeto plausible de la ley,

[722] *Anales del Senado.* Bogotá, Martes 5 de Enero de 1897. p.743.

que es establecer la responsabilidad de los escritores, y pensado más bien en anular la libertad de escribir.[723]

Las variaciones introducidas a los diferentes artículos del Proyecto por el Senador Uribe fueron tiempo perdido, pese a algunos tímidos apoyos, como el del Senador Simón Rojas que terminó por expresar que, a pesar de no estar de acuerdo con algunos de los conceptos de la Ley, se resignó a la obediencia del reglamento.

Finalmente, el 2 de diciembre de 1896, el Secretario del Senado, Camilo Sánchez, considerando una a una la negativa de la Cámara de Representantes a los proyectos modificados por el Senado, "*se resolvió no insistir en tales modificaciones."*[724], quedando lista la Ley de Prensa, que habría de ser firmada el 18 de Diciembre por el Presidente Miguel Antonio Caro y el Ministro de Gobierno Antonio Roldán con el nombre de: "Ley 157 de 1896 (12 de Diciembre) sobre Prensa"

4.9.3. Sobre la nueva ley de Prensa.

En su mensaje al Congreso de 1894, el Presidente Miguel Antonio Caro, exponía que el Artículo transitorio Constitucional "K", que estableció la facultad de Censura "previa" a la prensa por parte del Gobierno, y que era uno de los temas que con mayor disgusto y crítica trataba la prensa de oposición, no había sido usado por el Gobierno desde 1888, en razón a su carácter puramente preventivo, ya que, para castigar los delitos de imprenta se contaba con los Decretos vigentes sobre la materia. El artículo "K" hacía parte en 1894 de aquellos artículos que, según Caro,

[723] Ibíd.
[724] Ibíd.

"*tuvieron oportuna y útil aplicación, que caducaron pronto y sobreviven como fantasma"*[725]

Una de las mayores críticas a los Decretos que dotaron la reglamentación vigente sobre la materia, estribaba en la división de los delitos en dos: contra de la sociedad y contra del orden público. En este último caso, el Gobierno, en cabeza del Presidente, el Ministro de Gobierno y los Gobernadores, legitimó su derecho para juzgar y castigar, pese a la consigna permanente de la oposición que tenía como base el paradigma jurídico de: "nadie puede ser juez y parte, al mismo tiempo, de una misma causa". La defensa de Caro ante este aforismo, tiene fundamento en que el Gobierno; como persona jurídica es parte demandante o parte demandada en disputas que serían falladas en los tribunales, pero también como guardián del orden público, y no tiene otra identificación que la de ser el mismo Estado:

> *Si el Gobierno no puede reprimir un órgano incendiario, si solo le compete denunciarlo a los tribunales, no habría razón tampoco para que pudiese proceder contra los revolucionarios por ese motivo y por otros actos de mera trascendencia. No se concibe que un periódico haya de ser asilo sacratísimo para hacer el mal, ni tenga el poder de convertir a los perturbadores en sacerdotes inviolables.*[726]

Establecido que la intervención del Gobierno ante la prensa derivaba, precisamente de ese carácter "subversivo" que, según el Presidente Caro, si prescindía de su actuación, podría terminar con el hecho de que, al mismo tiempo, se llevara a cabo un proceso judicial y una revolución. La costumbre de seguir legislaciones extranjeras, costumbre que conservamos aún, debería contener una

[725] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. Cit. p. 104.
[726] Ibíd. p, 105

diferenciación ya prevista por Caro, entre “imitación inteligente” e “imitación servil” que, antes de la introducción de normas desconocidas, deberían ser vistas con el necesario acomodo del lugar y el tiempo, y guardando una relación entre los peligros y las sanciones.

Colombia, no había encontrado hacia finales del siglo XIX una fórmula que la alejara del peligro de las guerras interiores, y los esfuerzos periodísticos de oposición eran vistos por el Presidente Caro, con la suficiente capacidad de promover levantamientos. Igualmente, no alejaba de su pensamiento, la opción válida de mantener alejado al Gobierno de juzgar o castigar a los periódicos, cuando estos no representaran el peligro a la ofensiva de derrocar por las armas. Reiteraba además, que el Gobierno no se había opuesto a que el Congreso formulara sobre la materia, y que al contrario, solicitó la promulgación de la ley en 1894.

El llamado al Poder Legislativo para que, de la misma manera en que se le exigía al Gobierno la conservación del orden público, le proporcionara legalmente los recursos necesarios para llevar a cabo esta labor, encadenaría en el futuro, según Caro, el propio engrandecimiento de la labor periodística en Colombia, fruto que habría de provenir de una correcta conservación de la tranquilidad. *“La elevación del periodismo a la altura de su misión no será de leyes escritas sino el resultado de la educación y de la sanción social.”* [727]

Pero mientras esta educación moralizadora llegaba, el llamado para que el Poder Legislativo dictara las normas sobre la Prensa, esta vez, en la instalación del Congreso de 1896, fue más persistente de parte del Presidente Caro, bajo el

[727] Ibíd. p.109.

llamado a la defensa nacional y junto a la memoria de las conspiraciones que no habían cesado desde el inicio de su mandato en 1892.

> *Debemos esperar, con esta ocasión, que expidáis una ley de imprenta, pero no una ley que embrolle el derecho, sino que, hasta donde alcance el poder de la sanción legal a redimir el mal, ofrezcan medios expeditos que permitan proteger a las víctimas de la calumnia y librar a la sociedad de los escándalos a que está expuesta, en tanto que, por falta de otras sanciones, exista tolerada, y por malas pasiones fomentada, la profesión de difamador*[728]

La Ley 157 de 1896, sobre prensa, vista de manera global podría parecer una extensión represiva de los Decretos Ejecutivos con los que el Gobierno había venido regulando el ejercicio desde 1896. Sin embargo, contenía diferencias marcadas que podrían verse desde dos puntos de vista: una mayor represión a la Prensa y una supresión de facultades del Poder Ejecutivo.

La votación de la ley estuvo en cabeza de los conservadores históricos que la propusieron, no obstante requerir de una conveniente expresión a través de los medios impresos para hacer oposición al Gobierno, no podían darse el lujo de permitir la intromisión del liberalismo radical que con sus argucias literarias hubieran podido socavar la intención de los "históricos" para acceder al pleno mando. Es decir, la ley pretendió quitarle poder al Gobierno, pero también conservar los principios represivos. De hecho, la nueva ley representó una apertura de las multas, que si bien no eran la bandera para mostrar en cuanto a lenidad, mantenían una ligera disminución a la expresada en los Decretos ejecutivos. Estos, tenían un tope relativamente pequeño para los delitos mas

[728] Ibíd. p.266.

graves, es decir, los "subversivos, de 10 a 200 pesos para los autores, conmutada por arresto a razón de 1 día por cada dos pesos y suspensiones de 15 días hasta 6 meses. La nueva ley estableció la multa mínima para los autores desde 50 hasta 200 pesos y arresto de 15 días hasta 3 meses, y la pena de multa conmutada por 1 día por cada 4 pesos.

La nueva Ley también prohibió al Gobierno la subvención de publicaciones y sujetó la responsabilidad de las penas impuestas al Ministro de Gobierno y el Consejo de Estado en toda la República, y a los Gobernadores y a los Tribunales de Distrito dentro de los Departamentos. La estrategia de la ley cocinada en la alquimia de la Cámara de Representantes, probablemente y previendo la dura contienda electoral para el conservatismo "histórico" indicó específicamente la amplitud para hablar sobre la vida pública de los candidatos.[729] Es también probable, que la suspensión de la potestad del Presidente para juzgar o penalizar publicaciones, tuviera que ver con el, cada vez mayor, usufructo de adeptos a la causa "histórica" desde las Gobernaciones Departamentales, como en el caso de Bonifacio Vélez en Antioquia. De esta manera, la decisión de suspender o no un periódico, caía en el ámbito de los movimientos de la política local.

La mayor maleabilidad de la ley hacia los periodistas estribaba en el novedoso recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Departamento, que tenía el poder de revocar la sentencia de un Gobernador. Sin embargo, como en el caso de *El Constitucional,* si este último se mantenía en su posición penal, era el Consejo de Estado el llamado a dirimir el caso. Esta disposición que aparentemente amainaría las decisiones unilaterales, acusaba en el Gobierno de

[729] "*Art. 4º. Los escritores públicos pueden tratar libremente y discutir dentro de los términos de la presente ley: 1. Los actos oficiales, los asuntos de interés público y las reformas que estimen justas en la legislación; y 2. Las candidaturas para puestos de elección popular ó parlamentaria, mientras estas no hallan sido renunciadas. Habrá amplia libertad para discutir todos los actos de la vida pública de los candidatos, dentro de los límites de la moral y de la decencia; pues sólo serán prohibidos los ataques a la vida privada*" Ley 157 de 12 de Diciembre de 1896

Caro la intromisión política del mismo presidente, que acostumbraba a dividir el mundo político que lo rodeaba entre adeptos y subversivos, pero la infiltración "histórica" dentro de los encargados a decidir en los casos, poco a poco habría de socavar su dominio.

Novedoso también fue un recurso de protección legal hacia los periodistas, quienes ante la petición hecha para que el Tribunal Superior revocara la pena impuesta por el Gobernador, debían encontrar solución o respuesta en, máximo ocho días. La responsabilidad de la demora, recaía directamente en los Jueces y los demás funcionarios que la habrían ocasionado y estos serían castigados solidariamente con una multa de 100 hasta 500 pesos. Esta penalización abarcaba igualmente a los miembros del Consejo de Estado si eran llamados a dirimir en el caso.

Las inexactitudes o modificaciones de los discursos, las sesiones o los informes del Congreso, contra lo cual hubo de luchar Carlos Holguín, también serían castigados específicamente en su artículo 76º por disposición de los Presidentes de la Cámaras y ejecutados por el Gobernador del Departamento. Los periodistas que habrían de incurrir en este delito podrían ser castigados con multas de 50 hasta 200 pesos.

4.10. PUBLICACIONES O LIBELOS DE "VENGANZAS"

En 1897 se agitó de nuevo la contienda electoral con motivo de la expiración del Gobierno de Miguel Antonio Caro y la posible baraja de aspirantes al mando del Poder Ejecutivo. La Prensa política, nunca amilanada con Decretos Presidenciales, menos habría de serlo con leyes, pese a que en su camino de aprendizaje encontró un tono más moderado que el usado en los primeros años de oposición a la Regeneración. Dentro de este marco, y según la costumbre, algunos periódicos

fueron fundados o continuaron con motivo de las futuras elecciones presidenciales. Entre las publicaciones a favor de una postulación del Presidente Caro para su reelección, se destacaron, además del reconocido *La Época,* los periódicos *Bogotá, El Nacionalista, y El Progreso.* Todos ellos, apenas con un coqueteo difuso del gramático bogotano quien contaba con 56 años de vida y la resolución de no renunciar a la vida pública. Sin embargo, el paso no habría de ser precipitado ya que la fisura del partido conservador histórico había propiciado un menoscabo considerable en el gobierno para una futura candidatura oficial propia.

El 19 de Marzo de 1897, el Presidente Caro le envía una carta al director de *El Progreso,* expresándole sus felicitaciones por haber hecho un llamado a la cordura y la sensatez de los periódicos antes de conocer los nombres de los candidatos a batirse en la contienda. Caro comentó que una parte del público bogotano esperaba ansiosa, como en el espectáculo de "púgiles en un circo", mientras otra más pequeña, y a la cual *El Progreso* hacía el llamado, esperaba invocando "*las leyes del honor y la cortesanía*"[730]

Igualmente, hizo un llamado para que la expresión ciudadana en las urnas fuera la consecuencia de una reflexión nacional profunda y no el apoyo a desavenencias personales. Parece devenir, en el Presidente, un propósito más conciliador hacia los candidatos del conservatismo histórico, que aún en ese momento, no se habían afianzado más que en las especulaciones y posibilidades hacia los Generales Vélez y Rafael Reyes.

> *Los candidatos no son otra cosa que probados servidores y honrados representantes de causas políticas; que las adhesiones son votos de confianza; que la competencia no implica enemistad personal; que ella*

[730] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. Cit. p. 293.

solo nace de aspiraciones políticas divergentes, de la inevitable diversidad de conceptos sobre lo que más conviene a la paz, al honor y a la prosperidad de la nación.[731]

La agitación de la prensa bogotana, sacudida ante las posibles candidaturas presidenciales, solo tenía la seguridad de que el candidato del gobierno, si no habría de ser el mismo Presidente Caro, sería apoyado con toda la firmeza y los recursos del gobierno. Por eso, la tarea de deslegitimar y atacar la misma figura de Caro era para los periódicos conservadores históricos, el inicio de la labor de ensalzamiento de sus propios candidatos. A la palestra saltaron numerosas publicaciones que expresando su opinión mediante el uso de pequeños libros o "libelos", o editoriales en la prensa, afianzaron el menoscabo de la figura del Presidente como advertencia ante la posible continuidad de su gobierno sectario y rígido. Uno de ellos fue *El Constitucional.*

4.10.1. CARO Y SU DESPRECIO.

Juan Bautista Pérez y Soto, director y redactor del periódico *El Constitucional,* además de ser el Senador de la República que desde su Curul explicitó su voto negativo contra la aprobada Ley de Prensa, escribió el 17 de Mayo de 1897 un artículo titulado "Antimonios" que le hubo de ocasionar la multa impuesta por el Gobernador de Cundinamarca el 30 de Mayo, por haber infringido el ordinal 13 del artículo 32º de la Ley 157 de 1896, que establecía como delito subversivo la calumnia o el insulto al Presidente, y que fue originado en la publicación del siguiente texto:

[731] Ibíd.p. 294.

Que el leal competidor no afloja el mando para hacer la lucha posible, la competencia efectiva, sino que antes se aferra á él para amenazar, oprimir, cohechar, embaucar, alentar y premiar, alternativamente, y obtener por la violencia ó el fraude el triunfo. Así comparada la realidad de los hechos con la palabra oficial, resulta que donde dice lealtad, debe entenderse TRAICIÓN; donde se lee libertad y derechos, compréndase DESPOTISMO; donde se promete sufragio libre, espérese USURPACIÓN; y donde reza voto de conciencia, tradúzcase VOTO DE AYECCIÓN[732]

Pérez y Soto, haciendo uso del derecho que la Ley, sancionada cinco meses atrás, le otorgaba para apelar ante el Tribunal Superior de Cundinamarca la sanción impuesta por el Gobernador, es fallada por este el 31 de Mayo de 1897. El fundamento defensivo del periodista, estribaba en el artículo 4º de la misma citada Ley, que otorgaba el permiso para que los escritores discutieran libremente todos los actos de la vida pública de los candidatos a las corporaciones públicas, limitados por la "moral y la decencia", y los ataques a la vida privada.

Para emitir su fallo, el Tribunal consideró que en el mismo artículo 4º, la concesión que la ley hacía a los escritores para discutir la vida pública, no se veía reflejado en el texto redactado en el periódico *El Constitucional.* Por el contrario, a la calificación hecha al Presidente en términos acres y descomedidos, le fueron agregadas inculpaciones de traición, de deslealtad, de usurpación, además del aseveración de que amenaza, oprime, y cohecha, para obtener el triunfo en las elecciones.

[732] Registro Judicial de Cundinamarca. Junio 25 de 1897. No.331 p. 2019.

En primer lugar, la consideración del Tribunal expuso que los términos anteriores no se podían ver como discusiones de los actos de la vida pública del Presidente Caro. Por el contrario, *"es denigrar, ultrajar, y para esto no tienen libertad los periodistas".* [733] En segundo lugar, los hechos imputados de cohecho y de usurpación son actos futuros porque las elecciones de altos funcionarios no se habían llevado a cabo cuando el artículo fue publicado, y por consiguiente, tampoco serían considerados como actos de su vida pública. Caso diferente sería si el Presidente Caro, según ejemplo del tribunal, habiendo enviado una carta al diario *El Progreso*, que originó un hecho notorio de su vida pública porque fue conocida por la opinión y que trató asuntos políticos, hubiera sido discutida y comentada sin haberla adulterado.

En tercer lugar, las consideraciones hechas por el periódico al Presidente Caro, no fueron vistas por el tribunal como enmarcadas dentro de los términos de "la moral y la decencia" ya que; "pues *no es moral atribuir á un hombre intenciones de ejecutar actos de traición y de usurpación, ni es decente descender en la discusión usando calificativos odiosos ó denigrantes*."[734]

La opinión del Tribunal Superior de Cundinamarca ante este caso, también permitió hacer una ilustración de las recomendaciones que tenían los jueces para solventar los casos de la reciente ley. Estos fundamentos tenían vigencia en la actualidad, ya que el tratamiento habría de objetivar las actuaciones de los hombres públicos mediante el mayor uso de pruebas y el menor uso de insultos. Recomienda, además, el Tribunal que las discusiones sobre candidatos deberían versar únicamente sobre la cuestión de derecho en que los contrincantes se hallaban en desacuerdo, prescindiendo de todo aquello habría de obstaculizar el propósito del escritor, que no debería ser otro que el de obtener el triunfo del

[733] Ibíd.
[734] Ibíd. p. 2020.

candidato de sus simpatías. Por eso, la exigencia emanada de la ley, para permitir el debate desde la prensa, precisa que al candidato se le juzgue por sus obras y por lo que ha hecho, y no por lo que ha dejado de hacer o sobre lo que haría en el futuro; y mucho menos por actos de su vida privada; y "*degeneraría en calumnia, si los hechos imputados fueran falsos, ó en injuria, si aunque ciertos pertenecieran a la vida privada del candidato.*"[735]

El descenso del lenguaje empleado contra el candidato y no contra sus actuaciones públicas, sin detrimento de si sus actos son virtuosos o criminales, provocó la aplicación de la ley por el delito de imprenta contra Pérez y Soto. Si el calumniado hubiera sido cualquier otro candidato, la defensa habría de ser apelada mediante el uso del artículo 31 de la ley de Prensa, y la injuria o calumnia, resuelta a través del código penal. Pero, como el caso tratado en el Tribunal de Cundinamarca implicaba al Presidente de la República, le correspondió al Ministro de Gobierno la injerencia y penalización directa, con derecho de uso del recurso de apelación del acusado.

No obstante la reafirmación del delito cometido y sancionado por el Gobernador de Cundinamarca, al director de *El Constitucional* no le fue tan mal. Obtuvo un pequeño triunfo al lograr rebajar la multa primigenia de 150 pesos impuesta, a sólo 50 pesos. Aunque, la causa de esta decisión se fundamentó menos en el error del Ministro de Gobierno, que no calificó el grado de delito para establecer un mínimo o máximo de la pena, que en el probable deseo de evitar la zancadilla al periódico para que este continuara opinando sobre la futura contienda electoral desde su bando; el escritor Juan B. Pérez y Soto no habría de sosegar su espíritu en la batalla perdida.

[735] Ibíd. p, 2021.

El Constitucional, impreso como bisemanario desde el 4 de Marzo de 1897 hasta el 30 de Julio, ya había provocado la ira del Presidente porque su propósito evidenciado era mostrar al mandatario como un traidor y desleal al partido conservador e incluso a sus más íntimos amigos. Cuando en sus primeros números fueron redactados unos textos adjudicados al mismo Caro en los que se ofendía a Marco Fidel Suárez, el Presidente decidió redactarle un telegrama a su amigo desde chapinero, para explicarle la falsedad de los mismos y que su tolerancia, no obstante tener el poder otorgado por la ley de prensa para reprimir tamañas calumnias, también tenía límites. Su sentimiento hacia los autores de los periódicos, que cuando se dedicaban a la calumnia, no pasaban de ser unos "libelos sediciosos", fue expresado así: *"Yo declaro que el libelista de El Constitucional ha faltado a la verdad, y lo entrego al desprecio de mis conciudadanos."*[736]

Tampoco se ratificó el Tribunal en la pena impuesta por el Gobernador de Cundinamarca, Rafael Pinto, de los seis meses de suspensión y en los 30 días de arresto en la cárcel de detenidos; cambiando el fallo al mínimo de cuatro meses y 15 días de arresto en otro lugar que no fuera la cárcel de detenidos. Pero, la Gobernación apeló el fallo del poder judicial ante el Consejo de Estado, y este, después de sortear los dos jueces requeridos, que curiosamente recayeron en Marco Fidel Suárez y José Ángel Porras, rechazaron la sentencia fallada por el Tribunal de Cundinamarca por Antonio María Rueda G, Flavio González Malo e Ignacio Vargas, imponiendo el nuevo castigo de cuarenta días de arresto en la cárcel de detenidos, *"lugar infecto, de donde la Gobernación ha tenido que sacar más de cuarenta procesados por delitos comunes, y llevarlos al panóptico, en guarda de la salud de aquellas pobres gentes"*[737]*,* estableciendo que, en la osadía de insultar tan constantemente la figura de Miguel Antonio Caro, no mediaba ni

[736] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. cit. p. 303.
[737] *El Correo Nacional.* S.N. citado en Ibíd.p. 304.

siquiera una ley de prensa nueva, ya que la apelación del Gobernador ante el Consejo de Estado, estaba plenamente establecida en la misma, y el castigo no dejaría impune al periodista.

Pero la penalización no sirvió sino para que el periodista amainara sus críticas una vez cumplido su castigo, mediante la publicación de un libro titulado “Caro y su Desprecio”, en el que se dedica, en un largo recorrido de 492 páginas, a la recolección de escritos y testimonios de partidarios del conservatismo histórico, a quienes, además, poco les faltó para elevar a la categoría de mártir al infortunado escritor.

De hecho, el propósito de desprestigiar al gobernante como un déspota intransigente que injustamente imponía las cadenas y grilletes a sus opositores, no era una práctica nueva cada vez que se acercaban las contiendas electorales. El aprendizaje de los escritores radicales, quienes preferían seguir infringiendo las leyes, llamadas constantemente, “contra la libertad”, a someterse a las normas de discutir sin insultar, o sin inventar hechos y acciones sin las pruebas suficientes, para originar un impacto desfavorable en la opinión pública, fue efectivamente llevado a cabo por Juan B. Pérez y Soto.

La pelea del periodista, sin embargo convertida a título personal, pero auto indicada con la indulgencia del conservatismo histórico, estableció que pese a haber sido un admirador y sostenedor entusiasta de Miguel Antonio Caro, se convirtió en depositario del desprecio de su antiguo amigo, descubriendo la personalidad traidora del encargado del Poder Ejecutivo.

El propósito de ahondar el cisma entre las facciones conservadoras se puede notar en la ratificación de las palabras ofensivas e insultantes, supuestamente dichas por Caro, de su amigo Marco Fidel Suárez, de quien asegura Pérez y Soto,

habérselo encontrado en la calle escuchándole decir *"el señor Caro trataba indignamente a todo el mundo".* [738] También Suárez habría de distanciarse prontamente de Caro, al separarse de la Cartera de Relaciones Exteriores y anunciar prematuramente la candidatura del General Reyes para el periodo 1898 – 1904.

Es precisamente este distanciamiento entre Caro y su joven Ministro, epicentro de numerosas conjeturas a través de la prensa, la mayoría tratadas a manera de "chisme". Incluso, articulistas de los periódicos de oposición se quejaban del silencio del Presidente ante las acusaciones de desprecio hacia Suárez, y reconocían la práctica de las infidencias desde palacio hacia los periodistas:

> *Por fortuna, frases como las que se refieren al Señor Suárez (D. Marcos) [sic], al Doctor Ospina Camacho, al General Reyes, al General Próspero Pinzón, al doctor Concha, etc., etc. Son conocidas de todo el público, porque los mismos aduladores de Palacio se encargan de propalarlas como prueba de ingenio oficial, bastante convencidos también por las heridas que puede causar aún a los más adictos servidores.*[739]

Las acusaciones hacia el Presidente estuvieron basadas en rotularlo como un deshonrado Jefe que "tira la piedra y esconde la mano", y en el desahogo de su ex Ministro Suárez que, según Pérez Soto, *"vivía atajando gente en la calle para contarle sus cuitas con lágrimas en los ojos, devolviendo las injurias con revelaciones lastimosas"* [740] , mientras que de Reyes, se decía también al conocerse la noticia de su renuncia a la candidatura a que lo querían elevar los

[738] PÉREZ Y SOTO, Juan B. Caro y su desprecio. Imprenta y librería de Medardo Rivas. Bogotá, 1898 p.6.
[739] Ibíd. p.16.
[740] Ibíd.p. 21.

“históricos”, que la causa de su proceder provino de la “compra” del General por el Gobierno, mediante una fuerte suma.

Para el Presidente Caro, a quien por estas fechas, llegaron a apodarlo desde la prensa Bogotana como “Fray Gerundio”, la defensa del “partido nacional” con el cual se construyó “La Regeneración”, se venía desmoronando ante la presión del propio Partido Conservador y el deterioro de su imagen pública.

El Periódico *El Constitucional* se convirtió en la bandera de la represión hacia la oposición “histórica” y la difusión de sus ideas habría de llegar hasta múltiples poblaciones en Cundinamarca y Boyacá. La correspondencia recibida por el periódico acusa al Presidente Caro siempre de su personalidad inquisitiva y a un terrible uso del lenguaje con amigos y enemigos, además de la intemperancia expresada en público como condescendiente con la oposición, y en privado, con una actuación contraria.

Desde el periódico *El Progreso* provino la defensa contra lo escrito por Pérez y Soto en *El Constitucional,* que no obstante, no consiguió menguar la bandera enarbolada del conservatismo “histórico” de criticar el “continuismo” de Caro frente al “verdadero” partido Conservador, por el cual hubieron de sacrificarse Núñez y Holguín, y que habría de diferenciarse de los “elementos malsanos”.

Incluso el Clero terció en la pelea manifestándose en contra de la candidatura de Caro, en secreto para no recibir las amonestaciones de Obispos al osar desafiar a su gran benefactor. Una carta enviada a Pérez y Soto por un anónimo Cura

Párroco de un anónimo municipio[741], expresaba su desacuerdo con Caro por el incumplimiento a sus antiguas ideas expresadas desde su periódico de 1875:

> *Buenas fueron las teorías de El Tradicionista, pero ¿Qué ha quedado de ellas? ¿Su autor no las ha contradicho en la práctica? Se ha querido hacer desmerecer al Sr. D. Carlos Martínez Silva, porque sus actuales procederes no corresponden a las bellas teorías (dicen) del antiguo Repertorio Colombiano. Y, en la suposición de que en esto haya verdad, ¿No hay que decir lo mismo del Tradicionista y su autor?*[742]

El recurso de publicar telegramas en los periódicos, firmados por vecinos de diversos municipios a lo largo de la República, fue usado por opositores históricos, pero también por los defensores de la candidatura del Presidente Caro. Sin embargo, estos últimos, impresos en *El Nacionalista,* fueron acusados de ser producto del constreñimiento y la petición hecha por el mismo Gobierno, que acudía a telegrafiar a las poblaciones, solicitando cartas firmadas por vecinos que apoyaran al Gobierno o que desprecian la prensa opositora, bajo la amenaza de castigos. Pérez y Soto, por su parte, dividió a quienes apoyaban a Caro en tres categorías: "Los engañados", quienes profesaban interés en el autoritarismo y todavía creían en el partido nacional, "Los concientes", que sabían lo que hacían sin importarles ser tratados a puntapiés, y "Los inconcientes", quienes eran empleados públicos forzados e intimidados. La mella del conservatismo histórico

[741] El sentido del anonimato de los personajes es relativo, ya que si bien podía no indicarse el nombre del autor, siempre y cuando este fuera un remitido y no un artículo, en el número impreso; el Propietario o responsable del periódico tenía la obligación, según la Ley de Prensa, conservar el remitido original y el nombre del autor durante un año. En este caso, aunque la carta fue impresa en un libelo, el despego a la ley es evidente porque el mismo Cura informa que no firma dicha misiva por el temor a la represión del Obispo. Es decir, es una carta sin un soporte que sustente su veracidad, y en esta misma situación, se encuentran muchas más.

[742] PÉREZ Y SOTO, Juan B. Caro y su desprecio. Op. Cit. p.91.

en Bogotá le daba la seguridad a Pérez y Soto de solicitar la publicación de las listas de adeptos al Gobierno:

> *Por esto no puede distraernos de la obligación en que nos consideramos de pedir y exigir la adhesión de Bogotá por el Señor Caro. Tengan presente los continuistas que mientras no se publiquen [sic] esta adhesión, es un insulto al buen sentido hablar de la popularidad de su candidato.*[743]

La gran conmoción originada en la pena impuesta por la Gobernación a Pérez y Soto, especialmente su arresto, que fue equiparado por sus amigos "históricos" con la condena a la pena de muerte, por la orden de llevarse a cabo en la cárcel de detenidos,[744] lugar en donde recientemente la junta de higiene había informado de ser el epicentro propagador de enfermedades como la viruela, tifo negro y disentería hemorrágica.

La prisión de Pérez y Soto afectó enormemente la imagen del Gobierno de Caro en la ciudad de Bogotá. Las expresiones de rechazo a la medida provinieron de la mayoría de periódicos de la capital, e incluso fermentaron el apoyo al conservatismo histórico en virtud de la solidaridad con el colega ultrajado. Las comparaciones con los acusados de actos corruptos del Gobierno, quienes no habían sido condenados, fueron expresadas por la prensa de la capital. Pero el asunto conmovió mayormente cuando el Consejo de Estado apeló la rebaja hecha

[743] Ibíd. p, 112-113

[744] Este lugar, localizado a pocos pasos de la "calle de Florián y del Camellón de los Carneros", también quedaba muy cerca al Parque de Santander y a la Calle real, y era paso obligado, según Carlos Martínez Silva, de las tres cuartas partes de los habitantes de Bogotá, por conducir al Puente de San Francisco; contenía dentro de sus paredes húmedas, a más de 200 personas en hacinamiento, en espera de una decisión judicial que los absolviera o los condujera al Panóptico, lugar en donde se pagaban las condenas. La decisión de recluir allí al periodista Pérez y Soto durante un mes, podrían indicar la clase de escarmiento que Caro habría de imponer al desafiante escritor.

de 30 a 15 días de arresto impuesta por el Tribunal Superior de Cundinamarca, y asestó una pena mayor de prisión, elevando a 40 días el castigo para el periodista en la cárcel de detenidos.

Esta decisión fue tomada por el Presidente del Consejo de Estado, Doctores Liborio Zerda, Marco Fidel Suárez y José Ángel Porras, mediante una aprobación irregular que, ni fue consignada en el acta de sesiones, ni contó con la opinión de los otros miembros del Consejo.

La ley de prensa fue considerada como depositaria de profundos "disparates", ya que le atribuyó al Consejo de Estado, su injerencia en los delitos de imprenta sin importar que: *"ella diera lugar a que personas como los señores Porras y Suárez, periodistas políticos en actividad*[745] *y no nada imparciales por consiguiente, pudiesen contribuir con sus votos a imponerles penas a otros periodistas."*[746] Además, el Consejo de Estado, según el Artículo 96 de la Ley 149 de 1888, del código político y Municipal, expone claramente que el Consejo de Estado requiere la mayoría absoluta de votos para tomar la decisión. La Ley 157 de 1896, sobre Prensa, votada a las carreras bajo tenues debates en la Cámara, y sin las acotaciones analíticas del Senado, acusaba una de sus "cojeras":

> *No hay en la ley de Prensa, ni en ninguna otra, disposición alguna que autorice al Presidente del Consejo de Estado y a los dos Consejeros sorteados, según los artículos copiados, para resolver ellos solos un juicio de prensa. La competencia para juzgar a los ciudadanos y para imponerles penas, no puede deducirse de reglas de Hermenéutica*

[745] Suárez era codirector de *El Nacionalista,* y Porras era redactor de *El Telegrama,* y hubieran podido declararse impedidos para participar en la decisión.
[746] PÉREZ Y SOTO, Juan B. Caro y su desprecio. Op. Cit. p,203

más o menos mal aplicadas: Ella tiene que estar claramente concedida en las leyes.[747]

Pero las irregularidades del Consejo de Estado no fueron estás únicas. También el hecho de expresar que la circunstancia de dar publicidad al escrito agravaba el delito, cuando dicha circunstancia aplicaba como agravante en los delitos de Calumnia o Injuria, porque cuando el delito era de prensa, la publicidad era apenas un elemento constitutivo. *"sostener tal adefesio es como decir que en el delito de heridas la ruptura de la piel es circunstancia agravante."*[748]

El 20 de Julio de 1896 Pérez y Soto fueron conducidos a la Cárcel de Detenidos y, ni a Jueces, ni a Carceleros les importó para nada su carácter vigente de Senador de la República, ni el recuerdo del trato dado a los Periodistas por Carlos Holguín, cuando hubo de aplicar los mismos castigos. Esta vez, el acompañamiento del brioso periodista estuvo compuesto por amigos, Periodistas, Congresistas, Comerciantes, Artesanos y gente de la ciudad, que bajo los gritos de vivas al Partido Conservador, según los diarios históricos en un número superior a 300 personas, minaron sobremanera la imagen del Presidente Caro.

Hasta la celda, descrita por Carlos Martínez Silva, como oscura y estrecha[749], con medidas de 1.60 metros de ancho por 3.50 metros de largo, no solamente llegaron las visitas de sus amigos, la correspondencias de desagravios y solidaridad, sino el nombramiento como Miembro del Directorio Central del Partido Conservador

[747] Carta fechada el 19 de Julio de 1897, escrita por Manuel José Uribe, Senador y Miembro del Consejo de Estado. Citado en Ibíd. p, 207.
[748] PÉREZ Y SOTO, Juan B. Caro y su desprecio. Op. Cit. p,203
[749] El estado de hacinamiento descrito por los periódicos capitalinos había sido mejorado. Días previos a la llegada de Pérez y Soto, los 159 presos que albergaban la cárcel fueron trasladados a otros lugares debido a la falta de circulación de aire y a la proliferación de enfermedades; y permanecieron allí durante el tiempo de estadía del periodista, solamente 43 de ellos. *El Correo Nacional.* S.F. citado en PÉREZ Y SOTO, Juan B. Caro y su desprecio. Op. Cit. p,257

mediante una carta escrita por el mismo Senador Rufino Cuervo Márquez. También el ilustre poeta Rafael Pombo le hizo llegar unos versos de apoyo:

EN LA CÁRCEL

Cuando es la vil lisonja la escalera
Que a dignidades y opulencias alza,
E inverecunda la locura impera.
Noche que astros fatídicos realza;
Cuando un escamotaje sin bandera
Por Regeneración se irgue y ensalza,
Fuerza es que el denodado sacerdote
De la verdad sea el paria, el Galeote.

Más no ha llegado el viento maleante
Del pueblo al Corazón. Sonó la hora
Del non plus ultra y despertó el gigante
A sacudir la fábrica impostora;
Y tu voz -reto al numen y al devoto-
Trueno fue del solemne terremoto.

¡Precursor generoso! Alegre tu alma
El ver que no clamaste en el desierto
Y que la paz que hoy vela no es la calma
De la abyección, el miasma del mar muerto.
Sanos racimos cuelgan de tu palma,
Ya es tu alta voz universal concierto
La Opinión -reina prófuga del solio-
Bate otra vez su marcha al capitolio.

¿Por ventura osara cerebro insano
La ley contrarrestar con fuerza bruta?
¿Cuándo y que genio en suelo Colombiano
Logró poner su férula absoluta?
Cadáveres, vergüenza, horror Cristiano
Señalan de los césares la ruta,
Mientras que con su sangre ungió el Bautista
La libertad, la popular conquista.

RAFAEL POMBO. Agosto 1897.[750]

La crisis caló tan hondo que las desavenencias de la prensa de apoyo a Caro, fueron motivo de protestas por parte del mismo Clero. El proceso contra Pérez y Soto fue catalogado como una injusticia por el Obispo de Panamá, José Alejandro, el Presbítero de Cali, Severo Gonzáles y por el Presbítero de Pamplona, Numa J. Calderón, quienes además sentaron su protesta ante el título dado por algunos periódicos como *El Diario de Colombia, El Nacionalista y El Bogotá,* de "Clero insaciable". De esta manera, el gran defensor de la iglesia Católica y artífice del concordato, habría de ver en el crecimiento opositor del clero ante lo expresado por la prensa que apoyaba su candidatura, y que, no obstante, ser acreedores a las penas para delitos subversivos tipificados en la ley de prensa, no serían sancionados por atacar las instituciones religiosas. Al final le fueron creando tal marasmo de problemas al Presidente Caro, que ordenó la salida de Pérez y Soto, tres días antes de cumplirse la pena, tal vez previniendo una masiva manifestación de apoyo convocada para el día final de los cuarenta castigados.

[750] PÉREZ Y SOTO, Juan B. Caro y su desprecio. Op. Cit. p, 379

4.10.2. EL MOCHUELO.

Mediante la Resolución número 8 del 5 de Junio de 1897, el Gobernador de Cundinamarca Rafael Pinto, resuelve suspender por seis meses al periódico *El Mochuelo,* bajo la redacción de Antonio Posada Hernández y Miguel G. García Sierra, como consecuencia de la inserción de un artículo el 12 de Julio en su número 4º, en el cual, según el Gobernador, se incitó al choque entre clases sociales. También son causales de la suspensión, la ofensa constante al Presidente Caro, y la publicación de noticias falsas al decir que el mandatario había llegado al poder de manera indebida. La aplicación del máximo de la pena, después de ser encontrado el periódico como infractor en primer grado, sería apelado posteriormente ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Los incisos quebrantados por el periódico acusado fueron, según el Gobernador, los números 7, 12, 13 y 16 del artículo 32º de la Ley 157 de 1896. El artículo, que especificaba los delitos "subversivos", exponiendo en el primero de los incisos citados, la incitación al choque entre las clases sociales, propiciado en una hoja suelta titulada "Salud Pública", que en su segundo aparte dijo: *"La lucha está, pues empeñada entre la gente decente y la que no pertenece a este gremio."* [751] Ante esta afirmación, el Tribunal encontró que, pese a que la concitación al choque entre clases sociales, solamente podía afirmarse lo anterior, si la frase fuera tomada de manera aislada, pero vista en relación con el hecho denunciado, parece que se hace relación a las personas que lo ejecutaron y á las que puedan imitarlas; y como esas personas no constituyen una clase social, el Tribunal encontró que no existía evidencia para resolver con toda seguridad que se haya infringido el ordinal 7 del artículo 32º.

[751] Registro Judicial de Cundinamarca. Julio 25 de 1897. No.334 p.6

Pero, lo mismo no ocurrió con los otros ordinales. En el número 4 del periódico *El Mochuelo,* se encontró un párrafo motivo de análisis en el que se afirmaba que el Presidente Caro escaló el poder en forma indebida y que nunca pensó en el bien de la patria sino en la satisfacción de sus resentimientos y vanidades personales. Posteriormente, en el número 5 del citado periódico fue expresado en un artículo titulado "para la historia", que el estado de decadencia que se vivía en 1896, se podía demostrar, señalando con los dedos a los Magistrados *"que erigiéndose en jueces de causa propia premian con honores inmerecidos á los subalternos violadores de la ley y sordos á la voz de su propia conciencia; á los perseguidores de los escritores amantes de la dignidad de su Patria etc."*[752], y ante esta acusación, el Tribunal encontró las mismas infracciones del Gobernador en los incisos restantes. Por ejemplo, *El Mochuelo* violó el inciso 12 cuando dijo que fueron desconocidos los móviles que tuvo el Gobierno para nombrar al Señor Pinto como Gobernador de Santander, desconociendo las prerrogativas y facultades que residían en el Gobierno para nombrar y remover libremente estos empleados. También, el Tribunal encontró violatorio al periódico, del inciso 13, por cuanto las injurias al Presidente fueron reincidentes en casi todos los números, y del 16 también porque al decir que Caro escaló en forma indebida el poder, se podría ocasionar alarma o peligro para el orden público al generar desprestigio a la misma autoridad. Los mismos miembros del Tribunal, Antonio María Rueda G, Flavio Gonzáles Malo. E Ignacio Vargas, que rebajaron las penas a Pérez y Soto, ratificaron la decisión tomada contra *El Mochuelo* por el Gobernador.

La polvareda levantada con el castigo a este periódico provino del General Juan N. Valderrama, que habiendo sido nombrado en la Gobernación de Cundinamarca, intentó cierta defensa para *El Mochuelo,* y terminó pagando con su cargo. De hecho, la Resolución había sido firmada por Rafael Pinto, secretario privado de la

[752] Ibíd. p,7

Gobernación en ausencia de Valderrama. Este último reaccionó molesto escribiéndole una carta al Presidente Caro el 18 de Junio de 1897, en la que le expuso que, habiendo realizado un análisis de la Ley de Prensa, no había encontrado méritos para la sanción impuesta, sin consulta previa, por su Secretario Privado, encontrando además una visible ilegalidad, expresada a manera de queja al Presidente:

> *Desearía que las cosas no fueran así, porque quisiera como agente suyo, proceder en todos los asuntos de la Gobernación con acuerdo y beneplácito. Pero sea porque la susodicha ley tomada en conjunto y con las circunstancias concomitantes, se presta a diversas interpretaciones o sea por error involuntario de mi parte, lo cierto es que el concepto formado sobre tal asunto, no está de acuerdo con la apreciación que me parece ha hecho usted sobre él.*[753]

La renuncia de Valderrama habría de venirse a sumar a la serie de derrotas políticas sufridas por Caro ante su intransigencia con la poderosa prensa capitalina de oposición del Conservatismo "histórico". Pero Caro justificaba las medidas hacia el periódico que lo había llamado "ídolo de carne", en que la profanación de la dignidad de su investidura hecha por los "tiranuelos de pluma" no fueron críticas a su labor pública sino a su dignidad personal. En la carta de contestación hecha por el Presidente Caro al General Valderrama le dijo que el periódico que este presumía inocente se había dedicado a desconocer la legitimidad de su gobierno para incitar a la rebelión.

A pesar que la sarta de contravenciones al orden público no era un argumento novedoso, *El Mochuelo,* desde su primer número, contiene en sus páginas toda

[753] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. cit. p. 314.

una serie de acusaciones insultantes sobre el Presidente Caro, quien no habría de tolerarlas. Por eso, ante el Proyecto de resolución absolutoria que por esos días preparaba el General Valderrama para el periódico, Caro le transcribió la mayoría de los insultos y le argumenta su decisión diciéndole:

> *Estoy persuadido de que usted no se ha tomado la molestia (y, fuera de la obligación del caso, le aplaudo el gusto) de leer el periódico que el proyecto de resolución declara inocente, porque no es posible que usted crea que conceptos como los que dejo transcritos no sean graves injurias y calumnias lesivas de la dignidad del Magistrado a quien usted reconoce como "superior jerárquico"*[754]

4.10.3. EL DÍA.

El 3 de Julio de 1897, el Ministro de Gobierno Antonio Roldan, dictó la resolución No. 28 de 1987, mediante la cual, le impuso al periódico *El Día,* dirigido por José Vicente Concha, la suspensión de seis meses. Esta publicación, Igualmente hacía parte de la vocería del conservatismo "histórico" que se aferraba a combatir las actuaciones del Gobierno del Presidente Caro. Precisamente, mediante la escritura de una hoja suelta, había impreso un editorial titulado "A última Hora" en el que informaba que el Señor Rafael Pinto había tomado posesión del Cargo de Gobernador de Cundinamarca de manera clandestina y como premio por la mencionada suspensión de *El Mochuelo.* Rafael Pinto Valderrama, hubo de tomar esta decisión ejerciendo como secretario privado de la Gobernación de su propio Tío, el General Juan N. Valderrama, pasado al bando "histórico", defensor de la causa de *El Mochuelo,* y pasado por las armas políticas de Caro. En la hoja

[754] Ibíd. p.319.

publicada, además se le dice al Gobernador, que en lugar de ser premiado por su actitud, este debería estar respondiendo ante la justicia por su actuación.

Las razones de Pinto para suspender el periódico, estaban basadas en el sempiterno delito “subversivo” de los periódicos de oposición, mediante la violación de los numerales 12 y 16 del artículo 32º de la Ley 157 de 1896, referidos al ataque a las autoridades civiles, desconociendo sus prerrogativas, y a publicar noticias falsas que pudieran originar peligro para el orden público.

Concha, haciendo uso del recurso de apelación incluido en la misma ley, elevó ante el Tribunal Superior de Cundinamarca su queja y este dictó su fallo el 7 de Julio de 1897, haciendo el análisis de la violación de los mencionados incisos. En cuanto al inciso 12, el Tribunal consideró que el artículo no atacaba la facultad que tenía el Gobierno para nombrar Gobernadores, ni la de éstos de tomar posesión de su empleo, ni que se hubieran atacado tampoco esas atribuciones. En cuanto al inciso 16, el Tribunal encontró que el periódico expresó la noticia del nombramiento del nuevo Gobernador Pinto y que este recibió aquel empleo como premio de un atropello á la ley, por lo cual debería estar respondiendo ante la justicia.

El periodista no hizo referencia a cuáles son los actos punibles realizados por el Gobernador, ni da la prueba de ellos. Por esta razón, el Tribunal encontró que el periódico efectivamente ha incurrido en la publicación de una noticia falsa al no tener pruebas, o por lo menos, no haberlas presentado ante el Tribunal al momento de hacer el reclamo. De este hecho, y según el propósito de los legisladores de la ley de prensa, según el Tribunal, la publicación de noticias falsas tiende a generar desorden público y subversión; razón por la cual, encontraron la apelación de Concha infundada en este aspecto.

Por último, la afirmación del periódico de que el Gobernador tomó posesión de manera clandestina, el tribunal la encontró inexacta ya que esta se hizo con la puerta abierta al público y en presencia de todos los Magistrados. Pese a esta inexactitud, el Tribunal no encontró que esta pudiera causar alarma o peligro para el orden público o grave daño para los intereses del Estado.

Finalmente, el Tribunal solamente encontró infringido uno de los incisos del artículo 32º causantes de la sanción del Ministro de Gobierno, y exponiendo que:

> *Es el caso de reformar ésta en el sentido de rebajar proporcionalmente la pena impuesta, una vez que el ordinal 2.o del artículo 36 de la Ley tantas veces citada, al decir que se pueden castigar las infracciones de prensa con la suspensión del periódico, hace uso de la preposición hasta, lo que quiere decir que puede imponerse menos del máximo allí señalado; y en cuanto á la facultad que tiene el tribunal para hacer la reforma.*[755]

Seguidamente, el Tribunal, conformado por Antonio María Rueda, Flavio Gonzáles e Ignacio Vargas, impartiendo justicia en nombre de la República le rebajó la suspensión al periódico a tres meses.

4.11. LA DEFENSA DE UN BARCO EN LA TORMENTA

El Presidente Caro quien había llegado a comparar a los conservadores históricos con los disidentes israelitas, que ante el descuido y ausencia de Moisés edificaron un becerro de oro para adorarlo, traicionando al propio Dios “verdadero” de la

[755] Registro Judicial de Cundinamarca. Julio 25 de 1897. Año 11. p.5.

Regeneración; no habría de encontrar paraguas para la tormenta política desatada a través de su represión a la prensa bogotana.

Esta vez, los periodistas metidos a "redentores" lograron cabalmente el objetivo de ahondar la división del partido nacional y la porosidad de la regeneración, aún defendida por Caro en 1897. Un ejemplo del desprendimiento de adeptos políticos al gajo gubernamental incitado desde la prensa, puede encontrarse en los sucesos con el Gobernador de Antioquia, Bonifacio Vélez.

Amigo personal del Presidente, este político había sido nombrado como Gobernador de Antioquia, cuando Caro asumió el poder en Sopó en 1896 tras la desandada del General Quintero Calderón. En 1897 ya había llegado a los oídos del primer Mandatario la actitud disidente de Vélez y la permisiva actitud que mantenía con los periódicos de su Departamento que denigraban del Gobierno y de la candidatura de Caro. La recriminación le fue hecha a través de un telegrama escrito a finales de 1897:

> *Ha aplicado usted la ley de imprenta cuando lo ha creído conveniente. [...] Pero este celo desplegado por usted no ha servido para defender la honra y crédito del gobierno y del presidente de la república contra las calumnias y ultrajes de la prensa. Solamente una vez intervino usted por tal motivo, porque el ministerio de gobierno llamó su atención al cumplimiento de su deber; excusose usted alegando no haber visto antes la publicación ofensiva, e impuso una multa mínima.*[756]

[756] CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Op. Cit. p. 347.

Ya, en 1897, Miguel Antonio Caro estaba convencido de la peligrosidad que el cisma conservador habría de causar en el "nacionalismo", y la acción de no atajar la prensa por el Gobernador Vélez hubo de requerir nuevamente el uso de su mano dura. La molestia causada por el periódico *El Nacional* de Medellín en sus escritos referidos al Presidente, y la omisión represora de Vélez no eran tan graves como el hecho de que los autores fueran miembros del despacho del Gobernador. Igualmente Vélez había prohibido que el "Manifiesto" de Caro en el que se refería a su opinión contra las razones de la disidencia "histórica", fuera publicado por la imprenta departamental.

La rabia causada porque el Gobernador no hubiera de representar los intereses del Gobierno en su cabeza, le llevó a Caro a pedirle la renuncia a Vélez ante su inconformidad con la política represiva a la oposición: *"Paréceme más correcto que [...] haga dejación del puesto y no provoque una remoción, para darse el gusto de acusar luego al gobierno por ese acto, justificándola, al mismo tiempo, con su conducta ulterior, como ha sucedido en Cundinamarca."*[757]

Mediante un Manifiesto fechado el 28 de Julio de 1897 y publicado en *El Progreso*, y una proclama hecha desde los balcones del Palacio de San Carlos el 30 de Julio de 1897, el Presidente Miguel Antonio Caro decidió retirarse de la contienda electoral.

Algunos periódicos como *La Crónica,* de corte liberal radical y que fueron reconocidos por Caro como defensores políticos apasionados del radicalismo, no habían ahondado en los odios personales. Pero la situación cambió, según Caro, por el temor a que la publicación fuera tachada como cándida con el Gobierno y

[757] Ibíd. p.350.

después del 4 de Julio de 1897, cedió a la tentación de endilgarle al presidente, todo tipo de malabares reeleccionistas.

Finalmente, la esperanza de Caro, y motivo de sus más enconadas luchas habría de expirar el 31 de Julio de 1900, cuando el Vicepresidente José Manuel marroquín, protagonizó un golpe contra el último Presidente Nacionalista Manuel Antonio Sanclemente. De esta manera, el traspaso del poder al conservatismo "histórico" marcó la derrota política y el triunfo de la prensa opositora sobre el severo mandatario.

CONCLUSIÓN

Todo análisis de la situación de la prensa colombiana a finales del Siglo XIX, merece tener en cuenta tres aspectos rectores que pretenden dar una luz, más allá del paradigma histórico con el que se ha estigmatizado este periodo conocido como “la regeneración”, en el cual; se ha señalado una actitud de la administración de Rafael Núñez, Carlos Holguín, y Miguel Antonio Caro hacia las publicaciones, como de censura y supresión a la libertad de expresión. Aunque de hecho, la prensa vivió un periodo de profunda agitación política y fue objeto de multas, suspensiones temporales y el destierro de algunos periodistas; fue producto así mismo, de una lucha por la conservación del poder basado en el orden, por un lado; y la resistencia a la imposición de un régimen nuevo que cambió profundamente el país, por el otro.

La respuesta ante un nuevo marco jurídico para la prensa; independiente a las opiniones sobre la arbitrariedad, discrecionalidad e injusticia de las leyes; provocó un cambio en los ajustes de los escritores e impresores para cumplir la “responsabilidad” a la cual fue sujeta. Fueron, esta serie de medidas, un recuento de la legislación hecha a medida que la situación política se iba desarrollando, y que la prensa de oposición encontraba maneras para resistir, transgredir o contradecir dichas leyes. La reacción de los encargados del Poder Ejecutivo no fue la misma, a pesar del similar lineamiento que tuvieron los tres políticos para afianzar el cambio y la orientación de la Nación colombiana. Cada uno de ellos, conservaba un cierto punto de vista y una cierta autonomía para su proceder en la aplicación de las leyes de prensa, especialmente aquellas que atentaban contra el “orden público”; no obstante que, durante la mayor parte del periodo estudiado (1886 – 1898), Colombia tuvo como Presidente a Rafael Núñez dirigiendo las riendas desde Cartagena y a sus Vicepresidentes encargados del Poder Ejecutivo, despachando los asuntos del Estado desde la capital.

El marco Jurídico es el primer aspecto rector necesario para analizar el comportamiento de la prensa y del Gobierno bajo la batuta de las nuevas leyes. El Decreto transitorio "K" causante de molestias y resquemores porque tenía el imperio de "reprimir y prevenir", imponiendo sobre el cielo de la "libertad" de prensa la amenaza permanente de la tormenta de la censura previa, no fue usado más de tres veces a lo largo de sus diez años de vigencia. Por el contrario, el afán legalista del Gobierno colombiano pronto encontró en los Decretos presidenciales el asidero bajo el cual se podía restringir a los opositores del nuevo proyecto político. El primero de ellos, instaurado por el General Campo Serrano bajo la modalidad de Jurados de imprenta y que no habría de sobrevivir más de unos cuantos meses al ser derogado por el mayormente permisivo del General Payán, debió su no sobrevivencia al atrincheramiento político del liberalismo radical que, al contar con la puerta abierta de la menor represión, arreció su oposición recalcitrante y muchas veces ofensiva.

Por eso, la respuesta de Rafael Núñez y su alianza regeneracionista se dejó venir con toda su fuerza, mediante la expedición del decreto 151 de 1888, que habría de imponer su normatividad durante ocho años. Las adiciones posteriores a este decreto mantuvieron la premura de avanzar en la restricción, al mismo tiempo que los periódicos e impresos encontraban vericuetos para conseguir escapes a las válvulas impuestas por el Gobierno.

La normatividad represora bien podría haber instaurado el imperio del perpetuo silencio a la prensa bogotana. Sin embargo, no lo hizo en la dimensión de su alcance. Con el Artículo Transitorio "k" y la llamada "Ley de los Caballos" hubiese sido más que suficiente para llevar a cabo una eficiente censura. Pero, este no fue el propósito de los primeros gobiernos de la Regeneración. Por el contrario, cada uno de los Decretos presidenciales que fueron impuestos para la prensa,

restringía dentro de límites el ejercicio periodístico, pero daba importancia y cierta libertad a los escritores para expresarse sobre las actuaciones de los funcionarios públicos. Por esta razón llegaron a nuestro días numerosos periódicos de oposición, algunos mas ofensivos que otros, unos con una chispeante dosis de humor y crítica social, pero la mayoría, cocinados en el caldo político y sacados de la cazuela cuando habrían de traspasar ciertos límites. Obviamente, los casos de arbitrariedad no fueron escasos. Pero al parecer, los fusibles de la Regeneración, es este aspecto, saltaban más cuando el proyecto político ejecutado con celoso empeño habría de correr un riesgo de resquebrajamiento o derrumbe de su modelo, que cuando las críticas corrían por cuenta de señalamientos de las inconveniencias legales impuestas en la Constitución de 1886.

Por esta razón, la ejecución represora se llevó a cabo con mayor celeridad, cuando en 1891 el cisma del partido conservador originó que, desde la prensa de oposición “histórica”, fuera socavada la simiente del partido nacional que ejecutó la construcción del nuevo modelo político. La normatividad recayó entonces sobre dos “enemigos” que atacaron desde dos flancos y que incluso trataron de actuar mancomunadamente: El liberalismo radical y el conservatismo histórico.

El Decreto 635 de 1886 no fue valorado por el liberalismo radical y menos por Payán, como una manera de acercar la prensa a una legislación responsable. Por el contrario, cualquier intento de restricción de la manoseada libertad de prensa, hubo de ser considerada como una arbitrariedad contra las más profundas tradiciones del liberalismo colombiano. Cualquier intento de transformación trajo consigo arrastrados procesos de resistencia que no fueron ejecutados con premura y sosiego por ninguno de los bandos políticos en contradicción. Probablemente la acción apresurada del General Payán al romper de un tajo el Decreto restrictivo, pero también permisivo y participativo de Campo Serrano,

provocó la exaltación de ánimos del radicalismo y la alerta para la represión consecuente de la Regeneración.

Los intentos para el establecimiento de una ley definitiva fueron escasos. El único efectuado antes de 1896, fue el proyecto de ley del Senador Guillermo Uribe en 1888. Este proyecto de ley, desde mi punto de vista, pudo constituirse en la norma para satisfacer a quienes encontraban injusto el imperio del Artículo K, dejando reglamentada la cuestión de la Prensa. No obstante, la prensa de oposición hubo de demostrar con su propósito de violar las normas, que la negativa desde el Congreso para que otro proyecto de ley fuera considerado, estaba fundamentado en la misma desobediencia de los artículos del Decreto 151 de 1888. De hecho, la reglamentación de la prensa ni siquiera sería considerada por el Poder Legislativo, pese a la sutil insistencia de Carlos Holguín, y posteriormente de Caro, entre otras cosas porque el liberalismo radical que se expresaba a través de la prensa y al mismo tiempo continuaba con las sucesivas conspiraciones, hubo de continuar fehacientemente sujeto con el Decreto 151 de 1888.

El segundo aspecto tiene que ver con la implantación de profundos cambios políticos que provocó la pertinaz resistencia del Partido Liberal Radical, ya que sus principios defendidos a través de las pasadas Constituciones no poseían ya la fuerza para desplazar el gran acoplamiento que consiguió Rafael Núñez entre el Partido Conservador y el Partido Liberal Independiente, bajo el nombre del Partido Nacional.

Aunque esta mezcla, y quizá debido a la multiplicidad de matices y de los intereses de sus miembros, no produjo precisamente una corriente de doctrinas estrictamente obedientes a las sendas de sus principales dirigentes, en parte también debido a que, ni ellos mismos eran del todo unos conservadores de principios irrevocables. Esta falta de partidos políticos sólidos en principios y

disciplinados en el ejercicio, no es ni menos diferente, a las contingencias políticas por las que ha atravesado la Nación durante su historia. La escisión, los cismas y las banderías siempre han hecho tal presencia en los estamentos políticos que bien podrían llevarnos a una revisión de los términos tales como “república liberal” o “hegemonía Conservadora”, y que fueron, precisamente, desde mi punto de vista, el “talón de Aquiles” que pretendía el Liberalismo Radical penetrar a través del uso de la prensa durante el periodo.

Incluso, la sanción a periódicos conservadores como *El Renacimiento* y *El Comercio* en 1886, recién instaurada la nueva Constitución y cuando el poder estaba en manos de la facción del liberalismo independiente, pueden dar una ilustración sobre la falta de unidad del mismo Partido Conservador a la Regeneración. Aunque, esta oposición conservadora fue llevada a cabo desde antes de las elecciones de 1891 cuando los “históricos” a la cabeza de Marceliano Vélez ahondaron el cisma, dan a entender que algunos sectores de este partido desde el inicio de la transformación política, no querían un poder compartido sino exclusivo. El ascenso del partido Conservador fruto de una eficiente táctica política ejecutada por Carlos Holguín, y materializada durante su ejercicio como Presidente encargado, hubo de mantener el mismo propósito de transformación desde diferentes sectores políticos. Los ideales firmes de Holguín sobre la unidad del Partido Nacional bien hubieran podido flaquear ante la intransigencia de Caro, y la desbandada de adeptos hacia las toldad “históricas, pero la muerte del dirigente conservador en 1894 nunca nos permitirá conocer cuál habría sido su actuación política, especialmente después de que el poder de la Regeneración quedara en las manos exclusivas de Miguel Antonio Caro.

Las viscicitudes por el poder fueron atravesadas por los tres dirigentes, especialmente a través de la contradicción de ideas. Núñez tuvo en Payán la permeabilidad del Radicalismo; Holguín en el rompimiento de los dirigentes

Conservadores “históricos” con su candidato no oficial a las elecciones de 1892, y Miguel Antonio Caro, la herencia de las mismas contradicciones, exacerbadas por una actitud de suprema severidad ante las críticas. También para el Gobierno, la capacidad de acción del Partido Radical no era una cuestión que debiera dejarse sin el respectivo control. A su buena capacidad de convocatoria, mantenía una generación de dirigentes activos que competían con una juventud encendida y resuelta, que poco contenía las vacilaciones de la voluntad, a la hora de hacer conjuras subversivas o de desafiar desde la prensa las pertinaces disposiciones legales.

El cambio de las doctrinas Conservadoras, llevado a cabo desde Antioquia, propendía también por un retorno a la pureza de principios, que tuvo a bien desquebrajar Carlos Holguín para buscar la cabida en el poder; táctica que el Radicalismo no descartaría cuando avizoró también la posibilidad del debilitamiento de la facción de Conservadores “históricos” leales a Núñez; de quienes, Marco Fidel Suárez, llegó a expresarse así:

> *Antagonista tradicional, respetable por su número, por la dignidad de su pasado y la excelencia de su programa: pero abatido por la fuerza de las armas, inflexible y suspicaz a causa de la rigidez de sus principios y por lo mismo tan refractario a la disciplina, que llamándose conservador, parece en ocasiones falto de instinto conservador.*[758]

Fue Núñez quizá, incluso en mayor medida que Miguel Antonio Caro, quien con mayor severidad reflejó su constante alerta contra la prensa de oposición, materializándola en las leyes discrecionales y en una creciente represión. Publicista, igual que sus Vicepresidentes encargados, después de la aprobación

[758] SUAREZ, Marco Fidel. Rafael Núñez y Carlos Holguín. Bogotá, Imprenta nacional. 1894. p, 6

de la Constitución de 1886, vio en manifiesto peligro la reforma política porque sabía del alcance profundo en la expresión de las ideas a través de la prensa y lo hondo que calaba en las mentes de la dirigencia del país, especialmente, cuando esta era tan proclive de girar hacia otros bandos. Siempre consideró el ejercicio de la pluma como fuente de inmenso poder y la labor del periodista revestida de grandes responsabilidades. Quizá por ello, la prensa bogotana, tan comprometida con el tema político y con un gran desarrollo a nivel editorial y gráfico, pero sin un afianzamiento del periodismo comercial y noticioso que le permitiera el mantenimiento de un periódico de circulación diaria; también hizo parte del cúmulo de imágenes de la urbe, que le llevaron a referirse a esta como la "ciudad nefanda". Núñez tenía una visión global y clara del país, y de lo que debía hacerse acorde con sus propósitos; y, una vez logró su primer objetivo con la nueva Constitución de 1886, desenvainó la espada de la sostenida vigilancia a las imprentas y, al mismo tiempo, subvencionó periódicos para que soportaran, en la opinión pública, las reformas políticas con publicaciones nacionalistas y patriotas. De ese propósito viene su llamado permanente a los dirigentes del Gobierno, para no permitir la subversión del orden. Su espíritu de lucha inquebrantable sabía del peligro que correría su obra ante un enemigo tan poderoso como el Liberalismo Radical y también del riesgo, si dejaba que este socavara el poder conquistado.

El tercer aspecto rector de este análisis tiene que ver con el propósito generalizado de la prensa bogotana en estos años que, siendo político, mereció un trato conforme a su propósito, por parte del Gobierno. Rafael Núñez fue el gran planeador y ejecutor del proyecto político. En un comienzo, se apoyó más en el consenso que en la imposición, pero una vez llevada a cabo la reforma, la defendió a capa y espada, esperando de la prensa un tratamiento más moderado y de oposición política que habría de ser iniciado, según su deseo, partiendo del reconocimiento al nuevo rumbo dado a la Nación.

Carlos Holguín fue un restaurador del propósito nacionalista de la Regeneración con una mayor flexibilidad frente a la prensa opositora, mientras que Miguel Antonio Caro, instauró la imposición autoritaria con todo su sello bajo una mentalidad divida entre enemigos y enemigos. Aunque, su inicio no fue tan marcadamente autoritario, después de que hubo de soportar las continuas tramas guerreristas del radicalismo, y después de ver estas materializadas en la guerra de 1895, arreció con la represión más abierta e intransigente contra el radicalismo y en mayor medida contra los conservadores históricos.

La Regeneración fue el intento más serio de llevar a la Nación por los caminos de progreso en el siglo XIX, según el punto de vista de sus dirigentes. Pese a ser ejecutado por una calzada exclusivista, al no permitir ninguna reforma inicial a la gestación del modelo instaurado; el desconocimiento permanente del radicalismo de la Constitución de 1886 a la cual nunca se cansó de atacar exigiendo su misma derogación, le fue sumada la exigencia de una reforma urgente y participativa por el conservatismo histórico a Miguel Antonio Caro, quien nunca hubo de ceder.

El ejercicio de la prensa escrita fue para el proyecto de Núñez, bastión de intrigas y asechanzas políticas. Él mismo llegó a reconocer el papel tan importante que le significó publicitar sus ideas independentistas desde 1875 en los diarios Bogotanos. Por eso, no era posible dejarlo al libre pulso las imprentas. La necesidad de acallar, derivaba de la exigencia de limitar las críticas contra el Gobierno que pudieran enardecer los ánimos de los liberales y conservadores disidentes, y de la misma población letrada contra las rigurosas medidas que vendrían en los años posteriores. Sin embargo, también el sometimiento de unas nuevas normas a las imprentas, acostumbradas desde 1846, y posteriormente amparadas en las libertades absolutas de las Constituciones de 1858 y 1863, a una ausencia irrestricta de leyes sobre la materia, hubo de significar un violento

choque contra la más preciada de las llamadas “libertades” del Liberalismo radical; precisamente, porque la costumbre de casi 40 años era más fuerte que la norma.

Algunas multas llevaban el corte de la injusticia como la impuesta al tren por criticar al Gobierno por el apresamiento de Arguello, estudiante del Colegio del Rosario. En los años de Caro, la imposición más severa fue más dirigida hacia el conservatismo histórico que hacia el liberalismo radical, ya que el primero de ellos, ponía en peligro la obra de Núñez por germinar la división en el mismo seno del Gobierno, mientras que el radicalismo ya había sido dominado por las armas y por la acción de la policía que habría de desmantelar sus conjuras.

Tras la muerte de Núñez, que imponía su voluntad por la autoridad de su nombre, y de Holguín que había dado muestras de ser el conciliador que, posiblemente habría logrado una unificación futura de su partido; quedó impartiendo los destinos del agónico Partido Nacional, Miguel Antonio Caro, quizá el más intransigente e intolerante de los mandatarios Colombianos.

Pese a todo, considero que el ejercicio de la prensa bogotana en los años comprendidos durante este análisis, lejos de ser depositaria de la tiranía censora de la Regeneración, instauró tales procesos de resistencia a la normatividad pretendida del Gobierno, tan ricos y tan variados, que la queja expresada por Alfredo Greñas hacia 1891 sobre la abundante proliferación de periódicos en las calles capitalinas, bien podría incluirse, por el contrario, dentro de una edad de oro del periodismo político que no habría de tener una similar en la historia colombiana.

Desde luego, también son incluyentes los análisis tendientes a mirar esta fecundidad como fruto de la misma intolerancia del Gobierno. Sin embargo, en mi opinión, la tolerancia siempre estuvo amparada en las leyes que daban garantía de un ajuste entre la libertad individual y la colectiva. La Regeneración presentó un

avance de las tendencias liberales primigenias, que según Habermas, hicieron un trámite entre la noción “mercantilista” pura, hacia un nuevo intervencionismo del Estado, que habría de conformar una dualidad entre la estatalización progresiva de la sociedad y la socialización del Estado comprometido mayormente con el ciudadano. Precisamente el orden social al que la Regeneración pretende salvaguardar, no podía dejar de lado la prensa periódica, máxime cuando se trataba de imponer un modelo político al cual los colombianos debían sumisión.

La tesis radical de una sociedad tolerante sin leyes de prensa, pretendió originar un juzgamiento contra la tolerancia por el poder. En este sentido, el conservatismo histórico hubo de presentar las leyes de prensa de 1896 y una final en 1898, sin el desconocimiento del poder del Estado para responsabilizar la prensa a una normatividad más permisiva y precisa. Incluso, la tolerancia de los dirigentes de la Regeneración hacia el radicalismo luego de sus intentos de tomarse el poder por las armas, se puede ver incluso en el más severo de ellos. De hecho, dirigentes como Rafael Uribe Uribe y Liborio Cantillo, quienes en 1895 se levantaron en armas contra el Gobierno, no solo no fueron desterrados ni encarcelados, sino que además de ser cobijados por la admistía, pueden encontrarse en 1896 como miembros del Poder Legislativo, el uno; y escribiendo desde dos periódicos de oposición, el otro.

El ejercicio del periodismo político en Colombia, con periodos de precisas excepciones, ha sido ejercido dentro de los mayores límites de tolerancia estatal y amparado por leyes que precisan los mismos alcances de su proceder. Pero a finales del Siglo XIX este proceso de amoldamiento habría de llegar bañado en la sangre de los combatientes de la Guerra de los mil días y de la posterior reorganización política y represiva con la prensa del General Rafael Reyes. El proceso de construcción nacional habría de estar marcado por estas marchas y contramarchas, en las que la prensa siempre hubo de mantener su papel

protagónico en la vida política colombiana. Incluso, la puerta a la reflexión puede dejarse abierta cuando en nuestros días se debate académicamente sobre la parcialidad de algunos medios de comunicación periodísticos hacia el Presidente Álvaro Uribe. El propósito de las grandes cadenas masivas de información como RCN y Caracol, podría verse, no sólo alejadas de la oposición hacia el mandatario, sino indulgentes apoyando las medidas del Estado. Sin embargo, ¿es probable la coincidencia de un mismo propósito político entre el Gobierno y la prensa que podría haber generado un apoyo mayormente irrestricto, basado en un mismo punto de llegada colectivo? Al igual que los periodistas del Siglo XIX mantenían apoyos y críticas al Gobierno, en los últimos años es posible verlos aparejados en las mismas tendencias. Sin embargo, la diferencia podría estribar en los enormes aparatos de publicidad política montados por fuerzas monopólicas hacia una visión sesgada, que no obstante ser parte de una discusión desde el punto de vista de su ejercicio éticamente profesional, tampoco puede prescindir del análisis por el hecho de ser organizaciones éticamente políticas. Pero, esa es otra historia.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Secundarias:

AGILERA PEÑA, Mario. El Motín Bogotano de 1893 en: Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo 2. Bogotá: Editorial Printer. 1991.

ARCINIEGAS, Germán. El Zancudo. La caricatura Política en Colombia. (Siglo XIX). Bogotá: Editorial Arco, 1975.

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

CACUA PRADA, Antonio. Célebres procesos de prensa en Colombia en el siglo XIX. Revista Senderos. Bogota, Vol. 7. No. 29 – 30. 1994.

CACUA PRADA, Antonio. La libertad de prensa en Colombia. Bogotá: Editorial Prensa Católica, 1958.

CACUA PRADA, Antonio. Legislación de prensa en Colombia. Bogotá: Ediciones Universidad Javeriana, 1963.

CAMARGO PÉREZ, Gabriel. Sergio Camargo. El bayardo Colombiano. Segunda edición. Bogotá: Editorial. A.B.C., 1987.

CHARTIER, Roger. Privado/publico. La construcción histórica de una dicotomía. En: II Seminario Internacional. Sociedad Política e Historia conectadas. Cultura impresa y espacio público. Siglo XVI - XXI. Universidad EAFIT- Medellín,31 de Agosto y 1 de Septiembre, 2007.

CORDOVEZ MOURE, José María. Reminiscencias de Santafé y Bogotá. Bogotá: Gerardo Rivas Moreno. Editor, 2000.

ELIAS, Norbert. Historia de la Cultura e Historia Política. Los Alemanes. México: Colección itinerarios, 1999.

ESPAÑA, Gonzalo. Carlos Holguín y el debate de la táctica. Bucaramanga: ediciones UIS, 1995.

GONZÁLES, Beatriz, Gráfica crítica entre 1886 y 1900, en: Medios y Nación. Historia de los medios de comunicación en Colombia. Bogotá: Aguilar, 2003

HABERMAS Jürgen. Historia y Crítica de la Opinión Pública. La transformación estructural de la vida pública. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli S.A, 1981

HABERMAS, Jürgen. Identidades nacionales y postnacionales. Madrid: Editorial Tecnos S.A, 1989.

HERRERA C, J. Noé. La prensa ante el derecho. (Estudio filosófico, histórico y jurídico) Bogotá: editorial retina, 1960.

HOLGUÍN Y CARO, Álvaro. Carlos Holguín, una vida al servicio de la república. Tomo II. Bogotá: Editora Desarrollo, 1981.

KANT, Emmanuel, "¿Qué es la Ilustración?, en Emmanuel Kant, *Filosofía de la Historia*, México, Fondo de Cultura Económica, 1978.

LATORRE, Hugo. Mi novela. Apuntes autobiográficos de Alfonso López. S.E. Bogotá, 1961.

LEMAITRE, Daniel. Soledad Román de Núñez: recuerdos, Bogotá: Canal Ramírez, Antares Ltda., 1982.

MARTÍNEZ, Fréderic. El Nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional en Colombia, 1845 – 1900. Bogotá: Banco de la República, 2001.

MARTÍNEZ, Fréderic, En los orígenes del nacionalismo colombiano: europeismo e ideología nacional en Samper, Núñez y Holguín (1861 – 1894). En: Boletín cultural y bibliográfico. No. 39. Vol.23. Bogotá: Ediciones Banco de la República, 1996. Biblioteca Luís Ángel Arango, Biblioteca Virtual. [Consultado 6 – jun. – 2008] En: http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol39/bol2b.htm

MARTINEZ GARNICA, Armando. Convocatoria a una nueva historia política de Colombia. Conceptos fundamentales y temas básicos. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2005.

MOLINA, Gerardo. Las ideas Liberales en Colombia. 1849 – 1914. Bogotá: Tercer Mundo, 1970.

MYERS, Jorge. Identidades porteñas. El discurso ilustrado en torno a la nación y el rol de la prensa: *El Argos de Buenos Aires,* 1821 – 1825. En: ALONSO Paula (compiladora). Construcciones impresas, Panfletos, diarios y revistas en la

formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.

NÚÑEZ ESPINEL, Luz Ángela. El Obrero ilustrado. Prensa obrera y popular en Colombia. 1909 – 1929. . Bogotá: Ediciones Uniandes, 2006.

OTERO MUÑOZ, Gustavo. Historia del Periodismo en Colombia. Bogotá: Edición Universidad Sergio Arboleda., 1998.

OTERO MUÑOZ, Gustavo, La vida azarosa de Rafael Núñez, Biblioteca de Historia Nacional, Vol. LXXXIII, Bogotá: Editorial ABC, 1951.

PICATO, Pablo. Jurados de imprenta en México: El honor en la construcción de la esfera pública, 1821 – 1882. en: ALONSO, Paula. (Compiladora). Construcciones impresas, Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.

POSADA ARIZMENDI, Ignacio. Presidentes de Colombia, 1810 – 1990. Bogota: Editorial. Planeta., 1989.

POSADA CARBÓ, Eduardo. El desafío de las ideas. Ensayos de historia intelectual y política en Colombia. Medellín: Banco de la República, Fondo editorial EAFIT, 2003.

POSADA CARBÓ, Eduardo. "Libertad, Libertinaje, Tiranía".La prensa bajo el Olimpo Radical en Colombia, 1863 – 1885. En: ALONSO, Paula. (Compiladora). Construcciones impresas, Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.

RODRIGUEZ PIÑERES, Eduardo. El Olimpo Radical. Bogotá: ,Editorial Voluntad, 1950.

SANTOS MOLANO, Enrique. Antología. En: Revista Senderos. Bogotá. Vol. 7, No. 29, Dic. 1991.

SCHNAPPER, Dominique. La comunidad de los ciudadanos. Acerca de la idea moderna de nación. Madrid: Alianza editorial S.A., 2001.

SOWELL, David. El Bogotazo de 1893. Artesanos y violencia pública en el Bogotá de finales del siglo XIX. En: *"Biblioteca de Signos"*. Revuelta en las ciudades. Silvia Arum y Servando Ortull. Coordinadores. México: Universidad Autónoma Metropolitana. El Colegio de Sonora. D.F. 2004.

URREGO, Miguel Angel. La regeneración (1878-1898), en: Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo 2. Bogotá: Editorial Printer, 1991.

Fuentes Primarias:

1. Libros, Artículos, Folletos

ALBAN, Carlos. Denuncio que contra el Presidente de la República eleva Carlos Alban al Congreso de 1892. Cali: Imprenta de Eustaquio Palacios. 1892.

ANÓNIMO. Alcance al número 1º del Octavo Mandamiento. Bogota: Imprenta de Ochoa, 1884.

ANÓNIMO. Compilación de Artículos publicados durante la administración Caro. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre., 1893.

ANÓNIMO. Diálogo de actualidad. Bogotá: S.N. 1891.

ANÓNIMO. Defensa de Miguel Navia. Imprenta de la unidad nacional. Bogotá, 1899.

ANÓNIMO. Las pruebas de la Conspiración. Piezas tomadas del número 70 de La Prensa de 17 de Octubre de 1891. Medellín: Imprenta del Departamento. 1891.

ANÓNIMO. Los partidos políticos Colombianos ante el tribunal de la historia. Juicios y aspiraciones de la sociedad libres de Colombia. Bogotá: Casa editorial de M. Rivas. 1891.

ANÓNIMO. Proceso Carreño-Sepúlveda. Acusación fiscal leída ante el Jurado de calificación en los días 8 y 10 de Noviembre de 1890. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1890.

BRUSH*, Victoria. "Señores Coroneles",* y está fechada en Bogotá, el 20 de Julio de 1885 y firmada por Victoria Brush.

CARO, Miguel Antonio. Escritos políticos. Bogotá: Imprenta Caro y Cuervo, 1991.

CARO, Miguel Antonio. Libertad de Imprenta. Artículos publicados en LA NACION en 1888. Bogotá: Imprenta nacional, 1889.

CARREÑO, Torcuato. Exposición que hace Torcuato Carreño sobre el crimen de la casa de la Moneda. Bogotá: Imprenta de Fernando Pontón.

CARREÑO, Torcuato. Torcuato Carreño al Jurado de Acusación. Bogota: Imprenta de Torres Amaya, 1889.

ESCOBAR URIBE, Arturo. El Indio Uribe y su lucha por la libertad en el Siglo XIX. Bogotá: Tipografía Rojas, 1952.

Exposición sobre reforma Constitucional que dirige al Consejo Nacional de Delegatarios el Presidente de la República, Contestación y acuerdo. Bogotá, imprenta de Silvestre y Compañía, 1885.

GALOFRE, Julio. Páginas negras de la Regeneración. Bogotá: Imprenta del Diario de Cundinamarca, 1892.

GALOFRE, Julio. Núñez y Caro. Bogotá: Imprenta del diario de Cundinamarca., 1891.

GERRERO, Miguel. Bucaramanga: La ley del tiempo. Imprenta Mercantil. 1891.

HOLGUÍN CARLOS, Cartas Políticas publicadas en el Correo Nacional. Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea, 1893.

HOLGUÍN CARLOS, Mensaje del Presidente de la República a las cámaras legislativas. 2ª edición .Bogotá: Imprenta de la luz, 1892.

MANIFESTOS. S.A. Bogotá: Imprenta del Heraldo.1896.

MARTÍNEZ SILVA, Carlos. Defensa de Florentino Sánchez ante el Jurado llamado a fallar sobre el delito conocido con el nombre de Puente de Cualla por el Doctor Carlos Martínez Silva. Bogotá: Imprenta de la luz., 1897.

NÚÑEZ, Rafael. La Reforma política en Colombia. Tomo 5. Bogotá: Editorial ABC, 1946.

PALACIO, Julio H. Núñez. Recuerdos y memorias. (1893-1894) Barranquilla: Tipografía Mogollón, 1900.

PEREZ, Felipe. Alcance a “El Relator” No. 286. Bogotá 27 de Julio de 1888.

PÉREZ FELIPE. La ley del tiempo. Medellín: Tipografía del Espectador, 1891.

PEREZ, Felipe y otros, Periodistas Liberales del siglo XIX, Biblioteca aldeana de Colombia. Bogota: Ministerio de Educación Nacional. 1936.

PÉREZ, Santiago. Nota a los directores del partido Liberal en los Departamentos. Bogotá: S.N, 1893.

PÉREZ Y SOTO, Juan B. Caro y su desprecio. Imprenta y librería de Medardo Rivas. Bogotá, 1898.

PORRAS, José Lisardo. Juan de Dios Uribe. Bogotá: Imprenta del progreso, 1888.

RAMIREZ G, Enrique. Caro y Vélez. Paralelos. Ibagué: Imprenta del Departamento del Tolima, 1891.

RESTREPO, Antonio José. Juan de D. Uribe.(In memoriam), Bogotá, abril 13 de 1913. En: Obras completas, ediciones académicas. Edición digital consultado el 6 de Junio de 2008 en:
http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/12/12_1955950934.pdf

ROSAS, Avelino. Notas políticas o sea diez años de regeneración. Trinidad: ,S.N. Octubre de 1895.

RUDAS, Juan Manuel. Lo que fue y lo que es el partido conservador en Colombia. Barcelona: Imprenta de Juan Carral y Compañía, 1989.

S.A. Exposición sobre reforma Constitucional que dirige al Consejo Nacional de Delegatarios el Presidente de la República, Contestación y acuerdo. Bogotá: imprenta de Silvestre y Compañía, 1885.

SALAZAR, Octavio. Jurado Carreño-Sepúlveda. Defensa del Señor Dr. Octavio Salazar. Bogotá: Imprenta de F. Torres Amaya, 1890.

SAMPER, José María. Al pueblo Colombiano. Acusación que el ciudadano José María Samper formula ante el pueblo Colombiano, y ante la historia contra Santiago Pérez, presidente dictatorial de la unión Colombiana, y contra sus cómplices, así de gobierno como de camarilla, por los crímenes de traición, conspiración y prevaricación. Bogotá: imprenta de Nicolás Gómez, 1875.

SAMPER, José María. Cartas y discursos de un Republicano. Bruselas: Tipografía de Vc Parrent et fills, 1869.

SAMPER, José María. Derecho público interno en Colombia. Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951.

SAMPER, José María. Memorias académicas sobre la misión de la prensa y la historia del derecho constitucional en Colombia. Bogotá: Imprenta de vapor de Zalamea Hermanos, 1881.

SAMPER, Miguel. Las reformas políticas y el cesarismo. Artículos publicados en *El Repertorio Colombiano.* Bogotá: Imprenta de la luz, 1898.

SOTO BORDA, Clímaco. [Casimiro de la Barra] Siluetas Parlamentarias del Congreso Nacional de 1896. Corregidas y aumentadas. Bogotá: Imprenta de La Luz, 1897.

SUAREZ, Marco Fidel. Rafael Núñez y Carlos Holguín. Bogotá: Imprenta nacional, 1894.

URIBE, Guillermo. Libertad de prensa. Informe de la comisión al Senado, presentado por el Senador Guillermo Uribe. Bogotá: Casa editorial de M. Rivas. 1888.

URIBE, Juan de Dios, y RESTREPO, Antonio José. Candelario Obeso. Bogota: Imprenta de vapor de Zalamea. 1888.

URIBE, Juan de Dios. El Octavo Mandamiento. Bogotá: S.N., 1884.

ZAMORANO, Belisario. La regeneración y sus malos defensores. Cali: S.N, 1891.

2. Periódicos:

Diario de Cundinamarca. 1892, 1891.

El Bien Público, Bogotá. 1872.

El Comercio. Bogotá, 1887, 1891.

El Concurso. Bogotá, 1891.

El Conservador. Bogotá, 1893.

El Correo Liberal. Bogotá, 1888, 1896.

El Correo Nacional. Bogotá, 1896.

El Diario de Cundinamarca, Bogotá. 1875.

El Demócrata. Bogotá, 1892, 1889, 1892.

El Derrumbe. Bogotá. 1891.

El Eco liberal. Bogotá, 1890.

El Espectador. Medellín, 1888.

El Gladiador. Bogotá, 1891.

El Liberal. Bogotá 1888.

El Mago, Bogotá. 1891, 1892.

El Nacionalista. Bogotá. 1896.

El Orden. Bogotá. 1887.

El Precursor, Bogotá 1889.

El Progreso. Bogotá, 1897.

El Porvenir. Cartagena, 1888.

EL Recopilador. Bogotá, 1886.

El Relator. Bogotá, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892.

El Renacimiento. Bogotá, 1887.

El Republicano. Bogotá, 1896.

El Sagitario. Bogotá, 1889.

El Semanario. Bogotá, 1886, 1887.

El Telegrama. Bogotá, 1893, 1896.

El Tren. Bogotá, 1889, 1890.

El Zancudo. Bogotá, 1791 [1891].

La Catástrofe. Bogotá, 1890.

La Correspondencia. Bogotá, 1890.

La Equidad. Bogotá, 1888.

La Ilustración, Bogotá. 1870.

La Luz, Bogotá, 1884.

La Nación, Bogotá 1886, 1889.

La Palabra. Bogotá, 1888.

La Prensa. Bogotá, 1888.

La Siesta. Bogotá, 1886.

Los Hechos. Bogotá, 1896.

Los Tiempos. Bogotá, 1896.

Revista Judicial. Bogotá, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1893.

Documentos oficiales:

A.G.N. Decretos originales. Ministerio de Gobierno. Sección República Fondo: Libros manuscritos leyes originales 1733-1937. Tomo 1. 1893 - 1894.

A.G.N. Sección República. Fondo Gobernaciones. Tomo 2. 1894 – 1895.

A.G.N. Decretos Originales. Ministerio de Gobierno. Sección República. Fondo: Libros manuscritos leyes originales 1733-1937. Tomo 237. Año 1896.

Anales de la Cámara de Representantes. Bogotá, 1896.

Anales del Senado. Bogotá, 1896, 1897.

Diario Oficial. Bogotá, 1886, 1887, 1888, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896.

Registro Judicial de Cundinamarca. Bogotá, 1887, 1896.

Leyes de la República de Colombia expedidas por el Consejo Nacional Legislativo en sus sesiones de 1887. Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos. 1887, 1888.

ANEXOS

LEYES DE PRENSA: Compilación del periodo: 1886 – 1898

Anexo 1: Acuerdo sobre la reforma constitucional del Consejo Nacional Delegatario

Acuerdo sobre reforma Constitucional
El Consejo Nacional de Delegatarios
Considerando

Que es de urgente necesidad hacer conocer á la República del espíritu que domina á esta corporación en sus deliberaciones relativas á la reforma constitucional, expidiendo al efecto las bases y solicitando la tramitación con arreglo á las cuales ha de formarse y expedirse la nueva constitución de Colombia

Acuerda

I. Bases de la Reforma

9ª La Prensa será libre en tiempos de Paz, pero estará sujeta á responsabilidad cuando atente contra la honra de las personas, ó contra el orden social ó contra la tranquilidad pública.
10ª Las demás libertades individuales serán consignadas en la Constitución con razonables limitaciones.

Anexo 2: Artículo Constitucional 1886

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
TÍTULO 3
DE LOS DERECHOS CIVÍLES Y LAS GARANTÍAS SOCIALES

Artículo 42. La prensa es libre en tiempos de paz, pero responsable con arreglo a las leyes, cuando atente contra la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública

3. Artículo Transitorio "K"
Mientras no se expida ley de imprenta, el Gobierno queda facultado para reprimir y prevenir los abusos de la prensa.

Anexo 3: Decreto Ejecutivo 635 de 1886

DECRETO NÚMERO 635 DE 1886
(5 de Noviembre)

Sobre libertad de imprenta y juicios que se siguen por abusos de la misma

El Presidente de la República de Colombia

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno está facultado por la Constitución para prevenir y reprimir los abusos de la Prensa, mientras no se expida una ley de imprenta;
Que la libertad de la prensa, ejercida dentro de sus justos límites, es una de las más preciosas garantías; un poderoso apoyo de los Gobiernos honrados, y uno de los elementos más importantes del progreso de las Naciones,

DECRETA:

I
DELITOS DE IMPRENTA Y PENAS EN QUE POR ELLOS SE INCURRE

Art. 1° Declarase libre el uso de la imprenta; pero sujeto a responsabilidad cuando atente a la honra de las personas, al orden social ó á la tranquilidad pública.
Art. 2° Se atenta a la *honra de las personas* en cualquiera de los casos siguientes:
Caso 1° - Cuando se las calumnia.
Hay Calumnia:
Inciso 1° Cuando hay imputación de un hecho falso, que si fuera cierto, constituiría la comisión de un delito.
Inciso 2° Cuando hay imputación de un hecho falso, que de ser cierto, revelaría falta de moralidad en la persona á quien se imputa, y cuyas consecuencias serían el descrédito o la deshonra.
Caso 2° - Cuando se las injuria.
Hay injuria cuando de una persona se dice algo que, sin ser delito ni vicio, produce, según la opinión común ó más generalmente recibida entre las gentes del pueblo o distrito en donde reside, el efecto de hacerla despreciable, ó convertirla en objeto de mofa ó escarnio, ya sea ó no cierto aquello que se le imputa.
Caso 3° - Cuando se da publicidad á defectos, excesos o vicios puramente domésticos, que no están sujetos a pena por la ley: ó que aunque lo estén, pertenecen á la clase de los delitos que no pueden procederse de oficio.

Caso 4° - Cunado se litografían, imprimen ó se reproducen alegorías, caricaturas, emblemas ó alusiones que ponen en ridículo á las personas.
Art. 3° Se atenta al *orden social* en cualquiera de los casos siguientes:
Caso a 1° - Cuando se aconsejan o enaltecen los delitos o vicios, o se defienden o aplauden los delitos cometidos, o los actos vicios ejecutados.

Caso 2° - Cuando no da publicidad a actos que, aunque sean ciertos, son ofensivos al pudor, ya constituyan o no un delito.
Caso 3° - Cuando se litografían, imprimen o reproducen alegorías, caricaturas o emblemas obscenos.
Art. 4° - Se atenta a la tranquilidad publica cuando se excita a los individuos a desobedecer las leyes, o las ordenes de las autoridades legitimas, o a hacer contra esta, o cuando se enardecen las pasiones y se concita a los ciudadanos a los motines, las asonadas o la rebelión.
Art. 5° - Cuando no se atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad publica, en los términos de los Artículos 2°, 3° y 4° el ejercicio de la prensa no apareja responsabilidad alguna. En consecuencia:
Es permitido hacer públicos y censurar las notas que, siendo ciertos, constituyen la comisión de un delito, o revelan falta de moralidad en la persona que los ejecuta, quienquiera que sea; con excepción del caso 3° del Articulo 2° y del caso 2° del Articulo 3°.
En cualquiera denuncia que no se de, censura o impugnación que se haga, de conformidad con lo permitido en los dos apArt.es precedentes, no evitara el empleo de palabras injuriosas, lo cual no quiere decir que sea prohibido usar las que son propias del asunto de que se trate, o que se sirvan para dar mejor idea de su naturaleza.
Art. 6° - De todo impreso, son libro, folleto, periódico u hoja, remitirán los respectivos directores de los establecimientos tipográficos un ejemplar al Gobernador del Departamento, otro al Jefe superior de Policía del lugar en donde se halle el establecimiento tipográfico, y otro a la Biblioteca Nacional. La remisión de dichos ejemplares se hará en el acto mismo de poner en circulación el impreso.
La omisión en el cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo será castigada por el Gobernador o Jefe superior de Policía con multas de veinticinco a cincuenta pesos.
Art. 7° - Las publicaciones que se hagan a intervalos, sean o no rigurosamente periódicas, se suspenderán por el Jefe superior de Policía del lugar en donde se hagan; y se impedirá por la Policía la circulación de ellas, y la de los impresos, caricaturas o emblemas que se den a luz por una sola vez, cuando tales piezas sean voluntarias de alguno de los casos 2° y 3° del Articulo 3°.
Art. 8° La infracción de los Artículos 2°, 3° y 4° se castiga con las penas siguientes:
Cuando se viole el enciso 1°, caso 1° del Artículo 2, se impondrá multa de ciento cincuenta a doscientos pesos.

Cuando se viole el enciso 2°, del mismo caso 1° de que acaba de hablarse; o el caso 3° del Artículo 2°, se impondrá una multa de ciento a ciento cincuenta pesos.
Cuando se violan los casos 2° y 4° del mencionado Artículo 2°, se impondrá una multa de cincuenta a cien pesos.
Cuando se viole alguno de los casos del Artículo 3°, se impondrá un arresto de diez a quince días, y una multa de ciento cincuenta a doscientos pesos.
Cuando se viole el Artículo 4°, se impondrá un arresto de quince a treinta días, y una multa de doscientos a trescientos pesos.
Art. 9° Las multas satisfarán dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que se notifique la sentencia en que se imponen.
Cuando no se satisfaga la multa en el término indicado, se sufrirá la pena de arresto, en razón de un día por cada cinco pesos de multa.
Art. 10° Las reincidencias se castigaran con la pena correspondiente, aumentada con la tercera pArt.e de la anteriormente aplicada; y de esta manera se procederá en las nuevas reincidencias que ocurran, esto es, se aumentara la pena que corresponda con la tercera parte de la pena últimamente impuesta, aunque por este aumento se traspaso la maximum de la pena fijada en este Decreto.
Art. 11 Cuando la reincidencia se refiera a la violación del Articulo 4°, se aplicara la pena correspondiente, aumentada no ya con la tercera parte, sino con toda la pena impuesta anteriormente. También podrá imponerse, además, la pena de confinamiento de un Departamento a otro, por el término de un mes a un año.
Art. 12 De toda resolución condenatoria se dará cuenta en el periódico oficial del respectivo Departamento, en una Sección que llevara este titulo: “Resoluciones sobre juicios de imprenta”.
Para cumplir lo dispuesto en el inciso precedente, se expresara en general la clase del delito, sin entrar en detalles, la pena impuesta y el nombre del acusado.

II
PERSONAS RESPONSABLES

Art. 13 Por regla general, es el impresor el responsable de todo abuso de la libertad de imprenta, esto es, el director del establecimiento tipográfico en donde se hubiera hecho la publicación acusada. Dicho director queda, en consecuencia, sujeto a las penas a que haya lugar conforme a este Decreto.
El director de un establecimiento litográfico es también su caso, la persona responsable.
Art. 14 Para hacer efectiva la responsabilidad por los abusos de la prensa, se ordena:
1° Que todo impresor o director de establecimiento tipográfico constituya, ante el Gobernador del respectivo Departamento, una fianza en cantidad de quinientos a dos mil pesos, proporcional al valor de la imprenta, de persona abonada y vecina del lugar en donde se encuentre el establecimiento tipográfico. De la constitución

de la confianza no dejara la debida constancia en una diligencia que se extenderá en la Gobernación, en un libro destinado a ello.
Los litógrafos, o directores de establecimientos litográficos, quedan sujetos a lo que dispone el inciso anterior, pero la cantidad de la fianza será únicamente de doscientos a quinientos pesos.
2° Que en todo impreso conste el establecimiento tipográfico en donde se ha hecho la impresión, y la fecha de ésta. El establecimiento tipográfico se designará por el nombre y apellido del empresario, y si éste fuera una compañía, se designará el nombre del socio que asume la responsabilidad.
Art. 15 Los impresores o litógrafos que no den la fianza de que habla el número 1° del Articulo anterior, y fueren condenados a pagar una multa de conformidad con lo establecido en este Decreto, serán presos y sufrirán la pena en razón de un día de prisión por cada cinco pesos de multa; a menos que en el acto de la intimación de la orden de prisión paguen la multa a que hayan sido condenados, aumentada en una tercera parte.
Art. 16 La infracción de lo dispuesto en el número 2° del Artículo 14, sujeta al empresario del respectivo establecimiento tipográfico a pagar una multa de ciento a doscientos pesos, que impondrá el jefe superior de policía de la cabecera de la Provincia, inmediatamente que notare la falta.
Si el impresor no pagare la multa dentro las veinticuatro horas siguientes a la notificación del auto de imposición, será reducido a prisión y mantenido en ella, en razón de un día por cada cinco pesos de multa.
Art. 17 Para las publicaciones periódicas puede haber un editor responsable; y si lo hubiere, quedará libre de toda responsabilidad el impresor, pero es indispensable, para que esto suceda, que el editor dé una fianza en calidad de quinientos pesos, de la manera como respecto del impresor se dispone. También debe constar en el periódico el nombre del editor.
Art. 18 Se concede derecho al impresor o editor, respectivamente, para demandar en la forma ordinaria, del autor de la publicación, la indemnización de las multas que hubieren pagado y la de todos los perjuicios sufridos a consecuencia de una condenación, siempre que el autor de la publicación haya sido citado oportunamente, a virtud de la denuncia de que habla el Artículo 42. La pena de prisión sufrida se indemnizará en razón de cinco pesos por cada día de prisión.
El derecho de que trata este Artículo prescribe a los treinta días siguientes a la fecha de la sentencia.

III
QUE PERSONAS PUEDEN ACUSAR Y DENTRO DE QUE TÉRMINO

Art. 19 En los atentados a la honra de las personas pueden acusar: la persona ofendida, su consorte y parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad.

Si el ofendido fuere un empleado público, en su carácter de tal, o con motivo del ejercicio de sus funciones, también puede acusar el Ministerio Pública, previa excitación de aquel, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, y de que la persona ofendida y sus parientes en los grados indicados puedan cooperar a la acusación.
En los atentados al orden social, de que habla el Artículo 3º, el Ministerio Público debe acusar de oficio. También se concede, respecto de tales atentados, acción popular.
En los atentados a la tranquilidad pública debe acusar el Ministerio Público, previa excitación del Gobernador del Departamento.
Para que el Gobernador pueda hacer la excitación de la que se habla, es preciso que así se resuelva por mayoría de votos en un consejo que se formará del mismo Gobernador, de su Secretario de Gobierno, y del Fiscal del Tribunal Superior. De la resolución que se dicte quedará constancia en un libro que al efecto se llevará; se expresarán allí mismo los votos afirmativos y negativos que hubiere habido, con expresión de los nombres de las personas que los hubieren emitido, y se firmará la diligencia por todos los miembros del Consejo.
Art. 20 El derecho de acusar en los atentados a la honra de las personas, al orden social y a la tranquilidad pública, prescribe respectivamente a los noventa, ciento veinte y sesenta días de la fecha que tenga el impreso.

IV
JURADO

Art. 21 Habrá un Jurado compuesto de cinco individuos que conocerá en los delitos de imprenta de que habla el Artículo 31, número 2º.
El Jurado se reunirá en el despacho del Juez que conozca de la acusación, o en el lugar que este designare.
El Jurado se compondrá de esta manera:
En cada ciudad cabecera de provincia se formará una lista de Designados, quienes deberán tener las condiciones siguientes: estar en ejercicio de la ciudadanía, conforme a la Constitución; ser vecinos de la misma Ciudad; saber leer y escribir; y no ser mayores de setenta años.
En la ciudad de Bogotá la lista constará de cincuenta individuos; en las capitales de Departamentos, cabeceras de Provincia, de cuarenta individuos; y en las simples cabeceras de Provincia, de treinta. Cada lista será formada por una Junta que se compondrá de la primera autoridad política de la Provincia – en las capitales de los Departamentos, del Gobernador respectivo – de los jueces del circuito que residen en la ciudad cabecera de la misma Provincia y que conozcan en los asuntos criminales, y del Presidente del Consejo municipal de la ciudad. La autoridad política presidirá la junta.
Dicha lista se formará nuevamente en el mes de diciembre de cada año.

En un libro que se abrirá al efecto en el Despacho de la autoridad política, se extenderá una diligencia en el que conste la instalación de la Junta, y los nombres y los apellidos de que se compone la lista, diligencia que será firmada por todos los miembros de la Junta.

A cada uno de los jueces de Circuito en asuntos criminales, que residan en la misma ciudad, se remitirá un ejemplar auténtico de la lista, que se fijará en la Secretaría del Juzgado. También se remitirá un ejemplar auténtico de la lista, que se fijará en la Secretaría del Juzgado. También se remitirá a cada uno de dichos Jueces el número correspondiente de bolas marcadas cada una con un número de la serie de uno a treinta, uno a cuarenta, ó uno a cincuenta, respectivamente.

Art. 22 Cualquier individuo que figure en la lista de que habla el Artículo anterior, no debiendo figurar en ella por no tener las condiciones requeridas por el mismo Artículo, puede pedir la eliminación de su nombre. Esta petición debe dirigirse a la primera autoridad política de la Provincia, quien convocará a salón a los demás miembros de la Junta, y si esta hallare fundada la solicitud, ordenará la eliminación pedida y designará el correspondiente reemplazo.

Art. 23 Son impedimentos para desempeñar el cargo de Jurado en determinado juicio: 1º Ser procesado, acusador u ofendido por el delito que se trata de calificar o pariente de alguna de estas personas dentro del cuarto grado civil de consanguinidad ó segundo de afinidad. 2º Ser ascendiente, descendiente o hermano de otro que haya sido sorteado para ejercer el cargo de Jurado en el mismo juicio, y 3º ser amigo íntimo o enemigo capital del acusado, o del acusador.

Art. 24 Todo individuo que figure como designado en la lista de que habla el Artículo 21, está en el deber de desempeñar el cargo de jurado, siempre que se le cite, a menos que el Juez lo declare impedido; o que acredite estar imposibilitado para asistir por hallarse enfermo, o por estar en peligro de muerte próxima, su consorte, padre, madre o hijo, o no haber pasado seis días después de la defunción de cualquiera de estas personas.

Art. 25 El individuo que no se halle en ninguno de los casos del Artículo anterior, o a quien no se haya declarado impedido, si dejara de asistir a la hora para la cual se le haya citado, incurrirá en una multa de cincuenta pesos, que le impondrá el Juez, pero, podrá relevársele de ella si comprueba, dentro de tercero día después de que se le notifique el auto sobre imposición de la multa, que se hallaba en alguno de los casos del Artículo 24. El individuo que no satisfaga la multa en el acto en que se le notifique el auto en que se le impone, o en que se declare que no esta probada la excusa alegada, será reducido a prisión por cinco días.

Art. 26 Para formar un jurado, se hará un sorteo que se verificará así: se contarán e insacularán por el Secretario del Juzgado, a presencia del Juez y de las partes, las bola numeradas de que se ha hablado y que deben corresponder a los individuos que figuran en la lista, en la cual cada nombre debe ir precedido de un número de los de la respectiva serie. No se insacularán las bolas que correspondan a individuos notoriamente impedidos.

El sorteo se hará siempre en sesión pública, y el Juez mismo extraerá del saco once bolas.
El acusador y el acusado podrán recusar libremente, cada uno, dos Jurados. Si acusador y acusado usasen de este derecho, se insacularán las siete bolas restantes y se extraerán a la suerte: las cinco primeras designarán los jurados principales; las otras dos los suplentes, quienes funcionarán en el orden que también designe la suerte. Si el acusador, o el acusado, o ambos no hicieren uso del derecho de recusar, se insacularán las bolas restantes, o todas las ya extraídas, y se procederá como queda dispuesto.
Art. 27 A cada Jurado se le notificará inmediatamente su elección, y se le hará saber el lugar en donde debe presentarse, y el día y la hora.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de la citación, expondrán los jurados el impedimento que les asista, debiendo presentar dentro del mismo término la prueba sumaria que acredita el impedimento que se alega. El juez dictará inmediatamente la resolución a que haya lugar.
Art. 28 A los jurados que se encuentren en algunos de los casos de que hablan los Artículos 23 y 24, ó que estuvieren ausentes, se les reemplazará sacando a la suerte tantas bolas cuantos sean los Jurados que deben ser reemplazados, más dos.
En este sorteo el acusador y el acusado pueden recusar cada uno un Jurado. Si no lo recusaren, se procederá de una manera análoga al establecida en el Artículo 26.
En este segundo u otros sorteos no se insacularán las bolas correspondientes a los elegidos, impedidos, recusados y ausentes.
Art. 29 Si a la hora señalada no pudiere instalarse el Jurado por faltar uno o mas de los designados como principales, se reemplazará a estos con los dos suplentes de que se ha hablado; y si aún así no pudiere reunirse el Jurado por faltar uno o más de los principales, o uno o ambos suplentes, se procederá a los sorteos de que habla el Artículo anterior.
Si los suplentes no comparecieren a la hora para que se les haya citado, serán castigados como los principales, aún cuando no haya sido necesaria la presencia de aquellos para la instalación del Jurado.

V
MODO DE PROCEDER EN LOS JUICIOS DE IMPRENTA

DISPOCISIONES GENERALES

Art. 30 Cuando se proceda por infracción de los Artículos 2º o 5º, los Jurados de imprenta se entablarán y seguirán en la cabecera de la Provincia a que pertenezca el lugar en donde se ha hecho la impresión, aunque el responsable resida en otra jurisdicción
Art. 31 Son competentes para conocer en los juicios de imprenta:

1º El Juez del circuito de la cabecera de la Provincia respectiva; a quien esté atribuido el juzgamiento de los asuntos criminales, conocerá por si solo cuando se trate de la violación del inciso 1º, caso 1º, Artículo 2º de este decreto.
Si hubiere más de un juez en dicha cabecera, conocerá aquel a quien designe la suerte; el sorteo lo verificará el Juez mismo a quien se presente el escrito de acusación, de que trata el Artículo siguiente, y lo verificará en el acto de la presentación.
2º El mismo Juez de que acaba de hablarse conocerá con intervención del Jurado cuando se trate de la violación del inciso 2º, caso 1º, Artículo 2º, o de alguno de los casos 2º, 3º, y 4º del mismo Artículo 2º, o de alguno de los casos del Artículo 3º.
3º Los tribunales superiores del distrito Judicial conocerán en calidad de jurados y con intervención de conjueces cuando se trate de la violación del Artículo 4º.
Art. 32 El acusador presentará su acusación por escrito al Juez o Presidente del tribunal de Distrito correspondiente; acompañará un ejemplar del impreso a que se refiere la acusación; designará el pasaje o pasajes que acusa, y citará el Artículo y caso que estima infringidos.
Cuando la infracción se refiera al caso 4º del Artículo 2º, o al 3º del Artículo 3º también se acompañará al escrito de acusación un ejemplar de la caricatura, alegoría o emblema de que se trate.
Art. 33 El funcionario competente a quien se presente el escrito de acusación, lo examinará en el mismo acto, después del repartimiento, y si le faltara alguno de los requisitos exigidos en el Artículo anterior, lo expresará con toda claridad en un auto y devolverá el escrito a quien lo haya presentado para que subsane la causa.
Art. 34 Si el escrito de acusación estuviere en debida forma, ó cuando el defecto notado estuviere ya reparado, el funcionario hará comparecer ante el, en el mismo día si fuere posible, y de no serlo, en el siguiente hábil, al impresor o editor o litógrafo acusado, cuyo nombre debe constar, de conformidad con lo ya dispuesto, en el periódico o el impreso presentados.
Si no constare en el impreso el nombre del impresor, o del editor si fuere el caso, se harán de oficio o a solicitud de parte, por el mismo funcionario, todas las investigaciones conducentes al descubrimiento del responsable, que lo es el impresor que hubiere hecho la publicación. Conocido ya este, se seguirá con él el Juicio y se dará cuenta de lo ocurrido al jefe superior de policía para los efectos del Artículo 16.
Si se comprobare de forma legal que el impresor ha omitido en un impreso el nombre de la imprenta, el lugar o la fecha, o que falta a la verdad al hacer estas designaciones, se le castigará con una multa de quinientos a mil pesos, que le impondrá el mencionado jefe de policía.
Art. 35 Si el impresor, o editor, o litógrafo, a quienes se hubiere citado para comparecer, no lo verificaren, se dará curso al juicio, sin perjuicio de que tales personas puedan presentarse luego, en cualquiera estado de aquel, pero sin retrotraer sus términos.

No se obligará a comparecer a las personas que se hallen en imposibilidad de hacerlo por enfermedad; acreditado el impedimento, el funcionario que conoce, les ordenará que constituyan defensor, y de no constituirlo, lo nombrará de oficio el mismo funcionario.

Art. 36 Verificada la comparecencia del sindicado, se le pondrá de manifiesto el escrito de la acusación y el impreso, alegoría o emblema presentados por el acusador.

Art. 37 Cuando se proceda por infracción del inciso 1º, caso 1º, Artículo 2º, o de los Artículos 3º y 4º, el aludido dará una fianza de persona abonada que estará a las resultas del juicio. La cuantía de la fianza será de ciento a quinientos pesos.

Art. 38 Durante el término probatorio que se conceda, y antes de la hora, de la audiencia, cada parte puede tachar los testigos de la contraria y probar las tachas.

Las tachas probadas, no son, sin embargo, motivo suficiente para la exclusión absoluta de un testimonio, ellas no producen otro efecto que hacer más o menos sospechoso el testimonio del testigo tachado, en atención a la naturaleza de la tacha comprobada. Una tacha comprobada es apenas un hecho afirmativo, cuya importancia debe graduar el Juez que estima la prueba.

Art. 39 Se reconocen tres grados para la calificación de los delitos:

Cuando el delito se califique en primer grado, se debe aplicar el maximum de la pena, si se califica en segundo, el termino medio entre el maximum y el mínimum; y si en tercero, el mínimum.

Art. 40 Cuando en un proceso haya constancia de la reincidencia, el Juez o el Presidente del Tribunal, respectivamente, cumplirán lo dispuesto en los Artículos 10 y 11 de este decreto.

PARAGRAFO PRIMERO

INCISO 1º, CASO 1º, ARTÍCULO 2º

Art. 41 Cuando se proceda por infracción del inciso 1º, caso 1º, Artículo 2º, el Juez examinará si el hecho imputado está erigido en delito conforme al Código Penal. Si no lo estuviere, así lo declarará en un auto que se publicará en el periódico oficial del departamento. Contra esa resolución no hay otro recurso que el de queja.

Art. 42 Si el hecho imputado está erigido en delito, el Juez dará cumplimiento a los Artículos 34 a 36. En el mismo acto de la comparecencia de que habla este último Artículo, deberán el impresor o editor, en su caso, dar el nombre del autor de la publicación acusada, si tienen a bien darla, con indicación de su casa de habitación o el sitio donde reside en la misma ciudad. Si esto se hiciere, el Juez ordenará que se cite al individuo denunciado para que comparezca, si quiere, al despacho del juzgado. La comparecencia debe tener lugar al día siguiente hábil, y en el auto en que se ordene la citación se expresará la hora en la que el acusado debe presentarse. A la misma hora deben también concurrir el impresor y el editor

ya citados. La comparecencia del autor de la publicación tiene por objeto que se haga parte en el juicio para los efectos del Artículo 18.

Art. 43 Si el autor de la publicación acusada se presentare a la hora debida, el Juez le dará conocimiento del escrito de acusación y del impreso presentado.

En el mismo día en que se habla, o en el anterior, si no se ha denunciado al autor del impreso, podrán solicitar el impresor, o editor o autor, término probatorio para acreditar la verdad del hecho imputado en la publicación acusada. El Juez concederá seis días de término, con calidad de comunes, para que las partes presenten pruebas. Las pruebas se practicarán con capacitación contraria, si las partes ocurren oportunamente al juzgado a recibir las notificaciones, si esto no hicieren, se prescindirá de llevar a efecto la citación.

El auto sobre concesión de término probatorio se notificará personalmente, pero si pasare un día sin que las partes se presenten en el juzgado, el auto se notificará por un edicto que permanecerá fijado por veinticuatro horas.

Art. 44 En el mismo auto en que se conceda el término probatorio se señalará día y hora para la audiencia; el día que se señale no será anterior al tercero ni posterior al sexto, a partir del siguiente al en que se venza dicho término probatorio.

Art. 45 Si no se hubiere solicitado término probatorio, el Juez, en el mismo día en que ha debido solicitarle, señalará para audiencia uno de los tres días siguientes.

Art. 46 Abierta la audiencia, que será pública, el secretario leerá el escrito de acusación y la publicación denunciada. El Juez dará luego la palabra, sucesivamente, a cada una de las partes, hasta por dos veces, comenzando por el acusado.

Si el acusado rehusare el uso de l apalabra por primera vez, o si hiciere uso de ella, pero sin entrar en el fondo, de manera que el acusador no tenga asunto sobre que replicar, el Juez concederá al acusado el uso de la palabra por tercera vez. Lo dispuesto en este inciso no tiene lugar si el acusador ha renunciado también al uso de la palabra.

Art. 47 El Juez dictará sentencia dentro de los tres días después del en que termine la audiencia teniendo en consideración las siguientes prescripciones:

1ª Si el acusado probare la verdad del hecho mencionado en el impreso, y a que se refiere la acusación, el Juez declarará que esta es infundada. Si por el delito que por su existencia ha comprobado el acusado se puede proceder de oficio contra el acusador, el Juez cumplirá los deberes que le imponen las leyes, pero si no pudiere procederse de oficio, el Juez impondrá al acusador cien pesos de multa.

2ª Si el acusado no probare la verdad del hecho que en el impreso denunciado imputa al acusador, o por lo menos no presentare dos testigos idóneos en apoyo de su afirmación, será declarado calumniante y penado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8º, inciso 2º.

El Juez, graduará la pena teniendo en cuenta la gravedad de la calumnia y lo dispuesto en el Artículo 39.

3ª Cuando el acusado presentare los dos testigos idóneos de que se ha hablado, el Juez en la sentencia hará mención de la naturaleza y mérito probatorio de las contrapruebas en que funda su resolución.
Son testigos idóneos los que se hallan en ejercicio de la ciudadanía y sean hábiles conforme a los Artículos 1,585 y 1,586 del código judicial.
Art. 48 Contra le sentencia del Juez hay lugar a recurso de apelación para ante el respectivo Tribunal superior, siempre que el recurso se interponga en al auto de la notificación de la sentencia, o dentro de las veinticuatro horas siguientes.
En el Tribunal superior se sustanciará el recurso de apelación como el de todo acto interlocutorio, pero el término para resolver es de seis días.

PARÁGRAFO SEGUNDO

INCISO 2º, - CASO 1º, - ARTÍCULO 2º

Art. 49 Cuando se proceda por infracción del inciso 2º, caso 1º, Artículo 2º, se observará lo dispuesto en los Artículos 42 y 43, y también en lo prescrito en los Artículos 34 a 36.
En el mismo auto en que se concede término probatorio se señalará uno de los tres días siguientes al vencimiento de dicho término para el sorteo de los jurados, que se verificará como se ha dispuesto, previa verificación de la hora. En el mismo auto se señalará también el día y la hora de la audiencia; dicho día no será anterior al tercero ni posterior al sexto, a partir de aquel en que se haya verificado el sorteo.
Art. 50 Si no se hubiere solicitado término probatorio, el Juez, en el mismo día en que ha debido solicitarla, señalará dentro de los tres días siguientes para el sorteo de los jurados, con designación de la hora. También señalará en el mismo auto día y hora para la audiencia, designación que hará como se dispone en la parte final del Artículo anterior.
Art. 51 El Juez abrirá la audiencia que será publicada; el la presidirá y exigirá de los jurados el siguiente juramento:
"¿Juráis por Dios y por vuestro honor cumplir fielmente vuestros deberes?" Los Jurados responderán: "Si juramos". El Juez añadirá: "Si así lo hicieres, Dios os premie; y si no, os lo demande"
Art. 52 El secretario dará lectura al proceso, comenzando por el escrito de acusación; y el Juez dará cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 46.
Art. 53 Terminada la audiencia, el Juez hará que los jurados nombren, de entre ellos mismos, un Presidente y un Secretario. Verificado lo cual, el Juez pondrá en manos del Presidente, formuladas como aquí se dispone, las cuestiones que debe resolver el Jurado.
Art. 54 El Jurado se constituirá en sesión privada. A sus deliberaciones concurrirá el Juez, quien hará las indicaciones que a bien tenga, y contestará las preguntas

que los Jurados le hicieren. Le es absolutamente prohibido al Juez ejercer sobre el Jurado o sobre cualquiera de sus miembros coacción alguna.
Art. 55 Las cuestiones deben formularse de la manera siguiente:
1º ¿Producen descrédito o deshonra las imputaciones del impreso acusado, y a que se refiere el acusador en su escrito de acusación?
2º ¿Está probada la verdad de las mencionadas imputaciones?
3º ¿En que grado debe calificarse el delito?
Si el Jurado resolviere negativamente la primera cuestión, no resolverá las demás; pero si resolviere afirmativamente dicha cuestión, se ocupará en la consideración de la segunda.
Si resolviere negativamente la segunda cuestión, se ocupará en la resolución de la tercera y determinará el grado del delito, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 39.
Si resolviere afirmativamente la segunda cuestión, no resolverá el Jurado la tercera.
Art. 56 Resueltas por el Jurado las cuestiones propuestas, o la que en conformidad a lo dispuesto debe resolver, el Juez dictará sentencia arreglándose a las prescripciones siguientes:
1ª Si el Jurado resuelve que las imputaciones hechas no producen descrédito o deshonra; o que producen descrédito o deshonra, pero que está probado que son verdaderas, el Juez declarará infundada la acusación, y condenará al acusador al pago de cien pesos de multa, si se ha probado que las acusaciones son verdaderas.
2ª Si el Jurado resuelve que las imputaciones hechas producen descrédito o deshonra y que no se ha dado la prueba de que son verdaderas, el Juez declarará fundada la acusación e impondrá al responsable la pena debida.

PARÁGRAFO TERCERO

CASOS 2º, 3º Y 4º DEL ARTÍCULO 2º, Y ARTÍCULO 3º

Art. 57 Cuando se proceda por infracción de los casos 2º, 3º y 4º del Artículo 2º, o de los tres caso del Artículo 3º, o de alguno de ellos, se procederá de la manera prescrita en los Artículos 49 a 54 inclusive, y Artículos mencionados en los mismos, pero se tendrán en cuenta las siguientes modificaciones:
1ª No se concederá término probatorio sino cuando el editor o impresor pretenda excusarse de la responsabilidad consiguiente por haber habido alteración en el nombre de la imprenta, el lugar o la fecha.
2ª En esta clase de juicios, menos cuando se proceda por infracción del caso 1º del Artículo 3º, no será pública la audiencia; únicamente concurrirán a ella las personas que la constituyen necesariamente; los defensores del acusado y los apoderados del acusador, cuyo número, ya se trate de defensores, ya de apoderados, no puede pasar de tres, respecto de cada parte; los testigos

mencionados en el proceso, y hasta cuatro testigos más, aún no mencionados, y que puede presentar cada parte el día de la audiencia.

Art. 58. Las cuestiones deben formularse de la manera siguiente; pero debe tenerse en cuenta que la redacción de la primera cuestión no es uniforme, pues ella varía según el caso de que se trate:

1º El pasaje o pasajes del impreso denunciado ¿producen, según la opinión común o más generalmente recibida entre las gentes del pueblo o distrito en donde reside el acusador (aquí el nombre del pueblo o distrito), el efecto de hacer despreciable a la persona ofendida, o de convertirla en objeto de mofa o ridículo? ó

La alegoría, caricatura o emblema presentados, ¿ponen en ridículo a la persona de (aquí el nombre de la persona de quien se trate) ó

En el impreso acusado y pasajes denunciados ¿se aconsejan o enaltecen los delitos o vicios, o se defienden o aplauden los delitos cometidos, o los actos viciosos ejecutados? o

¿Son ofensivos al pudor los actos mencionados en el impreso y mencionado por el acusador?

2ª ¿En que grado debe calificarse el delito?

Resuelta negativamente la primera cuestión, no se resolverá la segunda.

Si se resuelve afirmativamente la primera cuestión, debe resolverse la segunda, y al hacerlo se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 39.

Art. 59. Resueltas por el Jurado las cuestiones propuestas, o la que en conformidad a lo dispuesto debe resolver, el Juez dictará sentencia, arreglándose á las siguientes prescripciones:

1ª Si el Jurado resuelve afirmativamente la primera cuestión, declarará fundada la acusación, e impondrá al responsable la pena correspondiente, debiendo el Juez tener en consideración la manera como el Jurado haya resuelto la segunda cuestión.

Art. 60. En los atentados a la honra de las personas, puede el ofendido, conocido que sea el autor del escrito, dirigir contra el directamente la acusación; y puede también desistir de la acusación intentada contra el impresor o editor y dirigirla contra aquel. Si esto último sucediere, el impresor o editor quedará exentos de responsabilidad y no podrá promoverse contra ellos nueva acusación, a menos que el individuo designado como autor de la publicación, por el editor o impresor, acredite que no lo es.

Art. 61. Dirigida una acusación contra el autor de una publicación, a virtud del permiso que otorga el Artículo precedente, puede el acusador solicitar simplemente *una declaración de improvidad,* y entonces no se impondrá al delincuente la pena de multa.

La declaración de improbidad se reducirá a expresar, si no hubiere prueba que justifique lo contrario, que el individuo acusado es *calumniante,* si la imputación hecha es calumniosa, o que es *reo de libelo infamatorio,* si la imputación fuere injuriosa.

De la indicada declaración se dará conocimiento al público, con expresión del nombre del delincuente, insertándola en dos de los periódicos del lugar, y por medio de carteles que se fijarán en las paredes más públicas del mismo, todo a costa del acusado, quien deberá consignar ante el Juez de la causa la cantidad de pesos que se causare a deber, y caso de no verificarlo, será reducido a prisión por cinco días.

PARÁGRAFO CUARTO

ARTÍCULO 4º

Art. 62. De los juicios que se sigan para hacer efectiva la responsabilidad en que se haya incurrido por violación del Art.ículo 4º de este decreto, conocerán, como se ha dicho en el inciso marcado con el número 3º del Artículo 31, los Tribunales de Distrito, en calidad de Jurados y con intervención de Conjueces.
El Tribunal de Distrito competente para conocer es el del Departamento a que perteneciere el en donde se hubiere hecho la publicación, aun cuando el responsable resida en otra jurisdicción.
Art. 63. La lista de Conjueces que debe formarse en los tribunales, de conformidad con lo dispuesto por las leyes, se aumentará, para los efectos de este decreto, con los nombres de diez ciudadanos en quienes concurran las cualidades que deben tener los Conjueces. Dicho aumento se verificará cada vez que se forme nueva lista de Conjueces.
Art. 64. Todo individuo que figure en la lista de que acaba de hablarse, está en el deber de desempeñar el cargo de Jurado, y le es aplicable lo que respecto de los otros Jurados se dispuso en los Artículos 24 y 25.
Art. 65. El presidente del Tribunal cumplirá los deberes que en dichos Artículos se atribuyen al Juez.
Art. 66. El Jurado que debe conocer en los delitos por violación del Artículo 4º se compondrá de todos los Magistrados del Tribunal respectivo, y de tantos Conjueces como Magistrados haya más un Conjuez.
El sorteo de hará siempre por el Presidente del Tribunal, en sesión pública, quien extraerá del saco que contenga las bolas correspondientes al numero total de Conjueces, tantas como sean los que deben sortearse, de conformidad con lo ya dispuesto. El Presidente extraerá, además, cuatro bolas para los efectos del inciso siguiente.
El acusado puede recusar dos Magistrados y dos Conjueces. Si no hiciere uso de este derecho o lo usare parcialmente, entonces se insacularán las bolas ya extraídas, o el resto de ellas, y se sacarán a la suerte tantas cuantas sean necesarias para formar el Jurado.
En cuanto a la citación de los Conjueces, sus impedimentos y modo de reemplazarlos, se procederá como se dispone respecto de los otros jurados.

Art. 67. Para que el Ministerio público pueda hacer uso de la libertad de acusar, de que habla el inciso 4º del Artículo 19, es indispensable que al escrito de acusación acompañe la comunicación del Gobernador del Departamento en que se le excita a ello.

Art. 68. Presentada una acusación, el Presidente del Tribunal dará cumplimiento a los Artículos 33 a 37, en cuanto son aplicables a este caso.

En el mismo día en que se verifique la comparecencia del sindicado, se señalará uno de los tres siguientes para el sorteo de los Conjueces, con designación de la hora. En el mismo auto en que tal señalamiento se haga, se fijará el día y la hora para la audiencia; dicho día no será anterior al tercio ni posterior al sexto, a pArt.ir de aquel en que se haya verificado el sorteo.

Art. 69. El Presidente abrirá la audiencia, que será publicada, y la presidirá; y después de haber jurado cumplir con sus deberes, exigirá de todos los demás miembros del Jurado el siguiente juramento:

"¿Juráis por Dios y vuestro honor cumplir fielmente sus deberes?" Los Jurados responderán "Si juramos", el Presidente añadirá "Si así lo hicieres, Dios os premie, y si no, os lo demande"

Art. 70. La audiencia se verificará de la manera dispuesta en al Artículo 52, y se cumplirá lo prescrito en el Artículo 46.

Art. 71. Las partes gozarán de libertad en el uso de la palabra.

Art. 72. Terminada la audiencia, el Jurado se constituirá en sesión privada, y el Presidente presentará estas cuestiones:

1ª En el impreso o impresos acusados, ¿Se ha infringido el Artículo 4º del Artículo del 5 de Noviembre de 1886, "sobre libertad de imprenta"?

2ª En que grado debe calificarse el delito.

Cuando en el proceso conste la reincidencia, se formularán estas cuestiones:

3ª ¿Debe aplicarse la pena de confinamiento?

4ª ¿A que Departamento debe confinarse el delincuente y durante cuanto tiempo?

Art. 73. No se considerará resuelta afirmativamente la primera cuestión sino en tanto que así lo declaren las dos terceras partes de los votantes.

Las demás cuestiones serán resueltas por simple mayoría absoluta.

Art. 74. Resuelta negativamente la primera cuestión, no hay necesidad de resolver las siguientes.

Si se resuelve afirmativamente la primera cuestión, se resolverá la segunda; y en caso de reincidencia se resolverá la 3ª y la 4ª.

Art. 75. Resueltas las cuestiones, el Presidente del Tribunal, dictará en el acto mismo sentencia, en conformidad con las soluciones dadas y con lo dispuesto en el presente Decreto.

Art. 76. En caso de que se imponga la pena de confinamiento, el Gobierno podrá conmutar esta por arresto, en razón de un día de arresto por cada cinco de confinamiento.

No se designará para confinamiento un lugar insalubre.

Si el confinado prefiere ausentarse del país, se le permitirá hacerlo durante un tiempo prudencial, permaneciendo arrestado, entretanto no diere fianza de cárcel.
Art. 77. En caso de condenación por infracción del Artículo 4º, podrá el Gobierno, en cualquier tiempo, dictar decreto de amnistía.
Art. 78. El Gobierno se reserva la facultad de suspender toda publicación que juzgue violatoria de los Artículos 2º, 3º, y 4º de este Decreto, previo dictamen afirmativo del Consejo de Ministros.

Dado en Bogotá a 5 de Noviembre de 1888

J.M. CAMPO SERRANO

El Ministro de Gobierno,
ARISTIDES CALDERÓN

Anexo 4: Decreto No. 734 del 24 de diciembre de 1886

MINISTERIO DE GOBIERNO

DECRETO NO 734 DE 1886 (24 de diciembre)

Por el cual se reforma el Articulo 78 del Decreto numero 635 del presente año.

El Presidente de la Republica

DECRETA

El Gobierno se reserva únicamente la facultad de suspender toda publicación que juzgue violatoria del Artículo 4o. del decreto sobre libertad de imprenta y juicios que se siguen por abusos de la misma.

Queda en estos términos reformado el Art. 78 del decreto mencionado.
Publíquese,

Dado en Bogota, a 24 de Diciembre de 1886

JM CAMPO SERRANO.

El ministro de gobierno,
ARISTIDES CALDERON”

Anexo 5: Decreto No. 779 del 19 de diciembre de 1887

DECRETO 779 DE 1887.
(19 DE DICIEMBRE)

En desarrollo del Artículo 42 de la Constitución y en cumplimiento del Artículo K transitorio de la misma

El Presidente de la república de Colombia
DECRETA

Art. 1º, En observancia del Artículo 42 de la Constitución, y por estar la República en paz, se declara libre el ejercicio de la Prensa, con las restricciones que el mismo Artículo establece.
Art. 2º A este efecto se declara de nuevo, en toda su fuerza y vigor el Decreto del Poder Ejecutivo número 635 de 5 de Noviembre de 1886, menos en su Artículo último ó 78, el cual se deroga expresamente por el presente Decreto. En consecuencia, y mientras la ley no disponga otra cosa, no se suspenderán en ningún caso las publicaciones de la prensa, sino que deberá castigarse oportuna y eficazmente á los que abusen de ella.
Art. 3º Es entendido que por el Decreto de 5 de noviembre de 1886, antes citado, y por el presente, quedan cumplidos los efectos del Artículo K transitorio de la Constitución.
Art. 4º Se excita al señor Procurador General de la Nación y a todos los Agentes del Ministerio Público á que procuren con la mayor diligencia que no queden impunes las violaciones que, en uso de la libertad de imprenta, tengan lugar contra lo establecido en el Artículo 42 de la Constitución, y cuiden, concurriendo con la voz de la vindicta pública de que las prescripciones de los Decretos del Gobierno tengan fiel y exacto cumplimiento.

Dado en Bogotá, á 19 de Noviembre de 1887.

ELISEO PAYÁN.
El Ministro de Gobierno,
FELIPE F. PAÚL.

Anexo 6: Decreto No. 151 del 17 de Febrero de 1888

DECRETO NÚMERO 151
(17 de Febrero)

Sobre imprenta.
El Presidente de la República

CONSIDERANDO:

1° Que la Constitución Nacional (Artículo 42) protege "la honra de las personas, la tranquilidad pública y el orden social," contra los abusos de la prensa;
2° Que el Código Penal vigente, de conformidad con la legislación actual de todas las naciones cultas, reconoce, especialmente en los Artículos 138, 141, 209 y 578 á 592, que la palabra y la imprenta pueden ser instrumento de delincuencia contra el Estado y contra los particulares, y que los delitos y culpas que por tales medios se cometen deben ser prevenidos y reprimidos; '"
3° Que el Artículo constitucional transitorio K confiere al Gobierno "la facultad de prevenir y reprimir los abusos de la prensa", " mientras no se expida la ley de imprenta ", y no habiéndola expedido el Cuerpo Legislativo, el Gobierno no puede dejar de cumplir con este deber claro y terminante;
4° Que el juicio de controversias entre particulares corresponde al Poder Judicial, mientras que la conservación del Orden social y de la paz pública está especialmente encomendada al Gobierno;
5° Que la equidad y conveniencia de la legislación de imprenta estriban principalmente en la exacta definición dé deberes y derechos y en la justa distribución de responsabilidades,

DECRETA

I— Preliminar.

Art. 1° Los delitos y culpas que se cometen por medio de la, prensa se dividen en dos clases:
1.* Delitos y culpas contra la sociedad; y
2.* Delitos y culpas contra particulares.
Son publicaciones *subversivas* las que dañan ó alarman á la sociedad, y publicaciones *ofensivas* las que vulneran derechos individuales.
Art. 2° La intervención del Gobierno, como asunto de alta, policía, en la regulación del ejercicio de la prensa, se refiere á las publicaciones subversivas y á la responsabilidad personal dé los impresores; sin perjuicio de que por la vía judicial se exija á los' autores la responsabilidad que pueda corresponderles, con arreglo

al Código Penal y leyes complementarias, en consonancia con las disposiciones de este Decreto relacionadas con la materia.
Art. 3° La represión de las publicaciones ofensivas, y el castigo de sus autores, corresponde, como el juzgamiento de cualesquiera delitos comunes, al Poder Judicial.

II—De las publicaciones subversivas.

Art. 4° Constituye delito de imprenta contra la sociedad, cualquiera de los actos contenidos en los grupos siguientes:
1° Atacar la fuerza obligatoria de las instituciones ó las leyes, ó provocar á desobedecerlas; ó tratar de justificar actos que las leyes califican de delitos, ó excitar á cometerlos;
2° Atacar la Religión Católica;
3° Desconocer ú ofender la dignidad y prerrogativas de cualesquiera autoridades en el orden civil ó eclesiástico; atacar las Corporaciones depositarías del poder público ó las Órdenes religiosas reconocidas por el Estado;
4° Atacar la institución militar;
5° Tomar el nombre y representación del pueblo; combatir la legítima organización de la propiedad; concitar unas clases sociales contra otras, ó concertar coaliciones con el mismo objeto;
6° Atacar la inviolabilidad de la cosa juzgada, ó coartar con amenazas ó dicterios la libertad de los jueces, magistrados y funcionarios públicos encargados de perseguir y castigar los delitos;
7° Publicar noticias falsas de las que pueda resultar alarma ó peligro para el orden publico, ó grave daño á los intereses ó crédito del Estado;
8° Anticiparse á publicar, sin competente permiso, actos oficiales; hacer revelaciones que comprometan los intereses de la República ó perturben una negociación diplomática;
9° Impugnar directa ó indirectamente la moneda legal, ó propender á su depreciación;
10° Ofender la decencia pública con escritos obscenos ó noticias escandalosas.
Art. 5° Permítase ampliamente á todo escritor:
1° Discutir los asuntos de interés público, proponer y razonar las reformas que estime justo y conveniente se introduzcan en la legislación;
2° Discutir los candidatos para puestos de elección popular ó parlamentaria, mientras el candidato no haya renunciado su candidatura, y siempre que no se ocurra á la calumnia, que en todo caso es un delito.
Art. 6° La intervención gubernativa en materia de imprenta corresponde al Ministro de Gobierno, y bajo las órdenes y prevenciones del mismo Ministro, á los Gobernadores y Jefes políticos provinciales, los cuáles, en casos dudosos, consultarán con el respectivo superior jerárquico.
Art.7° Cuando una publicación asuma carácter subversivo, la Autoridad competente dictará, según el caso, alguna de las siguientes providencias:

1° Amonestación á quien corresponda, de la falta en que se ha incurrido, y de la rectificación ó enmienda que deba hacerse, previniendo la pena en que se incurrirá en caso de resistencia;
2° Prohibición de anunciar por carteles la publicación, y de venderla por las calles, por el término de quince días a seis meses;
3° Suspensión de la publicación por el mismo término.
Art. 8° En caso de desobediencia ó reincidencia, la autoridad podrá decretar:
1° Secuestro y anulación de los ejemplares impresos;
2° Suspensión absoluta de la publicación bajo el mismo título que tuvo u otro distinto.
Art. 9° Si la publicación no fuese periódica, la autoridad inferior sólo podrá prohibir su venta, y recoger y depositar los ejemplares, hasta que por el Ministerio de Gobierno se dicte resolución definitiva.
Art. 10º La parte interesada podrá pedir á la respectiva autoridad superior administrativa, que reforme ó revoque las resoluciones dictadas por los .Jefes provinciales ó los Gobernadores.
Art. 11º Cuando se trate únicamente de ataques á la Religión Católica, toda resolución prohibitiva ó suspensiva será provisional mientras se consulta el punto con la autoridad eclesiástica. Toda publicación que obtenga censura eclesiástica, favorable ó permisiva del respectivo Ordinario, y que no fuere por otro concepto subversiva, no podrá ser prohibida por la autoridad civil.

III. —De los periodistas.

Art. 12 Son periodistas el propietario, el director, los redactores y colaboradores de una publicación periódica.
La responsabilidad de los periodistas recaerá sobre ellos en el orden indicado.
Art. 13 A todo periódico existente ó que haya de fundarse, se exigen, bajo pena de suspensión temporal, y absoluta en caso de reincidencia, las siguientes condiciones:
1ª. Manifestación firmada, y dirigida, al Ministro de Gobierno ó al Gobernador del Departamento, en la cual se declaren, con su nombre y apellido, el propietario y el director de la publicación ;
2ª. Anuncio permanente en el mismo periódico, del precio de inserción, comunicados ó remitidos, el cual no podrá exceder del maximum establecido por los periódicos en la respectiva localidad en la fecha de la expedición del presente Decreto.
3ª. Publicación inmediata, por una sola vez, del presente Decreto, y de los que lo reformen ó complementen, en prueba de acatamiento á las disposiciones que regulan el ejercicio de la prensa.
Art. 14 Toda persona—individuo particular, funcionario, corporación ó sociedad—á quien se censure ó se atribuyan hechos falsos ó desfigurados, tiene derecho de

hacer insertar en el mismo periódico una rectificación ó aclaración, que no exceda del doble del espacio del suelto ó Artículo que la haya motivado.
Art. 15º La inserción de que trata el anterior Artículo es obligatoria y gratuita, y se hará en el número que siga inmediatamente al día en que la explicación haya sido entregada en la imprenta, bajo pena de cinco pesos por cada día que transcurra desde el día en que debió hacerse la inserción, ó de arresto equivalente.
Art. 16º La inserción será obligatoria, aunque exceda del espacio indicado en el Artículo 14, pero la parte excedente se hará á costa del comunicante al precio establecido por el periódico para los remitidos.
La inserción en el número inmediato sólo será obligatoria en la parte que debe publicarse gratis. El resto podrá insertarse de una vez o en números siguientes seguidos
Art. 17º La explicación ó rectificación consabida deberá ser exclusivamente defensiva y no agresiva. Si el periodista juzga que la contestación es agresiva, y el remitente no conviene en reformarla, publicará solamente la noticia de haberla recibido, y podrá, bajo su responsabilidad, suspender la inserción, dando aviso inmediato á la autoridad administrativa competente.
Art. 18º Enterada la autoridad de esta ocurrencia, designará un censor que, oídas las partes, decida la forma en que la explicación deba publicarse.
Si el periodista suspendió la publicación sin acusar recibo en el periódico, ó si el censor declarase que la explicación no fue agresiva, correrá la multa al periodista desde el día en que debió publicar la explicación, ó al menos el recibo de ella. Y si el censor declarare que la explicación debe reformarse, y el remitente conviniere en ello, el periodista que de ello dio aviso queda exento de toda responsabilidad por lo ocurrido, v obligado, sin ulterior recurso, á publicar en el inmediato número la explicación en la forma en que lleve la aprobación del censor.
Art. 19º La persona ofendida que haga uso del derecho de defensa en el periódico en que fue atacada, no podrá demandar en juicio al ofensor, salvo el caso de calumnia, en el cual le quedan expeditos ambos recursos.

IV. —De los impresores.

Art. 20º Son impresores el propietario y el director de una imprenta. La responsabilidad recae en primer .lugar sobre el propietario.
Art. 21º Es prohibido á los impresores:
1° Hacer publicación alguna en que no se exprese el nombre del establecimiento tipográfico;
2º Imprimir periódicos que no cumplan con las condiciones establecidas en el Artículo 13, y continuar la publicación del que haya sido suspendido por la autoridad;
3º Hacer publicaciones anónimas ó seudónimas (que no sean Artículos de periódico), sin que él autor haya dejado en la imprenta él original firmado. El impresor lo mantendrá en reserva, si el autor lo exige, bajo pena de violación de

secreto; pero lo presentará á la autoridad competente cuando se exija la responsabilidad.
No es admisible para ningún escrito la firma de editor responsable, en vez de la del autor verdadero;
4° 'Publicar, sin licencia de la autoridad eclesiástica, obras sagradas, morales, catequísticas ó devotas.
Art. 22º El impresor que, infrinja cualquiera de las precedentes disposiciones, incurrirá en una multa de veinte á trescientos pesos, que se hará efectiva administrativamente.
Art. 23º En caso de desobediencia ó reincidencia, el impresor incurrirá en la pena de clausura del establecimiento, por el término de quince días á seis meses.
Art. 24º Queda derogado el Decreto ejecutivo número 635 de 1886 (5 de Noviembre) sobre libertad de imprenta y juicios que se sigan por los abusos de la misma.

Dado en Bogotá, á 17 de Febrero de 1888.

RAFAEL NÚÑEZ.
El Ministro de Gobierno,
Carlos Holguín.

Anexo 7: Ley 61 de 25 de Mayo de 1888 (Ley de los Caballos)

LEY 61 DE 1888
(25 de mayo)
Por la cual se conceden al Presidente de la República algunas facultades extraordinarias.

El Consejo Nacional Legislativo
DECRETA:

Art. 1° Facultase al Presidente de la República:
1° Para prevenir y reprimir administrativamente los delitos y
Culpas contra el Estado que afecten el orden público, pudiendo imponer, según el caso, las penas de confinamiento, expulsión del territorio, prisión ó pérdida de derechos políticos por el tiempo que crea necesario.
2° Para prevenir y reprimir con iguales penas las conspiraciones contra el orden público y los atentados contra la propiedad pública ó privada que envuelvan, á su juicio, amenaza de perturbación del orden ó mira de infundir terror entre los ciudadanos ; y
3° Para borrar del Escalafón á los militares que, por su conducta, se hagan indignos de la confianza del Gobierno á juicio de aquel Magistrado.
Art. 2° El Presidente de la República ejercerá el derecho de inspección y vigilancia sobre las asociaciones científicas é institutos docentes; y queda autorizado para suspender, por el tiempo que juzgue conveniente, toda Sociedad ó Establecimiento que bajo pretexto científico ó doctrinal sea foco de propaganda revolucionaria ó de enseñanzas subversivas.
Art. 3° Las providencias que tome el Presidente de la República en virtud de la facultad que esta Ley le confiere, deberán, para llevarse á efecto, ser definitivamente acordadas en Consejo de Ministros.
Art. 4° Las penas que se apliquen de conformidad con esta Ley no inhiben á los penados de la responsabilidad que les corresponda ante las autoridades judiciales conforme al Código Penal.
Art. 5° La presente ley caducará el día en que el Congreso de la República expida una Ley sobre alta policía nacional.
Dada en Bogotá, á veintitrés de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho.
El Presidente, Jorge Holguín.
El Vicepresidente, Antonio Roldan.
El Secretario, Manuel Brigard.
El Secretario, Roberto de Narváez.
Gobierno Ejecutivo—Bogotá, Mayo 25 de 1888. Publíquese y ejecútese.
(L. S.) RAFAEL NÚÑEZ
El Ministro de Gobierno, Carlos Holguín

Anexo 8: Calumnias e injurias

2. CALUMNIAS É INJURIAS.
Código Penal. Libro, IV, Título. 2, Capítulo. 1 1888

Art. 192. Calumnia es la falsa imputación de delitos ó de actos deshonrosos.
Art. 193. La injuria comprende: 1. ° La ofensa hecha con palabras al honor, al crédito, á la dignidad y á cuanto constituye la propiedad moral de un individuo; 2. ° La difamación, ó divulgación de vicios puramente privados ó domésticos; 3. ° La contumelia, ó sean las palabras que envuelven oprobio ó vilipendio dichos á una persona en su cara.
Art. 194. La calumnia y la injuria se reputarán públicas cuando se cometan por medio de papeles impresos, litografiados ó grabados, por carteles ó pasquines, por manuscritos comunicados á más de diez personas, ó por palabras proferidas en público delante de una reunión que no sea propiamente de familia.
Art. 195. Son injurias más graves:
1. ° Las que se refieran á vicios ó faltas de moralidad cuyas consecuencias puedan perjudicar gravemente la fama, el crédito ó los intereses del agraviado;
2. ° Las que por su naturaleza, ocasión ó circunstancias especiales fueren tenidas en concepto público por afrentosas;
3. ° Las que racionalmente merezcan la calificación de más graves, atendido el estado, dignidad y circunstancias especiales del ofendido y del ofensor.
Art.196. Las penas señaladas en los Artículos 579 y 580 del Código Penal á los calumniadores, suponen que la calumnia ha sido pública. Si no lo fuere, se aplicará la mitad de la pena que debería corresponder, si el delito hubiera sido público, en cada uno de los dos casos prescritos en dichos Artículos.
Art. 197. El castigo señalado á la injuria por el Código Penal, supone la publicidad y mayor gravedad del delito.
Faltando la publicidad ó la mayor gravedad, ó ambas circunstancias, se aplicará la mitad de la pena que hubiera de corresponder al delito íntegro; ó bien, la multa únicamente, con arreglo al grado de menor publicidad ó á la menor gravedad del hecho ó á ambas circunstancias, según el prudente arbitrio del juzgador.
Art. 198. El acusado de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere afirmado.
Art. 199. El acusado por razón de injuria 110 será admitido á probar la verdad de las imputaciones, sino cuando éstas fueren dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo, con arreglo á lo establecido en el Artículo 587 del Código. En este caso será absuelto el acusado si probare la verdad del denuncio ó censura.
Art. 200. Nadie podrá ser penado por calumnia ó injuria, sino á querella de la parte agraviada, salvo cuando el ataque se haya dirigido contra la fuerza obligatoria de las leyes ó decretos ejecutivos, contra la inviolabilidad de la cosa juzgada, y en

general cuando la agresión tuviere carácter de subversiva. En este caso tendrá acción el Ministerio público, previa excitación del Gobierno.

Art. 201. Podrán también ejercitar la acción de calumnia ó injuria los ascendientes, descendientes, cónyuge ó hermano del difunto cuya memoria haya sido agraviada, siempre que la imputación trascendiere á la familia.

Los autores de escritos históricos podrán ser acusados de calumnia mas no de injuria respecto de personas muertas.

Art. 202. Nadie podrá deducir acción de calumnia ó injuria causada en juicio, sin previa licencia del Juez ó Tribunal que conoció del asunto.

Art. 203. La sentencia en que se declare la calumnia se publicará en un periódico oficial, si el calumniado lo pidiere.

Art. 204. Los editores ó directores de periódicos en que se hubieren estampado las calumnias ó injurias, insertarán en ellos, dentro del término que señalen las leyes, ó, en su defecto, el Tribunal sentenciador, la satisfacción ó fallo condenatorio, siempre que así lo pida el ofendido.

Art. 205. El culpable de injuria ó de calumnia quedará en cualquier tiempo relevado de pena, mediando satisfacciones que acepte el ofendido.

Art. 206. Queda así adicionado y reformado el capítulo 1, título 2, libro IV del Código Penal.

Anexo 9: Decreto No. 286 del 27 de Marzo de 1889

DECRETO NÚMERO 286 DE 1889
(27 de marzo)

"adicional al 151 de 17 de Febrero de 1888, sobre imprenta."
El Presidente de la República de Colombia,

En uso de las facultades que le concede el Artículo transitorio K de la Constitución,
DECRETA

Art. 1.^{0} El Ministro de Gobierno y los Gobernadores, éstos dentro del territorio de su respectivo Departamento, quedan facultados para prohibir la venta pública, en las calles ó agencias particulares, de los periódicos extranjeros cuya circulación sea perjudicial á la paz pública, al orden social ó a las buenas costumbres. Los contraventores de una prohibición decretada serán castigados con multas de cincuenta á doscientos pesos, sin perjuicio de la secuestración de los ejemplares existentes y de la responsabilidad penal á que haya lugar conforme á las leyes.
Parágrafo. Los que voceen por las calles periódicos prohibidos, sufrirán un arresto de tres días y quedarán inhabilitados para vocear otras publicaciones.
Art. 2.^{0} La libertad que por el Artículo 5.^{0} del Decreto número 151 sobre prensa, se concede ampliamente á todos los escritores para discutir asuntos de interés público, queda exenta de toda restricción, y el Gobierno no intervendrá en ningún caso en que se trate de examinar la conducta suya ó de sus Agentes en lo relativo á contratos y á manejo é inversión de los caudales públicos.
Parágrafo. La disposición de este Artículo no priva á los empleados públicos, en su calidad de individuos privados, del derecho que les concede el Artículo 3.^{0} del citado Decreto, de ocurrir [sic] [acudir] al poder Judicial contra los autores de publicaciones calumniosas o injuriosas.

Dado en Bogotá, á 27 de Marzo de 1889.

CARLOS HOLGUÍN
El ministro de Gobierno,
José Domingo Ospina C.

Anexo 10: Decreto No. 910 del 29 de Noviembre de 1889

DECRETO NÚMERO 910 DE 1889
(29 de noviembre)
Adicional al número 151, sobre prensa.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Los periodistas que cometan alguno de los delitos enumerados en el Art.ículo 4° del Decreto número 151, sobre prensa, cuando a juicio de la autoridad competente hayan obrado deliberadamente, podrán, sin perjuicio de la suspensión del periódico, ser penados con multas de diez á doscientos pesos, según la gravedad del caso. Estas multas serán impuestas por el Ministro de Gobierno en la Nación, y por los Gobernadores en los Departamentos, y deberán ser consignadas en la Administración de Hacienda nacional del lugar en donde se publique el periódico, dentro de las veinticuatro horas subsiguientes á la notificación de haberse impuesto la pena.
Art. 2° Cuando el periodista no haga la consignación dentro del término señalado en el Artículo anterior, el funcionario qua impuso la multa procederá de oficio á conmutarla por arresto, computando cada dos pesos por un día de esta pena.
Art. 3° Ningún periódico podrá vocearse en las calles sin permiso del Ministro de Gobierno ó de los Gobernadores, quienes podrán retirar este permiso cuando la publicación asuma carácter subversivo.
Los periódicos que actualmente se publican en la República podrán seguir voceándose mientras no se resuelva otra cosa.
Art. 4° Esté Decreto rige en el Departamento de Panamá.

Dado en Bogotá, á 29 de Noviembre de 1889.

CARLOS HOLGUÍN.
El Ministro de Gobierno,
José Domingo Ospina C

Anexo 11: Decreto (¿) de Agosto 1892.

1º La infidelidad o mala fe en la relación de las sesiones de las Cámaras, serán castigados con una multa de cincuenta a doscientos pesos, que aplicará el Ministro de Gobierno a virtud de queja de la respectiva Cámara.
En caso de reincidencia podrá agravarse la pena con la prohibición de publicar dichas relaciones hasta por todo el tiempo de las sesiones.
2º Los discursos pronunciados en las Cámaras no podrán ser publicados por los periódicos, ni aún en extracto, [sic] sin que preceda la revisión de sus autores. La contravención será castigada con una multa de cincuenta pesos por cada vez, y a virtud de queja del autor del discurso.

Carlos Holguín.

Anexo 12: DECRETO 315 de 9 de diciembre 1892

MINISTERIO DE GOBIERNO

DECRETO NUMERO 315 DE 1892 (9 de diciembre)
Sobre rectificaciones oficiales.

El Vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo

DECRETA

Artículo único. Quedan autorizados los Ministros de Despacho y los Gobernadores de Departamento para rectificar, con documentos si fuere necesario, las fatas noticias e imputaciones malévolas, de carácter alarmante ó subversivo, valiéndose de los mismos órganos de publicidad que hayan esparcido tales noticias o imputaciones.

Todo periódico que reciba una rectificación oficial, está obligado a publicarla sin demora y a su costo, en sus propias columnas, bajo pena de suspensión temporal. Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogota, en el Palacio de Gobierno, a 9 de diciembre de 1892.

M.A. CARO. – EL Ministro de Gobierno, A.B. Cuervo.

Anexo 13: Decreto Número 231 de 1896 (24 de Junio) sobre libelos sediciosos.

El vicepresidente de la República encargado del poder Ejecutivo,
Considerando;

1º Que á la magnanimidad y clemencia con que han sido tratados los autores y partícipes de la conspiración y rebelión del año anterior se ha respondido abriendo por la prensa campaña sistemática de ultraje y de calumnia, llegando la audacia y el irrespeto á la verdad, y á la honra nacional al extremo de imputar al Gobierno los delitos mismos que él persigue y castiga.
2º Que tales falsedades y denuestos, como tarea cotidiana ejercida mediante una organización ad hoc_y sin ejemplo acaso en los anales de la prensa nacional, no pueden tener otro objeto que engañar á los pueblos, desacreditar al país, mantenerlo en estado de alarma con grande daño del comercio y de los intereses legítimos, y lanzarlo, si posible fuere en una nueva revuelta, lo cual constituye un atentado contra la tranquilidad, la seguridad y la autoridad públicas;
3º Que la tolerancia tiene un límite forzoso cuando de ella se abusa sin límite ni freno
4º Que los gobernantes que incurren en la debilidad, de permitir la acción evidente del mal sobre la sociedad, contraen grave responsabilidad ante la Patria y ante Dios**;**

DECRETA:

Art. 1º Prohíbese la publicación y circulación de los papeles calumniosos e incendiarios El Republicano, El Derecho, y El Debate, y su continuación bajo cualquier forma o título.
Art. 2º En lo sucesivo los autores y escritores de libelos [ilegible] y sediciosos de la naturaleza de los expresados serán tratados como perturbadores del órden público.
Art. 3º Quedan públicamente amonestados para su gobierno, por medio de este decreto, los que intenten continuar abusando de la prensa con fines revolucionarios.

Notifíquese y publíquese. Dado en Bogotá, á 24 de junio de 1896. M. A. Caro.

Anexo 14: Ley 157 de 1896

LEY 157 DE 1896
(12 de diciembre)
Sobre prensa.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TITULO I
Disposiciones preliminares

Art. 1. De acuerdo con el Artículo 42 de la Constitución, la Prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable, y se regula de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

Art. 2. Todo libro, folleto, revista, periódico, grabado, etc., llevará inscrita la fecha de su publicación y el nombre del establecimiento en que se hubiere editado.

Art. 3. Ninguna empresa periodística podrá recibir subvenciones del tesoro nacional, departamental, o municipal o de Gobiernos ó compañías extranjeras, a no ser que en este último caso medie el permiso de que trata el Artículo 42 de la Constitución.

Exceptúanse de esta disposición las publicaciones de carácter científico ó literario, y las hechas en países extranjeros, cuando en ellas se trate de defender la honra ó los intereses nacionales.

Art. 4. Los escritores públicos pueden tratar libremente y discutir dentro de los términos de la presente ley:

1. Los actos oficiales, los asuntos de interés público y las reformas que estimen justas en la legislación; y
2. Las candidaturas para puestos de elección popular ó parlamentaria, mientras estas no hallan sido renunciadas.

Habrá amplia libertad para discutir todos los actos de la vida pública de los candidatos, dentro de los límites de la moral y de la decencia; pues sólo serán prohibidos los ataques a la vida privada.

TITULO II
De los impresores.

Art. 5. Son impresores el propietario, el administrador ó el encargado de un establecimiento de tipografía, litografía, grabado, etc.

Art. 6 Todos los propietarios, administradores o encargados de imprentas establecidas en el territorio de la República, tienen el deber, dentro de los sesenta

días subsiguientes á la promulgación de esta ley, de informar al Gobernador del Departamento respectivo y al Ministerio de Gobierno, por medio de manifestación escrita en papel sellado, acerca de lo siguiente:

1. El nombre y el lugar en donde se halla el establecimiento;
2. Nombre de la imprenta; y
3. Nombre y nacionalidad de su propietario.

Art. 7. Cuando una imprenta cambie de nombre o de dueño, tales hechos se comunicaran a los funcionarios de que habla el Artículo anterior, dentro de los cinco días subsiguientes a aquel en que el cambio se hubiere verificado, y las imprentas que en adelante se establecieren quedan sujetas á dar aviso de que trata el mismo Artículo anterior, dentro de los tres días siguientes a la instalación.

Art. 8. Todo dueño, administrador ó encargado de establecimiento tipográfico, de grabado, etc., queda obligado á enviar al Ministerio de Gobierno, al Gobernador del Departamento respectivo, al Prefecto de la Provincia y a la Biblioteca Nacional, dentro de los tres días subsiguientes á la publicación de todo libro, folleto, revista, periódico, hoja volante, grabado, etc., un ejemplar de tales producciones, el cual circulará libre de porte por las estafetas nacionales.

Art. 9. La contravención del Artículo precedente hará incurrir al responsable en una multa de diez (10) a cincuenta (50) pesos, que impondrá cada uno de los funcionarios nombrados á quien se omite el envío.

Art. 10. Es prohibido a los dueños, administradores ó encargados de los establecimientos de que habla el Artículo 5. Para dar publicidad:

1. A producciones anónimas ó suscritas por un pseudónimo, siempre que no sean Artículos de periódico, sin que la firma autógrafa del autor figure al pie del original respectivo, el cual, lo mismo que los escritos llamados originales de imprenta, conservará en suponer durante un año el dueño del establecimiento.

   Las publicaciones ofensivas de carácter personal en hojas sueltas, remitidos y comunicados, deberán llevar la firma de su autor.
2. A producciones que no llenen los requisitos determinados en los Artículos 15 y 19 de esta ley.
3. A publicaciones que hayan sido suspendidas por la autoridad o que sean regidas por un director inhabilitado.

Art. 11. La violación de cualquiera de estas prohibiciones será castigada con cualquiera de las penas señaladas en los ordinales 1., 4., y 5., del Artículo 36.

Art. 12. Los originales de que trata el ordinal 1º del Artículo 10 sólo se entregarán a la autoridad competente, cuándo esta así lo ordenare.

TÍTULO III
De los periodistas

Art. 13. Son periodistas el propietario del periódico, el director de él y los redactores y colaboradores.

Art. 14. Para ser director de periódico en que se traten cuestiones políticas nacionales, se requiere la calidad de colombiano en ejercicio de los derechos políticos.

Art. 15. Para que un periódico pueda ver la luz y gozar el derecho de ser voceado por las calles, es necesario que preceda manifestación escrita en papel sellado y dirigida al Gobernador del Departamento respectivo y al Ministro de Gobierno, por medio del cual se declare:

1. El nombre del periódico:
2. Los asuntos en que se ocupará;
3. El nombre y la nacionalidad de su propietario y director: y
4. el nombre del establecimiento en donde va a editarse.

Art. 16. Al vocear el periódico sólo se anunciará su nombre y su número.

Art. 17. La publicación no podrá empezar antes de que por la autoridad respectiva se acuse el correspondiente recibo de la manifestación á que se refiere el Artículo 15. Lo cual deberá hacerse dentro de ocho días á mas tardar; pasados los cuales podrá empezarse la publicación, aunque no se haya acusado el recibo.

Art. 18. Si la publicación principiare antes de acusarse recibo ó de vencerse el término señalado en el Artículo anterior, el director de ella y el dueño, administrador ó encargado del establecimiento donde se haya editado, serán castigados cada uno con una multa de cincuenta (50) a doscientos pesos (200).

Art. 19. Toda publicación periódica llevará en su primera plana y en tipo y lugar visibles:

1. Las palabras “República de Colombia”;
2. El nombre de la publicación;
3. El nombre del lugar en que se edita y la fecha de su publicación;
4. El nombre del propietario y del director; y
5. El nombre del establecimiento en que se edite, el cual podrá ir en la última plana.

Art. 20. Toda persona, individuo particular, funcionario, corporación ó sociedad á quien se atribuyan hechos falsos ó desfigurados ó á quien se ofenda con apreciaciones ó conceptos injuriosos, tiene derecho á hacer insertar en el mismo periódico, y de manera gratuita, una rectificación ó aclaración que no exceda del doble del espacio ocupado por el escrito que lo haya motivado.

Cuando se tratare de personas muertas ó ausentes, pueden ejercitar el derecho de que trata este Artículo sus herederos y parientes, y al periodista sólo obligará de atender el primer escrito que le fuere llevado, y en caso de simultaneidad se atenderá el orden expresado.

Art. 21. Entregado que haya sido en la imprenta el escrito de que habla el Artículo anterior, ente será insertado en el número próximo inmediato bajo la multa de cinco (5) pesos ó arresto equivalente por cada día de demora en su publicación.

Art. 22. Cuando el escrito de que trata el Artículo 20 exceda del espacio allí determinado, la inserción será siempre obligatoria, mas la parte excedente se hará

á costa del interesado, quien pagará por ella el precio establecido para los comunicados.
Art. 23. La parte del escrito que deba publicarse á costa del comunicante se insertará íntegra, ó á razón de una columna por lo menos en cada uno de los números subsiguientes á aquel en que vea la luz la parte que deba acogerse gratuitamente.
Art. 24. La contravención á lo dispuesto en este Artículo será castigada con una multa desde veinticinco (25) hasta doscientos (200) pesos.
Art. 25. El escrito de que hablan los Artículos 20 y 22 deberá ser exclusivamente defensivo ó explicativo. Si el periodista juzga que el escrito enviado es agresivo se lo manifestará así al remitente, quien, si no conviene en reformarlo, dará derecho al periodista para, bajo su responsabilidad, suspender la publicación, y dando aviso en el periódico de haberla recibido, ocurrirá con copia de lo conducente á la Gobernación del Departamento respectivo.
Art. 26. Recibidos por la Gobernación los documentos de que habla el Artículo anterior, ésta designará un censor a quien pasará tales documentos, y el cual, oídas las partes en conferencia verbal, para lo cual las citará, decidirá, dentro de tercer día, acerca de la forma en que el escrito deba publicarse.
Si el periódico no se editase en la Capital del Departamento, la facultad que por este Artículo se confiere al Gobernador, se ejercerá por la primera autoridad política del lugar donde se edite el periódico.
Art. 27. Si el periodista suspendió la publicación sin dar el aviso de que habla el Artículo 25, ó si el censor declarare que el escrito no fue agresivo, correrá la multa para el periodista, en el primer caso, desde el día en que la explicación debió publicarse, y en el segundo desde el día de la resolución del censor.
Art. 28. Si el censor declarare que el escrito debe reformarse, y quien lo envía conviniere en ello, queda el periodista en la obligación de publicarlo en la forma determinada, por el censor y en los términos señalados por los Artículos 21 y 22. La infracción de lo dispuesto en este Artículo somete al propietario ó al director del periódico á la pena señalada en el Artículo 24.
Art. 29. Cuando se hiciere uso del derecho do defensa en la forma de que hablan los cinco Artículos anteriores, la persona ofendida no podrá demandar en juicio criminal al ofensor, salvo el caso de calumnia, en el cual le quedan expeditos ambos recursos.

TITULO IV
DE LOS DELITOS

Art. 30. Constituyen delitos de imprenta:
1. º Las publicaciones ofensivas, ó sea aquellas en que se atenta á la honra de las personas;
2. º Las publicaciones subversivas, ó sea aquellas en que se atenta contra el orden social y la tranquilidad pública; y

3° Las contravenciones á la presente Ley, que no se hallen comprendidas en los dos ordinales anteriores.

Art. 31. Los delitos ocasionados por producciones ofensivas dan lugar á los juicios llamados de injuria y de calumnia, los cuales se rigen, tramitan y castigan de acuerdo con la Ley de procedimiento y el Código Penal.

Art. 32. Los delitos ocasionados por medio de publicaciones subversivas, los constituyen;

1° Propender á la desmembración de la República ó n la segregación de una parte de su territorio;

2° Desconocer ó desobedecer la Constitución ó las Leyes, ó propender al desconocimiento ó desobediencia de ellas;

3° Excitar á cometer actos que las Leyes califiquen como delitos;

4° Atacar á los Gobiernos ó Jefes de las Naciones amigas, siempre que la legislación de los respectivos países consigne igual principio de reciprocidad, y su Gobierno lo practique;

5° Atacar la cosa juzgada, sin perjuicio de la crítica jurídica que puede hacerse á los fallos judiciales, siempre que no tiendan á impedir el cumplimiento de ellas;

6° Propender á la depreciación de la moneda nacional;

7° Incitar una contra otras las diversas clases sociales;

8° Atentar para la sublevación ó concitar á la guerra civil;

9° Atacar la moral cristiana, ó el dogma Católico, y ofender las prácticas de esta religión;

10º Arrogarse la representación del pueblo ó tomar el nombre de una parte de él;

11° Combatir la legítima organización del derecho de propiedad;

12° Desconocer ó atacar las legítimas prerrogativas de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares;

13° Calumniar ó injuriar al Encargado del Poder Ejecutivo, al Arzobispo y á los Obispos de la República, en cuanto se refiere al desempeño de sus funciones oficiales

14° Anticiparse á dar publicidad á actos oficiales de carácter diplomático ó á adulterar los documentos oficiales;

15° Ofender la decencia pública con escritos ó grabados obscenos;

16° Publicar ó reproducir noticias falsas que puedan ocasionar alarma ó peligro para el orden público ó grave daño á los intereses y crédito del Estado; y

17° Excitará los individuos del Ejército á ejecutar actos de desobediencia y rebelión.

Art. 33. Para los efectos, del presente Artículo, constituye delito no solamente la circulación de periódicos, sino también la de libros, folletos, Carteles, hojas volantes, grabados, etc., cuando en tales producciones se infrinja lo preceptuado en él.

Art. 34. Son responsables para los efectos de la presente Ley, el propietario y Director del .periódico, el dueño, administrador ó encargado del establecimiento en que se hubiere editado la producción y el autor de esta.

Art.35. La acción criminal, en los delitos ocasionados por publicaciones subversivas prescribe, pasado cuarenta días, contados desde la fecha en que el impreso haya sido entregado en las oficinas de que habla el Artículo 8.º de esta Ley, salvo para los periódicos, respecto de los cuales el término se contará desde el día de su publicación.
Las penas prescriben pasados seis meses después de su imposición.

TITULO V
DE LAS PENAS

Art. 36. Los hechos que constituyen infracción á lo preceptuado en esta Ley, se castigarán, según su gravedad, con una de las siguientes penas:
1ª Multa desde cincuenta ($ 50) hasta doscientos pesos ($ 200).
2ª Suspensión del periódico hasta por seis meses;
3ª Prohibición al propietario y director de volver á figurar con el mismo carácter en otra nueva publicación hasta por el término de seis meses;
4ª Prohibición al establecimiento en que se hubiere editado la producción subversiva, hasta por el término de tres meses para que puedan volver á editarse en él publicaciones de carácter político, moral ó religioso;
5ª Clausura del establecimiento en que se hubiere editado la publicación subversiva, hasta por el término de tres meses;
6ª Arresto desde quince (15) días hasta tres (3) meses.
Art. 37. Esta última pena se aplicará como adicional á las especificadas en los cinco primeros ordinales del Artículo anterior, y sólo en los siguientes casos:
1° Cuando la producción castigada se halle en dos ó más de los casos de infracción de que trata el Artículo 32;
2° Cuando haya reincidencia.
Art. 38. La pena de multa se convertirá en la de arresto, y á razón de un día por cada cuatro pesos, cuando el individuo penado no la consignare en la respectiva oficina de Hacienda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á aquella en que se le hubiere hecho la notificación de la sentencia .del Tribunal ó del Consejo de Estado de que se habla en los Artículos subsiguientes.
Art. 39. Para los efectos del Artículo anterior, el Tribunal ó el Consejo de Estado avisarán inmediatamente la imposición de la multa al respectivo Administrador nacional de Hacienda, quien, á su vez, dará cuenta al Ministerio de Gobierno y al respectivo Gobernador, del hecho de no haberse consignado el valor de la multa, para que dichos Magistrados decreten la conversión.
Art. 40. En todos los casos del Artículo 36 los Gobernadores ó el Ministerio de Gobierno pueden, además de la imposición de la respectiva pena, dictar las providencias necesarias para impedir la circulación de la producción subversiva, y todos los ejemplares de ella serán recogidos.

Art. 41. El dueño, administrador ó encargado de establecimiento tipográfico, de grabado, etc., no deberá ser penado por los delitos enumerados en el Artículo 32, sino en estos dos casos:
1º Cuando por cualquier causa no pudiere imponerse pena al autor de la producción ó al propietario y director del periódico; y
2° Cuando éstos hayan incurrido en una ó más reincidencias, siempre que los fallos condenatorios se hayan publicado en algún periódico oficial.
Art. 42. El autor de la producción y el propietario y director del periódico son responsables conjuntamente de los delitos enumerados en el Artículo 32 de está Ley.
Art. 43. Aunque en un mismo individuo se reúnan varías de las calidades indicadas en los Artículos anteriores, no se le impondrá sino una sola de las penas especificadas en el Artículo 36, salvo el caso del Artículo 37.
Art. 44. Cuando la pena que deba aplicarse al delito tenga máximo y mínimo, deberá declararse en la sentencia el grado del delito.
Art. 45. En cada uno de los delitos habrá tres grados: el primero ó el más grave de todos, el segundo ó el de inferior gravedad, y el tercero ó menos grave de todos.
Art. 46. Al delito de primer grado se le aplicará el máximo de la pena; al de segundo grado, el término medio; y al de tercer grado el mínimo.
Art. 47. Cuando se señale pena fija y determinada, no será necesario determinar el grado del delito.
Art. 48. Cuando la .producción subversiva origine ó contribuya á originar los delitos de rebelión, sedición, motín ó asonada, además de las penas establecidas en esta Ley, sufrirán los responsables las señaladas en el Código Penal para los delitos consumados, las cuales les serán impuestos por los Jueces ordinarios.

TITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DB LAS PENAS

Art. 49. Son llamados á juzgar de las contravenciones á la presente Ley y á decretar la imposición de las penas en ella señaladas:
1° El Ministro de Gobierno y el Consejo de Estado en todo el territorio de la República;
2° Los Gobernadores de Departamento y los Tribunales del Distrito Judicial, dentro del territorio de su jurisdicción.
Art. 50. En los Tribunales divididos en dos Salas, corresponde á la de los Magistrados de lo Criminal conocer de los asuntos de que trata esta Ley.
Art. 51. Cuando á juicio de un Gobernador se hubiere infringido la presente Ley dentro del territorio de su mando, dictará una resolución motivada que contendrá;

1° El nombre de la autoridad que la dicta;
2° El nombre de la producción de que se trata, ó el título ó primeras líneas ó denominación del escrito grabado, etc., por medio del cual se hubiere cometido la infracción;

3° Citación de la disposición infringida;
4° Citación del Artículo qué señala la pena impuesta; y
5° El nombre del individuo ó individuos penados

Art. 52. De esta resolución se dará aviso inmediatamente, por telégrafo, al Ministro de Gobierno.

Art. 53. La pena impuesta por el Gobernador se llevará inmediatamente á cabo, si fuere la de suspensión del periódico, y se refiere á los delitos especificados e n los ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 8º, 13º, 16º y 17º del Artículo 32. En los demás casos aguardarse la decisión del Tribunal ó la del Consejo de Estado, si el Tribunal revoca la resolución del Gobernador.

Art. 54. De la resolución dictada por el Gobernador se sacará una copia, que se le entregará al penado al tiempo de hacérsele la notificación de aquélla.

Art. 55. Si la notificación no pudiere hacerse personalmente al penado, se surtirá al día siguiente de dictada la providencia del Gobernador, por medio de un edicto fijado por veinticuatro horas en la puerta del establecimiento donde se hubiere editado la producción.

Art. 56. Cuando la persona penada no resida en la capital del Departamento, la notificación personal ó por edicto se hará en la Prefectura ó en la Alcaldía del lugar donde la publicación se hubiere editado, veinticuatro horas después de comunicada la resolución del Gobernador, comunicación que preferentemente se hará por telégrafo.

Art. 57. Dentro de las veinticuatro horas siguientes á la notificación, más el término de la distancia, puede el penado ocurrir, por medio de un memorial hecho en papel común, al Tribunal del Distrito Judicial donde se haya editado la producción, alegando las razones que á su juicio existan para combatir la resolución del Gobernador y pedir que ésta sea derogada ó reformada.

Art. 58. Recibida en el Tribunal la solicitud á que se refiere el anterior Artículo, el Presidente de la Corporación sorteará dos miembros de ella, dentro de veinticuatro horas, y bajo su Presidencia se elegirá, por pluralidad de votos, el Magistrado que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á la designación, deba presentar, con vista ,de los documentos respectivos, el proyecto por medio del cual se confirme, reforme ó derogue la resolución del Gobernador, proyecto que será acogido ó rechazado por mayoría de votos.

Art. 59. En ningún caso la Comisión del Tribunal dejará transcurrir más de setenta y dos horas después de repartido el negocio, sin haber comunicado al Gobernador la decisión acordada, copia de la cual facilitará, además, al interesado en caso de ser solicitada.

Art. 60. La decisión del Tribunal se notificara en los términos del Artículo 55.

Art. 61. Cuando la decisión del Tribunal no fuere conforme con la del Gobernador, puede éste conformarse con lo decidido por aquél, ó bien ocurrir dentro de las veinticuatro horas, y con copia de lo actuado, para ante el consejo de Estado.

Art. 62. Cuando la resolución del Gobierno deba llevarse inmediatamente á cabo, no tendrá el penado derecho á reclamar indemnización de daños y perjuicios, aunque esa resolución sea revocada ó reformada.

Art. 63. Recibidos en él Consejo de Estado los documentos de que habla él Artículo 61, procederá el Consejo corno se ordena en el Artículo 58 respecto del modo de proceder el Tribunal, y a decisión tomada se comunicará inmediatamente al Gobernador.

Art. 64. Cuando fuere el Ministro de Gobierno quien dictare la resolución de que habla el Artículo 51, ella se comunicará al Gobernador del Departamento en que hubiere visto la luz la publicación subversiva, y el procedimiento que se siga será el detallado en los Artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la presente Ley.

Art. 65. Cuando el Tribunal respectivo y el Consejo de Estado no decidieren de la actuación dentro de los términos señalados en los Artículos 58 y 59, se presume que aprueban la resolución dictada por el Gobernador ó el Ministro de Gobierno. A la persona penada queda en este caso el derecho de ocurrir en queja, por la demora, ante la Corte Suprema, la cual, en vista de los documentos, y comprobado el hecho que se denuncia, decretará, dentro de los ocho días subsiguientes al recibo de la queja y de los documentos que deben acompañarla, una multa desde cien pesos ($100) hasta quinientos pesos (500), de la cual serán solidariamente responsables los funcionarios que hubieren incurrido en la demora.

La resolución de la Corte será comunicada dentro del tercero día al Tesorero General de la República ó al Administrador General de Hacienda Departamental, según el caso, para que la multa se haga efectiva.

Art. 66. En los casos de los Artículos 61, 63, 64 y 65, las comunicaciones se harán telegráficamente.

Art. 67. Cuando el delito consista en agresiones al dogma católico ó á las prácticas del catolicismo, ó en desconocimiento de las prerrogativas de las autoridades eclesiásticas, no podrá precederse sino en virtud de queja razonada del respectivo Prelado.

Art. 68. Las penas de que traten los Artículos 21, 24 y 28, sólo podrán imponerse a petición del interesado, previa comprobación del hecho que las motiva.

Art. 69. Si el Ministro de Gobierno y el Gobernador respectivo hubieren resuelto simultáneamente sobre alguna de las contravenciones á la presente ley, prevalecerá la resolución del Ministro.

Art. 70. El Ministro de Gobierno, por medio de resolución motivada, puede .prohibir la circulación de determinados periódicos extranjeros dentro del territorio nacional.

Art. 71. El hecho de poner en circulación los periódicos prohibidos de que trata el Artículo precedente, dará lugar á una malta de cincuenta ($ 50), á quinientos pesos ($ 500), que decretará el Ministro de Gobierno.

Art. 72. En todo negocio ó litigio civil ó criminal los Jueces ó Magistrados pueden prohibir la publicación de determinados puntos del proceso, y esto sólo en razón de su moralidad. Prohíbese así mismo, dar cuenta de las deliberaciones privadas

y secretas, ya sea de los jurados, ya de los Tribunales de justicia, y también de las Asambleas Departamentales y Cámaras Legislativas.

Art. 73. Los infractores á lo dispuesto en este Artículo serán castigados con una multa de cincuenta (50) á doscientos pesos ($ 200),qué decretará el Juez ó Magistrado que haya presidido la deliberación, resuelto la no publicación de determinadas piezas, ó dictado sentencia en el juicio fallado por los Jurados.

Si la publicación se refiere á, deliberaciones privadas ó secretas de las Cámaras Legislativas ó de las Asambleas Departamentales, cuando, estas Corporaciones se hubieren puesto en receso, la pena, será impuesta por el Ministro de Gobierno y el Gobernador del Departamento respectivamente.

Art. 74. En todo negocio civil ó criminal la sentencia que recaiga podrá ser publicada.

Art. 75. Es prohibido abrir ó anunciar, públicamente suscripciones destinadas al pago de multas impuestas á virtud de la presenta ley, y los autores de anuncio y el propietario y el director del periódico en que se haga sufrirán por tal hecho una multa de veinticinco (25) á doscientos pesos ($ 200).

Art. 76. Por disposición de una Cámara, ó Asamblea ó de sus respectivos Presidentes, podrá el Ministro de Gobierno ó el Gobernador respectivo decretar la pena de cincuenta (50) á doscientos ($ 200) pesos de multa contra cualquiera de los individuos de que trata el Artículo 13, cuando en la relación de las sesiones de las Cámaras ó Asambleas se incurra en marcadas y repetidas inexactitudes sustanciales.

Art. 77. La presente ley deberá ser insertada en todos los periódicos que se editen en el territorio do la República dentro dé los treinta días siguientes á su sanción, y ella será publicada ocupando, por lo menos dos columnas del respectivo periódico hasta su conclusión. Los periódicos que en adelante se funden quedan sujetos alo aquí preceptuado.

Art. 78. La contravención á lo dispuesto en el Artículo anterior, sujeta al propietario y director del periódico a una multa de cincuenta (50) á doscientos pesos ($ 200).

Art. 79. Declárense surtidos los efectos del Artículo K de las disposiciones transitorias de la Constitución y expresamente derogadas todas las disposiciones sobre prensa dictadas con anterioridad a la presente Ley, excepción hecha de las que se refieren á los delitos de injuria y de calumnia y. siempre, que éstas no so opongan á lo aquí preceptuado.

Dada en Bogotá, á 11 de Diciembre de 1896

El Presidente del Senado Belisario Peña. El Presidente de la Cámara, de Representantes Dionisio Jiménez. El Secretario- del Senado, Camilo Sánchez. El Secretario de la Cámara de Representantes, Miguel A, Peñarredonda.

Gobierno Ejecutivo. -Bogotá, 18 de Diciembre de1896

Publíquese y Ejecútese

(L.S.) M.A. CARO
El Ministro De Gobierno
Antonio Roldán.

Anexo 15: Periódicos editados en Bogotá en el periodo de Rafael Núñez

TÍTULO	AÑOS	DIRECTOR	Imprenta	POLÍTICA	PERIODICIDAD
Diario de Cundinamarca	1861 - 1888		de Gaitán	Liberal Radical	
Revista de los establecimientos de beneficencia	1870 - 1888			Oficial	s. determinar
Revista Judicial	1876 - 1888	Liborio Cantillo	de Gaitán	Liberal Radical	semanal
Anales deInstrucción pública	1880 - 1888	-	Echevarría Hnos.	Oficial	mensual
Papel periódico ilustrado	1881 - 1888	Rafael Urdaneta	Silvestre y Cia.	Conservador	quincenal
El Recopilador	1885 - 1887	Nicolás Pontón	La Ilustración	Conservador	s. determinar
La Nación	1885 - 1888	Jose María Samper	La luz	Oficial	bisemanal
Boletín de avisos	1886 - 1887	-	Silvestre y Cia.	comercial	quincenal
El Telegrama	1886 - 1888	Jerónimo Argáez	de "El Telegrama"	Conservador	diario
La Siesta	1886 - 1886	Juan de Dios Uribe	Fernando Pontón	Liberal Radical	semanal
El Renacimiento	1886 - 1887	Alejandro Torres Amaya	Torres Amaya	Liberal Radical	semanal
El Semanario	1886 - 1887	Filemón Buitrago	La Luz	Conservador H	semanal
El Instituto	1886 - 1891	-	Torres Amaya	Artesanos	s. determinar
Gaceta de Cundinamarca	1886 - 1888	-	Silvestre y Cia.	Oficial	semanal
El Sol	1887 - 1887	R. de Narváez - Jorge Pombo	de Pizano	Conservador	semanal
Registro judicial de Cundinamarca	1887 - 1888	C. E. de M. Rivas	J. Rivas Groot	Oficial	cada 10 días
El Partido Nacional	1887 - 1887	F. de Paula Torres A.	Torres Amaya	Conservador H	semanal
El Ibero - Americano. Organo del Centro	1887 - 1888	-	Silvestre y Cia.	Privado	mensual
Revista dental. Órgano de la sociedad Dental	1887 - 1888	-	-	-	mensual
Revista Militar	1887 - 1888	Julio Campo	de Pizano	-	s. determinar
El Álbum	1887 - 1888	L. A. Gori	Torres Amaya	-	s. determinar
Anales de ingenieria	1887 - 1888		Echevarría Hnos.	Oficial	mensual
La idea: Pro - patria	1887 - 1887	-	Fernando Pontón	Conservador	semanal
El Orden	1887 - 1888	Luis S. de Silvestre	Silvestre y Cia.	Conservador	semanal
El Correo Liberal	1888 -1888	Juan de Dios Uribe	Fernando Pontón	Liberal Radical	s. determinar
La Equidad	1888 - 1888	Rodolfo Roa Albuquerque	Eustacio A. Escovar	Conservador	
El Centro	1888 - 1888	Rafael Pombo	Eustacio A. Escovar	Conservador	
Anuario Academia de Música	1888 - 1897		La Nación	Oficial	Anual
La Sanción	1888 - 1888	Baldomero Sanín Caro	Torres Amaya	Conservador	semanal
El Liberal	1888 - 1888	César Conto	Echevarría Hnos.	Liberal Radical	semanal
La Libertad	1888 - 1888	Florentino Vezga	C.E. de M. Rivas	Liberal Radical	semanal
La palabra	1888 - 1888	Julio Áñez	La Luz	Liberal Radical	semanal
La prensa	1888 - 1888	Enrique Troncoso	de Enrique Angarita	Liberal Radical	semanal
Revista de Minas	1888 - 1888	R. Espinosa G. y Cia.	-	Privado	mensual
El Progreso	1886 - 1886	Alfredo Greñas	El Progreso	Liberal Radical	semanal
El Comercio	1886 - 1886	Gregorio Gutiérrez	-	Conservador H	semanal
El Repertorio Colombiano	1886 - 1887	Carlos Martínez Silva	Librería Americana	Liberal Radical	mensual
El Cronicón	1887 - 1887	-	-	Liberal Radical	-
El Ensayo	1887 - 1889	Miguel Abadía Méndez	La luz	conservador	quincenal

Anexo 16: Periódicos editados en Bogotá en el periodo de Carlos Holguín

TÍTULO	AÑOS	DIRECTOR	Im prenta	POLÍTICA	PERIODICIDAD
Revista establecimientos de beneficencia	1870 - 1888			Oficial	s. determinar
El Instituto	1886 - 1891		Torres Amaya	Artesanos	s. determinar
Gaceta de Cundinamarca	1888 - 1892		Silvestre y Cia.	Oficial	semanal
La Nación	1888 - 1890	Carlos Holguín	La luz	Oficial	bisemanal
El Orden	1888 - 1892	Luis S. de Silvestre	Silvestre y Cia.	Conservador N	semanal
Revista Judicial	1888 - 1892	Liborio Cantillo	de Gaitán	Liberal Radical	semanal
El Telegrama	1888 - 1892	Jerónimo Argáez	de "El Telegrama"	Conservador H	diario
Repertorio Jurídico Colombiano	1888 - 1889	-	-	-	semanal
La Verdad	1888 - 1889	Jose V. Salazar	Vapor de Zalamea	Liberal Radical	3 veces al mes
Registro judicial de Cundinamarca	1888 - 1892	C. E. de M. Rivas	J. Rivas Groot	Oficial	cada 10 días
Diario de Cundinamarca	1888 - 1893	Liborio Cantillo	de Gaitán	Liberal Radical	bisemanal
La Reseña	1889 - 1890	Julio Áñez	El Progreso	Liberal Radical	semanal
El Siglo Veinte	1889 - 1890	Eustacio A. Escovar	La luz	Conservador N	semanal
El Sagitario	1889 - 1889	Antonio J. Restrepo	Echevarría Hnos.	Liberal Radical	semanal
Repertorio Escolar	1889 - 1892	-	Silvestre y Cia.	Oficial	semanal
El Folletín	1889 - 1889	-	El Telegrama	literario	único
El Teatro	1889 - 1889	-	La luz	literario	s. determinar
Anales Universidad Católica	1889 - 1889	-	La luz	Privado	mensual
El Heraldo	1889 - 1892	José J. Pérez	de "J. J. Pérez"	Conservador H	semanal
La Juventud	1889 - 1889	Joaquín Pontón	de Lleras y Cia.	Conservador N	semanal
El Demócrata	1889 - 1889	Ignacio V. Espinoza - Greñas	de Lleras y Cia.	Liberal Radical	semanal
El Amigo del Pueblo	1889 - 1889	-	Torres Amaya	Liberal Radical	semanal
La Industria	1889 - 1889	Dámazo Zapata	Vapor de Zalamea	Nacionalista	semanal
El Relator	1889 - 1892	Felipe Pérez	Echevarría Hnos.	Liberal Radical	bisemanal
El Taller	1889 - 1889	José Leocadio Camacho	-	Conservador N	
El Carnaval	1889 - 1889	Joaquín Pontón	-		
La Política	1889 - 1889	-	Echevarría Hnos.	Liberal Radical	semanal
El Aguijón	1889 - 1890		La Ilustración	Liberal Radical	semanal
Colombia Ilustrada	1889 - 1892	José Gaibrois			
El Agricultor	1890 - 1892	Juan de D. Carrasquilla	de Gaitán	Oficial	mensual
La Catástrofe	1890 - 1890	Alfredo Greñas	El Progreso	Liberal Radical	s. determinar
El Salón (Bolívar Skating-Club)	1890 - 1890	Federico Rivas Frade	La luz	Privado.	bi mensual
Revista Popular	1890 - 1890	Eustacio A. Escovar	-	Conservador N	quincenal
El Washingtón	1890 - 1890	Francisco Forero	La luz	literario	bi mensual
La Protesta	1890 - 1890	Julio E. Delgado	El Progreso	Liberal Radical	s. determinar
El Zigzag	1890 - 1891	Pacífico Rivera	El Progreso	Liberal Radical	semanal
La Correspondencia	1890 - 1890	Matías Rodriguez	La Reforma	Liberal Radical	semanal
El Educacionista	1890 - 1890	-	-	Liberal Radical	bi mensual
El Almacén de Los Niños	1890 - 1890	Ignacio Borda	Matiz	literario	quincenal
El Avisador de La Nación	1890 - 1890	-	La Nación	Conservador H	cada 3 días
El Proscenio	1890 - 1890	Marco A. Gómez	La luz	literario	s. determinar
El Dengue	1890 - 1890	-	La Reforma	Liberal Radical	semanal
El Correo Nacional	1890 - 1892	Carlos Martínez Silva	La luz	Conservador H	diario
El Imparcial	1890 - 1890	Felix Possé Salas	de Lleras y Cia.	Conservador N	quincenal

TÍTULO	AÑOS	DIRECTOR	Im prenta	POLÍTICA	PERIODICIDAD
El Republicano	1890 - 1891	Emilio M. Escovar	de "El Republicano"	Conservador H	3 veces al mes
La Unión	1890 - 1890	Joaquín Vargas Torres	El Telegrama	Nacionalista	semanal
Los Principios	1890 - 1891	Carlos Albán	Echevarría Hnos.	Conservador H	semanal
El Demócrata	1890 - 1892	Alfredo Greñas	El Progreso	Liberal Radical	semanal
El Cóndor	1890 - 1890	Alfredo Greñas	El Progreso	Liberal Radical	semanal
El Combate	1890 - 1890	Alfredo A. de Guzmán	de Lleras y Cia.	Liberal Radical	semanal
El Congregante de San Luis	1890 - 1890	-	de Lleras y Cia.	religioso	quincenal
El Preludio	1890 - 1890	-	de Lleras y Cia.	literario	quincenal
La Capital	1890 - 1890	-	de Agustín Patiño y C.	-	semanal
El Repórter Ilustrado	1890 - 1890	-	-	-	-
Anales deInstrucción pública	1888 - 1892	-	Echevarría Hnos.	Oficial	mensual
Revista Literaria	1890 - 1894	Isidoro Laverde Amaya	La luz	literario	mensual
El Eco Liberal	1890 - 1890	-	Echevarría Hnos.	Liberal radical	s. determinar
El Tren	1890 - 1891	Francisco de P. Torres A.	Torres Amaya	Conservador H	3 veces al mes
El Comercio	1891 - 1891	Gregorio Gutierrez I	La Nación	Conservador H	diario
La prensa	1891 - 1891	Guillermo Torres	La Nación	Conservador H	semanal
El Derrumbe	1891 - 1891	-	Diario de Cundinamarca*	Liberal Radical	semanal
El Gladiador	1891 - 1891	Julio Galofre	Medardo Rivas	Liberal Radical	semanal
El Concurso	1891 - 1891	Abelardo Barriga	Medardo Rivas	Liberal Radical	semanal
El Zancudo	1891 -1891	Alfredo Greñas	El Progreso	Liberal Radical	semanal
El Relieve	1891 - 1891	Roberto Millán	de Lleras y Cia.	-	-
La Voz del Tiempo	1891 - 1891	Francisco Pereira Castro	Echevarría Hnos.	Liberal radical	semanal
La Paz	1891 - 1891	José J. Pérez	-	Conservador H	semanal
El Mago	1891 - 1892	Alejandro Flórez	Medardo Rivas	Liberal Radical	semanal
La Mañana	1892 - 1892	-	Silvestre y Cia.	-	semanal
El Precursor	1889 - 1889	Alfredo A. de Guzmán	El Progreso	Liberal Radical	semanal

Anexo 17: Periódicos editados en Bogotá en el periodo de Rafael Núñez.

TÍTULO	AÑOS	DIRECTOR	Im prenta	POLÍTICA	PERIODICIDAD
Gaceta de Cundinamarca	1892 - 1898	-	Silvestre y Cia.	Oficial	semanal
Anales del Senado	1892 - 1899	-	Vapor de Zalamea	Oficial	diario
La Mañana	1892 - 1892	-	Silvestre y Cia.	-	semanal
El Criterio	1892 - 1892	Enrique Restrepo García	La Nación	Conservador	diario
El Orden	1892 - 1898	Luis S. de Silvestre	Silvestre y Cia.	Conservador	semanal
Revista Judicial	1892 - 1897	Liborio Cantillo	de Gaitán	Liberal Radical	semanal
El Telegrama	1892 - 1897	Jerónimo Argáez	de "El Telegrama"	Conservador H	diario
El Agricultor	1892 - 1898	Juan de D. Carrasquilla	de Gaitán	Oficial	mensual
Registro judicial de Cundinamarca	1892 - 1897	C. E. de M. Rivas	J. Rivas Groot	Oficial	cada 10 días
El Correo Nacional	1892 - 1898	Carlos Martínez Silva	La luz	Conservador H	diario
Repertorio de medicina y farmacia	1892 - 1899	-	La luz	Científica	mensual
El Barbero	1892 -1893	Alfredo Greñas	El Progreso	Liberal Radical	semanal
El Relator	1893 - 1893	Santiago Pérez	Echevarría Hnos.	Liberal Radical	bisemanal
El Contemporáneo	1893 - 1893	Emilio Cuervo	de Lleras y Cia.	Liberal Radical	semanal
El Instituto	1893 - 1893	-	Torres Amaya	Artesanos	s. determinar
El Trabajo	1894 -1894	Ignacio Amat	de Borda e hijo	Artesano	semanal
Anales de la Sociedad Dental	1894 - 1895	Sebastian Carrasquilla	-	privado	mensual
Los Tiempos	1894, 1896	Santiago Calvo	de Lleras y Cia.	Liberal Radical	bisemanal
La Patria	1894 -1894	Santiago y Felipe Lleras	de Lleras y Cia.		trisemanal
El mensajerito del Corazón de M.	1894 -1894		Vapor de Zalamea	Religioso	mensual
El Mosquetero	1895 - 1896	Alfredo Borda	Medardo Rivas	Conservador	semanal
El Ambulante: órgano "la Universal"	1895 -1895	Ramón Pereira Ch.	Vapor de Zalamea	privado	quincenal
El Sol	1895 - 1895	R. de Narváez - Jorge Pombo	de Pizano	Conservador	semanal
El diario	1895 - 1895	Borda e Hijo	Borda e Hijo	Conservador	bisemanal
El Carácter:	1895 - 1895	Leonidas Norzagaray	Nacional	Nacionalista	semanal
La Regeneración	1895 -1895	Erensto O Palacio	La Época	Nacionalista	bisemanal
La Época	1895 - 1897	Juan A. Zuleta	La Época	-	diario
La Juventud	1897 - 1897	Isrrael Garzón	Borda e Hijo	conservador	semanal
El Republicano	1896 -1896	Diego Mendoza - R. Uribe U.	La luz	Liberal Radical	diario
El Microbio	1896 - 1896	Juan Calavera (?)	La luz	Liberal Radical	s. determinar
El Empresario	1896 -1896	Pablo A. Peña	Nacional	comercial	semanal
La Asociación: seguros de familia	1896 - 1898		El Telegrama	privado	semanal
El Veterano	1896 - 1896	Alfredo A. Borda	Torres Amaya	Conservador H	bisemanal
La Campana	1896 - 1896	José Joaquín Pérez	J & L Pérez	Conservador H	irrregular
Revista central de farmacia	1896, 1898	Auguste Capelead	-	Científica	quincenal
El Siglo	1896 - 1897	Guillermo Valencia	Samper Matíz	Conservador H	semanal
La vida del pueblo	1896, 1897		de "La vida del pueblo"	Religioso	quincenal
El viajero	1897 - 1897	Julio Áñez	de Carlos Tanco	Liberal radical	semanal
La Constitución	1897 - 1897	U. Obando	-	Conservador H	bisemanal
El Zapador	1897 - 1897	A. Quijano Torres	de Carlos Tanco	Liberal Radical	semanal
La Tarde	1897 - 1897	Joaquín Maldonado Plata	de Carlos Tanco	-	semanal
Cuba	1897 - 1897	Timoteo Morales	de Eugenio Pardo	Liberal Radical	semanal
La Montaña	1897 - 1897	Crispulo Lozano	de "Diario de Colombia"	-	semanal
El Mochuelo	1897 - 1897	Antonio Posada Hernández	Medardo Rivas	Liberal Radical	semanal
La Expectativa	1897 - 1897	Celestino Barrero	El Comercio	-	bisemanal

TÍTULO	AÑOS	DIRECTOR	Im prenta	POLÍTICA	PERIODICIDAD
El Constituyente	1897 - 1897	Gentil Puyo	Medardo Rivas	Conservador H	semanal
Mefistófeles	1897 - 1897	Alfredo A. Borda	El Comercio	Conservador H	semanal
El Nacionalista	1897 - 1898	Marco Fidel Suárez	de "Eduardo Espinoza"	Nacionalista	bisemanal
La Crónica	1897 - 1923	José Camacho Carrizosa	Medardo Rivas	Liberal Radical	diario
El Sufragio	1897 - 1910	Ambrosio Robayo	Medardo Rivas	Liberal Radical	semanal
El Progreso	1897 - 1897	Carlos Tanco	de "Carlos Tanco"	Conservador H	bisemanal
El Combate	1897 - 1897	Eugeni Pardo	de "Eugenio Pardo"	Liberal Radical	bisemanal
El Baluarte	1897 - 1897	José María Caicedo	de "Eduardo Espinoza"	-	bisemanal
El Vigía	1898 - 1898	Maximiliano Grillo	Medardo Rivas	-	bisemanal
El Puerto	1898 - 1898	Manuel G. Núñez	El Comercio	-	semanal
El Girondino	1898 - 1898	Joaquín Monroy	La Crónica	Liberal Radical	semanal
La OpiniónPública	1898 - 1898	Carlos Arturo Torres	La Crónica	Liberal Radical	diario
El Clamor Público	1898 - 1898	Julio Áñez	Medardo Rivas	Liberal Radical	quincenal
La discusión	1898 - 1898	Francisco Tous	La luz	-	bisemanal
La Gacetilla	1898 - 1898	Guillermo cadena	El Comercio	-	trisemanal
La Correspondencia	1898 - 1898	Guillermo R. Calderón	Medardo Rivas	Conservador H	diario
El Foro	1898 - 1899	-	La luz	jurídico	2 veces al mes
El Autonomista	1898 - 1899	Alejandro Rodríguez	Medardo Rivas	Liberal Radical	trisemanal
El Repertorio Colombiano	1896 - 1899	Carlos Martínez Silva	Librería Americana	Liberal Radical	mensual
El 93	1893 - 1893	F. de P. Manotas		Liberal Radical	
El Derecho	1895 - 1897	Adolfo Cuellar	Medardo Rivas	Liberal Radical	
Los Hechos	1896 - 1896	Julio Áñez	Medardo Rivas	Liberal Radical	
El Debate	1896 - 1896	Gabriel Díaz Guerra	Medardo Rivas	Liberal Radical	bisemanal
El Tío Juan	1896 - 1899	José Joaquín Pérez	J & L Pérez	Conservador H	trisemanal